

TESIS DOCTORAL

**LA REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO:
LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL**

M^a ROSARIO NARANJO ROMÁN

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2015

DIRECTOR: PROF. DR. MANUEL MEDINA GUERRERO

**LA REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO: LA ESPECIAL
TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO I: LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU RECONOCIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.....	12
I.- INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	12
II.- DEBATES CONSTITUYENTES: “DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES” ARTÍCULO 53.2 CE.....	18
III.- EL SISTEMA DE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.....	28
IV.- LA APROBACIÓN DE LA L.O. 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. DEBATES PARLAMENTARIOS.....	30
1º) El contenido del proyecto.....	30
2º) La tramitación en el Congreso de los Diputados.....	40
3º) La tramitación en el Senado.....	46
4º) Debate y aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados....	48
V.- LOS RECURSOS DE AMPARO EN LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	53
1º) Naturaleza Jurídica del recurso de amparo.....	53
2º) El objeto del recurso de amparo: derechos y libertades fundamentales.....	55
3º) Actos recurribles.....	58
4º) Recursos de amparo y clases de lesiones o vulneraciones.....	59
5º) Legitimación y partes.....	65
6º) La subsidiariedad.....	68
7º) El carácter extraordinario del recurso de amparo.....	75
8º) La demanda de amparo.....	77
9º) Requisitos para la admisión de la demanda de amparo.....	78
10º) La sustanciación del proceso.....	85
11º) La resolución mediante sentencia.....	86
VI.- EL DESARROLLO LEGAL DE LA TUTELA ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.....	86

CAPÍTULO II: LA CRISIS FUNCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	92
I.- LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE AMPARO.....	92
II.- SUPUESTOS DE INVASIÓN Y FRICCIÓN ENTRE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL RECURSO DE AMPARO.....	93
1º) El control de la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria por parte del Tribunal Constitucional.....	93
2º) El control y fiscalización sobre el fondo del asunto realizado por los tribunales ordinarios basados, principalmente, en derechos fundamentales de carácter procesal.....	96
3º) El control por parte del Tribunal respecto a los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria.....	100
III.- LAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO.....	109
1º) Propuestas que no conllevan reformas constitucionales ni legales.....	109
2º) El desarrollo de la tutela preferente y sumaria del artículo 53.2 CE.....	111
3º) La supresión del amparo ante el Tribunal Constitucional.....	112
4º) La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.....	113
5º) La atribución de competencia a las Secciones.....	116
6º) Otros supuestos.....	116
IV.- EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS LEGALES MÁS ERICTOS RESPECTO A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO.....	116
1º) Distinta admisión en base al derecho fundamental.....	118
2º) Regulación de las causas de inadmisión.....	119
V.- EL CONCEPTO DE <<DIMENSIÓN OBJETIVA DEL RECURSO DE AMPARO>>.....	124
1º) La dimensión subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales...	125
2º) Estructura y contenido material de los derechos fundamentales....	130
3º) La labor hermenéutica del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales.....	134
4º) La determinación del alcance objetivo y del contenido material de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo.....	143
 CAPÍTULO III: LAS REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL CONTENIDO DE LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO.....	157
I.- LAS REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	157

II.- LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..... 160

- 1º) Debates Parlamentarios.....160
- 2º) El contenido de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.....174

III.- ASPECTOS PROCESALES: LA NUEVA REGULACIÓN DE LA PROCEDENCIA, INTERPOSICIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO.....177

- 1º) Derechos Protegidos. Arts. 41.1 LOTC.....179
- 2º) Actos recurribles. Arts. 41.2 LOTC.....182
- 3º) Tipos de recursos de amparo. Arts. 42, 43 y 44 LOTC.....182
 - a) El recurso de amparo contra actos sin valor de ley emanados de los Parlamentos o Poder Legislativo.....182
 - b) El recurso de amparo contra actos vulneradores de los derechos fundamentales provenientes de la Administración o el Poder Ejecutivo..... 183
 - c) Por último, el recurso de amparo contra actos vulneradores provenientes de las actuaciones judiciales o del Poder Judicial..... 184
- 4º) La regulación de los plazos de interposición de la demanda. Arts. 42, 43.2, 44.2 y 85 LOTC.....185
- 5º) Legitimación y partes. Arts. 46 y 47 LOTC.....187
- 6º) La subsidiariedad y el Incidente de Nulidad de Actuaciones como requisito para el agotamiento de la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo. Arts. 43.1, 44 y D.F 1ª LOTC.....187
- 7º) La demanda de amparo. Art. 49 LOTC.....189
- 8º) Requisitos para la admisión de la demanda de amparo. Art. 50 LOTC
- 9º) La sustanciación del proceso. Arts. 51 y 52 LOTC.....192
- 10º) La sentencia y su resolución por las Secciones. Arts. 53 a 55 LOTC.....197
- 11º) La suspensión. Arts. 56 a 58 LOTC.....200

IV.- EL ANÁLISIS DOCTRINAL SOBRE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....201

- 1º) La constitucionalidad de la reforma.....201
- 2º) El nuevo trámite de admisión.....206
 - a) Del sistema de admisión al de inadmisión.....207
 - b) Sobre la especial trascendencia constitucional y la objetivación del recurso de amparo.....208
 - c) El recurso de amparo como mecanismo de tutela subjetiva de los derechos fundamentales.....218
 - d) El plazo para interponer la demanda de amparo.....224
- 3º) El conocimiento del recurso de amparo por las Secciones del Tribunal..... 225
- 4º) El incidente de nulidad de actuaciones.....228

CAPÍTULO IV: LA LABOR DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL NUEVO TRÁMITE DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO EFECTUADO POR LA L.O. 6/2007, DE 24 DE MAYO..... 231

I.- LA JURISPRUDENCIA INICIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL NUEVO TRÁMITE DE ADMISIÓN.....233

- 1º) Los primeros autos de inadmisión y la unificación de criterios por parte de las Salas Primera y Segunda del Tribunal.....233
 - a) La carga exigida al demandante de amparo en relación a la especial trascendencia constitucional.....233
 - b) La labor del Tribunal en orden a apreciar el cumplimiento de la especial trascendencia constitucional.
- 2º) La determinación por el Pleno del Tribunal de los supuestos materiales en orden a apreciar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. La STC 155/2009, de 25 de junio.....240
- 3º) La desestimación en base a la STC 155/2009, de 25 de junio y la modulación del rigor.....246

II.- EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL NUEVO RECURSO DE AMPARO TRAS LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO.....248

A) LA INEXISTENTE APRECIACIÓN DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..... 250

- 1º) Vulneración derechos artículo 24 CE 252
- 2º) Vulneración derechos artículo 23 CE 253
- 3º) Vulneración derechos artículo 25 CE 254
- 4º) Vulneración derechos artículo 17 CE.....254
- 5º) Vulneración derechos artículo 18 CE.....254
- 6º) Vulneración de otros derechos o que se estimen lesionados varios derechos fundamentales..... 254
- 7º) Sentencias que no estiman la lesión del derecho o derechos fundamentales..... 255

B) EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL..... 259

- 1º) La justificación y apreciación del requisito de la *especial trascendencia constitucional* desde un punto de vista *formal*.....260
 - a) Argumentación dada por las partes procesales y el Tribunal en orden al cumplimiento formal del requisito, que recogen los distintos supuestos establecidos en la STC 155/2009, F.J. 2º, o puede reconducirse a los mismos..... 260
 - b) La argumentación no podrá reconducirse a los supuestos determinados por la STC 155/2009, puesto que las referencias a la

especial trascendencia constitucional se producen de manera muy abierta, genérica o ambigua.....	266
2º) El desarrollo doctrinal del requisito especial trascendencia constitucional.....	270
a) La carga exigida al demandante de amparo en relación a la especial trascendencia constitucional.....	270
b) La labor del Tribunal en orden a apreciar el cumplimiento de la especial trascendencia constitucional.....	271
 C) LA ESTIMACIÓN, DESESTIMACIÓN E INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO.....	280
1º) Estimación de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal basados en la especial trascendencia del recurso de amparo.....	280
2º) Desestimación de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal por inadmisión basadas en la especial trascendencia del recurso de amparo.....	281
3º) Inadmisión de recursos de amparo mediante autos y sentencias...	283
4º) Las causas de inadmisión.....	287
a) Extemporaneidad en la interposición del recurso de amparo.....	288
b) Inexistencia o falta de apariencia de lesión o vulneración del derecho fundamental.....	288
c) Falta de legitimación activa.....	289
d) Insuficiente justificación o carencia de justificación de la especial trascendencia constitucional.....	289

III.- LA CORRESPONDENCIA MATERIAL ENTRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL RELATIVAS A LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO.....

1º) “a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional”.....	292
2º) “b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, (...), o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE”.....	300
3º) “c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general”.....	301
4º) “d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución”.....	307
5º) “e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan	

resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;”.....	309
6º) “f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ)”....	311
7º) “g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.....	316
a) Amparo Electoral.....	317
b) Amparo Parlamentario.....	320
c) Trasciende al caso concreto.....	321
8º) Otros supuestos.....	323

CAPÍTULO V: EL RECURSO DE AMPARO EN LA ACTUALIDAD..... 327

I.- EL RECURSO DE AMPARO EN CIFRAS: INTERPOSICIÓN, PORCENTAJE DE ADMISIÓN Y CAUSAS DE INADMISIÓN..... 327

II.- EL FONDO DEL ASUNTO: LA REALIDAD JURISPRUDENCIAL MÁS ALLÁ DE LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO Y LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL..... 332

1º) Inexistencia de doctrina del Tribunal Constitucional.....	334
a) No hay doctrina previa del Tribunal, por tanto, se produce una elaboración de la misma.....	334
b) Supuestos en los que se produce una introducción de jurisprudencia emanada por Tribunales supranacionales.....	335
c) No ha conocido ese supuesto fáctico con anterioridad pero hay doctrina del Tribunal reconducible y aplicable al caso concreto.....	336
2º) Incumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional.....	336
a) Supuestos en los que hay un manifiesto incumplimiento de la doctrina del Tribunal constitucional.....	337
b) Supuestos en los que existe una discrepancia entre la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.....	337
c) Supuestos en los que existe una discrepancia entre la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales.....	338
d) Supuestos en los que el Tribunal procede a aplicar al caso concreto su doctrina y jurisprudencia ya asentada y consolidada.....	338
3º) Interpretación de la ley conforme a los derechos fundamentales....	340
a) El origen de la vulneración radica en la ley o norma con rango de ley.....	340

b) No hay una interpretación previa de la ley por parte del Tribunal Constitucional.....	341
c) Se produce una reiteración y aplicación de su jurisprudencia en materia de ley.....	342
4º) Supuestos que trascienden al caso concreto.....	342
5º) Los amparos parlamentarios y electorales.....	343
II.- RECAPITULACIÓN: ANÁLISIS Y PROPUESTAS.....	344
1º) La constitucionalidad de la reforma y su adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos.....	344
2º) El nuevo trámite de admisión.....	348
a) Del sistema de admisión al de inadmisión.....	348
b) Sobre la especial trascendencia constitucional y la objetivación del recurso de amparo.....	348
c) El recurso de amparo como tutela subjetiva de los derechos fundamentales.....	350
3º) El conocimiento del recurso de amparo por las Secciones del Tribunal.....	352
4º) El Incidente de nulidad de actuaciones.....	352
5º) El número de demandas interpuestas anualmente.....	353
6º) La necesidad de manifestar expresamente la especial trascendencia constitucional del recurso por parte del Tribunal: una interpretación de la L.O. 6/2007, de 24 de mayo.....	354
7º) La doctrina del Tribunal Constitucional y la vinculación a la misma del resto de órganos y Poderes del Estado.....	362
a) En relación al Poder Legislativo.....	362
b) En relación al Poder Ejecutivo.....	362
c) En relación al Poder Judicial.....	363
CONCLUSIONES.....	368
ANEXOS.....	378
ÍNDICE DE SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANALIZADOS.....	405
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	414

INTRODUCCIÓN

Han transcurrido más de ocho años desde que entrara en vigor la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. La misma establece una nueva regulación del *recurso de amparo constitucional*, donde destaca la nueva configuración que se le da al trámite de admisión de las demandas. A partir de la entrada en vigor, se cambia a un sistema en el que es el demandante el que debe alegar y acreditar que su recurso posee una *especial trascendencia constitucional* que justifique la admisión y resolución por parte del Tribunal Constitucional, (arts. 49 y 50 LOTC). Frente a la anterior regulación de causas de inadmisión tasadas, centradas principalmente en la acreditación de la existencia de la vulneración de un derecho fundamental o libertad pública.

Mucho se ha debatido por la doctrina sobre la constitucionalidad de la denominada *objetivación* del recurso de amparo, en detrimento o frente a la anterior regulación basada en el carácter *subjetivo* del recurso. Así como el alcance y límites de su nuevo trámite de admisión y la necesidad de que la demanda interpuesta posea dicha *especial trascendencia constitucional*.

El Tribunal Constitucional en todo este tiempo ha dictado más de quinientas resoluciones –entre Autos y Sentencias- en aplicación de la nueva normativa. El objeto del presente trabajo no es otro que adentrarnos en la actual regulación del amparo para intentar esclarecer el alcance y límites de la reforma efectuada, desde el punto de vista de la doctrina científica y el Tribunal Constitucional, por ser a éste a quien en última instancia le corresponde interpretar el alcance de la reforma acometida.

La jurisprudencia emanada en este lapsus temporal ha venido a esclarecer en cierta medida el alcance y límites del cambio operado pero, no es menos cierto, que aún queda mucho trabajo por hacer. Entre otras cuestiones, que el Tribunal haga efectiva la propia interpretación que ha realizado de los preceptos 49 y 50 LOTC.

En cuanto al trámite de admisión del recurso de amparo, se plantean dudas e incertidumbres en relación a la labor llevada a cabo por parte del Tribunal Constitucional, respecto al efectivo cumplimiento del criterio objetivo de admisión instaurado por la nueva regulación. Pues bien, como hemos dicho, se analizará la jurisprudencia emanada por nuestro Alto Tribunal y, sobre todo, la elaborada tras la sentencia STC 155/2009, de 25 de junio. A los efectos de vislumbrar la operatividad de los supuestos enumerados en la misma.

Todo ello con la finalidad de intentar arrojar *cierta luz* en el momento de *transición* en el que nos encontramos. Una vez analizado este nuevo régimen, intentaremos visualizar cuál podrá ser el futuro del amparo constitucional en nuestro país y, con ello, el papel que necesariamente tendrá que jugar nuestro Tribunal Constitucional en la implantación de la *especial trascendencia constitucional*; dotándola –como debe de dotarla- de seguridad jurídica a los efectos de que la ciudadanía, doctrina y demás operadores jurídicos podamos acercarnos al nuevo recurso teniendo cierta certeza de cuál es su finalidad y cómo debemos actuar ante el nuevo amparo constitucional.

Para alcanzar dicho objetivo, no sólo deberemos adentrarnos en la jurisprudencia y doctrina constitucional en materia de derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional ha dictado y elaborado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo; sino que, además, y de manera previa, es necesario que nos acerquemos de manera general al sistema de garantías de los derechos fundamentales del que quiso dotarse el constituyente al elaborar y aprobar la Constitución de 1978. Esto nos va a permitir asumir cuál es el concreto alcance y contenido que quiso dársele a ese importantísimo mecanismo de garantía de los derechos fundamentales.

Como tendremos ocasión de analizar, nuestro sistema no está caracterizado por una estructura cerrada de mecanismos de garantías jurisdiccionales sino que, por el contrario, el constituyente quiso dejar en manos del Legislador gran parte de su concepción y articulación. Por ello, también nos resultará imprescindible adentrarnos en su desarrollo legislativo como elemento

imprescindible y necesario para la determinación de la estructura normativa de las garantías jurisdiccionales.

Tras lo anterior, será necesario analizar las razones que dieron lugar a la reforma del recurso de amparo en el año 2007, esto es, qué razones jurídicas y prácticas acaecieron para que el Legislador procediese a la modificación de la función del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Así como, seguidamente, examinaremos el contenido de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; tanto en su generalidad como, particularmente, la regulación dada al *recurso de amparo*.

Para finalmente, y con ello, con la perspectiva práctica y teórica de más de treinta y cinco años de justicia constitucional en nuestro país, ya sí nos encontraremos en posición de poder imbuirnos en esa doctrina y jurisprudencia que gira en torno al concepto jurídico *especial trascendencia constitucional*, cuál es su alcance y contenido jurídico; cuál son las obligaciones impuestas al demandante en orden a su cumplimentación y cuál es la apreciación y vinculación del propio Tribunal Constitucional a tal requisito, entre otras cuestiones.

CAPÍTULO I: LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU RECONOCIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

I.- INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Es lugar común en la doctrina señalar al constitucionalismo posterior a la *Segunda Guerra Mundial* como el punto de origen y afianzamiento de los derechos fundamentales tal y como los conocemos actualmente en Europa¹. Esto es, como derechos subjetivos insertos en la norma constitucional, con eficacia directa y vinculante respecto a todos los poderes públicos.

Con independencia de la distinta clasificación, tanto en origen y contenido², que pueda dársele a estos derechos fundamentales, lo que en este momento nos interesa, más que tal contenido o clasificación, son las garantías de las que se les ha dotado para que podamos hablar de derechos fundamentales. Según nuestro parecer, las garantías de los derechos fundamentales deberían considerarse mecanismos ordinarios o extraordinarios de aseguramiento de tales derechos establecidos en concretas normas jurídicas³, pero es común en la doctrina equiparar los derechos a sus garantías, dotándole a los derechos fundamentales de la validez que le dispensan estos mecanismos⁴.

¹ CRUZ VILLALÓN, P.: *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1987.

² Como pueden ser los *derechos individuales, de libertad, políticos o de prestación*; (NARANJO DE LA CRUZ, R.: "El sistema de derechos constitucionales y sus garantías". Manual de Derecho Constitucional. VVAA. Quinta edición. Tecnos. Madrid, 2014. Pág. 435-436). Otra clasificación puede considerarse aquella que los determina como *derechos civiles, políticos y derechos sociales*; (DIEZ-PICAZO, L. M.: *Sistema de derechos fundamentales*. Editorial Aranzadi S.A. Cizur Menor, Navarra, 2008. Págs. 42-43.

³ En tal sentido, sobre la distinción entre derechos y garantías, véase FERRAJOLI, L.: *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. (4ª. Ed.). Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2009. Págs. 45 a 52.

⁴ El origen de tal expresión puede deberse a la génesis del constitucionalismo en Europa y, sobre todo, en la *Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789*, la cual en su artículo 16 proclamaba que: "Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución".

Pero es común encontrar en la actualidad multitud de referencias a las garantías de los derechos como dotadores de validez de dichas normas. Véase, por ejemplo la mención a que "hoy es comúnmente aceptado que un derecho vale jurídicamente lo que valen sus garantías" inserta en la sinopsis al artículo 53 de nuestra Constitución en la página web del Congreso de los Diputados. <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm>

En general, podemos vislumbrar una serie de garantías que aseguran su posicionamiento, esto es, como derechos subjetivos dotados de la normatividad propia que le otorga la norma en la que se insertan, que no es otra que la propia Constitución. Son medios o mecanismos de distinta índole cuyo fin es salvaguardar la integridad y observancia de los derechos y libertades constitucionalmente consagrados. No se trata de un conjunto definido sino más bien todo lo contrario, se trata de un conjunto heterogéneo donde se incluyen previsiones jurídico-normativas de distinta naturaleza⁵. No obstante, entre la doctrina se suelen clasificar en: *garantías generales o normativas*; *garantías individuales o jurisdiccionales* y *garantías institucionales u orgánicas*.

a) Las garantías generales o normativas⁶.

La primera garantía de los derechos estriba de la propia norma en la que se insertan, en su supremacía normativa, en su eficacia directa y en los propios mecanismos de reforma constitucional que impiden una derogación o modificación sin que se cuente con las mayorías necesarias para ello; imposibilitándose así que mayorías inferiores a las que consensuaron el texto constitucional puedan llevar a cabo tales reformas sin el procedimiento establecido y sin la avenencia cuantitativa de los votos expresamente determinados por la norma constitucional.

A pesar de que los derechos fundamentales tienen eficacia directa, también es común en el constitucionalismo europeo la garantía o reserva de ley para el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, con el límite al Legislador del respeto al contenido esencial de los mismos.

⁵ DIEZ-PICAZO, L. M.: *Sistema de derechos fundamentales...* Págs. 79 y 80.

⁶ Véase: Pérez Royo, J. *Curso de Derecho Constitucional*. Marcial Pons, Madrid. 2014. Pág. 441-464. CRUZ VILLALÓN, P; PARDO FALCÓN, J.: "Los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978". *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Nº. 97, 2000, págs. 65-154. CARRASCO DURÁN, M. *Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales*. CEPC. Madrid. 2002. Págs.29-42. DIEZ-PICAZO, L. M.: "*Sistema de derechos fundamentales...*". *Op.cit.* Págs. 79-85. SARAZÁ JIMENA, R.: *La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales entre particulares*. Titant Lo Blanch, Valencia. 2011. Págs.27-27.

Como garantía general última, nos encontraríamos el control de constitucionalidad de la ley previsto para expulsar del ordenamiento jurídico a todas aquellas normas contrarias a lo preceptuado en el texto constitucional. Garantía que, obviamente, no sólo se contempla cuando se haya transgredido por el Legislador los concretos derechos fundamentales sino cualquier precepto constitucional, con la finalidad de mantener inalterada la posición de la norma fundamental dentro del sistema de fuentes del Derecho.

b) Las garantías individuales o jurisdiccionales⁷.

Además de las anteriores garantías normativas, el ordenamiento jurídico-constitucional también ha provisto como necesarios mecanismos jurisdiccionales que permitan la preservación o restitución de los derechos fundamentales que hayan sido lesionados, conculcados o pudieran serlo. A través de esta garantía se procede a la tutela subjetiva de los derechos constitucionalmente reconocidos. Hablamos de garantía puesto que, en efecto, lo que se persigue con la misma es una tutela frente al menosprecio del contenido normativo de los mismos o frente al desconocimiento o, incluso, desprecio hacia el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales desde una perspectiva individual. Es decir, desde un punto de vista analítico, los distintos mecanismos mediante los que se hace efectiva esta garantía jurisdiccional pueden serlo de muy diversa índole, ya que puede o no residenciarse en un único poder del Estado (Poder Judicial) o diferirse a dicho Poder estatal o a un órgano constitucional distinto del anterior (Poder Judicial y/o Tribunal Constitucional). No produciéndose tampoco una uniformidad respecto a los procedimientos, acciones y remedios procesales ordinarios o extraordinarios destinados a tal fin. Por tanto, el objeto de esta garantía será único, esto es, la restitución o preservación del derecho fundamental que se entiende lesionado o pueda verse conculcado, pero no así los mecanismos jurisdiccionales que se estiman necesarios y que han de ser previstos por la Constitución o por su normativa de desarrollo que, de manera efectiva, han de estar destinados a cumplir con la finalidad de dicha garantía constitucional. Pues, en cualquier otro caso, tanto el defecto de mecanismos jurisdiccionales o procesales destinados a tal fin, o incluso el exceso de

⁷ *Íbidem*.

mecanismos pero que, en el fondo, sean sólo una mera apariencia pero no una efectiva y real tutela individual, no estaría cumpliendo con el objetivo y fin de preservación y restitución de los derechos fundamentales frente a lesiones subjetivas de las mismas. Es decir, con independencia de los mecanismos ordinarios y extraordinarios que sean utilizados expresamente por cada ordenamiento jurídico, así como el órgano o órganos constitucionales que han de llevar a cabo la tutela, la misma ha de perseguir en todo momento un único fin y objetivo, que no es otro que la restitución o preservación del derecho fundamental o libertad pública constitucionalmente consagrado. Por tanto, lo que exige dicha garantía es la provisión por el ordenamiento jurídico-constitucional de todos aquellos mecanismos procesales que sean necesarios para la propia consecución efectiva de dicha garantía.

c) Las garantías institucionales u orgánicas⁸.

Se trata de otras garantías, orgánicas o funcionales, adicionales o complementarias a las anteriores, cuya finalidad es la defensa de los derechos fundamentales; cuyo ejemplo más paradigmático son los del *ombudsman* de los países nórdicos.

En este sentido, la Constitución española de 1978 no es ajena a esa clasificación propia que ha seguido el constitucionalismo europeo contemporáneo. Si bien, la estructuración de los derechos y libertades no se caracteriza por un criterio o clasificación material o sistemático, sino que se decanta por una clasificación en orden al nivel de protección de los mismos previsto en la propia Constitución⁹.

⁸ *Ibidem*.

⁹ En tal sentido lo manifiesta el profesor Pablo Lucas MURILLO DE LA CUEVA en "El amparo judicial de los derechos fundamentales". La aplicación jurisdiccional de la Constitución. VVAA. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 115. Asimismo, añade: "los derechos fundamentales y las libertades públicas, es decir, los reconocidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución [junto al principio de igualdad y la objeción de conciencia], gozan de la máxima garantía que el ordenamiento puede ofrecer. Los demás derechos previstos en la Constitución, disponen de la tutela judicial y de otras formas de defensa, pero no de la reserva de ley orgánica, ni del amparo ante el Tribunal Constitucional.

En fin, los principios rectores de la política social y económica, (...), aún surtiendo efectos jurídicos, éstos por disposición expresa del artículo 53.3, no generan derechos susceptibles de ser aducidos ante los tribunales de justicia, en tanto una ley no lo disponga de modo expreso. En cambio, sí proyectan una eficacia directa (orientan la acción de los poderes públicos),

Es el propio texto constitucional quien desarrolla a través de un primer desglose tales garantías de los derechos fundamentales, así la Constitución prevé tal elenco dentro del Capítulo IV, del Título I (Arts. 53 y 54 CE), pero el texto constitucional no se queda ahí, sino que encontraremos tales garantías a lo largo del mismo y no sólo centrado en un concreto capítulo o artículos.

Destaca, en primer término, en relación a lo que se ha denominado por la doctrina como *garantías generales o normativas*, la vinculación a los derechos fundamentales de todos los poderes públicos con independencia del Poder del Estado del que formen parte (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) o del nivel territorial del que formen parte (estatal, autonómico o local) y también la eficacia directa de tales derechos, todo ello como consecuencia del carácter normativo de la propia Constitución, sin que sea necesario por tanto un desarrollo legislativo de los mismos para su plena efectividad y reivindicabilidad (art. 53.1 CE). No obstante, es la propia Constitución la que prevé la posibilidad de desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, siendo este sólo un mecanismo para la mayor y mejor eficacia de los derechos fundamentales, no siendo por tanto un mecanismo de reconocimiento legislativo de derechos propio del constitucionalismo decimonónico. Esa previsión o reserva de ley en materia de derechos fundamentales tiene un límite infranqueable que no es otro que el respeto al contenido esencial de tales derechos¹⁰.

Las garantías normativas o frente al Legislador no sólo las encontramos en el anterior artículo, sino también en relación al desarrollo de los derechos fundamentales a través de las denominadas leyes orgánicas (art. 81 CE), que prevé el desarrollo de tales derechos a través de este tipo normativo que exige una aprobación mediante mayoría cualificada. También encontramos fuera del expreso capítulo destinado a las garantías de los derechos, una concreta prohibición respecto del ámbito competencial normativo del Poder Ejecutivo,

interpretativa (las restantes normas han de aplicarse a la luz que suministran) e impeditiva (no se puede legislar en su contra)." *Ibidem*.

¹⁰ Entrar a analizar qué ha de entenderse por "*contenido esencial*" de los derechos fundamentales desborda con creces el objeto del presente trabajo, no obstante, para un estudio sobre el particular puede consultarse la obra de MEDINA GUERRERO, M.: *La vinculación negativa del Legislador a los derechos fundamentales*. McGraw-Hill. Madrid, 1996.

pues expresamente se prevé la imposibilidad de regulación de los derechos fundamentales a través de Decretos-leyes, (art. 86.1 CE).

En cualquier caso, la actividad legislativa podrá estar sometida de manera directa al control de constitucionalidad de ley prevista ante el Tribunal Constitucional, tal y como dispone el propio artículo 53.1 CE, que remite a lo dispuesto en el art. 161.1 a) CE, a través del recurso de inconstitucionalidad. Si bien, no es menos cierto que aunque no está expresamente previsto por el art. 53.1 CE, la ley o norma con rango de ley que se considera lesiva de los derechos fundamentales puede ser sometida de manera indirecta a través de la cuestión de inconstitucionalidad por los órganos de la jurisdicción ordinaria ante el Tribunal Constitucional, (art. 163 CE).

Para finalizar, fuera del Capítulo IV, del Título I de la Constitución, se encuentran los procedimientos de reforma constitucional establecidos en el Título X CE. Lo que supone la falta de disponibilidad del contenido instituido de los derechos fundamentales respecto de concretas decisiones legislativas. El art. 168 CE, impide la modificación o reforma por parte del Legislador del contenido constitucionalmente garantizado, pues sólo podrá efectuarse a través del procedimiento y forma que dispone la propia Constitución. Preservándose con ello el rango constitucional dispensado a los derechos y libertades fundamentales.

Respecto a las *garantías individuales o jurisdiccionales*, la Constitución de 1978 recoge tal garantía en el art. 53.2 CE, que se trataría en realidad de una garantía añadida o reforzada, respecto a la garantía <<natural>> establecida en el artículo 24 de la Constitución, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva¹¹. Junto a dicha garantía natural o general, nos encontramos una serie de garantías jurisdiccionales reforzadas en materia de tutela de los derechos fundamentales, por un lado, ante la Jurisdicción ordinaria a través de un *procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad*, (art. 53.2 CE), y, por otro, y, *en su caso*, ante el Tribunal Constitucional a través del *recurso de amparo*, (arts. 53.2, 161.1.b) y 162.1.b) CE).

¹¹ PÉREZ ROYO, J. *Op.cit.* Pág. 448.

Por último, hemos de hacer referencia a las *garantías institucionales u orgánicas*, no obstante, respecto a estas garantías sólo hemos de decir que, en nuestra Constitución, se reconocen las figuras del Defensor del Pueblo “*como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos*” en el Título I, (art. 54 CE) y del Ministerio Fiscal, el cual tiene como misión principal “*promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley*” (art.124 CE).

II.- DEBATES CONSTITUYENTES: “DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES” ARTÍCULO 53.2 CE.

Para acercarnos a nuestro sistema de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales es necesario adentrarnos en la regulación y posterior desarrollo legislativo del artículo 53.2 de la Constitución; con el fin de intentar entender el contenido y alcance de dicho sistema sustentado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, es imprescindible intentar extraer qué quiso regular el constituyente cuando aprobó el citado artículo 53.2 de la Constitución. Para ello, haremos un breve análisis de los principales debates suscitados en sede constituyente con el fin de extraer qué quiso, y también qué no quiso, regular en dicho precepto constitucional.

El texto original recogido en el Anteproyecto de Constitución establecía esta garantía para todos los derechos del Capítulo Segundo y dicha garantía residiría en dos órganos y dos procedimientos: “ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad” y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que además era calificado este como “extraordinario”¹². Pues bien, tanto en la

¹² “Artículo 45

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos reconocidos en el capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional”. BOCG. Anteproyecto. 5 de enero de 1978.-núm. 44. Pág. 676.

Ponencia¹³ como en la Comisión¹⁴ en sede del Congreso de los Diputados se reducirán los derechos y libertades objeto de tutela a través de estos dos procedimientos, tutelándose sólo los derechos y libertades reconocidos en los “artículos 13 [actual artículo 14 CE] y la Sección primera del capítulo segundo”; se elimina el además carácter “extraordinario” del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y se añade como objeto de tutela por parte de este último recurso el derecho a la objeción de conciencia que era reconocido en aquel momento en el artículo 28 [actual artículo 30 CE]. Poco más se puede extraer de los debates suscitados en sede del Congreso de los Diputados.

Los planteamientos más relevantes e interesantes respecto a la redacción que finalmente se le dio al art. 53.2 CE tuvieron lugar en el Senado; pues fue en dicha sede donde sí se suscitó un verdadero debate sobre la atribución a ambos, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, de una misma competencia en materia de tutela de los derechos y libertades fundamentales. Además se cuestionó cómo debía articularse una y otra tutela a través del “procedimiento preferente y sumario” y el “recurso de amparo”. El dictamen de la Comisión en el Senado mantuvo prácticamente intacta la redacción proveniente de Congreso de los Diputados, sólo se realizó la mera modificación de la objeción de conciencia que ya estaba regulada en el artículo 30 y no en el 28¹⁵.

¹³ “Artículo 48

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el artículo 13 de la Sección 1ª del capítulo segundo, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. BOCG. Anteproyecto de Constitución: Informe de la Ponencia. 17 de abril de 1978.-núm. 82. Pág. 1624.

¹⁴ “Artículo 48

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el artículo 13 y la Sección primera del capítulo segundo, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 28.” BOCG. Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas sobre el Anteproyecto de Constitución. 1 de julio de 1978.-núm. 121. Pág. 2599

¹⁵ “Artículo 52

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del Capítulo segundo, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”BOCG. Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado relativo al proyecto de Constitución. 6 de octubre de 1978.-núm. 157. Pág. 3423

Fue en el Pleno y en base a la discusión respecto a las distintas enmiendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios donde surgirá la mayor confrontación y debate en torno a la redacción de dicho precepto. Se inició con la enmienda presentada por el senador MARTÍN-RETORTILLO quien propuso la eliminación del conocimiento del amparo por parte del Tribunal Constitucional¹⁶, basándose para la defensa de la enmienda en que la tutela dispensada por los órganos de la jurisdicción ordinaria sería más que suficiente sin tener que provocar, evitando así disfuncionalidades, que dicho sistema se articulase a través de otro procedimiento y otro órgano que no fuesen los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, como era el Tribunal Constitucional¹⁷.

¹⁶ Enmiendas al Proyecto aprobado por el Congreso MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. (Progresistas y Socialistas Independientes). Enmienda al artículo 48, párrafo segundo, así como a sus concordantes artículo 155, 1, letra b); artículo 156, letra b), y artículo 158, párrafo primero. Pág. 2667.

¹⁷ Diario de Sesiones, Sesión nº 8. 30 de agosto de 1978. "El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER:

Al defender esta enmienda número 8 al apartado 2 del artículo 48, que presenté a título personal y con la que pretendo la supresión del recurso de amparo, soy consciente de que muchos piensan que es una enmienda extemporánea, pero aunque la defienda ahora sin el sosiego necesario, diré que se trata de una enmienda que si no es buena políticamente sin embargo sí que es razonable e incluso me siento en la obligación personal de defenderla.

Comenzaré ante todo ponderando ante la Comisión la importancia de las garantías jurisdiccionales para el disfrute auténtico de los derechos.

Es obvio que en un sistema de acciones por mucho que se proclamen los derechos, éstos no tienen eficacia, no tienen posibilidad, aunque también es necesario que exista un equilibrio. Hay un principio de seguridad que exige claridad; hay una exigencia de no diluir, hay una exigencia de concentrar los remedios. Y entonces nos encontramos con que la propia Constitución atribuye una tarea muy importante a tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, como el propio texto establece.

Habría, por tanto, que exigir muy rigurosamente en estas actuaciones sumarias, pero al mismo tiempo garantizadas, y pienso, incluso, que en el programa posconstitucional esto debería formar parte del primer paquete de medidas.

Es obvio que estos sistemas de actuaciones deberían tener preferencia y deberían, desde luego, dotarse de la posibilidad de apelación y, quizá, de la posibilidad de casación, con la particularidad, además, de que, como ya hemos aprobado en el artículo 24, apartado 1, habrá que garantizar el acceso efectivo a los tribunales de justicia, sin inadmisibilidades, sin indefensiones en ningún caso.

Si esto es así, ¿sigue teniendo sentido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? ¿Sigue justificándose una tercera o cuarta oportunidad de enjuiciamiento para litigios que han sido conocidos por jueces de tribunales independientes? ¿No dejamos muy mal parado al poder judicial, que algún día habrá de ser democrático? Quería someter a la consideración de los señores Senadores dos órdenes de ideas.

En primer lugar, una breve alusión a la Constitución republicana de 1931. Fue allí donde, en nuestro Derecho, se insertó, diríamos, en la modernidad, por primera vez este recurso de amparo, cuando el artículo 121, apartado b), al regular el Tribunal de Garantías Constitucionales, destacaba como habría un recurso de amparo de garantías individuales cuando hubiera sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. Y hay que reconocer que, sin duda, esto constituyó un paso sugestivo que fue desarrollado por la ley reguladora del Tribunal de

Garantías Constitucionales de 3 de junio de 1933, que en sus artículos 44 y siguientes contempló las modalidades previstas con todo tipo de detalles, y se llegó a producir una jurisprudencia importante y destacada.

Pero, ¿qué sucedía en aquella ocasión? ¿Cuál era el ámbito general del sistema jurisdiccional en aquel momento? Pues bien, hay que decir a renglón seguido que entonces la zona de indefensión era amplia y notable, de modo que eran muchas las situaciones en las que los ciudadanos no podían tener las garantías de sus derechos; eran lentos, solemnes, rigurosos los trámites ante los tribunales llamados ordinarios.

No insistiré en los Tribunales llamados contencioso-administrativos, porque ni siquiera eran entonces tribunales judiciales y, desde luego, la regla de la discrecionalidad aconseja impedir el recurso cuando hubiere discrecionalidad en la actuación de las administraciones públicas; esto hacía que fueran muchísimas las materias de las que no podían conocer estos tribunales.

Pero, en cambio, hoy, cuando la Constitución se apruebe, esta situación habrá cambiado de una manera radical y rigurosa, porque todas estas zonas de exención han desaparecido ante los tribunales contencioso-administrativos que sí son hoy auténticos tribunales judiciales.

Se ha empleado mucho el margen de conocimiento de lo que pueden abarcar estos tribunales y, desde luego, cuando quede aprobada la Constitución, si se consagra como esperamos y es previsible el sistema de cláusula general, las posibilidades de indefensión se habrán erradicado de una manera drástica y rigurosa. Pueden, por tanto, los tribunales ordinarios cubrir con creces este tipo de necesidades, este tipo de exigencias, como sucede en otros países, como sucede, por ejemplo, con el que en Méjico se llama recurso de amparo, y en otros ordenamientos jurídicos.

Pero, junto a éstas, hay un segundo orden de consideraciones que muy brevemente y para terminar quiero someter a la consideración de los señores Senadores, y es el de que hay que preparar también cuál va a ser el cargo y el cometido de las actuaciones del Tribunal constitucional porque muy frecuentemente se organizan los Tribunales y el Legislador no ha parado mientes en cuál va a ser la ocupación ordinaria y habitual de los Tribunales que se regulan.

Por imperativo constitucional, si el texto se aprueba tal y como se prevé, serán sólo doce los Jueces que hayan de cubrir las misiones que al Tribunal constitucional se atribuyen y hasta ahora resulta que este Tribunal habrá de conocer de todo el tema de la inconstitucionalidad de las leyes, tanto leyes del Estado como leyes de las regionales; habrá de conocer de los conflictos; habrá de conocer del control de los Reglamentos y actos administrativos en las regiones en sus posibles suspensiones por el poder central; habrá de conocer de otras competencias que se prevén y, además, habrá de conocer de los recursos de amparo por violaciones de derechos individuales.

Pienso que se puede obturar con facilidad el funcionamiento de un Tribunal recargándolo, haciendo que se acumule el papel, y haciendo, en definitiva, que sea ineficaz. Este es un riesgo sobre el que quiero llamar la atención, con la particularidad de que en la experiencia de los Tribunales constitucionales, tal y como vienen existiendo en los últimos años, hay un dato evidente y un aspecto que se destaca: el cómo perturba en la práctica de los Tribunales constitucionales el conocimiento de los juicios penales o el conocimiento de lo que serían juicios contencioso-administrativos.

Recordaré, por ejemplo, cómo en el sistema italiano en el que el enjuiciamiento de los altos Magistrados del Estado se difiere al Tribunal constitucional, ha bastado con que dos Ministros quedaran implicados en el «affaire» Lockheed para que el Tribunal constitucional quedara paralizado casi durante un año.

¿Qué será este recurso de amparo ante el Tribunal constitucional? ¿Será un recurso contencioso-administrativo? ¿Será un recurso de lo civil? ¿Será un recurso de lo penal? Entiendo que todo esto perturba considerablemente la situación. Por ello, se postula y se defiende esta enmienda, manteniendo que desaparezca el amparo ante el Tribunal constitucional.

Hay sí que defender los derechos, pero creo que es preferible potenciar la jurisdicción ordinaria, superar la inseguridad, la duración, incluso la carestía de los pleitos y buscar fórmulas enérgicas de -protección judicial próximas al ciudadano sin tener que aventurarse a la capital del reino, lo cual es siempre muy discriminatorio.

Foméntense, pues, estos Tribunales, estos Jueces independientes, amantes de la convivencia democrática, y no se olvide que, con frecuencia, quien mucho abarca poco aprieta." Págs. 2113-2114.

Si bien esa enmienda fue rechazada, permitió abrir un debate sobre la articulación del procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo, ya en la última fase de elaboración del texto constitucional. La enmienda más relevante fue la presentada por el senador ANGULO MONTES quien, haciéndose eco de las argumentaciones dadas por el profesor MARTÍN-RETORTILLO, propuso inicialmente una regulación que permitiese a la libre elección del ciudadano acudir a una u otra vía, esto es, una redacción que hiciera posible que el agraviado en su derecho pudiera decidir si acudir al procedimiento preferente y sumario, o bien acudir al Tribunal Constitucional a través del amparo¹⁸. Para finalmente proponer la regulación

¹⁸ Debate de la Comisión de Constitución. “El señor ANGULO MONTES: Yo hago lo que el señor Presidente quiera. El sentido de mi expresión es oponerme a todas las enmiendas, quiero decir que con lo que yo no estoy conforme es con que no se tienda aquí y ahora a evitar esa no deseable confusión de que se estaba hablando entre las competencias propias de una institución claramente política, cual ha de ser el Tribunal Constitucional que se proyecta y la jurisdicción ordinaria.

En este sentido no estoy tan lejos, en cambio, de la proposición que comporta la enmienda del señor Martín- Retortillo que sí quiere suprimir de alguna manera esa confusión.

La enmienda del señor Martín-Retortillo resulta un tanto drástica en su aspiración, porque suprime totalmente el recurso de amparo y remite toda protección jurídica a la pura jurisdicción ordinaria.

En ese sentido, que me preocupa, es en el que formularé una enmienda «in voce», que entregaré en seguida a la Mesa, respecto de este párrafo 2, que, sin llegar a la supresión el recurso de amparo, sí me parece a mí que puede conseguir el que no haya esta confusión, esta superposición de dos clases de jurisdicciones que, por su naturaleza y composición, por su estructura y funcionamiento, son tan enteramente heterogéneas. El problema es más trascendental de lo que parece, o pueda parecer a primera vista. Comporta la necesidad, lo ha observado el señor Martín-Retortillo, de no dar competencias indiscriminadas al Tribunal Constitucional y a la jurisdicción ordinaria. Arranca, pues, de la atribución a ambos en la expresión del proyecto de competencias para conocer el uno y el otro con esa «y» que caracteriza precisamente este párrafo 2 al decir que podrá acudirse «ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional». El problema todavía se complica, también lo ha observado, naturalmente, el señor Martín-Retortillo, al contemplar lo que después vendrá en el artículo 155, b), que autoriza el recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional, cuando hubiese sido ineficaz, que así lo dice, y no es cosa ahora de desarrollar los argumentos que se le ocurren a uno contra esa expresión de ineficacia, porque los recursos, las reposiciones, sirven, son eficaces, lo mismo cuando se gana que cuando se pierde.

El problema de la eficacia parece que no estaba aquí en su sitio; pero, dejado eso para luego, lo que basta es señalar que se inicia una sumisión de los tribunales ordinarios -hasta incluso el Tribunal Supremo, que ya no sería tan Tribunal Supremo- al Tribunal Constitucional. Por tanto, una sumisión contraria a la independencia del poder judicial, que no debe reconocer otra sumisión que la que naturalmente le caracteriza, al imperio de la ley, y todo lo que no sea eso es contradecir «ab initio» el estado de derecho. Por eso creo que, como, por otra parte, para seguir hablando del mantenimiento del recurso ante la jurisdicción ordinaria y ante el Tribunal de amparo habría que llegar a esa penosa catalogación de qué clase de derechos y libertades deberían ir a una jurisdicción y cuáles a otra, lo que comportaría hacer un catálogo bastante penoso, sugiero que, pudiendo así mantenerse el doble recurso y sin necesidad de hacer el catálogo, se sustituyan en el párrafo 2 las palabras «y a través del recurso de amparo», que así

que fue aprobada, esto es, la articulación del procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo mediando el nexo de conexión <<y, en su caso>>, con el fin de que fuese el Legislador quien decidiera, en última instancia, cuándo se podría acudir a una u otra vía de tutela de los derechos y libertades fundamentales¹⁹.

Por lo que, en sede de la Comisión Mixta Congreso-Senado²⁰ quedó finalmente aprobado el texto del artículo 53.2 CE, tal y como lo conocemos en la actualidad: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo

lo indiscrimina, poniendo estas otras: «... o bajo elección, mediante», y dejando de esta manera la solución del problema a uno de los dos únicos caminos que tiene.

El primero es el de hacer el catálogo, camino penoso, que apuntaba el señor Martín- Retortillo, y este otro, que parece más sencillo y cumple el mismo fin: establecer una opción, por la que sea el propio ciudadano que se presume lesionado, según las circunstancias del caso, según la naturaleza del agravio que le mueven a solicitar el amparo, quien decida acudir al procedimiento sumario de la jurisdicción ordinaria o que, por la mayor trascendencia o más acusada condición política del caso, llevar su derecho presumiblemente lesionado al Tribunal Constitucional.

Para ello basta hacer la sustitución que nuestra enmienda propone y ya no hablo ahora del apartado 3, porque todavía no me toca.” Págs. 2155-2116.

¹⁹ Diario de Sesiones de 29 de septiembre de 1978. Nº 62. “El señor ANGULO MONTES: Señoras y señores Procuradores... (Risas.) Perdón. Señoras y señores Senadores, el texto del artículo 52 en su apartado 2, conforme al dictamen de la Comisión, permite, al recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo, acudir a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo en este segundo caso, y por el procedimiento sumario y preferente a que se refiere el texto en el primero, de una manera no discriminada porque ambos cauces están simplemente separados por una «y» que no dice nada más. Este texto, en su concordancia necesaria con el artículo 160 del proyecto constitucional que se refiere a las competencias del Tribunal Constitucional nos pareció, desde el primer momento, capaz de originar la conflictividad presumiblemente derivable de la concurrencia en identidad de materias de las jurisdicciones que deben mantenerse como corresponde a su distinta naturaleza: judicial y ordinaria la una, constitucional y política la otra, perfectamente diferenciadas.

Para resolver el problema sugeríamos en nuestra enmienda a la Comisión, que después convertimos en voto particular, que el precepto confiriese una opción al tutelar del derecho presuntamente vulnerado para acudir a la una o a la otra vía. No prosperó aquella enmienda ante la Comisión y hoy, enmendamos el voto particular que nos reservamos, limitamos nuestra pretensión a que mediante la introducción de la expresión

«en su caso», en lugar de aquella «y», quede así: «A la Ley Orgánica corresponde la determinación de los supuestos en que procederá la una o la otra vía». Nos parece que ello, sobre facilitar en la praxis la solución del orden de conflictividad a que he aludido, servirá además para evitar que se desnaturalice por exceso de competencias e incluso, por qué no decirlo, por exceso de casos a resolver el la importante función que corresponderá al Tribunal Constitucional. Este es el sentido a que queda reducida la enmienda «in voce» del voto particular respecto al apartado 2.”. Pág. 3088.

²⁰ BOCG. Dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado sobre el Proyecto de Constitución. 28 de octubre de 1978.-núm. 170. Pág. 3710.

ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.

Pues bien, debido a esta modificación realizada *in extremis* tuvo que ser rectificado también el artículo 161.1b) CE, con el fin de armonizar la regulación del recurso de amparo allí establecida con la nueva dada al artículo 53.2 CE. Por tanto, pasó de la regulación dada por el Congreso de los Diputados “Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 48, 2, de esta Constitución, cuando hubiese sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales”²¹. Para, finalmente, quedar regulada dicha competencia ante el Tribunal Constitucional tal y como se recoge en la actualidad: “Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca”²², (art. 161.1 b) CE).

Los debates doctrinales suscitados tras la entrada en vigor de la Constitución planteaban multitud de incertidumbres derivadas de la regulación que el constituyente había dado a la garantía jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales. Sobre todo en relación a cómo debía articularse la tutela preferente y sumaria ante la jurisdicción ordinaria <<y, en su caso>> ante el Tribunal Constitucional a través del amparo. Algo que en su día dejó perfectamente reflejado el Profesor PÉREZ TREMPs cuando manifiesta que “[s]e plantea la cuestión de cómo interpretar las relaciones entre el recurso de amparo propiamente dicho y el procedimiento ante los Tribunales ordinarios basado en los principios de preferencia y sumariedad a que se refiere el art. 53.2. La duda, (...), está en si ambas instituciones han de entenderse como dos instancias del amparo, como ocurriera con la Constitución de 1931, o si lo que ha intentado el constituyente español es seguir el modelo alemán, en el cual se exige para acudir al Tribunal Constitucional Federal agotar las vías procesales ordinarias para sustanciar el <<recurso constitucional>> en

²¹ BOCG. Texto del Proyecto de Constitución aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. 24 de julio de 1978.-núm. 135. 2974.

²² BOCG. Dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado sobre el Proyecto de Constitución. 28 de octubre de 1978.-núm. 170. Pág. 3732.

única instancia ante este órgano”²³. La Constitución de 1978 ni en su art. 53.2, ni en el 161.1, establece cómo ha de articularse la tutela ante la jurisdicción ordinaria respecto a la tutela otorgada por el Tribunal Constitucional. “Durante todo el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución el texto del definitivo artículo 161.1 ha cambiado de redacción en varias ocasiones, optándose, finalmente, por dejar al Legislador ordinario la solución al problema de la relación entre ambos procedimientos”²⁴.

Otra interpretación posible del art. 53.2 y del 161.1.b) CE, la expresó el profesor DE LA QUADRA-SALCEDO, sería que el <<en su caso>> fuera interpretado entendiendo la posibilidad directa del recurso de amparo sin necesidad de acudir de manera previa la jurisdicción ordinaria, también que sea necesario agotar las vías procesales previas y el recurso de amparo sería el último recurso o bien, que la vía judicial previa y el recurso de amparo sean vías alternativas y opcionales²⁵. También en tal sentido, es decir, respecto a las posibles interpretaciones que puede atribuirse al <<y, en su caso>>, establecido en el art. 53.2 CE, LINDE PANIAGUA interpreta tal precepto de manera que “[d]e este último parece desprenderse que para el conjunto de derechos y libertades en el mismo mencionados, debe dictarse un “procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los Tribunales ordinarios”, al que podríamos denominar “recurso de amparo ordinario”, para diferenciarlo del amparo constitucional al que se hace referencia en el mismo artículo y posteriormente en los artículos 161-1-b) y 162-1-b). La diferenciación de estos dos recursos resulta evidente en el propio artículo 53-2, en donde se especifica que la protección de los derechos que en el mismo se citan podrá tener lugar también (dice el texto: “y en su caso a través”) mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin que se predetermine si este último es un recurso alternativo del anterior o sucesivo, ni que sea en todo caso procedente. Es decir, que mientras que el amparo

²³ PÉREZ TREMPES, P.: *“Apendice: El recurso de amparo en la Constitución de 1978”*. García Ruiz, J. L.: *El recurso de amparo en el derecho español*. Editora Nacional. Madrid, 1980. Págs. 282 y 283.

²⁴ PÉREZ TREMPES. *Op.Cit.* Pág. 283.

²⁵ DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, TOMÁS: *El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares*. Ed. Civitas. Madrid, 1981. Pág. 18.

ordinario se concibe como un recurso para la protección de la totalidad de los derechos y libertades, a que se hace referencia en el artículo 53-2, el recurso de amparo constitucional procede con arreglo a lo que dispone el artículo 161-1-b) “en los casos y forma de [sic] establezca”.

Es decir, que mientras que el recurso de amparo ordinario tiene su ámbito de aplicación determinado expresamente por la Constitución, el del recurso de amparo constitucional se ha diferido a la ley.”²⁶

También MARTÍN REBOLLO plantea esa falta de concreción constitucional. “Introducido, pues, en la Constitución el recurso de amparo su regulación concreta y los supuestos de su aplicación quedaron remitidos a la LOTC. Frente a quienes pretendían el acceso directo al Tribunal Constitucional y quienes apuntaban a la exigencia de una vía judicial previa, triunfó la tesis intermedia de dejar los referidos requisitos procesales a la Ley. Así hay que entender la expresión *en su caso* del artículo 53-2, y la expresa referencia del artículo 161-1-b) cuando establece que el TC es competente para conocer del recurso de amparo *en los casos y formas que la Ley establezca*. Va a ser la LOTC la que va a exigir el agotamiento de una instancia judicial ordinaria y previa como requisito del recurso de amparo en el concreto supuesto a que nos referimos, es decir, en el caso del artículo 43 de esta Ley”²⁷.

Sin embargo para otros, como FRIGAL FERNÁNDEZ-VILLAVARDE, el objeto del recurso de amparo sí venía determinado en el artículo 53.2 CE, pero no su articulación respecto a la tutela que debe dispensar la jurisdicción ordinaria a través del procedimiento preferente y sumario²⁸.

²⁶ LINDE PANIAGUA, E.: “Amparo ordinario, amparo constitucional y Convención europea para la protección de los Derechos humanos y de las libertades Fundamentales”. *El Tribunal Constitucional. Volumen II*. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981. Pág.1404-1405.

²⁷ MARTÍN REBOLLO, L.: “La vía judicial previa al recurso de amparo constitucional (el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *El Tribunal Constitucional. Volumen II*. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981. Pág.1676-1677.

²⁸ “De acuerdo con el artículo 53-2 de la Constitución de 1978 son objeto de tutela a través del recurso de amparo los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, (...), [artículos 15 a 29] y en el artículo 30, derecho este último que, por el contrario, no es objeto de tutela a través del procedimiento preferente y sumario a que alude el propio precepto constitucional, [en los siguientes capítulo del Título I], (...).

Según el artículo 161-1b) de la Constitución de 1978 el Tribunal constitucional es el competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53-2, en los casos y la forma que la ley establezca, siendo ésta la L.O.T.C. que , con arreglo al artículo 165 de la Constitución, regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional,

Por todo lo anterior, nada deja cerrado el constituyente sobre cuál ha de ser el objeto del recurso de amparo y cuándo se podrá acceder al mismo pues, tal y como se desprende de los debates constituyentes, así como del análisis doctrinal que se realizó, esta cuestión se dejaba en manos del Legislador al cual se le derivaba el acometer el cierre de la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria a través del *procedimiento preferente y sumario* y su articulación respecto al *recurso de amparo* ante el Tribunal Constitucional. *Por lo tanto, en sede constituyente, el problema queda sin resolver*²⁹.

Pero, sea como fuere, y cuál sea la interpretación que finalmente dio el Legislador, compartimos la opinión del profesor CARRASCO DURÁN³⁰ en

el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

En cuanto a la legitimación para interponer el recurso de amparo, el artículo 162-1-b) de la Constitución la reconoce a favor de toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. (...).

Lo expuesto hasta ahora es todo lo que da de sí la regulación constitucional del recurso de amparo, sin que en la misma, por consiguiente, se encuentre alusión alguna a su carácter, así como a su posible articulación en relación con el procedimiento preferente y sumario previsto en el artículo 53.-2 y muy particularmente con la vía contencioso-administrativa. Para la solución de este problema a nivel constitucional únicamente nos encontramos con el dato o elemento de juicio que supone la frase de este último precepto “y, en su caso, a través del recurso de amparo”.

La necesidad de delimitar los respectivos campos de acción del recurso de amparo y del contencioso- administrativo deriva, no tanto de la parquedad de la Constitución, cuanto de la alusión a él de nuestros constituyentes sin estar convencidos de lo que se pretendía proteger y qué protección se intentaba implantar que aún no estuviese prevista al margen de la Constitución misma. Ello implica una situación de suma gravedad, pues, (...), en un principio parece que el recurso de amparo se concibió mirando única y exclusivamente a la objeción de conciencia”. FRIGOL FERNÁNDEZ-VILLAVARDE, L.: “Aproximación a una tesis articuladora de los recursos de amparo y contencioso-administrativo” El Tribunal Constitucional. Volumen II. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981. Pág. 1118- 1119.

²⁹ FAIRÉN GUILLÉN, V.: “El procedimiento <<preferente y sumario>> y el recurso de amparo en el artículo 53.2 de la Constitución”. Revista de Administración Pública. Núm. 89, 1979. Pág. 237

³⁰ CARRASCO DURÁN, M.: “Los términos del reconocimiento constitucional del recurso de amparo resultan muy parcos y, por ello, insuficientes cuando se trata de fijar un concepto preciso del recurso de amparo. Así, el artículo 53.2 CE se limita a conferir a cualquier ciudadano la posibilidad de recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, «en su caso», a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuyo ámbito se extiende también a la objeción de conciencia.

El artículo 161.1.b) CE reincide en la anterior indefinición cuando atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de amparo «en los casos y formas que la ley establezca», mientras que el artículo 162.1.b) CE trata solamente el tema de la legitimación en el recurso de amparo, que confiere a las personas naturales o jurídicas que invoquen un interés legítimo, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal.

relación a que, si bien el constituyente no dejó cerrada la articulación de dicho *procedimiento preferente y sumario* en relación al *recurso de amparo* ante el Tribunal Constitucional, lo que sí queda claro de dichos debates es que, fuera como fuere que se interpretase, el recurso de amparo ya fuera alternativo, subsidiario o complementario, lo sería única y exclusivamente en relación a *un procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria y no estando constitucionalmente previsto su articulación ante cualquier otro procedimiento ordinario o extraordinario ante dicha jurisdicción.

III.- EL SISTEMA DE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El sistema de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades establecido en nuestra constitución va a tener dos grandes protagonistas. Por un lado, a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, los cuales van a dispensar con carácter general una tutela de todos aquellos derechos e intereses legítimos, entre los que se incluyen, claro está, los derechos y libertades fundamentales, (art. 24 CE)³¹. Además, y con carácter adicional a la anterior tutela, la Constitución prevé sendos mecanismos extraordinarios y reforzados de tutela de determinados derechos y libertades fundamentales. Así, en primer lugar, se establece la obligación constitucional dirigida al Legislador de regular un *procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria, destinado a la protección y tutela de los derechos y libertades establecidos en el artículo 14 y la Sección I, del Capítulo II, del Título I de la Constitución, (art. 53.2 CE). En segundo lugar, para la protección del

En definitiva, de la Constitución sólo puede extraerse que el recurso de amparo es un instrumento procesal para la tutela de los derechos fundamentales de la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero de aquélla cuyo conocimiento se atribuye al Tribunal Constitucional dotado de especiales características en cuanto a la legitimación para formularlo y que procede solamente en determinados casos y de acuerdo con determinadas formalidades que la Constitución remite completamente a la ley". En "El concepto constitucional de recurso de amparo: examen de posibilidades para una reforma de la regulación y la práctica del recurso de amparo". REDC. Año 21, núm. 63, septiembre-diciembre 2001. Págs. 81-82.

³¹ Como destaca GIMENO SENDRA, estos procesos "son los instrumentos jurídicos a través de los cuales se realiza la protección jurisdiccional de los derechos subjetivos que otorga a los ciudadanos el derecho civil, penal, administrativo y laboral"; en GIMENO SENDRA, V. y GARBERÍ LLOBREGAT, J.: *Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e internacional)*. Colex. Madrid, 1994. Pág. 27.

derecho a la libertad personal, (art. 17.1 CE); la Constitución requiere la regulación legal del procedimiento de *habeas corpus* para *la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente*, (art. 17.4 CE).

El segundo gran protagonista del sistema constitucional de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales –como hemos visto– será el Tribunal Constitucional a través de la instauración del *recurso de amparo*. Así y, en primer lugar, la Constitución en el artículo 53.2 CE, establece este mecanismo de tutela cuyo objeto, en principio, será el mismo que el determinado para el *procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria pero también será objeto del recurso de amparo el derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2 CE). Ahora bien, la articulación de ambos mecanismos de tutela, el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo, no queda predeterminado por la Constitución ya que como se lleve a cabo la protección en sede de jurisdicción ordinaria y en sede del Tribunal Constitucional no queda delimitado en el propio texto constitucional, sino que se circunscribe al alcance que el Legislador le otorgue al nexo articulador <<y, en su caso>>. Para completar la regulación constitucional del recurso de amparo ha de acudir al Título IX, dedicado al Tribunal Constitucional, donde se regula su función y atribuciones como órgano constitucional. Pues bien, las referencias que en dicho título encontramos en relación al recurso de amparo, se circunscriben básicamente a lo ya establecido en el artículo 53.2 CE, pues tampoco cierra nada sobre la articulación entre la tutela ante la jurisdicción ordinaria cuando el art. 161.1.b) establece que el Tribunal Constitucional conocerá del *recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53. 2 CE*, derivándose al Legislador para que determine *en los casos y formas que la ley establezca*. Para finalizar, el artículo 162.1.b) CE establece con gran amplitud los legitimados para interponer un recurso de amparo, confiriéndose *a las personas naturales o jurídicas que invoquen un interés legítimo, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal*.

Como hemos tenido oportunidad de analizar en las páginas anteriores, esto es todo lo que se puede extraer del texto constitucional respecto al sistema jurisdiccional los derechos y libertades fundamentales en general y del

recurso de amparo en particular. La parca regulación constitucional del recurso de amparo sólo nos permite extraer unos elementos esenciales tales como su objeto, los derechos y libertades establecidos en el art. 14, Sección I, Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, así como la objeción de conciencia del art. 30.2 CE, así como los legitimados para su interposición. Se trata por tanto de una regulación insuficiente para dotar al recurso de amparo de un contenido preciso³². Regulación que provoca más interrogantes que certezas, como por ejemplo, si el objeto del recurso han de ser siempre y en todo caso tales derechos y libertades fundamentales o si puede disminuirse o incluso aumentarse respecto a otros derechos o libertades no expresamente previstos en el artículo 53.2 CE; cómo se ha de articular uno y otro procedimiento de tutela ante la jurisdicción ordinaria y ante el Tribunal Constitucional, pues nada se nos dice sobre el contenido preciso que ha de dotársele al concepto <<y, en su caso>>, que haga determinar si ambos se articulan como procedimientos alternativos, subsidiarios o complementarios.

IV.- LA APROBACIÓN DE LA L.O. 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. DEBATES PARLAMENTARIOS.

1º) *El contenido del proyecto*

La elaboración del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se inició con su presentación por el Gobierno ante la Mesa del Congreso de los Diputados a mediados del mes de mayo de 1979³³; esto es, nada más iniciarse la primera legislatura de las nuevas Cortes Generales que se constituyeron tras la aprobación y entrada en vigor de la nueva Constitución. Cuando el proyecto se presentó no habían transcurrido ni dos meses desde que se constituyó la nueva Cámara³⁴ y a los pocos días de que ambas

³² CARRASCO DURÁN. *“El concepto constitucional de recurso de amparo...”*. Op.cit. Pág. 81.

³³ Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979.

³⁴ Junta preparatoria y constitución interina de la Cámara. Diario de Sesiones, nº 1. Congreso de los Diputados. 23 de marzo de 1979.

Cámaras iniciaran su actividad³⁵, una vez elegido Presidente del Gobierno, Adolfo Suarez³⁶.

Con esto queremos remarcar dos cosas que estos datos nos desvelan, en primer lugar, que transcurrió muy poco tiempo desde que se aprobara la nueva Constitución, con lo cual, sus debates estaban aún muy presentes y era conocido el contenido concreto que quiso dársele a cada uno de los Títulos, artículos y preceptos que contenía la nueva norma constitucional. Por otro, y en segundo lugar, que sólo pasaron unos días desde que se puso en marcha la labor parlamentaria y el inicio de los trámites parlamentarios para aprobar la ley reguladora del órgano constitucional “que debe asegurar la supremacía de la Constitución y garantizar la adecuación a ésta de todo nuestro ordenamiento”³⁷; el cual se consideraba como “una pieza esencial en la organización jurídico-política del Estado”³⁸. Incluso, debido al poco tiempo transcurrido entre la aprobación de la Constitución y la presentación del proyecto, no es descabellado pensar que se elaboró o se fue ultimando al mismo tiempo que se elaboraba o ultimaba la propia Constitución.

Esto a su vez nos desvela algo más, y es la necesidad del Ejecutivo y del Legislativo de hacer efectiva la Constitución y de hacerla efectiva de manera inmediata, disponiendo para ello el poder contar con un órgano de vital importancia para que la Constitución fuera norma jurídica suprema del ordenamiento y que ningún poder del Estado pudiera quedar desde esos primeros momentos sin control frente a una posible desviación del nuevo orden político y jurídico-constitucional. Pues, “al recoger esta institución, nuestra Constitución sigue una corriente dominante en nuestro tiempo, mediante la que se persigue la progresiva juridificación de las relaciones políticas, para hacer cada vez más verdaderamente real el principio del imperio de la ley”³⁹.

³⁵ Sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, con motivo de la apertura de la I Legislatura. Diario de Sesiones, nº 1. Congreso de los Diputados. 9 de mayo de 1979.

³⁶ Sesión de investidura. Diario de Sesiones, nº 3. Congreso de los Diputados. 30 de marzo de 1979.

³⁷ Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 127.

³⁸ *Íbidem*.

³⁹ Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 127.

El Preámbulo del proyecto de Ley Orgánica, añade una serie de cuestiones; entre las que cabe destacar, que los artículos que regulan las concretas competencias del Tribunal Constitucional, son las propias que el *“Derecho Histórico y el Derecho Comparado ofrecen”*⁴⁰, tales como son: el control de constitucionalidad de la ley, abstracto o concreto; el recurso de amparo; el control sobre los conflictos de competencias; la impugnación por parte del Estado de las resoluciones de las comunidades autónomas y el control previo de los tratados internacionales. Aunque, haciendo uso de lo dispuesto en el art. 162.2 d) CE, se añadirán nuevas competencias no expresamente previstas en la Constitución como son el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado y el recurso previo de inconstitucionalidad⁴¹.

Pues bien, y en cuanto al tema que nos concierne, añade el preámbulo del proyecto: “El recurso de amparo, en particular, *se ha ampliado considerablemente* y para no privarlo desde el primer momento de la máxima exigencia se ha previsto que, en tanto que no se configura el procedimiento basado en los procedimientos de preferencia y sumariedad a que se refiere el artículo 54 [sic], apartado 2, de la Constitución, pueda ser interpuesto en cuanto quede agotado el procedimiento especial que se configura en la Sección 2ª, de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”⁴².

Es decir, la regulación que el proyecto va a dar al amparo se va a caracterizar por su amplitud, incluso por una configuración mucho más extensa de la que inicialmente podría pensarse o puede derivarse de los debates constituyentes y del texto constitucional finalmente aprobado y, además, que ello es así o debe ser así hasta que no se produzca una regulación de <<el procedimiento>> basado en los principios de preferencia y sumariedad. Es decir, podemos extraer que, en principio, la regulación del amparo va a ser muy extensa y que lo va a ser por circunstancias excepcionales, pues no se ha

⁴⁰ Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979.

Pág. 128.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Proyecto de Ley. BOCG, Núm.44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 128.

regulado aún el *procedimiento preferente y sumario*. A sensu contrario, la ampliación del recurso de amparo debería verse disminuida cuando se aprobara tal *procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria.

En cuanto al proyecto, tenemos que decir que guarda una estructura bastante similar a la que posteriormente se aprobó y entró en vigor. El proyecto de ley orgánica se estructura en ocho Títulos, al igual que sucede con la ley que finalmente aprobada. El primer título recoge la figura <<Del Tribunal Constitucional>> y consta de dos capítulos, el primero destinado a la regulación “Del Tribunal Constitucional, su organización y atribuciones” y, el segundo, “De los Magistrados del Tribunal Constitucional”. El segundo título lleva por rúbrica <<Del recurso de inconstitucionalidad>>, compuesto por cuatro capítulos; el primero, “Del objeto del recurso de inconstitucionalidad”; el segundo, “Del recurso de inconstitucionalidad promovido por vía principal o directa”; el tercero, “Del recurso de inconstitucionalidad promovido por vía prejudicial” y, el último de esos cuatro capítulos que componen el título, “De la sentencia del recurso de inconstitucionalidad y sus efectos”. El título tercero, <<Del recurso de amparo constitucional>>. El título cuarto del proyecto llevaba por rúbrica <<De los conflictos constitucionales de competencia y de atribuciones>>, en el que se establece dentro de sus capítulos las distintas tipologías de los mismos, ya sean “De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades autónomas o de estas entre sí”, o bien, “De los conflictos de atribuciones entre los órganos constitucionales del Estado”. El título quinto llevaba por rúbrica <<Del procedimiento previsto en el artículo 161.2, de la Constitución>>, para hacer referencia a la regulación sobre la impugnación por parte del Gobierno de todas aquellas disposiciones y resoluciones emanadas por cualquier autoridad de cualesquiera Comunidad Autónoma. El último de los títulos del proyecto que recoge expresas competencias, título sexto, era signado como <<Del control previo de inconstitucionalidad>>, en el que se recogían sendos capítulos destinados a la “Declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales” y sobre el “Recurso previo sobre la constitucionalidad de los textos que hayan de tramitarse como Leyes Orgánicas”. Los dos últimos títulos, séptimo y octavo, van destinado a la regulación <<De las disposiciones comunes sobre

procedimiento>> y <<Del personal al servicio del Tribunal Constitucional>>, respectivamente.

Como decimos, la regulación del recurso de amparo que estableció el proyecto (arts. 45 a 63 del proyecto de ley), nos resulta muy interesante entre otras cuestiones, debido a la extensión que se le va a dar al mismo porque aún no se ha producido la regulación de la otra parte del *binomio jurisdiccional* que compone el artículo 53.2 CE.

Los derechos protegidos por el recurso de amparo, desde un primer momento, van a ser aquellos que expresamente dispone el art. 53.2 CE, es decir, arts. 14 a 29 CE y la objeción de conciencia del art. 30.2 CE, según se desprende del art. 45 del proyecto. A pesar de la amplitud con la que se pretende recoger la tutela a través del recurso de amparo, se va a considerar que la tutela a través de este mecanismo sólo comprenderá a esos derechos y libertades pues, cabría pensar que, haciendo uso del margen del que dispone el Legislador a través del art. 161.1. d) CE, la Ley Orgánica podría haber recogido otros derechos de los no expresamente previstos en el art. 53.2 CE. Advierte que, esta tutela dispensada por el Tribunal lo será “sin perjuicio de la tutela *general* encomendada a los Tribunales de justicia”⁴³.

Lo que es común al proyecto y a la regulación que se aprobó finalmente, con independencia del afinamiento y pulido en cuanto a su redacción, es que el recurso de amparo se va a estructurar en cuatro *tipos*, es decir, no sólo se va a recoger el recurso de amparo proveniente de la tutela ante la jurisdicción ordinaria a través del procedimiento *preferente y sumario*, sino que, como bien anunciaba el preámbulo, se le va a dar una regulación más que *amplia*, muy extensa. Esos tipos serán: el recurso de amparo contra actos del Poder Legislativo; recurso de amparo contra actos del Poder Ejecutivo; el recurso de amparo contra actos del Poder Judicial y el recurso de amparo de protección del derecho a la objeción de conciencia.

⁴³ Art. 45.1 del proyecto de ley orgánica. La cursiva es nuestra. Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 137.

Empecemos por estos dos últimos, en cuanto a la regulación del recurso de amparo contra actos del Poder Ejecutivo, se establece lo siguiente en el proyecto de ley orgánica:

“Artículo 47

1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos Ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o provenientes de cualesquiera otros entes públicos o sus funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución.
2. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
3. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción o errónea interpretación, producida en la decisión final de la vía judicial agotada, de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo”⁴⁴.

En relación a los actos del Poder Judicial, el proyecto propone la siguiente regulación:

“Artículo 48

1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
 - a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.
 - b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

⁴⁴ Proyecto de Ley. BOCG, Núm. 44I.24 de mayo de 1979. Pág. 138.

judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se hubiese hecho invocación formal dentro del proceso judicial correspondiente del derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiera lugar para ello.

1. El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial”⁴⁵.

El recurso de amparo frente a violaciones del derecho a la objeción de conciencia: “Artículo 49

1. La solicitud de amparo constitucional contra las violaciones del derecho a la objeción de conciencia sólo podrá presentarse una vez que sea ejecutoria la decisión que impone la obligación de prestar el servicio militar.

2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída”⁴⁶.

Por último, en relación a los actos provenientes del Poder Legislativo:

“Artículo 46

1. Cuando por ley, o por disposición o acto con valor de ley formal, del Estado o de las Comunidades Autónomas, que hubieren de ser cumplidos directamente sin previo requerimiento o acto de sujeción individual, se violen o pongan en peligro actual o inmediato los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, la persona directamente afectada, así como el Defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El recurso de amparo deberá interponerse en el plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la ley, o acto o disposición con valor de ley formal. La falta de

⁴⁵ *Íbidem*.

⁴⁶ Proyecto de Ley. BOCG, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 138.

impugnación directa no será obstáculo, sin embargo, para recabar posteriormente el amparo constitucional frente a actos del Poder Público, fundados en la norma que se repute inconstitucional.

Las demás decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus Órganos que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser también recurridos dentro del mismo plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, fuesen firmes⁴⁷.

Podemos comprobar como el proyecto de ley establece de manera directa cuál será la vía judicial previa para la interposición del recurso de amparo cuando la lesión tenga su origen en una actuación por parte de la administración pública, que no es otra que la tutela preferente y sumaria ante la jurisdicción ordinaria dispuesta en el art. 53.2 CE.

Respecto a las vulneraciones que tengan su origen en una actuación u omisión del Poder Judicial, a diferencia del recurso cuyo origen sea una lesión por parte de la administración pública, no se especifica si ese procedimiento judicial es el *procedimiento preferente y sumario* o puede ser cualquier otro procedimiento judicial. No obstante, de su tenor literal y la falta de especificación como sí ocurre en el artículo anterior, unido a la advertencia que se hace en el proyecto sobre la *ampliación* del amparo, nos lleva a pensar que, efectivamente, se está queriendo dotar de una amplitud máxima a los procedimientos judiciales que pueden originar o dar lugar a un posterior recurso de amparo y no sólo de aquel procedimiento preferente y sumario. Además, no sólo respecto a la tipología relativa a los procedimientos sino también respecto a los recursos necesarios para agotar la vía ante la jurisdicción ordinaria para poder recabar el amparo ante el Tribunal Constitucional. Relacionado con lo anterior, aunque no dispuesto en dicho artículo sino en el art. 58 del proyecto, se hacía referencia a que el Tribunal

⁴⁷ Proyecto de Ley. BOCG, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 137.

debía abstenerse sobre la valoración y calificación realizada sobre los hechos y sobre la interpretación y aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales, debiendo centrarse en determinar si se había vulnerado o no el derecho fundamental y a restablecerlo si se había producido tal lesión.

Llama nuestra atención que, efectivamente, el recurso de amparo se recogía con una amplitud excepcional, tanto es así que cualquier acto proveniente de cualquier Poder del Estado vulnerador de un derecho y libertad fundamental podía ser planteado ante el Tribunal Constitucional. Como decimos, cualquier acto, incluso las lesiones de derechos fundamentales cuyo origen inmediato fuera una ley o una disposición con rango o valor de ley tanto del Estado como de las Comunidades autónomas. Para ello, se disponía que “cualquier persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal”, podían interponer recurso de amparo en el plazo de tres meses a contar desde su publicación. No obstante, además se añadía que el hecho de no recurrir en amparo la ley en este sentido, no era impedimento para interponer un posterior recurso de amparo contra actos de los poderes públicos en aplicación de la ley o norma con rango de ley, lesivas de los derechos fundamentales. Ahora bien, sin embargo, el papel del Defensor del Pueblo era, en cierta manera, reiterativo ya que también estaba legitimado para la interposición del recurso de inconstitucional de la “vía directa”. Es decir, también se establecía un amparo, directo e indirecto, contra leyes que pudieran reputarse inconstitucionales por ser lesivas o vulneradoras de los derechos y libertades fundamentales susceptibles de su conocimiento por el Tribunal Constitucional.

Por último, se recoge el recurso de amparo previsto en el artículo 53.2 CE, contra las violaciones del derecho a la objeción de conciencia, como recurso de amparo distinto y diferenciado respecto a los anteriores. Esto es, tendrá un acceso directo al amparo constitucional sin necesidad de acudir de manera previa al procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria.

Por tanto, respecto a los actos susceptibles de ser recurridos en amparo, se amplía de manera extraordinaria tanto los actos provenientes de los

poderes públicos como las vías previas para su tutela judicial, yendo muchísimo más allá de lo expresamente previsto por el constituyente en el art. 53.2 CE.

En cuanto al resto de la regulación que incide en la tramitación del procedimiento, según el proyecto, disponía la competencia de las Salas del Tribunal para su conocimiento, salvo para el recurso de amparo contra leyes pues el competente en este caso sería el Pleno del Tribunal (art. 52 del proyecto). La demanda, obviamente, debía iniciarse mediante escrito en el que debían constar de manera clara y concisa los hechos que la fundamentaban, los preceptos constitucionales que se consideraban infringidos y aquello que era solicitado al Tribunal. Al escrito debían acompañarse todos aquellos documentos necesarios y, si se tratará de un recurso de amparo contra una ley, debía indicarse la misma o el precepto que se estimaba vulnerador del derecho o libertad, (art. 53 del proyecto). Ahora bien, asimismo, el proyecto establecía el trámite para la admisión del recurso, a tal fin establecía un trámite de audiencia previa tanto al interesado como al Ministerio Fiscal y, una vez producido tal trámite procesal, la Sala podía acordar la admisión pero también la inadmisión e, incluso, el sobreseimiento. Las causas que podían originar la inadmisión eran: la interposición de la demanda fuera de plazo y la carencia de requisitos legales o formales, disponiendo para ello de un plazo para la subsanación. En cuanto al sobreseimiento: cuando la demanda alegaba algún derecho que no era susceptible de amparo; cuando la demanda carecía “manifiestamente, de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional”; cuando el Tribunal ya hubiese resuelto un supuesto “que guarde igualdad jurídica esencial, y se hubiera rechazado”; cuando el recurso se dedujese de situaciones consumadas que hiciesen imposible el otorgar una protección. Además, contra dicha resolución no cabía recurso alguno (art. 54 del proyecto). Aunque nada decía ese artículo sobre la forma que debía adoptar tal resolución, si es cierto que el art. 91 del proyecto, inserto dentro de las normas comunes a los procedimientos, disponía que la inadmisión, sobreseimiento, desistimiento y caducidad adoptarían la forma de auto.

Si la demanda era admitida a trámite la regulación respecto a su resolución mediante sentencia venía determinada en tres artículos, arts. 57, 59 y 60 del proyecto; el primero determinaba los pronunciamientos que ésta ha de contener, que serán: el sobreseimiento, el otorgamiento o la desestimación del recurso. Cuando se producía el sobreseimiento mediante sentencia se debía a que “por acto o hecho, o por resolución posterior, o por cualquier otra causa, el amparo solicitado resulta innecesario”, (art. 59 del proyecto). Por último, si la sentencia dictada lo era para otorgar el amparo solicitado, la misma debía contener al menos alguno de estos pronunciamientos: la anulación del acto o resolución lesivos de los derechos fundamentales y, en su caso, la determinación de la extensión de sus efectos; el reconocimiento del derecho o libertad de conformidad a su contenido constitucional y, por último, el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad, (art. 60 del proyecto).

El resto de la regulación estaba dedicada a la suspensión (arts. 61 y 62 del proyecto), así como a la determinación de la competencia a los tribunales de la jurisdicción en materia indemnizatoria (art. 63 del proyecto).

Además, la Disposición Transitoria Segunda en su apartado 2º del proyecto de Ley Orgánica, establecía que “En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo es la configurada en la sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, “Sobre protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”.

2º) La tramitación en el Congreso de los Diputados

Abierto el plazo para la presentación de enmiendas, se presentaron un total de 297 enmiendas al articulado y dos enmiendas a la totalidad del proyecto⁴⁸ que, junto al texto del proyecto fueron analizadas por la Ponencia

⁴⁸ Extraídas del volumen: *Tribunal Constitucional. Trabajos parlamentarios*. Edición de SANTAMARÍA PASTOR, Cortes Generales. Madrid, 1980. Págs. 39-119.

de la Comisión Constitucional en el Congreso⁴⁹. Dicha Ponencia aceptó algunas de las relativas a la regulación del recurso de amparo, modificando por tanto la redacción del proyecto de ley.

Entre las modificaciones más importantes o reseñables que se introdujeron se encuentran las siguientes:

a) La aceptación de la enmienda 175 presentada por el Grupo parlamentario Minoría Catalana, que pedía la supresión de recurso de amparo contra leyes, ya que mediante el mismo se introducía “por una vía falsa una amplia legitimación de los particulares para interponer recursos de inconstitucionalidad cuando, para éstos, la propia Constitución tasa y limita muy concretamente el número de personas u órganos legitimados”.

b) La aceptación de las enmiendas relativas a la demanda de amparo.

En base a lo anterior, se solicitó la supresión del amparo contra leyes como objeto del recurso de amparo, (enmienda 207 presentada por el grupo Minoría Catalana).

c) Aceptación de algunas de las enmiendas que hacían referencia a la admisión por parte del Tribunal.

De sustitución para una mejora técnica en el que conste <<...supuesto sustancialmente igual, y se...>> (art. 55.2 c) del proyecto) y se suprima el art. 55.2 d) del proyecto de ley, según enmienda 6 presentada por el Grupo parlamentario Socialista y, también, en igual sentido de supresión del art. 55.2 d) la enmienda 273 del Grupo parlamentario Comunista.

En cuanto a la falta de recurso contra la inadmisión, no se acepta la enmienda 274 presentada por el Grupo Parlamentario Comunista para la inserción de que <<cabrá recurso de réplica ante el Pleno del Tribunal

⁴⁹ BOCC, Núm. 44I 1. 7de julio de 1979. Págs. 152/1-152/50.

Constitucional>>; pero sí se elimina el <<sobreseimiento previo>> como causa de inadmisión establecido en el art. 54.3 del proyecto.

d) Por último aquellas otras enmiendas relativas a la resolución mediante sentencia.

Que sólo constara el otorgamiento o la desestimación del amparo, eliminándose por tanto el sobreseimiento (enmienda 203 del Grupo parlamentario Minoría Catalana y enmienda 275 del Grupo parlamentario Comunista) y cualquier otra adición más, como ocurría en el apartado c) del art. 57.

Otras enmiendas, a pesar de no tener predicamento en el texto que finalmente se aprobó, sí nos son de utilidad para conocer mejor cuál es la apreciación en torno a la intención del constituyente cuando elaboró el art. 53.2 CE, y cómo el Legislador introdujo ámbitos competenciales dentro del recurso de amparo que iban más allá de lo previsto constitucionalmente. Entre las mismas, cabe destacar, la enmienda número 118 presentada por el Grupo parlamentario Coalición Democrática; así como la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo parlamentario Andalucista, enmienda 218.

En cuanto a la primera, relativa a la regulación dada por el artículo 47.1 del proyecto, proponía la sustitución de su inciso final por <<una vez se haya agotado la vía judicial procedente>>. La justificación dada por tal enmienda era

“[E]liminar una referencia incorrecta a la Constitución, pues el artículo 53 no prescribe agotarse primero la vía judicial procedente. Por lo que no puede válidamente invocarse tal artículo de la Constitución, siendo significativo que no se haya citado ninguno de los tres apartados del artículo 53.

No entraremos en la cuestión de que el pronto remedio del agravio inferido puede quedar excesivamente aplazado, aunque sí echamos en falta que no se haya precisado el grado jerárquico de los Tribunales ordinarios que pueden conocer previamente

del recurso de amparo. En todo caso, es de suponer que la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, la sección 1ª del capítulo II y el artículo será específicamente regulada por el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad aludidos del artículo 53 [sic], en una ley”⁵⁰.

Respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo parlamentario Andalucista, mediante la que solicitan la devolución al Gobierno para que redacte un nuevo proyecto de ley, ya que el artículo 47 del proyecto impone la obligación de agotar la vía judicial previa antes de poder acudir al Tribunal en amparo, argumentando las siguientes razones para su devolución:

“La configuración del expresado recurso como una cuarta instancia, al que no se tiene acceso por parte de los ciudadanos sino tras haber obtenido sentencia desestimatoria previa ante el Tribunal Supremo de Justicia en la generalidad de los casos es absolutamente rechazable.

Son numerosas las razones que abundan en el indicado rechazo y de muy diversa índole.

Razones de justicia en primer término puesto que, si prosperara el proyecto tal y como se ha presentado, el amparo de la Constitución no se logrará por parte de los ciudadanos salvo que previamente haya realizado un dilatado peregrinaje jurídico por las más variadas instancias y jurisdicciones, las cuales, por otra parte, no son competentes para pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la resolución que se combate. De tal forma se dilata extraordinariamente en el tiempo la situación de hecho lesiva y, caso de que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) otorgase amparo, se trataría de rehacer una injusticia que ha perdurado excesivamente en el tiempo.

⁵⁰ SANTAMARÍA PASTOR: *Tribunal Constitucional. Trabajos parlamentarios. Op. cit.* Pág. 67-68.

Razones materiales en segundo lugar. En efecto, económicamente la configuración del recurso de amparo como una cuarta instancia acarreará cuantiosos gastos para los ciudadanos, puesto que tendrán que soportar para acceder al TC los elevados costes que por lo general genera el agotamiento previo de la jurisdicción ordinaria.

Cronológicamente, el acceso al TC se retrasa en exceso –hasta el agotamiento de la vía ordinaria, bien entendido- y ello puede perpetuar situaciones de inobservancia de preceptos constitucionales frente a las que los ciudadanos por razones de desánimo, tedio, retraso no llegan a reaccionar. En este sentido, la <<cuarta instancia constitucional>> aparece como una auténtica carrera de saltos y resistencia que en modo alguno ayudan a hacer accesible a la ciudadanía la justicia y el amparo de la Constitución.

Sustantivamente, por último, hay que afirmar que no parece razonable que el amparo constitucional requiera para su interposición el fallo previo de los jueces ordinarios, puesto que estos jueces, por razón de sus jurisdicción y competencia, no pueden entrar en cuestiones constitucionales y, en consecuencia, resulta absurdo hacer depender el ejercicio jurisdiccional de un derecho del pronunciamiento previo de un juez sobre extremos que ni se conectan directamente con las cuestiones de derecho constitucional ni constituirán la base del fallo del TC. La vía ordinaria y el amparo constitucional, por entender de cuestiones nítidamente diferenciadas, deben de mantener recíprocamente su independencia procesal. En el proyecto del Gobierno no es así, sino que el segundo se supedita al agotamiento de la primera. Por ello el Grupo firmante discrepa del principio en cuestión y solicita la devolución del PLOTTC para que su redacción se modifique en todo lo relativo al recurso de amparo constitucional especialmente, conforme a los siguientes principios:

I. Independencia entre recurso constitucional y vía ordinaria.

II. Determinación exacta y precisa de los casos de acceso al recurso de amparo.

III. Determinación exacta y precisa de los efectos recíprocos entre fallos de la jurisdicción ordinaria y fallos del TC⁵¹.

Como decimos, las anteriores enmiendas no fueron aceptadas pero sí manifiestan algo muy relevante y es que la previsión constitucional inserta en el artículo 53.2 CE no establecía el agotamiento previo de los procesos ante la jurisdicción ordinaria, siendo por tanto esto último una opción legislativa, en concreto, una decisión adoptada por el Gobierno ante las amplias posibilidades que le permitía la Constitución para configurar las competencias del Tribunal constitucional a través de su ley orgánica.

El dictamen elaborado por la Comisión Constitucional en el Congreso modificó el articulado del texto, recogándose ahora el recurso de amparo en los artículos 41 a 58. En cuanto a las cuestiones sustantivas, como hemos visto, la más importante es la eliminación del recurso de amparo contra leyes, respecto al resto de accesos al amparo se produce una mejora en la redacción y una mejor concordancia en relación a los pronunciamientos mediante sentencia⁵².

También es importante mencionar que se modificó la Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, para establecer -y sigue estableciendo- que “En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53, 2, de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales, se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53, 2, de la

⁵¹ SANTAMARÍA PASTOR: *Tribunal Constitucional. Trabajos parlamentarios. Op.cit* Pág. 100.

⁵² Dictamen de la Comisión Constitucional. BOCC, Núm. 44 II. 19 de julio de 1979. Págs. 152/58-152/62.

Constitución”⁵³. Por tanto, se especificó que la norma que debía desarrollarse lo era respecto al artículo

53.2 CE y no en relación al art. 53 CE y que, lo más importante, se añadió sendas vías de acceso al recurso de amparo: la primera, la contencioso-administrativa ordinaria y, la segunda, la establecida en la Sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Esto debía ser así hasta que no se desarrollara de manera efectiva el *procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria.

En cuanto a su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, nada hemos encontrado que pueda resultar reseñable en relación a la configuración del recurso de amparo, ya que los debates planteados ante la Cámara se centraron sobre todo en los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y en relación al recurso previo de inconstitucionalidad⁵⁴. Por tanto, procederemos al análisis de su tramitación en sede del Senado.

3º) *La tramitación en el Senado*

Tras la aprobación del texto por el Pleno del Congreso⁵⁵ se remitió al Senado, donde se abrió el plazo para la presentación de enmiendas al Proyecto de ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De las ciento veintiocho que se presentaron cabe destacar las interpuestas por el Grupo Parlamentario UCD a la regulación de los distintos *tipos* de amparo, en concreto, a los artículos 43, 44, 46 y, también, en relación al art. 55 del proyecto⁵⁶. En las primeras se proponía la eliminación del carácter de “previo” al proceso o procedimiento judicial anterior a la interposición del recurso de amparo, así

⁵³ Proyecto de Ley. BOCC, Núm. 44I. 24 de mayo de 1979. Pág. 150.

⁵⁴ Los debates en el Pleno del Congreso pueden ser consultados en BOCG. Sesión Plenaria Congreso de los Diputados, núm. 23 (extraordinaria), 23 de julio de 1979. Págs. 1194-1263 y BOCG. Sesión Plenaria Congreso de los Diputados, núm. 24 (extraordinaria), 24 de julio de 1979. Págs. 1266-1328.

⁵⁵ Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 24 (extraordinaria), 24 de julio de 1979.

⁵⁶ Enmiendas formuladas al texto en el Senado. BOCG, Serie II, núm. 21, de 21 de agosto de 1979. Enmiendas núm. 42 a 57.

como la eliminación de la referencia proceso “judicial correspondiente”⁵⁷. En concreto, respecto a la eliminación del “previo” del proceso judicial en el artículo 44.2 del proyecto, se argumenta para defender la enmienda presentada que “Al ser la redacción del proyecto idéntica a la del artículo 43,2 puede inducir a pensar en contra del sentido de este artículo, que en ese caso también es necesario el agotamiento de la vía prevista en el artículo 53.2 de la Constitución”. No obstante, tiene que ser un acto definitivo de un órgano o tribunal⁵⁸.

Es decir, se quería dejar de manera patente que la vía de acceso por lesiones o vulneraciones padecidas por acción u omisión de un órgano judicial no debía corresponderse con la vía establecida en el art. 53.2 CE, esto es, que si se producía una lesión debían agotarse las distintas instancias judiciales dentro del procedimiento en el que se habría producido la lesión del derecho fundamental. Por tanto, se quiere remarcar expresamente y dejar claro que el acceso al recurso de amparo no lo será por el procedimiento preferente y sumario recogido en la Constitución, sino por vía del agotamiento de las distintas instancias judiciales del procedimiento ordinario del que se tratara.

Por otro lado, se añadió en el Senado a través de enmienda, la posibilidad de que la Sala elevara al Pleno del Tribunal la cuestión sobre la constitucionalidad de la ley cuando, en el conocimiento previo de un recurso de amparo, se estimara que el origen de la lesión era la propia ley aplicada,

⁵⁷ Enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado. BOCG, Serie II, núm. 21, de 3 de septiembre de 1979. Así, por ejemplo, el artículo 43.3 del proyecto pasó de tener la siguiente redacción “El recurso sólo podrá fundarse en la infracción o errónea interpretación, producida en la decisión final de la vía judicial agotada, de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo”; a “El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme, de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo”. También el artículo 44.1c) del proyecto pasó de “Que se hubiese hecho invocación formal dentro del proceso judicial correspondiente del derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiera lugar para ello”; a “Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello”. También el párrafo segundo de ese artículo pasó de “El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial” a “El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial”. También se eliminó el carácter “previo” en la redacción de los arts. 46.1 b) y 49.2 b) del proyecto.

⁵⁸ En tal sentido es manifestado por el Senador del Grupo parlamentario UCD, Calatayud Maldonado, en la defensa en el Pleno del Dictamen emitido por la Comisión de Constitución del Senado. BOCG, Serie II, núm. 21, de 3 de septiembre de 1979. Pág. 472

añadiéndose así un segundo párrafo al artículo 55 del proyecto⁵⁹, tramitándose en el seno del Tribunal según lo previsto para las cuestiones de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. En tal sentido fueron admitidas tales enmiendas, procediéndose a aprobar el texto por el pleno del Senado y a su remisión al Congreso⁶⁰.

4º) Debate y aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados

Una vez remitido de nuevo el texto al Congreso, respecto a la regulación dada al recurso de amparo, sólo se presentaron turnos en contra a las enmiendas del Senado a los artículos 41 y 55.2 del proyecto, el resto del articulado fue aprobado tal y como fue modificado en el Senado⁶¹. Dichas intervenciones, que fueron rechazadas y por tanto aprobadas las modificaciones introducidas en el Senado, hacían referencia a la introducción en el texto del artículo 41, las lesiones producidas por <<disposiciones>> que, debido a su ambigüedad, podía entenderse que también cabía “disposiciones normativas” y no sólo administrativas⁶². Aunque, como decimos, finalmente quedó aprobada en la redacción proveniente del Senado⁶³. En cuanto a la introducción de la cuestión interna de inconstitucionalidad, art. 55.2, se tacha de “transgresión del espíritu con que se contemplaba el recurso de amparo en el proyecto de ley y, (...), una ampliación muy peligrosa que vuelve a ponernos ante el hecho de la inseguridad jurídica”⁶⁴. Aunque tampoco tuvo predicamento y, finalmente, se introdujo esa posibilidad de declarar inconstitucional una ley por vía de su previo conocimiento a través del amparo.

⁵⁹ Enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado. BOCG, Serie II, núm. 21, de 3 de septiembre de 1979. Art. 55.2 del proyecto: “En el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha ley en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes”.

⁶⁰ Sesión Plenaria Senado. BOCG, núm. 13, de 3 de septiembre de 1979. Págs. 462-485.

⁶¹ Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979.

⁶² Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979. Págs. 1762- 1764.

⁶³ Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979. Pág. 1764.

⁶⁴ Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979. Pág. 1765.

El texto fue finalmente aprobado por el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría⁶⁵, entrando en vigor días después la que ya sería la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional⁶⁶.

No obstante, no todos los Diputados dieron su voto favorable al texto aunque fueran minoría. Queremos hacer referencia en concreto a las palabras del portavoz del Grupo parlamentario Andalucista para exponer el porqué de su oposición al texto, entre otras cuestiones aducía que “Otro motivo ha sido el aspecto y la consideración que se le ha dado en esta ley, desde el proyecto incluso, al recurso de amparo que para nosotros ha quedado configurado en realidad como una cuarta instancia. Hubiéramos preferido que no fuera necesario agotar toda la vía jurisdiccional ordinaria antes de ejercitar el recurso de amparo. Al no ser así, es un motivo más para oponernos al conjunto del proyecto”⁶⁷.

Fue por tanto el Legislador quien dotó al recurso de amparo del carácter de *extraordinario y subsidiario* frente a todas aquellas vulneraciones de los derechos fundamentales y libertades que pudieran originarse en cualquier procedimiento judicial, bien porque no hubieran sido debidamente tutelados por la jurisdicción ordinaria, bien porque la lesión proviniese directamente de una acción u omisión por parte del órgano judicial. Es decir, el Legislador no sólo abrió la vía al recurso de amparo a aquellos procesos que se hubiesen instado a través del procedimiento *preferente y sumario*, sino que quiso abrirlo a *todos los procesos judiciales*, con independencia de la calificación que se les dotase, orden jurisdiccional que los conociese y la instancia judicial en la que se sustentase. Los recursos exentos de ese previo conocimiento por parte del Poder Judicial eran los establecidos en los arts. 42 y 45 LOTC, en el que se eliminaba por tanto el carácter *subsidiario* al no abrirse una vía de reparación o restitución del derecho ante la jurisdicción ordinaria, sino que tenía acceso directo al recurso de amparo. A diferencia de los tipos establecidos en el art. 43 y 44 LOTC, que necesariamente debían sustentarse ante la jurisdicción

⁶⁵ De los 285 votos emitidos; 249 lo fueron a favor; 25 en contra y 11 abstenciones. Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979. Pág. 1776.

⁶⁶ BOE, 5 de octubre de 1979, Núm. 239.

⁶⁷ Sesión Plenaria Congreso de los Diputados. BOCG, núm. 30, 19 de septiembre de 1979. Pág. 1777.

ordinaria, fuera a través del procedimiento preferente y sumario, fuera a través de procedimientos ordinarios y siendo necesario agotar las vías de impugnación previstas para reparar la lesión antes de poder acceder al Tribunal Constitucional mediante el amparo.

Ahora bien, la concreción de cuáles fueran los procedimientos judiciales que habría que agotar, así como ante el orden jurisdiccional que debía conocer de las lesiones y vulneraciones de los derechos fundamentales era una cuestión que no se deja zanjada por el Legislador orgánico, sino que se dejaba a expensas de una posterior regulación del procedimiento *preferente y sumario* establecido en el artículo 53.2 CE. Pues bien, ni tan siquiera con la previsión de la Disposición Transitoria Segunda quedaba determinada esta cuestión, ni cuáles han de ser tales procedimientos ordinarios.

Según nuestro parecer, el Legislador reguló el recurso de amparo con unas previsiones muchísimo más amplias que las determinadas en la Constitución, tanto es así, que no sólo el acceso va a producirse a través del procedimiento preferente y sumario, sino que se accederá por otras vías y procedimientos jurisdiccionales distintos aunque cuáles sean estos, como decimos, no se deja cerrado por la LOTC. Todo ello queda en cierta manera a expensas y en el aire hasta que no se produjese un desarrollo legislativo posterior que materializase la previsión constitucional establecida en el art. 53.2 CE, en relación al amparo del art. 43 LOTC, y, en relación a lo previsto en el art. 44 de la LOTC, que estableciesen los recursos y medios de impugnación ante la jurisdicción ordinaria para hacer valer el derecho fundamental que se considerase lesionado.

En definitiva, no debemos olvidar, que el constituyente no abrió el recurso de amparo a cualquier procedimiento judicial, sino sólo al procedimiento *preferente y sumario* establecido en la Constitución, (art. 53.2 CE) y que el desarrollo legislativo que relacionaba el recurso de amparo con la tutela ante la jurisdicción ordinaria se determinaba de manera muy amplia <<en los casos y formas que la ley establezca>>, pero no lo relacionaba con cualquier procedimiento judicial sino sólo con el *procedimiento preferente y*

sumario, pues es el único contemplado en el art. 53.2 CE, (art. 161.1 b) CE). Fue el Legislador orgánico, por tanto, quien abrió la vía del recurso de amparo a cualquier otro procedimiento ordinario o extraordinario que pudiera sustentarse ante la jurisdicción ordinaria. Si nos atenemos a lo expresamente delimitado por el constituyente, el recurso de amparo, en definitiva, tendría carácter único, el origen de la vulneración sería una disposición, acción u omisión, etc., proveniente de un poder público, principalmente, la Administración o el Poder Ejecutivo y su sustanciación previa, alternativa o complementaria ante la jurisdicción ordinaria lo sería a través de un único procedimiento que estaría dotado de las notas de *preferencia* y *sumariedad*. Cualquier otra regulación ampliatoria de la anterior será una opción legítima del Legislador pero, no debemos olvidar, que es una opción, una posibilidad de entre las muchas que el marco constitucional le permite.

Ahora bien, basándonos en los debates constituyentes y los debates suscitados en torno a la LOTC, debemos en primer lugar afirmar que no existe un solo *recurso de amparo* en un sentido unívoco como es tratado por el texto constitucional. Es decir, nos encontramos con varios recursos de amparo, pues cabe extraer de ellos importantes diferencias respecto al origen de la lesión o la vulneración, a si es necesario agotar una vía previa judicial o no, que además dependerá en determinadas circunstancias de que se trate de la vía previa expresamente prevista en la constitución –*preferente y sumaria*– o se trate de una vía judicial ordinaria en sus distintas instancias antes de poder acudir al recurso de amparo y, por último, que no en todos los recursos se va a disponer del mismo plazo para su interposición así como, tampoco, de la misma legitimación activa.

Por todo ello, es lícito que nos cuestionemos si todas esas modalidades de *amparo constitucional* son o no desarrollo de lo preceptuado en el texto constitucional, en concreto, de sus artículo 53.2, 161.1.b) y 162.1 b) CE, pues si bien podemos vislumbrar un desarrollo directo de los recursos de amparo contra actos del Poder Ejecutivo (art. 43 LOTC) y por vulneraciones del derecho a la objeción de conciencia (art. 45 LOTC); difícilmente podemos apreciar ese desarrollo cuando se trata del recurso de amparo contra

disposiciones del Poder Legislativo (art. 42 LOTC) o en relación al amparo por vulneraciones de los derechos como consecuencia de una acción u omisión por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria, (art. 44 LOTC). Por tanto, de todo lo anterior, nos asaltan serias dudas de que tales recursos de amparo sean desarrollo directo de lo contemplado en la Constitución o si, por el contrario, es una creación *ex novo* por el Legislador. Si se trata de un producto legislativo, debemos cuestionarnos si los mismos podrían tratarse de manera efectiva de un desarrollo directo del artículo 53.2 CE o si se trata de un supuesto distinto a los que pueda prever el citado artículo de la Constitución, que pueda tratarse, por ejemplo, de un desarrollo legislativo que la propia Constitución recoge, (art. 161.1 d) CE).

Cuestión distinta, aunque no menos importante, es que dichos amparos hayan acabado configurando el *concepto social y doctrinal* del recurso de amparo constitucional, que hace que su validez como desarrollo de la norma constitucional no derive de la propia norma que lo regula sino de la propia concepción social y doctrinal que del mismo se tiene. Difícilmente se podría deslindar a día de hoy del imaginario jurídico colectivo, transcurridos más de treinta y cinco años después de la entrada en vigor de la LOTC, que estos recursos de amparo de configuración legal no sean efectivamente un desarrollo directo de lo preceptuado en los arts. 53.2; 161.1.b) y 162.1 b) CE. Entre otras cosas porque a través de ellos se ha cumplido una función primordial de desarrollo, defensa y tutela de los derechos y libertades que no puede sino calificarse como de primer orden. Ahora bien, como veremos a continuación, también han supuesto –sobre todo el amparo regulado en el art. 44 LOTC- una fuente de conflictos y disfunciones entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, así como un desbordamiento del recurso de amparo como mecanismo de tutela, que ha llegado a ser objeto de sesudos debates no sólo efectuados por la doctrina constitucionalista, sino también por la administrativista y procesalista, que sin perder de vista la importante función que los *recursos de amparo* han supuesto para el desarrollo y eficacia normativa de nuestra Constitución , les ha llevado a plantear cuáles son esos puntos de *fricción y conflicto* para, al mismo tiempo, buscar y aportar las posibles soluciones a las mismas.

V.- LOS RECURSOS DE AMPARO EN LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

1º) Naturaleza Jurídica del recurso de amparo.

Una de las cuestiones debatidas por la doctrina giraba en torno a la naturaleza procesal del recurso de amparo. Si el recurso de amparo en relación al previo conocimiento por la jurisdicción ordinaria, se trataba de un proceso autónomo al anterior o, si por el contrario, se trataba de un verdadero recurso⁶⁸. La cuestión planteada entonces no era fútil, pues dicha diferenciación establecería la capacidad y alcance respecto al conocimiento por parte del Tribunal Constitucional. Por un lado, si es un proceso autónomo no está vinculado por la actuación judicial precedente mientras que, si se trataba de un recurso, su función debía centrarse en la concreta actuación judicial, esto es, a la interpretación y aplicación del Derecho efectuada por el juzgador de instancia. Dependiendo del carácter o naturaleza que le era atribuido se consideraría sometido o no al marco establecido por la jurisdicción ordinaria, es decir, a la relación fáctica, a la valoración de la prueba practicada, así como a la fundamentación jurídica necesaria para la emisión de la correspondiente resolución. Limitando, por tanto, la capacidad de actuación del Tribunal que solo podría entrar a valorar si la actuación llevada a cabo por

⁶⁸ Así, entre otros, lo expresaba GIMENO SENDRA, distinguiendo entre los distintos recursos de amparo. Así, en relación al “amparo parlamentario” y al de “objeción de conciencia”, planteaban problema en relación a estas cuestiones, ya que el amparo será directamente conocido y sustanciado ante el TC, la única “pega” que ve es que se llame “recurso”, cuando el TC conoce en primera y única instancia, es “técnicamente incorrecta”. GIMENO SENDRA, J.V.: “Naturaleza jurídica y objeto procesal del recurso de amparo”. (1982). REDC, Año nº 2, Nº 6, 1982, págs. 49-50.

En relación a las violaciones de derechos acometidas por el Poder Ejecutivo. “Distinta es la naturaleza del recurso de amparo contra las disposiciones, actos y vías de hecho emanadas del Poder Ejecutivo.” Cuando se haya agotado la vía jurisdiccional precedente “la cual no ha de ser otra sino el proceso contencioso- administrativo ordinario o el denominado proceso preferente y sumario del artículo 53, 2.º, de la Constitución (disposición transitoria 2.a, 2.º, LOTC).” En relación al procedimiento contencioso-administrativo regulado en la Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona y la LJC y el posterior recurso de amparo ante el TC, dice el autor: “Así, pues, no existen dos pretensiones de amparo diferentes, sino una misma pretensión constitucional que normalmente ha de atravesar dos instancias para llegar al Tribunal Constitucional, quien ha de conocer de la misma en tercera y última instancia, aunque en supuestos especiales pueda ser deducida la pretensión en segunda instancia.”. GIMENO SENDRA. “*Naturaleza jurídica y objeto procesal...*”. Op.cit. Págs. 54 y 59.

el juzgador de instancia había producido, o no, una vulneración del concreto derecho fundamental que se alegaba en la demanda de amparo. No obstante, ya en sus primeras resoluciones vino el Tribunal Constitucional a circunscribir el marco de actuación propio del recurso de amparo.

Está configurado el amparo constitucional como un medio último y subsidiario de garantía (STC 17/1982 de 30 abril. F.J. 6º). El recurso de amparo no es una nueva instancia en la que se puede revisar, con carácter general, la legalidad aplicada por la resolución recurrida, dado que su objeto se circunscribe a la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas incluidos en su ámbito, por lo que, en definitiva, las cuestiones de legalidad sólo pueden ser examinadas por el Tribunal en cuanto afecten a tales libertades y derechos (STC 108/1984 de 26 noviembre. F.J 3º). El recurso de amparo no es, con carácter general, una primera instancia, por lo que la previa invocación sólo es inexigible cuando la pretendida vulneración se produce en una resolución contra la que no cabe recurso alguno (STC 138/1985 de 18 octubre.FJ 3º). Es necesario cumplir con el requisito de haberse invocado en el proceso los derechos fundamentales que se estiman vulnerados tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiera lugar para ello (arts. 50.1, b), en conexión con el 44.1, c), de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). De no llegarse a esta conclusión, se desnaturalizaría el carácter subsidiario del recurso de amparo para convertirlo en una primera instancia, sin que el principio *pro actione* pueda llegar a tal extremo que suponga una inobservancia por el Tribunal de su propia Ley Orgánica. (STC 34/1986 de 21 febrero. F.J.1º). Teniendo en cuenta que la exigencia de invocación del derecho fundamental afectado en la vía previa no es una exigencia que obedezca únicamente a motivos formales, sino al carácter subsidiario del propio recurso de amparo, que no debe ser interpuesto sino ante la inactividad de los Tribunales ordinarios para guardar la aplicación de la Constitución. (STC 38/1986 de 21 marzo).

2º) El objeto del recurso de amparo: derechos y libertades fundamentales.

Como hemos visto, la Constitución determina que pueden ser objeto del recurso de amparo los artículos 14 a 29 de la Constitución y, también, el derecho a la objeción de conciencia establecido en el artículo 30.2 CE, según se desprende del artículo 53.2 CE. Ha sido ese el ámbito de protección que ha recogido la LOTC⁶⁹. Quedarán fuera del conocimiento del Tribunal Constitucional todas aquellas vulneraciones de derechos que no se encuentren entre los expresamente recogidos tanto en la norma fundamental como por la Ley Orgánica⁷⁰, siendo lo contrario causa de inadmisión del recurso⁷¹.

⁶⁹ Como bien sabemos, el alcance y límites de lo preceptuado por los artículos 53.2 y 161.1. b) CE ha sido objeto de análisis y debates por parte de la doctrina desde la aprobación misma de la Constitución hasta nuestros días. Entre otros:

GARCÍA RUIZ, J.L.: *El recurso de amparo en el derecho español*. Editora Nacional. Madrid, 1980.

DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T.: *El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares*. Ed. Civitas. Madrid, 1981.

GIMENO SENDRA, J.V.: "Naturaleza jurídica y objeto procesal del recurso de amparo". *REDC*. Año nº 2, Nº 6, 1982.

CANO MATA, A.: *El recurso de amparo: (doctrina del Tribunal Constitucional)*. EDERSA. Madrid, 1983.

CASCAJO CASTRO, J.L. Y GIMENO SENDRA, J. V.: *El recurso de amparo*. Tecnos. Madrid, 1984.

OLIVER ARAUJO, J.: *El recurso de amparo*. Palma de Mallorca: Facultad de Derecho. Mallorca, 1986.

ARAGÓN REYES, M.: "El recurso de amparo". *Anales de estudios económicos y empresariales*, Nº 2, 1987, pags. 247-260.

CASTILLO RIGABERT, F.: *La admisión del recurso de amparo*. Universidad de Murcia. Murcia, 1991. FERNÁNDEZ FARRERES, G.J.: *El recurso de amparo según la jurisprudencia constitucional: comentarios al título III de la LOTC*. Marcial Pons. Madrid, 1994.

FIGUERUELO BURRIEZA, A.: "El recurso de amparo en cuanto tutela reforzada de los derechos fundamentales". *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, Nº 6, 1994, pags. 43- 57.

PÉREZ TREMPES, P.: "La naturaleza del recurso de amparo y su configuración procesal". *Constitución y derecho público: estudios en homenaje a Santiago Varela*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1995.

⁷⁰ No obstante, el Tribunal ha insertado derechos no expresamente contemplados en los derechos susceptibles de ser recurridos en amparo. Ejemplo paradigmático de lo que decimos es el derecho al juez imparcial, que aun no previéndose en el texto constitucional, el constituyente no lo inserto dentro de las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Por ello, el Tribunal entendió que tal derecho, aunque no se cite de forma expresa, ha de entenderse inserto en él. (STC 145/1988, de 12 de julio. F.J. 5º).

⁷¹ ATC 379/1986 de 23 abril. F.J. 2º. "El recurso de amparo que instituye el art. 161 de la Constitución y que regulan los arts. 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene por objeto la salvaguardia de unos concretos derechos fundamentales y libertades públicas, que son como dice el art.

53.2 de la Constitución, los reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del capítulo segundo. Y a este cometido debe limitarse la Jurisdicción constitucional para no invadir áreas que la Constitución confía de modo concreto a los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial a quienes el art. 117.3 otorga la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. Lo anterior quiere decir que no compete en absoluto a este Tribunal adoptar medidas preventivas o de corrección de eventuales violaciones de las normas contenidas en el derecho objetivo o de las interpretaciones que de las mismas se puedan hacer, sino exclusivamente restaurar los mentados derechos de los ciudadanos cuando han sido violados. Por la razón antedicha, en el

No obstante, como vimos, y vinculado a la determinación de su conexión respecto al procedimiento preferente y sumario, la interpretación de qué derechos y libertades podían ser objeto del recurso de amparo se dejaba finalmente en manos del Legislador orgánico, ya que otras interpretaciones del alcance del concepto jurídico indeterminado <<y, en su caso>> podrían haber dado lugar a una limitación o eliminación de determinados derechos del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El hecho de que el Legislador estableciese ambos mecanismos y, en concreto, el amparo como subsidiario del previo o anterior ante la jurisdicción ordinaria, determinó que todos los derechos y libertades establecidos en el art. 53.2 CE pudieran ser conocidos por una y otra jurisdicción. Otra interpretación podría haber dado lugar, por ejemplo, a que unos determinados derechos sólo pudieran ser conocidos ante la jurisdicción ordinaria, mientras que el resto u otros sólo ante la jurisdicción constitucional a través del amparo, tal y como hemos tenido ocasión de analizar en páginas anteriores. Pero como hemos visto, esto no fue así, pues el Legislador determinó que todos aquellos derechos que establecía el artículo 53.2 CE podían ser conocidos a través del amparo, determinándose así en el artículo 41 LOTC.

No obstante, y a pesar de lo anterior, el Tribunal Constitucional por vía interpretativa y por conexión respecto a los anteriores derechos fundamentales, ha extendido el alcance del amparo a otros preceptos constitucionales que se encuentran *extramuros* de la anterior enumeración pero que, sin embargo, a través de la labor interpretativa y debido a una íntima conexión respecto a alguno de los que sí se encuentran contemplados, ha procedido a engrosar el objeto de tutela a través del amparo. En tal sentido,

proveído de 5 de marzo pasado propusimos, en primer lugar, la causa de inadmisión regulada en el art. 50.2,

a) de la Ley Orgánica del Tribunal por deducirse la demanda sobre derechos no susceptibles de amparo. Y en el momento actual hay que reconocer que tal causa se encontraba justificada, en la medida en que en el escrito de recurso se comenzaba diciendo (...) que las sentencias condenatorias dictadas (...) infringían preceptos constitucionales y entre ellos de manera concreta el art. 9.3 de la Constitución y el principio de la seguridad jurídica; precepto constitucional este que, según lo que antes hemos dicho, no puede dar lugar a un recurso de amparo y hacer aplicable en este concreto apartado la causa de inadmisión del art. 50.2, a)”.

puede señalarse, la remisión al contenido artículo 24 CE, de garantías procesales establecidas fuera del Título I CE, como son, la publicidad de las actuaciones judiciales⁷²; la motivación de las sentencias⁷³ o sobre la gratuidad de la justicia⁷⁴.

Pero también, *sensu contrario*, el Tribunal Constitucional ha entendido que no todos los artículos que en principio pueden ser objeto de recurso de amparo contienen o regulan de facto derechos o libertades, por tanto, tales vertientes o facetas son rechazadas por el Tribunal como susceptibles de ser objeto del recurso de amparo; como son el deber de colaboración del Estado con la Iglesia Católica (art. 16.3 CE)⁷⁵, los principios relativos al sistema penitenciario y punitivo (art. 25.2 CE)⁷⁶ y algunos de los contenidos relativos al derecho a la educación (art. 27 CE)⁷⁷.

Con las salvedades vistas, desde la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional los derechos susceptibles de amparo son, única y exclusivamente, aquellos que determina el precitado artículo. No pudiendo ser de otra manera ya que ese es el ámbito de actuación que determinan los artículos 53.2 y 161.1 b) de nuestra Constitución. Quedarán fuera del conocimiento del Tribunal Constitucional todas aquellas vulneraciones de derechos que no se encuentren entre los expresamente recogidos tanto en la norma fundamental como por la Ley Orgánica⁷⁸, siendo lo contrario causa de inadmisión del recurso⁷⁹.

⁷² STC 30/1982, de 1 de junio.

⁷³ STC 116/1986, de 8 de octubre.

⁷⁴ STC 138/1988, de 4 de mayo.

⁷⁵ STC 93/1983, de 8 de noviembre.

⁷⁶ STC 81/1997, de 22 de abril.

⁷⁷ STC 86/1985, de 10 de julio.

⁷⁸ No obstante, el Tribunal ha insertado derechos no expresamente contemplados en los derechos susceptibles de ser recurridos en amparo. Ejemplo paradigmático de lo que decimos es el derecho al juez imparcial, que aun no previéndose en el texto constitucional, el constituyente no lo inserto dentro de las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Por ello, el Tribunal entendió que tal derecho, aunque no se cite de forma expresa, ha de entenderse inserto en él. (STC 145/1988, de 12 de julio. F.J. 5º).

⁷⁹ ATC 379/1986 de 23 abril. F.J. 2º. "El recurso de amparo que instituye el art. 161 de la Constitución y que regulan los arts. 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene por objeto la salvaguarda de unos concretos derechos fundamentales y libertades públicas, que son como dice el art.

53.2 de la Constitución, los reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del capítulo segundo. Y a este cometido debe limitarse la Jurisdicción constitucional para no invadir áreas que la Constitución confía de modo concreto a los Jueces y Tribunales integrantes del Poder

3º) Actos recurribles.

El artículo 41.2 de la LOTC establece que *“El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta Ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes”*.

Dicha amplitud ha planteado dudas en relación a los *actos* como a la noción de *poderes públicos*. Como bien sintetiza el Profesor PÉREZ TREMPs⁸⁰ se han planteado cuestiones ante el Tribunal que han tenido que ser dilucidadas al albur de lo preceptuado en el art. 41.2 LOTC. Tales como que en la producción de la lesión concurren elementos *públicos y privados*⁸¹; que la lesión se produzca por parte de un *órgano o poder público extranjero* pero repercuta de manera interna en nuestro Estado⁸²; que la vulneración sea provocada por un *particular*⁸³ y no por un *poder público* o que la lesión no provenga de un acto de aplicación de una *disposición general* sino que ella misma sea el origen de la vulneración⁸⁴. Esto es, difícilmente la regulación va a poder contemplar todos los supuestos

Judicial a quienes el art. 117.3 otorga la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. Lo anterior quiere decir que no compete en absoluto a este Tribunal adoptar medidas preventivas o de corrección de eventuales violaciones de las normas contenidas en el derecho objetivo o de las interpretaciones que de las mismas se puedan hacer, sino exclusivamente restaurar los mentados derechos de los ciudadanos cuando han sido violados. Por la razón antedicha, en el proveído de 5 de marzo pasado propusimos, en primer lugar, la causa de inadmisión regulada en el art. 50.2,

a) de la Ley Orgánica del Tribunal por deducirse la demanda sobre derechos no susceptibles de amparo. Y en el momento actual hay que reconocer que tal causa se encontraba justificada, en la medida en que en el escrito de recurso se comenzaba diciendo (...) que las sentencias condenatorias dictadas (...) infringían preceptos constitucionales y entre ellos de manera concreta el art. 9.3 de la Constitución y el principio de la seguridad jurídica; precepto constitucional este que, según lo que antes hemos dicho, no puede dar lugar a un recurso de amparo y hacer aplicable en este concreto apartado la causa de inadmisión del art. 50.2, a)”.
⁸⁰ PÉREZ TREMPs, P. *Sistema de Justicia Constitucional*. Thompson Reuters. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2010. Págs. 111 a 115.

⁸¹ PÉREZ TREMPs. *Sistema de Justicia Constitucional*. Op.cit. Págs. 111-112.
⁸² PÉREZ TREMPs, *Sistema de Justicia Constitucional*. Op.cit. Págs. 112-113.

⁸³ PÉREZ TREMPs, *Sistema de Justicia Constitucional*. Op.cit. Pág. 113.
⁸⁴ PÉREZ TREMPs, *Sistema de Justicia Constitucional*. Op.cit. Págs. 114-115.

posibles, no obstante, el Tribunal por vía interpretativa ha ido salvando todas aquellas cuestiones que, como las anteriores, le han sido planteadas.

4º) Recursos de amparo y clases de lesiones o vulneraciones.

Como hemos visto, el Legislador dotó de gran amplitud al recurso de amparo que, desde nuestro punto de vista, no se trataría del *recurso de amparo* sino que debemos hablar de los *recursos de amparo*⁸⁵, pues con la aprobación de la LOTC el recurso de amparo pierde su carácter unitario⁸⁶. Como hemos tenido ocasión de ver, su regulación y articulación respecto a su conocimiento previo por parte de la jurisdicción ordinaria, o no, hará que estemos ante distintos recursos de amparo con características propias que no pueden analizarse desde una sola óptica o perspectiva, sino que su regulación los hace diferenciables en base al poder público al que se le imputa la lesión, los legitimados o incluso el plazo para interponer el mismo, todo ello hace que no podamos hablar de un recurso de amparo, sino de distintos recursos de amparo.

Ahora, más allá de lo anterior, la LOTC como decimos recogió con gran extensión el amparo constitucional, pudiendo ser sustanciado ante él cualquier lesión proveniente de cualquier poder público, ya fuera el legislativo, el Ejecutivo o el judicial, así como cualquier poder público proveniente de cualquier ámbito territorial, ya fuera, estatal, autonómico o local. Determinándose así, con sus respectivas particularidades, en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la LOTC.

En cuanto a las lesiones del Poder Legislativo (art. 42 LOTC), tal y como vimos, se excluyó expresamente la vía del amparo contra leyes o normas y disposiciones con fuerza de ley, por tanto, el objeto del recurso de amparo son todas aquellas decisiones o *actos sin valor de ley* que vulneren derechos fundamentales, emanados en el seno de alguna de las Cámaras Legislativas,

⁸⁵ OLIVER ARAUJO. J.: "El recurso de amparo frente a actos y omisiones judiciales". *Revista de Estudios Políticos*. Núm. 120, abril-junio, 2003. Pág. 79.

⁸⁶ CASTILLO RIGABERT, F.: *La admisión del recurso de amparo...* *Op.cit.* Pág. 71.

ya sea de las Cortes Generales o de los Parlamentos Autonómicos o de sus respectivos órganos. No cabe, por tanto, recursos de amparo contra *leyes o normas con fuerza y rango de ley*⁸⁷. La LOTC estableció el plazo de tres meses para su interposición cuando la resolución lesiva del derecho fundamental haya devenido firme en base a la normativa interna de la Cámara.

También cabe destacar, en relación a este *subtipo*, que es el único supuesto en el que, junto con el recurso de amparo del artículo 45 LOTC, no será necesario concurrir a la vía judicial de manera previa a la interposición del recurso de amparo, debido al *principio de autonomía parlamentaria*⁸⁸. Aunque sí se deberán agotar los mecanismos y recursos internos existentes en sede parlamentaria de manera previa a la interposición del recurso de amparo, conllevando su inadmisión si no se utilizan los medios para hacer valer los derechos fundamentales que recojan las normas reguladoras de las Cámaras correspondientes⁸⁹.

No serán objeto de esta regulación específica los actos que afecten a materias propias de administración y personal de las Cámaras, al tratarse de actos de carácter administrativo, estos se dilucidarán en la jurisdicción correspondiente y, una vez agotada la vía judicial, se podría acudir al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Por tanto, este último supuesto no se corresponde con el denominado *amparo parlamentario*, sino con el

⁸⁷ Como bien sabemos, el conocimiento de la posible inconstitucionalidad de leyes o normas con fuerza y rango de ley se dilucidará ante el Tribunal Constitucional a través del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Ello sin perjuicio de la denominada autocuestión de inconstitucionalidad que veremos más adelante y cuyo planteamiento se originaría a través de la interposición de un recurso de amparo. También el Tribunal ha venido a controlar la constitucionalidad de los Reglamentos a través de este procedimiento, determinando que el control de legalidad sobre los mismos le corresponde a los órganos del Poder Judicial pero, si la lesión que se denuncia se deriva directamente de la norma reglamentaria, corresponderá al Tribunal examinarla y pronunciarse sobre la misma. STC 144/1991, de 1 de julio.

⁸⁸ “La explicación de este <<paso directo>> al TC en el caso del art. 42 es clara en tanto que es impensable la revisión jurisdiccional ordinaria de los actos de los legislativos pues repele a una estructura organizativa basada en la <<división de poderes>>. Pero en el caso del artículo 45, en actos en relación con la objeción de conciencia, no está tan claro, a no ser por la propia delicadeza de esta materia en nuestra circunstancia histórica actual”. DE ALFONSO BOZZO, A.: “Las funciones del recurso de amparo constitucional”. *Revista jurídica de Catalunya*. Vol. 82, Nº 3, 1983. Pág. 685.

Sobre el concepto y alcance de la denominada autonomía parlamentaria: SSTC 234/2000, de 3 de octubre; 97/2002, de 25 de abril; 226/2004, de 29 de noviembre. AATC 614/1988, de 23 de mayo; 52/1994, de 16 de febrero; 9/1998, de 12 de enero, entre otras.

⁸⁹ STC 33/2010, de 19 de julio de 2010.

siguiente *subtipo* que analizaremos, es decir, el denominado “*recurso de amparo contra actos de la administración*”⁹⁰.

La mayor parte de los recursos de amparo denominados *parlamentarios*, que han sido objeto de conocimiento por parte del Tribunal, versan sobre posibles vulneraciones de los derechos de participación recogidos en el artículo 23 CE⁹¹, aunque también pueden verse conculcados otros derechos fundamentales⁹², cuando diputados y parlamentarios han entendido que las resoluciones de los órganos de las Cámaras conculcaban otros de sus derechos fundamentales. También, aunque en menor medida y casi rozando lo anecdótico, existen otros supuestos en los que los demandantes de amparo no ostentan la condición de parlamentarios pero cuyos derechos se han visto afectados por resoluciones sin valor de ley, emanados por las Cámaras Legislativas. Como ejemplo, el recurso de amparo que puedan interponer los ciudadanos promotores de una Iniciativa Legislativa Popular frente a su inadmisión por parte de la Mesa Parlamentaria⁹³, pues la L.O. 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, recoge la posibilidad de los promotores de la iniciativa de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de Ley, (art. 6. LOILP). También debido el rechazo

⁹⁰ ATC 296/1985, 1985, de 8 de mayo. F.J.1º.

⁹¹ Entre las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el denominado amparo parlamentario pueden consultarse las siguientes SSTC 27, 28 y 29/2011, de 14 de marzo.

⁹² En el que la demandante de amparo alegaba la conculcación de los derechos recogidos en el art. 25.1 y 24.1, además del art. 23 de la CE, aunque finalmente su demanda fue desestimada. STC 192/2011, de 12 de diciembre de 2011.

⁹³ Este un subtipo de recurso de amparo que se encuentra regulado fuera de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; concretamente en la Ley Orgánica 3/1984, de 28 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Su artículo 6.1. establece que “Contra la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de Ley, la Comisión Promotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo, que se tramitará de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”. Es decir, remite al Título dedicado al recurso de amparo constitucional, sin referenciar, de manera expresa, los preceptos de la misma que le serían aplicable o en cuál subtipo debería encuadrarse. No obstante, entendemos que al tratarse de un recurso contra un acto sin valor de ley emanado por una Cámara Legislativa, debe encuadrarse dentro del supuesto establecido en el Art. 42 LOTC, con lo cual el demandante de amparo dispondrá de un plazo de tres meses para la interposición de su recurso. ATC 304/1996, de 28 de octubre.

injustificado de peticiones dirigidas a las Cámaras, en ejercicio del derecho de petición recogido en el art. 29.1 CE⁹⁴.

Respecto a las lesiones provenientes del Poder Ejecutivo, (art. 43 LOTC), el Legislador determinó que cabía la interposición del recurso de amparo contra un amplio espectro de actividad de dicho Poder, pues alcanza tanto a las disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho que sean lesivas de los derechos fundamentales y no sólo frente a la actuación, disposiciones o vía de hecho del Gobierno o de los órganos colegiados Ejecutivos de las Comunidades autónomas, sino también de sus respectivas autoridades, funcionarios o agentes. El plazo para la interposición del recurso de amparo será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

Pues bien, en cuanto al *previo proceso judicial* el Legislador no precisa si éste se refiere al *procedimiento preferente y sumario* que recoge el art. 53.2 CE o, si ese procedimiento es el establecido por la Disposición transitoria segunda que indica que “En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53. 2 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-

⁹⁴ Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Recoge en su artículo 12, la protección jurisdiccional frente al posible incumplimiento de las obligaciones que con respecto al derecho de petición posee la Administración.

“El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- a. La declaración de inadmisibilidad de la petición.
 - b. La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
 - c. La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.”
- Como puede comprarse las vías de tutela son amplias, pues podrá acudir al procedimiento preferente y sumario establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e incluso aquellas otras acciones que se estimen convenientes y, subsidiariamente, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. A diferencia de la regulación en materia de Iniciativa Legislativa Popular que sólo contempla el recurso de amparo como mecanismo de tutela. Pero, entendemos, en relación a éste último, que no podría ser de otra manera al tratarse de una resolución emanada por los órganos de las Cámaras Legislativas y no de cualesquiera otras administraciones. Pero el recurso de amparo en relación al derecho de petición dependerá del poder público al que se dirija. En relación al derecho de petición ejercido ante las Cámaras Legislativas, véase STC 108/2011, de 20 de junio de 2011.

administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53. 2 de la Constitución". Y tampoco deja cerrado si el conocimiento a través de ese proceso previo lo es en única instancia o si es necesario agotar los recursos ordinarios o extraordinarios que existiesen antes de poder concurrir a la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En cuanto a las lesiones provenientes del Poder Judicial, (art. 44 LOTC), en este la vulneración ha de tener su *origen inmediato y directo en una acción u omisión de un órgano judicial*. No obstante, para que pueda acceder al amparo ha de cumplirse con una serie de requisitos: en primer lugar, que se hubieran agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. En segundo lugar, que la violación del derecho o libertad fuera imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se produjeron acerca de los, que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. En tercer y último lugar, que se hubiese invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello. En cuanto al plazo para la interposición, al igual que el recurso de amparo contra actos del Poder Ejecutivo, el Legislador lo determinó en veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

Ahora bien, tampoco aquí cierra el Legislador cuál es esa *vía judicial*, ni cuáles habían de entenderse como *recursos utilizables*. Esa amplitud e indefinición conllevó una gran actividad doctrinal para intentar determinar el contenido concreto que debía atribuírsele. Así, por un lado se planteaba si esa vía previa era la prevista en el artículo 53.2 CE, es decir, si frente a la vulneración debía iniciarse un procedimiento distinto al que lo originó y circunscrito al determinado como *procedimiento preferente y sumario* o si, por el contrario, se debía de entender que la *vía judicial* era la propia en la que se produjo la vulneración del derecho, con lo

cual la persona lesionada en su derecho debía agotar todos aquellos recursos ordinarios y extraordinarios que existían en el orden jurisdiccional y respecto al concreto proceso en el que se produjo la lesión del derecho⁹⁵.

Si bien, este subtipo de recurso incluye dos modalidades distintas, como bien referencia el profesor PEREZ ROYO⁹⁶. La primera de ellas, que la vulneración tenga su origen directo en la actuación –acción u omisión- del órgano judicial durante el curso del proceso. La segunda de ellas, que el procedimiento se inicie por conculcación de derechos fundamentales entre particulares y el órgano judicial no de una debida protección frente a la lesión. Respecto a esta última, el recurso de amparo se dirigirá contra las resoluciones judiciales que no restituyeron debidamente el derecho fundamental vulnerado.

Por último, el recurso de amparo contra las violaciones del derecho a la objeción de conciencia (art. 45 LOTC), sólo podría interponerse cuando fuera ejecutiva la resolución que imponía la obligación de prestar el servicio militar. El plazo para interponer el recurso de amparo era de veinte días desde su notificación. Este es el único recurso de amparo que en la actualidad está totalmente derogado por *L.O. 8/1984, 26 diciembre, por la que se regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se deroga el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional*.

Aunque no está expresamente recogido y regulado en la LOTC, existe un quinto subtipo de recurso de amparo que es el denominado <<amparo mixto>>. Este subtipo conjugará una inicial vulneración de derechos fundamentales por parte de la administración o del Poder Ejecutivo junto con una distinta y posterior vulneración de derechos por parte del órgano judicial.

⁹⁵ GARCÍA MANZANO, P.: “Las vías judiciales previas al recurso de amparo constitucional”. *El Tribunal Constitucional*. Volumen II. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981. Pág. 1167-1168.

⁹⁶ PEREZ ROYO, J. *Curso de Derecho Constitucional*. Marcial Pons, Madrid. 2012. Págs. 464 y 465.

Estaríamos ante dos vulneraciones de derechos fundamentales distintas por dos poderes públicos distintos. Por tanto, no podría inicialmente subsumirse ni en el *subtipo* del artículo 43 LOTC, ni en el *subtipo* del art. 44 LOTC, al tratarse de una conjunción de ambos. El subtipo “*amparo mixto*” es una creación jurisprudencial del propio Tribunal ya que, como podemos comprobar, no existe como tal en el articulado de la Ley. Pero, como hemos comprobado, no se trataría de un amparo frente a un acto de la Administración, ni un amparo contra un acto del Poder Judicial, sino que se trata de ambos supuestos.

*"Sin embargo, puede suceder que además de la lesión provocada por la Administración, el recurrente alegue una nueva lesión provocada por el Poder Judicial. En este caso estaremos ante un amparo mixto"*⁹⁷.

Además, existen otros *subtipos* o *tipos* de recurso de amparo que no están regulados en la LOTC, encontrándose su regulación en otras leyes orgánicas. Principalmente y el que tiene mayor peso –al menos en número- es el denominado *amparo electoral*, regidos por la Ley Orgánica 5/1989, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Que contempla en sus artículos 49 y 114, la posibilidad de interposición de recurso de amparo en relación a la proclamación de candidaturas y de candidatos y en relación a candidatos electos, respectivamente. Otro supuesto, relativamente reciente y no menos importante, son aquellos recursos de amparo que pueden interponerse contra las Sentencias dictadas por la Sala especial del Tribunal Supremo –Sala del 61- mediante la que se declare la ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución. Contra dicha resolución del Tribunal Supremo sólo cabrá el correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional⁹⁸.

5º) Legitimación y partes.

Como vimos, una de las pocas cuestiones que si vienen recogidas en la Constitución en relación al recurso de amparo es la legitimación para

⁹⁷ Véase, ATC 51/2010, FJ 2; entre otras muchas resoluciones del Tribunal Constitucional.

⁹⁸ Art. 11.7 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

interponer el mismo. Así, y como dijimos, el artículo 162.1 letra b) de la CE reconoce dicha legitimación para interponer el recurso de amparo a “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal”.

Por otro lado, la LOTC al reconocer varios tipos o recursos de amparo no se limita a reproducir la anterior regulación, sino que será necesario acudir a cada tipo de recurso para determinar en cada caso dicha legitimación, es decir, dependerá de órgano que haya producido o provocado la vulneración la que nos indicará los legitimados para acudir en amparo respecto a cada una de las vías. Mientras que respecto a los recursos previstos en los arts. 42 y 45 LOTC, lo será la persona directamente afectada y/o, en su caso, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Respecto a los recursos establecidos en los artículos 43 y 44 LOTC, estará legitimado quien haya sido parte en el proceso judicial previo, sean personas físicas o jurídicas, e incluso en determinadas circunstancias las personas jurídico públicas o, sin haberlo sido, invoque un interés legítimo cuando no hubiese sido parte o no pudiera haberlo sido, y además el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Además el Legislador estableció de manera muy amplia los actos y los poderes públicos que pueden vulnerar los derechos y libertades que, en última instancia, podrá accionarse en amparo ante el Tribunal Constitucional. De esta manera tan amplia, tanto en relación a los poderes públicos como en relación a las actuaciones, es recogido por el artículo 41 LOTC que determina que el amparo protege a todos los ciudadanos frente a violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Pues bien, en principio, de dicha regulación se desprende que sólo serán tutelables en amparo aquellas lesiones o vulneraciones producidas por los poderes públicos descartándose por tanto del conocimiento a través del recurso de amparo aquellas lesiones que pudieran producirse por los particulares. Esto ha sido así hasta que, por vía interpretativa, el Tribunal Constitucional declaró que la

lesión o vulneración era imputable a los poderes públicos, principalmente los órganos de la jurisdicción ordinaria, cuando en el conocimiento de la misma no han procedido a reparar o corregir la lesión producida por un particular a otro, por tanto, esa falta de corrección o restitución será imputable al poder público que se trate y, por tanto, tendrá acceso en última instancia al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional⁹⁹. Es decir, sólo cuando el particular no obtenga resarcimiento respecto a la lesión provocada por otro particular en sede de jurisdicción ordinaria podrá acudir a la vía de amparo mediante la interpretación artificiosa de imputar la vulneración al juzgador de instancia que no procedió a su tutela.

La Constitución prevé y establece en su articulado la legitimación para la interposición del recurso de amparo, no sólo en aquellos artículos que regulan las competencias y atribuciones del Tribunal, sino que también en la propia regulación del recurso de amparo como garantía de los derechos fundamentales. Dicha regulación fue objeto de interpretación por el Tribunal, ya que mientras que por un lado se legitimaba a cualquier “*ciudadano*” (art. 53.2 CE), con las consecuencias de delimitación y limitación que dicho concepto jurídico conllevaba, por otro lado, la Constitución establecía ampliamente la legitimación activa para su interposición a “*toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo*” (Art.162.1 b) CE). Pues bien, como decimos, el Tribunal Constitucional de manera muy temprana solventó las posibilidades interpretativas que se derivaban de ambos preceptos, determinando que no puede realizarse una interpretación aislada del Art. 53.2 CE que limite la legitimación para accionar en amparo¹⁰⁰.

Si bien la regulación específica que en el caso de los *amparos parlamentarios* lo será la persona directamente afectada por la resolución (Art. 46.1 a) LOTC); y en los supuestos de *amparo contra actos de la administración* y *amparo contra actos del Poder Judicial* estarán legitimados quienes hayan sido parte en el proceso judicial previo a la interposición del recurso (Art. 46.1 b) LOTC). Tal regulación, entendemos, que deriva de la exigencia propia del

⁹⁹ STC 177/1988, de 10 de octubre. F.J. 4º

¹⁰⁰ Véase, entre otras, la STC 53/1983, de 20 de junio. F.J. 1º.

carácter subsidiario del amparo, del que le ha dotado el Legislador. Pero, asimismo, podrán comparecer ante el Tribunal todo aquél que invoque un *interés legítimo* respecto al proceso de amparo iniciado (Art.47.1 LOTC). No obstante, siempre y en todo caso, el recurso de amparo podrá interponerse por el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (Art. 161.1 b) CE y Art. 46.1 a) y b) LOTC), aunque este último siempre intervendrá con independencia de si es quien interpone el recurso o no (Art. 47.2 LOTC).

Como vemos, no sólo el constituyente sino también el Legislador, han querido recoger un amplio espectro de legitimados, no sólo para interponer el recurso de amparo, sino que también esa amplitud alcanza a los legitimados para actuar ante el Tribunal en el proceso de amparo iniciado.

6º) La subsidiariedad.

A pesar de que es común en la doctrina señalar que una de las notas características del recurso de amparo es la *subsidiariedad* en relación a la necesidad de previo conocimiento de las vulneraciones o lesiones de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria¹⁰¹, pues ello se deriva de lo expresamente preceptuado en el artículo 53.2 CE¹⁰². Como hemos tenido ocasión de ver, esa fue la interpretación que, en parte, realizó el Legislador cuando recogió los distintos recursos de amparo o supuestos de amparo pero, en realidad y no en todo caso, el recurso de amparo será subsidiario respecto a la tutela previa que ha de dispensar los órganos de la jurisdicción ordinaria y, ni mucho menos, que tal subsidiariedad lo sea en relación al citado *procedimiento preferente y sumario*. Es decir, y en resumen, no en todo caso el recurso de amparo será subsidiario respecto a la tutela dispensada por la

¹⁰¹ CASTILLO RIGABERT. “La admisión del recurso de amparo”. *Op.cit.* Pág. 71.

SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J.: “Los derechos fundamentales en la Constitución española”. *Revista de Estudios Políticos*. Núm. 105, julio-septiembre 1999. Págs. 20-21.

¹⁰² En relación a las distintas interpretaciones que del inciso <<y, en su caso>> del art. 53.2 CE podían derivarse para articulación de la tutela ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional, véase DIEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I.: “El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo”. En De la Oliva Santos, A. y DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I: Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales. McGraw-Hill. Madrid, 1996. Págs. 181-202.

jurisdicción ordinaria y tampoco, ni en todo caso, el procedimiento del que trae causa el amparo será el establecido en el art. 53.2 CE.

En definitiva, al no dotarse de un contenido y sustantividad propia al procedimiento preferente y sumario, tal y como hemos tenido ocasión de ver, la interpretación que ha querido otorgar cierto sector doctrinal a la expresión “y, en su caso” del artículo 53.2 CE; ha sido que, con independencia de cuál sea el procedimiento judicial previo en el que se haya conocido de manera inicial la concreta lesión o vulneración del derecho, el recurso de amparo tendrá necesariamente que constituirse en base a las notas de *subsidiariedad* y con carácter *extraordinario* respecto a la tutela dispensada ante la jurisdicción ordinaria¹⁰³.

Por tanto, y en gran medida, la interpretación realizada por la doctrina y el desarrollo por parte del Legislador han desnaturalizado el concreto sentido que quiso darle el constituyente al procedimiento *preferente y sumario*, no queremos decir con ello que el actual desarrollo sea contrario a lo preceptuado en la Constitución, sino que la necesidad de articular los distintos mecanismos de tutela tanto en los distintos procedimientos ordinarios como en los específicos que veremos más adelante, hacen que difícilmente pueda verse en ellos esa expresa voluntad con la que se configuró el procedimiento preferente y sumario, suponiendo ahora un amplio abanico de procedimientos en todos los órdenes y en todo tipo de procesos que difícilmente pueden encuadrarse en ese sencillo “*procedimiento preferente y sumario*”. Más bien de él, se han desprendido una serie de obligaciones para el Legislador que ha de tener muy en cuenta a la hora de regular los distintos procesos jurisdiccionales. En primer lugar, ha de tener presente si en cada rama del derecho hay o no mecanismos de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y, si existiendo, son suficientes. Por otro, y en segundo lugar, si los concretos procedimientos preferentes y sumarios son adecuados a los fines

¹⁰³ En tal sentido véase, entre otros, CARRASCO DURÁN, M.: “Amparo Judicial: presente y futuro”. *Revista de Derecho Político*, núm. 68, 2007. Pág. 149.

constitucionales para los que se regularon y si es necesario o no proceder a regular otros distintos a los ya previstos¹⁰⁴.

En definitiva, no podemos remitirnos a un único procedimiento preferente y sumario, ni tan siquiera a procedimientos judiciales que posean esos requisitos, para entender que la tutela a través del recurso de amparo deberá ser subsidiaria respecto a tal procedimiento.

Una vez sentado lo anterior, vamos a entrar a analizar la subsidiariedad como elemento esencial del recurso de amparo, para ello debemos acudir a la regulación contenida en los distintos tipos de recursos que establece la LOTC.

En primer lugar, el amparo regulado en el art. 42 LOTC, es decir, el amparo contra actos o decisiones sin valor de ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades autónomas, cuando vulneren derechos fundamentales podrán ser recurridas ante el Tribunal Constitucional una vez que *devengan firmes con arreglo a las normas internas de las Cámaras*. En él no se establece la obligación de acudir a la jurisdicción ordinaria como vía preceptiva y previa a la posible interposición del recurso de amparo. Por tanto, el Legislador ha excluido de manera expresa dicho conocimiento previo e incluso lo ha excluido a través de dos vías, negándole el acceso a un conocimiento previo en general y, en particular, del conocimiento previo a través de un *procedimiento preferente y sumario*. Cuestión distinta es que la persona lesionada en su derecho fundamental deba agotar todos aquellos mecanismos internos de la Cámara para que los órganos reconsideren su actuación y reparen el derecho fundamental lesionado pero, obviamente, esa necesidad de conocimiento previo por parte de los mismos órganos de la Cámara Legislativa de la que se trate no puede considerarse, ni mucho menos, subsidiariedad en el sentido de necesidad de previo conocimiento por parte del Poder Judicial y, mucho menos, que se trate de la subsidiariedad en el sentido al que se le ha querido dotar al artículo 53.2 CE. Ahora bien, no se discute que se haya querido hacer decaer dicho conocimiento debido al *principio de autonomía parlamentaria*, lo que sí

¹⁰⁴ CARRASCO DURÁN. “Amparo Judicial...”. *Op.cit.* Pág. 151-152.

queremos señalar, es que no concebimos un intento de justificar una subsidiariedad donde sólo hay una finalización y un posible intento de reparación de una actuación lesiva realizada por el mismo órgano produjo la lesión del derecho fundamental, sin que tal lesión tenga que ser fiscalizada por otro poder público, en este caso, como serían los órganos de la jurisdicción ordinaria. No estamos por tanto ante una subsidiariedad en el sentido previsto, sino que estamos ante el agotamiento de los mecanismos internos de las Cámaras con el fin de que ese Poder que supuestamente provocó la lesión reconsidere su propia actuación y pueda restaurar el derecho o libertad conculcado.

En tal sentido, como inexistencia de subsidiariedad entendida como conocimiento previo de la lesión por el Poder Judicial antes de acudir al Tribunal Constitucional, también se estableció así por el Legislador en el recurso de amparo contra las resoluciones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que denieguen la solicitud de declaración de objeción de conciencia, (art. 45 LOTC). Pues, incluso, podía plantearse que este era el único caso en el que la propia Constitución excluía su conocimiento por parte de la jurisdicción ordinaria, pues de la dicción literal del art. 53.2 CE podía desprenderse que frente a las lesiones del derecho a la objeción de conciencia sólo cabía recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tanto es así que, el propio Preámbulo de la L.O. 4/1984 de 26 de diciembre, por la que se regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se deroga el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; establece los siguiente:

“[S]e hace necesario regular las garantías del objetor que quedan aseguradas, de acuerdo con la presente Ley Orgánica, con los recursos jurisdiccionales articulados contra las resoluciones del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia que denieguen sus solicitud. Recursos jurisdiccionales por la vía del *procedimiento acelerado de protección de los derechos fundamentales que, aunque no prevista expresamente en la Constitución para la objeción de conciencia*, ofrece un trámite protector especialmente rápido, a la vez que permite evitar una sobrecarga de recursos ante el Tribunal

Constitucional. Este se configura, no obstante, como la última y más autorizada instancia de protección del derecho a la objeción de conciencia, lo que garantiza la plena efectividad del mismo”¹⁰⁵.

Por tanto, tras la entrada en vigor de la anterior Ley Orgánica por la que se deroga el art. 45 LOTC; se establece la subsidiariedad del recurso de amparo respecto a su conocimiento ante la jurisdicción ordinaria a través de la tutela preferente y sumaria que, en principio, no estaba previsto así en la Constitución pero entendemos que el Legislador pudo regularlo de tal manera, es decir, dotando al recurso de amparo del carácter subsidiario frente a su previo conocimiento ante la jurisdicción ordinaria debido al amplio margen de configuración que posee para articular el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Por tanto, una vez derogado tal artículo 45 de la LOTC, el acceso al recurso de amparo se produciría a través de la vía de recurso de amparo del art. 43 LOTC¹⁰⁶, el cual analizaremos a continuación.

Ahora bien, sólo y exclusivamente en los siguientes recursos de amparo podremos hablar de subsidiariedad del recurso de amparo respecto a la previa tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria y su posterior conocimiento ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. En este sentido, como articulación entre ambas jurisdicciones y, por tanto, como subsidiariedad de ésta tutela respecto a aquella, sólo pueden encuadrarse como tales los recursos de amparo recogido y regulados en los arts. 43 y 44 LOTC.

Pues bien, y dentro de la regulación contenida en cada uno de ellos debemos hacer una doble distinción, por un lado, aquellos recursos de amparo que acceden a través de los *procedimientos preferentes y sumarios*, lo cual sería desarrollo directo de lo expresamente previsto en el art. 53.2 CE, de

¹⁰⁵ La cursiva es nuestra.

¹⁰⁶ Para un análisis más detallado de la derogación del art. 45 LOTC y la correspondiente tutela a través del procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria puede consultarse FIGUERUELO BURRIEZA, Á.: “Garantías para la protección del derecho a la objeción de conciencia: la derogación del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Revista de Estudios Políticos*. Nº 45, 1985. Págs. 213-234.

aquellos otros cuya subsidiariedad del amparo procede de cualquier otro procedimiento judicial ordinario o extraordinario pero no expresamente previsto como desarrollo de la tutela jurisdiccional preferente y sumaria establecida en el anterior precepto constitucional.

Esta distinción que en principio puede no ser demasiado relevante o importante a simple vista, creemos que es o puede ser la causa principal u origen de los conflictos sustentados entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, así como el origen de la interposición masiva de recursos de amparo. Pues, en tal sentido, ya se vislumbró por parte de la doctrina la disfuncionalidad que ello podría provocar en la tramitación, conocimiento y resolución por parte del Tribunal Constitucional.

Pues si bien, en un principio el artículo 43 LOTC se previó como el desarrollo directo de lo preceptuado en el artículo 53.2 CE, esto es, que frente a las lesiones de los derechos fundamentales provocadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de la administración era necesario acudir al *procedimiento preferente y sumario* para la restitución del derecho fundamental vulnerado; entendiéndose éste como el procedimiento provisional recogido en la Disposición Transitoria Segunda de la LOTC. Pronto se consideró que esa no solo sería la vía sino también la tutela por la jurisdicción ordinaria a través del procedimiento contencioso-administrativo ordinario. Es decir, a la vía particular se añadió la vía general.

Mientras que, en el caso del recurso de amparo a través de la vía del art. 44 LOTC, no sólo se recogió la vía general sino también la particular, esto es, todas aquellas lesiones que tengan su *origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial* producidas en el seno de cualquier procedimiento judicial sino que, también, se produjo el posterior desarrollo de los distintos tipos de *procedimientos preferentes y sumarios* de los que conocerían los órganos de la jurisdicción ordinaria y con ello la subsidiariedad del amparo.

Como decimos, desde la entrada en vigor de la LOTC, la doctrina ya avisó de las consecuencias negativas que tal ampliación prevista por la vía del artículo 43 LOTC pero sobre todo por la vía del artículo 44 LOTC, podría tener en el recurso de amparo como mecanismo último de tutela. En tal sentido, DE LA QUADRA-SALCEDO en adelante las consecuencias que han provocado la amplia regulación e interpretación dada al art. 44 LOTC. La interpretación que realiza tanto de lo preceptuado en la Constitución como en la LOTC, entiende que en la misma tiene cabida las lesiones producidas entre particulares pero sólo aquellas en las que el objeto litigioso ha sido la posible lesión de derechos fundamentales, es decir, de manera inmediata y directa tal y como exige el citado artículo 44 LOTC; pero siempre “que la resolución del Tribunal ordinario deba haber tenido por objeto directo un derecho fundamental; en definitiva, que el pronunciamiento y el juicio del Tribunal se haya emitido teniendo por objeto la declaración, determinación o interpretación de un derecho fundamental”¹⁰⁷. Por tanto, que el objeto del litigio no debía ser cualquier otro derecho sino directamente un derecho o libertad fundamental. Y advierte, “[d]e no imponerse esa limitación al Tribunal Constitucional llegarían todas las sentencias dictadas por el poder judicial, ya que en todas ellas, más o menos directa o indirectamente, ha podido violarse un derecho fundamental”¹⁰⁸. Algo que, como bien sabemos, ha acabado ocurriendo y que en gran parte ha sido y es causa de la saturación del Tribunal Constitucional.

Por tanto, y como veremos más adelante, el Legislador no ha previsto un único *procedimiento preferente y sumario* ante un solo orden jurisdiccional, sino que ha dispuesto distintos *procedimientos preferentes y sumarios* ante los distintos órdenes jurisdiccionales como desarrollo directo del artículo 53.2 CE, solución que creemos más acertada y completa de lo que debe ser la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria. Por ello, y como hemos visto, dependiendo de cuál sea el orden jurisdiccional que conozca de manera previa y cual sea la fuente de la lesión, subsidiariamente, su conocimiento a través del amparo ante el Tribunal Constitucional se producirá bien por la vía del artículo 43 LOTC o del artículo 44 LOTC.

¹⁰⁷ DE LA QUADRA-SALCEDO. *Op.Cit.* Pág. 99.

¹⁰⁸ DE LA QUADRA-SALCEDO. *Ibidem*.

Pero como hemos visto también, no todo acceso al amparo ante el Tribunal Constitucional es subsidiario de la tutela previa ante la jurisdicción ordinaria, así como, no todo cumplimiento de dicha subsidiariedad lo será a través de su tutela ante un *procedimiento preferente y sumario* ante la jurisdicción ordinaria, tal y como prevé el artículo 53.2 CE. Más bien, esto último es en cierta medida lo *excepcional* frente a lo general, al menos cuantitativamente, que será la subsidiariedad en relación a cualquier procedimiento ordinario sustentado ante cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria.

Por todo ello, debemos pasar a analizar a continuación el recurso de amparo como recurso *extraordinario* frente a la tutela dispensada por la jurisdicción ordinaria.

7º) El carácter *extraordinario* del recurso de amparo.

Vinculado a todo lo anterior, principalmente, la naturaleza jurídica y la subsidiariedad como elemento definidor del amparo, se alza como elemento concluyente para la doctrina el carácter *extraordinario* del amparo¹⁰⁹. Con tal característica se quiere definir al recurso de amparo como un remedio procesal último, *especial* y circunscrito a ser la última posibilidad de restituir el derecho fundamental conculcado, cuando no ha sido posible su restitución o reinstauración por parte de los poderes públicos o estos no han sabido dar una respuesta adecuada y respetuosa en relación al derecho o libertad que se trate. El recurso de amparo, por tanto, estará dirigido exclusivamente a restablecer o preservar los derechos o libertades, excluyéndose por ello cualquier otra pretensión que no vaya dirigida a tal fin o a intentar salvaguardar otros bienes o derechos distintos a los protegidos por el amparo constitucional¹¹⁰.

¹⁰⁹ Entre otros, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J.: “Los derechos fundamentales...”. *Op.Cit.* Págs. 20-21.

¹¹⁰ PÉREZ TREMPES, P.: *El recurso de amparo*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2015. Págs. 17-18.

El carácter *extraordinario* presupone la existencia de mecanismos *ordinarios* y que, sólo y en todo caso, cuando éstos últimos no han podido o no han servido para cumplir la función que le es encomendada, en último término, podrá acudirse a la última línea de defensa y protección que es el recurso de amparo. El carácter *subsidiario* y *extraordinario* del recurso de amparo se predica de aquellos en los que es necesario un conocimiento previo de la lesión o vulneración del derecho o libertad fundamental por parte de la jurisdicción ordinaria, es decir, de aquellos recursos de amparo que acceden por las vías del artículo 43 y 44 LOTC¹¹¹.

Ahora bien, como bien señala el profesor Aragón Reyes, “[e]l recurso de amparo es, pues, el último recurso, y por ello el Tribunal Constitucional la última instancia, en la materia. Cuestión distinta es que el recurso de amparo, tal como está regulado, se haya convertido en la práctica en un recurso ordinario (con la correspondiente sobrecarga de trabajo para el Tribunal

¹¹¹ En tal sentido lo expresan de manera clara y meridiana los profesores BORRAJO INIESTA, DIEZ- PICAZO GIMENEZ Y FERNÁNDEZ FARRERES, cuando afirman que “En nuestro sistema constitucional de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas, la protección jurisdiccional de los mismos no se asienta, como regla, en la intervención del Tribunal Constitucional, sino en la de los órganos de la jurisdicción ordinaria. La intervención del Tribunal Constitucional no es, desde luego, el mecanismo central del sistema, precisamente porque la protección primaria de tales derechos a los Jueces y Tribunales queda encomendada. Difícilmente podría ser de otra forma, una vez que el Tribunal constitucional, por sus propias características, no se encuentra en condiciones de asumir, con carácter ordinario, la protección y defensa de los derechos fundamentales en todos y cada uno de los concretos casos en que esa protección es necesaria, apreciación esta que adquiere singular importancia cuando de lo que se trata es de la protección de los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 24.1 CE.

Se justifica así que el recurso de amparo constitucional haya quedado caracterizado por ser un medio extraordinario y suplementario de la normal y primaria tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas que constitucionalmente se encomienda a los órganos judiciales ordinarios. Se trata, en fin, de un dato básico reiteradamente destacado por la propia jurisprudencia constitucional, aunque del mismo no siempre se hayan extraído –o al menos observado- todas las consecuencias que necesariamente impone.

Es cierto, sin embargo, que la Constitución no sanciona expresamente ese carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional. [...].

Sea como fuere, es lo cierto que el Legislador ha ratificado, tanto en el artículo 43 como en el artículo 44 LOTC, el carácter subsidiario de la intervención del Tribunal Constitucional en la defensa y protección de los derechos fundamentales, imponiendo, como es bien notorio, para la viabilidad procesal del recurso de amparo, la necesaria observancia de los requisitos de previo agotamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1.a) LOTC] y de la invocación formal en esa vía del derecho fundamental presuntamente vulnerado [art. 44.1.c) LOTC].”. En *El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo*. Civitas. Madrid, 1995. Pág. 119-123.

Constitucional), en lugar de, como debiera ser, un recurso realmente extraordinario (y quizás incluso excepcional)”¹¹².

Por tanto, las notas o el carácter extraordinario que se desprende de la tutela a través del recurso de amparo, no puede entenderse sino como un mecanismo de carácter excepcional o eventual del mismo frente al entendimiento de que el mecanismo normal, habitual o natural ha de ser el residenciado ante la jurisdicción ordinaria. Por ello, no puede ser tratado como un mecanismo de tutela ordinario frente a cualesquiera alegaciones relativas a lesiones o vulneraciones de los derechos fundamentales¹¹³. Un entendimiento real del alcance del recurso de amparo como mecanismo extraordinario abre la vía a su desarrollo y, en concreto, a entender el amparo como mecanismo a través del cual solo pueden tener cabida aquellos amparos que por su trascendencia desde un punto de vista objetivo, es decir, que sea importante o relevante para la concreción y desarrollo del derecho fundamental, o sea trascendente desde un punto de vista subjetivo, es decir, que la admisión lo sea porque se evidencien lesiones graves o relevantes de los derechos fundamentales tanto para el recurrente como para la sociedad en general y, por ello, deban ser objeto de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional¹¹⁴.

8º) La demanda de amparo.

El artículo 49 de la LOTC determina cuáles deben ser los requisitos a cumplimentar para interponer la demanda de amparo. El legitimado para su

¹¹² ARAGÓN REYES, M.: “Relaciones Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo”. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitución*, Nº. 8, 2007. Pág. 35.

¹¹³ Así lo expresa, entre otros, el profesor CARRASCO DURÁN cuando al analizar el carácter subsidiario del recurso de amparo afirma que “Tutela extraordinaria es, precisamente, la que presta el recurso de amparo en la gran mayoría de casos en los que existe previamente alguna resolución judicial sobre el asunto que agota la vía judicial. Ciertamente que el recurso de amparo ha sido conceptualizado, en términos técnicos, como un proceso independiente, pero, en cuanto al fondo del asunto, el recurso de amparo supone una revisión del juicio acerca de la posible vulneración de un derecho fundamental realizado anteriormente por un órgano judicial o bien una revisión de la forma en la que el órgano judicial ha aplicado las garantías derivadas del derecho a la tutela judicial en el seguimiento del proceso. En fin, de hecho, el recurso de amparo actúa materialmente como si fuera una instancia adicional a las seguidas a lo largo de la vía judicial”. En “*El concepto constitucional de recurso de amparo...*”. *Op.cit.* Pág. 89.

¹¹⁴ CARRASCO DURÁN. “*El concepto constitucional de recurso de amparo...*”. *Op.cit.* Págs. 113-114.

interposición deberá exponer con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, ha de citar los preceptos constitucionales que se consideren infringidos y fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se estima vulnerado.

Por tanto, para la iniciación del procedimiento de amparo no sólo habrá de cumplimentarse los anteriores requisitos -tratarse de derechos fundamentales de los recogidos en el art. 53.2 CE, estar legitimado para su interposición, la interposición en plazo y cumplimentar los requisitos de subsidiariedad exigidos en cada caso-, sino que también será necesaria la interposición de demanda como escrito procesal que pone en marcha el procedimiento y que debe contener una serie de exigencias. Si bien el Tribunal, desde sus inicios, ha sido bastante flexible y no formalista respecto al cumplimiento en la formulación de la demanda, determinando que el escrito, al menos, debe permitir conocer al Tribunal, sin que quepa duda, cuál o cuáles son las concretas vulneraciones que se denuncian y cuál es la concreta pretensión que se aduce y se solicita al Tribunal¹¹⁵.

9º) Requisitos para la admisión de la demanda de amparo.

Ahora bien, a pesar de que el Legislador optó por regular distintos amparos, distinguiendo unos y otros, no hizo lo mismo respecto a la admisión. Es decir, el Legislador pudo haber optado por diferenciar o establecer concretos procedimientos de admisión partiendo de la diferenciación entre los distintos recursos de amparo. Es decir, frente a las características que se desprenden en cada tipo de recurso, se podría haber optado también por establecer particularidades respecto a la admisión que estuvieran específicamente en consonancia con las distintas modalidades de recursos.

No obstante, el Legislador no obró así y sólo estableció un sistema de admisión para todos los recursos de amparo. Así y en la regulación inicial, el trámite de admisión se correspondía con la siguiente regulación.

¹¹⁵ Entre otras, véase STC 214/2005 de 12 septiembre. (Sala Primera).

“Artículo 50 LOTC.

Uno. La Sala, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar motivadamente la inadmisibilidad del recurso si concurre alguno de los siguientes supuestos:

- a) Que la demanda se haya presentado fuera de plazo.
- b) Que la demanda presentada sea defectuosa por carecer de los requisitos legales o no ir acompañada de los documentos preceptivos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo ochenta y cinco, dos.

Dos. También podrá acordarse la inadmisibilidad, con los requisitos de audiencia señalados en el número anterior, en los siguientes supuestos:

- a) Si la demanda se deduce respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.
- b) Si la demanda carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.
- c) Si el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual.

Tres. Contra el acuerdo de inadmisión de una demanda de amparo constitucional no cabrá recurso alguno”.

A pesar de que, como se aprecia en la regulación original del art. 50 LOTC no sólo establecía la posibilidad de inadmisión por cuestiones de forma, como era la interposición fuera de los plazos establecidos en los propios arts. 42 a 45 LOTC, que no se hubiesen adjuntado aquellos documentos necesarios o que no se hubiesen subsanado en plazo. Pero también porque el objeto de la demanda no se corresponda con los derechos tutelables a través del amparo, conllevará necesariamente la inadmisión de la demanda de amparo. Pero, lo que nos parece más importante, es que también se establecen causas de inadmisión por cuestiones de fondo. La primera de ellas, a través de un concepto jurídico indeterminado como es que la demanda carezca *manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal*

Constitucional y, la segunda posibilidad, que el Tribunal apreciase que la demanda presentada no planteaba una cuestión novedosa sobre el derecho fundamental sino que la misma suponía una reiteración de una *cuestión sustancialmente igual que ya hubiese sido desestimada previamente no sólo a través de un recurso de amparo sino también mediante un recurso o cuestión de inconstitucionalidad*.

Por tanto, y donde queremos llegar, es que si bien el Legislador -como hemos visto- configuró con gran amplitud las posibilidades de acudir al Tribunal Constitucional a través de los distintos recursos de amparo o modalidades del mismo pero, no es menos cierto, que no en todo caso debía admitirse toda demanda que alegase la vulneración de un derecho o libertad fundamental y que, frente a la imposición, no era preceptivo en todo caso obtener una resolución mediante sentencia. Más bien al contrario, no toda demanda va a ser admitida a trámite y tener acceso a una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal, pues la misma podrá ser inadmitida por razones no sólo de forma sino también por cuestiones de fondo.

En lo que respecta a la primera de las causas de inadmisión, *la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo*, requiere en primer lugar una determinación por parte del Tribunal sobre lo que ha de entenderse por dicha *carencia de contenido* con el fin de obtener unos referentes claros en relación a lo que sí ha de ser entendido como *razones de fondo que justifiquen la admisión*. Por tanto, y con independencia del contenido concreto de la demanda, de manera previa, el Tribunal tenía que determinar de manera positiva cuándo sí ha de entenderse que existen dichas razones. Por otro lado, una vez determinado lo anterior, el Tribunal deberá realizar un juicio previo sobre el fondo para determinar si efectivamente concurre o no dicha causa de inadmisión. En cuanto al segundo supuesto, al igual que el anterior, el Tribunal debía realizar un análisis previo de la demanda de amparo para poder determinar si el supuesto era o no una reiteración de otro anterior ya previamente desestimado.

Es decir, y donde queremos llegar, es que desde sus inicios el Legislador ha establecido la posibilidad de inadmitir demandas por razones y cuestiones de fondo y mediante supuestos que no tienen un contenido jurídico determinado sin una previa interpretación que determine su concreto contenido, de tal manera que pueda derivarse una cierta seguridad jurídica sobre todo para aquel que pretenda acceder a la vía de amparo constitucional. Es decir, frente a la abstracción que sobre todo suponía el supuesto de inadmisión *carencia manifiesta de contenido*, se hacía necesaria una concreta interpretación por parte del Tribunal en orden a dotar de un contenido concreto que diese respuesta a la inseguridad jurídica que de dicho concepto se desprendía.

No obstante, dicho artículo fue objeto de reforma con el fin de mejorar el sistema de admisión del amparo debido a la constante interposición de demandas de amparo y a la necesidad de agilizar la inadmisión cuando las mismas, en ese análisis preliminar sobre la viabilidad del recurso, el Tribunal apreciase *a limine* que la misma no debía ser objeto de resolución sobre el fondo mediante sentencia. Así pues, como decimos, el artículo 50 de la LOTC fue objeto de modificación a través de la L.O. 6/1988, de 9 de junio; mediante la que se reformó el trámite de admisión del recurso de amparo; quedando regulado el trámite de admisión de la siguiente forma:

“Artículo 50.

1. La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
 - a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 o concurra en la misma el caso al que se refiere el artículo 4.2.
 - b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.
 - c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional.

- d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto substancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias.
2. La providencia a que se refiere el apartado anterior, que indicará el supuesto en el que se encuentra el recurso, se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podrá recurrir el Ministerio Fiscal, en súplica, en el plazo de tres días. El recurso se resolverá mediante auto.
 3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no hubiere unanimidad, la Sección, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar mediante auto la inadmisión del recurso.
 4. Contra los autos a los que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores no cabrá recurso alguno.
 5. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, la Sección procederá en la forma prevista en el artículo 85.2; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.”

En primer lugar cabe destacar, respecto a la regulación anterior, la habilitación a las Secciones en lugar de las Salas para que por unanimidad pudieran inadmitir el recurso de amparo mediante providencia, tipo de resolución que *per se* es inmotivada frente a la necesidad anterior de motivación respecto a la resolución de inadmisión. Además, se elimina la necesidad de abrir el trámite de audiencia previa al recurrente y al Ministerio Fiscal con lo cual, la resolución de inadmisión se producirá respecto al análisis de lo desprendido en la demanda de amparo así como de la documental que le acompañe. No obstante, otra diferencia respecto a la regulación anterior, es que frente a la inadmisión se habilita al Ministerio Fiscal para que pueda

interponer recurso de súplica contra dicha resolución pues, en la anterior regulación, frente a la inadmisión decretada no cabía recurso alguno.

En segundo lugar, las causas tanto formales como materiales o sustantivas se agrupan en un solo apartado del artículo, mientras que en la anterior regulación, se realizaba una separación de las causas de inadmisión de índole formal frente a aquellas que tenían un carácter respecto a su objeto, fondo o causa de origen sustantivo. Respecto a las causas de inadmisión en la regulación posterior se distingue de manera clara aquellos requisitos procesales o sustantivos que son insubsanables, puesto que necesariamente deben de predicarse para que pueda entenderse accesible sobre la base de alguno de los distintos tipos de recursos de amparo recogidos en la LOTC (art. 50.1 a) LOTC, en relación a los arts. 41 a 46 LOTC); de aquellos formales que sí son subsanables puesto que no inciden de manera directa en los requisitos procesales necesarios para acceder a la vía de amparo constitucional (art. 50.5 LOTC). En último lugar, sigue siendo causa de inadmisión que se solicite el amparo respecto de derechos no susceptibles del mismo; además, se recogen aquellos otros supuestos en los que el Tribunal, en este caso las Secciones, realizarán un análisis previo respecto al fondo del asunto y su viabilidad, como son: *que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una resolución sobre el fondo o que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto substancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias*. En este último supuesto, si se añade la obligación del Tribunal de identificar y señalar cuál ha sido ese supuesto sustancialmente idéntico. No obstante, hemos de decir, en relación a este último que, ya sea respecto a la regulación original o a la regulada a través de la L.O. 6/1988, de 9 de junio, el Tribunal no hizo demasiado uso de dicho supuesto de inadmisión, utilizando el mismo en contadas ocasiones¹¹⁶.

¹¹⁶ Como decimos, han sido muy pocas las resoluciones de inadmisión basadas en que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado un supuesto substancialmente igual, entre ellas cabe destacar las AATC 139/1990, de 26 de marzo; 83/1992, de 23 de marzo; 2/1993, de 11 de enero y 49/1993, de 8 de febrero.

La reforma del trámite de admisión respondía a la necesidad de atajar dos cuestiones que incidían en la actividad del Tribunal Constitucional: la gran cantidad de asuntos que, en materia de amparo, pendían ante el Tribunal Constitucional y, en segundo lugar y ligado al anterior, tales recursos se acumulaban y era necesario por tanto aligerar el trámite de admisión de los mismos¹¹⁷. Pero no dio los frutos esperados, algo que acreditó la insuficiencia de la reforma¹¹⁸, sobre todo, por la interpretación que finalmente realizó el Tribunal Constitucional en relación a la *carencia manifiesta de contenido*, pues a pesar de que pudo realizar otra interpretación de índole objetivo¹¹⁹, el Tribunal consideró que tal carencia de contenido respondía a una función subjetiva del recurso de amparo.¹²⁰

La inadmisión se produciría cuando la demanda se deduzca *contra actos insusceptibles de recurso de amparo, o a los que manifiestamente no cabe imputar la pretendida lesión de un derecho fundamental o cuyos pedimentos excedan de la competencia que, en esta vía, corresponde al Tribunal Constitucional*. Para que se pueda acudir al motivo de inadmisión no es preciso que la pretensión de la demanda sea «*absolutamente gratuita, sofisticada o descabellada*», sino que le basta con considerar, a la vista del escrito de demanda y de los documentos que la acompañan, que, a reserva de las alegaciones de las partes en el trámite de admisión, dispone de los datos suficientes para rechazar las pretensiones deducidas, de forma que

¹¹⁷ Así se desprendía de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica que finalmente se suprimió del texto definitivamente aprobado. BOCG. Proyectos de Ley. 13 de noviembre de 1987 Núm. 57-1. Pág. 1.

¹¹⁸ CRUZ VILLALÓN, P.: “El recurso de amparo constitucional: el juez y el Legislador”, VV.AA. *Los procesos constitucionales (Segundo Simposio de Derecho Constitucional, Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992. 119.

¹¹⁹ Entre otros, VILLAVERDE MENÉNDEZ, I.: “Decidir qué no decidir o qué hacer con los amparos: el trámite de admisión de los recursos de amparo” *Teoría y realidad constitucional*. Nº 10-11, 2002-2003, Págs. 323-366.

PEREZ TREMPES, P.: *El recurso de amparo*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 261.

¹²⁰ En tal sentido lo expresa TENORIO SÁNCHEZ: “[l]o que ocurrió es que el Tribunal no se atrevió a contestar los asuntos con una providencia de inadmisión prácticamente inmotivada y a seleccionarlos discrecionalmente. Nuestro Tribunal Constitucional no se atrevió a olvidar la naturaleza del referido recurso como instrumento concebido para la defensa de los derechos fundamentales y por ello interpretó que la carencia de contenido constitucional era equivalente a la inexistencia de vulneración constitucional y motivó las providencias de inadmisión por carencia de contenido”. En TENORIO SÁNCHEZ, P.J.: “Derechos en serio, recurso de amparo, reordenación de la garantía judicial y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. *UNED. Revista de Derecho Político*. Nº 88, septiembre-diciembre 2013. Pág. 140.

*no sea necesario proseguir el proceso constitucional hasta la sentencia*¹²¹. La demanda carecería manifiestamente de contenido constitucional que justifique una decisión, *al sólo presentarse en amparo temas de mera legalidad sin referencia alguna lesiva para derechos fundamentales constitucionales*¹²². Incluso la carencia manifiesta podía basarse en la cuantía objeto del litigio¹²³. Pero, sobre todo, cuando de *los términos del planteamiento inicial del debate y los elementos de conocimiento probatorio incorporados permiten fijar manifiestamente, es decir, con valor de notoriedad, certeza y diafanidad, la falta de contenido constitucional de la demanda, porque los actos de los poderes públicos atacados por la pretensión de amparo no vulneran indudablemente los derechos fundamentales ni las libertades públicas*¹²⁴, en definitiva, que era evidente la inexistencia de vulneración del derecho fundamental o de contenido constitucional de la demanda¹²⁵.

10º) La sustanciación del proceso.

Una vez admitida a trámite, se procederá a la sustanciación del procedimiento ante el Tribunal Constitucional, tal y como determinan los artículos 51 y 52 LOTC; prosiguiendo los pasos procesales que den lugar a una resolución mediante sentencia.

Pues bien, el art. 51 LOTC exige al órgano, autoridad, juez o tribunal que conoció el asunto, que remita las actuaciones que dieron lugar a la posterior interposición del recurso de amparo. Así como deberán emplazar a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Constitucional. Debiendo además el órgano requerido cumplimentar con lo preceptuado en el plazo señalado para ello y emplazar a quienes fueron parte en el procedimiento (art. 51.2 LOTC).

¹²¹ ATC 791/1988, de 20 de junio. F.J. 2º.

¹²² ATC 314/1985, de 8 mayo. F.J. 5º.

¹²³ ATC 248/1994, de 19 septiembre. F.J. 3º

¹²⁴ ATC 120/1992, de 11 de mayo. F.J. 1º.

¹²⁵ AATC 164/1992, de 8 de junio. F.J. 2º; 43/1993, de 8 de febrero. F.J.1º; 289/1994, de 31 de octubre. F.J. 4º; 68/1995, de 17 de febrero. F.J. 3º; 115/1995, de 4 de abril. F.J. 2º; 25/1998, de 26 de enero. F.J. 1º; 154/2000, de 14 de junio. F.J.1º. 17/2001, de 29 de enero. F.J.1º.

Recibidas las anteriores actuaciones, la Sala podrá acordar un plazo común, no superior a veinte días, para la apertura del trámite de alegaciones o, en su caso, para la celebración de vista oral (art. 52.1 LOTC). Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado, la Sala pronunciará la correspondiente sentencia en el plazo de diez días (art. 52.2 LOTC).

11º) La resolución mediante sentencia.

Una vez admitida a trámite la demanda la Sala correspondiente dictará sentencia sobre el fondo del asunto y, en su fallo, procederá a otorgar o denegar el amparo solicitado (art. 53 LOTC). Ahora bien, aunque no se especifique, el otorgamiento puede serlo respecto a la totalidad de las pretensiones aducidas en la demanda pero también puede otorgar el amparo de manera parcial. También, y aunque tampoco se especifique en dicho precepto, el Tribunal puede inadmitir el recurso de amparo mediante sentencia.

Pues bien, y según determina el art. 55.1 LOTC, “la sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:

- a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos.
- b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.
- c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación”.

VI.- EL DESARROLLO LEGAL DE LA TUTELA ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.

Ambas jurisdicciones, la ordinaria y la constitucional, configuran el sistema de justicia constitucional en nuestro país. Los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria no sólo están sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE), sino que también están sometidos a la Constitución (art. 9.1 CE) y a los

derechos fundamentales (art. 53.1 CE), que además no residirá ante la sola obligación de no vulnerar los derechos y libertades sino que, también, han de ser ellos sus primeros y naturales garantes (art. 24 CE), al que se añadirá, con carácter extraordinario, un procedimiento específico de tutela a través que ha de ser preferente y sumario (art. 53.2 CE). La Constitución no se quedó ahí sino que dicha tutela dispensada quedará reforzada a través de la supremacía en materia de garantías constitucionales ante el Tribunal Constitucional (art. 123.1 CE), que a través del amparo constitucional (art. 53.2, 161.1 b) y 162 CE), harán que la confluencia entre ambas jurisdicciones que componen el sistema de justicia constitucional sea total. Por tanto, la función que corresponderá a ambas será la misma, la protección, tutela y restitución del derecho fundamental vulnerado, por ello, la tutela dispensada por el Tribunal Constitucional, no será la única sino la última, restituyéndose así el derecho fundamental vulnerado, función que, en su caso o en ese caso, no fue realizada por la jurisdicción ordinaria¹²⁶.

Y así ha sido configurado por el Legislador, dicho desarrollo de la tutela de los derechos en general y de los derechos y libertades fundamentales en particular por parte de la jurisdicción ordinaria puede estructurarse en varios compartimentos que, a su vez, componen un despliegue de normas procesales que van desde la generalidad a la particularidad; desde la tutela de los derechos fundamentales a través de cualquier procedimiento sustentado ante cualquier órgano jurisdiccional hasta concretos procesos de tutela de los derechos y libertades fundamentales, esto es, aquellos que han sido considerados como desarrollo directo de lo preceptuado en el art. 53.2 CE.

La primera regulación legislativa de la tutela judicial de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria fue una ley pre-constitucional, aunque elaborada y aprobada al mismo tiempo que lo era la norma fundamental. Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, se previó como norma provisional hasta que se regulase de manera definitiva el procedimiento preferente y sumario del artículo 53.2 CE. Aunque, finalmente, lo que en su

¹²⁶ ARAGÓN REYES. “*Relaciones Tribunal Constitucional...*”. *Op.cit.* Pág. 33-34.

día se vislumbraba como provisional acabó estableciéndose como el mecanismo de tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria y como desarrollo del citado precepto constitucional, algo a lo que también contribuyó que fuese así recogido en la Disposición Adicional Segunda de la LOTC. Dicha Ley 62/1978, establecía una serie de procesos especiales de tutela dentro de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo, civil y penal. Posteriormente, mediante Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril, Procesal Militar y Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que regula el Procedimiento Laboral, se recogieron los distintos procesos especiales para la tutela de los derechos fundamentales en sendos órdenes jurisdiccionales.

Esa regulación inicial contenida en la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, fue derogándose paulatinamente y regulándose los procedimientos específicos en distintas leyes procesales en los distintos órdenes jurisdiccionales. En tal sentido, fueron aprobadas la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 38/2002, de 28 de octubre, de Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado. Dentro de las cuales se recogen distintos procedimientos de tutela de los derechos fundamentales, sustantivos o procesales, en cada uno de dichos órdenes jurisdiccionales.

También se fueron regulando y desarrollando en leyes específicas distintos procedimientos especiales de tutela relativos a concretos derechos fundamentales. Así destacan: la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación; la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión; la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus; la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Todo este sistema en el que se articula la tutela de los derechos fundamentales como objeto no solo de multitud de procedimientos preferente y sumarios sino también como objeto de cualquier procedimiento ordinario en el que se cuestione o pueda plantearse una vulneración o lesión de un derecho fundamental, hace que la regulación y desarrollo posterior que se le ha dado a la tutela de los derechos fundamentales en sede de jurisdicción ordinaria desborde con creces no solo las previsiones constituyentes respecto al art. 53.2 CE, sino también respecto al art. 24 CE, como piezas esenciales del sistema de garantías jurisdiccionales o individuales de los derechos fundamentales¹²⁷. Por tanto, el desarrollo legislativo e interpretación dadas al papel que ha de jugar el Poder Judicial en esta materia ha supuesto finalmente una articulación bien distinta a la inicialmente prevista¹²⁸ que, viéndola desde la distancia, se aprecia hasta con cierta simplicidad y candidez pues la realidad se ha mostrado bastante más compleja que su articulación en aparentes compartimentos estancos en los que, en principio, podían calificarse aquellos de *estricta legalidad ordinaria* de aquella para la *tutela de los derechos y libertades fundamentales*; que ha conllevado que aquel en cierta medida haya quedado frustrado¹²⁹, sin sitio¹³⁰ o, en cierta medida, sin razón de ser.

¹²⁷ Como bien sintetiza la profesora ENCARNA CARMONA CUENCA, “esta tutela se presta por los jueces y tribunales en todo tipo de procesos y, además, están previstos diversos procedimientos especiales y especialidades en los juicios ordinarios en las distintas leyes procesales de cada uno de los órdenes jurisdiccionales e, incluso, en leyes sustantivas que contienen el desarrollo general de algunos derechos en concreto. Por lo tanto, puede decirse que la tutela judicial de los derechos fundamentales no la asegura el art. 53.2 CE, sino el art. 24 CE. El art. 53.2 CE no es más que un plus en esta protección”. “El desarrollo legislativo de la tutela judicial de los derechos fundamentales. Evolución histórica y perspectivas de futuro”; en *La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2008. Pág. 24.

¹²⁸ Por gran parte de la doctrina, toda esta regulación, se vislumbra como un completo desarrollo de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales que va más allá de la regulación prevista por el constituyente en el art. 53.2 CE. Ahora bien, el único déficit o “desamparo” que se aprecia es cuando se produce una lesión del derecho fundamental en la sentencia que ponga fin al proceso y no exista recurso alguno contra la misma pues, en definitiva, no se podrá acudir a la vía judicial para instar la restitución del derecho fundamental vulnerado, siendo el recurso de amparo la única vía posible de tutela ante esa situación. En tal sentido, véase, el trabajo del profesor CARRASCO DURÁN “La defensa de los derechos fundamentales procesales ante la jurisdicción ordinaria: la Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la ley orgánica del poder judicial”, en *La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2008. Págs.207-275.

¹²⁹ CARRASCO DURÁN. “Amparo Judicial...”. *Op. cit.* Pág. 145.

¹³⁰ CARRASCO DURÁN. “Amparo Judicial...”. *Op. cit.* Pág. 148.

El ejercicio de la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, ha de moverse en los parámetros constitucionalmente establecidos. Los derechos fundamentales y libertades enunciados en el artículo 53.2 CE están garantizados bajo su tutela, *sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido*, (art. 7 LOPJ). Por ello el juez no sólo deberá interpretar la ley y aplicar la misma sino que, dicha función, deberá de efectuarse de conformidad a la Constitución y, particularmente, lo deberá hacer de conformidad *a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos* (art. 5.1 LOPJ), al haberse configurado al Tribunal Constitucional como *interprete supremo* de la Constitución, (art. 123.1 CE y art. 1.1 LOTC).

Por tanto, las líneas que se establecen entre ambas jurisdicciones apelando a las cuestiones de índole <<constitucional>>, atribuidas al ámbito en el que ha de ejercer su función el Tribunal Constitucional y, por otro, a las cuestiones de mera <<legalidad>> en relación en el ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales ordinarios, no es que tengan o que sea prácticamente imposible deslindarlas y determinar con nitidez que se entiende inserto en uno y otro ámbito, sino que de hecho ni siquiera el sistema jurídico-constitucional como un todo permite tal disociación en compartimentos estancos. Así lo determinó con claridad el propio Tribunal Constitucional cuando en su STC 50/1984, de 5 de abril, (F.J.3º)

“La distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser establecida, como a veces se hace, refiriendo la primera al «plano de la constitucionalidad» y la jurisdicción ordinaria al de la «simple legalidad», pues la unidad del ordenamiento y la supremacía de la Constitución no toleran la consideración de ambos planos como si fueran mundos distintos e incommunicables. Ni la jurisdicción ordinaria puede, al interpretar y aplicar la Ley, olvidar la existencia de la Constitución, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del análisis crítico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la Ley cuando tal análisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas cuya salvaguardia le esté encomendada.”.

No obstante esta función atribuida a ambas jurisdicciones, en la práctica, no ha dejado de ser pacífica. Pues a través del recurso de amparo, tanto de la vía del art. 43 LOTC como la del art. 44 LOTC, el Tribunal Constitucional va a conocer de recursos de amparo en los que las lesiones aducidas por el demandante no han sido debidamente tuteladas por los órganos de la jurisdicción ordinaria o, directamente, porque ella sido la causante de la lesión.

De todo ello se desprende que, frente al conocimiento de una determinada lesión de un derecho fundamental, la relación entre ambas jurisdicciones en principio no será distinta cuando lo enjuiciado sea la conformidad o no del derecho fundamental respecto del acto que se estima lesivo del mismo. La distinción por tanto habrá de hallarse en otras razones. Ahora bien, esa función será idéntica si existe doctrina previa que determine el contenido y alcance del derecho fundamental puesto que, de no existir la misma, es ahí donde radica la función *suprema* del Tribunal Constitucional como intérprete de los derechos fundamentales frente a cualquier otra interpretación realizada por cualquier poder público. En este caso, la relación por tanto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo o cualquier otro órgano judicial no puede ser sino de supremacía de aquel respecto a éstos¹³¹. Es por tanto –desde nuestro punto de vista- la vertiente objetiva del recurso de amparo la que determina la eficacia que es propia del recurso de amparo en el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales¹³².

¹³¹ ARAGÓN REYES. “*Relaciones Tribunal Constitucional...*”. *Op. cit.* Pág. 33-34.

¹³² CARRASCO DURÁN. “El concepto constitucional de recurso de amparo...”. *Op. cit.* Pág. 95. En tanto que también para CARRASCO DURÁN la dimensión subjetiva del recurso de amparo como “garantía de la intervención judicial en la protección de aquéllos, resulta compartida con los órganos judiciales”, *ibídem*.

CAPÍTULO II: LA CRISIS FUNCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

I.- LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE AMPARO.

La interposición de los recursos de amparo ha sufrido una paulatina evolución desde sus primeros años de vigencia hasta la fecha actual o, si se quiere, hasta los años previos a la reforma de la LOTC en el año 2007¹³³.

Así, entre los años 1980 a 1985, se pasó de los 218 amparos interpuestos a los 969. En el año 1986 ya se interpusieron más de mil demandas de amparo, en concreto, la cifra ascendía a 1.225 recursos de amparo. Y así continuó de manera progresiva, entre los años 1988 y 1991, se superaron las cifras de más de dos mil recursos de amparo, (2.125, 2.603, 2.896, 2.698); en los años 1992 y 1993 se interpusieron 3.226 y 3875, respectivamente. Entre los años 1994 y 1996 se superó la cifra de más de cuatro mil demandas anuales, (4.161, 4.369, 4.689). A finales de los noventa las cifras alcanzaban más de cinco mil demandas anuales, (5.391, 5.441, 5.582, años 1997 a 1999). En los años 2.000 y 2.001 fueron más de seis mil demandas de amparo (6.762 y 6.786). Más de siete mil se interpusieron entre los años 2002 y 2004, (7.285, 7.721, 7.814). En el año 2.005 se interpusieron 9.476 demandas de amparo, alcanzándose su culmen en el año 2.006 con la cifra de 11.471 recursos de amparo.

Los recursos de amparos anualmente interpuestos suponen más de un 90% de los asuntos ingresados anualmente ante el Tribunal Constitucional¹³⁴, aunque esa cifra fue paulatinamente elevándose hasta alcanzar una media oscilante entre el 97% y 98% de recursos de amparo respecto al volumen total de asuntos ingresados¹³⁵.

¹³³ Datos extraídos de las Memorias anuales publicadas por el Tribunal Constitucional. <http://tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/default.aspx>

¹³⁴ Las únicas excepciones a tal porcentaje son los años 1982, 1984, 1985 y 1986, en el que las demandas de amparo supusieron el 81,57 %; 86,68 %; 79,03% y 84,89 %, respectivamente. <http://tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/default.aspx>

¹³⁵ Datos extraídos de las Memorias anuales del Tribunal Constitucional. <http://tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/default.aspx>

Esto llevó en más de una ocasión al Tribunal Constitucional, en concreto, a la que fuera su Presidenta a alzar la voz y lanzar una llamada de auxilio¹³⁶ debido a las consecuencias que esa masiva interposición estaba provocando no solo en la imposibilidad material de afrontar dicha carga de trabajo, sino también porque el tener que hacer frente al mismo incidía en el resto de funciones atribuidas al Tribunal.

II.- SUPUESTOS DE INVASIÓN Y FRICCIÓN ENTRE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL RECURSO DE AMPARO.

1º) El control de la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria por parte del Tribunal Constitucional.

En cierto sector doctrinal no se pone en cuestión el control por parte del Tribunal en relación a la interpretación de la ley efectuada por el juzgador de instancia cuando la interpretación de la norma es contraria al derecho o libertad fundamental¹³⁷ pero ese juicio, que en principio se correspondería con una confrontación entre la concreta interpretación dada y el concreto contenido del derecho fundamental, plantea en la práctica problemas para delimitar hasta dónde ha de llegar la labor del Tribunal Constitucional a través del amparo.

La principal crítica se produce cuando no queda acreditada la relación directa entre la interpretación de la ley y el derecho fundamental del que se trate,

¹³⁶ Así lo exponía MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE en la presentación de la Memoria del Tribunal Constitucional del año 2006: "Los desajustes que las cifras ofrecidas se empeñan en poner en evidencia año tras año, con una tendencia inequívoca, confirman un diagnóstico que no admite controversia alguna y que requiere, de manera perentoria, la intervención del Legislador orgánico. El empeño de las Cortes Generales en la tramitación de la que esperamos sea pronto una revisión ambiciosa de la Ley rectora del Tribunal ha suscitado el mayor interés. La reforma de nuestra Ley Orgánica es ciertamente imprescindible, como también lo es nuestro deseo de que cuente con el mayor respaldo parlamentario, como ha sido siempre el caso".

http://tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Memoria2006_1.aspx

¹³⁷ DE LA OLIVA SANTOS, A.: "Tribunal Constitucional y Jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión". Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales. McGraw-Hill. Madrid, 1996. Pág. 15-16.

VIVES ANTÓN, T.: "Tribunales de Justicia y Jurisprudencia Constitucional". Revista del Poder Judicial. Nº 2, 1986. Pág. 9-12.

SCHNEIDER, H.P.: «Jurisdicción constitucional y separación de poderes», Revista Española de Derecho Constitucional 5, p. 56 y ss.

esto es, aquellos casos en los que la interpretación efectuada por el Tribunal tiene sólo una vinculación mediata o indirecta con el derecho fundamental alegado en amparo, es decir, no está directamente unido a un problema de constitucionalidad¹³⁸. En la mayoría de estos casos nos encontramos con interpretación de normas procesales que, efectivamente, en última instancia pueden reconducirse a una interpretación de conformidad a un determinado derecho fundamental pero eso no significa que, ni la norma en sí considerada, ni la interpretación que pueda darse a los preceptos legales tengan que ser directamente vulneradores de los derechos fundamentales¹³⁹.

Por tanto, y al albur de una interpretación constitucional correcta en relación al derecho fundamental, lo que se está en muchos casos realizando es una interpretación de la legalidad ordinaria pues, como bien dijo el Tribunal Constitucional *“es difícil concebir una norma que no tenga una conexión, al menos remota, con un derecho fundamental”*¹⁴⁰. Ello ha supuesto que disposiciones en materia de ordenación procesal, de procedimiento sancionador o leyes ordinarias sustantivas o materiales, entre otras, se hayan convertido en objeto directo de control de conformidad a los derechos fundamentales, sin tener en cuenta que determinados preceptos que son analizados por el Tribunal sólo se puede encontrar en ellos una conexión remota con tales derechos fundamentales¹⁴¹.

Es en el control que realiza el Tribunal Constitucional sobre la selección de la norma aplicable al caso, su interpretación y aplicación que ha realizado el órgano jurisdiccional, la que se considera lesiva de la actuación que ha de llevar a cabo la jurisdicción ordinaria. No se trataría, por tanto, de controlar o revisar que la norma fundamental sea contraria al derecho fundamental o que la interpretación que se haya realizado sea lesiva del mismo, sino que

¹³⁸ SIEIRA MÍNGUEZ, J.M.: “Posición constitucional del Tribunal Supremo”. VVAA. *El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucional: jornadas en conmemoración del XXV Aniversario de la Constitución de 1978*. CGPJ. Madrid, 2004. Pág. 155.

¹³⁹ En tal sentido es manifestado por MARÍN GÁMEZ para quien “lo que provoca fricciones, seguramente con razón, es que la aplicación de la legalidad por la jurisdicción ordinaria haya sido revisada por el Tribunal Constitucional sin que existiera un nexo claro entre esa revisión y el contenido esencial del derecho fundamental invocado”. En MARÍN GÁMEZ, J.A.: *Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional*. Ariel. Barcelona, 1998. Pág. 115-116.

¹⁴⁰ STC núm. 6/1982, de 22 febrero. F.J. 6º.

¹⁴¹ En MARÍN GÁMEZ. *Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional*. Op. cit. Pág. 115-116.

estaría el Tribunal “llevando a cabo un juicio de idéntica naturaleza y con el mismo contenido que los del juicio jurisdiccional encomendado a los tribunales ordinarios”¹⁴².

Por tanto, dejando al margen los supuestos en los que el Tribunal Constitucional puede y debe rechazar la interpretación de la ley contraria al derecho fundamental, su labor no puede suponer una invasión de la función jurisdiccional atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria¹⁴³. Se deben establecer mecanismos, tanto legales como límites jurisprudenciales, que permitan una mayor deferencia respecto a la actividad jurisdiccional de selección, interpretación y aplicación de norma aplicable¹⁴⁴. Tal actividad debe ser reversada a los órganos de la jurisdicción ordinaria, ya que la interpretación de la norma que ha de realizar el juez ordinario y el Tribunal Constitucional difieren principalmente en la posición que ambos ocupan cuando se enfrentan a la misma¹⁴⁵, en los que sólo podrá entrar cuando se produzcan supuestos muy extremos de irrazonabilidad¹⁴⁶.

¹⁴² DE LA OLIVA SANTOS. “*Tribunal Constitucional y Jurisdicción ordinaria...*”. *Op.cit.* Pág.21.

¹⁴³ GONZÁLEZ RIVAS, J.J.: *Estudio legal y jurisprudencial del Tribunal Constitucional*. Civitas. Madrid, 2001. Págs. 207-209.

¹⁴⁴ En tal sentido lo expresa ARAGÓN REYES: “Ahora bien, ello sólo debe hacerse, como es también obligado, cuando la interpretación que se rechaza vulnere indudablemente la Constitución y cuando la interpretación que se impone sea la única constitucionalmente posible. Para el Tribunal Constitucional (para cualquier Tribunal Constitucional) debe regir una doble máxima: en su actividad de control de la emanación constitucional de las leyes, en caso de duda, a favor del Legislador; y en su actividad de control de la aplicación constitucional de las leyes, en caso de duda, a favor del poder judicial y, por supuesto, de su órgano superior (creador de la jurisprudencia legal), el Tribunal Supremo”. En “*Relaciones Tribunal Constitucional...*”. Págs. 38-39.

¹⁴⁵ Así es expresado por PRIETO SANCHÍS cuando en relación a la interpretación constitucional de la ley manifiesta “ante un cierto caso, sólo cabe una solución justa o adecuada, y esa es precisamente la prevista por el autor de la norma, que desempeña el papel de premisa mayor. En cambio, el intérprete constitucional no busca en realidad una solución al caso, sino la delimitación de un campo de licitud dentro del cual otros operadores jurídicos adoptarán la solución con arreglo a criterios políticos (Legislador) o jurídicos (juez); por eso, su modo de argumentar no puede ajustarse a los cánones de la subsunción, sino a los de la razonabilidad, que implican necesariamente un juicio valorativo y prudencial del que sólo puede ser responsable el propio intérprete. Dicho de otro modo, el tipo de razonamiento de un juez ordinario supone concebir la decisión «como si» derivase del Legislador, mientras que el modelo de razonamiento del juez constitucional, al tener que definir el ámbito más o menos extenso de la licitud, reclama del intérprete la asunción de una mayor responsabilidad en la decisión”, en “Notas sobre la interpretación constitucional”. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. Núm. 9, mayo-agosto 1991. Pág. 177.

¹⁴⁶ PÉREZ SÁNCHEZ, G.: “Tribunal Constitucional y legalidad ordinaria”. *Anales de la Facultad de Derecho*. Núm. 26, diciembre de 2009. Pág. 80.

No obstante, en esta actividad del Tribunal Constitucional han influido también aquellos derechos fundamentales de configuración legal, puesto que se hace imprescindible la actividad del Legislador para su configuración. Nos referimos, principalmente, al desarrollo de los derechos de participación del artículo 23 CE y también el derecho a la legalidad penal y sancionadora, art. 25 CE, entre otros¹⁴⁷.

Si bien es necesaria la deferencia hacia el Legislador democrático, debe realizarse un esfuerzo por parte del Tribunal Constitucional por evitar a toda costa intentar salvar el precepto legal, pues en muchos casos supone no sólo forzar una interpretación conforme a la Constitución, sino que supone además imbuirse de plano en el ámbito reservado a los órganos jurisdiccionales que no es otro que el de la interpretación legal¹⁴⁸. De esta manera, el Tribunal Constitucional debe dejar intacta así la funciones constitucionales que son atribuidas en la Constitución a los órganos judiciales, (arts. 117.1 y 3 CE y 123.1 CE). Ello sin perjuicio, obviamente, de la facultad atribuida a los jueces y magistrados integrantes de la jurisdicción ordinaria para plantear la concreta *cuestión de inconstitucionalidad* cuando la única interpretación posible de la ley sea considerada como vulneradora del derecho fundamental. Y del propio Tribunal de elevar al Pleno la *autocuestión de inconstitucionalidad* para no forzar una interpretación de la ley que, en el fondo, puede ser la que de manera directa esté vulnerando el derecho fundamental.

2º) El control y fiscalización sobre el fondo del asunto realizado por los tribunales ordinarios basados, principalmente, en derechos fundamentales de carácter procesal.

En principio, las restricciones establecidas por la LOTC pueden llevar a concluir que el conocimiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo tiene unos límites estrictamente establecidos. Tales como: el carácter subsidiario del recurso; que sólo se podrá interponer cuando verse sobre la vulneración de aquellos derechos establecidos en el artículo 53.2 CE que, en

¹⁴⁷ MEDINA GUERRERO, M.: "Artículo 53.2 de la Constitución". VVAA. *Comentarios a la Constitución española. XXX Aniversario*. Fundación Wolters Kluwer. Madrid, 2008. Pág. X

¹⁴⁸ PÉREZ SÁNCHEZ. "Tribunal Constitucional y legalidad ordinaria". *Op. cit.* Pág. 91.

aquellos que procedan de un previo conocimiento por parte de la jurisdicción ordinaria, el Tribunal centrará en las violaciones de los derechos que tengan su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial; que se hayan agotado todos los medios de impugnación utilizables dentro de la vía judicial; además, que la vulneración sea fruto de una actuación u omisión directamente atribuible al órgano judicial, asimismo, le está vetado entrar a conocer de los hechos fijados; que el demandante ha invocado el derecho vulnerado tan pronto como hubiera sido posible, (art. 44 LOTC) y, además, se limitan sus facultades de actuación respecto y que sólo podrá concretar si se ha producido una vulneración del derecho fundamental y, por último, deberá abstenerse de realizar cualquier otra consideración respecto a la labor realizada por los jueces y tribunales, (art. 54 LOTC)¹⁴⁹.

A pesar de las expresas prohibiciones insertas en la regulación de la LOTC, el Tribunal Constitucional abrió una vía a través de los derechos a la tutela judicial efectiva y los demás derechos de carácter procesal del artículo 24 CE, al que el Tribunal ha dotado de gran amplitud¹⁵⁰. A través de esa apertura no sólo ha conocido sobre el fondo de aquellos recursos en los que el objeto principal ha sido un derecho fundamental tutelable en amparo, sino que ha supuesto conocer de cualquier procedimiento judicial con independencia de cuál fuese su objeto litigioso. Esto, en principio, no debe ser objeción ninguna puesto que, efectivamente, también forma parte de los derechos tutelables en amparo el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero la

¹⁴⁹ “[P]orque las palabras utilizadas como instrumento para la expresión de las ideas que el artículo 54 de la LOTC contiene son bien claras, y no ofrecen dudas en cuanto se pone atención sobre las que sirvieron de antecedente a las que hoy hemos de interpretar. Se han utilizado las palabras *cualquier otra consideración* para sustituir estas otras: *revisión, fiscalización, censura, fijación de los hechos, interpretación, y aplicación del derecho al caso concreto*.” MUÑOZ CAMPOS, J.: “Recurso de amparo frente a resoluciones judiciales: ¿ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo?” *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. Nº 1, 1983. Pág. 1242.

¹⁵⁰ Entre los que cabe destacar: el derecho de acceso a la jurisdicción y a los recursos; el derecho a obtener una resolución respecto al fondo del asunto que sea congruente, motivada y fundada en Derecho; derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y el derecho a no sufrir indefensión; entre otras vertientes o derechos insertos en el citado artículo 24 CE. En relación *sobredimensionamiento* del contenido constitucional de alguno de los derechos, sobre todo, los establecidos en el artículo 24 y la necesidad de su redefinición por parte del Tribunal Constitucional, PÉREZ TREMPES en “El recurso de amparo constitucional. Aspectos procesales II”. VV.AA. *Los procesos constitucionales (Segundo Simposio de Derecho Constitucional, Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992. 130.

crítica vertida no es respecto a dicho derecho sino a la utilización del mismo por parte del Tribunal Constitucional¹⁵¹.

A través de la alegación de la vulneración de los derechos procesales establecidos en el artículo 24 CE, fuera cual fuera el procedimiento judicial previo, se ha podido llegar por esta vía a una revisión del proceso judicial originario¹⁵². Lo que ha llevado a la situación paradójica de que, al final, un órgano que originariamente se ideó para controlar los abusos de la mayoría frente a los derechos de las minorías a través del control de constitucionalidad de ley, se acabara convirtiendo en un órgano controlador de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, dando una falsa impresión de ser de los tres poderes del Estado el más *peligroso*, tanto por el número de recursos de amparo interpuestos contra su actuación como por el número de resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional¹⁵³. Si bien es cierto que el artículo 24 CE ha servido para, en los momentos iniciales de la puesta en marcha de nuestra actual Constitución, depurar los mecanismos procesales que en gran medida, por instaurarse a través de leyes procesales previas a la Constitución, eran contrarias a las garantías ya establecidas en dicho artículo¹⁵⁴. Con lo cual, no sólo ha servido para esa inicial depuración, sino para dotar al Legislador de unos parámetros claros y definidos respecto al desarrollo normativo de las correspondientes normas procesales en los distintos órdenes jurisdiccionales.

El Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias procedió a determinar el alcance del art. 24.1 CE, determinando el derecho de acceso a

¹⁵¹ En tal sentido fue expresado por SANTAOLLA LÓPEZ: “Pues se ha querido construir un entramado tan desarrollado y generoso para la protección de cualquier derecho o interés de los ciudadanos que ha llevado a equiparar —basándose en el artículo 24 de la Constitución— a cualquier vicio procesal con auténticas violaciones de la Constitución. Y así se ha acabado por dejar desatendido lo principal.”. En “El recurso de amparo y el desamparo del Tribunal Constitucional” *Revista de Derecho Político*, Nº 24, 1987, págs. Pág. 165.

¹⁵² “Este carácter <<revisor>> de las sentencias en el procedimiento ordinario de tutela por parte de un órgano extraño al Poder Judicial es, a nuestro modo de ver, la principal disfunción introducida en nuestro sistema jurídico-político por el RAC y puede ser fuente de un constante conflicto entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios”. DE ALFONSO BOZZO. *Op.cit.* Pág. 684.

¹⁵³ LÓPEZ GUERRA, L.: “Jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional”. *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 43.

¹⁵⁴ LÓPEZ GUERRA, L.: “Jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional”. *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 45.

la justicia y al concreto proceso, que el mismo se desarrolle y se obtenga una sentencia sobre el fondo del asunto o una resolución que esté fundada en Derecho; determinando, además, que no formaba parte del derecho el obtener una sentencia favorable o que la misma sea errónea, es decir, el derecho a la tutela judicial no amparaba el acierto judicial¹⁵⁵. Ahora bien siempre que tal resolución o decisión jurisdiccional no sea incongruente, irrazonable, arbitraria o ha incurrido en error patente¹⁵⁶. Se han desentrañado cánones o test de actuación utilizados por el Tribunal para depurar las lesiones más patentes o burdas en relación al derecho a la tutela judicial efectiva y la actuación llevada a cabo por la jurisdicción ordinaria¹⁵⁷.

Es ahí, en la utilización que de tales conceptos ha utilizado, en esa última apreciación del Tribunal Constitucional, en la incongruencia, irrazonabilidad, arbitrariedad y el error patente¹⁵⁸ apreciado por éste donde se encuentra la vía del Tribunal para conocer de la labor efectuada por el juzgador de instancia, revisando así la labor jurisdiccional llevada a cabo por el juez ordinario. No se trata de la utilización de dichos cánones o test de razonabilidad, sino de cómo unos cánones que muestran una gran deferencia hacía el juez finalmente han sido utilizados o han implicado una completa revisión de la actuación judicial. La aplicación de este test o principio de razonabilidad ha servido como criterio para resolver la cuestión ante él suscitada sobre todo en relación a los derechos de los arts. 14, 24 y 25 CE. Pero en muchos casos la motivación exigida, incluso estableciendo un canon de razonabilidad reforzado, ha llevado al Tribunal a convertirse en una

¹⁵⁵ SSTC 4/1984, de 23 de enero; 81/1985, de 4 de julio; 146/1985, de 28 de octubre; 19/1986, de 7 de febrero; 45/1987, de 9 de abril; 46/1987, de 21 de abril; 185/1987, de 18 de noviembre; entre muchas otras.

¹⁵⁶ SSTC 90/1990, de 23 de mayo; 233/1991, de 10 de diciembre; 164/1992, de 26 de octubre; 95/1993, de 22 de marzo; 180/1993, de 31 de mayo; 126/1994, de 25 de abril; 203/1994, de 11 de julio; 242/1994, de 20 de julio; 42/1997, de 10 de marzo; 54/1997, de 17 de marzo; 62/1997, de 7 de abril; 66/1997, de 7 de abril; 218/1997, de 4 de diciembre; entre otras.

¹⁵⁷ El profesor VIVER I PI-SUNYER señala hasta cinco tipos de controles o cánones distintos: el control externo; el control de la corrección fáctica; el control sobre la actividad de carácter materialmente procesal; el control sobre la corrección lógica; el control de rechazo referido a la corrección jurídica y el control de sustitución referido a la corrección jurídica. "Diagnóstico para una reforma". *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.27-28.

¹⁵⁸ ROCA TRÍAS, E. y AHUMADA RUIZ, M.A.: "Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional española". *Reunión de Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España*. Roma, octubre 2013. Págs. 27-33.

auténtica última instancia revisora¹⁵⁹. No sólo respecto a la concreta actuación judicial, sino también respecto a la selección de la norma aplicable. Algo que ha sido profundamente criticado por la doctrina¹⁶⁰ y una de las causas que han llevado a proclamar la invasión del ámbito de actuación de la jurisdicción ordinaria por parte del Tribunal Constitucional¹⁶¹.

También y en relación a la inserción por parte del Tribunal del precepto establecido 120.3 CE, esto es, el derecho a la *motivación* de las resoluciones judiciales como faceta propia del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE. Pero no ya, que esa motivación deba de darse y ser suficiente sino que además ha de ser una motivación jurídica razonable o aceptable. Esto último implica que, para llevar a cabo un control por parte del Tribunal, deberá no sólo comprobar que dicha motivación existe sino que además la motivación sea congruente y suficiente respecto a todos los elementos del caso enjuiciado, entre los cuales se encuentra las normas sustantivas aplicables al caso concreto¹⁶², sustituyendo así la labor de enjuiciamiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria.

3º) El control por parte del Tribunal respecto a los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria.

La LOTC en su artículo 44 determina que el Tribunal entrará a conocer de la concreta violación del derecho *con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional*.

¹⁵⁹ ROCA TRÍAS, E. y AHUMADA RUIZ, M.A.: “Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional española”. *Reunión de Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España*. Roma, octubre 2013. Págs. 35-36.

¹⁶⁰ “Parece necesario someter a seria reflexión esos artículos de la LOTC que permiten pasen las resoluciones judiciales a la censura del Tribunal Constitucional”. MUÑOZ CAMPOS, J.: “Recurso de amparo frente a resoluciones judiciales: ¿ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo?” *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. Nº 1, 1983. Pág. 1238.

¹⁶¹ “[E]l sistema tiene un carácter redundante y revisionista del sistema de garantías establecido ante la jurisdicción ordinaria. Pese a las declaraciones legales, está tendencialmente destinado a expresarse como un correctivo de la aplicación de la Constitución por los jueces.”. DE ALFONSO BOZZO. *Op.cit.* Pág. 686.

¹⁶² Nos remitimos a lo analizado más arriba sobre la interpretación de la ley por el Tribunal Constitucional.

Es decir, el Legislador orgánico estableció una concreta prohibición en materia de hechos probados pues esa función es exclusivamente atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Pero esa expresa prohibición no alcanza a la interpretación efectuada por la inexistencia de actividad probatoria, falta de prueba de cargo o vicios en la actividad probatoria o en la obtención de la prueba de cargo. Algo que, en el fondo, ha supuesto una revisión de la actividad probatoria y de la apreciación judicial efectuada. No quedándose sólo en comprobar si la actividad llevada a cabo por el órgano judicial ha sido o no razonable o arbitraria, sino yendo más allá y realizando un nuevo escrutinio de la actividad jurisdiccional en torno a los hechos y los medios probatorios¹⁶³.

En definitiva, esta ampliación de funciones del Tribunal Constitucional no sólo lo han convertido en órgano no exclusivamente destinado a la tutela de los derechos fundamentales y libertades, sino que por la vía del artículo 24 CE se ha producido una expansión de la labor del Tribunal Constitucional que ha desembocado no ya en la existencia de fricciones respecto a la labor de los tribunales ordinarios, ni tan siquiera convertirse en una *super-casación*, sino que ha desembocado en que el mismo se convierta en una tercera o cuarta instancia judicial más, que hace que sea posible la revisión de la aplicación de norma sustantiva realizada por el juez de instancia, control de los hechos probados en la misma, así como controlar la resolución de fondo dictada. Algo que, además de estarle expresamente prohibido por la LOTC, es

¹⁶³ BILBAO UBILLOS, J.M.: "Ponencia española: crónica de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en los últimos años". *Los derechos en Latinoamérica: tendencias judiciales recientes*. VVAA. FIIAP. Ed. Complutense. Madrid, 2011. Pág. 287.

expresamente rechazado por todos los sectores doctrinales¹⁶⁴ y no sólo por los órganos de la jurisdicción ordinaria¹⁶⁵.

Creemos que la interpretación del artículo 24 CE efectuada por el Tribunal Constitucional, en muchas ocasiones, no se ha ajustado a los estrictos términos del mismo, pues el derecho en él determinado está circunscrito al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que, a su vez, estaría integrado por otros derechos, que son: derechos de acceso a la jurisdicción, derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada en Derecho y en la eficacia de la resolución. Ahora bien, el artículo 24.2 CE establece una serie de garantías procesales que permiten su ejercicio, como son: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la defensa y asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a un proceso público con las debidas garantías, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. “Si bien estas garantías, en realidad, son derivaciones del derecho fundamental establecido con carácter general en el primer apartado”¹⁶⁶.

¹⁶⁴ En tal sentido lo expresa PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA al referirse a las disfunciones respecto al conocimiento por parte del Tribunal Constitucional respecto a determinados derechos tutelables en amparo: “En general, no disponemos de previsiones normativas que respondan a la realidad de la invocación masiva de los artículos 14 (alegando infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley) y 24.1 (argumentando cualquier incumplimiento procesal), ambos de la Constitución, como grandes portillos a través de los cuales prácticamente cualquier pretensión puede hacerse valer, primero, por esta vía [procedimientos ordinarios] y, después, ante el Tribunal Constitucional, con independencia de su alcance real. El resultado no es sólo el retraso que la avalancha de recursos produce en el Tribunal Constitucional, sino que éste acaba convertido, no tanto en el juez de las leyes y de los derechos fundamentales, sino en el juez de jueces, cuyas decisiones acaba revisando de modo casi sistemático. Eso puede conducir a la desnaturalización de su cometido y un menoscabo de las atribuciones propias de los órganos del Poder Judicial, con evidentes perjuicios para la funcionalidad de todo el sistema.”, en “El amparo judicial de los derechos fundamentales”. *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 123.

¹⁶⁵ SALA SÁNCHEZ, P.: *La delimitación de funciones en las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales*. Discurso leído por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el solemne acto inaugural del año judicial el día 12 septiembre de 1994. Tribunal Supremo. Madrid, 1994.

¹⁶⁶ UREÑA CARAZO, B.: “Argumentación jurídica sobre los derechos fundamentales y artículo 24 de la Constitución Española”. *CEFD*. Nº.23, 2011. Pág. 601.

No obstante, como bien matiza BORRAJO INIESTA, es necesario distinguir entre los hechos procesales y los hechos sustantivos¹⁶⁷. En el primer caso se analiza la actividad jurisdiccional en relación a las normas procesales que regulan el concreto proceso y, por tanto, si la actividad jurisdiccional se corresponde con las obligaciones que imponen tales normas procesales. En el segundo, se analiza la actividad probatoria en el caso concreto y la valoración de las pruebas practicadas. Mientras que para él, el primer supuesto supondría una actividad jurisdiccional propia de un recurso ante una instancia superior, en el segundo caso, sí supone una actividad propia de la “jurisdicción constitucional”, la indeterminación del contenido normativo de los derechos fundamentales hace que en su aplicación haya de singularizarse a los casos concretos, con lo cual, difícilmente el Tribunal podrá no conocer de los hechos que dieron lugar al mismo para dilucidar el alcance concreto del derecho fundamental del que se trate¹⁶⁸.

Entendemos, en relación a lo anterior, que la doctrina mayoritaria fija su atención o su crítica, como elemento de fricción respecto a la jurisdicción ordinaria, en el conocimiento por parte del Tribunal de los hechos sustantivos. Si bien compartimos la opinión de BORRAJO INIESTA que es ahí donde se produce un conocimiento sobre el derecho fundamental concreto, no es menos cierto, que el conocimiento individualizado en la mayoría de los supuestos supone una mera subsunción del contenido material del derecho al caso concreto, es decir, que ese contenido material ya existe y que, por tanto, su aplicación al caso concreto no corresponde, ni primariamente, ni en exclusividad al Tribunal Constitucional.

Al dictar una resolución de fondo el juzgador de instancia no sólo debe aplicar debidamente el derecho procesal y las normas sustantivas correspondientes sino también debe actuar de conformidad al contenido constitucionalmente declarado del derecho fundamental. El Tribunal, en esa gran mayoría de ocasiones, su actuación no se ciñe al cotejo entre los hechos

¹⁶⁷ BORRAJO INIESTA, I.: “Mitos y realidades de la jurisdicción constitucional de amparo: hechos, derecho, pronunciamientos, admisión, costes”. *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, N.º. 3, 2008. Pág. 166-169.

¹⁶⁸ BORRAJO INIESTA. “Mitos y realidades...”. *Op.cit.* Pág. 166-169.

y el derecho fundamental, sino que además lleva aparejado una reconsideración de los hechos y de las normas sustantivas aplicables al caso. Esto no es, por tanto, un juicio de adecuación de los derechos fundamentales a los hechos o la actuación judicial, sino que en muchos casos supone un nuevo enjuiciamiento del caso concreto a través del recurso de amparo¹⁶⁹. Por tanto, la adecuación del caso concreto, de los hechos, al contenido material de los derechos fundamentales no es labor exclusiva del Tribunal, más bien al contrario, es una labor que debe corresponder en exclusiva a los órganos de la jurisdicción ordinaria cuando existe ya esa labor doctrinal de determinación del concreto contenido material del derecho y libertad fundamental¹⁷⁰.

Es cierto que el Tribunal Constitucional, en relación al conocimiento de los derechos procesales contenidos en el artículo 24 CE, inició que una doctrina denominada como “parvedad de la materia” consistente en no entrar al fondo del asunto debido a su poca relevancia práctica pero, desafortunadamente, esta doctrina no ha acabado consolidándose¹⁷¹.

¹⁶⁹ “Existen, pues, dos objetos procesales distintos y claramente diferenciados: el del proceso ordinario en el que se produce la posible violación de un derecho fundamental y el proceso constitucional originado en un acto u omisión del órgano jurisdiccional que ha provocado la vulneración de algún precepto, de los de carácter formal, que da origen al amparo ante el Tribunal Constitucional.

Pero es que, además, (...), correctamente interpretado debe quedar reducida al supuesto señalado anteriormente (...); esto es, acciones u omisiones de los órganos jurisdiccionales que no guarden relación con los hechos que son objeto del proceso previo. En otras palabras, lo que se está es indirecta pero claramente excluyendo del ámbito del amparo, (...), las posibles violaciones que in iudicando, con relación al juicio de fondo que verifiquen, puedan cometer los jueces y tribunales ordinarios. Es decir, que la L.O.T.C., excluye del amparo constitucional todas aquellas violaciones de derechos fundamentales que no sean incidentales en el proceso previo: cuando en un proceso jurisdiccional ordinario coincide el objeto del proceso con la protección de un derecho constitucional la vía del recurso de amparo no está abierta.

Sin embargo, ésta no ha sido la tesis que ha acogido la jurisprudencia del Tribunal que ha interpretado torcidamente este precepto estimando que queda abierta la vía del amparo constitucional cuando los órganos judiciales en sus resoluciones de fondo presuntamente violen algún derecho fundamental. Las únicas limitaciones del Tribunal Constitucional, en estos casos, serán las de respetar los hechos declarados ciertos en la sentencia impugnada – y la de abstener de hacer cualquier consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales (art. 55 L.O.T.C.).” CASTILLO RIGABERT, F.: *La admisión del recurso de amparo...* Pág. 79-80.

¹⁷⁰ REVENGA SÁNCHEZ, M.: “Las paradojas del recurso de amparo tras la primera década de jurisprudencia constitucional (1981-1991)”. *REDC*. Año 14, núm. 41, mayo-agosto 1994. Pág. 32.

¹⁷¹ VIVER PI-SUNYER, C. y LÓPEZ BOFILL, H.: “Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión”. En *Jurisdicción Constitucional y Judicial en el Recurso de Amparo. Tirant lo Blanch*. VVAA. Valencia, 2006. Pág. 156.

En definitiva, de lo que hemos analizado más arriba se deriva una jurisprudencia constitucional de la que pueden extraerse una serie de cánones o test de enjuiciamiento que aplica el Tribunal Constitucional cuando entra a conocer de las alegaciones en relación al artículo 24 CE, controles que se caracterizan por su diversa índole o intensidad del enjuiciamiento llevado a cabo. Así, en primer lugar, se encuentra el llamado *control meramente externo de la corrección del contenido del razonamiento o de la decisión adoptada por los órganos judiciales*¹⁷², es decir, el enjuiciamiento no incide o entra a fiscalizar la labor del órgano judicial respecto a la selección de la norma aplicable y la interpretación y aplicación que de la misma haya realizado, sino que se limita a controlar de manera externa o formal dicha actividad sin entrar en las cuestiones de fondo del enjuiciamiento realizado. En segundo lugar, el control sobre la *corrección fáctica del razonamiento o de la decisión judicial recurrida*¹⁷³, en este caso el enjuiciamiento del Tribunal se centra en los errores materiales evidentes y patentes efectuados por el órgano judicial. En tercer lugar, *el control sobre la actividad de carácter materialmente procesal*¹⁷⁴. En cuarto lugar, el *control sobre la corrección lógica de la resolución recurrida* o del razonamiento realizado por el órgano judicial. Es decir, el Tribunal entra a controlar la motivación jurídica practicada por el órgano judicial para comprobar su congruencia respecto al resultado. En quinto y último lugar, el *control sobre el contenido jurídico del razonamiento seguido y de la decisión adoptada por la resolución judicial al seleccionar, interpretar y aplicar tanto preceptos procesales como sustantivos*¹⁷⁵.

Por tanto, es la intensidad en el enjuiciamiento llevada a cabo por el Tribunal Constitucional sobre el control o fiscalización de la actividad judicial desde un punto de vista jurídico, fáctico y respecto a la resolución de fondo dictada la que se estima como una injerencia y duplicidad de la labor que realizan los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria, convirtiendo al recurso de amparo en una última instancia judicial¹⁷⁶. Por ello, la actuación del Tribunal debería circunscribirse a la aplicación de los “tests de enjuiciamiento

¹⁷² VIVER PI-SUNYER y LÓPEZ BOFILL. “Derecho a la tutela judicial...”. *Op. cit.* Pág. 158.

¹⁷³ VIVER PI-SUNYER y LÓPEZ BOFILL. “Derecho a la tutela judicial...”. *Op. cit.* Pág. 159.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ VIVER PI-SUNYER y LÓPEZ BOFILL. “Derecho a la tutela judicial...”. *Op. cit.* Pág. 159.

¹⁷⁶ VIVER PI-SUNYER y LÓPEZ BOFILL. “Derecho a la tutela judicial...”. *Op. cit.* Pág. 160.

del derecho a obtener una respuesta judicial sobre el fondo de las pretensiones suscitadas deberían reducirse, pues, a los propios del control externo (existencia de motivación, incongruencia omisiva, extra petitum y por error y reformatio in peius), del control de la corrección fáctica (test de error material patente) y del control de la corrección lógica (test de razonabilidad lógica)”¹⁷⁷.

Todo lo anterior tiene una serie de consecuencias, no sólo respecto a las fricciones entre la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, sino también en relación a los propios justiciables que han visto como, por vía interpretativa del art. 24 CE y también de los artículos 14 y 25 CE, el Tribunal se ha convertido en una instancia revisora de cualquier procedimiento judicial. Con lo cual, no es de extrañar, la relación entre el alto porcentaje de demandas de amparo en las que se invoca el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el resto de derechos procesales, como fuente de la vulneración con independencia del objeto del proceso del que trae causa. Por tanto, y tampoco nos debe de extrañar, que el acudir al Tribunal Constitucional suponga una posibilidad más cuando están en juego para el justiciable cuestiones tan relevantes como es el sometimiento a la legalidad penal y sancionadora. El acudir a la vía del amparo por vulneración del artículo 24 CE supone una vía de recurso más pues a ello ha contribuido la propia labor del Tribunal Constitucional a través del amparo. No es de extrañar por tanto que si bien el recurso de amparo supone más de un 97% de los asuntos de los que conoce anualmente el Tribunal; de ellos, en un 73% aproximadamente, procedan de la jurisdicción penal y de la jurisdicción contencioso-administrativa¹⁷⁸.

Dos son, por tanto, las disfunciones¹⁷⁹ que claramente derivan de la atribución competencial en materia de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: el primero, el ingente número de demandas de amparo que anualmente se interponen ante dicho Órgano constitucional y, con ello, el consiguiente retraso en el conocimiento del resto de funciones que tiene atribuidas, principalmente, las que inciden en el control de constitucionalidad

¹⁷⁷ VIVER PI-SUNYER y LÓPEZ BOFILL. “Derecho a la tutela judicial...”. *Op. cit.* Pág. 161-162.

¹⁷⁸ Datos extraídos de las Memorias Anuales publicadas por el Tribunal Constitucional.

<http://tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/default.aspx>

¹⁷⁹ BORRAJO INIESTA. “Mitos y realidades...”. *Op.cit.* Pág. 160.

de la ley. En segundo lugar, las interferencias que tal recurso ha provocado en el normal desenvolvimiento de las funciones atribuidas a los órganos de la jurisdicción ordinaria, tal y como hemos visto más arriba. Esto último, es decir, la revisión en sede de amparo constitucional de la labor jurisdiccional efectuada por los órganos del Poder Judicial, es una de las causas que han podido llevar a originar la primera de las disfunciones, es decir, esa masiva interposición de las demandas de amparo pues, en multitud de ocasiones, ha supuesto que por la vía del conocimiento de las lesiones de los derechos a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), como principalmente a través del conocimiento de las posibles vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y otros derechos, se ha producido una revisión del ejercicio y función jurisdiccional que sobre el caso particular ha realizado el juzgador de instancia.

No sólo, como hemos visto, se achaca que la función del Tribunal a través del amparo se ha convertido en un órgano jurisdiccional más o en *super-casación* en la que pueda revisarse cualquier actuación jurisdiccional sino que también, en gran parte de las sentencias dictadas en amparo lo que se produce es una reiteración y aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los concretos derechos fundamentales a supuestos con escasa trascendencia¹⁸⁰. Además, a la par que decreciendo la doctrina del Tribunal, no se produce un correspondiente descenso del esfuerzo que debe realizar en relación a los recursos de amparo¹⁸¹.

No obstante, se ha planteado que la función del recurso de amparo en sede constitucional y el conocimiento que del mismo puede realizar y realizan los órganos de la jurisdicción ordinaria no se puede plantear en términos de “estricta constitucionalidad” para diferenciarlo de la “estricta legalidad” pues, la función del recurso de amparo, se corresponde más con un control difuso, propio del sistema norteamericano, que del control concentrado europeo¹⁸².

¹⁸⁰ VIVER I PI-SUNYER. “*Diagnóstico para una reforma*”. *Op. cit.* Pág.19.

¹⁸¹ VIVER I PI-SUNYER. *Ibidem*.

¹⁸² CRUZ VILLALÓN, P.: “Sobre el amparo”. REDC, año 14, núm. 41, mayo-agosto, 1994. Pág. 12-13. También en tal sentido, ARAGÓN REYES, M.: “Problemas del recurso de amparo”. *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.173-175.

Desde nuestro punto de vista, es de entender que, para quien ha visto desestimadas sus pretensiones en sede jurisdiccional, vea al recurso de amparo como una posibilidad más, una vía jurisdiccional más y última para que se conozca del fondo del asunto y poder así obtener una resolución conforme a tales pretensiones. Por tanto, y desde nuestro punto de vista, ambas disfunciones lejos de ser compartimentos estancos o ser fruto de realidades distintas están íntimamente conectadas. Por ello, una restricción de dicha función de revisión de la labor jurisdiccional que debe realizar exclusivamente los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, ya sea por propia iniciativa del Tribunal, ya sea porque así se establezca por el Legislador en la LOTC, debe conllevar una disminución de la interposición de demandas al menos a largo plazo. Puesto que, al igual que ha supuesto un aumento porque siempre cabía una revisión por parte del Tribunal, el hecho de que se elimine esa posibilidad hará que, a la larga, no pueda verse al recurso de amparo como una posibilidad de revisión más de la función jurisdiccional¹⁸³. Al igual que el conocimiento de esos recursos de amparo ha llevado a alentar al justiciable a que puede producirse un nuevo enjuiciamiento del asunto por la vía del amparo, la labor del Tribunal Constitucional –sea por iniciativa propia, sea por determinación legal en tales términos- debe llevar a desalentar al demandante que pretende dicha revisión a través del amparo.

No es por tanto eliminar una figura como es el recurso de amparo que ha sido y es tan importante en la construcción de nuestro sistema constitucional, sino llevarlo a sus justos términos tras esa importantísima labor de más de treinta años llevada a cabo por el Tribunal Constitucional.

¹⁸³ Sin embargo para autores como el profesor CARRASCO DURÁN, el Tribunal Constitucional debe de convivir con ese ingente número de demandas, entre otras razones, porque ello es síntoma de una *buena salud* del recurso de amparo y de la confianza que en él deposita la ciudadanía. “Amparo Judicial: presente y futuro”. *Revista de Derecho Político*, núm. 68, 2007. Pág. 124-125.

III.- LAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO.

Es de sobra conocido y repetido hasta la saciedad por la doctrina constitucionalista la situación de profunda crisis¹⁸⁴, no sólo a consecuencia de las fricciones entre el TC y los órganos de la jurisdicción ordinaria, sino también a consecuencia de la avalancha¹⁸⁵ en la interposición de demandas de amparo. Como hemos visto, sólo hay que acudir a las Memorias anuales del Tribunal Constitucional para, en un simple vistazo, corroborar tales afirmaciones. Algo que ha dado lugar a que a partir de los años 90, se desarrollen debates doctrinales destinados a buscar posibles salidas a esa situación del Tribunal Constitucional que llegó a ser de auténtico colapso y que estaba abocado a una inmediata situación de crisis funcional¹⁸⁶. En los siguientes apartados hemos intentado sintetizar todas estas opciones y posibilidades aportadas por la doctrina científica que, como se podrá comprobar, lo son de muy diversa índole.

1º) Propuestas que no conllevan reformas constitucionales ni legales.

No obstante, también se planteó que, sin necesidad de reformar la LOTC, se pudiera interpretar la regulación de manera más estricta, sobre todo de las causas de inadmisión¹⁸⁷ y, en concreto, de la *carencia manifiesta de contenido*, concepto jurídico indeterminado que permitía un amplio margen de apreciación por parte del Tribunal, alcanzándose así una mayor objetivación del recurso de amparo y un mejor deslinde entre las funciones atribuidas a la jurisdicción ordinaria y las que corresponde al Tribunal Constitucional¹⁸⁸.

¹⁸⁴ PÉREZ TREMPES, P.: "Tribunal Constitucional, Juez ordinario y una deuda pendiente del Legislador". En *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.181.

¹⁸⁵ Así lo calificó FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, no sólo en su discurso de despedida como Presidente del Tribunal Constitucional, sino también a través de otros medios más accesibles para la ciudadanía en general: http://elpais.com/diario/1994/02/11/opinion/760921210_850215.html, donde el 11 de febrero de 1994, daba a conocer la situación del Tribunal Constitucional, así como apuntaba las reformas que en sus funciones necesitaba dicho órgano constitucional.

¹⁸⁶ ARAGÓN REYES. "Problemas del recurso de amparo". *Op.cit.* Pág.155-156.

¹⁸⁷ VIVER I PI-SUNYER. "Diagnóstico para una reforma". *Op. cit.* Pág.39.

¹⁸⁸ ALBERTÍ ROVIRA, E.: "El recurso de amparo constitucional: una revisión pendiente". VVAA. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.137.

También, sin necesidad de reformar el recurso de amparo, se insta al Tribunal Constitucional a un ejercicio de autocontrol o *autocontención* en relación a la fiscalización de la labor llevada a cabo por los órganos de la jurisdicción ordinaria¹⁸⁹, sobre todo en relación a los derechos del artículo 24 CE, dónde el Tribunal hiciese una interpretación vertical del derecho y no sólo horizontal del mismo¹⁹⁰. Aunque, tal autocontención, se vislumbra como una medida difícil de efectuar en la realidad práctica del Tribunal¹⁹¹.

A excepción de estas últimas propuestas, todas las que vamos a ver pasan por una mejora de la regulación desde un punto legislativo, ya sea respecto al desarrollo procesal de las competencias en materia de tutela ante la jurisdicción ordinaria, ya sea respecto a la reforma o modificación de la LOTC pues, ningún autor ha planteado de manera seria una reforma constitucional para la supresión del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, debido quizás a las reticencias que han existido y existen en nuestro país de efectuar modificaciones en el texto constitucional¹⁹², aunque ha habido autores verdaderamente reacios a este mecanismo de tutela¹⁹³.

¹⁸⁹ RUBIO LLORENTE, F.: "El recurso de amparo constitucional". *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. CEPC. Madrid, 1995. Pág. X

MURILLO DE LA CUEVA. "El amparo judicial de los derechos fundamentales". *Op.cit.* Pág. 139.

¹⁹⁰ VIVER I PI-SUNYER. "*Diagnóstico para una reforma*". *Op. cit.* Pág.31.

¹⁹¹ En tal sentido lo manifiesta el profesor ARAGÓN REYES para quien "[e]s posible que una mayor contención de la doctrina del Tribunal Constitucional pueda restringir algo este problema, sobre todo aplicando más severamente la distinción (extraordinariamente difícil en la mayoría de los casos) entre cuestiones de constitucionalidad y cuestiones de <<mera legalidad>>, o revisando la valoración de la prueba por los órganos judiciales sólo cuando dicha valoración sea claramente arbitraria. Pero esta apelación a la autocontención del Tribunal no remediaría mucho porque mediante ella lo que el Tribunal no puede (ni debe) hacer es <<desconstitucionalizar>> derechos fundamentales procesales que ya ha extraído, de manera perfectamente razonable y plausible, de la letra de los dos apartados del art. 24 CE."; en "Problemas del recurso de amparo". *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.163.

¹⁹² PÉREZ TREMPES. "*Tribunal Constitucional, Juez ordinario...*". *Op.cit.* Pág.203.

¹⁹³ Tal vez, SANTAOLLA LÓPEZ ha sido el que con mayor énfasis ha defendido tal posibilidad. "Por lo anterior, el mencionado recurso se presenta como un sobreañadido que no aporta nada fundamental, como un instrumento duplicativo y, por lo mismo, probablemente superfluo. Podría pensarse, como de hecho así ocurre, que las vías judiciales ordinarias en España no aportan de modo efectivo el papel teórico a que están llamadas, justificando así este nuevo recurso. Pero si este es el caso, lo que se imponía y se impone es una reforma tan profunda como necesaria de los Tribunales ordinarios, sin pretender hallar la solución en la mera adición de una nueva instancia que, además de complicar el panorama, lo que produce es un cúmulo tal de asuntos que lejos de suponer un efectivo amparo de los ciudadanos acarrea un tangible desamparo del Tribunal Constitucional.". En "El recurso de amparo y el desamparo del Tribunal Constitucional" *Revista de Derecho Político*, Nº 24, 1987, págs. 156-157. En tal sentido también, Jiménez Conde, F., en "Problemas actuales del recurso de amparo". *Anuario de derecho constitucional y parlamentario*. Núm. 2, 1990. Pág. 192.

2º) El desarrollo de la tutela preferente y sumaria del artículo 53.2 CE.

En tal sentido, las propuestas en relación a la reforma del recurso de amparo pasaban por un mejor desarrollo legislativo de la articulación entre la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional. Algunas de las propuestas incidían en un mejor desarrollo de la tutela ante aquella jurisdicción, sobre todo, que se produjese el desarrollo legislativo del procedimiento preferente y sumario (art. 53.2)¹⁹⁴, así como el establecimiento de algún tipo de recurso cuando la lesión se produzca en la resolución que ponga fin al proceso y sobre la que no exista recurso ordinario o extraordinario para combatirla, sin tener que acudir al Tribunal Constitucional¹⁹⁵; garantizándose así la subsidiariedad del recurso de amparo¹⁹⁶.

También se consideró la posibilidad de creación de una Sala de lo constitucional en el Tribunal Supremo¹⁹⁷, sobre todo para el conocimiento de aquellas vulneraciones del art. 24 CE, producidas en sede de la jurisdicción ordinaria. Aunque la mayoría de los autores no ven en ello una solución viable basadas en razones constitucionales¹⁹⁸, dificultades técnicas y teóricas¹⁹⁹ o, incluso también, que ello originaria nuevos conflictos, a los que ya han podido existir, entre la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional²⁰⁰; puesto que siempre cabría

¹⁹⁴ AROZAMENA SIERRA, J.: "Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional: balance de quince años". VVAA. *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. CEPC. Madrid, 1995. Pág. X

¹⁹⁵ LÓPEZ GUERRA, L.: "Jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional". *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 57.

MURILLO DE LA CUEVA. "El amparo judicial de los derechos fundamentales". *Op.cit.* Pág. 129.

¹⁹⁶ RODRÍGUEZ -PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: "Jurisdicción y justicia constitucionales". VVAA. *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. CEPC. Madrid, 1995. Pág. X

¹⁹⁷ APARICIO PÉREZ, M.: "Problemas actuales del recurso de amparo", VV.AA., *Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario*, núm. 2, 1990. Págs. 185-186.

¹⁹⁸ CRUZ VILLALÓN. "El recurso de amparo constitucional...". Pág. 119.

¹⁹⁹ PÉREZ TREMPES, P.: "La naturaleza del recurso de amparo y su configuración procesal". *Revista Vasca de Administración Pública*, núm.39, 1994. Pág. 100.

²⁰⁰ BORRAJO INIESTA, I.: "Reflexiones acerca de las reformas que necesita el amparo judicial. Sencillez y celeridad como criterios determinantes". *REDC*, núm. 43, enero-abril. Pág. 45.

interponer contra las resoluciones dictadas recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

3º) La supresión del amparo ante el Tribunal Constitucional.

Mientras que para algunos autores, la interpretación que puede dársele a lo preceptuado en el art. 53.2 y 161.1.b) CE, esto es, al recurso de amparo sólo <<en su caso>> y <<en los casos y formas que la ley establezca>>, conlleva una configuración extraordinariamente amplia que puede llevar al Legislador incluso a su supresión, quedando por tanto, como desarrollo de tales preceptos, la tutela preferente y sumaria ante la jurisdicción ordinaria²⁰¹.

Para la mayoría de la doctrina esa supresión no puede darse sin una reforma previa de la Constitución, puesto que la libertad atribuida al Legislador se corresponde con el amplio margen con el que este puede configurar al recurso de amparo pero no eliminarlo, es decir, el amplio margen hace referencia a su configuración pero no a la libertad de crearlo o no, puesto que la Constitución impone su establecimiento²⁰².

Otra propuesta, aunque minoritaria, que llevaría necesariamente a tener que reformar la Constitución, pasaba por aumentar el número de Magistrados que integran el Tribunal Constitucional²⁰³. No obstante, dicha posibilidad fue rechazada debido a los perjuicios que tal medida podría acarrear. En primer lugar, el aumentar las Salas podría acrecentar la emisión de doctrina o

²⁰¹ Dictamen emitido por PECES-BARBA MARTÍNEZ, PAREJO ALFONSO y GÓMEZ BENÍTEZ solicitado por el Ministerio de Justicia, en el que se propugna sólo el conocimiento de las violaciones producidas por actos u omisiones judiciales cuando se produjesen éstas, sólo y exclusivamente, en los "procedimientos preferentes y sumarios" del art. 53.2 CE y únicamente cuando el origen de dicho procedimiento lo sea por los actos y disposiciones de los poderes públicos establecidos en el art. 41.2 LOTC. Dictamen emitido por Peces-Barba Martínez, Parejo Alfonso y Gómez Benítez a solicitud del Ministerio de Justicia. Universidad Carlos III. Getafe (Madrid), 199X.

²⁰² ARAGÓN REYES. *"Problemas del recurso de amparo"*. Op.cit. Pág.146-147.

PÉREZ TREMPES. *"El recurso de amparo constitucional. Aspectos procesales II"*. Op.cit. Pág. 129. CRUZ VILLALÓN. *"Sobre el amparo"*. Op.cit. Pág. 22-23.

²⁰³ Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. MANUEL ARAGÓN REYES, LUIS DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, JOSÉ GABALDÓN LÓPEZ, JAVIER GARCÍA ROCA, VICENTE GIMENO SENDRA, LUIS LÓPEZ GUERRA, RAMÓN PARADA VÁZQUEZ, ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREJO. *Teoría y realidad constitucional*. Año 1999, Número 4. Págs. 13-89.

jurisprudencia dispar²⁰⁴. Por otro, y en segundo lugar, haría más difícil alcanzar una posición común sobre aquellas resoluciones que deban ser dictadas por el Pleno del Tribunal²⁰⁵.

4º) La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La mayor parte de la doctrina se ha decantado por la modificación o reforma del recurso de amparo establecido en la LOTC. Así, el que fuera Presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala²⁰⁶, propuso la eliminación de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), del conocimiento del Tribunal a través del amparo, todo ello debido a la interpretación del inciso <<en su caso>> establecido en el art. 53.2 CE²⁰⁷. También el establecimiento de mayores exigencias para la admisión de las demandas de amparo²⁰⁸; estableciéndose algunas correcciones respecto a la admisión de amparos por violación del artículo 24 CE²⁰⁹, así como la delimitación de la actuación del

²⁰⁴ ARAGÓN REYES. “Problemas del recurso de amparo”. *Op.cit.* Pág.166.

²⁰⁵ ESPINOSA DÍAZ, A.: “El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la reforma”. *Revista Indret* 2/2010. Pág. 4.

²⁰⁶ SALA SÁNCHEZ, P.: *La delimitación de funciones en las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales*. Discurso leído por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el solemne acto inaugural del año judicial el día 12 septiembre de 1994. Tribunal Supremo. Madrid, 1994.

²⁰⁷ En tal sentido también se pronunció JIMÉNEZ CONDE, F.: “Problemas actuales del recurso de amparo”.

Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 2, 1990. Pág. 192-193.

No obstante, PÉREZ TREMPs plantea dicha posibilidad pero añade que una decisión de ese tipo supondría *más ventajas que inconvenientes*, que podría conllevar unas consecuencias imprevisibles. “El recurso de amparo constitucional. Aspectos procesales II”. *Op.cit.* Pág. 130.

²⁰⁸ RODRÍGUEZ –PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Jurisdicción y justicia constitucionales” *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. VVAA. CEPC. Madrid, 1995. Pág. X

²⁰⁹ Así lo manifiesta MANZANARES SAMANIEGO cuando afirma en relación a la reestructuración de los supuestos en los que el recurso sería admisible por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: “La primera consistiría en distinguir más radicalmente entre el acceso al proceso y el derecho al recurso, de forma que se siga corrigiendo la denegación arbitraria de los previstos en la ley, pero sin que esto signifique interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable al repetido acceso al recurso. La segunda cuestión se refiere al peligro de pretender incluir en la tutela judicial efectiva –como derecho garantizado por el Tribunal Constitucional- la búsqueda de la justicia material, pues dicha tutela no genera el derecho al acierto de las resoluciones judiciales.

El derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con la resolución fundada en Derecho, como señala el artículo 120.3 [CE], sin que por la vía del amparo pueda corregir el Tribunal Constitucional errores o insuficiencias en la argumentación jurídica o pronunciarse sobre la selección de la norma aplicable. Lo fundamental sería evitar la indefensión material con perjuicio efectivo de los intereses afectados por ella, y aquí el principio de contradicción ocuparía el lugar preferente.”, en “La delimitación de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal

Tribunal Constitucional al conocimiento sobre la norma sustantiva pero no respecto a su aplicación concreta²¹⁰.

También se advierte que difícilmente se va a solucionar el problema con medidas parciales, pues sólo se podrá optimizar el sistema de tutela con una articulación correcta de ambas, el judicial y el constitucional, a través de mecanismos ágiles y rápidos para la reparación de todas las posibles lesiones respecto a todos los derechos y libertades fundamentales en sede de jurisdicción ordinaria, así como una verdadera configuración del carácter extraordinario y subsidiario del amparo, en el que prime los intereses públicos y sólo, de manera secundaria, los intereses particulares²¹¹. No obstante, la mayor parte de la doctrina entiende que le está limitado al Legislador suprimir alguno o algunos de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 53.2 CE²¹²; aunque bien es cierto que, otros autores, ven esta posibilidad constitucionalmente posible²¹³, pero en el fondo se vislumbra como un grave

Constitucional". *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 76-77.

También MUÑOZ CAMPOS para quien "Sería posible, asimismo, evitar el daño si se matizara el contenido del artículo 44 LOTC con las precisiones que resulten necesarias en orden a dejar bien claro que el objeto específico del recurso de amparo constitucional es estos casos, es la propia actuación judicial; en concreto las violaciones que en ésta puedan darse de los derechos fundamentales que proclama el artículo 24 de la Constitución, en cuanto únicos susceptibles de ser conculcados directa e inmediatamente por los órganos judiciales, cualesquiera que sean los hechos determinantes del proceso". En "Recurso de amparo frente a resoluciones judiciales: ¿ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo?" *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. Nº 1, 1983. Pág. 1239.

²¹⁰ Nos remitimos a lo analizado más arriba sobre la interpretación de la ley por el Tribunal Constitucional.

²¹¹ MURILLO DE LA CUEVA. "El amparo judicial de los derechos fundamentales". *Op.cit.* Pág. 126.

²¹² "De seguirse esa tesis, la expresa mención en el artículo 53.2 de la Constitución a unos determinados derechos fundamentales y no a otros no tendría ningún significado ni funcionalidad. Sería una mención superflua o vacía de contenido, por cuanto la disponibilidad del Legislador sería plena, lo que en modo alguno parece admisible. Como mantiene buena parte de la doctrina que se ha ocupado de esta cuestión, cualquiera que sea el significado que se dé al inciso "en su caso" del artículo 53.2 de la Constitución, y de la expresión "en los casos y forma que la ley establezca" del artículo 161.1.b) del mismo texto constitucional, lo que no está al alcance del Legislador es excluir del ámbito del recurso de amparo constitucional a los derechos fundamentales que expresamente refiere el primero de dichos preceptos constitucionales" FERNÁNDEZ FARRERES, G.: "El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma". Fundación Alternativas. Documento de trabajo 58/2004. Pág. 16.

En tal sentido también, CRUZ VILLALÓN. "Sobre el amparo". *Op.cit.* Pág. 12-13 y PÉREZ TREMPES.

"Tribunal Constitucional, Juez ordinario...". *Op.cit.* Pág.207.

²¹³ SALA SÁNCHEZ, P.: *La delimitación de funciones en las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales*. Discurso leído por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el solemne acto inaugural del año

error porque cortaría la imbricación que una a la jurisdicción ordinaria con el Tribunal Constitucional²¹⁴.

Por tanto, la interpretación doctrinal del art. 53.2 CE que ha llevado a excluir determinados derechos fundamentales como objeto del recurso de amparo, no chocan tanto con una posible inconstitucionalidad de tal posibilidad sino más bien con la concepción social y doctrinal de que todos los derechos son parte integrante de dicha tutela que, sin los mismos, se estaría ante una desnaturalización del recurso de amparo²¹⁵.

También y en relación a las posibles reformas que deben llevarse a cabo mediante modificación de la LOTC, se propugna una reforma que recoja el recurso de amparo contra leyes en el sentido, como vimos, de su posibilidad de impugnación en esta sede de las leyes y actos con valor de ley emanados del Poder Legislativo, estatal o autonómico, tal y como se establecía en el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. No obstante, al menos, debería darse una mejor regulación al art. 55.2 LOTC, donde no existan dos sentencias que pueden ser contradictorias, nos referimos a la sentencia dictada por la Sala que conoce del recurso de amparo y que ampara –valga la redundancia- al demandante en base a la consideración respecto a la inconstitucionalidad de la ley, mientras que, por otro lado y mediante sentencia posterior, el Pleno puede entender que tal inconstitucionalidad de la ley no existe²¹⁶.

Otra de las propuestas pasaba por la reducción de la legitimación activa para la interposición de los recursos de amparo²¹⁷, planteándose incluso que se legitimara sólo al Ministerio Fiscal²¹⁸. Dicha posibilidad fue mayoritariamente rechazada debido, principalmente, a que la amplitud venía expresamente determinada por la Constitución que, a diferencia de otros

judicial el día 12 septiembre de 1994. Tribunal Supremo. Madrid, 1994. En tal sentido también, JIMÉNEZ CONDE. *“Problemas actuales del recurso de amparo”*. Op.cit. Pág. 192.

²¹⁴ RUBIO LLORENTE. *“El recurso de amparo constitucional”*. Op. cit. Pág. 169.

²¹⁵ CARRASCO DURÁN. *“Amparo Judicial...”*. Pág. 149-150.

²¹⁶ ARAGÓN REYES. *“Problemas del recurso de amparo”*. Op.cit. Pág.154-155.

²¹⁷ ESPINOSA DÍAZ. *“El recurso de amparo...”*. Op. cit. Pág. 8.

²¹⁸ HERNÁNDEZ RAMOS, M: *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*. Reus. Madrid, 2009. Págs. 78-79.

aspectos del recurso de amparo, esta si era una cuestión inmodificable salvo expresa reforma de la Constitución²¹⁹. En otro sentido, también se negaba dicha reforma porque se limitaría el acceso al Tribunal respecto a cuestiones de las que no hubiera conocido con anterioridad²²⁰.

5º) La atribución de competencia a las Secciones para dictar sentencia sobre recursos de amparo en los que exista doctrina previa del Tribunal Constitucional aplicable al caso concreto²²¹.

6º) Otros supuestos pasarían por el establecimiento de cuantías mínimas, la exigencia de fianzas para recurrir en amparo o la imposición de multas cuando exista temeridad o mala fe²²².

IV.- EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS LEGALES MÁS ESTRUCTOS RESPECTO A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO.

La primera reforma efectuada sobre el recurso de amparo –como vimos– pretendía la mejora del trámite de admisión de la demanda de amparo pero, sobre todo, para que su inadmisión no tuviera lugar mediante auto sino mediante providencia, que no requería de motivación, sino tan sólo de especificación del requisito legal establecido para su inadmisión, pues de ello se debería de pasar de una regla general de admisión a otro cuya regla general es la inadmisión²²³. Providencias que permitían una inadmisión de plano, por unanimidad de los Magistrados componentes de la Sección, de aquellas demandas de amparo que incurrieran en alguno de los supuestos de inadmisión establecidos en el artículo 50.1 LOTC. Ahora bien, la reforma no

²¹⁹ PÉREZ TREMPES. “Tribunal Constitucional, Juez ordinario...”. *Op.cit.* Pág.209.

²²⁰ HERNÁNDEZ RAMOS. *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*. *Op.cit.* Págs. 78-79.

²²¹ ARAGÓN REYES. “Problemas del recurso de amparo”. *Op.cit.* Pág.167.

²²² Entre otros, MURILLO DE LA CUEVA. “El amparo judicial de los derechos fundamentales”. *Op.cit.* Pág. 148-149.

²²³ CARRASCO DURÁN. “El concepto constitucional de recurso de amparo...”. Pág. 97.

dio los frutos esperados, principalmente, debido a la interpretación efectuada por el Tribunal.

En primer lugar, un mecanismo eficaz para la inadmisión de aquellos supuestos en los que se podía despachar de una manera rápida la demandas que incurrieran en cualquier supuesto de inadmisión, como era la providencia, se volvió ineficaz debido a la tendencia progresiva que llevó al Tribunal a que no sólo se señalara el precepto incumplido o la causa de inadmisión sino que, además, ofrecía una argumentación jurídica que iba más allá de lo que inicialmente debe corresponderse con dicho tipo de resolución. Tanto es así que, dichas providencias, debido a esa motivación jurídica que se le añadía, acabaron convirtiéndose en un híbrido entre tal figura y la de los autos, que incluso llegaron a ser tildados por la doctrina como “*proviautos*”²²⁴. Algo que incluso llevo al Tribunal a provocarle más de un problema²²⁵.

El segundo, fue la configuración que finalmente el Tribunal Constitucional otorgó a las posibilidades de inadmisión que atendían al fondo del asunto, como eran la inadmisión por haber *desestimado previamente un supuesto sustancialmente igual* o la *carencia manifiesta de contenido*. A pesar de que, en relación a este último supuesto, por alguna resolución aislada del Tribunal, llevó a considerar a la doctrina que cabía la posibilidad del establecimiento de la admisión desde una la vertiente objetiva²²⁶, finalmente, esa posible interpretación del requisito de admisión quedó relegada por la interpretación predominante que consideraba como causa de inadmisión aquellos recursos en los que se hacía evidente o palmario la inexistencia de lesión del derecho fundamental²²⁷.

²²⁴ BORRAJO INIESTA. “Mitos y realidades...”. *Op.cit.* Pág. 185.

²²⁵ BORRAJO INIESTA. *Ibídem.* Pág. 185.

²²⁶ REQUEJO PAGÉS, analiza el alcance del ATC 248/1994, de 19 de septiembre, indicando que el concepto “carencia manifiesta de contenido” puede interpretarse de tal manera que “la inadmisión puede obedecer a la irrelevancia constitucional de la queja deducida en amparo o también a la irrelevancia material de la lesión denunciada, aun cuando ésta lo sea de la constitucionalidad stricto sensu”. Por tanto, para REQUEJO PAGÉS, es posible esa interpretación del precepto 50.1. c) LOTC, sin que sea necesario reformar para ello la LOTC. En “Hacia la objetivación del amparo constitucional (Comentario al Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 1994)”. REDC. Año 14, Núm. 42, septiembre-diciembre. 1994. Pág. 157

²²⁷ REQUEJO PAGÉS, J.L.: “La magnitud del cambio que con lo anterior se opera en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es más que evidente. Hasta ahora, la causa de inadmisión ex artículo 50.1 .c) LOTC venía siendo utilizada para rechazar aquellos recursos que

1º) Distinta admisión en base al derecho fundamental.

La apreciación de que no todos los derechos fundamentales tienen porqué acceder al amparo en las mismas condiciones. Haciéndose especial delimitación respecto al acceso de los recursos en los que se alegue la vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE)²²⁸ y al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)²²⁹.

Si se quiere -y creemos más acertado- la reforma podría pasar por estructurar nuevas tipologías de recursos de amparo o una nueva reestructuración de los artículos 43 y 44 de la LOTC²³⁰, dejando por tanto

de manera notoria planteaban cuestiones de estricta legalidad ordinaria o, si se quiere, las demandas con las que se suscitaban problemas que, también con claridad, no podían conceptuarse como propios del ámbito de los derechos fundamentales configurado por las distintas líneas jurisprudenciales. Predicar de un recurso su carencia de contenido significaba que era evidente, casi *ictu oculi*, que la lesión denunciada podía serlo de la legalidad, pero en ningún caso del contenido constitucionalmente declarado de los derechos fundamentales". En *"Hacia la objetivación del amparo constitucional..."* Op. cit. Pág. 157.

²²⁸ Así lo pone de manifiesto MURILLO DE LA CUEVA, cuando argumenta cuáles deberían ser los supuestos en los que cabría la admisión del recurso de amparo frente a las alegaciones del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE): "De este modo, podría reservarse el recurso de amparo constitucional para aquellos supuestos en los que el Tribunal Supremo, al resolver la disparidad entre órganos judiciales inferiores, se apartara inmotivadamente de su propia doctrina. Naturalmente, haría falta introducir este requisito en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional". "El amparo judicial de los derechos fundamentales". *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 145-146.

²²⁹ Respecto a la delimitación de los supuestos en los que se alegue la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), se propone igualmente una delimitación de los casos en la propia LOTC, en tal sentido, "tal vez fuera más conveniente poner el acento en el carácter de la intervención judicial y en la relevancia del caso suscitado. Quiero decir que habría que profundizar, por una parte, en el hecho de si el recurrente ha obtenido o no una resolución judicial, estimatoria o desestimatoria, sobre la pretensión que esgrime. Porque si los jueces ordinarios se han pronunciado al respecto, su decisión ha sido revisada y mantenida por una instancia superior, no parece que pueda considerarse en cuestión el derecho a la tutela judicial efectiva. Especialmente, cuando ha mediado, incluso, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo". MURILLO DE LA CUEVA. "El amparo judicial de los derechos fundamentales". *Op.cit.* Pág. 147.

²³⁰ Sobre todo en relación a la configuración dada al artículo 44 LOTC pues, como tuvimos ocasión de ver, la actual configuración del recurso de amparo en su amplitud fue obra del Legislador; con lo cual, a él le corresponde dar una nueva configuración más acorde con la que debe ser su finalidad. Pues compartimos la opinión de CASTILLO RIGABERT sobre el recurso de amparo instaurado en dicho artículo de la LOTC. "Esta modalidad de recurso de amparo no figura explícitamente prevista en la regulación de nuestra Constitución y, por tanto, se incluye *ex novo* en la L.O.T.C.

No cabe duda que la sola posibilidad de recurrir en amparo contra resoluciones judiciales en sí misma, polémica. Los jueces y tribunales son órganos públicos y, en consecuencia, sus resoluciones pueden, hipotéticamente, lesionar derechos fundamentales y libertades públicas. Lo que sucede es que cuando se impugna en amparo una resolución judicial, tras haberse agotado todos los recursos, se está poniendo en contacto, e incluso en posible contraposición,

intacto el amparo frente a actos parlamentarios (art. 42 LOTC). En el que, en lugar de determinarse en base al poder público que provocó o vulneró el derecho fundamental, se estableciese un primer tipo de recurso de amparo contra vulneraciones provocadas por actos no procesales o extraprocesales provenientes bien de un poder público, bien de un particular, para lo que será necesario agotar la vía judicial previa²³¹. El segundo tipo de recurso de amparo por vulneraciones provocadas directamente por actos procesales²³². Mientras que para el primero, y para el establecido en el art. 42 LOTC, su régimen de admisión debe ser el general establecido en la LOTC²³³, para el segundo se establecería un distinto régimen de admisión en el que *la regla sea la inadmisión*²³⁴ y la excepción sea la admisión a trámite en base a unos supuestos determinados de admisión establecidos en la LOTC²³⁵. Debiendo primarse, por tanto, el conocimiento a través del amparo de los derechos fundamentales *sustantivos*²³⁶, limitándose casi *in extremis* en conocimiento por parte del Tribunal Constitucional de aquellos recursos de amparo que se planteen por vulneración de derechos fundamentales *procesales o sustantivos* pero cuyo origen sea directamente una resolución judicial²³⁷.

2º) Regulación de las causas de inadmisión.

La posibilidad de inadmitir las demandas que en una primera valoración puedan ser rechazadas por la falta de trascendencia de la lesión del derecho fundamental²³⁸. La necesidad de liberar la carga de trabajo en la fase de

e incluso en posible contraposición, a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional.” En *La admisión del recurso de amparo...* Pág. 153.

²³¹ CARMONA CUENCA, E.: “El recurso de amparo constitucional y la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Apuntes para una reforma”. VVAA. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.237.

²³² CARMONA CUENCA. “El recurso de amparo constitucional...”. *Op.cit.* Pág.238.

²³³ CARMONA CUENCA. “El recurso de amparo constitucional...”. *Op.cit.* Pág.231.

²³⁴ CARMONA CUENCA. “El recurso de amparo constitucional...”.Pág.231.

²³⁵ En tal sentido manifiesta: “De esta forma, los recursos de amparo frente a las vulneraciones procesales sólo serían admitidos en uno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la vulneración del derecho fundamental plantee un problema de trascendencia constitucional, cuyo interés objetivo, haga preciso sentar doctrina en un determinado sentido.

b) Cuando el perjuicio causado sea extremadamente grave.” “El recurso de amparo constitucional y la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Apuntes para una reforma”. VVAA. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.231.

²³⁶ CARMONA CUENCA. “El recurso de amparo constitucional...”. *Op.cit.* Pág.Pág.238.

²³⁷ CARMONA CUENCA. “El recurso de amparo constitucional...”. *Op.cit.* Pág.Pág.229.

²³⁸ MURILLO DE LA CUEVA. “El amparo judicial de los derechos fundamentales”. *Op.cit.* Pág. 142. No obstante, considera que dicha posibilidad ya se encuentra inserta o establecida a través

admisión, estableciendo fórmulas procesales que permitan agilizar dicho trámite y, además, que impongan determinadas obligaciones al demandante de justificar la importancia de su recurso, bien por la importancia respecto al derecho fundamental, bien en relación a la gravedad de la lesión²³⁹. Además permitiendo la inadmisión a través de una resolución sucinta²⁴⁰.

Se plantea asimismo la importante función que en el recurso de amparo ha supuesto la dimensión objetiva del recurso, que desborda con creces la consideración del recurso de amparo como mecanismo de tutela subjetivo respecto al caso concreto²⁴¹. Esa *dimensión objetiva del recurso de amparo* ha servido no sólo para asentar una importante doctrina en materia de derechos fundamentales, sino para que esta finalmente permee toda la actuación que pueden llevar a cabo los poderes públicos, sea el legislativo, el Ejecutivo o el Poder Judicial. Por tanto, se plantea no esta doble dimensión que es

de “la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional” que permite la inadmisión del recurso, (art. 50.1.c) LOTC, en su modificación efectuada por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio.

²³⁹ CARRASCO DURÁN. “*El concepto constitucional de recurso de amparo...*”. *Op. cit.* Pág. 95-97.

²⁴⁰ VIVER I PI-SUNYER. “*Diagnóstico para una reforma*”. *Op. cit.* Pág. Pág.37-38.

²⁴¹ En tal sentido, lo expresa REQUEJO PAGÉS cuando manifiesta que “Desde el terreno de la pura idealidad sería deseable un sistema de protección de los derechos fundamentales en el que se conjugaran, en síntesis perfecta, las vertientes subjetiva y objetiva, esto es, en el que el fin de la salvaguardia objetiva del elenco de derechos se cohonestara, sin zonas oscuras, con la defensa; de los intereses subjetivos de los justiciables. Sin embargo, la práctica demuestra que el Tribunal no se mueve precisamente en el mundo de lo ideal y, por ello, es quizá inevitable algún sacrificio; ante la alternativa impuesta por la realidad entre la defensa de los intereses subjetivos y la garantía objetiva de los derechos fundamentales —y, con ellos, de la Constitución en su conjunto— acaso resulte necesario pronunciarse por lo segundo, potenciando las funciones del Tribunal como órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y arbitrando fórmulas como la del Auto comentado para supeditar los intereses subjetivos al fin último de la garantía objetiva. Con ello quizá se opta por la injusticia singular, pero se elimina también el desorden que puede resultar de una jurisdicción apegada en exceso al caso concreto, pues sólo desde la generalidad de la Ley y de su control es posible derivar pautas de interpretación uniformes y no sujetas a la variabilidad y al matiz del caso concreto”; en “Hacia la objetivación del amparo constitucional...”. *Op.cit.* Pág. 160.

característica del recurso de amparo, sino *la proporción que se otorgue a cada una de ellas*²⁴² a través del amparo²⁴³.

Ahora bien, esa admisión discrecional del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, bien por la trascendencia material del mismo, bien por la importancia en relación a la especial gravedad de la lesión del derecho fundamental²⁴⁴, sólo debería predicarse de aquellos recursos de amparo que tengan un carácter subsidiario, esto es, los amparos previstos en los artículos 43 y 44 LOTC, precisamente, porque ya han sido objeto de conocimiento previo por parte de la jurisdicción ordinaria, es decir, han sido conocidos por sus garantes naturales²⁴⁵. En este sentido, el recurso de amparo se mantendrá

²⁴² ALBERTÍ ROVIRA. “*El recurso de amparo constitucional...*”. *Op.cit.* Pág.125.

En tal sentido es manifestado por PÉREZ TREMPs que reivindica dicha posibilidad legal ya que “Existiendo, como existe ya, un sistema judicial de los derechos fundamentales más o menos consolidado, el Tribunal Constitucional, sin cuestionar la estructura garantista que posee el recurso de amparo, y, obviamente, sin negarla, debe ver reforzada la dimensión objetiva, esto es, la interpretación constitucional.” En “Tribunal Constitucional, Juez ordinario y una deuda pendiente del Legislador”. En *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pág.207.

²⁴³ Es mayoritaria la doctrina que ve propicia una reforma del recurso de amparo que conlleve una mayor potenciación de la dimensión objetiva del mismo aunque, no obstante, existen voces discrepantes que rechazan la importancia de esa dimensión frente a la labor de tutela subjetiva que para ellos ha caracterizado y caracteriza al recurso de amparo. En tal sentido lo manifiesta FIGUERUELO BURRIEZA que a pesar de reconocer que en el recurso de amparo residen ambas funciones, tanto la subjetiva como la objetiva, rechaza la segunda o establece que ha de estar en un segundo plano respecto a la primera de las funciones. “Ahora bien, consideramos que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales sólo de forma indirecta debe ser objeto de protección por el TC, en cuanto efecto agregado a la protección subjetiva de los derechos invocados en los diferentes casos particulares sometidos a su resolución”; en “Veintitrés años de recurso de amparo”. *Revista de Derecho Político*, núms. 58-59, 2003-2004. Págs. 338-339. Añade, además, que “[d]espués de tantos años de funcionamiento del TC concluimos que la institución ha conseguido arraigar en parte, gracias a las funciones que el constituyente le encomendó. De entre esas competencias destaca el recurso de amparo constitucional. Esto es debido a su objeto: protección de derechos y libertades de los ciudadanos frente a violaciones causadas en la esfera de la libertad personal por actos de los poderes públicos, y a su función: otorgar justicia en el caso concreto y contribuir al desarrollo objetivo de los contenidos constitucionales. La amplitud del espectro de posibilidades de actuación concreta del recurso de amparo han hecho que la Constitución Española de 1978, tal y como ha sido aplicada hasta ahora, sería reconocible sin la Cuestión de Inconstitucionalidad, y sin el Recurso de Inconstitucionalidad, pero no sería la misma norma de no haber existido el Recurso de Amparo (CRUZVILLALÓN)”. *Op.cit.* Pág. 349.

²⁴⁴ CARRASCO DURÁN. “*El concepto constitucional de recurso de amparo...*”. *Op.cit.* Pág. 113. PÉREZ TREMPs, P.: El recurso de amparo. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2015. Págs. 24 y ss.

²⁴⁵ En tal sentido lo expresó el profesor PÉREZ TREMPs al diferenciar respecto a la admisión de unos u otros recursos de amparos, “la dimensión subjetiva del recurso de amparo ha de poseer menor importancia en la medida en que la tutela judicial exista y/o sea eficaz. Así, por ejemplo, la exclusión de los actos parlamentarios del control subjetiva del recurso de amparo [sic] deba poseer una especial intensidad en los supuestos del artículo 42 LOTC; por el contrario, la existencia casi general de control previo al amparo de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales originadas por las Administraciones públicas o por los propios jueces y tribunales (arts. 43 y 44 de la LOTC) tiene que redundar en una mayor importancia de la

intacto respecto a todos los derechos fundamentales que establece el artículo 53.2 CE y, además, respecto a todas las acciones y omisiones originadas por cualquier poder público -legislativo, Ejecutivo o judicial-, pero sólo se conocerían en su dimensión subjetiva aquellos recursos en los que se evidencie una lesión especialmente grave del derecho fundamental o que sea necesario que el Tribunal entre a conocer del mismo para interpretar o revisar una interpretación previa del derecho fundamental²⁴⁶. Determinándose qué órganos judiciales y qué derechos pueden tener una mayor importancia o relevancia en relación al recurso de amparo, así se propugna el conocimiento de aquellos recursos de amparo que provengan de instancias judiciales superiores como son el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, en coherencia con lo dispuesto en el art. 123.1 CE²⁴⁷; pero también que, al menos inicialmente, se restinga o en cierta medida se limite el acceso de los recursos de amparo cuya base sea la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)²⁴⁸.

Esa dimensión objetiva de amparo hunde sus raíces en la propia función que el recurso de amparo ha cumplido desde su puesta en funcionamiento, es decir, como mecanismo para elaborar un corpus doctrinal en materia de derechos fundamentales inexistente cuando entró en vigor la Constitución, sobre los que ni tan siquiera poseíamos antecedentes históricos a los que poder acudir²⁴⁹. Por otro, la desconfianza mantenida en un Poder Judicial heredero del régimen dictatorial anterior²⁵⁰ para llevar a cabo tal atribución.

dimensión objetiva del recurso de amparo en estos supuestos". *"El recurso de amparo constitucional. Aspectos procesales II"*. Op.cit. Pág. 125.

ARAGÓN REYES. *"Problemas del recurso de amparo"*. Op.cit. Pág.171.

²⁴⁶ Incluso añade que, de ser así, "el recurso de amparo sería tan extraordinario que se restringiría al máximo su condición actual de última instancia procesal". ARAGÓN REYES. *"Problemas del recurso de amparo"*. Op.cit. Pág.172.

²⁴⁷ PÉREZ TREMPES. *"Tribunal Constitucional, Juez ordinario..."*. Op.cit. Pág.211-213.

²⁴⁸ PÉREZ TREMPES. *"Tribunal Constitucional, Juez ordinario..."*. Op.cit. Pág.213.

²⁴⁹ BUSTOS GISBERT. ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución española? Teoría y realidad constitucional. Nº 4, 1999. Págs. 274-275.

²⁵⁰ Esto se pone de manifiesto incluso en el propio debate constituyente cuando, como vimos, el propio senador Lorenzo Martín-Retortillo pronunció aquello de "¿No dejamos muy mal parado al poder judicial, que algún día habrá de ser democrático?"

La desconfianza en el Poder Judicial por parte de la doctrina era manifestada abiertamente, en tal sentido, véase, entre otros, SALAS, J.: "Protección judicial ordinaria y recurso de amparo frente a violaciones de libertades públicas". *Revista española de derecho administrativo*. Nº 27, 1980. Págs. 554.

ASENSI SABATER, J.: "El Recurso de Amparo (aspectos políticos y jurídico-procesales)". *Anales de la Universidad de Alicante*. Facultad de Derecho. Nº 2, 1983. Págs. 12-15.

Superados con creces estos dos escollos pues, efectivamente, tras una ardua tarea doctrinal por parte del Tribunal a los efectos de dotar de contenido material a los preceptos constitucional que establecen dichos derechos y libertades fundamentales, así como una importante labor de *transición* del Poder Judicial que ha llevado a asumir el sistema jurídico-constitucional y el valor e importancia que los derechos y libertades fundamentales tienen en el mismo²⁵¹, cabe cuestionarse si, efectivamente, ¿es necesario seguir manteniendo el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades en los mismos términos en los que fue configurado tras la entrada en vigor de la Constitución? Según el parecer mayoritario de la doctrina constitucionalista la respuesta es negativa²⁵², y así también lo entendemos, seguir manteniendo esa amplitud y configuración del sistema de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales es no poder, o no querer, reconocer que han desaparecido o se han reducido considerablemente las premisas que dieron lugar al mismo.

Según nuestra parecer, ambas medidas, una mejor regulación de los distintos amparos y una mejor regulación del trámite de admisión de los recursos como mecanismos procesales y configuradores del recursos de amparo se muestran como elementos necesarios para atajar las disfuncionalidades y conflictos que pueden derivarse de la articulación de la tutela de los derechos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Creemos que, sólo con un nueva configuración del trámite de admisión no se va a atajar el problema de la interposición masiva de los recursos de amparo puesto que, el problema de las vías de acceso al mismo siguen siendo las mismas, -como se vio con la reforma infructuosa del trámite de admisión del recurso de amparo realizada por la L.O. 6/1988, de 9 de junio- esto es la deficiente y amplísima regulación contenida en los artículos 43 LOTC pero, sobre todo, la regulación del amparo frente a las vulneraciones acaecidas en sede de jurisdicción ordinaria (art. 44 LOTC), son también una de las causas que originan una interposición masiva de demandas de amparo y que, a su

PÉREZ TREMPs, P.: *Tribunal Constitucional y Poder Judicial*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985. Pág. 108.

²⁵¹ CRUZ VILLALÓN. “*El recurso de amparo constitucional...*”.Págs. 117-118.

²⁵² REVENGA SÁNCHEZ sintetiza en tal sentido las opiniones de Pérez Tremps, Cruz Villalón, ARAGÓN REYES, entre otros en “*Las paradojas del recurso de amparo...*”. *Op. cit.* Pág. 31.

vez, han provocado que el Tribunal Constitucional haya actuado más allá del estricto control, preservación o restitución del derecho fundamental vulnerado.

Como vimos, fue el Legislador y no el constituyente quien dotó al recurso de amparo con la amplitud que le caracteriza. Amplitud y desarrollo que fueron necesarios y convenientes una vez entrada en vigor la Constitución debido a los déficits del desarrollo material de los nuevos derechos y libertades fundamentales y la necesidad de una construcción doctrinal de los mismos de los cuales no se poseía una experiencia previa y válida, con lo cual y en gran medida, era necesario la creación de un corpus doctrinal *ex novo* cuya elaboración era confiada a un órgano constitucional como el Tribunal Constitucional, debido a los recelos que producía el Poder Judicial.

Por ello, como hemos dicho, no nos parece apropiado seguir manteniendo ahora una regulación que responde a unos parámetros históricos y jurídicos que no se corresponden con la situación actual, ni del desarrollo normativo y doctrinal de los derechos fundamentales, ni en el que pervive una desconfianza en la labor que en materia de derechos fundamentales realiza el Poder Judicial día a día, de manera cotidiana.

No obstante, la reforma efectuada por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; se centra en esta última cuestión doctrinal, esto es, en una nueva configuración del trámite de admisión, dejando prácticamente incólume las vías de acceso al amparo. Su análisis y su puesta en práctica por el Tribunal Constitucional serán objeto de estudio en los siguientes capítulos.

V.- EL CONCEPTO DE <<DIMENSIÓN OBJETIVA DEL RECURSO DE AMPARO>>.

Antes de continuar y adentrarnos en la reforma del recurso producida por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, creemos necesario acercarnos brevemente a la *dimensión objetiva del recurso de amparo*; con el fin de poder tener una

idea clara sobre el sentido de tal concepto y cómo puede incidir en la labor del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.

1º) La dimensión subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales.

La construcción doctrinal de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales parte de su teorización por la doctrina alemana, principalmente, a través de la labor realizada por autores como RUDOLF SMEND, JÜRGEN HABERMAS, ROBERT ALEXY, entre otros²⁵³; con el fin de superar el planteamiento doctrinal de los derechos fundamentales como meros derechos subjetivos.

Tal planteamiento teórico ha tenido gran repercusión en nuestra doctrina, así para DIEZ-PICAZO, la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales comprende las facultades o pretensiones que las personas pueden hacer valer ante situaciones concretas. Mientras que la dimensión objetiva de tales derechos comprende a los mismos como <<valores>> que se despliegan en todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, no es una función o dimensión tan perceptible o evidente como la dimensión subjetiva pero ciertamente relevante, al igual que la anterior, ya que ha de estar presente en toda la legislación, así como en el funcionamiento de todo el ordenamiento jurídico y en la actuación de todos los poderes públicos. Hay que resaltar que ambos aspectos o dimensiones forman parte del propio derecho fundamental, por ello no pueden tratarse como dimensiones plenamente diferenciadas o excluyentes²⁵⁴.

Los derechos fundamentales cumplen con sendas funciones jurídico-políticas. Por un lado, una función de protección, como mecanismos o

²⁵³ Entre las obras de referencia, cabe destacar:

SMEND, R.: *Constitución y Derecho Constitucional*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985. HABERMAS, J.: *Facticidad y Validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Ed. Trotta. Madrid, 1998.

ALEXY, R.: *Teoría de los derechos fundamentales*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002. *Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales*. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Centro de Estudios. Madrid, 2004.

²⁵⁴ DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L.M.: *Sistema de derechos fundamentales*. 3ª Edición. Editorial Aranzadi, SA. Cizur Menor (Navarra), 2008. Pág. 63.

instrumentos de salvaguarda del individuo frente a los poderes públicos. Siendo esta su función primordial y principal, al quedar vinculados todos los poderes del Estado a dichos derechos fundamentales, tanto en su distinto ámbito de actividad (legislativa, ejecutiva, judicial), como mecanismos que han de servir de base y desplegarse en todo el ordenamiento jurídico. Por otro, una función de legitimación, al funcionar los derechos fundamentales como parámetros de la justicia o de lo justo, o dicho de otra manera, han de servir de base o fundamento del <<orden político y la paz social>>, (art. 10.1 CE)²⁵⁵.

Para GAVARA DE CARA, tanto la dimensión subjetiva como objetiva son esenciales para determinar el alcance del contenido prescriptivo de los derechos fundamentales. Pero, para él, mientras que el contenido subjetivo del derecho, en cierta medida, viene ya determinado por la propia disposición que reconoce el derecho fundamental, no ocurre lo mismo con la proyección o dimensión objetiva, para lo cual se hace necesario una concreción normativa o jurisprudencial, como consecuencia de su elevada indeterminación tanto a nivel semántico, como estructural y prescriptivo²⁵⁶.

GAVARA DE CARA añade que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales se despliega a su vez en sendas proyecciones, una externa y otra interna: “[L]a concepción de los derechos fundamentales como elementos objetivos del ordenamiento jurídico ha permitido establecer dos proyecciones en cuanto a su significado (...): a) Los derechos fundamentales como principios y valores objetivos con pretensión de validez y proyección en el ordenamiento jurídico, es decir, en todos los ámbitos del Derecho (proyección externa a la Constitución). b) Los derechos fundamentales como principios objetivos que permiten delimitar interpretativamente el aspecto individual o subjetivo de los derechos fundamentales (proyección interna al propio texto constitucional)”²⁵⁷.

²⁵⁵ DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ. *Ibidem*. Págs. 45-46.

²⁵⁶ GAVARA DE CARA, J.C.: *La proyección interna de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales: el art. 10.1 CE*. Ed. Bosch. Barcelona, 2011. Págs. 11-14.

²⁵⁷ GAVARA DE CARA, J.C.: Carácter objetivo de los derechos fundamentales. Diccionario de Derechos Humanos. Universidad de Alcalá. Fecha de publicación: 2011-05-09. Pág. 4.

En definitiva, dicha “dimensión objetiva de los derechos fundamentales es necesaria para la aplicación concordada y sistemática de la Constitución, potencia la racionalidad por reducir la complejidad de la aplicación de los derechos fundamentales, obliga a justificar la adopción abstracta y concreta de instrumentos de vinculación positiva y permite una relación asimétrica entre la dimensión subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales. La relación asimétrica se basa en que la dimensión subjetiva siempre está presente en los derechos fundamentales, mientras que la dimensión objetiva se debe deducir, decidir o implementar con un alcance concreto en función de los bienes o intereses protegidos”²⁵⁸.

El doble carácter de los derechos fundamentales supone la constitucionalización de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, pero también como principios objetivos que se proyectarán y desplegarán respecto al resto de preceptos constitucionales, en relación a los demás derechos fundamentales, así como al resto del ordenamiento jurídico. El constitucionalismo contemporáneo concibe a los derechos fundamentales desde dicha doble dimensión: subjetiva y objetiva. La concepción de los derechos fundamentales no se concibe desde la perspectiva de derechos subjetivos, esto es, desde la apreciación de prerrogativas o potestades del individuo frente al Estado, despojándose por tanto de la consideración de meras disposiciones de defensa, propio de la teoría liberal. Por tanto, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales aporta a los mismos, frente a la concepción liberal, un contenido que va más allá de su consideración como mecanismos de defensa, esto es, como reconocimiento de un ámbito de actuación, que produce el otorgamiento de un haz de facultades, que se ponen de manifiesto de forma diversa, bien como mecanismos de reacción contra perturbaciones no permitidas por el ámbito protegido del derecho, bien como facultades de actuación y ejercicio directo²⁵⁹.

²⁵⁸ GAVARA DE CARA. *Ibidem*. Pág. 6.

²⁵⁹ MAESTRO BUELGA, G.: “Los derechos públicos subjetivos en la historia del constitucionalismo español del siglo XIX”. *Revista de derecho político*, Nº 41, 1996, pág. 139-140.

No significa esto último que se le sustraiga tal contenido, sino que supone una concepción mucho más amplia del contenido de los derechos fundamentales, que deriva de una elaboración doctrinal más extensa que la mera concepción de derechos de reacción frente al Estado. Ese desarrollo inicial, se ha visto ampliado con diversas teorías sobre los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Como decimos, son numerosas las teorías jurídicas que han tratado de comprender y analizar el contenido y alcance de los derechos fundamentales. Así, además de la citada teoría liberal, nos encontramos otras que intentan dar una concepción de su contenido, finalidad y alcance material de los derechos; tales como, y principalmente, la *teoría institucional*, *axiológica*, *democrática* o la *teoría social* de los derechos fundamentales²⁶⁰, entre otras.

Junto a los derechos fundamentales como derechos subjetivos frente al Estado, surge la dimensión objetiva de tales normas iusfundamentales, que irradian todos los ámbitos del ordenamiento jurídico e inciden en las funciones del Estado; tanto en la labor del Legislador a la hora de ejercer su función normativa; respecto a la funciones que corresponden al Ejecutivo; como a la interpretación y aplicación del Derecho de conformidad a las normas de derecho fundamental que ha de realizar el juzgador. Y no sólo incide en las concretas funciones atribuidas a los poderes públicos sino que, además, esa dimensión objetiva les impone unos concretos mandatos de protección y de optimización, que permitan el máximo desarrollo del haz de facultades comprendido en el derecho fundamental, desde un punto de vista jurídico y fáctico²⁶¹.

Como decimos, el reconocimiento de ambas dimensiones supone, en primer lugar, que debido a la dimensión objetiva los derechos fundamentales poseen un efecto de irradiación que hace que los mismos se desplieguen y se

²⁶⁰ En relación al análisis de las distintas elaboraciones doctrinales sobre los derechos fundamentales puede consultarse, entre otras, la obra de BÖCKENFÖRDE, E-W.: *Escritos sobre derechos fundamentales*. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden. 1993. Págs. 44-66.

²⁶¹ PRESNO LINERA, M.A.: "La estructura de las normas de derechos fundamentales", VVAA, *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Madrid. Tecnos, 2004. Pág. ¿49?.

proyecten en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, poseyendo una fuerza expansiva que no sólo se ciñe a regular concretos derechos subjetivos. Por tanto, y en segundo lugar, debido a dicha fuerza de irradiación respecto a todo el ordenamiento jurídico, inciden también en el ámbito del Derecho privado, los derechos fundamentales no sólo van a tener esa dimensión o eficacia frente a los poderes públicos, sino también respecto a los particulares, con independencia de que pueda considerarse esa eficacia frente a terceros de modo directo o indirecto. En último lugar, de dicha dimensión objetiva de los derechos fundamentales también se derivan una serie de obligaciones o deberes de protección, con lo cual frente a la clásica consideración de los derechos fundamentales como derechos subjetivos en los que se establece una obligación de no intervención, la dimensión objetiva añade determinadas acciones positivas por parte del Estado necesarias para garantizar la efectividad y plena vigencia de los derechos fundamentales²⁶².

Por tanto, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales establece una obligación de intervención estatal como mandatos de protección y optimización con el fin de favorecer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que, como hemos dicho, se manifestará a través de cualquiera de las funciones atribuidas a los poderes públicos, ya sea la función legislativa, ejecutiva o judicial²⁶³.

El marco de referencia constitucional que determina o fundamenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales viene principalmente establecido en la determinación del Estado como “social” (art. 1.1 CE); en las obligaciones de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos por todas las personas (art. 9.2 CE) y, sobre todo, por el establecimiento de que la dignidad

²⁶² VILLACORTA MANCEBO, L.: “Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales. Aspectos a destacar en el contexto de la discusión española”. Revista *Ius et Praxis*, año 17, nº1, 2011. Págs. 90-93.

²⁶³ CASTILLO CÓRDOVA, L.: “Principales consecuencias de la aplicación del principio de la doble dimensión de los derechos fundamentales”. *Anuario de la Facultad de Derecho da Universidade da Coruña*, nº 7, 2003. Pág. 191.

de la persona y la inviolabilidad de los derechos que les son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE)²⁶⁴.

2º) Estructura y contenido material de los derechos fundamentales.

El derecho fundamental en su dimensión subjetiva o como derecho subjetivo, supone un ámbito o poder jurídico de autodeterminación atribuido al individuo o a la persona “que recae, bien sobre una conducta a realizar en determinado ámbito de la realidad, pudiendo hacer valer jurisdiccionalmente el permiso constitucional de llevarla a cabo; bien sobre un deber jurídico a cargo de terceros, pudiendo hacer valer jurisdiccionalmente una prohibición de poder público en los términos que establece un precepto constitucional, indisponible al Legislador”²⁶⁵. Es un conjunto de normas deducibles de uno o varios enunciados normativos que, debido al carácter abstracto y abierto que caracteriza a dichos enunciados, se hace necesario la interpretación de los mismos a fin de concretar el objeto, contenido y límites del derecho fundamental. Es decir, se requerirá un esfuerzo interpretativo para determinar del enunciado normativo – de su carácter abstracto y abierto- qué es lo que protege el derecho fundamental (su objeto); cómo lo protege (su contenido) y qué es lo que no protege (sus límites)²⁶⁶.

Los derechos fundamentales, por tanto, poseen una estructura en las que se hace necesario distinguir entre *enunciado normativo* y *norma jurídica*. El enunciado normativo se corresponde con el precepto, esto es, el conjunto de palabras con las que se quiere contemplar el concreto derecho fundamental. Generalmente, ese enunciado normativo expresa o manifiesta un *mandato*, un *permiso* o una *prohibición*. Los enunciados normativos iusfundamentales se caracterizan por formularse de manera abstracta y abierta. Mientras que la norma jurídica o norma de derecho fundamental hace referencia a una norma de principio, a una proposición de “deber ser”. Un derecho fundamental, por tanto, es un conjunto de normas jurídicas deducibles de uno o varios

²⁶⁴ VILLACORTA MANCEBO. “*Jurisdicción constitucional...*”. *Op.cit.* Pág. 191.

²⁶⁵ VILLAVERDE MENÉNDEZ, I.: “Concepto, contenido, objeto y límites de los derechos fundamentales”. *La democracia constitucional: estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente*, Vol. 1. Congreso de los Diputados, Madrid. (2002). Pág. 324.

²⁶⁶ VILLAVERDE MENÉNDEZ. *Ibidem*. Pág. 328-332.

enunciados normativos o preceptos de rango constitucional. Las notas de abstracción y apertura hacen que no se determine de manera concreta el modo, tiempo y lugar de ejercicio del derecho, así como tampoco las conductas amparadas por el mismo, convirtiendo al derecho fundamental en una *garantía de posibilidades*, es decir, en mandatos de protección y optimización dirigidas principalmente a los poderes públicos²⁶⁷.

Los derechos fundamentales tienen un contenido material abierto debido esencialmente a su apertura semántica y a su consideración como principios objetivos, que necesitan de una concreción valorativa y argumentativa que será colmada, principalmente, a través del desarrollo normativo que realice el Legislador y de su interpretación llevada a cabo por el Tribunal Constitucional. “[L]a determinación de cuál es en un caso concreto la conducta mandada, prohibida o permitida, resultará de la interpretación, extraída de la Constitución, primero de los enunciados que delimitan el derecho o derechos fundamentales en presencia y, luego, de la propia norma en la que consiste el derecho, dado el carácter abstracto y abierto de su objeto y contenido”²⁶⁸.

Es quizás BERNAL PULIDO quien mejor ha sabido aprehender, analizar y sintetizar la doctrina alemana y, en concreto, la obra de ROBERT ALEXI, con el fin de elaborar una teoría sobre la estructura de los derechos fundamentales con validez en nuestro marco jurídico-constitucional; para tal fin, partirá de la elaboración doctrinal del autor alemán relativa a la distinción entre <<disposiciones de derecho fundamental>>, <<normas de derechos fundamental>> y <<normas adscritas de derecho fundamental>>, así como la doble estructura de los derechos fundamentales como *principios y reglas*²⁶⁹.

²⁶⁷ PRESNO LINERA. “La estructura de las normas de derechos fundamentales”. *Op. Cit.* Págs. ¿46-47?

²⁶⁸ PRESNO LINERA. “La estructura de las normas de derechos fundamentales”. *Op. Cit.* Pág. ¿46?

²⁶⁹ Para un mayor análisis de la concepción doctrinal elaborada por ALEXI, véase su obra: *Teoría de los derechos fundamentales*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, (2002). Madrid.

Para BERNAL PULIDO, todo derecho fundamental en sentido lato está compuesto por tres elementos: las *disposiciones de derecho fundamental* o, lo que es lo mismo, su enunciado normativo; las *normas de derecho fundamental* o el conjunto de significados prescriptivos que establecen las disposiciones, es decir, el conjunto de proposiciones que determinan <<el deber ser>> y, por último, las *posiciones de derecho fundamental* o derecho fundamental en sentido estricto, esto es, las relaciones jurídicas entre los individuos o los individuos y el Estado, siendo el objeto de toda posición iusfundamental una acción u omisión, prescrita por dicha norma, que el sujeto pasivo debe desarrollar sobre el sujeto activo, y por tanto, el sujeto activo tiene un derecho de ejecución (conducta activa u omisiva) que debe ser ejercido por el sujeto pasivo²⁷⁰.

Ahora bien, las disposiciones de derecho fundamental se caracterizan por la indeterminación de sus enunciados. La indeterminación normativa de las disposiciones iusfundamentales, tanto la norma directamente estatuida pero sobre todo de las normas adscritas, se debe a distintas causas que originan dicha indeterminación, que pueden ser de origen semántico, sintáctico, estructural, redundancia o incluso indeterminación pragmática. Pues bien, para BERNAL PULIDO, los tipos de normas que componen el contenido prescriptivo de los derechos fundamentales poseen una generalidad que parte desde un mayor a un menor grado. Se produce una concatenación de subsunciones en relación a la fundamentación de dichas normas, así las disposiciones de derecho fundamental derivan directamente del texto normativo, las normas adscritas necesitan una mayor concreción y fundamentación que parte de las disposiciones normativas y, en último lugar, las normas individuales suponen una subsunción del caso en el supuesto de hecho contemplado, bien por una disposición, bien por una norma de derecho fundamental²⁷¹. En relación a su fundamentación por el Tribunal Constitucional, la norma individual determina, en relación al caso concreto, si la conducta está permitida o prohibida respecto o en relación a un concreto

²⁷⁰ BERNAL PULIDO, C.: *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el Legislador*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. Págs. 75-84.

²⁷¹ BERNAL PULIDO. “*El principio de proporcionalidad...*”. *Op. cit.* Págs. 97-109.

poder público u otro particular, estableciéndose normalmente en el fallo de la sentencia²⁷².

En relación a todo lo anterior, hemos de decir que las normas de derecho fundamental que nos suscita un mayor interés son las denominadas normas adscritas, ello por dos razones: En primer lugar, porque la mayoría de los casos planteados ante el Tribunal Constitucional van a tener que ser dilucidados en base a la determinación de estas normas, por tanto, van a necesitar de una concreción o validez definitiva por dicho órgano constitucional, que a su vez poseen una validez *prima facie* que procede de la propia Constitución. En segundo lugar, y por ello, le es exigible al Tribunal un deber de motivación que fundamente la validez definitiva de dichas normas adscritas al derecho fundamental. Una válida fundamentación de las normas adscritas de derechos fundamentales deberá estar correctamente argumentada en base a criterios materiales y estructurales²⁷³.

La concreción de los derechos fundamentales, de su contenido fragmentario y parcial, por parte del Tribunal Constitucional no conlleva necesariamente a deducir que se trate de una tarea arbitraria, pues estos riesgos disminuyen a medida que aumenta la motivación y argumentación en sus resoluciones, las cuales a su vez estarán sometidas a la indagación de la comunidad jurídica y científica²⁷⁴.

La interpretación que realice el Tribunal Constitucional, su fundamentación y argumentación, para considerar que un determinado ámbito normativo queda circunscrito al programa normativo del derecho fundamental, hará que el resto de poderes públicos y operadores jurídicos conozcan las razones jurídicas que han dado lugar al mismo. A mayor argumentación y justificación válida, mayor será el conocimiento y comprensión del contenido normativo. Una menor argumentación y justificación que derive en un desconocimiento de las razones jurídicas que llevan al Tribunal a determinar que un concreto ámbito material, faceta, acción, etc., forma parte del esfera

²⁷² BERNAL PULIDO. “El principio de proporcionalidad...”. *Op. cit.* Págs. 129-131.

²⁷³ BERNAL PULIDO. “El principio de proporcionalidad...”. *Op. cit.* Págs 110-129.

²⁷⁴ GAVARA DE CARA, J.C.: “La proyección interna...”. *Op.cit.* Pág. 30.

jurídicamente protegida por el derecho; puede considerarse mera discrecionalidad o, llegado el caso, incluso arbitrariedad en dicha actuación de circunscripción del objeto, contenido y normas adscritas al derecho fundamental. Con lo cual, a falta de dicho razonamiento o por consistir en un razonamiento insuficiente, la vinculatoriedad en relación al citado contenido menguará, disminuirá o, incluso, podrá verse soslayado al no encontrarse en él las razones o fundamentaciones que justifiquen el sometimiento al mismo.

Por ello, el acatamiento de la interpretación realizada no viene sólo impuesto por el órgano determinado para ello, sino que viene establecido por lo que se espera del órgano constitucional destinado a tal fin. Las sentencias del Tribunal son vinculantes no porque sean dictadas por el Tribunal Constitucional –y así se disponga por la Constitución y las Leyes²⁷⁵- sino que la vinculatoriedad de sus sentencias viene determinado principalmente por lo que se espera del Tribunal como intérprete *supremo* de la Constitución. La vinculatoriedad no se debe sólo a razones de *potestas*, sino principalmente y sobre todo a razones de *auctoritas*. En definitiva, a mayor razonamiento jurídico que muestre las razones concretas por la cual un determinado ámbito debe ser considerado, o no, parte del programa normativo del concreto derecho fundamental, redundará o debe redundar en el carácter vinculante de tal contenido normativo.

3º) La labor hermenéutica del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales.

La labor del Tribunal Constitucional no se muestra sólo a través de la concreta tutela individual del derecho fundamental, sino que la aportación del

²⁷⁵ Principalmente, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cual dispone en su artículo 1.1 LOTC: “El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica”. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial determina en su artículo 5.1 LOPJ: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Para añadir además que: “En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido”. (Art. 7.2 LOPJ).

Tribunal Constitucional va muchísimo más allá que la revisión de la concreta aplicación o inaplicación de la *norma iusfundamental* al caso concreto o la mera observancia de su correcta o incorrecta aplicación. Tal labor será esencial cuando procede en su actuación interpretadora a una definición de su contenido y establece una doctrina que, como corresponde a su condición de intérprete supremo de la Constitución, se impone a todos los jueces y tribunales y, obviamente, al resto de poderes públicos.

Para ello, y como bien define SOLOZABAL ECHEVARRIA “[l]a aplicación de los derechos fundamentales llevará en muchos casos al Tribunal Constitucional a la resolución de los conflictos de estos derechos entre sí y con otros bienes constitucionales tras la correspondiente ponderación, asumiendo la imprescindibilidad de todos los derechos fundamentales, inclinándose por la prevalencia en un caso concreto de un derecho sobre otro en razón de las circunstancias en que la colisión tiene lugar, actuando según las exigencias del principio de proporcionalidad que impone el sacrificio de un derecho sólo si la resolución del conflicto lo demanda y produciendo en el derecho que cede sólo el mínimo sacrificio si no es posible la compatibilización de los derechos, huyendo de absolutización por principio y en todo caso de ningún derecho”²⁷⁶.

Es decir, dicha actividad interpretativa de las disposiciones iusfundamentales efectuada por el Tribunal Constitucional puede reconducirse a una serie de principios que ha de estar o han de estar presentes en la actividad interpretativa de las normas de derecho fundamental, pues tal actividad forma parte del <<método>> propio de la interpretación constitucional²⁷⁷. Entre los que cabe destacar²⁷⁸:

Principio de unidad de la Constitución. Las normas constitucionales deben ser interpretadas en su conjunto como un todo coherente, esto supone

²⁷⁶ SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J.: “Los derechos fundamentales...”. *Op. cit.* Pág. 27.

²⁷⁷ HÄBERLE, P.: “Métodos y principios de interpretación constitucional. Un catálogo de problemas”.

ReDCE. Año 7, núm. 13, enero-junio 2010. Pág. 405.

²⁷⁸ HÄBERLE. “Métodos y principios de interpretación...”. *Op.cit.* Págs. 405-409.

Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978.

una perspectiva global de los principios constitucionales particulares, en el que no puede haber contradicciones²⁷⁹.

Principio de concordancia práctica. Los bienes e intereses protegidos han de ser armonizados en la resolución del caso concreto. Ha de producirse una realización optimizada de los valores y principios constitucionales en conflicto, sin que la protección de unos entrañe el desconocimiento o sacrificio de otros²⁸⁰.

Principio de proporcionalidad. Parte de la premisa que ningún derecho es ilimitado. El derecho por ello puede verse sometido a dicho control para la determinación de sus límites, que necesariamente ha de constar de una triple verificación: la legitimidad del fin perseguido, la necesidad de la medida limitativa y la proporcionalidad en sentido estricto de la misma. Tan sólo busca sopesar cuáles son los bienes en juego en un determinado caso, para determinar luego si el supuesto concreto examinado entra o no dentro del ámbito normativo de la norma a aplicar²⁸¹.

Principio de efectividad de los derechos. Obligación de los poderes públicos de interpretar la normativa aplicable en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales²⁸².

Principio de interpretación conforme con la Constitución. Obligación de interpretar todo el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Por tanto, de las interpretaciones de la norma ha de prevalecer aquella que permita una mayor efectividad de la norma constitucional, no declarándose inválida o nula una norma siempre que pueda ser interpretada de conformidad con la Constitución²⁸³.

²⁷⁹ STC 113/1994, de 14 de abril, FJ 9º; 179/1994, de 16 de junio, FJ. 5º; STC 154/2006, de 22 de mayo, FJ 4º.

²⁸⁰ STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 7º; STC 60/1991, de 14 de marzo, F.J. 5º; STC 154/2002, de 18 de julio. F.J. 12º.

²⁸¹ STC 62/1982, de 15 de octubre; F.J. 2º; STC 110/1984, de 26 de noviembre, F.J. 6º; STC 165/1987, de 27 de octubre, F.J. 10º; STC 70/2002, 70/2002, de 3 de abril FF.JJ. 9º y 10º.

²⁸² STC 67/1984, de 7 de junio, F.J. 6º; STC 104/1987, de 17 de junio, F.J. 3º; STC 18/1993, de 18 de enero, F.J. 2º; STC 205/2005, de 18 de julio, F.J. 5º.

²⁸³ STC 77/1985, de 27 de junio. F.J. 4º.

Principio de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados internacionales ratificados por España. Este principio es expresamente establecido o impuesto por la propia Constitución en el art. 10.2.; tendrán particular incidencia, no sólo los Tratados ratificados por nuestro Estado, sino en particular la interpretación del derecho interno de conformidad con los Tratados de la Unión Europea²⁸⁴.

En concreto, respecto a la jurisprudencia del TEDH, el Tribunal Constitucional ha asumido el principio de «cosa interpretada», que aunque no aparece expresamente establecido en el CEDH, puede derivarse explícitamente de su art. 19. El Tribunal Constitucional ha asumido así la jurisprudencia del TEDH, pero solo respecto a aquella que verse sobre los derechos reconocidos en el CEDH que sean coincidentes con los derechos y libertades establecidos en la CE. Ahora bien, dicha asunción no podrá ser incondicional sino que estará sometida a límites derivados de la propia Constitución y de la LOTC, como son que en base a dicha asunción puedan establecerse nuevos derechos no expresamente recogidos en la Constitución o que dicha jurisprudencia pueda ser utilizada para establecer límites nuevos a los derechos no establecidos en la Constitución²⁸⁵.

Quizás la Constitución en general o los derechos fundamentales en particular, no sea más que lo que el Tribunal Constitucional diga que es²⁸⁶, pero tal expresión de lo constitucional no puede sino estar sustentado en una serie de parámetros que lo legitimen. Como ya hemos tenido ocasión de analizar, no podemos sino partir de la distinción entre *disposición normativa* como el objeto que ha de ser interpretado y *norma de derecho fundamental* como producto interpretativo. Según se desprende de las teorías relativas a la interpretación jurídica y, en concreto, a aquellas centradas en la interpretación de los derechos fundamentales como *amplias* o *estrictas*, respecto a la primera

²⁸⁴ STC 130/1995, de 11 de septiembre, F.J. 4º; STC 24/2000, de 31 de enero, F.J.4º;

²⁸⁵ FOSSAS ESPADALER, E.: “Cosa interpretada” en derechos fundamentales: jurisprudencia del TEDH y jurisprudencia constitucional”. *Revista Vasca de Administración Pública*. Nº 82, 2, 2008. Págs. 179-180.

²⁸⁶ Rememorando la conocida cita del Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Charles Evans Hughes, “We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”. PRIETO SANCHÍS, L.: “Notas sobre la interpretación constitucional”. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. Núm. 9, mayo-agosto 1991. Pág. 175.

de ellas, supone entender que la interpretación es siempre necesaria en todo acto de aplicación normativa mientras que, en un sentido estricto, entiende que no siempre que exista una aplicación del derecho es necesario que exista dicha interpretación²⁸⁷.

Siguiendo a GUASTINI, a veces la interpretación es una actividad de conocimiento de normas preexistentes, mientras que en otras ocasiones, la interpretación constituye una actividad creadora de normas nuevas²⁸⁸. Entendemos que una interpretación de la realidad fáctica subsumible en una norma previamente establecida a través de la interpretación jurídica, no es, ni puede ser equivalente, a la necesaria interpretación jurídica previa a la aplicación del derecho fundamental donde esa norma jurídica aún no ha sido creada o concretada, por tanto, se requiere una labor doctrinal previa que permita finalmente determinar si esa realidad fáctica se encuentra contemplada o no en la norma iusfundamental. Por ello, mientras que en el primer caso la norma iusfundamental es previa y existente a la labor de subsunción, en el segundo caso no, siendo necesaria esa labor creadora a través de la interpretación jurisdiccional del derecho fundamental. No es de extrañar por tanto que la doctrina haya procedido a distinguir en todo proceso interpretativo entre los denominados casos *fáciles y difíciles*²⁸⁹.

En relación a la aplicación de los derechos fundamentales al caso concreto planteado, como hemos visto, es necesario una previa determinación del contenido normativo del mismo que a través de la labor interpretativa determine el objeto, contenido y límites del derecho. Pues bien, no siempre tal contenido normativo se va a encontrar determinado a la hora de conocer del caso concreto o en relación a la precisa cuestión que se le plantea al juzgador, en

²⁸⁷ CUENCA GÓMEZ, P.: "Aspectos, problemas y límites de la interpretación jurídica y judicial".

Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas. Año nº 9, nº 13, 2004. Pág. 268

²⁸⁸ GUASTINI, R: *Estudios sobre la interpretación jurídica*. Universidad Nacional Autónoma. Porrúa, 2002. Págs. 3-8.

²⁸⁹ ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: "Los límites de la interpretación constitucional: de nuevo sobre los casos trágicos". *Isonomía*. Nº 6, 1997. Págs. 7-30.

SASTRE ARIZA, S.: "Sobre la dificultad de los llamados casos fáciles, difíciles y trágicos". *Derecho y opinión*. Nº 1, 1993. Págs. 295-308.

VIDAL GIL, E.: "La interpretación de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional". *Corts: Anuario de derecho parlamentario*. Nº 11, 2001. Págs. 104-105.

general, ni a la jurisdicción constitucional, en particular. “El juez se encuentra a veces en la paradójica situación de estar obligado a resolver conforme a Derecho, los supuestos que se planteen y no saber qué Derecho aplicar, simple y llanamente porque no existe. Aun admitiendo la existencia de los casos fáciles o rutinarios, cada vez más nos encontramos ante casos difíciles donde el establecimiento de la premisa normativa y/de la premisa o fáctica resulta una cuestión problemática y pueden recibir más de una respuesta correcta, por lo que plantean el problema de armonizar valores o principios en conflicto y se presentan diversas soluciones capaces de lograr un equilibrio en cuanto que no sacrifican ninguna exigencia que forma parte del contenido esencial de los principios o valores últimos del ordenamiento. También se pueden presentar, los casos trágicos, que son aquellos respecto de los cuales no cabe tomar una decisión que no vulnere algún principio o valor fundamental del sistema”²⁹⁰.

Se hace preciso, por tanto, adentrarnos brevemente en lo que la doctrina *iustificatoria* viene entendiendo como *casos fáciles*, *casos difíciles* e, incluso, *casos trágicos*, con el fin de determinar el alcance de la labor del Tribunal Constitucional cuando se ha de enfrentar a los mismos. Entre sus principales teóricos se encuentran DWORKIN²⁹¹, WRÓBLEWSKI²⁹² y AARNIO²⁹³, entre otros autores. En nuestro país, tal labor doctrinal ha sido abordada fundamentalmente por el profesor ATIENZA RODRÍGUEZ, entre otros.

La distinción entre uno u otro supuesto, en principio, puede circunscribirse en que respecto a los primeros, *casos fáciles*, tanto los hechos a los que se va a aplicar la concreta norma jurídica, así como cuál sea ésta, no plantean problemas ni respecto a su identificación, ni en relación a su aplicación. Mientras que en el segundo supuesto, *casos difíciles*, estas cuestiones fácticas y/o normativas sí

²⁹⁰ VIDAL GIL, E.: “La interpretación de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional”. *Corts: Anuario de derecho parlamentario*. Nº 11, 2001. Págs. 104-105.

²⁹¹ DWORKIN, R.: *Los derechos en serio*. Ariel. Barcelona, 2002. También del mismo autor, *El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica*. Gedisa. Barcelona, 2012.

²⁹² WRÓBLEWSKI, J.: *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*. Civitas. Madrid, 1985.

²⁹³ AARNIO, A.: *Lo racional como razonable*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991.

plantean problemas²⁹⁴ en relación a su interpretación y aplicación, todo ello con independencia de que no existe un consenso teórico generalizado²⁹⁵ que determine de manera precisa cuándo se está ante uno u otro supuesto, ni tampoco cuáles son las causas exactas que determinan que podamos estar ante un *caso fácil o difícil*²⁹⁶, pero si podemos establecer unos elementos comunes dentro de la citada doctrina.

Mientras que “la justificación de las decisiones a tomar en unos u otros *casos fáciles*²⁹⁷ (y supuesto que el juez tiene el deber de aplicar las reglas del Derecho válido y puede identificar cuáles son esas reglas válidas a través de la aceptación de criterios de reconocimiento compartidos), la justificación consistiría en efectuar una mera deducción, el consabido silogismo judicial, cuya conclusión (...) no es una decisión (por ejemplo, “condeno a X a la pena P”), sino una norma (“debo condenar a X a la pena P”)²⁹⁸.

Los problemas que definen o caracterizan a los *casos difíciles* según ATIENZA RODRÍGUEZ, son los siguientes:

- “1. Problemas de relevancia, cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso.
2. Problemas de interpretación, cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas aplicables al caso.

²⁹⁴ EZQUIAGA GANUZAS, F.J.: “Aciertos y fallos judiciales”. *El error judicial. La formación de jueces. Fundación Coloquio Jurídico Europeo*. Jornada 28, 2009. Pág. 5

²⁹⁵ Como ocurre con el movimiento *Critical Legal Studies*, para quienes no existirían los *casos fáciles*. En tal sentido, ATIENZA RODRÍGUEZ “Los límites de la interpretación constitucional...”. *Op.cit.* Pág.11-12.

²⁹⁶ En tal sentido EZQUIAGA GANUZAS enumera las siguientes: “puede señalarse que un *caso difícil* puede estar provocado por la indeterminación del lenguaje usado para redactar las disposiciones, porque se pone de manifiesto una antinomia o una laguna o porque el operador jurídico no comparte la solución normativa; sus consecuencias serán que no cabe en relación a ellos hablar de solución correcta; su solución puede requerir sopesar las disposiciones en conflicto, utilizar los principios o acudir a juicios morales; y el conocimiento de las normas que los resuelven no es posible ya que éstas no preexisten, sino que deben ser “construidas”. Por su parte, podrá hablarse de *casos fáciles* cuando la disposición es unívoca en su significado, éste es consistente y satisfactorio para el operador jurídico, por lo que habrá consenso en que esa es la solución normativa correcta; en definitiva, será posible conocer cuál es la norma jurídica que ofrece la solución normativa de un caso.”. *Op. cit.* Págs. 6-7.

²⁹⁷ La cursiva es nuestra

²⁹⁸ ATIENZA RODRÍGUEZ “Los límites de la interpretación constitucional...”. *Op.cit.* Pág. 9.

3. Problemas de prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar.
4. Problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma”²⁹⁹.

Por ello, mientras que en los *casos fáciles* no existe más que una tarea aplicativa del Derecho, en los *casos difíciles* se precisa una labor interpretativa previa³⁰⁰.

En definitiva, las diferencias entre tales supuestos pueden determinarse, de manera muy sintética, en que la dificultad de un caso “puede provenir de una doble vertiente: a) con relación a la norma (problemas normativos) y b) con relación a los hechos (problemas fácticos). En el primer caso puede ocurrir o bien que no exista la norma (laguna) o bien que aún existiendo ésta, se presente problemas de interpretación (lagunas de reconocimiento). Los problemas del segundo tipo suceden o bien porque no se hayan producido los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la norma o porque aún habiéndose producido su calificación jurídica sea controvertida”³⁰¹. Por tanto, la menor o mayor dificultad, o incluso la ausencia de ésta, dependerá de una menor o mayor disminución de los problemas normativos y/o fácticos relativos al caso concreto que es objeto de enjuiciamiento³⁰².

Por tanto, la posición entre la función de interpretación y aplicación del Derecho y, en nuestro caso, de las *normas iusfundamentales* que han de llevar a cabo los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional no puede ser valorado o determinado en base a criterios de índole cuantitativa, sino de índole o corte institucional pues este ha sido configurado

²⁹⁹ ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991. Pág. 244; siguiendo para ello a la conceptualización iniciada por NEIL MACCORMICK en su obra *Legal Reasoning and Legal Theory*. Clarendon, 1997

³⁰⁰ ATIENZA RODRÍGUEZ “Los límites de la interpretación constitucional...”. *Op.cit.* Pág. 9.

³⁰¹ SASTRE ARIZA, S. *Op.cit.* Págs. 299.

³⁰² No obstante, hemos de señalar que ATIENZA RODRÍGUEZ establece un tercer supuesto que son los denominados *casos trágicos*, que puede circunscribirse a aquellos supuestos en los casos en los que el ordenamiento jurídico no ofrece ninguna respuesta correcta. “Los límites de la interpretación constitucional...”. *Op.cit.* Pág. 13.

como *supremo intérprete* de la Constitución y de sus garantías³⁰³. Como señala ATIENZA “[c]ualquier argumentación judicial de carácter justificativo se apoya en último término en premisas (normas y valores) constitucionales. Esto puede no resultar manifiesto en los casos fáciles (en los que hay una norma específica, una regla, aplicable sin más al caso), pero simplemente porque, al no ponerse en cuestión la regla, la argumentación no necesita llegar hasta niveles de justificación más profundos. Pero las reglas, como sabemos, tienen su justificación en los principios y el recurso (explícito) a ellos se vuelve necesario cuando aparecen casos difíciles, esto es, casos en los que no hay una regla aplicable, o hay más de una entre sí contradictorias, o hay una sola pero su contenido prescriptivo va más allá o más acá de su justificación subyacente, esto es, hay un desajuste entre el aspecto directivo y el valorativo”³⁰⁴.

Por tanto, y para ello, la motivación se alza como un deber jurídicamente necesario, para empezar, ha de considerarse jurídicamente *inválida*³⁰⁵ no sólo aquella resolución que carezca por completo de motivación jurídica que la sustente, sino a toda aquella resolución que, desde un punto cualitativo y cuantitativo, no aporte las razones que conducen a la adopción de la misma. Así, “[e]l deber de motivar los Autos y Sentencias, no es como dice el TS un requisito de *elegantia iuris*, sino como recuerda el TC, un deber constitucional que contribuye a la aceptación del Fallo en el marco de las sociedades pluralistas supliendo mediante el consenso, la función que anteriormente cumplían la autoridad y/o la tradición.”³⁰⁶. La justificación como argumentación jurídica “en la jurisprudencia constitucional reviste una trascendencia muy superior por cuanto (...) la ratio decidendi no es una operación que se realice a partir del Derecho, sino que es Derecho. En otras palabras, la argumentación del Tribunal no constituye un ejercicio académico ni de cortesía, ni tampoco obedece obviamente a la existencia de una fiscalización superior, sino que representa una actuación directa y vinculante sobre el contenido de las normas. Por ello, la fundamentación de la sentencia no desempeña el papel de una exposición de motivos de la decisión o fallo, sino más bien una

³⁰³ *Ibidem*.

³⁰⁴ ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: “Constitución y argumentación”. *Anuario de filosofía del derecho*. Nº 24, 2007. Págs. 219-220.

³⁰⁵ CUENCA GÓMEZ, P. *Op.cit.* Pág. 292

³⁰⁶ VIDAL GIL. *Op.cit.* Pág. 79.

reconstrucción de algún aspecto o sector del sistema jurídico”³⁰⁷. Hacer visible y transparente la argumentación jurídica contribuye a legitimarla³⁰⁸. Como bien expresa GARCÍA DE ENTERRÍA, “se trata, en definitiva, (...), de presentar al pueblo las decisiones constitucionales como un producto de la «artesanía» jurídica, a partir de los principios constitucionales, y no como *ukases*, como decisiones de poder que sólo podrían apoyarse en las inclinaciones personales de los jueces constitucionales, inclinaciones irrelevantes para el pueblo y que carecen de cualquier legitimidad para erigirse en motivos últimos de dichas decisiones”³⁰⁹.

Pero de lo anterior, no puede desprenderse que la motivación de la resolución del caso concreto -que siempre es necesaria- pueda ser tenida en la misma consideración cuando en la función interpretativa lo que se produce es una subsunción respecto de una norma *iusfundamental* preexistente, de aquella otra en la que dicha norma de derecho fundamental no existe o no ha sido previamente concretada y, es aquí, donde reside la distinción esencial entre la labor interpretativa de los órganos de la Jurisdicción ordinaria y del Tribunal Constitucional. Mientras que en el primer caso la función interpretativa que puedan realizar es idéntica y sólo estaría determinada en base a la posición de *subsidiariedad* de la segunda respecto a la primera. En el segundo supuesto la función interpretativa es esencial y marca la diferencia de la una frente a la otra, puesto que en este caso la determinación de la *norma iusfundamental* es la labor esencial que ha de realizar el Tribunal Constitucional como interprete *supremo* de la Constitución, quedando vinculados los órganos de la jurisdicción ordinaria a dicha concreción normativa, (art.123.1 CE).

4º) La determinación del alcance objetivo y del contenido material de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo.

³⁰⁷ PRIETO SANCHÍS, L.: “Notas sobre la interpretación constitucional”. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. Núm. 9, mayo-agosto 1991. Pág. 190.

³⁰⁸ PRIETO SANCHÍS. *Op. Cit.* Pág. 192.

³⁰⁹ GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: Posibilidades y perspectivas”. *REDC*. Núm. 1, enero-abril 1981. Pág. 129

La dimensión subjetiva del recurso de amparo deriva de su función como mecanismo de tutela de los derechos fundamentales que no han sido reparados por la jurisdicción ordinaria o, bien, los derechos han sido directamente conculcados por dicha jurisdicción. Pero, a su vez, el recurso de amparo posee una dimensión objetiva que deriva de la función nomofiláctica de la propia Constitución³¹⁰. La *dimensión objetiva del recurso de amparo* pone el foco en aquellos recursos que susciten planteamientos relevantes en torno a la configuración y eficacia de los derechos, es decir, supuestos en los que exista un especial interés dogmático relativo a la construcción de la teoría constitucional de los derechos fundamentales³¹¹, es decir, en los llamados *casos difíciles*.

La doble dimensión de los derechos fundamentales como derechos subjetivos y mandatos objetivos, ha estado presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios, desde la primera sentencia dictada en amparo. Así vino a determinar en la STC 1/1981, de 26 de enero, (F.J. 2º), que:

“La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades que hemos dicho, cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, proclamado en el art. 53.2, aparece también el de la defensa objetiva de la Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que trasciende de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo (art. 1 de la LOTC), de manera que su interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, la definición de la norma, se impone a todos los poderes públicos. Corresponde, por ello, al Tribunal Constitucional, en el ámbito general de sus atribuciones, el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos”.

³¹⁰ SARAZÁ JIMENA. “La protección jurisdiccional...”. *Op.cit.* Pág. 262.

³¹¹ SARAZÁ JIMENA. “La protección jurisdiccional...”. *Op.cit.* Pág. 265.

Ambas dimensiones se encuentran en la elaboración doctrinal efectuada por el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Así, por un lado, respecto a la dimensión objetiva, los derechos fundamentales cumplen, entre otras, una función de irradiación respecto al resto del ordenamiento jurídico y, a su vez, suponen mandatos de optimización dirigidos a los poderes públicos.

“Cabe recordar a este respecto que los derechos fundamentales, si bien continúan concibiéndose primordialmente como derechos subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión objetiva, en virtud de la cual operan, como componentes estructurales básicos, que han de informar el entero ordenamiento jurídico. Como consecuencia de este «doble carácter de los derechos fundamentales (STC 25/1981, FJ 5º), pende sobre los poderes públicos una vinculación también dual: en su tradicional dimensión subjetiva, les impone la obligación negativa de no lesionar la esfera de libertad por ellos acotada; en su vertiente jurídico-objetiva, reclama genéricamente de ellos que, en el ámbito de sus respectivas funciones, coadyuven a fin de que la implantación y disfrute de los derechos fundamentales sean reales y efectivos, sea cual fuere el sector del ordenamiento en el que los mismos resulten concernidos (SSTC 53/1985, FJ 4º, y 129/1989, F.J 3º). Tal es, ciertamente, la comprensión de los derechos fundamentales que se infiere de un texto constitucional que, tras proclamar el Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), y, por ende, comprometer a los poderes públicos en la promoción de la libertad y la igualdad del individuo (art. 9.2 CE), eleva el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás a la condición de fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE).

Y aunque este deber de protección de los derechos fundamentales se proyecta en primer término y señaladamente sobre el legislativo, ya que, al recibir de ellos «impulsos y líneas directivas» encauzadores de su actividad legiferante (STC 53/1985, F.J. 4º), ha de encargarse de conformar ab initio todos los sectores del ordenamiento en consonancia con los mismos, no cabe infravalorar el alcance de esta obligación cuando se impone a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional exclusiva (art. 117.3 CE).

De hecho, constitucionalmente se subraya su relevancia desde el momento en que el art. 53.2 CE explicita el deber específico de tutela de los derechos fundamentales que incumbe a los Jueces y Tribunales ordinarios”³¹².

“En su dimensión objetiva, los derechos fundamentales, que informan todo el ordenamiento jurídico, se erigen en componentes estructurales básicos del mismo en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4º). La significación que estos derechos adquieren dentro del orden constitucional impone a los poderes públicos el deber de garantizar su efectiva vigencia y, especialmente, obliga al Legislador a proteger los valores positivados y formalizados en el ordenamiento a través de los derechos fundamentales, reconociendo, en su caso, las titularidades y obligaciones subjetivas que reputa a tal fin necesarias”³¹³.

Pero, por otro lado, el recurso de amparo ha supuesto y supone un mecanismo de fundamentación y concreción del contenido normativo de los derechos fundamentales. Sin ánimo de exhaustividad, ya que un análisis pormenorizado de la doctrina emanada respecto a todos y cada uno de los derechos fundamentales accesibles en amparo desbordaría el objeto del presente trabajo, podemos ejemplificar como el Tribunal ha venido a través de dicho recurso determinando el *objeto, contenido y límites* de los derechos fundamentales o, si se quiere, el contenido material de las *disposiciones y normas de derecho fundamental*. Es decir, desde la puesta en marcha de la nueva Constitución de 1978, la labor del Tribunal Constitucional a través del amparo no ha sido la de un “simple” órgano de tutela de los derechos fundamentales o la de un órgano revisor de la actuación llevada a cabo por los órganos de la jurisdicción ordinaria, sino que su función ha ido más allá de la mera tutela subjetiva del caso concreto, pues ha creado y sigue creando doctrina incluso cuando no procede a declarar vulnerado o conculcado un

³¹² ATC 382/1996 de 18 diciembre. F.J. 3º

³¹³ STC 129/1989, de 17 de julio. F.J. 3º

derecho fundamental, algo que incluso en su día llamó la atención de nuestra doctrina³¹⁴.

Por ejemplo, el derecho a la integridad física (art. 15 CE), tiene como objeto o ámbito constitucionalmente garantizado “la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ. 8º, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ. 5º). Estando destinado a “proteger la «incolumidad corporal» (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ. 2º). Pero el derecho no sólo se queda ahí, sino que formará parte del contenido del derecho no sólo la protección frente a las anteriores injerencias “sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ. 5º). Por otra parte, (...), el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ. 3º), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma (SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ. 4º, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ. 6º). Pues bien, respecto a los límites, el Tribunal reconoce que “la Constitución, (...), no prevé expresamente la posibilidad de un sacrificio legítimo de los derechos a la integridad física (...), mas ello no significa que sean derechos absolutos, pues pueden ceder ante razones justificadas de interés general convenientemente previstas por la Ley, entre las que, sin duda, se encuentra la actuación del ius puniendi (STC 37/1989, FFJJ 7º y 8º). Así pues, el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal son, desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de una intervención corporal,

³¹⁴ Así EMBRID IRUJO, mostraba la labor hermética realizada por el Tribunal a pesar de no haber otorgado el amparo solicitado por el recurrente: “Esta sentencia, dentro de su aparente simplicidad, plantea una serie de cuestiones básicas acerca del modo de ejercicio de los derechos y libertades públicas, de la posición de la Administración y del resto de los poderes públicos ante ellas, del efecto derogatorio de la Constitución sobre el derecho anterior que se le oponga, cuestiones fundamentales que merecen un comentario. Mención especial habrá que dedicar al hecho paradójico —y de ahí el título de estas líneas— de que un recurso de amparo desestimado configure, definitivamente y frente a todos, el derecho fundamental del recurrente”. En “El efecto estimatorio de un Recurso de amparo desestimado. Reflexiones sobre el régimen transitorio de las libertades públicas”. *REDC*. Año 3. Núm. 8. Mayo-agosto 1983. Pág. 149.

siempre y cuando dicha medida esté prevista por la Ley”. (STC 207/1996 de 16 diciembre, FJ 4º). A tal efecto, recuerda que “la medida limitativa del derecho fundamental esté prevista por la Ley, que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo. A todos ellos hay que sumar otros derivados de la afectación a la integridad física, como son que la práctica de la intervención sea encomendada a personal médico o sanitario, la exigencia de que en ningún caso suponga un riesgo para la salud y de que a través de ella no se ocasione un trato inhumano o degradante” (STC 7/1994, FJ 3º).

También en relación, por ejemplo, con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, (art.18.2 CE), encontramos que “el «rasgo esencial» del domicilio como objeto de protección del art. 18.2 CE es el de «constituir un ámbito espacial apto para un destino específico, el desarrollo de la vida privada» (STC 10/2002, de 17 de enero, FJ. 6º)”, por tanto, forma parte del contenido material protegido por el derecho “la «morada de las personas físicas», «reducto último de su intimidad personal y familiar» (STC 283/2000, de 27 de noviembre, FJ. 2º); siendo el concepto de domicilio protegido por el derecho un concepto amplio que abarca al “«espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella» (STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ. 5º)”. En cuanto a los límites al derecho a la inviolabilidad del domicilio “sólo puede ser limitado mediante «resolución judicial». En concreto, por lo que respecta a la potestad administrativa de autotutela o de ejecución de sus propias decisiones, (...), no conlleva una autorización de ingreso en el domicilio con un automatismo formal. Por el contrario, también en las «entradas administrativas» es menester la autorización judicial prescrita por el art. 18.2 de la Constitución que no establece excepciones de este tipo a la garantía procesal que introduce (STC 22/1984, de 17 de febrero, F.J. 5º)”. (Por todas, STC 211/1992 de 30 noviembre, FJ. 3º).

En cuanto al derecho fundamental a la libertad de expresión, (art. 20.1. a) CE), “tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las creencias y juicios de valor” (STC 4/1996, de 16 de enero, FJ. 3º). Está contenido dentro de dicha libertad de expresión, es decir, forma parte del contenido material del derecho “la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige” (por todas, SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ. 5º; 49/2001, de 26 de febrero, FJ. 4º; 204/2001, de 15 de octubre, FJ. 4º; y 181/2006, de 19 de junio, FFJJ. 4º y 5º). Sin embargo, tiene como límites o está “excluido del ámbito de protección de dicha libertad las frases y expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, que sean innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la Norma Fundamental” (SSTC 105/1990, de 6 de junio, 85/1992, de 8 de junio, 336/1993, de 15 de noviembre, 170/1994, de 7 de junio, 42/1995, de 13 de febrero, 76/1995, de 22 de mayo, 176/1995, de 11 de diciembre y 204/1997, de 25 de noviembre). (Por todas, STC 6/2000, de 17 de enero, FJ. 5º).

Para finalizar, podemos hacer referencia también al derecho a la huelga (art. 28.2 CE), el objeto del derecho es “la cesación del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones” y forman parte de dicho contenido o “son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y la decisión de darla por terminada. También (...) el derecho a la huelga comprende la facultad de declararse en huelga y la facultad de elegir la modalidad de huelga dentro de los tipos que la Ley haya admitido. Por su parte en la STC 120/1983, (FJ. 4º) se precisaba que la facultad de publicidad abarca no sólo la del hecho mismo de la huelga, sino también la de sus circunstancias o de los obstáculos que se oponen a su desarrollo, a los efectos de exponer la propia postura, recabar la solidaridad de terceros o superar la oposición”. (ATC 570/1987, de 13 mayo. FJ. 2º). En cuanto a los límites del derecho, el Tribunal ha reiterado que “el derecho de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros porque ello afecta a otros bienes o derechos

constitucionalmente protegidos, como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral que plasman los arts. 10.1 y 15 CE. Así, el ATC 36/1989, (...), subrayó que el derecho de huelga no comprende la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio o coactivo". (STC 137/1997 de 21 julio. FJ. 3º).

Pero también, y en relación con lo anterior, el recurso de amparo ha supuesto y supone un mecanismo de fundamentación y concreción de otros aspectos del contenido del derecho fundamental como son su *naturaleza jurídica* y la concreción de la *titularidad y ejercicio* de los mismos. En tal sentido, por ejemplo, y centrándonos en los anteriores derechos podemos extraer lo siguiente:

Respecto al derecho a la integridad física (art. 15 CE), "el derecho a la integridad física y moral constituye un derecho erga omnes, que puede ser, por ello, vulnerado tanto por los poderes públicos como por los particulares", (STC 74/2007, de 16 abril. F.J. 5º). En cuanto a su titularidad, "sólo puede serlo la persona humana viva (SSTC 53/1985 y 212/1996, entre otras)". Por ello, "sin duda, la persona ya fallecida, como realidad jurídicamente distinta, ha de ser objeto de una particular protección jurídica. Ahora bien, esa protección nunca podrá tener respaldo constitucional en los derechos fundamentales del art. 15 CE", (ATC 149/1999, de 14 junio).

En relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, (art.18.2 CE), "la «garantía se logra básicamente con la cobertura de la entrada por una autorización judicial fundada en una causa legal» (ATC 258/1990, de 18 de junio y ATC 58/1992, de 2 de marzo). Por tanto, "Las garantías esenciales de la incolumidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio,(...), consisten en el carácter judicial del órgano autorizante de la entrada y registro y en la realización por parte de dicho órgano de una ponderación previa de los derechos e intereses en juego". (STC 126/1995, de 25 de julio). En cuanto a la titularidad, "el derecho a la intimidad que reconoce el art. 18.1 de la C. E. por su propio contenido y naturaleza, se refiere a la vida privada de las personas individuales, en la que nadie puede inmiscuirse sin estar debidamente autorizado, y sin que en principio

las personas jurídicas, como las Sociedades mercantiles, puedan ser titulares del mismo, ya que la reserva acerca de las actividades de estas Entidades quedará, en su caso, protegida por la correspondiente regulación legal, al margen de la intimidad personal y subjetiva constitucionalmente decretada". (ATC 257/1985, de 17 de abril y STC y 37/1989, de 15 de febrero).

En cuanto al derecho fundamental a la libertad de expresión, (art. 20.1. a) CE), respecto a su naturaleza jurídica, "los derechos de libre expresión y de información, en su dimensión de derechos de libertad, significan básicamente ausencia de interferencias o intromisiones ilegítimas en el proceso de comunicación, pero, a la vez, en su dimensión institucional, suponen una garantía de una opinión pública libre y del mantenimiento de un pluralismo político ; en definitiva, el art. 20 de la Constitución es una garantía de una comunicación pública libre sin la cual vendría falseada la libertad democrática; (SSTC 12/1982, de 31 de marzo y 127/1994, de 5 de mayo)". En cuanto a su titularidad, "[e]sta libertad de expresión es ante todo un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos, si éstos intentaran fijar límites distintos de los que la Constitución admite"; (SSTC 12/1982, de 31 de marzo).

Para finalizar, en relación al derecho a la huelga (art. 28.2 CE), "derecho este coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido en el art. 1.1 CE que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos de la población socialmente dependientes. En efecto, la Constitución, lo que hace es reconocer el derecho de huelga, consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias garantías". (STC 11/1981, de 8 abril³¹⁵ y STC 332/1994, de 19 diciembre, entre otras). En cuanto a su titularidad, "[d]efine al derecho de huelga el ser un derecho atribuido a los trabajadores <<uti singuli>>, aunque

³¹⁵ Si bien la STC 11/1981, de 8 de abril, no fue una sentencia dictada de en conocimiento de un recurso de amparo, sino de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo de dicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo; pero parte de dicha jurisprudencia inicial ha servido de base y permitió la construcción jurisprudencial a través del recurso de amparo.

tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos”, (STC 11/1981, de 8 abril)³¹⁶.

Pues bien, la *dimensión objetiva del recurso de amparo* no sólo se circunscribe a la determinación y concreción normativa de las disposiciones de derecho fundamental sino que, también, tal dimensión permite determinar el alcance de la dimensión *objetiva* de los derechos fundamentales en sentido estricto. Es decir, el alcance de las obligaciones derivadas de los derechos en relación a los poderes públicos que, como vimos, conceptuaba a los derechos fundamentales no sólo como prerrogativas o potestades del individuo frente al Estado, despojándose por tanto de la consideración de meros mecanismos de defensa sino también, y principalmente, como concretos mandatos de protección y de optimización que permiten el máximo desarrollo del haz de facultades comprendido en el derecho fundamental, desde un punto de vista jurídico y fáctico, los derechos fundamentales irradian todos los ámbitos del ordenamiento jurídico e inciden en las funciones del Estado. Pues así se deriva de nuestro propio sistema constitucional y de garantías de los derechos y libertades fundamentales, (arts. 1.1, 9.2, 10.1 y 53.1 CE).

Por tanto, la actuación del Tribunal Constitucional deriva de su propia configuración como órgano constitucional de cierre del sistema constitucional (Tít. IX CE). El Tribunal Constitucional, como bien lo define GARCÍA MARTÍNEZ, es “el custodio de que la actuación concreta de los demás poderes del Estado, que legítimamente interpretan y aplican la norma constitucional, no rebase los límites que los valores y principios consensuados por todos, consagrados en la Constitución e incorporados al sistema político, jurídico y social derivado de aquella. En otras palabras, es el custodio, por mandato de la Constitución, es decir del poder constituyente, del modelo político querido por ese poder constituyente frente a su posible desvirtuación por los poderes constituidos”³¹⁷. Por todo ello, y debido no sólo al carácter extraordinario y subsidiario del amparo, sino también a la propia *dimensión objetiva del recurso de amparo*, el Tribunal puede y debe entrar a conocer de

³¹⁶ Ibídem.

³¹⁷ GARCÍA MARTÍNEZ, M^a. A.: “¿Quis custodiet custodes? El Tribunal Constitucional y la garantía del orden constitucional”. *InDret*. Nº 4, 2008. Pág.

todo aquel amparo que pueda poner en riesgo, no una concreta vulneración un derecho fundamental de un particular derivada de una concreta actuación de un poder público, sino cuando se evidencie que la actividad o inactividad de los poderes públicos ponen en serio riesgo el sistema político, jurídico y social instaurado en nuestra norma fundamental.

Los derechos fundamentales, además de *principios y reglas*, son sobre todo derechos subjetivos y por tanto su contenido se caracteriza por la justiciabilidad. El hecho de que los derechos fundamentales sean directamente aplicables y no necesiten un desarrollo legislativo, no significa que no se necesite un desarrollo legislativo para hacer efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a intromisiones ilegítimas de los mismos. Pues bien, como hemos visto, en sede de jurisdicción ordinaria la tutela se producirá a través de los distintos procedimientos preferentes y sumarios en los distintos órdenes jurisdiccionales (civil, contencioso-administrativo, laboral o penal) pero, no sólo a través de dichos procedimientos específicos, sino que también la tutela de los derechos fundamentales se producirá o deberá producirse necesariamente a través de los distintos procedimientos ordinarios establecidos en tales órdenes³¹⁸.

Como bien sintetiza ALÁEZ CORRAL, “el Tribunal Constitucional se interpone entre la Constitución y el juez ordinario a la hora de dotar de efectividad al contenido de los derechos fundamentales a través de su tutela jurisdiccional. El artículo 5.1 en relación con el artículo 7 LOPJ obliga al juez ordinario no sólo a dotar de efectividad en el ámbito de sus funciones legalmente regladas a los derechos fundamentales, sino, además, a hacerlo de conformidad con la interpretación que de los mismos, en tanto normas constitucionales, haya realizado su supremo intérprete, el Tribunal Constitucional. Ciertamente esta mediación no es siempre necesaria, pues cabe que nuestro más Alto tribunal no haya sentado jurisprudencia sobre unos u otros aspectos del objeto, contenido o límites de los derechos fundamentales. Pero, de existir esta interpretación jurisprudencial, la misma siempre tiene

³¹⁸ ALÁEZ CORRAL, B.: “La eficacia de los derechos fundamentales”. *Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución española de 1978*. Ed. Tecnos, Madrid. (2004). Págs. 185-186.

efectos vinculantes sobre la interpretación de los derechos fundamentales que pueden realizar los tribunales ordinarios, y esta última, además, susceptible de control a través de la revisión de las resoluciones judiciales sobre derechos fundamentales en las distintas instancias y procesos judiciales ordinarios y, en su caso, ante el propio Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo”³¹⁹.

Pues bien, es esta última posibilidad de control sobre la actuación de la jurisdicción ordinaria por parte del Tribunal Constitucional – el conocimiento de los denominados *casos fáciles*- la que ha venido a eliminar, o a limitar, de manera efectiva la reforma efectuada en el recurso de amparo por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo; que veremos a continuación. Potenciándose o circunscribiéndose de manera primordial a aquellos supuestos en los que el Tribunal tenga que entrar a conocer del recurso para determinar el objeto, contenido y alcance de los derechos fundamentales, labor absolutamente necesaria para, en última instancia, dotar de contenido efectivo a los derechos fundamentales y de concreción de los mandatos de protección y de optimización dirigidos a los poderes públicos. Por todo lo anterior, lo que se ha venido a denominar como *dimensión objetiva del recurso de amparo* no se corresponde de manera mimética con la llamada *dimensión objetiva* de los derechos fundamentales, en sentido estricto.

Al Tribunal Constitucional le corresponde, en última instancia, determinar a través de la labor hermenéutica que le es atribuida, como supremo intérprete de la Constitución, la concreción de las *normas iusfundamentales* y las consiguientes disposiciones de derecho fundamental que integran los enunciados normativos que establecen los derechos fundamentales, susceptibles de ser recurridas en amparo. Le incumbe, por tanto, a través de la *dimensión objetiva del recurso de amparo*, la labor de interpretación y concreción de cuáles sean dichas normas y disposiciones que se integran en los distintos derechos fundamentales, que a partir de ese momento formarán parte del derecho fundamental o libertad pública de que se trate. No le corresponde por tanto convertirse en un órgano de revisión o “*super-casación*”

³¹⁹ ALÁEZ CORRAL. “La eficacia de los derechos fundamentales”. *Op.Cit.* Págs. 186-187.

respecto a la labor llevada a cabo por los órganos de la jurisdicción ordinaria, ni le corresponde detenerse en cuestiones accesorias y secundarias tal y como ha sido la mayor parte de su labor realizada hasta ahora a través del recurso de amparo³²⁰. Que si bien antes de la reforma planteada se le exigía como un mecanismo de *autocontrol* del propio Tribunal³²¹, ahora es una obligación impuesta por la reforma efectuada. En definitiva, el asunto planteado ante el Tribunal a través del recurso de amparo debe dar lugar a una concreción y actualización de las normas adscritas de derecho fundamental o, si se quiere, al contenido y límites de las mismas, que no suponga por tanto una reiteración de lo ya determinado por él mismo con anterioridad a tal supuesto. Por tanto, esa nueva concreción o actualización de tales normas y disposiciones, al formar parte desde ese preciso momento del programa normativo, pasa a configurar al propio derecho fundamental y, con ello, se desplegarán las concretas garantías necesarias para la efectividad de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, principalmente, a través de la vinculación de los poderes públicos, la reserva de ley, su eficacia directa y, llegado el caso, su tutela y protección ante la jurisdicción ordinaria.

Por todo lo anterior, y desde el punto de vista de la llamada *dimensión objetiva del recurso de amparo*, una vez determinadas las normas y disposiciones que forman parte del contenido material del derecho fundamental, el Tribunal ha de entender cumplida su función establecida en la configuración dada al recurso de amparo. Es decir, en su función atribuida como órgano *supremo* de concreción, determinación y alcance de las normas iusfundamentales, pero no comprende tal función la revisión de la correcta o

³²⁰ En tal sentido vino ya a expresarlo en su día SANTAOLLA LÓPEZ, cuando en relación a labor realizada hasta la fecha por el Tribunal manifestó que “la praxis del Tribunal revela una tendencia a pronunciarse sobre aspectos que no parecen sustanciales en el sistema de libertades públicas. Hay, ciertamente, sentencias en que se aclaran o delimitan sus aspectos básicos, de nivel constitucional si se quiere, pero también hay otras, seguramente la mayoría, que se entretienen en cuestiones de segundo orden, de mero alcance legal, que como tales tienen ya sus instrumentos consagrados para su protección sin necesidad de llegar a tan alto nivel. Pues aunque aspectos constitucionales y legales no siempre son fácilmente separables, no es menos cierto que en la mayoría de los casos el común sentido jurídico permite diferenciarlos. En todo caso, los contados casos en que se ha producido esa jurisprudencia positiva (cuyo número no conviene exagerar) no compensan el enorme coste que, como hemos creído demostrar, determina el recurso de amparo”. En *“El recurso de amparo y el desamparo del Tribunal Constitucional” Op.cit.* Pág 167.

³²¹ Entre otros, FERNÁNDEZ FARRERES, G.: *El recurso de amparo según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Marcial Pons. Madrid, 1994. Pág. 18.

incorrecta aplicación y protección de las normas de derechos fundamentales pues, a partir de ese momento, serán el resto de poderes públicos los directamente vinculados por el contenido material de tales derechos fundamentales y, por tanto, los encargados de velar por su protección.

CAPÍTULO III: LAS REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL CONTENIDO DE LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO.

I.- LAS REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha sido modificada hasta en cinco ocasiones previas, por tanto, la reforma realizada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo; no ha sido la primera en modificar la norma reguladora del funcionamiento y atribuciones del Alto Tribunal.

En esas ocasiones -con un mayor o menor alcance de los preceptos y el contenido reformado- el Legislador ha intentado paliar las posibles disfunciones o añadir competencias que se vislumbraban necesarias y que debían ser objeto de conocimiento por el *supremo* intérprete de nuestra Constitución, siendo el resultado el siguiente:

- Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre. Mediante la que se modificó el recurso de amparo y se derogó el artículo 45 del texto original de la LOTC, como ya vimos.

- Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio. Que suprimió *el recurso previo de inconstitucionalidad*, mediante el cual el Tribunal Constitucional podía entrar a conocer de aquellos recursos interpuestos contra proyectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes Orgánicas que se estimasen contrarias al texto constitucional³²². Pues según se desprende del Preámbulo, la experiencia de dicho recurso en nuestro sistema supuso *un factor distorsionador de la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la última fase de procedimiento de formación de la Ley*³²³, que derivó en *una grave fisura en este equilibrado sistema de relaciones con incidencia negativa del Poder Legislativo*

³²² La atribución de dicha competencia se efectuaba en el Art. 2.1. e) LOTC, en su redacción original de 1979 y su objeto, tramitación y resolución se recogía en su Art. 79.

³²³ Preámbulo Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio.

y del Tribunal Constitucional³²⁴. No obstante, hemos de decir, que en fecha reciente ha sido de nuevo reinstaurada esta competencia para el conocimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación; a través de la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre.

- Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio; mediante la que se modificó el trámite de admisión del recurso de amparo; que ya tuvimos ocasión de analizar.

- Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril; que estableció un nuevo proceso constitucional, el conflicto en defensa de la autonomía local, con el fin de *asegurar el libre ejercicio de sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local*³²⁵, frente a las *injerencias por parte del Estado o de las Comunidades Autónomas que pudieran no resultar respetuosas de dicha autonomía*³²⁶.

- Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero. Por la que se amplía el plazo para la interposición de los conflictos de competencias. Se amplió el plazo, proveyéndose mecanismos de colaboración entre el Gobierno del Estado y los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas, con el fin de solventar dichos conflictos con carácter previo a su posible conocimiento ante el Tribunal Constitucional. Así se crearon las denominadas Comisiones Bilaterales mediante modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; *en orden a evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, se [comunicará] al Tribunal Constitucional, con el fin de ampliar el plazo del recurso de inconstitucionalidad, a efectos de que se abra un período mayor, de manera que pueda producirse un acuerdo, que evite el posible recurso*³²⁷.

- Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero; mediante la que se atribuye al “Tribunal

³²⁴ *Ibídem*.

³²⁵ Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril.

³²⁶ *Ibídem*.

³²⁷ Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero.

Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”; a través de la Disposición Adicional Quinta.

- Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre; para *la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho*, mediante la que se modifican artículos arts. 80, 87, 92 y 95.4 y 5 de la LOTC, con el fin de desarrollar *“las funciones de auxilio jurisdiccional de tal manera que el Tribunal pueda acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente o bien a través de cualquier poder público”*³²⁸.

Como se puede observar, las reformas lo fueron de distinta índole, reduciendo o ampliando las atribuciones competenciales del Tribunal –eliminación del recurso de amparo para objetores de conciencia y el recurso previo de inconstitucionalidad y atribuyéndole el conflicto en defensa de la autonomía local y el conocimiento sobre Normas Forales fiscales-; reformando las competencias ya existentes –reforma del trámite de admisión del recurso de amparo y ampliación del plazo para la interposición de los conflictos competenciales-. Pero, según el parecer mayoritario de la doctrina, ha sido la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, la que ha efectuado una serie de reformas y modificaciones de mayor calado. Las anteriores se centraban en aspectos puntuales, mientras que la última aprobada por el Legislador es una reforma *expansiva que modifica nuestra justicia constitucional*³²⁹. Así, por su contenido y alcance, ha venido a calificarse como *mucho más ambiciosa*³³⁰ que las anteriores.

³²⁸ Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre. No obstante, hemos de decir, que la aprobación de la Ley no ha estado exenta de polémica, sobre todo en base al posible uso del Tribunal Constitucional ante un determinado conflicto político. En tal sentido, puede consultarse http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442947520_748192.html

³²⁹ FERNÁNDEZ SEGADO, F. La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo (Reflexiones en torno a la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Dykinson. Madrid. 2007. Pág. 32.

³³⁰ FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”. Revista española de Derecho Constitucional. Nº 81, septiembre-diciembre (2007). CEPC. Madrid.

II.- LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

1º) Debates Parlamentarios.

El aumento año a año del número de recursos de amparo hizo que se alzara la voz con el fin de que el Legislador escuchase las necesidades de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional³³¹. Así no sólo se auspició por parte del propio Tribunal la reforma, sino que incluso fueron los propios Magistrados del Tribunal quienes diseñaron las líneas esenciales que debía recoger la nueva Ley y la orientación que debía dársele al nuevo recurso de amparo³³².

El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional inició su andadura a finales del año 2005 con la presentación del Proyecto de Ley por el Gobierno ante las Cámaras³³³. Nos centraremos en las cuestiones más relevantes suscitadas en torno a la nueva regulación que se va a dar al recurso de amparo, tanto en sede del Congreso de los Diputados como en el Senado, ya que analizar todos y cada uno de los aspectos que son objeto de debate desborda el objeto del presente trabajo. No obstante, más adelante tendremos ocasión de referenciar someramente todos aquellos aspectos que son modificados por la ya aprobada L.O. 6/ 2007, de 24 de mayo. Pero, ahora, nos

³³¹ En relación a las causas, tanto de origen legislativo como jurisprudencial, así como las soluciones que se propusieron por la doctrina para atajar la crisis del recurso de amparo, nos remitimos a la magnífica labor de recopilación, análisis y síntesis realizado por Hernández Ramos en su obra *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*. Ed. Reus. Madrid, 2009. Págs. 21-128.

³³² En tal sentido, SARAZÁ JIMENA indica que: “En esta línea se encuadra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional operada por la Ley Orgánica núm. 6/2007, de 24 de mayo. Siguiendo la línea del “borrador de la reforma” elaborado por el propio Tribunal Constitucional”. *La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2011. Pág 265. También URÍAS MARTÍNEZ afirma: “Resulta importante destacar el hecho de que la reforma de 2007 partió del propio Tribunal Constitucional. Efectivamente, existió un reducido grupo de trabajo integrado por Magistrado y Letrados del Tribunal que pergeñó un primer borrador el cual fue sometido discretamente a la atención del Gobierno y, en lo esencial, vino a definir –por lo que aquí interesa- las líneas maestras de la reforma del procedimiento de admisión”; en “Seleccionar lo (menos) importante. Nota sobre la construcción por el Tribunal Constitucional de un régimen de admisibilidad del recurso de amparo, y sus paradojas”. *Recurso de Amparo, derechos fundamentales y trascendencia constitucional*. VVAA. Editorial Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014. Pág. 74.

³³³ BOCG. Congreso de los Diputados. 25 de noviembre de 2005.-Serie A. Núm. 60-1.

centraremos en este aspecto puntual como es el debate en torno al nuevo recurso de amparo, así como aquellos otros que inciden en el mismo como puede ser, por ejemplo, la regulación del nuevo incidente de nulidad de actuaciones.

Pues bien, como decíamos, el Proyecto de Ley para la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; se presentó ante la mesa del Congreso en el año 2005. Según la Exposición de Motivos de dicho Proyecto, la reforma tiene un objetivo claro que no es otro que atajar la situación de saturación del Tribunal, que ha ido viendo cómo año tras año aumentaban de manera incesante las solicitudes de amparo, cuestión que no han sabido detener las anteriores reformas³³⁴. Para ello, la nueva regulación que se pretende aprobar, se sustenta en dos pilares: el primero, el trámite de admisión, en el que se invierte el juicio de admisibilidad y se aumenta las competencias de las Secciones para agilizar el trabajo del Tribunal³³⁵; en

³³⁴ “La amplia experiencia en su aplicación se refleja en el gran número de casos planteados y resueltos —en constante incremento hasta alcanzar en el año 2004 el número de 7.951 asuntos ingresados y 7.823 resoluciones dictadas— y también ha dado lugar a varias reformas legislativas (Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre; Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio; Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio; Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril; Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero). Sin embargo, las mencionadas modificaciones no habían acometido hasta el momento una reforma que afrontase de manera conjunta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el objetivo de esta ley orgánica. (E.M. I).

³³⁵ “El número de solicitudes de amparo y el procedimiento legalmente previsto para su tramitación son las causas que explican la sobrecarga que en la actualidad sufre el Tribunal a la hora de resolver estos procedimientos de garantía de los derechos fundamentales. Por esta razón, las reformas que se abordan van dirigidas a dotar al amparo de una nueva configuración que resulte más eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos constitucionalmente previstos para esta institución. Y así, entre las modificaciones que se introducen en relación con el amparo se pueden destacar el cambio en la configuración del trámite de admisión del recurso, la habilitación a las secciones para su resolución y la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

La primera de estas novedades es la que afecta a la configuración del trámite de admisión del recurso amparo. Y es que frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución.

Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado. Esta modificación sin duda agilizará el procedimiento al transformar el examen de admisión actual en la comprobación en las alegaciones del recurrente de la existencia de relevancia constitucional en el recurso. En cuanto a la atribución de potestad resolutoria a las Secciones en relación con las demandas de amparo, incrementa sustancialmente la capacidad de trabajo del Tribunal.

segundo lugar, una nueva redacción al incidente de nulidad de actuaciones regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que la tutela de los derechos ante la jurisdicción ordinaria sea realmente efectiva³³⁶.

Tanto la nueva regulación del recurso de amparo, así como el nuevo incidente de nulidad de actuaciones, serán los pilares básicos en los que se asienta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Respecto al nuevo trámite de admisión del recurso de amparo, el Proyecto de Ley procede a dar una nueva redacción a los arts. 41.2; 43.1; 44; 48; 49.1 y 4; 50; 52.2 y 3; 53; 54; 55.2 y 56. En cuanto al incidente de nulidad de actuaciones, a través de la Disposición final primera se modificará el art. 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En el Proyecto, en dicha nueva regulación, destaca la redacción dada a los arts. 49 y 50 LOTC. El art. 49 del Proyecto establece:

«1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que

Otra novedad significativa se encuentra en la introducción de una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas”. (E.M. III).

³³⁶ “La experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por otro lado, la realidad de los hechos ha permitido también constatar la lentitud de los procedimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de las que es el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido, esta ley orgánica intenta dar solución a todo este conjunto de problemas, y para ello procede a adecuar la normativa para dar respuesta a los problemas y exigencias que se derivan de la realidad práctica del funcionamiento y organización del Tribunal Constitucional. Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en relación con las demás funciones del Tribunal Constitucional, la ley procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata de medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria.” (E.M. II).

se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

«4. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso.»³³⁷

En cuanto al art. 50:

«Artículo 50.

1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurren todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva, que resolverá mediante providencia.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, se limitarán a especificar el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en

³³⁷ La redacción anterior establecía lo siguiente:

“Artículo 49.

1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.

2. Con la demanda se acompañarán:

a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.

b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.

3. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal”.

súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.»³³⁸

En relación a la regulación, cabe destacar las modificaciones que se presentaron a través de enmiendas al Proyecto por parte de los distintos grupos parlamentarios en sede del Congreso de los Diputados. Así se planteó, en relación al artículo 49, la supresión de la obligación impuesta al demandante de amparo de tener que justificar la <<especial trascendencia constitucional>> ya que, en primer lugar, para el demandante de amparo siempre estaría justificado y, en segundo lugar, se trata de un requisito que añade una gran inseguridad jurídica parangonable al concepto jurídico indeterminado <<interés casacional>> que se insertó en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo³³⁹. En cuanto a la posibilidad de subsanación, también fue presentada una enmienda para

³³⁸ La regulación anterior establecía lo siguiente:

“Artículo 50.

1. La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concorra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 o concorra en la misma el caso a que se refiere el artículo 4.2.

b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional.

c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional.

d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias.

2. La providencia a que se refiere el apartado anterior, que indicará el supuesto en el que se encuentra el recurso, se notificará al demandante y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podrá recurrir el Ministerio Fiscal, en súplica, en el plazo de tres días. El recurso se resolverá mediante auto.

3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no hubiere unanimidad, la Sección, previa audiencia del solicitante de amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar mediante auto la inadmisión del recurso.

4. Contra los autos a los que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores no cabrá recurso alguno.

5. Cuando en la demanda de amparo concurren uno o varios defectos de naturaleza subsanable, la Sección procederá en la forma prevista en el artículo 85.2; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno”.

³³⁹ Enmienda nº 5, presentada por Doña Begoña Lasagabaster Olazábal del Grupo Parlamentario Mixto. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Pág. 24

acotar la misma sólo a los requisitos y documentos previstos en los párrafos 2 y 3 del art. 49, pero no respecto a los requisitos sustantivos establecidos en el párrafo 1º, los cuales debían dejarse expresamente fuera de dicha posibilidad³⁴⁰.

Por otro lado, en relación al artículo 50, fueron diversas las enmiendas presentadas al Proyecto, que incidían en varios aspectos contenidos en dicha propuesta de regulación. Así, por un lado, se propuso la eliminación de la admisión en base a la <<especial trascendencia constitucional>>³⁴¹, o que se realizase una nueva redacción donde las vertientes <<objetiva y subjetiva>> del recurso se encontraran equilibradas, ya que no se hacía referencia alguna a la segunda, mientras que sólo se centraba o existía una referencia a la primera de las dimensiones o vertientes³⁴². También se consideró que sería necesario no

³⁴⁰ Enmienda nº 26, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Pág. 32

³⁴¹ Enmienda nº 6, Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto). BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Pág. 25

³⁴² Enmienda nº 27. Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La citada enmienda disponía lo siguiente:

“De modificación del apartado veinte del artículo único del proyecto De modificación del artículo 50. Se propone la adición de un nuevo inciso en la letra b) del apartado 1, así como el término «sucintamente motivadas» en el apartado 3 e introducir un nuevo apartado antes del apartado 2. «1. El recurso de amparo... (igual): a) (Igual.) b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional bien en razón del perjuicio particularmente grave que se le ocasione al demandante con la denegación de una decisión sobre el fondo, bien en razón de su especial trascendencia constitucional que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución... (resto igual). 2. El requisito establecido en la letra b) del número inmediatamente anterior no será de aplicación a las demandas previstas en el artículo 42. 3. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido (igual que apartado 2 del proyecto). 4. Las providencias de inadmisión adoptadas por las Secciones o las Salas, deberán ser sucintamente motivadas especificando el requisito incumplido y se notificarán (resto igual a apartado 3 del proyecto). 5. (Actual apartado 4 del proyecto.)» JUSTIFICACIÓN En el actual proyecto no se hace mención a causas de corte subjetivo ya que en la modificación del artículo 50 se acude a un sistema de admisión discrecional en razón de la relevancia constitucional en el que se tiene en cuenta la especial trascendencia constitucional que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. A nuestro entender falta equilibrar las dos dimensiones del amparo (la objetiva y la subjetiva) en el texto proyectado puesto que no nos parece adecuado olvidar esta segunda cualidad del amparo que tutela, también, las vulneraciones que por la entidad del perjuicio que causan al reclamante deben ser admitidas. No debemos olvidar, en este sentido, que la Constitución configura el recurso de amparo como un medio de protección subjetiva de los derechos fundamentales (incluso la reforma alemana de 1993 tutela los casos de perjuicios de especial gravedad para el demandante). Hay una única excepción a la discrecionalidad del Tribunal que debe aplicarse respecto a los amparos previstos en el artículo 42 LOTC, es decir los amparos contra actos parlamentarios, en los que no hay subsidiariedad puesto que no han tenido ocasión de tutelarse por la jurisdicción ordinaria. Por otra parte, el proyecto mantiene las providencias de inadmisión que, si bien, ya no llevarán la carga de análisis que conllevan en el actual sistema, no dejan de tener que dictarse y de forma más o menos sucinta habrán de motivarse (cuestión ésta que no prevé el proyecto pudiendo dar lugar a un riesgo real de infracción del derecho a la tutela judicial efectiva) y obligan a mantener el recurso

privar de la justificación respecto a la inadmisión del recurso, instándose a que la misma lo fuera por Auto, el cual requiere de motivación, frente a las Providencias que son *per se* inmotivadas³⁴³, por último, se interesó un cambio en la redacción que incluyese la posibilidad de interponer recurso de súplica contra las providencias de inadmisión no sólo al Ministerio Fiscal, sino también a las partes personadas³⁴⁴.

Todo esto en cuanto a las enmiendas relacionadas con la regulación dada por el Proyecto a la admisión del recurso de amparo, es decir, en relación a los requisitos impuestos en los artículos 49 y 50. No obstante, también es interesante destacar otras enmiendas respecto al resto de regulación del recurso. Así, por ejemplo, se interesó la supresión del conocimiento de los recursos por parte de las Secciones del Tribunal, ya que dicha posibilidad era incongruente respecto al nuevo requisito de la <<especial trascendencia>> que debía tener el recurso de amparo³⁴⁵. También se solicitó el plazo de ampliación para la interposición de la demanda, pues el nuevo requisito consistente en la <<especial trascendencia constitucional>>, imponía una obligación de motivación que requería un lapso temporal amplio para cumplir con tal finalidad³⁴⁶. Asimismo, se interesó el cambio de redacción respecto al requisito consistente en agotar la vía judicial previa al recurso de amparo que contemplara la exigencia de agotamiento de todos los medios de impugnación previstos en las normas procesales aplicables al caso³⁴⁷. En relación a la denominada *autocuestión o cuestión interna de inconstitucionalidad*, se instó a que tanto el recurso de amparo como la cuestión sobre la constitucionalidad de la ley se

de súplica por el Ministerio fiscal". BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Págs. 32 y 33.

³⁴³ Enmienda nº 61. Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Añade dicha enmienda que "Es grave, en fin, que al introducirse el criterio de oportunidad en la admisión por las Secciones no vayan a explicarse las razones del Tribunal sobre la «especial trascendencia constitucional» de cada caso". BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Pág. 46.

³⁴⁴ Enmienda nº 7. Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto). BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7. Pág. 25.

³⁴⁵ En relación a la supresión del conocimiento de los recursos de amparo por parte de las Secciones, véanse las enmiendas nº 60; 62; 63; 64 y 65. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7.

³⁴⁶ Respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las demandas de amparo, pueden consultarse las enmiendas nº4; 25; 85 y 86. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7.

³⁴⁷ En relación a los requisitos de agotamiento de la vía judicial previa, pueden consultarse las enmiendas nº 2 y nº 3. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7.

resolviesen en una misma sentencia y no en dos distintas como hasta ahora³⁴⁸. Por último, se solicitó una regulación que engarzara mejor la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones con la nueva regulación dada al recurso de amparo³⁴⁹.

La mayoría de las enmiendas presentadas no fueron recogidas en el Informe de la Ponencia, pero si hubo alguna que encontró el apoyo de la misma; entre las que caben destacar las siguientes: En primer lugar, la modificación del art. 44. 1.a), introduciéndose el requisito de haber agotado *“todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto”*. En segundo lugar, art. 44.2, la ampliación para interponer el recurso de amparo, pasará de los *veinte días* establecidos en el Proyecto, a los *treinta días*. En último lugar, respecto al conocimiento del recurso de amparo por las Secciones, art. 52.2, se pasa de una posible remisión general por parte de las Salas a las Secciones a un acotamiento de los supuestos en un caso concreto, *“cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional”*³⁵⁰.

Hemos de decir que, tanto en sede de Comisión Constitucional³⁵¹ como en el posterior debate en el Pleno del Congreso³⁵², todos los grupos que formaban el arco parlamentario señalaron la necesidad ineludible y perentoria de reformar el recurso de amparo constitucional, como medio para atajar la situación de colapso en la que se encontraba el Tribunal Constitucional³⁵³. Quizás ese fuera el único elemento o punto en común, pues existieron otras diferencias o

³⁴⁸ En tal sentido, véase la enmienda nº 38. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7.

³⁴⁹ Véase la enmienda nº 79 al Proyecto de Ley. BOCG. 23 de febrero de 2006.-Serie A. Núm. 60-7.

³⁵⁰ Informe de la Ponencia. Congreso de los Diputados. BOCG. 5 de diciembre de 2006.-Serie A. Núm. 60-9. Págs. 73 y 74.

³⁵¹ Dictamen de la Comisión Constitucional. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12.

³⁵² Aprobación por el Pleno. BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13.

³⁵³ En tal sentido, véase como ejemplo, las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios en la Comisión Constitucional. Grupo Mixto. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 2 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12132. Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 3 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12133. Grupo parlamentario Vasco (EAJ-PNV). BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 5 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12134. Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya. y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12136. Grupo Parlamentario Convergència i Unió. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 8 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12137. Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canarias. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 19 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13. Pág. 12141.

reticencias en cuanto al resto de la regulación, principalmente, el llamamiento de los partidos nacionalistas –sobre todo, vascos y catalanes–, pero también otros como IU-ICV, que reivindicaron determinadas reformas en el seno del Tribunal que conllevaran una mayor descentralización del órgano³⁵⁴, entre otras cuestiones³⁵⁵. Sin embargo, fue el Grupo Parlamentario Popular quien enfrentó un mayor debate respecto al nuevo recurso, principalmente, basado en dos aspectos: una supuesta falta de regulación del amparo o tutela ante la jurisdicción ordinaria, frente a la objetivación del nuevo recurso³⁵⁶, así como en base a dicha objetivación, que llevaría a que el Tribunal conociera de una *decena* de recursos de amparo, pero que conllevaría también el desconocimiento de cuál es la trascendencia constitucional que posee o no el recurso³⁵⁷ y, por otro lado,

³⁵⁴ En tal sentido, véase las intervenciones de dichos grupos parlamentarios en BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12 y BOCG. 21 de marzo de 2007 Núm. 60-13.

³⁵⁵ *Ibidem*.

³⁵⁶ En tal sentido, en su intervención, el Sr. ASTARLOA HUARTE-MENDICOA establece que: “En primer lugar, nos preocupa que la regulación que se hace del recurso de amparo, que es la finalidad principal de la ley, significa un retroceso de garantías en nuestro sistema de garantía y de defensa de los derechos fundamentales. Esto lo digo en una doble dimensión, no solo porque, en los términos en que finalmente se regula esta cuestión, la posibilidad de tramitar recursos de amparo queda a la discrecionalidad del Tribunal Constitucional, que además no necesita motivar las razones por las cuales admite o no admite los recursos de amparo; además, lo digo porque, en un momento en el que se reduce la posibilidad de presentar recursos de amparo —lo cual es razonable, habida cuenta de los problemas que tenemos en nuestro ordenamiento con esta cuestión—, no se acometen las reformas complementarias para evitar la merma en la garantía de los derechos fundamentales. Quiero recordar, por ejemplo, cómo en los textos de los que nace este proyecto de ley, que eran propuestas del propio Tribunal Constitucional, se incluían cautelas que han sido eliminadas por el camino. Por ejemplo, se incluía la cautela de que el contenido de la demanda no hubiera recibido ya una respuesta de fondo en la jurisdicción ordinaria; qué menos que una cautela de esa naturaleza. Esas cautelas han desaparecido. Sobre todo quiero hacer referencia a algo que, en las negociaciones con el Grupo Parlamentario Socialista, estaba en la voluntad de la mayoría ser aceptado, porque tiene toda la lógica del mundo, pero que finalmente también se queda en el limbo, y es un compromiso para desarrollar el amparo judicial exigido por el artículo 53.2 de nuestra Constitución. Nosotros presentamos una enmienda, que ahora someteremos a votación, con una nueva disposición final segunda, que comprometía al Gobierno, en un plazo razonable, a remitir a las Cortes un proyecto de ley en el que se desarrolle para todos los órdenes jurisdiccionales el amparo judicial previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, fijando la función que corresponde al Tribunal Supremo en dicho amparo y armonizando el amparo judicial con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dicho en otras palabras, nosotros consideramos que el recurso al incidente de nulidad que se incluye en la ley es un puro recurso provisional, una pura solución provisional, hasta tanto se desarrolle definitivamente el amparo judicial ordinario previsto en dicho artículo, y consideramos que esa transitoriedad debía ser rápidamente superada, a cuyo efecto una comisión de expertos debería —insisto, en un plazo razonable— proponer al Gobierno y el Gobierno a la Cámara que de verdad no se produzca el vacío en la garantía de los derechos fundamentales que en este momento va a producirse con la aprobación de la ley. Todo ello teniendo en cuenta, además, que con la fórmula del incidente de nulidad se desapodera al Tribunal Supremo, en nombre supongo que de otra vertiente más del proceso descentralizador que vivimos en esta era, lo cual nos puede llevar al final, señor presidente, a diecisiete sistemas diferentes de protección de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento.”. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Págs. 12 y 13.

³⁵⁷ “Señoría, porque lo que no está en la ley en este momento y que pasa a incorporarse como gran novedad, que se supone que va a ser la gran guillotina que va a evitar que haya 9.000

la incongruencia que para dicho Grupo existía respecto a la relación entre el conocimiento por parte de las Secciones y la necesidad de que el recurso posea una <<especial trascendencia constitucional>>³⁵⁸. No obstante, esta última cuestión tuvo su reflejo en el texto finalmente aprobado ya que, como hemos visto, se pasó de una remisión general a una concretización del supuesto en el que podía producirse la remisión. También hemos de decir que, quizá, esa reticencia del Grupo Parlamentario Popular a la aprobación del texto se debía principalmente a que en el mismo no se había introducido una de sus reivindicaciones, como era la reinstauración del *recurso previo de inconstitucionalidad*³⁵⁹.

recursos de amparo y pasen a una decena, es que se concede al Tribunal Constitucional la facultad de determinar si estudia o no un recurso de amparo sobre la base de estimar si tiene o no tiene relevancia constitucional. Y lo que nosotros decimos es que si el Tribunal Constitucional decide si algo tiene o no relevancia constitucional sin explicarle a nadie cuál es su criterio sobre cuándo una cosa tiene relevancia constitucional y cuando no, ni siquiera al fiscal que tendrá que recurrirlo si lo estima oportuno, es una pésima solución jurídico-constitucional para esta materia; y no juguemos con las palabras sobre si providencia o no providencia se motive o no se motive". BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 22.

³⁵⁸ "En segundo lugar, nos preocupa, y mucho, la merma de garantías en el propio procedimiento de amparo dentro del Tribunal Constitucional, que ha sido especialmente denunciada por el informe del fiscal general del Estado. A ese efecto, tengo que recordar con toda brevedad cosas como las siguientes: el reconocimiento de la capacidad decisoria de las secciones, que es incompatible con la exigencia de la determinación de relevancia constitucional para la admisión o inadmisión del amparo; el hecho de que el actual turno de oficio no asegura la especialización en derecho constitucional, lo cual, unido a un plazo breve para argumentar la trascendencia constitucional, puede generar una seria indefensión de cara a los recurrentes; la contaminación del que resuelve el fondo habiendo tomado posición sobre la relevancia constitucional del asunto en el trámite de admisión; y lo que dentro de todo probablemente es lo más grave, la innecesariedad de que el Tribunal Constitucional motive suficientemente las razones por las cuales acepta o no, admite o no un amparo, sobre la base de la consideración de si ese amparo tiene o no relevancia constitucional. Estoy hablando del artículo 50, en sus párrafos 2 y 3; estoy hablando de la inexigencia de auto y su sustitución por providencias de inadmisión; y estoy hablando de algo que nos va a situar ante una posición digamos pintoresca, y es que esa providencia es recurrible —lo dice la ley—, puede recurrirlo el ministerio fiscal, que tendrá que recurrir sin conocer los motivos por los cuales el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión de admitir o inadmitir. No es razonable, señor presidente. Además, tengo que añadir que todas estas mermas de garantías en el propio procedimiento de amparo incluso han sido consideradas como inútiles, en la medida en que algunos especialistas que de esto saben, por ejemplo, un ex presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro Cruz Villalón, ha venido a decir que incluso tal y como queda la nueva regulación del amparo, a pesar de todas estas mermas y de todas estas faltas de garantías, el nuevo recurso de amparo va a quedarse con una regulación insuficiente y no va a cumplir su función. De hecho, el propio Cruz Villalón, viendo que una reforma para la objetivación del amparo ya se hizo en el año 1988 y que no ha tenido la más mínima funcionalidad, precisamente por los criterios que han seguido los magistrados del Tribunal Constitucional, se pregunta —y yo con él— si ahora, a diferencia de en 1988, es que el Tribunal Constitucional está dispuesto realmente a quedarse con doce o trece recursos de amparo al año, allí donde tiene 7.000 en el momento presente". BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 60-12. Pág. 13.

³⁵⁹ En tal sentido se pronuncia el Sr. JAUREGUI ATONDO del Grupo Parlamentario Socialista. BOCG. 15 de marzo de 2007 Núm. 24.

Debate sobre el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que no sólo quedó circunscrito al debate parlamentario sino que, al mismo tiempo, también tenía su reflejo fuera de las Cámaras³⁶⁰.

Como decimos, dos Grupos Parlamentarios fueron los que no apoyaron el Proyecto, el PNV y el PP, por distintas razones pero, lo que sí es cierto y en cuanto al tema que nos concierne, la gran parte del arco parlamentario apoyo y entendió necesaria la reforma del recurso de amparo para atajar la situación de colapso en la que se encontraba el Tribunal Constitucional.

El texto aprobado por el Pleno del Congreso, en concreto, la regulación dada al recurso de amparo que fue remitida al Senado, es sustancialmente idéntica a la que finalmente se aprobó y que dio lugar a la L.O. 6/2007, de 24 de mayo. Por tanto, pocas son las referencias que podemos hacer a la labor efectuada por el Senado, ya que fue escasa la incidencia que tuvo su intervención en relación a la nueva regulación dada al recurso de amparo³⁶¹. No obstante, y al igual que vimos respecto al debate suscitado en sede del Congreso, vamos a hacer referencia al debate que la nueva regulación del amparo tuvo en el Senado. Por una sencilla razón, porque muchas de las cuestiones, dudas e incertidumbres que se originaron en sede parlamentaria, posteriormente, también se plantearon en la doctrina científica y será objeto de estudio también cuando analicemos la jurisprudencia emanada por el Tribunal Constitucional, una vez que entró en vigor la actual Ley Orgánica.

Como dijimos, tanto el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso como el Grupo Nacionalista Vasco, fueron los únicos en oponerse al nuevo texto, por distintas razones. Pues bien, serán dichos Grupos Parlamentarios en el Senado quienes interpondrán sendas propuestas de veto al texto remitido por el

³⁶⁰ En tal sentido, véase: “Encuesta sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Teoría y Realidad Constitucional*. Nº 18, 2006, págs. 11-76. Donde constitucionalistas y administrativistas de la talla de MARC CARRILLO, LUIS MARÍA DÍEZ PICAZO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA ROCA, ÁNGEL GARRORENA MORALES, JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ Y PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, analizan el alcance del Proyecto.

³⁶¹ La votación de conjunto en sede del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; arrojó el siguiente resultado: de los 312 votos emitidos; a favor fueron 180; en contra, 131 y hubo una abstención. BOCG. Sesión plenaria núm. 222. 15 de marzo de 2007.—Núm. 240. Pág. 12147.

Congreso³⁶² que, naturalmente, fueron rechazadas³⁶³. En cuanto a las enmiendas presentadas, prácticamente se produce una reiteración de aquellas enmiendas que se presentaron en el debate ante el Congreso y que, obviamente, no se introdujeron en el texto aprobado por el Pleno de dicha Cámara. En concreto, se vuelve a plantear la eliminación del requisito impuesto al demandante de justificar la <<especial trascendencia constitucional>> y, por tanto, la innecesariedad de valoración de dicho requisito para su admisión³⁶⁴. También, la posibilidad de que las partes pudieran recurrir en súplica la inadmisión y no sólo el Ministerio Fiscal³⁶⁵. Por otro lado, la supresión del conocimiento por parte de las Secciones al ser incompatible con la especial trascendencia constitucional³⁶⁶ y, también, que se garantizara la motivación individualizada, caso a caso, para que el Tribunal diera las razones en relación a la especial trascendencia del recurso, lo que debería realizarse mediante Auto y no por Providencia³⁶⁷. Por último, la determinación expresa que la subsanación del recurso sólo podía realizarse respecto a los requisitos formales y no substantivos³⁶⁸ y, al igual que vimos en sede del Congreso, se solicitó la modificación del enunciado del artículo 50, con el fin de que las <<dimensiones objetiva y subjetiva>> del recurso se encontraran equilibradas, para que la dimensión objetiva no primara frente a la dimensión subjetiva³⁶⁹.

No obstante, como dijimos, todas esas enmiendas que de nuevo se plantearon en el Senado fueron rechazadas³⁷⁰. En el debate en el Senado volvió a considerarse necesario acabar y atajar la situación de crisis funcional provocada por el ingente número de recursos de amparo que se presentaban

³⁶² BOCG. Senado. Serie II Proyectos de Ley. 12 de abril de 2007.- Núm 88(c). Págs. 13 y 15, respectivamente.

³⁶³ BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7444.

³⁶⁴ Enmiendas nº 10 y nº11. Grupo Mixto Senado. BOCG. Senado. 12 de abril de 2007.- Núm 88(c). Pág. 21.

³⁶⁵ Enmienda nº 12. Grupo Mixto. *Ibidem*.

³⁶⁶ Enmiendas nº, 28, 30, 31, 32 y 33. Grupo Parlamentario Popular. BOCG. Senado. 12 de abril de 2007.- Núm 88(c). Págs. 25 a 27.

³⁶⁷ Enmienda nº 29. Grupo Parlamentario Popular. BOCG. Senado. 12 de abril de 2007.- Núm 88(c). Pág. 25.

³⁶⁸ Enmienda nº 47. Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. BOCG. Senado. 12 de abril de 2007.- Núm 88(c). Pág. 31.

³⁶⁹ Enmienda nº 48. Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. *Ibidem*.

³⁷⁰ BOCG. Senado-Comisión. 7 de mayo de 2007.-Núm. 461. Pág. 8.

anualmente y que se acumulaban³⁷¹. Pero la regulación del recurso de amparo recabó también, además de apoyos, rechazos. Principalmente, al igual que ocurrió en el debate en sede del Congreso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado expresó sus reticencias al texto de la reforma, por un lado, por la desconfianza en la efectiva tutela de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria y, por otro, por la falta de motivación para la inadmisión del recurso, así como el conocimiento de los mismos por parte de la Secciones³⁷². En cuanto a los apoyos es destacar la defensa de la reforma, no sólo por parte del Grupo Parlamentario Socialista³⁷³, sino también de otros Grupos como por ejemplo Entesa Catalana de Progrés³⁷⁴.

³⁷¹ En tal sentido, véase a modo de ejemplo las siguientes intervenciones: Grupo Parlamentario Socialista. BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7429. Bloque Nacionalista Galego (BNG). BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7444. Grupo Parlamentario Catalán (CiU). BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7446.

³⁷² BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Págs. 7449-7450.

³⁷³ BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Págs. 7429; 7430; 7435-7438.

³⁷⁴ En tal sentido lo manifiesta el senador en representación del Grupo Parlamentario Entesa: “Esta ley tiene un objetivo directo, esta ley tiene un objetivo histórico, si se quiere, que no empieza hoy, y este objetivo es que hubiera podido salir si hubiera salido en su momento. Pero no salió en su momento y alguien debe saber por qué no salió. Es evidente que el Tribunal Constitucional está en una situación de colapso, lo está desde los años noventa; era evidente en los diez últimos años que el colapso iba aumentando y no había posibilidad racional de que bajara. Es evidente también que el crecimiento del número de recursos ha llegado a ocupar casi todo el tiempo y el personal del Tribunal Constitucional, y es evidente que hace tiempo se sabe que es una ley que podía salir por consenso porque había un acuerdo sobre el problema, incluso sobre la vía, sobre la única vía. ¿Por qué en estos diez últimos años, en los últimos de gobierno socialista y en los ocho anteriores de gobierno popular, especialmente con los cuatro de mayoría absoluta no se llegó a ese acuerdo? Como siempre, la Historia lo dirá, pero no se llegó y se perdió la oportunidad. No hay consenso pero esto tiene que salir; no puede haber otra legislatura y no salir. A veces uno dice: se acabó y a partir de ahora sale, y sale porque no puede ser que vayan las cosas continuamente cambiando la situación e introduciendo con temas nuevos. Y un día se acaba porque el abuso de la tercera instancia, o de la supercasación, como se ha llamado, no va a acabar con esta ley. Seguramente se aprenderá, pero se ha de evitar la tendencia a la prolongación de la instancia civil. La propuesta de la nueva regulación del recurso de amparo creo que va a provocar cambios subjetivos en los actores, pero van a tener que aprender y eso significa que el contenido jurídico, que el recurso, debe justificar una decisión sobre el fondo, pero el Tribunal Constitucional puede atraer la decisión de aquellos elementos que son necesarios o aquellos casos que son necesarios para realizar la función de interpretación constitucional, que es lo que está haciendo. De esa manera, se elimina su posición de tercera instancia posible; y, por tanto, se establece un orden inverso en la atracción, en lugar de admitir y rechazar, se atrae aquello que es fundamental. En consecuencia, esa situación va a cambiar. Usted alega que es muy importante el auto de la providencia pero, desde mi punto de vista, en el sistema actual no tiene mucha importancia porque el caso concreto no es el objeto del rechazo o de la no admisión sino que el objeto de la admisión es justamente la atracción por el contenido. Por lo demás, con los medios técnicos actualmente existentes, dado que ya no se escribe a mano, las motivaciones son muy fáciles de elaborar y, de hecho, fíjese en cómo se hacen los autos en este momento. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia tiene mucho trabajo y, por tanto, se limita a repetir lo que ya está escrito, pero de lo que se trata es de que no repita. Ésta es mi posición y significa que la tutela y la defensa de los derechos fundamentales se mantiene íntegramente, sea cual sea la vía que usted elija, porque de lo que se trata es de atraer para cambiar la interpretación constitucional y reforzar y mantener la vía del recurso de amparo

La reforma, por tanto, tiene una concreta e indiscutible finalidad: atajar la situación de colapso del Tribunal Constitucional provocado por las demandas de amparo. Para ello se sustenta en una serie de pilares básicos: El primero, el nuevo trámite de admisión, en el que sólo se admitirán y se conocerán sobre el fondo aquellas demandas que posean una <<especial trascendencia constitucional>>; previéndose que el Tribunal sólo conozca de una decena de recursos de amparo, que se sustentarán en la dimensión objetiva de los mismos. En segundo lugar, se agilizará su tramitación interna a través del conocimiento de los recursos de amparo por parte de las Secciones cuando se trate de aplicar <<doctrina consolidada>> del propio Tribunal. En tercer y último lugar, se produce una nueva regulación del <<incidente de nulidad de actuaciones>>, con el fin de garantizar que el la tutela ante la jurisdicción ordinaria sea realmente efectiva.

Quedó, como hemos dicho, definitivamente aprobado el texto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional³⁷⁵. Por tanto, quedó definitivamente aprobada la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional³⁷⁶. Ley Orgánica que a continuación analizaremos con más profundidad.

ordinario, que para eso existe. Seguramente, no es igual que el sistema americano, pero en algo se parece. De esta manera, se mantiene la misión del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución y, por tanto, se le concede mayor capacidad de inadmisión. Los juristas y los políticos llevamos muchos años hablando de esta cuestión y ha llegado un momento en que ha habido que tomar una decisión. Se ha llegado a los acuerdos que se ha podido, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pues bien, ha llegado la hora de votar y no debemos abordar nuevas cuestiones porque ya llevamos dos años debatiendo sobre este particular y no nos debería haber ocupado tanto tiempo. Hubiéramos podido aprovechar los ocho años anteriores, ahora llevamos dos años y no podemos acabar la legislatura sin haber puesto en marcha esta ley, de manera que el Tribunal Constitucional pueda realizar sus funciones sin sentir el agobio de un crecimiento continuado, sin posibilidad de rebaja, en el número de casos pendientes como consecuencia de los recursos de amparo". BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7439.

³⁷⁵ El resultado final de la votación en bloque al Proyecto de Ley en el Senado arrojó el siguiente resultado. De los 207 votos emitidos; 117 fueron a favor; 81 en contra y hubo una abstención. BOCG. Senado-Pleno. 9 de mayo de 2007.- Núm. 121. Pág. 7456.

³⁷⁶ «BOE» núm. 125, de 25 de mayo de 2007.

2º) El contenido de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional³⁷⁷, ha venido a reformar treinta y cinco artículos³⁷⁸, de los ciento dos que componen la Ley y la Disposición Adicional Primera, afectando a todos los Títulos insertos en la Ley Orgánica del Tribunal, con la salvedad de los Títulos V (<<De la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades autónomas prevista en el artículo 161. 2, de la Constitución>>) y Título VI (<<De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales>>).

En su Exposición de Motivos se expresa el alcance de la reforma operada, aunque como manifiesta el Profesor FERNÁNDEZ SEGADO, el objetivo de la ley va *muchísimo más allá*³⁷⁹ que el mero objetivo de reorganizar las funciones del Tribunal.

- Se “procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata de medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fundamentales

³⁷⁷ La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 125 de 25 de mayo de 2007); esto es, el día 26 de mayo de 2007, sin que la misma dispusiera un plazo de vacatio legis para su puesta en marcha. Algo que ha afectado, como más adelante veremos, al nuevo trámite de admisión del recurso de amparo y así ha sido criticado por parte de la doctrina e, incluso, por algún Magistrado del propio Tribunal Constitucional. Además, la aprobación a pesar de contar con los votos necesarios para su aprobación, no contó sin embargo con el respaldo del partido mayoritario de la oposición. Autores como Fernández Segado han criticado esa falta de consenso en una norma tan trascendental para nuestro sistema constitucional (La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo (Reflexiones en torno a la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Págs. 26 y 27). Falta de acuerdo que, desde nuestro punto de vista, derivaría en los consiguientes recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra dicha Ley Orgánica: STC 49/2008, de 9 de abril de 2008, contra determinados preceptos de la nueva Ley Orgánica 6/2007 y STC 101/2008, de 24 de julio de 2008, contra la reforma del Reglamento del Senado.

³⁷⁸ La reforma incide sobre los siguientes artículos de la Ley Orgánica: 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 73, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 102.

³⁷⁹ FERNÁNDEZ SEGADO, F. “La reforma del régimen jurídico-procesal...”. Op. cit. Págs. 32 y 33.

por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria³⁸⁰. (...) [L]as reformas que se abordan van dirigidas a dotar al amparo de una nueva configuración que resulte más eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos constitucionalmente previstos para esta institución. Y así, entre las modificaciones que se introducen en relación con el amparo se pueden destacar el cambio en la configuración del trámite de admisión del recurso, la habilitación a las Secciones para su resolución y la reforma del trámite de cuestión interna de constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. La primera de estas novedades es la que afecta a la configuración del trámite de admisión del recurso de amparo. Y es que frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución. Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado³⁸¹. (...) Otra novedad significativa se encuentra en la introducción de una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas³⁸².

- La ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no sólo se les permite realizar alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el fondo de la cuestión. Al tiempo, se introduce la posibilidad de personación de los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal Constitucional en los 15 días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este procedimiento de constitucionalidad, siguiendo en esto las directrices

³⁸⁰ Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. E.M II.

³⁸¹ Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. E.M III.

³⁸² *Ibidem*.

contenidas en la Sentencia de 23 de junio de 1993, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos³⁸³.

- Por último, [l]as modificaciones del régimen interno y de la organización del Tribunal son consecuencia de la experiencia de años de funcionamiento durante los cuales se han detectado carencias atemperadas con soluciones provisionales, en general, mediante reformas reglamentarias³⁸⁴”.

Bien, pero como hemos dicho, la Exposición de Motivos no recoge en su integridad todos aquellos aspectos, -orgánicos, funcionales y competenciales-, en los que incide la actual reforma. Por tanto, podemos compendiar la modificación en los siguientes aspectos:

1º) Se produce una reforma completa del recurso de amparo. Dicha modificación se traduce en una nueva regulación de los aspectos procesales y sustantivos de dicho procedimiento. Se produce una inversión del trámite de admisión del recurso, admisión que a partir de ahora va a tener un marcado carácter objetivo, se van a habilitar a las Secciones para resolver recursos de amparo y, también, se reforma la llamada *cuestión interna de inconstitucionalidad*. Se refuerza la tutela de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción ordinaria a través de la ampliación del *incidente de nulidad de actuaciones*, modificándose el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.³⁸⁵

2º) Se produce una nueva regulación respecto a la personación de las partes en las cuestiones de inconstitucionalidad, como consecuencia de la condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos³⁸⁶.

3º) En cuanto a sus competencias y funciones se va a producir un reparto y distribución de funciones entre el Pleno, las Salas y las Secciones del Tribunal³⁸⁷.

³⁸³ Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. E.M II.

³⁸⁴ Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. E.M III.

³⁸⁵ Disposición Final Primera.

³⁸⁶ Art. 35.2 LOTC. STEDH Ruiz-Mateos c. España, de 23 de junio de 1993

³⁸⁷ Arts. 6, 8 y 10 LOTC.

4º) Se regula la elección de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado, pero a propuesta de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y se regula la comparecencia de los candidatos ante las Comisiones de las Cámaras Legislativas del Congreso³⁸⁸.

5º) Se refuerza el estatuto de los Magistrados del Tribunal Constitucional³⁸⁹.

6º) Se modifica el régimen del personal del Tribunal Constitucional³⁹⁰.

Como podemos observar, se produce una ordenación integral que afecta a las atribuciones, competencias y posición institucional del Tribunal Constitucional. No obstante, por ser el objeto del presente trabajo, tendremos que centrarnos en la actual regulación del recurso de amparo, no sólo en aquellos artículos que directamente regulan dicho procedimiento, sino también en aquellos otros que de manera mediata incidan en el mismo.

III.- ASPECTOS PROCESALES: LA NUEVA REGULACIÓN DE LA PROCEDENCIA, INTERPOSICIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO.

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, incide en once de los dieciocho artículos³⁹¹ que componen el Título III, <<*Del recurso de amparo constitucional*>>, de la Ley Orgánica del Tribunal. Además, y en relación a este recurso, se da un nuevo contenido al *incidente de nulidad de actuaciones*, recogido en el Art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado mediante la Disposición Final 1ª de la nueva Ley. Asimismo se procede a dar una nueva regulación al Art. 85, relativa al plazo hábil para la interposición de los recursos de amparo.

³⁸⁸ Art. 16 LOTC.

³⁸⁹ Art. 4 LOTC.

³⁹⁰ Arts. 96 a 102 LOTC.

³⁹¹ En concreto, como hemos visto, son objeto de reforma los Arts. 41, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 y 56 LOTC.

Hemos referenciado ya que se produce una nueva regulación de los aspectos procesales y sustantivos del procedimiento de amparo constitucional; produciéndose una inversión del trámite de admisión del recurso, una habilitación a las Secciones para resolver los recursos y una nueva regulación de la *cuestión interna de inconstitucionalidad*.

No obstante, -y como tendremos ocasión de analizar-, los principales puntos de estudio y debate doctrinal se centran en la nueva configuración del recurso de amparo y, sobre todo, en el nuevo requisito impuesto al recurrente consistente en justificar la especial trascendencia constitucional en su demanda de amparo³⁹², así como el alcance que para la admisión³⁹³ le está otorgando el Tribunal Constitucional. El fin último de la reforma, como bien sabemos, es descargar al Alto Tribunal del ingente número de amparos que se interponen anualmente y que han llevado al mismo a la situación de colapso en el que se encuentra, que no solo afecta a dicho procedimiento, sino que supone un retraso en el resto de procesos que se dilucidan ante él y que supone una acumulación progresiva de tal dilación. No obstante, algún autor ha manifestado su discrepancia con la reforma, mostrando incluso dudas acerca de que la reforma vaya a solucionar el problema que intenta atajar o remediar³⁹⁴.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la norma reguladora del Tribunal Constitucional, a la que está sometido junto con la Constitución³⁹⁵ y, al mismo tiempo, es una norma procesal, en cuanto que regula los procedimientos que se sustancian ante él. Por tanto, estaremos ante una norma de desarrollo de los preceptos constitucionales que regulan al Alto Tribunal y, además, estaremos ante una norma procesal reguladora de los procedimientos constitucionales de los que conoce. Con ello lo que queremos reflejar es que no sólo se trata de una norma que configura a un Órgano Constitucional³⁹⁶, sino que además se trata de una norma que recoge todos aquellos trámites formales, materiales y de fondo que han de concurrir para la tramitación, sustanciación y finalización –mediante sentencia, auto o providencia- de un determinado procedimiento. Requisitos que

³⁹² Art. 49.1 LOTC.

³⁹³ Art. 50.1. b) LOTC.

³⁹⁴ FERNÁNDEZ FARRERES, G. *Op. cit.* Pág. 19.

³⁹⁵ Art. 1 LOTC

³⁹⁶ Título IX CE.

han de ser cumplidos por las partes que concurren o inician un determinado proceso y, por otro lado, ha de ser el órgano juzgador, -en este caso el Tribunal Constitucional-, el encargado de controlar el cumplimiento de los requisitos de toda índole que la misma contempla y vigilar la debida observancia de toda la serie o sucesiones de actos que desarrollan las normas que lo regulan³⁹⁷.

Así, por un lado, hemos de precisar aquellos requisitos procesales que tienen carácter formal y, por otro, aquellos que han de tildarse como sustantivos o de fondo. Para, posteriormente, establecer el alcance de unos y otros en la admisión, sustanciación y resolución de las demandas de amparo interpuestas. Según la nueva regulación efectuada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo; el procedimiento de amparo tendrá la siguiente regulación procesal.

1º) Derechos Protegidos. Art. 41.1 LOTC

Tal y como determina el artículo 41.1 de la LOTC *“Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución”*³⁹⁸.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional los derechos susceptibles de amparo por el Tribunal Constitucional son, única y exclusivamente, aquellos que determina el precitado artículo. Quedarán fuera del conocimiento del Tribunal Constitucional todas aquellas vulneraciones de derechos que no se encuentren entre los expresamente recogidos tanto en la

³⁹⁷ Arts. 161.1 d); Art. 162. 2 y Art. 165 CE.

³⁹⁸ El párrafo primero del Art. 41 LOTC no ha sido objeto de reforma por parte de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

norma fundamental como por la Ley Orgánica³⁹⁹, siendo lo contrario causa de inadmisión del recurso⁴⁰⁰.

Por tanto, la reforma cierra el debate suscitado en relación a la posibilidad de despojar del conocimiento del Tribunal determinados derechos fundamentales, como mecanismo para eliminar su sobrecarga de trabajo. Nos referimos a aquellos autores⁴⁰¹ que vislumbraron la posibilidad de reducir la tutela de los derechos contenidos en el art. 24 CE y también el art. 14 CE, como vía que reduciría aproximadamente en un 90 % los recursos de amparo⁴⁰² y, con ello, se produciría la conservación del amparo como mecanismo de tutela de los derechos fundamentales, manteniendo su vertiente subjetiva y consiguiendo así reducir el volumen de trabajo. Así podría el Alto Tribunal resolver en un tiempo prudencial aquellos otros procedimientos de los que es su único conocedor, principalmente los que versan sobre el control abstracto de las normas y la

³⁹⁹ No obstante, el Tribunal ha insertado derechos no expresamente contemplados en los derechos susceptibles de ser recurridos en amparo. Ejemplo paradigmático de lo que decimos es el derecho al juez imparcial, que aún no previéndose en el texto constitucional, el constituyente no lo insertó dentro de las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Por ello, el Tribunal entendió que tal derecho, aunque no se cite de forma expresa, ha de entenderse inserto en él. (STC 145/1988, de 12 de julio. F.J. 5º).

⁴⁰⁰ ATC 379/1986 de 23 abril. F.J. 2º. “El recurso de amparo que instituye el art. 161 de la Constitución y que regulan los arts. 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene por objeto la salvaguardia de unos concretos derechos fundamentales y libertades públicas, que son como dice el art. 53.2 de la Constitución, los reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del capítulo segundo. Y a este cometido debe limitarse la Jurisdicción constitucional para no invadir áreas que la Constitución confía de modo concreto a los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial a quienes el art. 117.3 otorga la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. Lo anterior quiere decir que no compete en absoluto a este Tribunal adoptar medidas preventivas o de corrección de eventuales violaciones de las normas contenidas en el derecho objetivo o de las interpretaciones que de las mismas se puedan hacer, sino exclusivamente restaurar los mentados derechos de los ciudadanos cuando han sido violados. Por la razón antedicha, en el proveído de 5 de marzo pasado propusimos, en primer lugar, la causa de inadmisión regulada en el art. 50.2, a) de la Ley Orgánica del Tribunal por deducirse la demanda sobre derechos no susceptibles de amparo. Y en el momento actual hay que reconocer que tal causa se encontraba justificada, en la medida en que en el escrito de recurso se comenzaba diciendo (...) que las sentencias condenatorias dictadas (...) infringían preceptos constitucionales y entre ellos de manera concreta el art. 9.3 de la Constitución y el principio de la seguridad jurídica; precepto constitucional este que, según lo que antes hemos dicho, no puede dar lugar a un recurso de amparo y hacer aplicable en este concreto apartado la causa de inadmisión del art. 50.2, a)”.

⁴⁰¹ Si bien se trataría de un parecer minoritario, dicha posibilidad fue planteada por la doctrina. Véase, entre otros, MUÑOZ CAMPOS, J. “Recurso de amparo frente a resoluciones judiciales: ¿ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo?”. Diario La Ley, 1983. Tomo 1, pág. 1283. También en relación a que ello conllevaría una sustancial disminución de recursos de amparo, JIMÉNEZ CONDE, F. “Problemas actuales del recurso de amparo”. Anuario de derecho constitucional y parlamentario. Nº2, 1990. Pág. 192. Comprobar y añadir otros.

⁴⁰² Según se ha venido manifestando en las distintas Memorias del Tribunal Constitucional que se publican anualmente en la página web del Tribunal <http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/default.aspx>

dilucidación de los conflictos competenciales. Pues bien, como decimos, la reforma de la LOTC cierra la puerta a dicha posibilidad, aunque hay autores que siguen propugnando tal reducción⁴⁰³.

Cuestión distinta, como hemos visto, es la posibilidad de individualizar las concretas lesiones o vulneraciones de estos derechos que podrían tener acceso al recurso de amparo y/o el cumplimiento de determinados requisitos jurisdiccionales ante la jurisdicción ordinaria. Pues cuestiones tales como cómputo de plazos, la admisión de medios probatorios, cuestiones relativas a emplazamientos, la observancia de los requisitos legales para la interposición de recursos, y demás cuestiones de legalidad procesal que inciden en el ámbito del artículo 24 CE, son sin duda cuestiones relevantes que deben ser dilucidadas y resueltas en sede de jurisdicción ordinaria, pero no poseen la suficiente entidad como para acceder a un bien escaso como es, o debe ser, el conocimiento a través del recurso de amparo.

Es decir, desde nuestro punto de vista y como vimos en el anterior capítulo, cabe la posibilidad constitucional de determinar en qué casos cabe el recurso de amparo, estableciéndose así las circunstancias que delimitarían que el recurso pudiera ser admisible pero, no siempre y en todo caso, en el que cualquier lesión del derecho pueda tener acceso al mismo. Algo que sería congruente con el inciso inserto en el art. 53.2 CE <<y, en su caso>> y con el amplio margen que posee el legislador para la determinación del recurso de

⁴⁰³ Entre ellos GARRORENA MORALES, pues para él, el problema de la saturación del Tribunal en el ingente número de derechos derivados del derecho a la tutela judicial efectiva, que supone entre el 85-90% de los recursos de amparo que se interponen ante el Constitucional. Por tanto, su propuesta sería zanjar el problema desde la propia raíz constitucional, esto es, la reforma del artículo 24 CE, determinándose en el mismo el carácter de “fundamental” o no. Con ello se conseguiría determinar en qué supuestos se accedería al Tribunal, estos serían “la negación del acceso a la justicia” y “la total indefensión”, y cuáles deberían ser resueltos en sede jurisdiccional a través de un “eficaz sistema de recursos”. Con dicha reforma el Tribunal reduciría su carga de trabajo de una manera más que considerable y podría mantenerse el recurso de amparo con el carácter de tutela frente a las lesiones subjetivas de los derechos fundamentales, tal y como ha sido hasta la presente reforma. Vid. GARRORENA MORALES, A. “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica”. Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC). Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Págs. 253 a 259.

También MATIA PORTILLA, entiende que “[n]o sería incompatible con la constitución, a nuestro juicio, que se excluyeran del amparo constitucional determinados derechos fundamentales”⁴⁰³. Aunque no matiza cuál o cuáles serían esos derechos, ni tampoco justifica su encaje constitucional. “La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. REDC. Nº 86, 2009. Madrid. Pág. 347.

amparo (art. 161.1 b) CE). Como podría ser en los casos donde la vulneración tienen su origen directo en una norma de rango legal o, también, que la lesión haya sido conocida de manera previa ante la jurisdicción ordinaria a través de procesos extraordinarios –o *preferentes y sumarios*, si acudimos a la propia terminología constitucional- de tutela de los derechos fundamentales y no en cualesquiera otros procesos ante la jurisdicción ordinaria.

2º) Actos recurribles Arts. 41.2 LOTC

El artículo 41.2 de la LOTC establece que *“El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta Ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes”*.

La Ley Orgánica 6/2007, ha añadido las *“omisiones”* de los poderes públicos como medio susceptible de lesionar o vulnerar un derecho fundamental. No obstante, la <<omisión>>, como inacción vulneradora de los derechos fundamentales, a pesar de que no estaba expresamente prevista por la LOTC, no ha impedido al Tribunal declarar la existencia de la lesión por tal supuesto⁴⁰⁴, por tanto, la reforma recoge la interpretación que venía realizando el Tribunal.

3º) Tipos de recursos de amparo. Arts. 42, 43 y 44 LOTC.

La LOTC establece tres tipos esenciales en los que puede subdividirse *el recurso de amparo*, estos tres *tipos* básicos serían:

- a) El recurso de amparo contra actos sin valor de ley emanados de los Parlamentos o Poder Legislativo. No ha sido objeto de reforma por la L.O.

⁴⁰⁴ Ya en su temprana jurisprudencia ha venido a determinarlo, ver STC 18/1981 de 8 junio, entre otras.

6/2007, de 24 de mayo; con lo cual, nos remitimos a lo ya analizado en torno al mismo en el capítulo anterior.

b) El recurso de amparo contra actos vulneradores de los derechos fundamentales provenientes de la Administración o el Poder Ejecutivo.

El presente *tipo* de recurso de amparo viene recogido en el art. 43 de LOTC pero, en este caso y a diferencia del anterior, sí ha sido objeto de modificación por parte de la Ley Orgánica 6/2007; dándole la siguiente redacción:

“Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

Tres. El recurso solo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo.”

En concreto, se ha añadido al párrafo primero las posibles violaciones de los derechos y libertades ocasionadas por “*omisiones*” de los poderes públicos, en relación directa a lo ya analizado en el artículo 41 LOTC, por tanto, nos remitimos a lo ya señalado al respecto.

Por otro lado, algo que nos parece más relevante, es que se ha suprimido el inciso final del párrafo segundo del artículo, el cuál añadía a la exigencia de la *subsidiariedad*—que más adelante analizaremos- el agotamiento de la vía judicial

previa “de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución”⁴⁰⁵. Algo que-desde nuestro punto de vista- carecía de sentido, ya que la práctica en materia de tutela de los derechos fundamentales se ha centrado en toda clase de procedimientos *ordinarios y extraordinarios* insertos en cada uno de los órdenes jurisdiccionales y también en los denominados *procedimientos preferentes y sumarios* ante la jurisdicción ordinaria, que el constituyente previó en el art. 53.2 CE, como mecanismo para la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Aunque, como hemos visto más arriba, ello supone que cualquier lesión proveniente de cualquier procedimiento pueda acceder al recurso de amparo aunque el derecho fundamental no hubiese sido el objeto principal del procedimiento jurisdiccional del que trae causa. Algo que, como vimos, pone de manifiesto que la regulación legal de los distintos *recursos de amparo* iba más allá de los términos que el constituyente quiso dotar a la regulación contenida en los arts. 53.2, 161.1 b) y 161.1 b) de la Constitución.

c) Por último, el recurso de amparo contra actos vulneradores provenientes de las actuaciones judiciales o del Poder Judicial.

Regulado en el artículo 44 LOTC, que dispone lo siguiente:

“Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los

⁴⁰⁵ Inciso final del párrafo segundo del Art. 43, cuya redacción se mantenía desde el texto original de 1979.

hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.”

El presente artículo ha sido modificado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Se produce la sustitución de la necesidad de agotar “*todos los recursos utilizables*” por “*los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto*”. El objeto del recurso de amparo será la lesión de un derecho fundamental atribuible de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial.

4º) La regulación de los plazos de interposición de la demanda. Arts. 42, 43.2, 44.2 y 85 LOTC.

El plazo para la interposición del recurso de amparo variará dependiendo del *subtipo* de recurso de que se trate. Así y para la interposición del recurso de amparo denominado *amparo parlamentario* el plazo seguirá siendo de tres meses desde que deviniera firme la resolución, esto es, desde que se cumpliera con las vías de impugnación establecidas, al fin de tener al recurso de amparo como subsidiario, tal y como vimos anteriormente⁴⁰⁶.

En el caso del determinado como amparo contra *actos del poder judicial*, este ha sido objeto de modificación mediante la reforma efectuada por la L.O 6/2007, quedando el precepto tal y como sigue.

⁴⁰⁶ Art. 42 LOTC “Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes”.

“Art. 44.2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial”.

Es decir, se ha producido un alargamiento del plazo anterior, pues la reforma dispone el incremento a treinta días cuando con la anterior regulación el plazo para su interposición era de veinte.

Sin embargo, en cuanto al plazo para la interposición del recurso contra *actos de la administración*, nada ha cambiado, en tal sentido sigue disponiéndose de veinte días una vez recaída resolución firme en la vía judicial⁴⁰⁷.

Desde nuestro punto de vista, no entendemos las razones que han llevado al Legislador a ampliar el plazo en un supuesto y restringir –o mantener- el plazo en otro. No obstante, el Tribunal tuvo que entrar a valorar dichos plazos y su diferente regulación, ya que se le planteó en ese supuesto cuál debía ser el plazo para su interposición en el supuesto de tratarse de un *amparo mixto*. El Tribunal resolvió que una interpretación sistemática conduce a que el plazo de interposición común a ambas pretensiones sea de treinta días⁴⁰⁸. Pero, como decimos, ni siquiera el Tribunal se explica el porqué de tal distinta regulación⁴⁰⁹.

También es objeto de modificación el art. 85.2 LOTC, en relación al *día siguiente hábil* y al lugar de interposición de la demanda de amparo⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ Art. 43. 2. LOTC “El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial”.

⁴⁰⁸ ATC 172/2009, de 1 de junio (Sala Segunda). (F.J. 3º).

⁴⁰⁹ ATC 172/2009. (F.J. 3º). “Más allá de las motivaciones que hayan llevado al legislador al establecimiento de plazos distintos, lo cierto es que se exige un tratamiento diferente y específico para cada supuesto en función de cuál sea el origen de la lesión que pretende repararse y a qué poder público se impute la lesión del derecho fundamental aducido; en definitiva, de cuál sea el objeto concreto del proceso constitucional de amparo. Así, provocada la vulneración que se denuncia por la Administración (de nuevo en sentido amplio), tal y como ocurre en este caso, el plazo que regirá es el de veinte días tras notificación de la resolución judicial que agota la vía previa. Ello es así porque, como se dijo antes, no nos encontramos ante uno de los llamados amparos mixtos, que reúnen dos pretensiones diferenciadas y autónomas, una dirigida contra el acto administrativo y otra contra la resolución judicial (STC 291/1985, de 8 de mayo, FJ 2), respecto de los cuales una interpretación sistemática conduce a que el plazo de interposición común a ambas pretensiones sea de treinta días, sino ante un recurso de amparo contra actos administrativos de los previstos en el art. 43 LOTC”.

⁴¹⁰ Art. 85.2 LOTC: ““Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también

5º) Legitimación y partes. Arts. 46 y 47 LOTC.

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, no ha procedido a modificar la regulación sobre legitimación y partes que ya se establecía de manera previa⁴¹¹.

Como vemos, no sólo el constituyente sino también el Legislador, han querido recoger un amplio espectro de legitimados, no sólo para interponer el recurso de amparo, sino que también esa amplitud alcanza a los legitimados para actuar ante el Tribunal en el proceso de amparo iniciado. Por tanto, el Legislador ha excluido de la reforma la posibilidad de restringir la legitimación activa para acceder al Tribunal a través del amparo.

6º) La subsidiariedad y el incidente de nulidad de actuaciones como requisito para el agotamiento de la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo. Arts. 43.1, 44 y D.F 1ª LOTC

La regulación actual, más allá de las posibles interpretaciones del art. 53.2 CE y su relación con la tutela de los derechos ante la jurisdicción ordinaria, caracteriza al recurso de amparo como un mecanismo de garantía subsidiario frente a la tutela que otorga o puede otorgar la jurisdicción ordinaria.

La LOTC determina las exigencias que han de cumplimentarse de manera previa a la interposición del recurso de amparo. Su incumplimiento conllevará la inadmisión del recurso por no haber dado la oportunidad al órgano judicial de subsanar, corregir o reparar las posibles lesiones de derechos fundamentales. Así, y en primer lugar, en relación a los denominados amparos contra *actos del poder judicial* y contra *actos de la administración*, como hemos visto, se requiere

presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, en el registro del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".

⁴¹¹ También ha venido a cerrar la reforma cierto debate iniciado en la doctrina sobre la posibilidad de limitar la legitimación activa. Entre los que proponían esa posibilidad como mecanismo para reducir el número de recursos de amparo puede consultarse SANTAOLLA LÓPEZ, F.: "El recurso de amparo y el desamparo del Tribunal Constitucional". *Revista de Derecho Político*. Núm. 24. 1987. Pág. 169. Aunque el parecer mayoritario de la doctrina entiende que la legitimación está expresamente establecida en el texto constitucional con lo cual es una materia vedada al Legislador, en tal sentido véase PEREZ TREMP, P.: *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004. Pág. 209.

haber sido parte en el procedimiento judicial previo al recurso de amparo. En segundo lugar, se requiere la pronta invocación en sede judicial del derecho fundamental que se estima vulnerado. Obviamente, como mecanismo necesario para dar oportunidad a la jurisdicción ordinaria de reparar las lesiones y restaurar el derecho fundamental⁴¹². El tercer y último requisito es el haber agotado los mecanismos jurisdiccionales posibles para la tutela, es el más interesante según nuestro parecer, como consecuencia de dos modificaciones realizadas por la L.O. 6/2007, de 24 mayo.

La primera, consistente en la modificación del Art. 44.1 a) LOTC, el cual requería que se hubieran agotado “*todos los recursos utilizables*” por “*todos los medios de impugnación previstos*”, desde el punto de vista técnico-jurídico mucho más acertada esta segunda regulación que la original pues no todos los medios de impugnación son o tienen el carácter jurídico de recurso, lo que en principio limitaba las posibilidades de subsanación de las posibles lesiones. Decimos en principio porque desde muy temprano el Tribunal interpretó que el término “*recursos*” debía entenderse en un sentido amplio más allá de la propia literalidad de la palabra. Por tanto, entendemos, que lo que ha hecho el Legislador es simplemente recoger *negro sobre blanco* aquello que el Tribunal lleva años aplicando⁴¹³. No obstante, el cumplimiento de este requisito no exige la interposición de todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, sino sólo aquellos que sean necesarios, con lo cual se habrá de estar al procedimiento y a sus circunstancias concretas⁴¹⁴.

Pues bien, las segunda de las modificaciones relevantes no afecta al propio articulado de la LOTC, sino a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto nos estamos refiriendo a la nueva regulación dada al artículo 241.1 LOPJ, aunque su incidencia en el cumplimiento de las exigencias de la subsidiariedad es ciertamente notable. Según nuestro parecer, la LO 6/2007, de 24 de mayo, no ha modificado la nulidad de actuaciones⁴¹⁵ sino que ha añadido la posibilidad de promover –de manera excepcional- un incidente de nulidad

⁴¹² En tal sentido, véase entre otras la STC 287/1993 de 4 octubre. (Sala Primera).

⁴¹³ ATC 68/2003, de 25 febrero. (Sala Primera). Entre otras resoluciones.

⁴¹⁴ STC 71/1985, de 12 junio. (Sala Segunda), entre otras.

⁴¹⁵ Así el art. 238 LOPJ, recoge los casos de nulidad de actos judiciales; el art. 239, la nulidad de actos por intimidación o violencia y el art. 240 LOPJ, regula la nulidad por defectos de forma.

fundado en la vulneración de alguno de los derechos establecidos en el art. 53.2 CE y siempre que concurren los siguientes condicionantes: *que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario*⁴¹⁶.

Por tanto, se trata de un *remedio procesal último, extraordinario y excepcional*. Desde nuestro punto de vista, el nuevo incidente de nulidad de actuaciones es un mecanismo necesario, ya que ahora podrán denunciarse lesiones para las que antes no existía un remedio procesal, pero insuficiente desde la necesidad de reforzar los mecanismos de tutela de derechos fundamentales en el seno de la jurisdicción ordinaria.

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de valorar la relación entre el nuevo incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo como remedio procesal previo a la interposición del mismo pero, no fue hasta el año 2013, cuando ha creado una doctrina clara sobre su necesaria interposición⁴¹⁷. Pero sobre esto volveremos más adelante.

7º) La demanda de amparo. Art. 49 LOTC.

Tanto la carga que incumbe acreditar al recurrente en amparo como la consiguiente admisión de la misma por el Tribunal, según el parecer mayoritario de la doctrina, se trata del *nudo gordiano* no sólo de la reforma del recurso de amparo sino, en general, de la reforma efectuada por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo. A ambos artículos (arts. 49 y 50 LOTC) dedicaremos el *grosso* del presente trabajo, con lo cual, en este punto lo que vamos a realizar es una toma de contacto con la nueva regulación, que posteriormente desarrollaremos.

Así, como decimos, el art. 49 LOTC ha sufrido una modificación sustancial, que no sólo atañe al demandante de amparo sino que, como veremos, incumbe al propio Tribunal en cuanto que también es objeto de

⁴¹⁶Artículo 241 LOPJ. Incidente de nulidad de actuaciones.

⁴¹⁷ STC 216/2013, de 19 de diciembre. (Pleno)

modificación el articulado para la admisión de la demanda (art. 50 LOTC), requisitos que corresponde al Tribunal apreciar su concurrencia.

Por tanto, para la iniciación del procedimiento de amparo no sólo habrá de cumplimentarse los anteriores requisitos (tratarse de derechos fundamentales de los recogidos en el art. 53.2 CE, estar legitimado para su interposición, la interposición en plazo y cumplimentar los requisitos de subsidiariedad exigidos en cada caso), sino que también será necesaria la interposición de demanda como escrito procesal que pone en marcha el procedimiento y que debe contener una serie de exigencias. Si bien el Tribunal, desde sus inicios, ha sido bastante *flexible* y *no formalista* respecto al cumplimiento en la formulación de la demanda establecido en el art. 49.1 LOTC, determinando que el escrito de demanda, al menos, debe permitir conocer al Tribunal, sin que quepa duda, cuál o cuáles son las concretas vulneraciones que se denuncian y cuál es la concreta pretensión que se aduce y se solicita al Tribunal⁴¹⁸.

Se determina en la nueva regulación del Art. 49 LOTC, lo siguiente:

“1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

2. Con la demanda se acompañarán:

- a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.*
- b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.*

⁴¹⁸ Entre otras, véase STC 214/2005 de 12 septiembre. (Sala Primera).

3. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal.

4. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso”.

En concreto la modificación efectuada por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo atañe a los apartados 1º y 4º del artículo.

Respecto al apartado 1º del Art. 49 LOTC, tras la determinación de los elementos esenciales que han de determinarse en la demanda se añade *in fine* el nuevo requisito o carga que ha de cumplimentar necesariamente el recurrente de amparo, que no es otro que la obligación de justificar “*la especial trascendencia constitucional*”, como exigencia de alcance objetivo que el legislador ha querido añadir como novedad⁴¹⁹. Requisito éste, que se añade al ya existente de justificar la específica o específicas lesiones de los derechos fundamentales que se consideran lesionados y la concreta tutela que se solicita al Tribunal.

Es decir, frente a la anterior regulación⁴²⁰ se añade una exigencia concreta que es la justificación de la *especial trascendencia* que, como puede apreciarse, se trata de un concepto jurídico indeterminado que, al menos respecto a lo que atañe al recurrente, nada se explicita sobre qué ha de entenderse o cómo ha de cumplimentarse esa carga que le es impuesta a quien interponga un recurso de amparo. Nada más hemos de decir al respecto sobre este requisito en el

⁴¹⁹ Véase el análisis de los debates parlamentarios respecto al Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que hemos realizado más arriba.

⁴²⁰ Art. 49.1 LOTC, según redacción anterior a la dada por la LO 6/2007, de 24 de mayo. “ 1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado”.

momento en que nos encontramos, pues tendremos ocasión de analizarlo en plenitud a lo largo del presente trabajo.

Como hemos dicho, se añade también el apartado 4º del Art. 49.1 LOTC, en concreto la apertura del plazo de subsanación de diez días cuando se incurra en el incumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, es decir, los requisitos que imponen o puedan imponer los apartados 1º, 2º y 3º del Art. 49.1 LOTC. Ahora bien, sobre el alcance final que se ha dotado a este precepto volveremos más adelante.

8º) Requisitos para la admisión de la demanda de amparo. Art. 50 LOTC.

Al igual que el anterior artículo, el art. 50 LOTC ha sido objeto de un profundo cambio en su redacción. Tanto el contenido de la demanda como su admisión en sede del Tribunal, han centrado el foco de la reforma, convirtiéndose en los elementos esenciales de la nueva configuración dada al recurso de amparo. Dicho artículo ha quedado redactado de la siguiente manera:

Artículo 50.

“1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:

- a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.*
- b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.*

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49. 4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno”.

En primer lugar, se produce una modificación respecto a la admisión, se pasa de una regla general de admisión, ya que la inadmisión debía ser acordada por unanimidad de la Sección, a que la regla general sea la inadmisión y, sólo si los tres miembros que la componen entienden que se cumple con los requisitos exigidos, se admitirá a trámite el recurso interpuesto. No obstante, si hubiese mayoría, esto es que sólo un miembro de la Sección no esté de acuerdo con la admisión, necesariamente deberá elevarse a la Sala correspondiente para que decida sobre el mismo.

En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de los requisitos que ha de cumplir el demandante de amparo en su escrito, se exige a la Sección la comprobación de las exigencias anteriores: que verse sobre algún derecho fundamental protegible en amparo y que la vulneración provenga de una actuación, omisión o vía de hecho por parte de un poder público (art. 41 LOTC), ya sea contra actos sin valor de ley del Poder legislativo (art. 42 LOTC), por actos provenientes de la Administración o Poder Ejecutivo (Art. 43 LOTC) o bien por actos del Poder Judicial (Art. 43 LOTC). Asimismo, deberá la Sección comprobar que se han agotado los mecanismos previstos para la reparación de

las posibles lesiones del derecho o derechos que se estiman conculcados (Arts. 43.1 y 44 LOTC), que se posee legitimación activa para la interposición de la demanda (Arts. 46 y 47 LOTC), que la misma se interpuesto dentro del plazo fijado para ello (Art. 42, 43.2 y 44.2 CE) y, finalmente, que la demanda como escrito procesal cumple con las exigencias mínimas impuestas al recurrente, entre ellas, y como principal novedad que se haya justificado la *especial trascendencia constitucional* de su recurso.

Es decir, nos encontramos ahora con una regulación que exige un razonamiento de fondo para su admisión pues la regla general -como hemos dicho- será la inadmisión. No sólo la Sección deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos formales y procesales sino que, además, se añade la necesidad de apreciar el nuevo requisito de índole eminentemente objetivo, como es que se aprecie una “*especial trascendencia constitucional*” que justifique su admisión. Como dijimos anteriormente, se trata este de un concepto jurídico indeterminado que, a diferencia de su determinación en el Art. 49 LOTC, aquí el Legislador ha venido a arrojar una cierta clarificación sobre que ha de entenderse, o mejor dicho, cuándo puede apreciarse la existencia o cumplimiento de dicho requisito y, para ello, establece tres interpretaciones o posibles subsunciones en tres criterios objetivos: El primero, la importancia del recurso de amparo interpuesto *para la interpretación de la Constitución*. El segundo, *para la aplicación o para la general eficacia* de la Constitución y, en tercer lugar, que el amparo sirva *para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*.

Cuál sea la interpretación que se está dando a la *especial trascendencia constitucional* y su aplicación en la práctica del Tribunal Constitucional, será objeto de desarrollo y análisis a lo largo del presente trabajo.

9º) La sustanciación del proceso. Arts. 51 y 52 LOTC.

Una vez admitida a trámite la demanda, como hemos visto en el apartado anterior, se procederá a la sustanciación del procedimiento ante el Tribunal

Constitucional, tal y como determinan los artículos 51 y 52 LOTC; prosiguiendo los pasos procesales que den lugar a una resolución mediante sentencia.

Pues bien, en relación a estos artículos, hemos de decir que el Art. 51 LOTC no ha sido objeto de modificación por parte de la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, quedando por tanto su redacción como estaba⁴²¹. Mediante el que se exige al Órgano, Autoridad o Juez o Tribunal que conoció el asunto, que remita las actuaciones que dieron lugar a la posterior interposición del recurso de amparo. Así como deberán emplazar a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el Art. 52 sí ha sido modificado por la L.O. 6/2007, quedando en su redacción como sigue:

“1. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común que no podrá exceder de veinte días, y durante él podrán presentarse las alegaciones procedentes.

2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación.

3. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación”.

⁴²¹ Artículo 51. LOTC.: “1. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita las actuaciones o testimonio de ellas.

2. El órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento, cumplimentará el envío dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez días.”

En concreto, y en primer lugar, se modifica de manera sustancial el apartado 2º, puesto que ahora se añade la posibilidad de que sea una Sección del Tribunal quien conozca del recurso de amparo, donde para su resolución no sea necesaria la elaboración de doctrina sobre el derecho fundamental concernido, sino que al caso habrá de aplicársele una jurisprudencia anterior ya consolidada. Este ha sido uno de los aspectos más criticados por la doctrina mayoritaria, pero sobre ello volveremos más adelante.

Por otro lado, y dentro de dicho apartado, se elimina la posibilidad de que las partes soliciten la celebración de vista oral. Ahora será la Sala o en su caso la Sección las que únicamente de oficio podrán determinar bien la celebración de vista o bien podrá acordar la deliberación y votación sin que sea abierto a las partes o al público. No obstante, la práctica del Tribunal en estos años ha tendido a celebrar “a puerta cerrada” las deliberaciones sin más presencia que los propios miembros del Tribunal, con la intervención de las partes mediante escrito⁴²².

En segundo lugar, se ha modificado el apartado 3º del art. 52 LOTC, reformándose el plazo para dictar sentencia. Ya no serán diez días desde que se presenten las alegaciones de las partes, sino diez días a contar desde la fecha en que se acuerde que el Tribunal conocerá del fondo del asunto. Entendemos que la realidad práctica ha llevado al legislador a tomar una decisión que haga factible el cumplimiento de los plazos. Ahora bien, según nuestro parecer, una vez fijada la fecha para la deliberación o vista, necesariamente la Sala o Sección deberá dictar sentencia en el plazo máximo de diez días. Un incumplimiento o un retraso injustificado podrían dar lugar a responsabilidad por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional⁴²³.

⁴²² Desconocemos si alguna vez el Tribunal ha acordado la celebración de vista pública. Si ello es así, entendemos que ese supuesto sería anecdótico. La práctica habitual del Tribunal es la deliberación “a puerta cerrada”. No obstante, sí hemos encontrado recursos en los que se solicita a instancia de parte la celebración de vista oral, denegándose en todos esa posibilidad. Véase en tal sentido, SSTC 7/1991, de 17 de enero; 154/1997, de 29 de septiembre; 68/2001, de 17 de marzo; 82/2001, de 26 de marzo; 152/2002, de 15 de julio; 72/2004, de 19 de abril; 249/2006, de 24 de julio; entre otras.

⁴²³ Tras la modificación en 2009 del art. 139.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; el Pleno mediante ATC 106/2012, de 22 de mayo, ha procedido a declarar el funcionamiento anormal del Tribunal en la tramitación del recurso de amparo al haberse verificado retrasos injustificados.

10º) La sentencia y su resolución por las Secciones. Arts. 53 a 55 LOTC

Relevantes van a ser tres cuestiones: en primer lugar, la determinación de quién ha de conocer el recurso de amparo; en segundo lugar, cuál va a ser el contenido de la resolución y, en tercer y último lugar, la nueva regulación dada a la denominada “autocuestión de inconstitucionalidad”.

Pues bien, respecto al primer punto y en consonancia con el nuevo trámite de admisión, la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, recoge que la Sentencia será dictada bien por la Sala, bien por las Sección a la que se haya derivado el recurso⁴²⁴. No obstante, el Pleno conocerá de aquellos asuntos que recabe para sí⁴²⁵. Pues bien, el propio Tribunal determina lo siguiente en relación a la resolución de los amparos:

*“Su conocimiento corresponde en principio a las Salas, que pueden deferirlo a las Secciones. El Pleno conoce de los que le sean elevados por las Salas para un eventual cambio de doctrina y de aquéllos que recabe expresamente para sí.”*⁴²⁶

Como veremos más adelante, el conocimiento por parte del Pleno no sólo se circunscribirá a ese “*eventual cambio de doctrina*”, sino que incluso entrará a resolver cuando ya exista doctrina sobre un determinado asunto. Sin embargo creemos que no debe circunscribirse a un “cambio” sino también, o al menos, a

También se ha pronunciado para declarar que no ha existido un funcionamiento anormal (ATC 194/2010, de 2 de diciembre. (Pleno)). Así como declarar que no procede hacer ningún pronunciamiento sobre si se ha producido un funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo (ATC 120/2012, de 6 de junio. (Sección Primera)).

⁴²⁴ Artículo 53 LOTC

“La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos:

- a) Otorgamiento de amparo.
- b) Denegación de amparo.”

⁴²⁵ Según determina el Art. 10.1.f) LOTC.

⁴²⁶ Extraído de la página web del Tribunal Constitucional, donde se relata sucintamente las competencias que le son atribuidas.
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/competencias/Paginas/Competencias.aspx>

la elaboración de doctrina en materia de derechos fundamentales. Pero sobre esto volveremos más adelante.

La Sentencia otorgará o denegará el amparo, según indica el art. 53 LOTC, aunque en realidad no son los únicos pronunciamientos que podrá realizar la Sala, la Sección o el Pleno, ya que el otorgamiento podrá ser sólo parcial –respecto a alguna o algunas de las pretensiones- o incluso podrá inadmitir la demanda en esta fase del proceso, mediante Sentencia, aun cuando este no sea un pronunciamiento expresamente establecido en la Ley⁴²⁷.

La L.O. 6/2007, al modificar el Art. 54 LOTC, sólo ha añadido la posibilidad de resolución por la Sección, quedando el artículo como sigue:

“Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales”.

⁴²⁷ Así lo determinó la Sala Primera, STC 318/1994 de 28 noviembre, cuando diferenció la inadmisión de la desestimación. “La Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional contiene un elenco de obstáculos de la procedibilidad que califica como causas de inadmisibilidad, cuya naturaleza no se altera por la circunstancia extrínseca de que se detecten al principio o al final del proceso y se reflejen formalmente en providencia, en auto o en sentencia. Las categorías jurídicas son lo que son y tienen la virtud de hacer más exacto y afinado el análisis de las cuestiones y su solución, produciendo además cada una sus propios efectos, distintos por definición. El mero hecho de que un impedimento tal pasara desapercibido en la fase inicial del procedimiento no justifica que en la terminal lo que es inadmisibilidad de la pretensión se convierta en su desestimación, aun cuando el resultado práctico pueda parecer superficialmente el mismo. Este es el caso ahora, donde se hace inexcusable rechazar la pretensión por razones extrínsecas a su propio contenido sustantivo, dejando sin enjuiciarlo para una futura y eventual ocasión. No se nos diga rutinariamente que los motivos de inadmisibilidad no apreciados in limine litis producen la desestimación si lo fueren en la sentencia. Una cosa es la admisión a trámite de una demanda, que no precluye ni determina su final admisibilidad, y otra este pronunciamiento específico, equivalente en más de un caso a la desestimación pero distinto por su fundamento formal, que permite matizar el pronunciamiento con más rigor intelectual y jurídico y con efectos peculiares muy importantes desde más de una perspectiva (STC 247/1994). En resumen, concurre en esta ocasión el motivo de inadmisibilidad configurada en el art. 50.1 a) por reenvío al 44.1 a) de nuestra Ley Orgánica y así hay que decirlo, aun cuando en ella sólo se indique el contenido de la parte dispositiva de las Sentencias donde se otorgue el amparo (art. 55 LOTC), mientras que nada se puntualice para las denegatorias [art. 53 b) LOTC], omisión cuya causa sea quizá su misma obviedad”. (F.J. 4º)

Además, respecto al artículo 55.1 LOTC no ha sido objeto de modificación, por lo que el pronunciamiento cuando se estime el amparo será exactamente el mismo que con la regulación anterior:

“La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:

a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.”

Una interpretación conjunta de los artículos 53, 54 y 55 LOTC puede dar lugar a una interpretación errónea –según nuestro parecer- sobre la función otorgada al recurso de amparo tras la reforma. Efectivamente, se establece que el “Fallo” (arts. 53 y 54 LOTC) contendrá el otorgamiento o denegación del amparo y que, en base a ello el Tribunal realizará los pronunciamientos pertinentes (art. 55 LOTC). Podría parecer que la obligación de resolución por parte del Tribunal sólo lo es desde un punto de vista subjetivo, es decir, que el recurso sigue sirviendo sólo para otorgar o denegar el amparo solicitado, para tutelar o no tutelar al recurrente en amparo. Pero entendemos que esta interpretación desconocería la reforma de la LOTC en su conjunto, diluyendo por tanto el carácter objetivo que ha de tener tanto la admisión como su resolución sobre el fondo. Con esto sólo queremos recalcar algo que, en principio, puede ser una obviedad y es que tales pronunciamientos de índole o corte subjetivo se producen al final de la sentencia, en el “Fallo”. Lo que no significa, ni lo impone la propia LOTC, es que el resto de la sentencia (Antecedentes y Fundamentación Jurídica) tenga que conocer en exclusiva sobre una argumentación destinada a cumplir esa finalidad que establece el “Fallo” de la sentencia correspondiente. No obstante, creemos que el Legislador debió proceder a reformar el presente artículo, en el que añadiese alguna otra posibilidad acorde con el alcance objetivo que se le ha otorgado al recurso de amparo, ya que tal regulación es

propia del recurso de amparo como tutela puramente subjetiva, pero no es acorde a la nueva regulación en la que el Tribunal Constitucional debe dictar una sentencia basada en la *especial trascendencia constitucional* que posee el recurso. Pero, como decimos, la actual regulación no impide que el Tribunal Constitucional pueda conocer de dicha dimensión objetiva del recurso de amparo pues, como vimos, la norma individual vendrá normalmente establecida en el fallo de la sentencia.

En último lugar, respecto a la denominada “autocuestión de inconstitucionalidad” -art. 55.2 LOTC- sí se ha modificado. Se establece una nueva tramitación, muy importante para la resolución del recurso de amparo cuando la lesión provenga directamente de la ley aplicada, como es la suspensión del procedimiento hasta que el Pleno resuelva sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad⁴²⁸.

11º) La suspensión. Arts. 56 a 58 LOTC

El Título III de la LOTC finaliza con la regulación relativa a la suspensión. Respecto a este incidente procesal y la nueva regulación dada por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, sólo hemos de decir que la modificación efectuada afecta al artículo 56 LOTC; quedando los arts. 57 y 58 LOTC como se encontraban.

Destaca, en primer lugar, la amplitud dada a la nueva regulación, pues de los dos apartados que antes contenía el Art. 56 LOTC⁴²⁹, se pasan ahora a seis

⁴²⁸ Art. 55.2 LOTC “En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes”.

⁴²⁹ Artículo 56 LOTC

“1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.

2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

apartados. Y se inicia con la regla general, -antes no existente-, de la no suspensión de las resoluciones a causa de la interposición.

En segundo lugar, se pasa a una completa regulación cuando se produzca la excepción a esa regla general. En consonancia con el nuevo trámite de admisión, la suspensión podrá acordarla la Sala o la Sección que esté conociendo del recurso, pudiendo determinar que sea total o parcial. Pero no sólo podrá acordar la suspensión, sino que además se prevé que la Sala o Sección puedan establecer otras medidas cautelares o provisionales que prevén el ordenamiento. También en supuestos de *urgencia excepcional* podrá acordar la suspensión *inaudita parte* cuando se produzca la admisión del recurso de amparo.

IV.- EL ANÁLISIS DOCTRINAL SOBRE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

1º) La constitucionalidad de la reforma.

Hay autores que han puesto en duda la constitucionalidad de la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Sus argumentos se centran principalmente en la interpretación de los artículos 53.2 y 161.1.b) de la Constitución, esto es, en la apreciación de que nuestra Norma Fundamental recoge el recurso de amparo como un mecanismo de tutela subjetivo frente a las violaciones de los derechos fundamentales. Frente al nuevo recurso, y su

4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse.

5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.

6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno."

regulación establecida en los arts. 49 y 50 de la LOTC, que prima el conocimiento por parte del Tribunal vinculándolo a la interpretación y alcance general de los derechos fundamentales, es decir, a la vertiente objetiva que pueda desprenderse de la demanda interpuesta.

En tal sentido FERNÁNDEZ FARRERES duda de la constitucionalidad del nuevo trámite de admisión, en la medida en que el recurso de amparo dependerá, para su viabilidad, de que posea especial trascendencia. “[N]o deja de suscitar dificultades que guardan directa relación con la finalidad y funciones asignadas constitucionalmente al recurso de amparo. (...) [A]demás, pues, de esta notable ambigüedad, no puede desconocerse que el recurso de amparo cumple, y no puede dejar de cumplir en tanto que la Constitución no se modifique, una función garantista de carácter subjetivo de los derechos fundamentales. Sin perjuicio de la llamada dimensión objetiva, la tutela es consustancial al recurso de amparo.” Para él es necesario que el amparo siga siendo un mecanismo de *protección frente a efectivas vulneraciones y lesiones subjetivas de derechos fundamentales*⁴³⁰.

También, para GARRORENA MORALES, tocar el recurso de amparo *será siempre una operación muy delicada*. Para él, si no se hace bien podría conllevar una considerable disminución de la tutela subjetiva de los derechos fundamentales y su protección⁴³¹. La idea que va a desarrollar se centra en que un elevado número de demandas de amparo no es sinónimo de un mayor nivel de garantía de los derechos y libertades, por tanto, es necesaria una disminución del número de demandas de amparo que entran al Tribunal sin que ello suponga una disminución de garantías de los derechos. Para GARRORENA MORALES es necesaria la permanencia de la tutela subjetiva ante el Tribunal Constitucional pero, al mismo tiempo, intentando que ello no siga suponiendo una saturación del mismo, por tanto que se produzca una disminución de los asuntos quedando intacta la tutela subjetiva ante el Tribunal⁴³². Ahora bien, según él, la reforma efectuada da un giro copernicano al sistema de admisión del recurso que pasa

⁴³⁰ FERNÁNDEZ FARRERES, op. cit. Págs. 22 y 23.

⁴³¹ GARRORENA MORALES, A. “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica”. Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC). Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 219.

⁴³² GARRORENA MORALES, A. Op. Cít. Pág. 220.

de ser un derecho a ser una decisión del Tribunal Constitucional. “Y ello no porque tal fórmula sea mejor o peor que cualquier otra sino porque, por definición, optar por la objetivación del recurso de amparo, en términos tan drásticos como la Ley lo hace, supone dar a éste un giro de 180º en virtud del cual su admisión deja de ser, sencillamente, un derecho del recurrente conectado a la posible existencia de una lesión en sus derechos fundamentales y pasa a ser una decisión que queda en manos del Tribunal Constitucional y en la que juegan ya unos parámetros muy distintos”⁴³³.

Pone en duda la constitucionalidad de la objetivación del amparo efectuada por la L.O. 6/2007, todo ello en base a la función garantista o de tutela frente a las lesiones subjetivas que se le ha venido dando al recurso de amparo en estos años de vigencia de la Constitución. Incluso se plantea, en relación a la eliminación de la vertiente subjetiva, “si será sensato tirar por la borda una experiencia garantizadora tan positiva y de tantos años para obtener un resultado (el desahogo del Tribunal Constitucional) que, a mi juicio, se puede alcanzar por otros medios; máxime cuando –no deberíamos olvidarlo- la también necesaria dimensión objetiva del recurso (...) no se pierde por el hecho de que el mismo opere como instrumento reparador de las lesiones subjetivas causadas en nuestros derechos fundamentales”⁴³⁴.

En el mismo sentido se pronuncia MATIA PORTILLA, para quien el amparo no puede ser objetivado porque vulneraría su esencia constitucional, al ser un mecanismo de tutela subjetiva de los derechos fundamentales. Por tanto, obligar al recurrente a alegar el requisito de la especial trascendencia constitucional como algo ajeno a la vulneración de los derechos fundamentales, iría en contra de lo preceptuado en el artículo 53.2 CE. Para él, esta objetivación sólo podría realizarse a través de una reforma constitucional⁴³⁵.

Para CABAÑAS GARCÍA, el límite al Legislador se encuentra en que no se produzca una *desnaturalización* de la tutela jurisdiccional de los derechos

⁴³³ *Ibidem*.

⁴³⁴ GARRORENA MORALES, A. Op. Cit. Pág. 226.

⁴³⁵ MATIA PORTILLA, F. J. “La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. REDC. Nº 86, 2009. Madrid. Pág. 346

fundamentales⁴³⁶. Para él, existe un *núcleo indisponible* que sería los derechos fundamentales que se encuentran protegidos, la legitimación activa atribuida ex Art. 162.1.b) CE, la tutela subjetiva que es la finalidad de los procedimientos de tutela establecidos en dicho artículo -sin perjuicio de la dimensión objetiva- y la subsidiariedad del recurso de amparo frente a la tutela ante la jurisdicción ordinaria y la preferencia y sumariedad del procedimiento⁴³⁷.

En tal sentido, NOGUEIRA GUASTAVINO, entiende que la nueva regulación puede acomodarse al texto constitucional si se interpreta de manera que se sigan amparando aquellas vulneraciones de los derechos fundamentales que sean patentes. “Si las violaciones de derechos dejan de ser amparables por el TC si no son constitucionalmente interesantes, (...), se estaría desamparando lo amparable en contradicción con el texto constitucional, sin que el hecho de que el art. 161 CE remita a la ley para determinar los casos y formas en que procede el amparo, pueda disociarse de la función derivada del art. 53.2 CE donde se contiene la función indeclinable e insoslayable del amparo y su clara vertiente subjetiva. (...) el único modo para armonizar la LO 6/2007 con el texto constitucional sería entender que toda demanda cuya vulneración sea clara y prima facie evidencia, ello ya intrínsecamente sería constitucionalmente interesante”⁴³⁸.

No obstante, hay autores dentro de la doctrina que estiman que la reforma operada sí se encuentra amparada por el marco constitucional establecido.

Así, para MARC CARRILLO, “[l]a objetivación del recurso de amparo es una opción legítima del legislador. El artículo 53.2 de la Constitución no prefigura un modelo explícito de recurso de amparo, si por ello se entiende que esta garantía especial de los derechos fundamentales excluya una concepción de carácter objetivo. Lo que se ha consolidado en la práctica ha sido la condición

⁴³⁶ CABAÑAS GARCÍA, J.C.: “El recurso de amparo que queremos. (Reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)”. REDC. Nº 88, 2010. Madrid. Pág. 44.

⁴³⁷ CABAÑAS GARCÍA. Op. Cít. Pág. 45.

⁴³⁸ NOGUEIRA GUASTAVINO, M. “La trascendencia constitucional de la demanda de amparo tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la LO 6/2007”. Revista de Derecho Social, Nº 51. 2010. Pág. 197.

subsidiaria de garantía subjetiva del recurso de amparo ordinario, respecto de la tutela de derechos fundamentales dispensada por el Poder Judicial. Pero no hay una razón suficiente por la que quepa concluir que la objetivación del amparo constitucional comporte el peligro de reducir la protección efectiva de los derechos fundamentales”⁴³⁹. No obstante, estima que existen “buenos argumentos” en sentido contrario al referido pero no hasta el punto “de suponer una contradicción radical con las previsiones constitucionales. No hasta el punto de comportar una tacha de inconstitucionalidad”⁴⁴⁰. Incluso tiene que volver a recordar que la jurisprudencia del Tribunal vincula a la jurisdicción ordinaria en su función de tuteladores de los derechos fundamentales. Jurisprudencia que emana de los procesos de los que conoce el Tribunal, incluido el amparo⁴⁴¹. “Y no se trata de negar que el precepto constitucional que demanda a través del recurso de amparo una protección de los intereses legítimos del recurrente [Art.162.1.b) CE]. Sino, más bien, de poner de relieve que dichos intereses han de ser atendidos por la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional de diferente manera”⁴⁴². En definitiva y para MARC CARRILLO, una reforma objetiva del recurso de amparo entendida como tal, esto es, con carácter de extraordinaria “es una opción que no fuerza el significado constitucional del recurso de amparo en su conjunto. Sobre todo, si no se pierde de vista la naturaleza de la jurisdicción constitucional como jurisdicción especial”⁴⁴³.

También se ha pronunciado ARAGÓN REYES sobre el acomodo de la nueva regulación al texto constitucional, entendiendo que no excede de la capacidad de actuación del Legislador *dados los términos utilizados por los arts. 53.2 y 161.1.b) CE*⁴⁴⁴.

⁴³⁹ CARRILLO, M. “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis”. Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC). Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 106.

⁴⁴⁰ CARRILLO, M. Págs. 106 y 107.

⁴⁴¹ *Ibidem*. Pág. 108.

⁴⁴² CARRILLO, M. Pág. 109.

⁴⁴³ *Ibidem*. Pág. 110.

⁴⁴⁴ ARAGÓN REYES, M. “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. La función del Ministerio Fiscal”. Teoría y realidad constitucional. Madrid. Nº. 28 (2º semestre). 2011. Pág. 372

Como hemos visto, la doctrina mayoritaria refleja ciertas dudas e inquietudes sobre la constitucionalidad de la nueva regulación dada al recurso de amparo. No obstante este no es el único aspecto que ha sido objeto de debate. Tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, la doctrina procedió a su análisis y al cuestionamiento de la reforma efectuada, principalmente, a los aspectos que incidían o afectaban al recurso de amparo y su admisión. Muchos son los puntos de estudio y las opiniones vertidas sobre la nueva regulación, aunque la mayoría de los análisis se centran en tres aspectos concretos: el nuevo trámite de admisión del recurso de amparo; el conocimiento de los recursos de amparo por parte de las Secciones y el papel que ha de jugar la nueva regulación dada al *incidente de nulidad de actuaciones*. Veámoslo detenidamente.

2º) El nuevo trámite de admisión.

a) Del sistema de admisión al de inadmisión.

Para la mayoría de la doctrina la nueva regulación conlleva la inversión del trámite de admisibilidad, se va a pasar de admisión a otro de inadmisión, donde el Tribunal pasará de comprobar que no existen causas de inadmisión a otro en el que el demandante justifique la admisión en base a la *especial transcendencia constitucional*. El recurrente “habrá de convencer al Tribunal que existe”⁴⁴⁵ y que esto constituirá un mayor margen de maniobra para que el Tribunal pueda seleccionar qué demandas de amparo merecen ser objeto de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, “en coherencia con la lógica de la objetivación de los motivos de la demanda”⁴⁴⁶.

Dicho cambio es patente para NOGUEIRA GUASTAVINO, para quien el nuevo sistema que pasa de la *inadmisión* a la *admisión* supone que, con la anterior regulación, “el Tribunal Constitucional motivaba la decisión de inadmisión, porque se sobrentendía que los recursos de amparo estaban

⁴⁴⁵ CARRILLO, M. “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis”. Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC). Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 70.

⁴⁴⁶ CARRILLO, M. “La reforma de la jurisdicción constitucional...”. Pág. 120.

llamados a ser admitidos a trámite. Tras la reforma lo que debe ser objeto de especial decisión motivada es la admisión a trámite de los recursos de amparo (...) en realidad se parte de la concepción de que todo asunto resulta inadmisibile mientras no se demuestre lo contrario”⁴⁴⁷.

Para FERNANDEZ FARRERES supone un cambio muy importante, aunque pone en duda que con esta medida se vaya a conseguir alcanzar el objetivo perseguido, como es la agilización del procedimiento⁴⁴⁸. Para el autor la reforma es importante pero el hecho de que sigan llegando recursos de amparo al Tribunal no va a paliar el estado de saturación, pues los Magistrados y Letrados tendrán que seguir analizando las mismas. Aunque sea en un sentido positivo, esto es, que las demandas posean especial trascendencia, se podrá agilizar su inadmisión por las providencias que ahora no tendrán que ser motivadas pero no se agilizará la reflexión interna que le lleva a dicha inadmisión⁴⁴⁹. Tanto es así que, para FERNÁNDEZ FARRERES, ni siquiera un sistema de inadmisión basado en el *certiorari* cambiaría tal hecho⁴⁵⁰.

Por otro lado, MONTAÑÉS PARDO vinculará la admisión en positivo con la especial trascendencia constitucional. La concurrencia del motivo de admisión vendrá determinada por la efectiva *especial trascendencia* del recurso de amparo interpuesto, que el Tribunal apreciará atendiendo a las alegaciones formuladas por el recurrente. “En realidad se ha invertido el juicio de admisibilidad, ya que se ha pasado de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a examinar la concurrencia de <<motivos de admisión>>. Esta admisión en positivo conlleva la objetivación del recurso de amparo, pues, aunque el amparo siga siendo un recurso subjetivo de tutela de los derechos

⁴⁴⁷ NOGUEIRA GUASTAVINO, “La trascendencia constitucional de la demanda de amparo tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la LO 6/2007”. Revista de Derecho Social, Nº 51. 2010.

⁴⁴⁸ FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”. Revista española de Derecho Constitucional. Nº 81, septiembre-diciembre (2007). CEPC. Madrid. Pág. 20.

⁴⁴⁹ FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional....”. Págs. 20 y 21.

⁴⁵⁰ *Ibídem*.

fundamentales, para su admisión se exige algo más: que tenga una especial trascendencia constitucional”⁴⁵¹.

No obstante, no toda la doctrina aprecia que realmente exista ese sustancial cambio respecto a la admisión. Así, CABAÑAS GARCÍA, pone en duda que con el nuevo trámite de admisión se produzca una inversión del juicio de admisión y que además esta nueva admisión suponga agilizar el procedimiento. En primer lugar porque “la verificación de si los requisitos concurren o no en un recurso, es un juicio técnico que inevitablemente obra siempre en las dos direcciones (positiva y negativa): se comprueba si los requisitos existen y eso implica en simultáneo descartar las correspondientes causas de inadmisión”⁴⁵². En segundo lugar, y en relación a la agilización, porque el Tribunal tendrá que seguir controlando los requisitos procesales, la argumentación de fondo relativa a la lesión del derecho fundamental pero, además, ahora deberá controlar el requisito sustantivo o de fondo de la *especial trascendencia constitucional*⁴⁵³.

b) Sobre la especial trascendencia constitucional y la objetivación del recurso de amparo.

Son pocos los autores que han mirado “con buenos ojos” la introducción del requisito de la *especial trascendencia constitucional*⁴⁵⁴, como requisito de corte objetivo, para la admisión del recurso de amparo. La doctrina más reacia al nuevo trámite de admisión centra su mirada en la posible pérdida del recurso de amparo como tutelador de los derechos fundamentales. El menoscabo de la tutela subjetiva ante un amparo constitucional de índole predominantemente objetivo.

⁴⁵¹ MONTAÑÉS PARDO, M. A.: “La especial trascendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo”. Otrosí, nº1. Enero 2010. ICAM. Pág. 31.

⁴⁵² CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El recurso de amparo que queremos. (Reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)”. REDC. Nº 88, 2010. Madrid. Pág. 77

⁴⁵³ CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El recurso de amparo que queremos....”. Pág. 78.

⁴⁵⁴ Como hemos visto, esa ha sido la voluntad del Legislador. En tal sentido también es apreciado por TENORIO SÁNCHEZ, “Con la reforma de 2007 de la LOTC se va a producir, por parte del legislador, una decidida objetivación del recurso de amparo. Esto se comprueba tanto analizando la voluntad objetiva de la ley como la voluntad subjetiva del legislador”; en “*Derechos en serio, recurso de amparo...*”. Op. cit. 146.

Así, por ejemplo, nos encontramos con la opinión de HERMOSILLA MARTÍN para el que, la necesidad de justificar expresamente la *especial trascendencia constitucional* supone una carga “excesiva”,⁴⁵⁵ por entenderse que caben supuestos en los que se derive la especial trascendencia de la propia argumentación y relatos fácticos y jurídicos de la demanda. Estaríamos ante una argumentación “tácita” o derivada de la propia argumentación dada por el recurrente. Para HERMOSILLA MARTÍN del tenor del art. 49 LOTC cabe tal interpretación como la contraria⁴⁵⁶. Por tanto, propone una flexibilización de la carga argumental expresa relativa a la especial trascendencia constitucional. “[C]reo aún más conveniente, en orden a atemperar la indeseable objetivación del recurso de amparo, que la flexibilidad interpretativa exima al justiciable de modo duradero y permanente de una obligación de razonar expresamente un presupuesto de admisión que, por su naturaleza y relevancia, debería ser fiscalizado por el Tribunal Constitucional en orden a garantizar de manera efectiva y real la tutela de los derechos fundamentales”⁴⁵⁷.

También, RODRIGUEZ BEREIJO, en relación a la justificación de la *especial trascendencia constitucional*, como *causa de inadmisión* establecida por el art. 50.1 b) LOTC, entiende que en él se encuentra inserto el anterior requisito de fondo que era “*la carencia manifiesta de contenido*”. Por tanto, y en primer lugar, una falta de apariencia real y efectiva de lesión o vulneración del derecho fundamental conllevará la inadmisión del recurso y, en segundo lugar, si no se ha producido la anterior tacha de inadmisión, la demanda se inadmitirá si no ha satisfecho el actual requisito de la *especial trascendencia constitucional*. Requisito éste que será distinto a la alegación de la lesión en la demanda de amparo⁴⁵⁸. Por tanto, y para él, la “*carencia manifiesta de contenido*” sigue vigente o inserta dentro de los requisitos para la admisión de las demandas de

⁴⁵⁵ HERMOSILLA MARTÍN, R.: “La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales; en especial, el Tribunal Constitucional. Particular problemática de la acreditación de la especial trascendencia del recurso de amparo como presupuesto para su admisión”. Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España. Tomo I. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Coord. Alfredo Montoya Melgar. Ed. Dykinson. Madrid. 2010. Pág. 239

⁴⁵⁶ *Ibídem*.

⁴⁵⁷ HERMOSILLA MARTÍN. *Op. Cit.* Pág. 241.

⁴⁵⁸ RODRIGUEZ BEREIJO, A. “La reforma del recurso de amparo”. Revista Española de Derecho Financiero. 151/Julio-Septiembre-2011. Pág. 701.

amparo o, al menos, que es condición necesaria e incluso previa al nuevo requisito de fondo⁴⁵⁹.

Además, se plantea si puede existir una objetivación absoluta, es decir, una objetivación del amparo en la que se elimine la tutela subjetiva. Entiende que este nuevo criterio de admisión otorga al Tribunal cierto grado de actuación equivalente al *writ of certiorari*, pues se trata de un concepto “bastante genérico, ambiguo e indeterminado”⁴⁶⁰. Siendo perfectamente posible que “una demanda de amparo que cumpla con todos los presupuestos procesales y en la que se ponga de manifiesto la lesión de un derecho fundamental perfectamente razonada y fundamentada, fáctica y jurídicamente, sea, sin embargo, inadmitida a través del Tribunal, dejando así desamparada a la víctima de una evidente lesión constitucional”⁴⁶¹.

Para MATIA PORTILLA, la *especial trascendencia constitucional* establecida “no guarda relación con el contenido constitucional de la demanda (esto es, con la acreditación de que un derecho protegido por el amparo ha sido efectivamente lesionado)”⁴⁶². En cuanto a los supuestos contemplados en el art. 50 LOTC, señala que “[m]ientras que dos de las opciones descritas (en concreto, la primera y la tercera) parecen proyectarse sobre aspectos objetivos, (...), la segunda alude a la aplicación y general eficacia de la Constitución. No parece que sea rechazable, prima facie, que se alegue que existe una especial trascendencia constitucional cada vez que un derecho constitucional es desconocido o menoscabado por los aplicadores del Derecho porque de tal forma se consagrará, igualmente, una censurable inaplicación de la propia Constitución.”⁴⁶³. Ahora bien, si se confirma su planteamiento “se estaría disolviendo la reforma operada.”⁴⁶⁴.

⁴⁵⁹ *Ibídem*.

⁴⁶⁰ RODRIGUEZ BEREIJO. *Op. Cit.* Pág. 704.

⁴⁶¹ RODRIGUEZ BEREIJO. *Op. Cit.* Pág. 706.

⁴⁶² MATIA PORTILLA, F. J. “La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. REDC. N° 86, 2009. Madrid. Pág. 348.

⁴⁶³ *Ibídem*.

⁴⁶⁴ MATIA PORTILLA. *Op. Cit.* Pág. 349.

No obstante, y en sentido opuesto, nos encontramos con la interpretación realizada por GARCÍA COUSO para quien, al producirse la inversión del juicio de admisibilidad, se pasa de comprobar que no había existido una vulneración a que la demanda posee un interés objetivo para su conocimiento⁴⁶⁵. Por ello, al modificarse el contenido de lo preceptuado en el Art. 50 LOTC, se cuestiona si el Tribunal Constitucional debe realizar el mismo juicio a cerca de la existencia de la lesión. Para GARCÍA COUSO es perfectamente defendible, con la actual regulación, que el análisis de la posible vulneración del derecho se desplace a un segundo plano o a un trámite posterior al análisis de su admisión como es la fase de resolución, debiendo centrarse este último de manera exclusiva en el nuevo trámite de corte objetivo, es decir, en la “*especial trascendencia constitucional*” del recurso de amparo interpuesto⁴⁶⁶. Plantea incluso que no tiene que existir vulneración de un derecho fundamental para que el Tribunal pueda apreciar la existencia de dicha *trascendencia constitucional*⁴⁶⁷.

Por tanto, entiende que el juicio inicial para la admisión de la demanda por parte del Tribunal, ha de centrarse en que la demanda efectivamente posea dicha “*especial trascendencia*” y que el Tribunal no tenga que entrar al fondo del asunto si de ese análisis no se desprende el mismo. De no quedar acreditado el nuevo criterio de admisión, el Tribunal debe desestimar la demanda sin entrar al fondo de la alegación de la vulneración⁴⁶⁸. Para que la alegación de la lesión pueda ser trascendente en el juicio de admisión, esta debe mostrarse como consustancial a la acreditación de la “*especial trascendencia constitucional*”⁴⁶⁹.

Desde un punto de vista que podríamos calificar de “intermedio”, respecto a la interpretación del nuevo requisito, nos encontramos ante la exégesis realizada por MONTAÑÉS PARDO pues, para él, la concurrencia del motivo de admisión vendrá determinada por la efectiva *especial trascendencia del recurso*

⁴⁶⁵ GARCÍA COUSO, S.: “El nuevo modelo de protección de los derechos fundamentales tras la aprobación de la LO 6/2007: La objetivación del amparo y la tutela subjetiva de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Revista Europea de Derechos Fundamentales. Núm. 15/1er Semestre 2010. Pág. 149.

⁴⁶⁶ GARCÍA COUSO. *Op. Cit.* Págs. 150-151.

⁴⁶⁷ *Ibídem.*

⁴⁶⁸ GARCÍA COUSO. *Op. Cit.* Págs. 151-154.

⁴⁶⁹ GARCÍA COUSO. *Op. Cit.* Págs. 154-155.

de amparo interpuesto, que el Tribunal apreciará atendiendo a las alegaciones formuladas por el recurrente⁴⁷⁰.

En relación a los supuestos legalmente establecidos, para MONTAÑÉS PARDO, la reforma no ha introducido el sistema de selección discrecional de asuntos, propio del *writ of certiorari*, pues lo que se ha establecido con la reforma es un sistema de admisión y no un sistema de selección, “ni el Tribunal tiene atribuida la potestad de seleccionar libremente los recursos de amparo ni podría rechazarlos cuando cumplan los requisitos de admisión previstos en el art. 50.1 LOTC”⁴⁷¹.

En el sentido apuntado anteriormente apuntado, señala HERNÁNDEZ RAMOS, “[a] pesar de que los criterios jurídicos de admisión son concebidos tan ampliamente que le conceden al Tribunal un importante espacio de decisión y de valoración, lo que no se concede al Tribunal es discrecionalidad ni absoluta ni arbitraria”⁴⁷²; pues a diferencia del *writ of certiorari* estadounidense, “ni el Tribunal Constitucional ni el *BVerfG* tienen atribuida la potestad de seleccionar libremente un recurso de amparo o una *Verfassungsbeschwerde*. Y ello debido a la segunda cuestión clave: tanto la LOTC como la *BVerfGG* establecen normas que constriñen jurídicamente a admitir los respectivos recursos en caso de que se satisfagan los criterios establecidos por dichas leyes, por muy de forma abstracta que éstos estén formulados”⁴⁷³.

Desde nuestro punto de vista no sólo se ha producido un cambio en la admisión, labor que ha de efectuar el Tribunal Constitucional, sino que –como bien dice el Prof. ARAGÓN REYES- también es un cambio, modificación o reforma que atañe, y no de manera menos relevante, al propio demandante de amparo, el cual habrá de cumplir y acreditar en su demanda los requisitos procesales impuestos por la LOTC, al cual se ha añadido el requisito de fondo o material de tener que justificar y acreditar en la demanda el nuevo requisito de la

⁴⁷⁰ MONTAÑÉS PARDO, M. A.: “La especial transcendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo”. Otrosí, nº1. Enero 2010. ICAM. Pág. 31.

⁴⁷¹ MONTAÑÉS PARDO. Op. Cit. Pág. 32.

⁴⁷² HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Pág. 190.

⁴⁷³ *Ibídem*.

*especial trascendencia constitucional*⁴⁷⁴ que, desde nuestro punto de vista, no se trata de un requisito más, sino de la piedra angular en torno a la cual gira la nueva configuración del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Para ARAGÓN REYES la justificación o acreditación suficiente de la lesión de los derechos fundamentales y el actual carácter objetivo que ha de desprenderse de la demanda, se entrelazan en la interpretación realizada de los arts. 49 y 50 de la LO 6/2007; por tanto, la tutela subjetiva, su petición y acreditación en la demanda, seguirá siendo necesaria aunque no “como pretensión suficiente, por sí sola, para hacer que el Tribunal conozca del recurso, ya que con ella habrá de concurrir, necesariamente, la nueva causa objetiva de admisión”⁴⁷⁵, que es distinta a la existencia y argumentación de la lesión del derecho fundamental. No obstante, la justificación de la *especial trascendencia* que realice el demandante de amparo *no vincula al Tribunal a la hora de admitir el recurso de amparo, que puede perfectamente entender que no se da la especial trascendencia constitucional* y, aunque en un primer momento se admita a trámite, ello no impide que posteriormente mediante sentencia se determine que efectivamente el recurso carecía de la misma⁴⁷⁶.

También, PEREZ TREMPs, sin olvidar que la vertiente subjetiva y la dimensión objetiva del recurso de amparo no son *excluyentes* sino *interdependientes*⁴⁷⁷, añade que la reforma “ha acentuado mucho la dimensión objetiva del recurso relativizando la dimensión subjetiva del mismo y, para muchos, prescindiendo incluso de ella; en todo caso ha construido con la L.O. 6/2007 un recurso de amparo muy distinto del que funcionó hasta la entrada en vigor de esta ley. Dicho de otra forma, el legislador, consolidado el sistema judicial de protección de derechos fundamentales, ha partido en la nueva regulación del principio de que el recurso de amparo debe actuar básicamente como instrumento de interpretación y defensa objetiva de la Constitución,

⁴⁷⁴ ARAGÓN REYES, M.: “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. La función del Ministerio Fiscal”. Teoría y realidad constitucional. Madrid. Nº. 28 (2º semestre), 2011. Pág. 371

⁴⁷⁵ ARAGÓN REYES. Op. Cit. Pág. 372.

⁴⁷⁶ *Ibídem*.

⁴⁷⁷ PEREZ TREMPs: “El recurso de amparo...”. (2015). Op.cit. Pág. 26.

poniéndolo en conexión con el carácter de “intérprete supremo” de ésta que posee el Tribunal Constitucional”⁴⁷⁸.

Quizás es MARC CARRILLO el autor que más firmemente ha defendido la reforma operada y la objetivación del recurso de amparo, pero siempre y cuando se vea reforzada la tutela subjetiva ante la jurisdicción ordinaria⁴⁷⁹. Para MARC CARRILLO la especial trascendencia constitucional supone “*de alguna forma la incorporación (...) de una cierta regla de actuación jurisdiccional próxima al writ certiorari*”⁴⁸⁰.

Para él, el modelo de recurso de amparo es abierto, por tanto cabe la objetivación aunque, para ello, los derechos fundamentales deberán estar asegurados en sede de jurisdicción ordinaria. “*En este sentido, el modelo constitucional es abierto, pero a partir de una condición previa, ya reiterada: que la tutela de los derechos y libertades, de los intereses legítimos de las personas, la han de asegurar los órganos dependientes del Poder Judicial, cuya función es ejercer la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado de acuerdo con la constitución y la ley*”⁴⁸¹.

No obstante, MARC CARRILLO no deshecha la tutela subjetiva a través del recurso de amparo y la objetivación del mismo. Pero esto, por supuesto, una vez reconocido que la sede donde reside la tutela subjetiva de los derechos fundamentales son los órganos del Poder Judicial. La objetivación del recurso supondrá la selección de asuntos, “[l]a libertad del Tribunal para escoger los casos relevantes”. La selección no es sinónimo de arbitrariedad. “Y en esta función de selección de casos, la finalidad de objetivar el recurso, cuando la relevancia del caso así lo exija, no ha de excluir –simultáneamente- la tutela subjetiva”⁴⁸².

⁴⁷⁸ PEREZ TREMPES: “*El recurso de amparo...*”. (2015). *Op.cit.* Pág. 27.

⁴⁷⁹ CARRILLO, M.: “La objetivación del recurso de amparo: una nueva vía de garantía jurisdiccional de los derechos”, en Carrillo, M. y Romboli, R.: *La reforma del recurso de amparo*. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid, 2012. Págs. 13-80.

⁴⁸⁰ CARRILLO, M.: “*La reforma de la jurisdicción constitucional:...*”. Pág. 115.

⁴⁸¹ CARRILLO, M.: “*La reforma de la jurisdicción constitucional:...*”. Pág. 117.

⁴⁸² CARRILLO, M. *Op. Cit.* Pág. 118.

Es HERNÁNDEZ RAMOS quien en nuestro país ha abordado el alcance de la *especial trascendencia constitucional*, basándose para ello en las experiencias estadounidense –*writ of certiorari*- y alemana –*Verfassungsbeschwerde*-. Para él, el nuevo trámite de admisión ha de estar presidido por la dimensión objetiva del recurso, en tal sentido, se apreciará ésta cuando:

1º) Se plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión que no hubiese sido aún objeto de desarrollo⁴⁸³. En tal sentido, una cuestión poseería especial trascendencia constitucional cuando *ni la Constitución, ni la jurisprudencia constitucional ofrecen respuesta a la cuestión constitucional planteada*⁴⁸⁴ o bien, existiendo esa respuesta, las circunstancias hayan cambiado por novedades *legislativas, jurisprudenciales, sociales, científicas, etc.*⁴⁸⁵; que hacen necesario un nuevo pronunciamiento respecto cuestión previamente dilucidada y que sea necesario para *completar o corregir la jurisprudencia anterior*⁴⁸⁶.

En definitiva, esta interpretación de la *especial trascendencia constitucional* se correspondería con lo que hemos denominado dimensión objetiva del recurso de amparo, en el sentido de que la admisión y conocimiento sobre el fondo supondrían una delimitación del contenido, objeto y límites de los derechos fundamentales o, si se quiere, con la admisión por tratarse de los denominados *casos difíciles*, en los que existen dudas en torno a la norma y/o a los elementos fácticos respecto a un caso concreto.

2º) En cuanto al carácter de *especialidad* respecto a la trascendencia constitucional añade a ésta el carácter *social o colectivo* del caso concreto⁴⁸⁷. Así pues la especialidad hará referencia a la trascendencia *política, social-colectiva, económica o jurídica* del caso concreto⁴⁸⁸.

En este sentido, éstas “trascendencias” harían referencia a la propia estabilidad jurídico-política del sistema que se encuadrarían en la propia

⁴⁸³ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Págs. 247 y ss.

⁴⁸⁴ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Pág. 253.

⁴⁸⁵ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Pág. 254.

⁴⁸⁶ *Ibídem*.

⁴⁸⁷ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Págs. 257 y ss.

⁴⁸⁸ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Págs. 260-271.

dimensión objetiva del recurso de amparo ya que, como vimos en el capítulo anterior, el Tribunal puede y debe entrar a conocer cuando se evidencie que la actividad o inactividad de los poderes públicos ponen en serio riesgo el sistema político, jurídico y social instaurado en nuestra norma fundamental. Si bien, desde nuestro punto de vista, esta última –la *trascendencia jurídica*– ya estaría inserta en el anterior apartado analizado.

Así, además, es manifestado por el propio HERNÁNDEZ RAMOS -en referencia a la obra de GRASSHOF-cuando, en relación al supuesto contenido en el art. 50.1. b) LOTC, esto es, la especial trascendencia para la *aplicación o general eficacia de la Constitución*, entiende que “[l]a protección de los derechos fundamentales individuales es realizada aquí en la medida en que ésta sea útil para la protección de una cultura de derechos fundamentales objetivos en el Legislador, en el Ejecutivo y en la Judicatura, esto es, en tanto en cuanto se proteja la dimensión objetiva de los derechos fundamentales”⁴⁸⁹. Se trataría de supuestos en los que se produzca una *negligencia general en la aplicación de las normas constitucionales por parte de los poderes públicos*⁴⁹⁰; cuando se provoque un *efecto disuasorio en la eficacia de los derechos fundamentales*⁴⁹¹; cuando produzca un *gran desconocimiento o burdo juicio erróneo de la protección garantizada por un derecho fundamental*⁴⁹² o estemos ante una *crasa violación de los principios del Estado de Derecho*⁴⁹³.

3º) Ahora bien, para HERNÁNDEZ RAMOS, la *tutela subjetiva* sí poseerá una *especial trascendencia constitucional*⁴⁹⁴ pues, para él, “la función subjetiva ha de ser tenida en cuenta su trámite de admisión”⁴⁹⁵, aunque no cualquier vulneración del derecho debe dar lugar a la admisión sino que ha de ser una

⁴⁸⁹ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Pág. 278.

⁴⁹⁰ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Págs. 284-285.

⁴⁹¹ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Pág. 285.

⁴⁹² HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Pág. 287-289.

⁴⁹³ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Pág. 289-291.

⁴⁹⁴ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Págs. 291 y ss.

⁴⁹⁵ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “*En nuevo trámite de admisión...*”. Pág. 292. Pues para él, el recurso de amparo está configurado como instrumento para tutelar de manera principal los derechos subjetivos de los ciudadanos (art. 53.2 CE, arts. 41.3 y 55.1 LOTC). En relación a dicha apreciación y a la facultad del Legislador de configurar al recurso de amparo, nos remitimos a lo ya analizado en el capítulo primero.

“vulneración del derecho de tal entidad, que debería estar justificada la admisión a trámite del recurso de amparo para no romper tan drásticamente con el papel de último bastión defensivo de los derechos fundamentales de los recurrentes frente a los poderes públicos”⁴⁹⁶.

No obstante, y a pesar de reconocer que el nuevo trámite de admisión sigue muy de cerca a la regulación contenida en el § 93.a.2) *BVerfGG*, “[l]a única diferencia entre ambas normas se encuentra en que la regla alemana prevé explícitamente la posibilidad de que el *BVerfG* admita a trámite *Verfassungsbeschwerden* para tutelar una grave lesión de los derechos fundamentales en su dimensión subjetiva, posibilidad que, sobre el papel, parece ignorar la nueva regulación española”⁴⁹⁷. Según nuestro parecer y como hemos visto, fue el Legislador quien ha querido eliminar de manera expresa la posibilidad de tutelar los derechos fundamentales desde un aspecto puramente subjetivo en el cual, claro está, también quedaría fuera esa posibilidad cuando se trate de tutelar *una grave lesión de los derechos fundamentales*, no es que se haya ignorado sino que se trata de la *voluntas legislatoris*.

Por tanto, y desde nuestro punto de vista, la tutela puramente *subjetiva* no se encuentra inserta en la nueva regulación dada a la admisión del amparo, la tutela subjetiva será una consecuencia derivada de la *dimensión objetiva del recurso de amparo*. Como vimos en el anterior capítulo, la tutela subjetiva como determinación de la *norma individual*, en relación al caso concreto, es decir, si la conducta está permitida o prohibida respecto o en relación a un concreto poder público u otro particular, se establecerá normalmente en el fallo de la sentencia, como derivación consecencial de la admisión del amparo en base a su *dimensión objetiva* o a su *especial trascendencia constitucional*, pero tal fin –la determinación de la *norma individual*– no será el objeto que, por sí mismo, dará lugar a la admisión sino que será necesaria la concurrencia de la *dimensión objetiva* o la *especial trascendencia constitucional* del recurso de amparo.

⁴⁹⁶ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Págs. 300-301 y 303.

⁴⁹⁷ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “En nuevo trámite de admisión...”. Pág. 247.

c) El recurso de amparo como mecanismo de tutela subjetiva de los derechos fundamentales.

Entre la doctrina existe una cierta alarma –ya no sólo en relación a aquellos que cuestionan la constitucionalidad de la reforma de la LOTC- sobre la pérdida o disminución de la tutela subjetiva de los derechos a través del recurso de amparo frente a la potenciación del carácter objetivo que se ha querido dar con la nueva regulación. Así hay quien apela a que el recurso de amparo era meramente subjetivo y que en la nueva regulación se está otorgando una importancia a la objetivación desconocida hasta ahora⁴⁹⁸.

La doctrina va a poner en valor el papel que ha cumplido el recurso de amparo durante todos estos años en materia de tutela subjetiva de los derechos fundamentales y, además, va a plantearse cómo se va a seguir amparando los derechos fundamentales a través del mismo.

Así lo manifiesta GARRORENA MORALES, para quien la regulación actual del amparo supone una *sustitución* del modelo, basado en una tutela frente a las lesiones subjetivas de los derechos “a otro modelo distinto”⁴⁹⁹. Para él, la palabra “amparo” no es gratuita: apunta a hacernos pensar intuitiva y necesariamente en la protección subjetiva de nuestros derechos constitucionales⁵⁰⁰. Que incluso conlleva un auténtico derecho de acceso a la justicia constitucional a través del amparo como garantía última reconocida en el Art. 162.1 b) CE, a los particulares para la tutela de los derechos fundamentales⁵⁰¹.

También, para HERMOSILLA MARTÍN, el recurso de amparo era meramente subjetivo, por ello, con los criterios establecidos en el art. 50 LOTC,

⁴⁹⁸ HERMOSILLA MARTÍN, R. “La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales; en especial, el Tribunal Constitucional. Particular problemática de la acreditación de la especial trascendencia del recurso de amparo como presupuesto para su admisión”. Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España. Tomo I. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Coord. Alfredo Montoya Melgar. Ed. Dykinson. Madrid. 2010. Pág. 234.

⁴⁹⁹ GARRORENA MORALES, A. “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional (...)”. Pág. 222

⁵⁰⁰ GARRORENA MORALES, A. Op. Cít. Pág. 224

⁵⁰¹ *Ibídem*.

se le está dotando al recurso de amparo de un nuevo enfoque. Se le está otorgando al carácter objetivo del recurso de una importancia que hasta este momento carecía⁵⁰². Por tanto propone, o para él hubiera sido deseable, la introducción del elemento consistente en la “especial gravedad de la lesión” como criterio de admisión del recurso de amparo en la nueva regulación. “Quizá hubiera sido deseable por parte del legislador alguna referencia al carácter subjetivo del amparo, como sucede en la Verfassungsbeschwerde alemana. Y ello por una razón elemental: la existencia de una grave lesión de un derecho individual de naturaleza constitucional, merecería ser considerada como una cuestión de especial trascendencia constitucional, aun en los casos en que no contribuya al avance del conocimiento o definición de los derechos fundamentales y, por tanto, carezca de interés constitucional objetivo”⁵⁰³.

En tal sentido, otros autores han puesto de manifiesto esta pérdida del ámbito de tutela subjetivo frente a la objetivación del amparo; proponiendo que el actual recurso de amparo “no debiera suponer la supresión de supuestos de patente lesión de derechos fundamentales (...), la referencia que el art. 50.1 LOTC contiene a la trascendencia constitucional del recurso (...) pudiera (y necesariamente debiera) dotar de suficiente cobertura a supuestos de patente, grosera e incontrovertible lesión de un derecho constitucional, so pena de deslegitimarse el TC como garante último de los derechos fundamentales. (...) [S]ólo en aquellos casos en que la lesión sea palmaria y sin margen de error podrá apreciarse que la decisión sobre el fondo deviene importante para su “real aplicación” y eficacia”⁵⁰⁴. Por tanto, incluso, se defiende la tutela subjetiva a través del recurso de amparo como mecanismo de sujeción de los poderes públicos a la Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional. Por ello, “[n]o se trata sólo de dictar Sentencias para hacer doctrina, se trata de que estimando recursos de amparo y reparando la situación subjetiva de los afectados, con nulidad de las resoluciones lesivas y medidas efectivas para la restitución del derecho, los Poderes Públicos seguirán entendiendo que no pueden actuar al margen de la Constitución y que el TC está siempre –sigue

⁵⁰² HERMOSILLA MARTÍN, R.: “La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales; en especial, el Tribunal Constitucional. (...)”. Pág. 234.

⁵⁰³ *Ibíd.*

⁵⁰⁴ NOGUEIRA GUASTAVINO, M. “La trascendencia constitucional de la demanda de amparo (...)” Pág. 198.

estando- en disposición de impedirlo. Hoy por hoy, ni en España ni en Europa cabe formular un cuestionamiento serio en contra de la plena integración del fin protector de los derechos fundamentales en el seno de la Jurisdicción Constitucional”⁵⁰⁵.

No obstante, existen posturas intermedias o en las que se defiende que el Tribunal Constitucional debería entrar a conocer del recurso de amparo respecto a la tutela subjetiva de los derechos en determinados supuestos. Así MONTAÑÉS PARDO entiende necesario que ha de tener cabida dentro del nuevo trámite de admisión del recurso de amparo pero cuando “la lesión del derecho fundamental se deriva un perjuicio grave para el recurrente de amparo, siempre y cuando se justifique la especial trascendencia constitucional, no por violación del derecho fundamental, que no sería suficiente, sino por el perjuicio derivado de la misma”⁵⁰⁶. También añade otros supuestos en los que, para él, cabría la admisión de demandas de amparo: “si se denunciara una violación crasa de la Constitución o un tratamiento frívolo de los derechos fundamentales por los poderes públicos, o si fuera necesario corregir actuaciones administrativas o jurisdiccionales, que tengan efecto disuasorio del ejercicio de los derechos fundamentales. Creo que en estos casos, sería factible acuñar nuevos criterios de trascendencia constitucional, o entender que su resolución, más allá del supuesto concreto, tiene una trascendencia jurídica general, aunque sólo fuera para reafirmar la vigencia de la doctrina constitucional”⁵⁰⁷.

Sin embargo para otros autores, a partir de ahora, con la nueva regulación, el amparo será un recurso excepcional. “De este modo, después de la reforma, la tutela de los derechos fundamentales queda atribuida, de modo general u ordinario a los jueces y tribunales (que es precisamente lo previsto en el art. 24 de la Constitución), y sólo de modo excepcional (en supuestos de especial trascendencia constitucional) al Tribunal Constitucional, cumpliéndole a éste administrar el ámbito de su propia actuación en la materia.”⁵⁰⁸. Es decir, se elimina por tanto la tutela puramente subjetiva de los derechos fundamentales,

⁵⁰⁵ CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El recurso de amparo que queremos. (...)”. Pág. 44.

⁵⁰⁶ MONTAÑÉS PARDO, M.A.: “La especial trascendencia constitucional (...)”. Pág. 36.

⁵⁰⁷ *Ibidem*.

⁵⁰⁸ ARAGÓN REYES, M.: “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. (...)”. Pág. 373.

entrando sólo a conocer de aquellos supuestos que posean una especial trascendencia constitucional. Por tanto, el papel que se le atribuye al Tribunal Constitucional a través de la objetivación del amparo será una “[a]ctuación que es de extraordinaria importancia, porque a través de ella el Tribunal garantiza el carácter vinculante de su jurisprudencia para los jueces y tribunales ordinarios así como su función, irrenunciable, de supremo intérprete de los derechos fundamentales (para definir y redefinir su alcance y contenido)”⁵⁰⁹.

En tal sentido manifiesta MARC CARRILLO que el recurso de amparo, con la nueva regulación, ha pasado del ámbito subjetivo al objetivo y tilda la reforma de “razonable” porque “los intereses subjetivos de los ciudadanos han de ser garantizados esencialmente por la jurisdicción ordinaria”, dedicándose el TC sólo a aquellos casos que sean “novedosos”, y ello es así, o debe ser así, gracias a “más de veinticinco años de jurisprudencia constitucional consolidada sobre buena parte de los derechos fundamentales”⁵¹⁰. “Con ello, no se trata de dejar de amparar sino de hacerlo de otra manera”⁵¹¹.

Pero quizás la interpretación más llamativa sea la realizada por la profesora GARCÍA COUSO. Para ella la objetivación del recurso de amparo no ha de llevar consigo una disminución de la protección en los derechos fundamentales, sino un desplazamiento de la tutela subjetiva ante otros órganos, bien a nivel interno, ante la jurisdicción ordinaria o bien, a nivel supra-nacional, ante el TEDH⁵¹². La actual regulación quedaría incardinada en dos mecanismos. La tutela subjetiva correspondería a la jurisdicción ordinaria y, en su caso, al TEDH y la protección objetiva de los derechos fundamentales correspondería al TC⁵¹³. Ahora bien, sólo el *correcto funcionamiento* de ambos mecanismos hará

⁵⁰⁹ *Ibídem*.

⁵¹⁰ CARRILLO, M.: “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis(...)”. Pág. 69.

⁵¹¹ CARRILLO, M. “*La reforma de la jurisdicción constitucional...*” *Op. Cit.* Pág. 70

⁵¹² GARCÍA COUSO. “*La reforma de la jurisdicción constitucional...*” *Op. Cit.* Pág. 156.

⁵¹³ En un sentido similar al apuntado, FABEIRO FIDALGO manifiesta que “Lo expuesto representa una redefinición de las funciones del TC y de las relaciones entre éste y el Poder Judicial en materia de tutela de los derechos fundamentales, quedando la ordinaria en manos de éste último y la extraordinaria, (en supuestos de ETC) en manos de aquél otro”. En FABEIRO FIDALGO, P.: “El nuevo recurso de amparo constitucional”. *Revista Vasca de Administración Pública*. Núm. 102. Mayo-Agosto 2015. Pág. 166.

que no se produzca una disminución en la protección y garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos⁵¹⁴.

Desde nuestro punto de vista, con la anterior regulación del recurso de amparo el mismo poseía ambos aspectos, se trataba de un mecanismo de protección frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales pero, al mismo tiempo, era un mecanismo de interpretación objetiva del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales. Por tanto, no se está creando algo nuevo, sino que se está potenciando una de las vertientes del mismo en detrimento de otra, que deberá ser necesariamente amparada a través de los órganos de la jurisdicción ordinaria. No sólo como primeros y principales garantes de los derechos fundamentales sino como aplicadores de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales.

Desde nuestro punto de vista, lo que nos resulta llamativo, es el cuestionamiento en torno a qué va a pasar con la tutela subjetiva de los derechos fundamentales y sobre qué ocurrirá si existe una vulneración *flagrante* o *patente* de los derechos fundamentales, si el recurso de amparo tiene carácter objetivo. Según nuestro parecer, desde el punto de vista de los partidarios de la plena tutela subjetiva a través del recurso de amparo, se percibe esa necesidad de tutela ante el Tribunal como el único mecanismo de defensa real y factible de los derechos fundamentales, frente al peligro que supone el estar perpetuamente “desamparados” en nuestros derechos por parte de los poderes públicos. Creemos que el punto de mira de esta corriente doctrinal parte de un análisis o un punto inicial de análisis erróneo. Lo impensable no es la eliminación del carácter puramente subjetivo del recurso de amparo, sino que lo impensable es que se trate con naturalidad que los poderes públicos puedan apartarse cuando plazcan de lo preceptuado en la Constitución o, que les es natural o consustancial, que puedan vulnerar a los ciudadanos sus derechos fundamentales. El problema, por tanto, no es la mayor o menor objetivación del recurso, el problema es que se siga manteniendo que en un Estado de Derecho sólo el Tribunal Constitucional será el defensor de los derechos fundamentales

⁵¹⁴ *Ibídem*.

frente a las injerencias, las violaciones de los derechos fundamentales y de la Constitución. Si estamos realmente en un Estado de Derecho, dichas violaciones no serán tan crasas y tan evidentes o, al menos, eso será así en un porcentaje bastante extraordinario. Pero si llegamos a la conclusión de que ese porcentaje no es tan ínfimo y que realmente existe un alto porcentaje de dichas violaciones, no deberíamos plantearnos si el recurso de amparo debe o no ser objetivo, sino que lo que deberíamos plantearnos es nuestro propio sistema constitucional, pues mantener que los poderes públicos pueden vulnerar la Constitución y los derechos fundamentales con total impunidad y que, sólo un órgano constitucional puede reparar aquello que ha sido vulnerado por el resto de Poderes del Estado, nos debe hacer plantearnos nuestro propio régimen.

En primer lugar, y según nuestro parecer, ambas vertientes –objetiva y subjetiva- han convivido desde la puesta en marcha del Tribunal Constitucional. A través de la tutela subjetiva ha ido elaborando una doctrina consolidada sobre los derechos fundamentales. Tales precedentes han de vincular a todos los poderes públicos y se hace necesario que los mismos no tengan que llegar a ser nuevamente revisados en supuestos sustancialmente idénticos. Por tanto, es a los poderes públicos y, más concretamente, al Poder Judicial a quien le corresponde amparar en sus derechos fundamentales a los ciudadanos y para ello tienen que apoyar sus resoluciones en la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales. Lo que no puede concebirse es que exista doctrina clara y consolidada sobre los derechos y, aun así, se puedan dictar resoluciones contrarias a la misma.

En segundo lugar, las sentencias dictadas en materia de amparo por el Tribunal Constitucional tienen un alcance muy limitado, mientras que el alcance que pueda darse desde el Poder Judicial, tales como medidas cautelares, ejecución de sentencias, etc., suponen una mayor garantía y efectividad en materia de restitución del derecho fundamental vulnerado.

En tercer lugar, el Tribunal Constitucional no impide que los Poderes Públicos actúen al margen de la Constitución. Cuando un asunto llega al Tribunal y es admitido por este, la lesión del derecho o su posible vulneración ya se ha

producido. No olvidemos que, en el mejor de los casos, cuando se produce una lesión de un derecho fundamental, ésta se producirá por el órgano jurisdiccional que conozca en segunda instancia pero que, en el peor, el recurrente de amparo habrá tenido que transitar por la odisea que va desde la vía administrativa y la posterior vía judicial y, en todo ese periplo, el Tribunal Constitucional –de manera directa- no habrá intervenido. Sin embargo, se admite que en todo ese trance los poderes públicos actúen al margen de la Constitución, actúen en contra de sus normas y principios y vulneren los derechos de los ciudadanos y, a pesar de ello, se clame al cielo porque la ley fortalezca o instaure la vertiente objetiva del recurso.

Por tanto, y desde nuestro punto de vista, percibimos positiva la objetivación del recurso de amparo. Aunque, obviamente, potenciando la tutela subjetiva ante los órganos de la jurisdicción ordinaria y mediante la efectiva aplicación de la doctrina consolidada en materia de derechos fundamentales. Pero sobre esto volveremos más adelante.

d) El plazo para interponer la demanda de amparo.

Hay autores que ponen de manifiesto que, frente a la necesaria carga argumental en torno a la especial trascendencia constitucional, como argumentación vinculada a la objetivación del amparo y destinada a “convencer” al Tribunal de que entre al fondo del asunto, ven insuficientes los plazos legales para la interposición de la demanda de amparo. Y proponen, en línea con el nuevo trámite de admisión, una ampliación del mismo.

Así, entre ellos, se ha manifestado FERNÁNDEZ FARRERES que el hecho de que se amplíe el plazo en diez días le resulta una medida “*raquítica*”; proponiendo la ampliación a tres o seis meses, en sintonía con el plazo previsto para la interposición de los amparos parlamentarios o para la interposición ante el TEDH⁵¹⁵.

⁵¹⁵ FERNÁNDEZ FARRERES. Op. Cit. Pág. 25

En tal sentido, también, se pronuncia BORRAJO INIESTA, para el que sería necesario una ampliación del plazo en tales términos. Pues el breve plazo hace que no se pueda analizar de manera exhaustiva la viabilidad de la interposición del recurso de amparo⁵¹⁶.

Según nuestro parecer, esta cuestión podría conllevar una disminución sustancial de los recursos al poderse reflexionar, no sólo sobre la necesidad de su interposición respecto a los fines de tutela perseguidos sino sobre todo respecto a la posibilidad en cuanto su admisión.

3º) El conocimiento del recurso de amparo por las Secciones del Tribunal.

La doctrina mayoritaria en relación a este aspecto de la reforma, es decir, respecto a la posibilidad de que sean las Secciones las que conozcan y resuelvan los recursos de amparo interpuestos, de manera unánime (o casi unánime) se han posicionado manifestando su discrepancia frente a tal decisión legislativa. Incluso se ha tachado la misma de “medida discutible”⁵¹⁷, “incoherente”⁵¹⁸ e incluso de difícil anclaje respecto a la objetivación del amparo establecido en el art. 50 de la Ley Orgánica. Atribuyéndole al TC la conciliación de dichos mandatos que incluso se llega a tildar de “cierta esquizofrenia del legislador”⁵¹⁹.

Así, para FERNANDEZ FARRERES, dicha incoherencia residiría, en primer lugar, que el recurso de amparo posea una especial trascendencia constitucional y que se difiera a las Secciones y que, en segundo lugar, que un asunto en el que ya exista doctrina consolidada pueda presentar una especial trascendencia constitucional en el sentido objetivo que se le ha pretendido dar, “parece claro que, en tal caso, el Tribunal no dispensará sino una efectiva tutela

⁵¹⁶ BORRAJO INIESTA, I.: “Mitos y realidades de la jurisdicción constitucional de amparo: hechos, derecho, pronunciamientos, admisión, costes”. *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*. Nº3, 2008. Págs. 188 y 197.

⁵¹⁷ FERNÁNDEZ FARRERES. *Op. Cit.* Pág. 26-27

⁵¹⁸ MARC CARRILLO. “*La reforma de la jurisdicción constitucional...*” *Op. Cit.* Pág. 70.

⁵¹⁹ MATIA PORTILLA_F. J. “La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo”. *REDC*. Nº 86, 2009. Madrid. Págs. 349-350.

subjetiva del derecho fundamental, en contradicción con esa pretendida función estrictamente objetiva del amparo constitucional”⁵²⁰.

En tal sentido también se manifiesta MARC CARRILLO, tachando la medida como incoherente pero, debido a la objetivación del amparo se plantea que lo razonable respecto a la nueva regulación es que “quien debe resolver los casos que presenten una especial trascendencia constitucional no puede ser otro que el Pleno del Tribunal. En él radica la plena autoridad de su jurisprudencia que ha de vincular a los jueces y tribunales ordinarios para la tutela de los derechos fundamentales”⁵²¹.

A pesar de que los autores se han manifestado de manera mayoritaria contra dicha opción legislativa, hay quien –en cierta manera- ha interpretado la misma de manera en que no se aprecie una verdadera contradicción entre la objetivación y el conocimiento por las Secciones del Tribunal. Pero sí, respecto a su aplicación práctica.

En tal sentido, nos encontramos con la opinión de GARRORENA MORALES, para él lo que ha hecho la reforma es “complicar ese esquema riguroso y claro con la introducción de un tercer nivel de muy dudosa legitimidad”, que produce una “desidentificación orgánica”⁵²²; calificándolo de “verdadero embrollo”⁵²³. La opción legislativa de que las Salas difieran a las Secciones le resulta “frontalmente contradictoria con la opción por la objetivación del recurso”⁵²⁴. Por tanto, “la lógica funcional a la que aboca la objetivación del recurso de amparo (...) debería haber sido justo la contraria: la atribución de la decisión del recurso de amparo al Pleno (ni siquiera a las Salas), a fin de que sea el colegio formado por los doce magistrados el que (...) haga intervenir su

⁵²⁰ FERNÁNDEZ FARRERES. Op. Cit. Pág. 27

⁵²¹ MARC CARRILLO. “*La reforma de la jurisdicción constitucional...*” Op. Cit. Pág. 70.

⁵²² GARRORENA MORALES, A.: “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica”. Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC). Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 242.

⁵²³ GARRORENA MORALES, A.: “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica(...)”. Pág. 244.

⁵²⁴ GARRORENA MORALES. “*La ley orgánica 6/2007...*” Op. Cit. Pág. 246

criterio en una resolución que ya no persigue la reparación del daño padecido por el particular sino la definición objetiva del sistema”⁵²⁵.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, para GARRORENA MORALES el legislador salvó dicha incoherencia con el inciso final de la “aplicación de doctrina consolidada”. Para él, cabe pensar que la Sección ya no se verá implicada en la delicada tarea de tener que sentar doctrina porque ya existe, pero “no parece que sea un supuesto ni siquiera imaginable en un procedimiento en el que la clave para que el recurso sea admitido es, precisamente, que tal doctrina no existe y que el Tribunal tiene que sentarla”⁵²⁶. Aún más si cabe, teniendo en cuenta que la “valoración de la especial trascendencia constitucional que concurre en cada caso concreto deban hacerlas las Secciones en el momento de la admisión”⁵²⁷. Aunque la razón de dicha aplicación de doctrina por parte de las Secciones es que “se haya pensado en ella para dar salida – (...)– al ingente atasco de amparos acumulados y ya admitidos antes de que la nueva legalidad entrara en vigor”. Por tanto sería una medida “transitoria”, lo que para él debería haber sido tratada en una norma de dicha condición⁵²⁸. Por ello no ve contradicción entre la objetivación y su conocimiento por las Secciones para los supuestos en que aquella doctrina no se esté respetando y sea necesario acentuarla⁵²⁹.

Pero para él, el problema residiría en su aplicación práctica: en primer lugar, porque el órgano que difiera tendrá también que estudiarlo; en segundo lugar debido a que en el caso de mera aplicación de doctrina tendrá que indicar cuál; en tercer lugar, porque, además, a las Salas se le une el conocimiento de las cuestiones de inconstitucionalidad y en cuarto lugar y la más importante, que “el peligro de la aparición de una jurisprudencia contradictoria se acreciente”⁵³⁰.

Compartimos la opinión mayoritaria relativa a que el conocimiento por parte de las Secciones supone una cierta incoherencia legislativa en relación con

⁵²⁵ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Pág. 247.

⁵²⁶ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Pág. 248.

⁵²⁷ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Págs. 248-249.

⁵²⁸ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Pág. 249.

⁵²⁹ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Pág. 250.

⁵³⁰ GARRORENA MORALES. “La ley orgánica 6/2007...”. *Op. Cit.* Pág. 251-252.

la especial trascendencia que ha de poseer el recurso. Así como el hecho de que en base a dicha dimensión objetiva, el Tribunal debiera conocer tan sólo de una decena o veintena de recursos de amparo al año y que, por tanto, tal volumen es perfectamente asumible por el Pleno del Tribunal. No debiera, por tanto, conocer de los mismos no ya las Secciones, ni tan siquiera las Salas. No obstante, y como tendremos ocasión de ver más adelante, el Tribunal *de facto* ha dejado sin efecto la posibilidad de que sean las Secciones quienes conozcan de los recursos, ya que la práctica ha puesto de manifiesto que tal medida acarrearía más inconvenientes que ventajas.

4º) El incidente de nulidad de actuaciones.

Respecto a la nueva regulación del *incidente de nulidad de actuaciones* tal y como vimos en relación a su nueva formulación, ha suscitado multitud de opiniones sobre su efectividad para tutelar las posibles lesiones de derechos fundamentales en sede de jurisdicción ordinaria.

La nueva regulación dada al art. 241.1 de la LOPJ, ha sido tildada por FERNANDEZ FARRERES de medida “*perturbadora*” e “*inapropiada*”⁵³¹, aunque ese es el camino que hay que seguir, es decir, reforzar los mecanismos en sede de jurisdicción ordinaria para que no lleguen los amparos. FERNANDEZ FARRERES entiende que tal regulación distorsiona su tradicional carácter de remedio contra las infracciones procesales⁵³². Por tanto, no refuerza de manera eficaz el carácter subsidiario del recurso, ni hará que disminuya el número de demandas de amparo⁵³³.

También, para MARC CARRILLO, esta es la línea que se debe seguir, es decir, la de reforzar la posición de la jurisdicción ordinaria como garante de los derechos fundamentales⁵³⁴, y ve en dicho incidente la posibilidad de que la

⁵³¹ FERNANDEZ FARRERES. Op.cit Pág. 28

⁵³² *Ibidem*.

⁵³³ FERNÁNDEZ FARRERES, G. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional (...)”. Pág. 29.

⁵³⁴ MARC CARRILLO. “La reforma de la jurisdicción constitucional...” Op. Cit. Pág. 122.

jurisdicción ordinaria asuma la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre todo cuando se trata de líneas interpretativas consolidadas⁵³⁵.

Para el profesor ARAGÓN REYES, la actual regulación del art. 241 LOPJ, se establece como un “remedio” necesario para agotar la vía judicial previa al recurso de amparo. Se trata de un nuevo mecanismo que dará la oportunidad, una oportunidad última, a la jurisdicción ordinaria “para subsanar vulneraciones de esos derechos producidos por la misma resolución judicial que haya puesto fin al proceso”⁵³⁶. Las críticas hacia el mismo versan sobre su horizontalidad, entendiendo que hubiese sido más eficaz un remedio de carácter vertical, aunque ello conllevaría una mayor complejidad en el proceso y, además, el consiguiente alargamiento del procedimiento judicial. Por tanto, abogará por su tramitación horizontal pero con la intervención preceptiva de la fiscalía⁵³⁷.

También hay quien estima, como RODRÍGUEZ BEREIJO, que la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones sólo va a suponer la necesidad de cumplimentar un nuevo requisito previo a la interposición del recurso de amparo, por tanto, lo único que hará será “aplazar o diferir, dilatando más que reduciendo, la entrada de asuntos de amparo al Tribunal Constitucional y alargando, acaso innecesariamente, la vía judicial”⁵³⁸. Incluso, a pesar del intento de reforzar la tutela de los derechos ante la jurisdicción ordinaria, se siguen poniendo de manifiesto los recelos hacia la misma, así se aprecia que el incidente de nulidad de actuaciones se vislumbrará como “una nueva fuente de vulneraciones constitucionales”⁵³⁹.

En tal sentido también, como una oportunidad perdida por el legislador de acometer una verdadera reforma, que permita una verdadera tutela ante la jurisdicción ordinaria se ha manifestado CABAÑAS GARCÍA, medidas que conllevaría, por ejemplo, la catalogación de las resoluciones recurribles en

⁵³⁵ MARC CARRILLO. *“La reforma de la jurisdicción constitucional...”* Op. Cit. Pág. 125.

⁵³⁶ ARAGÓN REYES. Op.cit Pág. 374

⁵³⁷ *Ibidem*.

⁵³⁸ RODRÍGUEZ BEREIJO, A.: “La reforma del recurso de amparo”. Revista Española de Derecho Financiero. 151/Julio-Septiembre-2011. Pág. 707.

⁵³⁹ *Ibidem*.

amparo o las reformas orgánicas que permitan la creación de Salas ad hoc que refuercen la tutela preferente y sumaria⁵⁴⁰.

Aunque la principal crítica al mismo versa sobre que ha de ser el órgano judicial que supuestamente cometió la vulneración del derecho fundamental, el mismo que resuelva el *incidente de nulidad de actuaciones*. Se aboga por la supresión de la limitación a casos que no ha podido ser planteada la lesión de derecho a través de cualquier otro instrumento procesal y también, se estima necesario, modificar su carácter no devolutivo⁵⁴¹ y la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal en su tramitación⁵⁴².

⁵⁴⁰ CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El recurso de amparo que queremos....”. Págs. 51-52.

⁵⁴¹ CARRASCO DURÁN, M.: “La tutela de los derechos fundamentales a través del incidente de nulidad de actuaciones.” REDC. Año nº 32, Nº 95, 2012. Págs. 86 a 88.

Véase también GONZÁLEZ ALONSO, A: “La protección de los derechos fundamentales del artículo 24.1 de la Constitución tras la «objetivación» del recurso de amparo”. *CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, Nº. 139-140, 2012, págs. 59-106.

⁵⁴² ARAGÓN REYES, M.: “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. (...)”. Pág. 377.

CAPÍTULO IV: LA LABOR DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL NUEVO TRÁMITE DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE AMPARO EFECTUADO POR LA L.O. 6/2007, DE 24 DE MAYO.

El profesor ARAGÓN REYES sintetiza los calificativos que la doctrina ha vertido sobre la reforma efectuada por la LO 6/2007, de 24 de mayo que, para él como para la mayoría de la doctrina, “*ha transformado*” el recurso de amparo tal y como era conocido hasta ahora, suponiendo no una transformación, sino en el fondo, estamos ante un “*nuevo modelo*” de amparo⁵⁴³; introduciéndose una serie de exigencias al demandante de amparo que determinarán el nuevo sistema de admisión basado en la *especial trascendencia constitucional* del recurso.

La *especial trascendencia constitucional*, como vimos al analizar los Arts. 49 y 50 LOTC, se trata de una exigencia material o de fondo, de carácter eminentemente *objetivo*, frente al anterior requisito sustantivo de corte predominantemente *subjetivo*, que era la existencia de una lesión efectiva del derecho fundamental, alegada en la demanda de amparo, sin la cual el recurso sería rechazado por el Alto Tribunal al entenderse que el mismo *carecía de contenido constitucional que justificase una decisión sobre el fondo*.

Efectivamente, estamos ante un cambio de modelo, como se ha argumentado por algunos autores y así se manifiesta en la Exposición de Motivos de la LOTC, porque supone un cambio de sentido en la admisión desde dos puntos de vista: por un lado, la admisión como cambio de un sentido negativo a otro positivo y , por otro, con la anterior regulación, el demandante debía de exponer de manera clara y precisa en su demanda la vulneración o lesión del derecho fundamental alegado y acreditar su existencia. Con la actual regulación, el elemento sustantivo que ha de ser acreditado por el recurrente es el alcance objetivo, para interpretación o efectividad de los derechos fundamentales que posee su demanda, que hará necesario que el Tribunal entre al fondo del asunto puesto que la misma posee una “*especial trascendencia constitucional*”. Aunque

⁵⁴³ ARAGÓN REYES, M. Pág. 371

ambos elementos han de estar presentes en la demanda, -la justificación o acreditación suficiente de la lesión de los derechos fundamentales y el actual carácter objetivo que ha de desprenderse de la demanda-, y la apreciación que sobre esta última ha de hacer el Tribunal pues, según hemos visto hasta ahora, ambos requisitos se entrelazan y han de estar presentes en la demanda de amparo.

Llegados a este punto, debemos plantearnos, en relación al momento procesal de la admisión del recurso, si ambos requisitos sustantivos son o no necesarios y complementarios o si participan en condiciones de igualdad como elementos que han de concurrir para que el Tribunal entienda admisible el recurso interpuesto.

Por otro lado, nos cuestionamos si existe una vinculación a las alegaciones del demandante sobre la especial trascendencia constitucional, si puede el Tribunal apreciar una distinta de la alegada o que le conduzca a la existencia de una especial trascendencia por motivos diferentes de los expresados por el recurrente. También cabe cuestionarse si el Tribunal viene obligado a argumentar cuál o cuáles son las causas que han motivado la admisión, aun apartándose de las expresas argumentaciones del recurrente. También, cabe plantearse si, una vez admitida a trámite la demanda, el Tribunal debe hacer, siempre y en todo caso, visibles los motivos que le han llevado a tal decisión, es decir, manifestar las causas de porqué el asunto al que se va a entrar al fondo posee tal *especial trascendencia*. Es decir, la cuestión subsiguiente es saber cuál es la carga que pesa, no sólo respecto al demandante de amparo, sino también la que pesa sobre el Tribunal Constitucional.

A partir de ahora nos centraremos en la jurisprudencia elaborada por el Tribunal a lo largo de estos años, con el fin de analizar cuál es la interpretación que sobre estos preceptos ha sido realizada e intentar adentrarnos en la aplicación práctica y su cumplimiento por quienes ejercitan las acciones de amparo.

I.- LA JURISPRUDENCIA INICIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL NUEVO TRÁMITE DE ADMISIÓN.

1º) Los primeros autos de inadmisión y la unificación de criterios por parte de las Salas Primera y Segunda del Tribunal.

No fue hasta transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la nueva regulación, cuando el Tribunal se pronunció por primera vez sobre los requisitos de admisibilidad que debía contener la demanda de amparo⁵⁴⁴.

En concreto fue la Sala Primera⁵⁴⁵ la que inició la doctrina sobre las nuevas exigencias impuestas por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, a la que le siguieron sendos autos de la Sala Segunda del Tribunal⁵⁴⁶.

a) La carga exigida al demandante de amparo en relación a la especial trascendencia constitucional.

a. 1) *Es una carga procesal*, distinta a la argumentación respecto a la vulneración del derecho fundamental⁵⁴⁷.

“[L]a carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo es algo distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental. La argumentación sobre la concurrencia de la lesión de un derecho fundamental por la resolución impugnada es un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo y a esa exigencia se refiere el inciso inicial del art. 49.1 LOTC cuando establece, como contenido de la demanda, la exposición clara y concisa de los hechos que la fundamenten y la cita de los preceptos constitucionales que se estimen infringidos, fijando con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado”⁵⁴⁸.

⁵⁴⁴ ATC 188/2008, de 21 de julio, AATC 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre.

⁵⁴⁵ ATC 188/2008, de 21 de julio.

⁵⁴⁶ AATC 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre.

⁵⁴⁷ AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3º y 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 3º.

⁵⁴⁸ ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2º

a. II) *Es inexcusable*⁵⁴⁹

Al igual que la exigencia de la argumentación requerida en relación a la lesión del derecho fundamental, asimismo, el Tribunal estima que la carga que recae sobre el recurrente, consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, es igualmente un “*presupuesto inexcusable*”. “*Es una inexcusable exigencia argumental para el recurrente*”.

a.III) *Es insubsanable*⁵⁵⁰

Por tanto, no cabe la apertura de plazo de subsanación, ex art. 49.4 LOTC, pues según el Tribunal Constitucional, se entiende que tal posibilidad de subsanación se refiere a requisitos formales y no de orden sustantivo o materiales que “[i]mpiden considerar que este requisito sea de naturaleza subsanable”, pues “no cabe considerar que representen meros formalismos (...) vinculada con un requisito de orden sustantivo cuyo cabal cumplimiento se conecta con la mejor ordenación, en su conjunto, del recurso de amparo tal como resulta de la reforma introducida por Ley Orgánica 6/2007, no cabe admitir que el incumplimiento de esta carga en la demanda de amparo constituya un defecto subsanable, no siendo, en consecuencia, procedente la apertura del trámite de subsanación previsto en el art. 49.4 LOTC (ni tampoco, obviamente, la subsanación por propia iniciativa del recurrente).”⁵⁵¹

a. IV) No se trata de una mera formalidad procesal o <<cláusula de estilo>>.⁵⁵²

Para cumplir dicho requisito argumental de la especial trascendencia constitucional “no basta con la mención en la demanda de amparo de esta

⁵⁴⁹ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 3º.

⁵⁵⁰ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 3º.; ATC 262/2009, de 11 de noviembre.

⁵⁵¹ Como podemos comprobar, esta concreta cuestión fue presentada como enmienda tanto en el Congreso como en el Senado, la cual no se recogió finalmente en el texto definitivamente aprobado. Por tanto, jurisprudencialmente, el Tribunal ha cerrado la posibilidad de subsanación que, en realidad, no fue prevista por el propio Legislador.

⁵⁵² ATC 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2º y 4º. En tal sentido también, véase ATC 165/2009, de 25 de mayo.

expresión legal”. Es necesario, por tanto, “la mención en el escrito de demanda del requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso interpuesto” y la argumentación basada “en cualquiera de los tres ámbitos señalados en la ley (importancia de una Sentencia de fondo que pudiera dictarse por este Tribunal en el caso, para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución: art. 50.1.b LOTC)”⁵⁵³.

a. V) Es necesaria una mención expresa⁵⁵⁴.

A pesar de ser un requisito sustantivo o de fondo es necesario que se mencione de manera expresa en el escrito de demanda. “Constreñida la pretensión del recurrente en amparo, pues, (...), aparece de inmediato sin embargo un obstáculo formal insalvable, que no es otro que la falta absoluta de mención en el escrito de demanda del requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso interpuesto (art. 49.1 in fine LOTC), en cualquiera de los tres ámbitos señalados en la ley (importancia de una Sentencia de fondo que pudiera dictarse por este Tribunal en el caso, para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución: art. 50.1.b LOTC), ninguno de los cuales ha sido argumentado.

Ello representa, tal como se ha dicho, un vicio insubsanable que trae consigo inexorablemente la inadmisión del recurso interpuesto (art. 50.1.a LOTC), impidiendo así entrar en el estudio preliminar a efectos de admisión del recurso, no solo de la concurrencia material -y ya no sólo formal- del mencionado requisito de la especial trascendencia, sino del propio contenido constitucional de la queja deducida, una vez rechazada ya dicha admisión, insistimos, en virtud de la falta de aquel requisito”⁵⁵⁵.

a. VI) Consiste en una carga de argumentación de naturaleza sustantiva⁵⁵⁶

⁵⁵³ *Ibídem*.

⁵⁵⁴ ATC 289/2008, de 22 de septiembre. F.J. 4º. (Sala Segunda)

⁵⁵⁵ *Ibídem*.

⁵⁵⁶ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 1º y 2º.

Que recae sobre el recurrente “en orden a justificar esa especial trascendencia constitucional que, a su juicio, reviste el recurso de amparo que ha interpuesto”; debiendo “alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución”

Asimismo, el hecho de no hacer expresa mención a la especial trascendencia constitucional conlleva su inadmisión *a limine*. “Sucedo, sin embargo, que si la providencia impugnada no admitió el recurso de amparo no fue por apreciar el defecto insubsanable (AATC 289/2008 y 290/2008, ambos de 22 de septiembre) consistente en la falta de mención en el escrito de demanda de la especial trascendencia constitucional del recurso. Si éste no resultó admitido fue porque la Sección apreció que no concurría en el caso la especial trascendencia constitucional que requiere el art. 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica para hacer viable la admisión”⁵⁵⁷. Aunque el Tribunal no entra en el contenido material relativo a la carga argumental de la especial trascendencia constitucional, haciendo solo referencia al artículo 50.1 b) LOTC⁵⁵⁸.

b) La labor del Tribunal en orden a apreciar el cumplimiento de la especial trascendencia constitucional.

b. l) Ha de proporcionar al Tribunal los elementos necesarios para su admisión⁵⁵⁹.

En primer lugar, el Tribunal habrá de comprobar que el recurso de amparo interpuesto cumple con los requisitos procesales que se derivan de los artículos 41 a 46 y 49 LOTC.

Es decir, que la demanda verse sobre alguno de los derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, que la lesión tenga su origen en una disposición, acto, omisión, etc., emanada de los poderes públicos

⁵⁵⁷ ATC 6/2009, de 12 de enero. F.J. Único. (Sección Cuarta).

⁵⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁵⁹ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 1º

y que se haya cumplido debidamente con los requisitos de la subsidiariedad. Así como que, en la demanda, se disocie debidamente, por un lado, la lesión o lesiones que se aducen y el amparo que se solicita en orden a restablecer el derecho fundamental vulnerado y, por otro, que se determine de manera expresa la *especial trascendencia constitucional* del recurso de amparo que se interpone, cumpliéndose para ello en la forma y modo que hemos visto anteriormente.

b. II) No cabe reconstrucción de oficio por el Tribunal⁵⁶⁰

Reconstrucción de oficio que en palabras del propio Tribunal le estaría “*vedada*”⁵⁶¹, con lo cual es el propio recurrente en amparo el que debe “*aportar los elementos necesarios para la formulación del juicio que corresponde hacer a este Tribunal*”⁵⁶², por lo que “*no podrá suplir los razonamientos de las partes*”⁵⁶³. Por tanto, el Tribunal no podrá añadir razonamientos fácticos, ni fundamentos jurídicos que suplan, complementen o completen los alegados por las partes.

b. III) La apreciación material de la *especial trascendencia constitucional*.

El Tribunal Constitucional deberá apreciar el cumplimiento de la carga procesal de parte, en base alguno de los tres supuestos contemplados en su propia Ley Orgánica, tal y como determina el Art. 50.1. b), donde se establece que el Tribunal *apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*⁵⁶⁴.

b. IV) Es al Tribunal Constitucional a quien, en última instancia, le corresponde apreciar el efectivo cumplimiento.⁵⁶⁵

⁵⁶⁰ ATC 188/2008, FJ 2º; ATC 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 3º y 4º.

⁵⁶¹ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 3º

⁵⁶² ATC 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 3º.

⁵⁶³ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 3º

⁵⁶⁴ ATC 290/2008, de 22 de septiembre.

⁵⁶⁵ ATC 188/2008, de 21 de julio. FJ 1º y ATC 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2º.

Pues recae sobre el Tribunal el peso de comprobar que el recurrente ha cumplido con los requisitos que sobre él recaen. Por un lado, la Sala o Sección deberá comprobar que la demanda cumple con las exigencias impuestas en los artículos 41 a 46 y 49 de la LOTC y, por otro, que la concreta alegación efectuada por el demandante en orden a acreditar la *especial trascendencia* de su recurso, cumple con la efectiva carga impuesta al Tribunal de conocer sobre el asunto pues el mismo posee una “*importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*”.

De la anterior jurisprudencia podemos extraer que el elemento trascendental que compone el nuevo trámite es el consistente en la *carga de argumentación*. Hay que hacer una distinción entre, o más bien, una disociación entre la argumentación de la especial trascendencia constitucional como *elemento formal*⁵⁶⁶, por un lado, y como *elemento material*⁵⁶⁷, por otro.

Es decir, entendemos que, la alegación de la especial trascendencia constitucional, como elemento formal, hace referencia a la alegación expresa y manifiesta, dentro del *corpus* de la demanda de amparo, como requisito necesario y previo para su admisión⁵⁶⁸. La demanda de amparo ha de contener un apartado específico⁵⁶⁹, donde el recurrente alegue porqué su demanda de amparo posee esa cualidad merecedora de una resolución mediante sentencia por parte del Tribunal. Dicho requisito entendemos que -o así creemos- no viene expresamente establecido en la LOTC⁵⁷⁰ aunque, compartimos la opinión⁵⁷¹ de que con ello se facilita el trabajo del Tribunal, pudiendo de manera más rápida y efectiva determinar si la demanda, en primer lugar, cumple con la exigencia y,

⁵⁶⁶ ATC 90/2009, de 18 de marzo. FJ Único.

⁵⁶⁷ ATC 90/2009, de 18 de marzo. FJ Único.

⁵⁶⁸ ATC 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 4º.

⁵⁶⁹ *Ibídem*.

⁵⁷⁰ Sobre la determinación de tal requisito en la Ley orgánica, véase el Voto Particular discrepante del Magistrado don Eugeni Gay Montalvo suscrito con ocasión de la inadmisión de un recurso de amparo por no justificar dicha especial trascendencia constitucional en el Auto 289/2008, de 22 de septiembre. En el mismo el Magistrado tacha dicha invocación formal como “un formalismo enervante”, haciéndose eco de la jurisprudencia anterior del TC; añadiendo que dicho requisito “además de no estar expresamente previsto en la Ley, devendría contradictoria a la esencia del recurso de amparo pues el interés constitucional de los asuntos no se puede objetivar”.

⁵⁷¹ En tal sentido es manifestado por Hernández Ramos en su obra *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*.

en segundo lugar, si la demanda cumple con la carga argumental consistente en la especial trascendencia constitucional.

Por otro lado, nos encontramos con el *elemento material*, como argumentación, es decir, el contenido sustantivo que ha de trasladarse en la demanda de amparo, a los efectos de que pueda apreciarse por el Tribunal que dicha demanda posee la especial trascendencia constitucional que justifique una decisión sobre el fondo; bien para la *interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*.

El incumplimiento de tal carga o requisito argumental conlleva la inadmisión *a limine* de la demanda de amparo⁵⁷². Por tanto, le corresponde al demandante, no sólo acreditar que se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales alegados en la demanda, sino que, además, deberá argumentar *formal y materialmente* que su demanda posee una especial trascendencia constitucional⁵⁷³. El hecho de que la demanda no contenga dicha *argumentación formal* deviene en "*obstáculo formal insalvable*"⁵⁷⁴. Quiere decirse que la falta de un apartado expreso dedicado a la justificación de la especial trascendencia constitucional, conlleva la inadmisión del recurso y, por tanto, el Tribunal no entrará a conocer del asunto. No se pronunciará sobre si de la demanda *in totum* puede desprenderse la existencia de una especial trascendencia constitucional en sentido material y, mucho menos, sobre si ha existido o no una lesión efectiva en el derecho fundamental o libertad pública alegada por el recurrente en amparo.

⁵⁷² AATC 289/2008, de 22 de septiembre. FJ 3º y 290/2008, de 22 de septiembre. FJ 4º.

⁵⁷³ En tal sentido es necesario hacer mención a la STC 17/2011, de 28 de febrero. FJ 2º; la cual establece que "Ciertamente, la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha reformado la configuración del proceso constitucional de amparo mediante la introducción en el art. 50.1 b) LOTC de una nueva condición de admisibilidad: la necesidad de que el recurso tenga una "especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales". A lo cual se añade la incorporación de un último inciso en el art. 49.1 LOTC, estableciéndose que "en todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso".

⁵⁷⁴ ATC 290/2008, de 22 de septiembre. FJ 4º.

En este momento inicial en el que nos encontramos, se hace patente la existencia de dos regulaciones, la anterior regulación del recurso de amparo que era aplicable a aquellas demandas interpuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la L.O. 6/2007, de 24 de mayor y, por otro lado, la regulación actual que era ya aplicable a las demandas interpuestas una vez entró en vigor. Con lo cual, de manera paralela a esta jurisprudencia que hemos visto, el Tribunal tuvo que pronunciarse sobre los nuevos requisitos de admisión para negar la aplicabilidad de los mismos, ya que el recurso de amparo que se estaba dilucidando se había interpuesto con anterioridad a su entrada en vigor, por tanto, no le era de aplicación la nueva regulación contenida en los Arts. 49 y 50 LOTC. Así encontramos ante supuestos en los que la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional⁵⁷⁵, como óbice procesal es alegado por quien había sido parte en el procedimiento judicial previo⁵⁷⁶, tiene que ser negada tal exigencia procesal por el Tribunal Constitucional⁵⁷⁷.

2º) La determinación por el Pleno del Tribunal de los supuestos materiales en orden a apreciar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. La STC 155/2009, de 25 de junio.

Ahora bien, a pesar de inadmitir numerosos recursos de amparo por la inexistencia de una especial trascendencia constitucional⁵⁷⁸, tal concepto jurídico indeterminado, en su vertiente *material*, no fue interpretado por el Tribunal Constitucional hasta transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la L.O. 6/2007. Tal delimitación se produjo a través de la STC 155/2009, de 25 de junio; la cual pasaremos a analizar seguidamente.

⁵⁷⁵ En tal sentido véanse las SSTC 106/2008, de 15 de septiembre y 146/2008, de 10 de noviembre, cuyas demandas de amparo se interpusieron el 30 de noviembre de 2006 y 14 de junio de 2006, respectivamente. Y las SSTC 48/2009, de 23 de febrero y 70/2008, de 23 de marzo; demanda registrada el 9 de febrero de 2006 y el 4 de mayo de 2004, respectivamente. Todas dictadas por la Sala Primera del Tribunal.

⁵⁷⁶ *Ibidem*.

⁵⁷⁷ STC 106/2008, de 15 de septiembre. (Sala Primera) (F.J. 2º). En el mismo sentido se expresa el Tribunal en la STC 146/2008, de 10 de noviembre (F.J. 2º).

⁵⁷⁸ AATC 6/2009, de 12 de enero (Sección Cuarta); 61/2009, de 23 de febrero (Sección Tercera); 62/2009, de 23 de febrero (Sección Tercera); 80/2009, de 9 de marzo (Sala Segunda); 149/2009, de 14 de mayo (Sección Segunda); 150/2009, de 14 de mayo (Sección Segunda); 151/2009, de 14 de mayo (Sección Segunda); 164/2009, de 22 de mayo (Sección Segunda); 166/2009, de 27 de mayo (Sección Primera); 179/2009, de 10 de junio (Sección Primera); 182/2009, de 15 de junio (Sección Tercera); 183/2009, de 15 de junio (Sección Tercera); 187/2009, de 22 de junio (Sección Tercera) y ATC 218/2009, de 13 de julio (Sección Cuarta).

No obstante, a pesar de que es en dicha resolución donde el Tribunal en Pleno realiza por primera vez un análisis exhaustivo sobre el contenido *material* para apreciar la existencia de una *especial trascendencia constitucional*, de manera previa, las Salas del Tribunal van a admitir y a conocer del fondo y a resolver mediante Sentencia determinados recursos de amparo que, posteriormente, en la STC 155/2009, de 25 de junio, tendrán su reflejo y vendrán recogidos como supuestos en los que el Tribunal podrá entrar al fondo del asunto por apreciarse la existencia de la *especial trascendencia*. Esos primeros recursos de amparo que cumplirán con dichos requisitos impuestos por el art. 49.1 LOTC y estimados por las Salas en base al art. 50.1 LOTC, versarán sobre la ilegalización de partidos o agrupaciones electorales por ser continuadoras o sucesoras de otros previamente ilegalizados⁵⁷⁹.

En las referenciadas resoluciones se expresa –con mayor o menor detalle- la cumplimentación de la carga procesal, manifestándose no sólo por la relevancia del derecho fundamental en juego⁵⁸⁰, sino también por entender que sobre determinados aspectos no existe jurisprudencia del Tribunal⁵⁸¹. Aunque sólo en una de ellas el Tribunal otorgó el amparo, siendo el caso de la coalición electoral “Iniciativa Internacionalista-La solidaridad entre los pueblos” y desestimando o denegando el amparo a las demás recurrentes^{582, 583}.

Por otro lado, también hemos de hacer referencia a una sentencia que, a pesar de no serle de aplicación el nuevo trámite de admisión⁵⁸⁴, el Tribunal aprecia que, si dicho requisito le fuera de aplicación, sería admisible porque se trataría de un asunto sobre el que no habría doctrina y, por tanto, en base a ello, de la demanda se desprendería la especial trascendencia constitucional en base

⁵⁷⁹ SSTC 31/2009, de 29 de marzo (Sala 2ª); 43/2009, de 12 de febrero (Sala 1ª); 44/2009, de 12 de febrero (Sala 1ª) y 126/2009, de 21 de mayo (Sala 1ª).

⁵⁸⁰ STC 31/2009, de 29 de marzo (Antecedente 2º). Asimismo, STC 44/2009, de 12 de febrero, (Antecedente 4º).

⁵⁸¹ En tal sentido, se expresa la STC 31/2009, de 29 de marzo, (Antecedente 3º).

⁵⁸² SSTC 31/2009, de 29 de marzo; 43/2009, de 12 de febrero; 44/2009, de 12 de febrero (Fallo). En las tres Sentencias se confirma la ilegalización llevada a cabo por la Sala del 61 del Tribunal Supremo, confirmándose la declaración de ilegalidad y disolución de EAE/ANV, Askatasuna y Arabako Demokrazia 3.000.000- D3M, D3M y Demokrazia 3 Milioi-D3M, respectivamente.

⁵⁸³ También, la STC 26/2014, de 13 de febrero de 2014. (Antecedente 3º)

⁵⁸⁴ STC 70/2009, de 23 de marzo. (Sala Primera).

a ese supuesto⁵⁸⁵. Supuesto *material* este que, posteriormente, se recogería en la STC 155/2009, de 25 de junio.

Como decíamos, no fue hasta más de dos años después de la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica cuando se produjo una primera sentencia que ha venido a desglosar, desarrollar y arrojar cierta luz a lo preceptuado en el artículo 50 LOTC, sobre el contenido y alcance material de dicho concepto jurídico indeterminado: la especial trascendencia constitucional y los supuestos *materiales* que conllevaría: la *interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*.

En la sentencia que se analiza, además de referenciar las concretas vulneraciones alegadas por el demandante⁵⁸⁶, el Tribunal dedica una breve reflexión acerca de la alegación efectuada en la demanda en orden a justificar la especial trascendencia de su recurso dentro de la relación fáctica de la Sentencia.

“La demanda dedica un segundo otrosí a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, donde se afirma que la misma radica en que por el Tribunal Constitucional se fije doctrina sobre los siguientes extremos: a) Si la imposición de condena de diferente naturaleza a la interesada por la única acusación actuante, aun a pesar de derivar de la literalidad del tipo penal, implica una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneración del principio acusatorio; y b) Si la imposición de una condena por encima de los mínimos legales, en caso de falta de motivación de las razones de tal individualización punitiva, implica la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación.”⁵⁸⁷

Así el Tribunal en Pleno⁵⁸⁸ estima que, efectivamente, el recurrente a satisfecho la carga impuesta por la LOTC –tal y como determina el art. 49.1 *in*

⁵⁸⁵ STC 70/2009, de 23 de marzo. (Sala Primera). (F.J. 1º)

⁵⁸⁶ STC 155/2009, de 25 de junio (Antecedente 4º).

⁵⁸⁷ STC 155/2009, de 25 de junio (Antecedente 4º).

⁵⁸⁸ Fue la Sala Segunda del Tribunal la que admitió la demanda mediante providencia de fecha 27 de abril de 2009 (Antecedente 6º) pero el Pleno recabó para sí el conocimiento del recurso

fine LOTC- pero, lo que es más relevante, así lo estima el Tribunal afirmando que está justificado que entre a conocer del asunto y expone las razones que han llevado a dicha conclusión.

“En el caso que ahora nos ocupa el Tribunal ha entendido que concurre el requisito de la especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC], porque, como a continuación se pone de manifiesto, le permite aclarar e incluso perfilar, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, la doctrina constitucional sobre la exigencia de congruencia entre la acusación y el fallo en el extremo referido a la pena a imponer, en cuanto manifestación del principio acusatorio, supuesto éste que, junto a otros a los que de inmediato nos referiremos, es uno de los casos en los que cabe apreciar en el contenido del recurso de amparo la especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC].”⁵⁸⁹

Por todo ello, es en esta sentencia, dictada por el Pleno del Tribunal, donde se realiza un desglose de aquellas condiciones que podrían dar lugar a la admisión de un recurso de amparo, sin que ello haya de entenderse como estimación apriorística de la vulneración, pues esa primera admisión sólo conllevaría la estimación de la citada especial trascendencia constitucional por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, y como ha reiterado el propio TC, la vulneración no puede no darse, es decir, es necesario la existencia de una vulneración o violación del derecho fundamental (criterio subjetivo) pero, además, es necesario que la demanda que se plantea ante el Alto Tribunal posea esa especial trascendencia constitucional, bien para la interpretación de los derechos fundamentales, bien para la efectiva aplicación de la doctrina

art. 10.1 n) LOTC, en fecha 18 de junio de 2009 pero –tal y como indica el Antecedente 10º- fue la propia Sala Segunda la que propuso que sobre el recurso de amparo conociera el Tribunal en Pleno. Entendemos que no tanto por la trascendencia del asunto en sí sino porque era necesario, habida cuenta de que habían transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, que aún no se tenían unos parámetros claros a cerca del aspecto material de la carga procesal. Así se desprende del propio F.J.2º de la Sentencia donde de manera previa a la enumeración de supuestos, se afirma que “Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC”.

Con lo cual, se hacía más que necesario asentar unos parámetros interpretativos claros sobre el contenido de los supuestos establecidos en el art. 50.1. LOTC que, obviamente, al vincular a todo Tribunal debía de ser el Pleno quien adoptase dicha interpretación sobre el precepto legal.

⁵⁸⁹ STC 155/2009, de 25 de junio. F.J. 2º.

constitucional (criterio objetivo)⁵⁹⁰. Pues bien, los citados supuestos, establecidos por el Tribunal son los siguientes⁵⁹¹:

“a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional;

b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE;

c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general;

d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución;

e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;

⁵⁹⁰ ATC 29/2011, de 17 de marzo. FJ 3º

⁵⁹¹ STC 155/2009, de 25 de junio. FJ 2º.

f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ);

g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.

Es decir, nos encontramos ante un listado de *posibles*, de hechos que acarrearían el planteamiento y análisis del Alto Tribunal a los efectos de entender admisible una demanda de amparo. Como puede comprobarse el listado no es un *numerus clausus* de supuestos de <<especial trascendencia>>, sino una serie de supuestos en los que el Tribunal podría admitir una demanda y una cláusula residual, mediante la que el TC podrá entender que, a pesar de no encontrarse dentro de los seis supuestos anteriores, el recurso de amparo planteado puede, asimismo, poseer dicha especial trascendencia constitucional. Por tanto, dicha enumeración -según el Tribunal- no ha de entenderse de forma exhaustiva.⁵⁹²

Ahora bien, a pesar de que estamos ante seis supuestos determinados y un supuesto más abierto o indeterminado, podemos reconducir, al menos los primeros, a dos grandes grupos con sustantividad propia⁵⁹³: en primer lugar, nos encontraríamos ante hechos que afectarían directamente a la concepción y conceptualización de los derechos fundamentales y, en segundo lugar, a la

⁵⁹² ATC 240/2009, de 21 de septiembre. FJ 2º; entre otras.

⁵⁹³ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo y su aplicación en la jurisprudencia del tribunal constitucional: luces y sombras de cuatro años de actividad”. Teoría y realidad Constitucional. Nº 3. Junio de 2011. Pág. 104. Clasifica los supuestos establecidos por la STC 155/2009, en “dos grandes grupos: por un lado, los que se refieren al desarrollo material de los derechos fundamentales u otras normas constitucionales, como cuando se planteen cuestiones novedosas o se susciten cambios en la doctrina constitucional; por otro lado, los que se centran en la aplicación de la doctrina constitucional por parte de los poderes públicos y especialmente por los órganos jurisdiccionales”

aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por parte de la jurisdicción ordinaria.⁵⁹⁴

Además, el Pleno del Tribunal, hace suyas las afirmaciones efectuadas por las Salas que vimos, en torno al cumplimiento de la carga procesal desde un punto de vista formal y no solo material, aunque sea este el objeto central de esta sentencia. Creemos, que la cuestión no es baladí, pues que el Pleno haga suyas las afirmaciones efectuadas por las Salas, otorga a dicha interpretación de un cierto rango que, quizás, adolecía con anterioridad, al unificarse y confirmarse por el Pleno lo que antes era decisiones de sus partes⁵⁹⁵.

3º) La desestimación en base a la STC 155/2009, de 25 de junio y la modulación del rigor.

A partir de la publicación de la citada STC 155/2009, de 25 de junio⁵⁹⁶, los parámetros interpretativos contenidos en ella (F.J 2º) relativos al art. 50.1. b) LOTC, se alzan en una suerte de *dogma* que es preciso no contravenir, a pesar de que a la fecha de interposición de los recursos de amparo aún no se había dictado la citada resolución, con lo que era absolutamente desconocida por el recurrente de amparo. Pero, a pesar de ello, son inadmitidas a trámite las demandas por el Tribunal sobre la base de la citada sentencia⁵⁹⁷.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional tuvo a bien modular el rigor de la justificación *material* de la especial trascendencia constitucional, sobre aquellas demandas de amparo que fueron interpuestas tras la publicación de la LO 6/2007, pero donde el recurrente desconocía el contenido de la STC 155/2009, de 25 de junio⁵⁹⁸. Debido, obviamente, a que durante dicho lapso

⁵⁹⁴ *Ibídem*.

⁵⁹⁵ STC 155/2009, de 25 de junio. F.J. 2º

⁵⁹⁶ BOE núm. 181, de 28 de julio de 2009.

⁵⁹⁷ AATC 236/2009, de 7 de septiembre; 240/2009, de 21 de septiembre; 252/2009, de 19 de octubre (Sección 4ª); 262/2009, de 11 de noviembre (Sección 1ª); 264/2009, de 16 de noviembre (Sección 4ª); 272/2009, de 26 de noviembre (Sala 2ª); 274/2009, de 30 de noviembre (Sección 4ª) y 284/2009, de 17 de diciembre (Sección 3ª).

⁵⁹⁸ Así se manifestó por el Magistrado D. Eugeni Gay Montalvo, en su voto particular al ATC 284/2009, de 17 de diciembre. "Resulta imprescindible retener esta fecha para enjuiciar la idoneidad del cumplimiento por el recurrente de los requisitos procesales exigidos por la LOTC. Ciertamente venía obligado por el art. 49.1 in fine LOTC a justificar de manera expresa en la demanda de amparo la especial trascendencia constitucional del recurso, cosa que hizo."

temporal el recurrente en amparo desconocía la interpretación realizada por el Alto Tribunal, pues no se había dictado o publicado a fecha de interposición de la demanda. Por tanto, en base a esa modulación, conocerá el Tribunal mediante sentencia⁵⁹⁹ o admitirá recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal⁶⁰⁰. No obstante esa modulación del rigor no era sinónimo de admisión a trámite, no sólo mediante auto⁶⁰¹, sino también mediante sentencia⁶⁰².

Por tanto, será a partir del año 2010 cuando al Tribunal Constitucional lleguen demandas de amparo en las que, ya sí, el demandante debe justificar *formal y materialmente la especial trascendencia constitucional* de su demanda,

Señalando que sólo a partir de la STC 155/2009, el demandante tendrá una noción clara de los supuestos materiales que ha de contener la justificación de la especial trascendencia. “En otras palabras, sólo a partir de esta Sentencia los recurrentes disponen de unos criterios más o menos claros a partir de los que justificar en su demanda de amparo la especial trascendencia constitucional de su recurso de amparo”. Instando al Tribunal a que lleve a cabo la flexibilización del requisito material cuando se trate de demandas que se interpusieron de manera previa a la citada sentencia. “Pues bien, considero que de nuevo en el presente caso el Tribunal Constitucional en asunción de su función de protección de los derechos fundamentales no podía menos que mostrar una mayor flexibilidad en la interpretación del cumplimiento del nuevo requisito, respetando de esta manera nuestra tradicional doctrina sobre interpretación de los requisitos formales en absoluta concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

⁵⁹⁹ STC 15/2011, de 28 de febrero (Sala Primera); STC 107/2011, de 20 de junio. (Sala Segunda); STC 44/2011, de 11 de abril (Sala Primera); STC 43/2010, de 26 de julio (Sala Primera); STC 58/2010, de 4 de octubre (Sala Primera); STC 95/2010, de 15 de noviembre (Sala Segunda); STC 44/2010, de 26 de julio (Sala Primera); STC 141/2010, de 21 de diciembre (Sala Segunda); STC 27/2013 (Sala Primera); STC 96/2010, de 15 de noviembre (Sala Segunda); STC 68/2011, de 16 de mayo (Sala Segunda); STC 90/2012, de 7 de mayo (Sala Primera); STC 15/2011, de 28 de febrero (Sala Primera); STC 106/2012, de 21 de mayo (Sala Primera); STC 36/2011, de 28 de marzo (Sala Primera); STC 133/2011, de 18 de julio. (Sala Primera) y STC 154/2011, de 18 de julio. (Sala Segunda).

⁶⁰⁰ AATC 04/2010 de 14 de enero; 05/2010, de 14 de enero; 283/2009, de 17 de diciembre y 24/2012, de 31 de enero. Aunque esta inicial estimación del recurso no significa que por posterior providencia se admita a trámite el recurso de amparo.

Sobre la carga argumental que pesa sobre el Ministerio fiscal cuando interpone un recurso de súplica basado en la especial trascendencia constitucional del recurso, véase: ATC 26/2012, de 31 de enero; ATC 89/2013, de 6 de mayo.

⁶⁰¹ ATC 61/2010, de 31 de mayo; 96/2010, de 19 de julio; 154/2010, de 15 de noviembre; 184/2010, de 29 de noviembre; ATC 185/2010, de 29 de noviembre; 186/2010, 29 de noviembre; 187/2010, de 29 de noviembre; 46/2011, de 28 de abril; 57 y 58/2011, de 6 de junio; 60 a 67/2011, de 6 de junio; 26/2012 de 31 de enero; 141/2012, de 9 de julio; ATC 86/2011, de 9 de junio.

⁶⁰² STC 143/2011, de 26 de septiembre. (Sala Primera) y STC 191/2011, de 12 de diciembre. (Sala Primera). Respecto a las siguientes, desde nuestro punto de vista, tales inadmisiones son relevantes no por la causa por la que se inadmiten –falta de agotamiento de la vía judicial previa– sino por el fondo o motivo de interposición, que no es otro que el planteamiento ante el Tribunal de la llamada “Doctrina Parot”. En tal sentido, véanse las STC 152/2012, de 16 de julio. (Sala Primera); STC 165/2012, de 1 de octubre; STC 174/2012, de 15 de octubre; STC 186/2012, de 29 de octubre; STC 199/2012, de 12 de noviembre y STC 217/2012, de 26 de noviembre. Todas dictadas por la Sala Primera del Tribunal. No obstante no son las únicas existentes pero estas han sido dictadas tras la entrada en vigor de la L.O 6/2007 y en ellas se hace referencia al requisito de la especial trascendencia constitucional.

no sólo por serle de aplicación la reforma introducida por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo; sino porque a fecha de su interposición ya había sido dictada y publicada para su general conocimiento, la STC 155/2009, de 25 de junio.

II.- EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL NUEVO RECURSO DE AMPARO TRAS LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO.

Lo primero que tenemos que decir es que, a pesar de la anterior jurisprudencia que indica la necesidad de deslindar las concretas argumentaciones sobre las lesiones de los derechos fundamentales, respecto a las concretas argumentaciones relativas a la especial trascendencia constitucional; esta doctrina que, desde la apreciación de cualquier operador jurídico, podría llevar a la idea de que ambos requisitos obligatorios han de tener su reflejo en la sentencia dictada por el Tribunal. Cuando se analiza la realidad práctica y el contenido formal y material de las sentencias dictadas, es relativamente fácil apreciar como en todo este tiempo desde la entrada en vigor de la reforma LOTC, en más de un sesenta por ciento (60%) de las sentencias, nada, absolutamente nada se nos dice sobre la *especial trascendencia constitucional* del recurso que está siendo conocido mediante sentencia por parte del Tribunal. Y no sólo desde un punto de vista formal, es decir, que no se hace referencia expresa al cumplimiento, a la forma en que se ha dado cumplimiento ha dicho requisito sino que, tampoco, se apreciará una trascendencia más allá del caso concreto en la gran parte de esas sentencias, ni se nos trasladará nada respecto a la dimensión objetiva del recurso.

También hemos de decir, en segundo lugar, en relación a las sentencias en las que sí hay una referencia expresa a la especial trascendencia constitucional que, a pesar de que sí hay una argumentación o al menos referencia a la especial trascendencia constitucional, nos vamos a encontrar que la carga argumental ofrecida no va a ser homogénea, como si lo será la argumentación sobre las concretas vulneraciones de los derechos fundamentales.

En relación a esto último, al desarrollo de la argumentación sobre la vulneración del derecho fundamental, ahora al igual que antes, la estructura seguirá unos concretos pasos: 1º) Exposición por parte del demandante de los hechos que originan el recurso, así como las concretas vulneraciones de derechos fundamentales que se han producido y aquello que es solicitado al Tribunal. 2º) La consideración de los mismos por el Ministerio Fiscal y por las contrapartes procesales, sobre la estimación o desestimación del recurso. 3º) En último lugar, el análisis por parte del Tribunal de la fundamentación fáctica y jurídica alegadas y su resolución en base a Derecho estimando o desestimando las lesiones o vulneraciones aducidas.

Pues bien, a pesar de que el anterior esquema es claro, no es claro el esquema argumentativo y de resolución de fondo basado en la especial trascendencia constitucional. Pues, en aquellas que sí existe alguna referencia a la especial trascendencia, vamos a encontrarnos con supuestos en los que: 1º) En algunas sentencias se nos traslada la especial trascendencia constitucional por parte del recurrente, que a su vez puede basarse o no en la carga material instaurada por la STC 155/2009, pero en otras muchas sentencias nada se nos dice de las concretas argumentaciones realizadas por el demandante. 2º) En muchos de los supuestos, en los que se analiza la especial trascendencia del recurso se debe a la apreciación de la falta o carencia manifestada por alguna de las partes procesales distinta al demandante, sobre todo por las contrapartes en los procesos judiciales previos que originan el amparo. 3º) En la mayoría de los supuestos en los que el Tribunal entra a conocer de la especial trascendencia constitucional en la fundamentación fáctica o jurídica, se debe a la interposición de dicho óbice de admisibilidad.

Por tanto, pocas son las sentencias en las que el esquema argumentativo consistente en la especial trascendencia constitucional del recurso tiene una correspondencia con la carga argumental de las concretas vulneraciones. Es decir, pocas son las sentencias en las que se produce una argumentación, confrontación y análisis de la especial trascendencia constitucional del recurso en las que intervengan tanto el recurrente, las partes procesales y el Tribunal. De hecho y, como veremos más adelante, lo mayoritario es que no haya ninguna

referencia a la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo en la sentencia, a pesar de que, como ha dicho el Tribunal, ambos se tratan de requisitos necesarios.

Pues bien, en primer lugar nos centraremos en éstas para, posteriormente, analizar aquellas sentencias en las que sí hay una argumentación en torno a la especial trascendencia constitucional alegada por alguna de las partes, esto no significa que el Tribunal finalmente conozca de ese concreto supuesto objetivo alegado. Es decir, en muchos de los supuestos en los que el Tribunal aprecia la argumentación dada sobre la especial trascendencia y admitida por el Tribunal como vertiente objetiva del recurso, no va a corresponderse con la argumentación de fondo que finalmente realizará el Tribunal. Con todo ello queremos decir que, a diferencia de las pautas tanto en la estructura formal y material respecto a las vulneraciones de los derechos fundamentales, no existe respecto a la especial trascendencia constitucional una estructura similar o tan siquiera homogénea en las sentencias, ni en la forma, ni en el fondo.

Pero no adelantemos acontecimientos y procedamos al análisis de las sentencias dictadas en este lapso temporal y lo haremos con la siguiente estructura: 1º) Sentencias en las que no se hace referencia alguna a la *especial trascendencia constitucional* del recurso. 2º) Sentencias en la que se hace referencia a la *especial trascendencia constitucional*: a) La *especial trascendencia constitucional* como carga o requisito formal y b) La *especial trascendencia constitucional* como requisito de índole material o sustantivo.

A) LA INEXISTENTE APRECIACIÓN DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

A pesar del intento de síntesis y de desarrollo efectuado en torno a los nuevos requisitos procesales instaurados por los Arts. 49 y 50 de la LOTC, relativos a la *especial trascendencia constitucional*, la anterior jurisprudencia ha

convivido –y convive- con sentencias y autos en los que, en ningún caso, se entra a analizar la *especial trascendencia* que posee el recurso de amparo.

Eso no significa que las sentencias en las que el Tribunal entra a conocer del fondo del asunto no puedan trascender al caso concreto. Pero, en la mayoría de los casos, se nos hace difícil o imposible vislumbrar donde se halla el *alcance objetivo* del recurso, mostrándonos sólo la *dimensión subjetiva* del mismo. Esto es, el Tribunal entrará a conocer de la concreta lesión aducida, sin que podamos apreciar en los mismos otra cosa que no sea la tutela del derecho fundamental alegado.

Todo ello –decimos- desde nuestra apreciación pues en ningún momento o en ningún caso se hace referencia alguna a dicho requisito desde un punto de vista *formal*, ni tampoco se referencia a la especial trascendencia desde un punto de vista *material*. Con ello no queremos decir que no exista o no pueda existir un acto de reflexión dentro del seno del Tribunal en tal sentido pero, lo que sí queremos decir, es que dicho acto reflexivo no se efectúa o se manifiesta *negro sobre blanco*, pues en ninguna de las siguientes sentencias se realiza ese examen; siendo mayoritario el número de sentencias donde este requisito no se hace ostensible.

La omisión no sólo se va a producir en los momentos iniciales de la entrada en vigor de la Ley, sino que podemos encontrar en la actualidad sentencias que, a pesar de la ya más que sentada doctrina sobre la especial trascendencia y, sobre todo, tras la STC 155/2009, de 25 de junio, no se hace referencia alguna a la *especial trascendencia constitucional* del recurso de amparo.

Como hemos dicho, y según nuestros cálculos, en casi el 66 % de las sentencias dictadas en el seno del Tribunal no se manifiesta o no se nos traslada dicho requisito, ni su argumentación ni su apreciación⁶⁰³. Pues bien, a pesar de

⁶⁰³ Salvo error por nuestra parte, tan solo en un 34% aproximadamente, de las sentencias dictadas en amparo desde la entrada en vigor de la L.O. 6/2007, se analiza o se pone de manifiesto la especial trascendencia constitucional, ya sea porque se nos traslade las argumentaciones vertidas por el recurrente, porque se alegue como causa de inadmisibilidad o

lo visto anteriormente, en las siguientes sentencias desconocemos el alcance objetivo del mismo.

1º) Vulneración derechos artículo 24 CE.

Sin lugar a dudas, sigue siendo con diferencia el artículo más invocado por los recurrentes en amparo y, también, el que suscita mayor número de resoluciones por parte del Tribunal Constitucional.

En relación a los derechos contenidos en el primer apartado del artículo 24 CE, prima la protección en amparo del derecho a la tutela judicial efectiva⁶⁰⁴;

porque entre a apreciarlo o analizarlo el propio Tribunal, o varias cosas a la vez. Pues bien, como decimos, salvo error nuestro, los números serían los siguientes:

1º) En el año 2009, las sentencias dictadas una vez en vigor la nueva normativa fueron dos, de las cuales solo una analizaría la especial trascendencia constitucional, siendo la más que reiterada STC 155/2009.

2º) En el año 2010, sólo una sentencia de catorce.

3º) En el año 2011, fueron veinticuatro de las sesenta y tres de las sentencias dictadas analizaron la especial trascendencia constitucional del recurso.

4º) En el año 2012, fueron veintiséis de las noventa y siete dictadas.

5º) Respecto al año 2013, el número amentó. Supuso cuarenta sentencias de las ochenta y tres dictadas.

6º) En cuanto al año 2014, de las cien sentencias dictadas en sólo treinta y cinco hubo un análisis sobre la especial trascendencia constitucional del recurso.

7º) Para finalizar, y hasta la fecha de la última sentencia que hemos analizado que es la STC 55/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Primera), en el año 2015 se dictaron veinticinco sentencias y tan sólo en ocho se analiza la especial trascendencia constitucional.

Como puede comprobarse, en ningún caso se llega tan siquiera al 50%.

⁶⁰⁴ STC 182/2011, de 21 de noviembre de 2011 (Sala Segunda); STC 97/2012, de 7 de mayo de 2012 (Sala Segunda); STC 129/2012, de 18 de junio de 2012 (Sala Primera); STC 130/2012, de 18 de junio de 2012 (Sala Primera); STC 154/2012, de 2 de julio de 2012 (Sala Segunda); STC 155/2012, de 16 de julio de 2012 (Sala Segunda); STC 180/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Primera); STC 190/2012, de 29 de octubre de 2012 (Sala Segunda); STC 201/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Segunda); STC 203/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Segunda); STC 204/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Primera); STC 205/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Primera); STC 206/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Primera); STC 231/2012, de 10 de diciembre de 2012 (Sala Primera); STC 232/2012, de 10 de diciembre de 2012 (Sala Segunda); STC 73/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Primera); STC 74/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Segunda); STC 106/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Segunda); STC 108/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 169/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Primera); STC 185/2013, de 4 de noviembre de 2013 (Sala Segunda); STC 194/2013, de 2 de diciembre de 2013 (Sala Segunda); STC 197/2013, de 2 de diciembre de 2013 (Sala Primera); STC 1/2014, de 13 de enero de 2014 (Sala Segunda); STC 8/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda); STC 48/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Segunda); STC 102/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda); STC 113/2014, de 7 de julio de 2014 (Sala Primera); STC 129/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera); STC 131/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera); STC 136/2014, de 8 de septiembre de 2014 (Sala Segunda); STC 137/2014, de 8 de septiembre de 2014 (Sala Segunda); STC 138/2014, de 8 de septiembre de 2014 (Sala Segunda); STC 169/2014, de 22 de octubre de 2014 (Sala Segunda); STC 179/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Segunda); STC 190/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda); STC 204/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda); STC 7/2015, 22 de

aunque también las Salas van a amparar a otros recurrentes respecto a su derecho a una resolución congruente⁶⁰⁵; respecto al derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes⁶⁰⁶; al derecho de acceso a los recursos legalmente previstos⁶⁰⁷ o en su vertiente de acceso a la justicia⁶⁰⁸.

También el Tribunal entra a conocer y a amparar a demandantes en sus derechos insertos en el art. 24.2 CE, en concreto, respecto a los derechos a un proceso con todas las garantías⁶⁰⁹ y a la presunción de inocencia⁶¹⁰; así como al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas⁶¹¹ o al derecho a un juez imparcial⁶¹². También porque se haya producido la vulneración respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, así como al derecho a un proceso con todas las garantías⁶¹³ y a la presunción de inocencia⁶¹⁴. Así como, la vulneración del derecho a la defensa y a ser informado de la acusación⁶¹⁵.

2º) Vulneración derechos artículo 23 CE

El Tribunal, asimismo, entrará a tutelar a los demandantes de amparo respecto a sus derechos insertos en el art. 23.2 CE, es decir, bien por vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, en relación a los denominados amparos parlamentarios⁶¹⁶; o por tratarse de vulneraciones en

enero de 2015 (Pleno); STC 17/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda); STC 20/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda); STC 37/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Primera); STC 38/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda); STC 39/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda); STC 52/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Primera).

⁶⁰⁵ STC 25/2012, de 27 de febrero de 2012 (Sala Segunda).

⁶⁰⁶ STC 62/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno).

⁶⁰⁷ STC 218/2012, de 26 de noviembre de 2012 (Sala Segunda).

⁶⁰⁸ STC 148/2014, de 22 de septiembre de 2014 (Sala Primera).

⁶⁰⁹ STC 46/2011, de 11 de abril de 2011 (Sala Segunda); STC 53/2013, de 28 de febrero (Pleno).

⁶¹⁰ STC 135/2011, de 12 de septiembre de 2011 (Sala Segunda); STC 144/2012, de 2 de julio de 2012 (Sala Segunda); STC 118/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 119/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 120/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 195/2013, de 2 de diciembre de 2013 (Sala Segunda).

⁶¹¹ STC 142/2010, de 21 de diciembre de 2010 (Sala Segunda).

⁶¹² STC 149/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Primera).

⁶¹³ STC 187/2012, de 29 de octubre de 2012 (Sala Segunda); STC 105/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 177/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Segunda); STC 184/2013, de 4 de noviembre de 2013 (Sala Segunda).

⁶¹⁴ STC 105/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda); STC 191/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda).

⁶¹⁵ STC 59/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda).

⁶¹⁶ STC 27/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera); STC 29/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sección Cuarta); STC 158/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Segunda); STC 213/2014, de 18 de diciembre de 2014 (Pleno).

el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos respecto a los amparos electorales⁶¹⁷.

3º) Vulneración derechos artículo 25 CE

También se amparan a distintos demandantes respecto a sus derechos fundamentales insertos en el art. 25.1 CE, en sus vertientes del derecho fundamental a la legalidad sancionadora⁶¹⁸ y al derecho a la legalidad en materia penal⁶¹⁹.

4º) Vulneración derechos artículo 17 CE

También se amparan a recurrentes, por considerarse infringidos, sus derechos fundamentales a la libertad personal⁶²⁰.

5º) Vulneración derechos artículo 18 CE.

Dentro de los derechos contenidos en el art.18 CE, el Tribunal ha otorgado el amparo en relación a los derechos a la intimidad⁶²¹, al honor y la propia imagen⁶²²; al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal⁶²³ y al secreto de las comunicaciones⁶²⁴.

6º) Vulneración de otros derechos o que se estimen lesionados varios derechos fundamentales.

⁶¹⁷ STC 162/2011, de 2 de noviembre de 2011 (Sala Primera); STC 163/2011, de 2 de noviembre de 2011 (Sala Primera); STC 171/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera); STC 172/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera).

⁶¹⁸ STC 30/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Segunda); STC 107/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 199/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda).

⁶¹⁹ STC 196/2013, de 2 de diciembre de 2013 (Sala Segunda).

⁶²⁰ STC 95/2012, de 7 de mayo de 2012 (Sala Segunda); STC 229/2012, de 10 de diciembre de 2012 (Sala Segunda); STC 148/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Segunda); STC 210/2013, de 16 de diciembre de 2013 (Sala Segunda).

⁶²¹ STC 171/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Segunda); STC 190/2013, de 18 de noviembre de 2013 (Sala Primera).

⁶²² STC 208/2013, de 16 de diciembre de 2013 (Sala Segunda); STC 19/2014, de 10 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda).

⁶²³ STC 29/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera).

⁶²⁴ STC 145/2014, de 22 de septiembre de 2014 (Sala Segunda).

Otras sentencias en las que el Tribunal ha otorgado el amparo por entender conculcado los derechos fundamentales del recurrente, han sido por vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE)⁶²⁵; a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE)⁶²⁶; el derecho de asociación (art. 22 CE, en relación con el art. 6 CE)⁶²⁷; al derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE)⁶²⁸ y a la libertad sindical (art. 28.1 CE)⁶²⁹.

No obstante, también han sido varias las sentencias dictadas en las que el Tribunal estima el recurso de amparo, pero en los que se declaran lesionados diferentes derechos fundamentales. Así, por ejemplo, son diversas las sentencias que estiman infringidos los derechos de los recurrentes a la libertad personal junto con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías⁶³⁰. Se estiman demandas en la que se acredita la vulneración del derecho a la integridad física y moral junto con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva⁶³¹; el derecho a la tutela judicial efectiva, libertad personal y a la legalidad penal⁶³²; también, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones unido a la vulneración del derecho a la legalidad penal y al derecho a la tutela judicial efectiva⁶³³ o el derecho a la igualdad ante la ley, en relación a la libertad de información⁶³⁴.

7º) Sentencias que no estiman la lesión del derecho o derechos fundamentales.

Aunque no todas las sentencias dictadas lo han sido para tutelar derechos fundamentales, pues también ha habido sentencias en las que se ha resuelto la

⁶²⁵ STC 11/2013, de 28 de enero de 2013 (Sala Segunda).

⁶²⁶ STC 31/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Segunda); STC 66/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera).

⁶²⁷ STC 138/2012, de 20 de junio de 2012 (Pleno).

⁶²⁸ STC 206/2011, de 19 de diciembre de 2011 (Sala Segunda).

⁶²⁹ STC 100/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda).

⁶³⁰ STC 97/2010, de 15 de noviembre de 2010 (Sala Segunda); STC 143/2010, de 21 de diciembre de 2010 (Sala Segunda); STC 109/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 152/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Segunda); STC 187/2013, de 4 de noviembre de 2013 (Sala Segunda); STC 192/2013, de 18 de noviembre de 2013 (Sala Segunda).

⁶³¹ STC 131/2012, de 18 de junio de 2012 (Sala Segunda); STC 153/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Primera).

⁶³² STC 49/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Segunda).

⁶³³ STC 230/2012, de 10 de diciembre de 2012 (Sala Primera).

⁶³⁴ STC 104/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda); STC 147/2014, de 22 de septiembre de 2014 (Sala Primera).

desestimación del recurso, la denegación del amparo e incluso su inadmisión. Tal y como ocurría antes de la entrada en vigor de la L.O. 6/2007, la admisión a trámite de la demanda y su resolución mediante sentencia no era sinónimo, o no tenía que llevar aparejada, la estimación de la demanda, ni la determinación de la conculcación de los derechos fundamentales del recurrente.

Nos volvemos a encontrar con sentencias denegatorias o desestimatorias⁶³⁵, no solo dictadas por las Salas, sino también recursos de

⁶³⁵ STC 13/2012, de 30 de enero de 2012 (Sala Primera). Denegación (arts. 14 y 24.1 CE); STC 24/2012, de 27 de febrero de 2012 (Sala Primera). Denegación (art. 20.1 d) CE); STC 31/2012, de 12 de marzo de 2012 (Sala Segunda). Denegación (arts. 24.1 y 25.1 CE); STC 74/2012, de 16 de abril de 2012 (Sala Primera). Denegación (art. 20.1 d) CE); STC 142/2012, 2 de julio de 2012 (Sala Primera). Denegación (arts. 18.1, 18.3 y 24.2 CE); STC 158/2012, de 17 de septiembre de 2012 (Sala Primera). Denegación (art. 17.1 CE); STC 182/2012, 17 de octubre de 2012 (Sala Primera). Denegación (arts. 15, 24.1 y 24.2 CE); STC 189/2012, de 29 de octubre de 2012 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 14, 24.1 y 25.2 CE); STC 10/2013, de 28 de enero de 2013 (Sala Segunda). Denegación (arts. 24.1 y 23 CE); STC 57/2013, de 11 de marzo de 2013 (Sala Segunda). Denegación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 90/2013, de 22 de abril de 2013 (Sala Segunda). Denegación (art. 24.1 CE); STC 128/2013, de 3 de junio de 2013 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 14, 24.1 y 25.2 CE); STC 10/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Primera). Denegación (Arts. 14 y 27 CE); STC 62/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 63/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 64/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 65/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 67/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 68/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 69/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE); STC 70/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 80/2014, de 28 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE). STC 116/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda). Denegación (art. 14 CE); STC 124/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Segunda). Denegación (art. 14 CE); STC 157/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). Denegación (art. 14 CE); STC 159/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). Denegación (arts. 24.1, 18 y 14 CE); STC 61/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 81/2014, de 28 de mayo de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 90/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 91/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 17.1 y 24.1 CE); STC 101/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 17.1 y 24.1 CE); STC 103/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 17.1 y 24.1 CE); STC 115/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (art. 14 CE); STC 117/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 17.1, 24.1 y 25.1 y 2 CE); STC 135/2014, de 8 de septiembre de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 18.1, 17.3, 18.4 y 24.2 CE); STC 146/2014, de 22 de septiembre de 2014 (Sala Primera). Desestimación (art. 24.2 CE); STC 168/2014, de 22 de octubre de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 24.1 y 18 CE); STC 177/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 180/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera). Desestimación (arts. 17.1, 24.1 y 25.1 CE); STC 187/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 2/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 24.1, 24.2 y 25.1 CE); STC 16/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). Desestimación (arts. 24.1 y 14 CE); STC 33/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda). Desestimación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 34/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 36/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (arts. 24.1 y 14 CE); STC 40/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (arts. 24.1 y 14 CE);

amparo que resolverá el Pleno del Tribunal⁶³⁶. Pues bien, no sólo denegarán el amparo sino que, también, nos encontramos con sentencias que vendrán a inadmitir el recurso interpuesto pero ya en fase de resolución⁶³⁷ y no sólo serán dictadas por las Salas sino que también lo serán por el Pleno⁶³⁸.

Con ello no queremos decir que de ellas no puedan derivarse -aunque sea minoritario- supuestos en los que se produzca un análisis de corte objetivo que haga que determinados recursos trasciendan al caso concreto⁶³⁹ pero, dicho análisis, es una consecuencia derivada de la tutela puramente subjetiva y no respecto a un posible análisis de la especial trascendencia del recurso de amparo. La dimensión objetiva que pueda derivar de alguno de los supuestos deriva de dicha vertiente subjetiva del recurso, no como análisis individualizado

STC 51/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (art. 24.1 CE); STC 53/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (art. 24 CE); STC 55/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Primera). Desestimación (arts. 24.1 y 24.2 CE).

⁶³⁶ STC 61/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Desestimación. (Arts. 24.1, 17.1 y 14 CE); STC 64/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Denegación. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 65/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Denegación. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 66/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Desestimación. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 67/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Denegación. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 69/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Desestimación. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 55/2014, de 10 de abril de 2014 (Pleno). Denegación (arts. 17.1 CE y 24.1 CE); STC 133/2014, de 22 de julio de 2014 (Pleno). Desestimación (art. 24.2 CE); STC 165/2014, de 8 de octubre de 2014 (Pleno). Denegación (arts. 24.1 y 24.2 CE); STC 212/2014, de 18 de diciembre de 2014 (Pleno). Desestimación (art. 24.1 CE).

⁶³⁷ STC 28/2011, de 14 de marzo. (Sala Segunda). Inadmisión. (Arts. 23.2, 23.1 y 14 CE); STC 17/2012, de 13 de febrero de 2012 (Sala Primera). Inadmisión (Art. 20.1 d) CE); STC 23/2012, de 27 de febrero de 2012 (Sala Primera). Inadmisión (Art. 20.1 d) CE); STC 128/2012, de 18 de junio de 2012 (Sala Segunda). Inadmisión. (Arts. 24.1 y 2, 25.1 y 2 y 17 CE); STC 157/2012, de 17 de septiembre de 2012 (Sala Segunda). Inadmisión. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE); STC 200/2012, de 12 de noviembre de 2012 (Sala Primera). Inadmisión (Arts. 24.2 y 25.1 CE); STC 221/2012, de 26 de noviembre de 2012 (Sala Primera). Inadmisión. (Art. 17.1 CE); STC 54/2013, de 11 de marzo de 2013 (Sala Primera). Inadmisión. (Arts. 24.1 y 2, 25.1 y 2, 17 y 14 CE); STC 110/2013, de 6 de mayo de 2013 (Sala Segunda). Inadmisión recurso. (Art. 24.1 CE y 15 CE); STC 41/2014, de 24 de marzo de 2014 (Sala Segunda). Inadmisión (arts. 16.1 y 27.3 CE); STC 57/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera). Inadmisión (arts. 16.1 y 27.3 CE); STC 139/2014, de 8 de septiembre de 2014 (Sala Segunda). Inadmisión (arts. 17.1, 24.1 y 25.1 y 2 CE).

⁶³⁸ STC 60/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Inadmisión. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14.1 CE); STC 63/2012, de 29 de marzo de 2012 (Pleno). Inadmisión. (Arts. 24.1, 25.1 y 2, 17.1 y 14 CE).

⁶³⁹ Como pueden ser: el acceso a los archivos informáticos sin contar con el consentimiento de su titular y sin previa autorización judicial, STC 173/2011, de 7 de noviembre (Sala Segunda); sobre la inconstitucionalidad de la técnica periodística <<cámara oculta>>, STC 12/2012, de 30 de enero (Sala Primera) y STC 74/2012, 74/2012, de 16 de abril (Sala Primera); sobre internamiento en centro psiquiátrico adoptado sin haber informado al interesado de los derechos a la defensa y a la prueba que le asisten, y carente de la motivación exigible a una medida privativa de libertad, STC 141/2012, de 2 de julio (Sala Segunda).

de la especial trascendencia constitucional, vertiente esta que se añade como necesaria tras la reforma de la LOTC en 2007. Es decir, en estos concretos supuestos, el Tribunal no está realizando una labor distinta a la ya realizada desde que se puso en marcha la justicia constitucional a través del recurso de amparo, que se inició con la ya mencionada STC 1/1981.

Por tanto, en la mayoría de los recursos de amparo de los que conoce el Tribunal mediante sentencia, no se va a producir una disociación entre la lesión o vulneración del derecho fundamental y la necesaria apreciación respecto a la trascendencia del caso concreto. Dicha carencia lo va a ser tanto *formal* como *material* y los pocos casos en los que finalmente se pueda apreciar ese alcance objetivo del recurso, se va a manifestar como consecuencia derivada de la mera tutela subjetiva del mismo. En definitiva, no existe una manifestación de los concretos argumentos dados por el recurrente en orden a cumplimentar la nueva carga, ni existe una apreciación de índole formal, ni material, por parte del Tribunal que acrediten porqué estos supuestos concretos merecen ser admitidos a trámite, en detrimento de otros que han sido inadmitidos.

En definitiva, y según nuestra apreciación, la *especial trascendencia constitucional* en los recursos que dan lugar a estas sentencias funcionaría como un mero o simple trámite *formal* que se cumplimenta en la demanda y que se observa como existente en el momento de admisión. Es decir, la especial trascendencia constitucional funcionaría como una barrera más que hay que cumplimentar para que el Tribunal conozca sobre la tutela del derecho fundamental que se alega como vulnerado. Sin que tenga su reflejo formal y, mucho menos material, en el conocimiento sobre el fondo realizado por el Tribunal Constitucional.

Tanto es así que, en la mayoría de estos supuestos, lo que se produce es una reiteración de la jurisprudencia constitucional y una aplicación al caso concreto, esto es, se trata de una mera actividad de enjuiciamiento de casos *fáciles* o, incluso, se tratan de supuestos que la doctrina mayoritaria ha contemplado como un uso excesivo del recurso de amparo respecto a la labor que corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Como bien reseña HERNÁNDEZ RAMOS, “[e]l Tribunal Constitucional apenas aporta información sobre el significado de la especial trascendencia constitucional, puesto que no suele especificar los motivos de la admisión de los recursos de amparo (las inadmisiones se hacen por providencias que tampoco son motivadas). Esto supone una gran incertidumbre para los recurrentes en amparo”⁶⁴⁰.

Según nuestro parecer, no es que *apenas aporta información* es que, como hemos visto, en más de un sesenta por ciento de las sentencias no se pone de manifiesto por qué el asunto posee una *especial trascendencia constitucional*, ni apreciamos en los mismos tal trascendencia o *dimensión objetiva* del amparo.

Por el trascurso del tiempo hemos podido observar como dentro de la práctica jurídica se manifiesta lo que decimos, ya que hemos encontrado formularios procesales que sirven de apoyo para la interposición de demandas de amparo, a los que se les han añadido fórmulas estereotipadas para cumplimentar el requisito de la especial trascendencia constitucional. Véanse los ANEXOS Nº 1 a Nº 9 que se encuentran adjuntos⁶⁴¹.

B) EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL.

Como hemos indicado más arriba, la argumentación y conocimiento respecto a la *especial trascendencia constitucional* del recurso de amparo, no sigue unos parámetros similares en todas las sentencias, en contra de lo que sí ocurre en relación a las concretas lesiones o vulneraciones de los derechos fundamentales. En resumidas cuentas, no siempre va a venir reflejado en la sentencia la especial trascendencia constitucional del recurso y, aun cuando sí venga reflejado, en un treinta y cuatro por ciento (34%) aproximadamente de

⁶⁴⁰ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “El amparo constitucional. Doctrina y problemas actuales. La admisibilidad del recurso”. *LEX*. Nº 15, 2015. Pág. 161.

⁶⁴¹ Formularios extraídos de la web Aranzadi Thomson Reuters: www.aranzadidigital.es.

sentencias, no va a realizarse con unos esquemas fijos o determinados. Ni desde un punto de vista formal, ni desde un punto de vista material.

1º) La justificación y apreciación del requisito de la *especial trascendencia constitucional* desde un punto de vista *formal*.

A pesar de que la argumentación le corresponde inicialmente al demandante y, posteriormente, la apreciación sobre su cumplimiento y existencia le corresponde al Tribunal pero, como decimos, en los casos en los que sí se produce una argumentación sobre la especial trascendencia del recurso, no siempre va a cumplimentarse de la misma forma, manera o contenido.

1º) La acreditación formal respecto al requisito de la especial trascendencia constitucional.

A pesar de que la argumentación le corresponde inicialmente al demandante y, posteriormente, la apreciación sobre su cumplimiento y existencia le corresponde al Tribunal pero, como decimos, en los casos en los que sí se produce una argumentación sobre la especial trascendencia del recurso, no siempre va a cumplimentarse de la misma forma, manera o contenido.

a) Argumentación dada por las partes procesales y el Tribunal en orden al cumplimiento formal del requisito, que recogen los distintos supuestos establecidos en la STC 155/2009, F.J. 2º, o puede reconducirse a los mismos.

a. l) Demandante de amparo.

Por un lado, nos encontraríamos sentencias en las que sólo se nos transmite la argumentación dada por el demandante de amparo.

Las referencias expresas dadas por el demandante para cumplimentar la *especial trascendencia constitucional* (art. 49.1 *in fine*, LOTC), se circunscriben a que la lesión del derecho proviene directamente de la ley o norma con rango de ley⁶⁴²; que su demanda de amparo se interpone como consecuencia de un incumplimiento reiterado de la doctrina del Tribunal o que existe una voluntad manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional⁶⁴³. Que se trata de una cuestión novedosa sobre la que no hay doctrina por parte del Tribunal, unida a una interpretación jurisprudencial de la ley conforme al derecho fundamental⁶⁴⁴, a una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la jurisprudencia del Tribunal⁶⁴⁵ o a una trascendencia al caso concreto⁶⁴⁶. Que el caso da lugar al Tribunal para cambiar, modificar o perfilar su doctrina⁶⁴⁷. Además de para aclarar o cambiar su doctrina, que puede existir un incumplimiento reiterado de la doctrina del Tribunal, unido incluso a una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la misma⁶⁴⁸ o bien, por último, que se trate de los denominados amparos electorales⁶⁴⁹ o parlamentarios⁶⁵⁰.

a. II) Tribunal Constitucional

La argumentación o apreciación puede venir sólo a cargo del propio Tribunal: al entender que se trata de un supuesto sobre el que no existe jurisprudencia o doctrina⁶⁵¹; porque la vulneración se imputa a la ley, que se trate de una interpretación de la ley lesiva del derecho fundamental⁶⁵² o que se trate de un caso novedoso sobre el que no hay doctrina, unido a una interpretación de la ley conforme con el derecho fundamental⁶⁵³. Por otro lado, al tratarse de los

⁶⁴² STC 188/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁶⁴³ STC 92/2012, de 7 de mayo (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 11/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 12/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁶⁴⁴ STC 77/2014, de 22 de mayo de 2014 (Sala Primera)

⁶⁴⁵ STC 32/2014. Antecedente 3º.

⁶⁴⁶ STC 28/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 3º)

⁶⁴⁷ STC 151/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 3º)

⁶⁴⁸ STC 157/2013 de 23 de septiembre de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 45/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda).

⁶⁴⁹ STC 123/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 62/2011, de 5 de mayo de 2011 (Pleno). (Antecedente 3º).

⁶⁵⁰ STC 44/2010, de 26 de julio de 2010 (Sala Primera). (Antecedente 3º)

⁶⁵¹ STC 122/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 19/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). (Antecedente 4º).

⁶⁵² STC 167/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 3º)

⁶⁵³ STC 78/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Segunda). (F.J.)

denominados amparos electorales⁶⁵⁴; que asunto trasciende al caso concreto⁶⁵⁵ o, incluso, la argumentación que realizará el Tribunal consistirá en una genérica remisión a la STC 155/2009⁶⁵⁶.

a. III) Demandante de amparo y Tribunal Constitucional

También hay sentencias en las que se nos traslada tanto la argumentación dada por el demandante como por el Tribunal. Se realizan concretas argumentaciones sobre supuestos en los que no hay doctrina del Tribunal⁶⁵⁷; que la existente esté siendo desconocida, incumplida o existe una voluntad manifiesta de no acatar la misma⁶⁵⁸.

⁶⁵⁴ STC 60/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda).(F.J. 2º); STC 124/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º)

⁶⁵⁵ STC 79/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Primera).(F.J.2º)

⁶⁵⁶ STC 75/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Primera).(F.J. 2º).

⁶⁵⁷ STC 35/2014, de 27 de febrero de 2014 (Pleno). (Antecedente 3º y FF.JJ. 3º y 5º); STC 168/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º y FJ. 4º)

⁶⁵⁸ STC 59/2011, de 3 de mayo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 3º y FF.JJ. 6º y 8º); STC 1/2013, de 14 de enero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 3º y F.J.3º); STC 21/2014, de 10 de febrero de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º y F.J. 2º); STC 195/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedentes 5º-6º y F.J.2º);STC 42/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 3º y F.J. 2º).

a. IV) Partes personadas y/o Ministerio Fiscal y/o Abogacía del Estado y Tribunal Constitucional.

En otras ocasiones son las partes personadas en los procesos de los que trae causa⁶⁵⁹, el Ministerio Fiscal⁶⁶⁰ o la Abogacía del Estado⁶⁶¹, los que argumenten la falta o insuficiente justificación dada por el recurrente como óbice procesal para la inadmisión, y el Tribunal o la Sala ven necesario analizar el cumplimiento o no de dicha carga procesal.

Frente a dicha falta alegada, el Tribunal o la Sala correspondiente argumentará que se trata de un supuesto nuevo sobre el que no hay doctrina⁶⁶²; que le permite modificar o perfilar la doctrina ya existente⁶⁶³; que la lesión proviene de una ley o norma con rango de ley⁶⁶⁴; que le permite realizar una

⁶⁵⁹ STC 126/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (Antecedentes 8º y 9º); STC 216/2013, de 19 de diciembre de 2013. (Pleno). (Antecedente 9º); STC 7/2014, de 27 de enero. (Sala Primera). (Antecedente 7º); STC 126/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 8º); STC 47/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 6º); STC 9/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sala Primera). (Antecedente 8º); STC 125/2013, de 23 de mayo de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 147/2013, de 6 de agosto de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 6º); STC 167/2014, de 22 de octubre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 9º).

⁶⁶⁰ STC 77/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 107/2012, de 21 de mayo. (Sala Segunda). (Antecedente 4º); STC 115/2013, de 9 de mayo de 2013 (Pleno). (Antecedente 9º); STC 58/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 8º); STC 21/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 7º y Antecedente 8º, respectivamente); STC 164/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 165/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 166/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 167/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 168/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 169/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 170/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); STC 31/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 9º).

⁶⁶¹ STC 107/2012, de 21 de mayo. (Sala Segunda). (Antecedente 8º); STC 2/2013, de 14 de enero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 6º); STC 58/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 8º); STC 61/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 5º).

⁶⁶² STC 115/2013, de 9 de mayo de 2013 (Pleno). (F.J.2º); STC 7/2014, de 27 de enero. (Sala Primera). (F.J.2º); STC 126/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 47/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). (F.J.2º).

⁶⁶³ STC 126/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 58/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 21/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 167/2014, de 22 de octubre de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 2º).

⁶⁶⁴ STC 77/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Segunda). Si bien la Sala afirma que “no se aprecia la inclusión de algún apartado dedicado a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, ni se menciona expresamente este requisito. Ahora bien, sí se puede encontrar en la argumentación del recurso un razonamiento del que se deduce la especial trascendencia constitucional que la actora atribuye al mismo”. (F.J. 2º).

interpretación de la ley conforme con el derecho fundamental, incluso unido a negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal⁶⁶⁵; que existe incumplimiento general y reiterado de la doctrina del Tribunal⁶⁶⁶; una negativa manifiesta del deber de acatar la doctrina constitucional⁶⁶⁷; por tratarse de los denominados amparos electorales⁶⁶⁸; que el asunto trasciende al caso concreto⁶⁶⁹ o, incluso, realizará una remisión general a la STC 155/2009⁶⁷⁰, con la finalidad de rechazar dicha tacha de inadmisión.

a. V) Demandante de amparo, partes personadas y/o Ministerio Fiscal y/o Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional

Y, para finalizar, en otras ocasiones la argumentación, discusión y apreciación sobre la especial trascendencia constitucional se realizan por todas las partes procesales –demandante de amparo⁶⁷¹; los personados en la

⁶⁶⁵ STC 7/2014, de 27 de enero de 2014. (Sala Primera). (F.J. 2º).

⁶⁶⁶ STC 107/2012, de 21 de mayo. (Sala Segunda). (F.J. 2º)

⁶⁶⁷ STC 2/2013, de 14 de enero de 2013 (Sala Primera). (F.J. 3º).

⁶⁶⁸ STC 61/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J.2º); STC 125/2013, de 23 de mayo de 2013 (Sala Primera). (F.J. 3º); STC 147/2013, de 6 de agosto de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 164/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera) (F.J. 3º). STC 165/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 166/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 167/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 168/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 169/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 3º); STC 170/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 3º).

⁶⁶⁹ STC 79/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Primera). (F.J.2º); STC 31/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (F.J.2º)

⁶⁷⁰ STC 9/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sala Primera). (F.J. 3º).

⁶⁷¹ STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 173/2013, de 10 de octubre de 2013 (Pleno). (Antecedente 3º); STC 32/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 212/2013, de 16 de diciembre de 2013. (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 89/2011, de 6 de junio de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 96/2012, de 7 de mayo (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 44/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 46/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 130/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera) y STC 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 24/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º) y STC 99/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 200/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 201/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 202/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 1/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 23/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). (Antecedente 4º); STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014. (Antecedente 3º); STC 105/2012, de 11 de mayo (Sala Primera). (Antecedentes 5º, 6º y 7º); STC 192/2011, de 12 de diciembre (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 191/2013, de 18 de noviembre de 2013. (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera). (Antecedente 3º); STC 56/2013, de 11 de marzo de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); STC 127/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

causa⁶⁷²; el Ministerio Fiscal⁶⁷³ y/o Abogacía del Estado⁶⁷⁴- y el propio Tribunal. Por tanto, nos encontraríamos ante un esquema equivalente al conocimiento de las concretas lesiones aducidas en la demanda y, además, las alegaciones en estos casos se circunscribirían a los concretos contenidos materiales determinados en la citada STC 155/2009.

El debate en relación a la especial trascendencia constitucional, en el que intervendrán todas las partes, la argumentación dada por el Tribunal girará en torno a supuestos sobre los que no haya doctrina⁶⁷⁵; que con él dé lugar a modificar o perfilar su doctrina⁶⁷⁶; que exista una negativa manifiesta del deber de acatar la doctrina constitucional⁶⁷⁷; que se trate de los denominados amparos electorales⁶⁷⁸ o parlamentarios⁶⁷⁹; que se trate de un supuesto que trascienda al

⁶⁷² STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 6º); STC 212/2013, de 16 de diciembre de 2013. (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 89/2011, de 6 de junio de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 10º); STC 96/2012, de 7 de mayo (Sala Primera). (Antecedente 9º); STC 44/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 8º); STC 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 9º); STC 130/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera) y STC 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 6º y Antecedente 7º, respectivamente); STC 200/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 7º); STC 201/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 6º); STC 202/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 6º);

STC 1/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 23/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). (Antecedente 8º); STC 105/2012, de 11 de mayo (Sala Primera). (Antecedentes 12º);

STC 192/2011, de 12 de diciembre (Sala Segunda). (Antecedente 9º); STC 191/2013, de 18 de noviembre de 2013. (Sala Primera). (Antecedente 6º); STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera). (Antecedente 10º); STC 56/2013, de 11 de marzo de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 6º); STC 127/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (Antecedente 8º).

⁶⁷³ STC 173/2013, de 10 de octubre de 2013 (Pleno). (Antecedente 8º); STC 32/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 12º); STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 9º).

⁶⁷⁴ STC 46/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 7º); STC 24/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (Antecedente 6º); STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 8º) y STC 99/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 7º); STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014. (Antecedente 7º).

⁶⁷⁵ STC 89/2011, de 6 de junio de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 4º). STC 44/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 130/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 24/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (F.J. 2º).

⁶⁷⁶ STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 173/2013, de 10 de octubre de 2013 (Pleno). (F.J. 2º); STC 216/2013, de 19 de diciembre de 2013. (Pleno). (F.J. 2º); STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 3º); STC 99/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 3).

⁶⁷⁷ STC 32/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º).

⁶⁷⁸ STC 105/2012, de 11 de mayo (Sala Primera)(F.J.3º).

⁶⁷⁹ STC 192/2011, de 12 de diciembre (Sala Segunda). No obstante, y a diferencia de las posteriores sentencias en las que se expone por la contra-parte procesal una falta de o tacha respecto a la especial trascendencia del recurso, la Sala no entra a conocer de la misma y

caso concreto⁶⁸⁰ o, en fin, pueden también producirse genéricas remisiones a la STC 155/2009, sin que se concrete ningún supuesto de los determinados en el F.J. 2º de la misma⁶⁸¹ pero que, en definitiva, le sirve al Tribunal como argumentación para rechazar los óbices de inadmisibilidad interpuestos.

b) La argumentación no podrá reconducirse a los supuestos determinados por la STC 155/2009, puesto que las referencias a la especial trascendencia constitucional se producen de manera muy abierta, genérica o ambigua.

b. l) Demandante de amparo

Nos encontraremos como carga argumentativa de la *especial trascendencia constitucional* basada en la solicitud de tutela del derecho fundamental, con aplicación de la doctrina del Tribunal⁶⁸². Argumentos que giran en torno a la gravedad de la lesión, frente a un incumplimiento de la doctrina ya asentada por el Tribunal⁶⁸³. También en la propia lesión pero como mecanismo para consolidar una jurisprudencia emitida por una sentencia previa⁶⁸⁴. Asimismo se solicita la aplicación al caso, una concreta jurisprudencia anterior de dicho Tribunal⁶⁸⁵. Supuestos en los que se solicita la tutela pero de conformidad con la jurisprudencia y doctrina de Tribunales supranacionales⁶⁸⁶ o, simplemente, la Sala sólo nos trasmite que los demandantes han procedido a justificar la especial

procede al análisis de las concretas lesiones aducidas por la demandante. STC 191/2013, de 18 de noviembre de 2013. (Sala Primera). (F.J. 2º).

STC 200/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Primera). STC 201/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). STC 202/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). STC 1/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda). STC 23/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). (FF.JJ 2º).

⁶⁸⁰ STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera). (F.J.2º); STC 56/2013, de 11 de marzo (Sala Segunda). (F.J. 1º); STC 127/2013, de 3 de junio (Sala Segunda) (F.J. 2º).

⁶⁸¹ STC 212/2013, de 16 de diciembre. (Sala Segunda) (F.J. 2º); STC 29/2014, de 24 de febrero (Sala Primera). (F.J.2º).

⁶⁸² STC 193/2011, de 12 de diciembre (Sala Segunda). (Antecedente 3º)

⁶⁸³ STC 12/2013, de 28 de enero de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁶⁸⁴ STC 88/2013, de 11 de abril de 2013 (Pleno). (Antecedente 3º)

⁶⁸⁵ STC 194/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁶⁸⁶ STC 188/2013, de 4 de noviembre de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º) y STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º).

trascendencia del recurso, sin concretar el concreto contenido de lo argumentado⁶⁸⁷.

Como vemos, a pesar de lo que vimos, existe una confusión entre la argumentación destinada a la concreta acreditación de la concreta vulneración o lesión del derecho fundamental y la destinada a justificar el alcance objetivo del recurso.

b. II) Tribunal Constitucional

Para el Tribunal, la apreciación de la especial trascendencia constitucional también puede residir en que la jurisdicción ordinaria ha desatendido sus funciones en el proceso del que trae causa el amparo⁶⁸⁸. Se argumenta por la propia Sala la admisión, en base a una sentencia dictada por la otra Sala que consideró que la especial trascendencia del recurso residía en la aplicación de una doctrina previa⁶⁸⁹ o en relación a otras consideraciones no encuadrables dentro de la estricta dimensión objetiva del recurso⁶⁹⁰.

b. III) Demandante de amparo y Tribunal Constitucional

También la argumentación dada sobre la especial trascendencia constitucional puede consistir en la solicitud de reconocimiento constitucional del derecho a una indemnización por daños morales, que es solicitada al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal procede a descartar tal supuesto, que en el fondo supone la argumentación dada por el recurrente en orden a justificar la especial trascendencia de su recurso⁶⁹¹.

⁶⁸⁷ STC 114/2014, de 7 de julio de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 3º). En tal sentido, también se expresa la STC 209/2013, de 16 de diciembre de 2013 (Sala Primera) (Antecedente 3º)

⁶⁸⁸ STC 211/2013, de 16 de diciembre de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 4º)

⁶⁸⁹ STC 76/2013, de 8 de abril de 2013 (Sala Primera). (F.J. 3º)

⁶⁹⁰ STC 43/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Primera). (Antecedente 4º). En tal sentido, véase también: STC 30/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 5º)

⁶⁹¹ STC 176/2013, de 21 de octubre de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 9º)

b. IV) Partes procesales y Tribunal Constitucional.

Frente a la consideración del Abogado del Estado sobre el incumplimiento de la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso⁶⁹². El Tribunal argumenta que se ha solicitado la tutela del derecho en concordancia con la jurisprudencia emanada por los Tribunales supranacionales así como, también, en el presente caso corregir a los tribunales *ad quo*⁶⁹³. O, simplemente, frente a la argumentación por el Abogado del Estado respecto a que el asunto no trasciende al caso concreto y, debido a ello, no posee una especial trascendencia constitucional⁶⁹⁴. El Tribunal argumenta que así lo ha valorado en el trámite de admisión y ese es el momento procesal oportuno para ello; sin dar argumento alguno que justifique la acreditación y la valoración del Tribunal sobre la especial trascendencia del recurso⁶⁹⁵.

También, frente al óbice procesal interpuesto por la contraparte en relación a la especial trascendencia constitucional del recurso⁶⁹⁶, el Tribunal fundamenta la admisión en base a la relación existente entre el nuevo trámite de admisión del amparo respecto al nuevo incidente de nulidad de actuaciones⁶⁹⁷.

Casos enjuiciados por el Tribunal, donde se solicita por el demandante la interpretación de una norma procesal en relación a un determinado tipo de proceso⁶⁹⁸. Se produce la tacha consistente en la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional⁶⁹⁹. El Tribunal desestima tal óbice procesal argumentando que “la demanda de amparo formulada contiene un apartado específicamente dedicado a cumplir con la carga de justificar la trascendencia constitucional del recurso a que obliga el art. 49.1 in fine LOTC”⁷⁰⁰.

⁶⁹² STC 145/2011, de 26 de septiembre de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 8º).

⁶⁹³ STC 145/2011, de 26 de septiembre de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 2º)

⁶⁹⁴ STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 6º).

⁶⁹⁵ STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera). (F.J.1º).

⁶⁹⁶ STC 9/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 7º)

⁶⁹⁷ STC 9/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 3º)

⁶⁹⁸ STC 76/2012, de 16 de abril (Sala Primera). (Antecedente 3º).

⁶⁹⁹ STC 76/2012, de 16 de abril (Sala Primera). (Antecedente 7º)

⁷⁰⁰ STC 76/2012, de 16 de abril (Sala Primera). (F.J. 2º)

Para finalizar, al igual que vimos en el apartado anterior, en estos casos también se producen alegaciones de alcance general, tanto del demandante de amparo para justificar la especial trascendencia constitucional⁷⁰¹, como de las partes procesales en orden a determinar que dicha especial trascendencia no concurre en el caso⁷⁰² y, por tanto, entrará a conocer el Tribunal de la concreta tacha de inadmisibilidad⁷⁰³, estableciéndose tal trascendencia en la sujeción de los órganos judiciales a lo que han dispuesto los órganos superiores jerárquicos⁷⁰⁴.

Como decimos, desde un punto de vista formal, existe una evidente discordancia respecto a las alegaciones en torno a la *especial trascendencia constitucional* en las sentencias. En la gran mayoría de las mismas (66%, aproximadamente), no existe una traslación de la argumentación y, cuando existe, no se realiza con parámetros claros y determinados que aporten una uniformidad al criterio de admisión. Todo ello, a diferencia de lo que sí ocurre respecto a las alegaciones en torno a la vulneración del derecho o libertad fundamental donde siempre existe una correlación clara entre las alegaciones del demandante, la consideración que sobre las mismas tengan las partes procesales y la consiguiente apreciación por parte del Tribunal Constitucional.

Incluso, como hemos visto, en la práctica, la argumentación ofrecida por el Tribunal se produce cuando alguna de las partes en el proceso, el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado ponen en duda la existencia misma de dicha especial trascendencia constitucional y, por tanto, se pone en duda la propia valoración o consideración que sobre la misma ha llevado a cabo el Tribunal para admitir el recurso. Es decir, de manera implícita se está cuestionando la labor del Tribunal en orden a dicha admisión. Por lo que el Tribunal se verá en la obligación de tener que justificar su propia labor, razonando por qué ha admitido el recurso en consideración a su especial trascendencia.

⁷⁰¹ STC 121/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º)

⁷⁰² STC 121/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 7º)

⁷⁰³ STC 121/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Segunda). (F.J.2º)

⁷⁰⁴ STC 121/2013, de 20 de mayo de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 5º)

Por tanto, y desde un punto de vista estrictamente formal, si efectivamente tal carga argumental y procesal es necesaria para la admisión del recurso, no puede entenderse por qué sólo consta siempre y de manera fehaciente las concretas argumentaciones en relación a la vulneración o lesión de los derechos fundamentales. Y no se transmite ni siempre, ni de igual manera, la carga consistente en la especial trascendencia constitucional y, cuando sí se produce, no se realiza de manera homogénea pues, incluso, en la mayoría de los casos se produce porque se cuestiona que efectivamente exista dicha especial trascendencia constitucional, lo que conlleva, de manera indirecta, el cuestionamiento de la labor del Tribunal en relación a la admisión de los recursos de amparo sobre esta cuestión.

2º) El desarrollo doctrinal del requisito especial trascendencia constitucional.

Llegados a este punto, debemos hacer una recapitulación sobre los aspectos formales y materiales relativos a la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo; criterios que se fueron configurando en las primeras resoluciones (requisitos formales) y que culminó con la STC 155/2009 (contenido material). Todo ello, para analizar la evolución de dichos requisitos desde la publicación de dicha sentencia hasta la fecha presente.

Como decía tal jurisprudencia inicial, el demandante deberá argumentar y acreditar en su demanda las lesiones aducidas y de manera clara establecer el amparo que se solicita. Y, por otro lado y de manera independiente, proceder a argumentar la especial trascendencia constitucional de su recurso. Para tal fin, la doctrina inicial del Tribunal determinaba lo siguiente, como carga impuesta al demandante de amparo:

a) La carga exigida al demandante de amparo en relación a la *especial trascendencia constitucional*.

a. I) Es una carga procesal, distinta a la argumentación respecto a la vulneración del derecho fundamental.

a. II) Es inexcusable.

a. III) Es insubsanable.

a. IV) Es necesaria una mención expresa.

a. V) No se trata de una mera formalidad procesal o <<cláusula de estilo>>.

a. VI) Consiste en una carga de argumentación de naturaleza sustantiva.

a. VII) El cumplimiento de la carga material impuesta por el art. 49.1 *in fine* LOTC, sin ánimo de exhaustividad, podrá corresponderse con los motivos o supuestos establecidos en la STC 155/2009, de 25 de junio (F.J. 2º).

Como se puede apreciar, básicamente, los cuatro primeros requisitos responden a la argumentación necesaria respecto a la especial trascendencia constitucional pero desde un punto de vista formal. Mientras que los tres últimos hacen referencia a que dicha argumentación posee la naturaleza sustantiva o de fondo requerida para entender cumplimentado el requisito de trascendencia constitucional.

b) La labor del Tribunal en orden a apreciar el cumplimiento de la especial trascendencia constitucional.

b. I) Le corresponde comprobar que efectivamente el demandante propicie al Tribunal los elementos necesarios para su admisión.

b. II) No cabe reconstrucción de oficio por parte del Tribunal.

b. III) La apreciación material de la *especial trascendencia constitucional* que establece el art. 50.1. b) LOTC, sin ánimo de exhaustividad, se corresponderá o podrá corresponderse con los supuestos establecidos en el F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio.

b. IV) Es al Tribunal Constitucional a quien, en última instancia, le corresponde apreciar el efectivo cumplimiento (art. 50.1 LOTC).

Todo ello, con la finalidad de comprobar si este esquema básico se corresponde con la labor llevada a cabo por el Tribunal en lo sucesivo, se ha mantenido inalterado a lo largo de la labor efectuada o, por contra, ha podido sufrir modificaciones relevantes. Para tal fin, debemos dejar a un lado el grueso de sentencias en las que nada se dice respecto a la especial trascendencia constitucional del recurso, por una razón obvia, ya que desconocemos de manera absoluta cuáles han sido las razones formales y materiales dadas por el demandante, así como las razones formales y materiales que han llevado al Tribunal a admitir el recurso y conocer sobre el fondo del mismo.

Por tanto, nos centraremos en la jurisprudencia emanada por el Tribunal tras la publicación de la STC 155/2009, en las que sí se pone de manifiesto dicha especial trascendencia constitucional. Pues a partir de tal doctrina inicial se van a añadir nuevos aspectos que en algunos casos complementará a la anterior pero, en otros, puede tildarse de contradictoria respecto a esa doctrina inicial. Nos encontramos con lo siguiente:

b. V) La argumentación respecto a la especial trascendencia constitucional no es una mera cuestión procesal sino que afecta al fondo del asunto.

Además de todo lo anterior, la especial trascendencia constitucional se alza como elemento necesario, pues permite la colaboración con el Tribunal para que conozca de supuestos que trasciendan al caso concreto. Por tanto, no es un argumento puramente procesal, sino que se alza como elemento que incide en el fondo del asunto.

“En cuanto a la carencia de especial trascendencia constitucional del asunto, se ha de aclarar, ante todo, que ésta no es una cuestión meramente procesal, sino que afecta directamente al fondo. Resulta evidente que, en el presente caso, la

demanda ha sido interpuesta tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, siendo la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3 y STC 155/2009, 25 de junio, FJ 2) de la nueva regulación del recurso de amparo “el requisito sustantivo o de fondo de la 'especial trascendencia constitucional' que impone el art. 50.1 b) LOTC para la admisión del recurso”, “toda vez que, en principio, tras la reforma llevada a cabo la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su 'especial trascendencia constitucional', frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba en su anterior regulación, en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas del demandante susceptibles de amparo”⁷⁰⁵.

b. VI) La alegación de la especial trascendencia constitucional con base en los supuestos establecidos en la STC 155/2009, no puede ser una mera argumentación retórica.

Que exista una argumentación material basada en la STC 155/2009, de 25 de junio; no puede establecerse como una mera referencia sin argumentación que así lo acredite.

“Este razonamiento dista de ser una mera reproducción retórica de uno de los supuestos previstos en la citada STC 155/2009, por lo que el recurrente satisface debidamente en la demanda la carga “ineludible” e “insubsanable” (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2) consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC), ya que, efectivamente, como el recurrente alega, este Tribunal no ha fijado doctrina respecto de la eventual vulneración del derecho a la intimidad (...)”⁷⁰⁶.

⁷⁰⁵ STC 89/2011, de 6 de junio de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 2º)

⁷⁰⁶ STC 115/2013, de 9 de mayo de 2013 (Pleno). (F.J.2º).

b. VII) El demandante debe además conectar las concretas vulneraciones aducidas con la especial trascendencia de su recurso.

Tanto la argumentación dada para justificar las lesiones o vulneraciones de los derechos fundamentales como la carga consistente en la especial trascendencia constitucional, no pueden confundirse la una con la otra, ni convertirse en compartimentos estancos. Por tanto, será necesaria una cierta conexión entre una y otras argumentaciones.

“Igualmente se constata en el recurso de amparo un esfuerzo argumental para conectar las vulneraciones denunciadas y los criterios establecidos en el art. 50.1 b) LOTC y en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 (STC 170/2011, de 3 de noviembre, FJ 3); conexión tanto material como formal, pues el recurrente invoca expresamente el apartado g) “cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales”.⁷⁰⁷.

b. VIII) No se puede hacer recaer dicha carga argumental sobre el Tribunal.

El obligado es el demandante de amparo que, con su labor, ayudará al Tribunal a identificar la especial trascendencia de su recurso.

“[L]a exigencia de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, es doctrina consolidada la que precisa que el demandante debe argumentar explícitamente que el amparo solicitado tiene una proyección objetiva (entre otras, STC 176/2012, de 15 de octubre, FJ 4) y colaborar con este Tribunal en la tarea de identificarla, conectando materialmente las vulneraciones denunciadas con los criterios establecidos en el art. 50.1 b) LOTC y desarrollados en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, que dotarían de trascendencia al recurso (STC 170/2011, de 3 de noviembre, FJ 3), sin que pueda trasladar esta carga al Tribunal por el riesgo de que pudieran confundirse

⁷⁰⁷ STC 127/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 2º).

dos requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional diferencia: la justificación de la especial trascendencia (art. 49.1 in fine LOTC), por un lado, y su propia existencia [art. 50.1 b) LOTC], por otro (STC 176/2012, FJ 4)”⁷⁰⁸.

b. IX) La argumentación dada por el demandante no tiene por qué coincidir con la apreciación que el Tribunal Constitucional tenga sobre la admisión.

Por tanto, una vez cumplimentado por el demandante la carga -formal y material- de la especial trascendencia constitucional. Tales argumentos que sirven inicialmente para la admisión no tienen qué ser idénticos a las razones que sirven para conocer y resolver sobre el fondo.

“Bien entendido que no existe una correlación simétrica entre la fase de admisión y la de decisión, ni mucho menos vinculación del recurso se traduzcan forzosa y miméticamente en el núcleo de la decisión que finalmente se adopte, toda vez que la estructura del razonamiento, el orden conforme al cual han de estudiarse las quejas ante nosotros esgrimidas, u otras razones pueden impedirlo”⁷⁰⁹.

b. X) El criterio de la “suficiencia” frente al déficit argumental, formal y material, expuesto en la demanda de amparo.

En muchas ocasiones aunque el Tribunal o, en su caso, la Sala reconozcan que existe una cierta quiebra o déficit argumental, frente a dicho cuestionamiento puede entender que, no obstante, existe una justificación suficiente que permite conocer y entrar al fondo del asunto.

“Pues bien, este óbice ha de ser rechazado, pues, como ha quedado expuesto en los antecedentes, la demanda de amparo contiene una argumentación destinada a satisfacer la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, argumentación que debe entenderse suficiente a estos efectos, pues no se limita a razonar la existencia de la vulneración de

⁷⁰⁸ STC 47/2014, de 7 de abril de 2014. (F.J. 2º)

⁷⁰⁹ STC 9/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sala Primera). (F.J. 3º).

derechos fundamentales por las resoluciones judiciales impugnadas (AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2, y 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2, por todos)”⁷¹⁰. (F.J. 2º).

b. XI) “La conexión material”. La subsunción por el propio Tribunal en los supuestos establecidos en la STC 155/2009, de 25 de junio.

Aunque en ocasiones es el propio Tribunal quien subsume las concretas argumentaciones dadas por el demandante en los supuestos establecidos en la STC 155/2009, de 25 de junio; a través del criterio de la “conexión material”.

“En el presente caso, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el recurrente realiza ese esfuerzo argumental, pues destina un apartado específico a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (páginas 10 y 11 de la demanda). Y aunque lo razonado en dicho apartado no constituya un modelo de claridad y precisión en el cumplimiento de la carga procesal que nos ocupa, sí puede afirmarse que —más allá de las vulneraciones denunciadas— pone de relieve los datos necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo solicitado (SSTC 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2), la conexión material entre las vulneraciones denunciadas y los criterios establecidos en el art. 50.1 b) LOTC y en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, necesaria para la trascendencia constitucional del recurso (STC 170/2011, de 3 de noviembre, FJ 3)”⁷¹¹.

b. XII) La especial trascendencia constitucional puede encontrarse no sólo en el concreto párrafo destinado a ello, sino también de manera implícita.

⁷¹⁰ STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º). También en este sentido: STC 61/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 32/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º) y STC 212/2013, de 16 de diciembre de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 2º); entre otras.

⁷¹¹ STC 107/2012, de 21 de mayo. (Sala Segunda). (FJ 2º) y, en tal sentido, véase también la STC 164/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 3º). En tal sentido, véanse entre otras la STC 165/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 166/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 167/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 168/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 169/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 3º); STC 170/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (F.J. 3º); STC 107/2012, de 21 de mayo. (Sala Segunda). (FJ 2º); STC 125/2013, de 23 de mayo de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º); STC 44/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 56/2013, de 11 de marzo de 2013 (Sala Segunda). (F.J. 1º); STC 31/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Segunda) (F.J. 2º).

También, el Tribunal puede reconocer que la especial trascendencia constitucional no se deriva expresamente sino de manera tácita en la demanda.

“Por otra parte, la especial trascendencia constitucional se fundamenta, al menos implícitamente, en el contraste entre la resolución judicial impugnada y la doctrina que este Tribunal ha elaborado en relación con la incidencia de las deficiencias estructurales en relación con las dilaciones indebidas, la cual aparece reflejada en algunas de las Sentencias que el demandante expresamente cita en la demanda. Ello podría haber llevado a este Tribunal a un proceso de reflexión interno dirigido a un posible cambio de doctrina (supuesto previsto en la letra b, fundamento jurídico 2, de la STC 155/2009, de 25 de junio). Con estos antecedentes, se puede entender que la parte recurrente ha cumplimentado la expresada carga, al argumentar sobre la proyección objetiva del amparo solicitado”⁷¹²

b. XIII) No es necesario argumentar la especial trascendencia constitucional de cada uno de los motivos alegados, ni posible seleccionar unos motivos u otros en base a la especial trascendencia.

Por tanto, la especial trascendencia constitucional ha de entenderse respecto al recurso y no a cada una de las lesiones o alegaciones realizadas por el demandante. Con lo cual, la apreciación de su existencia se produce en un solo acto y no es posible la selección de los motivos.

“En este caso, una vez admitido el recurso por apreciarse la especial trascendencia constitucional, no es posible seleccionar los motivos que deben ser objeto de enjuiciamiento en el proceso, como se pretende por el Abogado del Estado, puesto que el amparo constitucional no ha perdido su dimensión subjetiva como instrumento procesal para preservar o restablecer las violaciones de los derechos y libertades fundamentales, de manera que si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, como aquí ha sucedido, debe ser

⁷¹² STC 99/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda) (F.J. 3), en tal sentido véase: STC 58/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014. (F.J.2º).

admitido y examinado en la totalidad de su contenido, sin que sea posible incluir o excluir determinados motivos en función de su especial trascendencia constitucional. Dicho en otras palabras, la especial trascendencia constitucional se exige del recurso y no de cada uno de los motivos en concreto, todo lo cual nos lleva a desestimar el óbice opuesto por el Abogado del Estado”⁷¹³.

b. XIV) La especial trascendencia constitucional se extrae de la propia demanda, aunque no exista un apartado específico destinado a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso.

Pues bien, y a pesar de la doctrina anterior, el Tribunal admitirá a trámite y conocerá del fondo del asunto, aunque en la demanda de amparo no se haya destinado un apartado específico a alegar y argumentar la especial trascendencia constitucional del recurso.

“[C]onforme a la anterior doctrina observamos que en la demanda no se aprecia la inclusión de algún apartado dedicado a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, ni se menciona expresamente este requisito. Ahora bien, sí se puede encontrar en la argumentación del recurso un razonamiento del que se deduce la especial trascendencia constitucional que la actora atribuye al mismo”⁷¹⁴.

b. XV) El momento para determinar la especial trascendencia del recurso es la fase de admisión.

El Tribunal Constitucional considera que el momento procesal idóneo para determinar la existencia o no de la especial trascendencia constitucional del recurso es la fase de admisión. Procede, por ello, a limitar la inadmisibilidad por dicha causa en fases procesales posteriores⁷¹⁵.

⁷¹³ STC 2/2013, de 14 de enero de 2013 (Sala Primera). (F.J. 3º). En tal sentido, véase también: STC 46/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera); STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera).

⁷¹⁴ STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 2º) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (F.J. 2º). En tal sentido también, STC 126/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). (F.J. 2º) y STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda). (F.J. 3º).

⁷¹⁵ Desde la STC 17/2011, de 28 de febrero de 2011 (Sala Segunda). El Tribunal ha optado por aplicar un criterio restrictivo para inadmitir en fase posterior a la admisión a trámite: “no cabe

“Al ser un requisito material de admisibilidad, el momento procesal idóneo para el análisis de su cumplimiento es el trámite de admisión de la demanda de amparo”⁷¹⁶.

“[S]i ab initio el Tribunal se consideró suficientemente ilustrado, no cabe sino hacer un uso prudente de la facultad de inadmitir posteriormente la demanda por meros defectos en el modo de redactarla”. En fin, ha de considerarse que la recurrente ha cumplimentado, siquiera sea mínimamente, el requisito exigido por el art. 49.1 LOTC”⁷¹⁷.

Con lo cual, difícilmente va a cambiar de criterio sobre la admisibilidad, sean cuales sean las argumentaciones dadas por las partes respecto a la falta o inexistencia de la especial trascendencia constitucional. Y, efectivamente, no conocemos supuestos de inadmisión de demandas en base a la especial trascendencia constitucional en el período que va desde finales del año 2013 hasta la fecha presente. Es decir, el Tribunal admitirá a trámite en fase de admisión y esa inicial apreciación se mantendrá inalterable durante todo el proceso hasta su finalización mediante sentencia. Con ello, se está impidiendo o al menos limitando la capacidad del resto de las partes procesales para interponer dicho óbice o tacha de inadmisibilidad.

En relación a lo todo lo anterior, hemos podido comprobar que la doctrina inicial elaborada por el Tribunal respecto a la especial trascendencia constitucional, como requisito *formal* y *material*, se ha visto sustancialmente modificada. Tanto es así que incluso existe doctrina contradictoria tanto en relación a la acreditación por parte del demandante de amparo como respecto a la apreciación que sobre la misma le corresponde realizar al Tribunal Constitucional. No estableciéndose unos parámetros claros sobre los mismos

sino hacer un uso prudente de la facultad de inadmitir posteriormente la demanda por meros defectos en el modo de redactarla” (F.J. 2º).

⁷¹⁶ STC 191/2013, de 18 de noviembre de 2013. (F.J. 2º); STC 130/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera) y STC 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera). (FF.JJ. 2º)

⁷¹⁷ STC 32/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera). (F.J. 2º). Véase también STC 212/2013, de 16 de diciembre de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 2º); STC 126/2013, de 3 de junio de 2013. (Sala Segunda). (F.J. 2º) y STC 21/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda). (F.J. 2º).

que aporten la necesaria seguridad jurídica respecto a su cumplimiento, a su establecimiento como requisito necesario para la admisión, así como en relación a los parámetros que el propio Tribunal posee para considerarlo admisible a trámite.

C) LA ESTIMACIÓN, DESESTIMACIÓN E INADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO.

1º) Estimación de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal basados en la especial trascendencia del recurso de amparo.

A partir del desarrollo de la anterior jurisprudencia y su paulatino conocimiento por parte de los operadores jurídicos, hemos podido comprobar cómo dicha doctrina ha ido aplicándose sobre todo por parte del Ministerio Fiscal, quién ha realizado verdaderos esfuerzos argumentativos en orden a que sean admitidas demandas de amparo que, según su parecer, cumplieran con dichos requisitos⁷¹⁸. No podemos olvidar que es el Fiscal el único legitimado para interponer recurso de súplica contra la inadmisión de la demanda. Asimismo, tampoco podemos dejar de lado que el Tribunal ha determinado la carga que pesa sobre el Fiscal de índole material para hacer decaer una inadmisión inicialmente decretada.

Debido a ello, nos encontramos con interesantes autos donde se manifiestan esas alegaciones realizadas por el Fiscal. Recursos de súplica que, una vez interpuestos, no garantizan o determinan que el recurso de amparo vaya a ser finalmente admitido, pero lo que sí nos parece interesante es el debate que se suscita entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional en orden a la

⁷¹⁸ En relación a tal función resultan interesantes las Memorias anuales publicadas por la Fiscalía General del Estado donde se pone de manifiesto la labor que el Ministerio Fiscal viene ejerciendo al respecto. Pueden consultarse en:

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszPQLsh0VAQluD0w!/

Pero, sin duda, la Memoria que posee un especial interés es la de 2008 en la que, desde un primer momento, se trasladan a los Fiscales el alcance de la reforma efectuada por la L.O. 6/2007, y las concretas funciones que respecto a la misma han de realizar. En tal sentido, véase: https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszPQLsh0VAQluD0w!/?selAnio=2008&palabraBuscar=&btnBuscar2=Buscar. Págs. 404-412.

consideración del cumplimiento o incumplimiento de la carga procesal consistente en la alegación de la *especial trascendencia constitucional*.

Así nos encontramos ante supuestos en los que se alega por el Ministerio Fiscal que el recurso de amparo plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal⁷¹⁹; el incumplimiento general y reiterado de la doctrina del tribunal por parte de la jurisdicción ordinaria⁷²⁰ o en los que se invocan ambos supuestos materiales⁷²¹; también que existe una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional por parte de la jurisdicción ordinaria⁷²².

2º) Desestimación de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal por inadmisiones basadas en la especial trascendencia del recurso de amparo.

Como dijimos, el hecho de que se interponga un recurso de súplica por el Ministerio Fiscal y exista una solicitud de reconsideración al Tribunal, no garantiza que el recurso vaya a ser estimado.

Entre las inadmisiones acordadas por el Tribunal encontramos que se debe a que no se ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso⁷²³; por no apreciar la existencia de tal trascendencia constitucional⁷²⁴ o por no contener la demanda la más mínima referencia a la especial trascendencia constitucional⁷²⁵.

Frente a las mismas, la argumentación dada por el Ministerio Fiscal se centran en que dicha carga se ha cumplimentado⁷²⁶; que existe un apartado

⁷¹⁹ ATC 185/2011, de 21 de diciembre de 2011 (Sección Tercera).

⁷²⁰ ATC 123/2012, de 18 de junio (Sala Segunda).

⁷²¹ ATC 165/2011, de 12 de diciembre de 2011 (Sala Segunda).

⁷²² ATC 108/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Segunda) y ATC 18/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sección Primera).

⁷²³ ATC 11/2012, de 26 de enero de 2012 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º);

ATC 42/2012, de 7 de marzo de 2012 (Sección Primera). (Antecedente 2º);

ATC 48/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 3º)

⁷²⁴ ATC 29/2011, de 28 de marzo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 4º); ATC 44/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 4º).

⁷²⁵ ATC 49/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); ATC 50/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 1º).

⁷²⁶ ATC 11/2012, de 26 de enero de 2012 (Sección Cuarta). (Antecedente 3º).

destinado a dar cumplimiento a la carga procesal⁷²⁷; que no existe la trascendencia respecto a los concretos argumentos dados por los demandantes pero insta al Tribunal a que reconsidere la admisión en base a otros distintos, que pueden extraerse de la argumentación dada en la demanda⁷²⁸; que la especial trascendencia constitucional fluye por sí misma⁷²⁹ o se deriva por tratarse de los denominados amparos electorales⁷³⁰.

Las razones que llevan al Tribunal a desestimar el recurso son variadas y van desde que no se dedica ni tan siquiera un apartado en la demanda a cumplir con la carga procesal⁷³¹; que no se produce una carga argumental que vaya más allá de la propia lesión del derecho fundamental⁷³²; aunque se reconsidere la posibilidad de existencia de supuestos distintos a los alegados, realmente dichos supuestos materiales no se dan de manera efectiva⁷³³; en cuanto a los amparos electorales, niega tal especial trascendencia argumentando que de la citada STC 155/2009, no se puede derivar que de todo amparo parlamentario o electoral se derive necesariamente unas consecuencias políticas generales que conlleven la necesidad de conocer del fondo del asunto⁷³⁴ o, simplemente, que es al Tribunal a quien corresponde su admisión y que, una vez revisada la demanda así como las argumentaciones dadas por el Ministerio Fiscal, no procede cambiar esa apreciación inicial de inadmisión⁷³⁵.

Además, la razón para la inadmisión mediante providencia puede ser distinta a la falta o carencia de especial trascendencia constitucional, por ejemplo, por extemporaneidad del recurso⁷³⁶, por no haberse agotado debidamente la vía judicial previa⁷³⁷ o por inexistencia de lesión o vulneración del derecho fundamental⁷³⁸ y, frente a la misma, el Ministerio Fiscal interpondrá

⁷²⁷ ATC 42/2012, de 7 de marzo de 2012 (Sección Primera). (Antecedente 3º).

⁷²⁸ ATC 44/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 4º).

⁷²⁹ ATC 48/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 1º); ATC 50/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 1º).

⁷³⁰ ATC 49/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁷³¹ ATC 11/2012, de 26 de enero de 2012 (Sección Cuarta). (F.J. 3º).

⁷³² ATC 48/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 2º).

⁷³³ ATC 44/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (F.J. 0º).

⁷³⁴ ATC 50/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J. Único)

⁷³⁵ ATC 49/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (F.J. 2º);

⁷³⁶ ATC 23/2011, de 28 de febrero de 2011 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º);

ATC 31/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sección Segunda). (Antecedente 2º)

⁷³⁷ ATC 272/2013, de 25 de noviembre de 2013 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º).

⁷³⁸ ATC 116/2012, de 4 de junio de 2012 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º);

recurso de súplica. Pero, con independencia de si el Tribunal Constitucional estima o no el recurso interpuesto, de todas maneras lo inadmitirá de nuevo por carencia o falta de especial trascendencia constitucional, aunque esa no haya sido la causa original de inadmisión⁷³⁹.

Para finalizar, el auto más relevante sobre la especial trascendencia constitucional, fue el ATC 29/2011, de 17 de marzo de 2011 (Sección Primera). Donde la Sección entra a interpretar la *especial trascendencia constitucional* establecida en el art. 50 LOTC, para descartar que pueda insertarse en ella la “*especial gravedad de la lesión*” en la nueva configuración del recurso de amparo⁷⁴⁰; a diferencia sucede en el caso alemán que sí recoge expresamente dicha posibilidad § 93 a 2) de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgerichts)⁷⁴¹, por tanto, tal posibilidad no puede entenderse inserto en el supuesto g) del F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio⁷⁴².

Pues bien, como hemos visto, el legislador y la doctrina han entendido que el criterio de *especial trascendencia constitucional* sólo tiene un alcance o dimensión objetiva. Con independencia de lo anterior, según nuestro parecer, una afirmación así sólo y exclusivamente puede adoptarla el Tribunal actuando en Pleno y mediante Sentencia. Entre otras cuestiones porque sería una complementación, añadido o interpretación de la doctrina elaborada por el Pleno mediante la STC 155/2009, de 25 de junio; donde todos los Magistrados han tenido la posibilidad de pronunciarse a tal respecto. De hecho, un pronunciamiento así, tan taxativo y rotundo, no ha vuelto a producirse, ni para negar tal afirmación, ni para confirmarla, que tal vez sería preciso.

3º) Inadmisión de recursos de amparo mediante autos y sentencias.

ATC 2/2013, de 9 de enero de 2013 (Sección Segunda). (Antecedente 4º).

⁷³⁹ ATC 23/2011, de 28 de febrero de 2011 (Sección Cuarta). (FF. 3º y 4º);

ATC 31/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sección Segunda). (FF.JJ. 1º y 2º);

ATC 272/2013, de 25 de noviembre de 2013 (Sección Cuarta). (F.J. 2º);

ATC 173/2010, de 17 de noviembre (sección Primera). (FF.JJ. 2º y 3º).

⁷⁴⁰ ATC 29/2011, de 17 de marzo de 2011 (Sección Primera). (Antecedente 5º)

⁷⁴¹ ATC 29/2011, de 17 de marzo de 2011 (Sección Primera). (F.J. 3º)

⁷⁴² *Ibídem*.

A pesar de que expresamente la Ley Orgánica del Tribunal dispone que tanto la admisión como la inadmisión de las demandas de amparo se realizará mediante providencia (arts. 50.1 y 50.3 LOTC); también inadmitirá las demandas de amparo mediante auto. Es decir, no sólo inadmitirá demandas de amparo mediante providencias o por sentencia –como hemos visto- sino también mediante autos dictados no sólo por las Secciones, sino también por las Salas y por el Pleno del Tribunal.

Con independencia de si en las mismas el objeto de análisis es la falta de cumplimiento del requisito consistente en la especial trascendencia constitucional⁷⁴³ o la causa de inadmisión es otra distinta⁷⁴⁴, lo que sí tienen en común es que en ellas el Tribunal razona jurídicamente la causa de inadmisión, mientras que en las providencias, *per se*, es omitida dicha argumentación jurídica.

Entendemos que el Tribunal para dictar estos autos, lo hace en aplicación de la normativa relativa a las disposiciones comunes sobre procedimiento (Tít. VII LOTC) y, en concreto, en lo dispuesto en el artículo 86.1 LOTC. Aunque, como bien indica dicho precepto, “las decisiones de inadmisión inicial, (...)”, adoptarán la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma.” Y, efectivamente, la LOTC dispone expresamente otra forma que es la inadmisión mediante providencia (art. 50.1 LOTC).

Y también aquí hemos de expresar, al igual que antes, que tales inadmisiones mediante auto pueden crear un cierto desconcierto jurídico, o agravio comparativo, respecto a las demandas inadmitidas mediante providencia que, *per se*, son inmotivadas y, por tanto, el demandante va a desconocer los fundamentos que han llevado al Tribunal a inadmitir su recurso. Mientras que

⁷⁴³ ATC 25/2013, de 6 de febrero de 2013 (Sección Tercera); ATC 28/2013, de 11 de febrero de 2013 (Sala Primera).

⁷⁴⁴ AATC 134/2011 a 147/2011, de 3 de noviembre de 2011 (Sala Primera); ATC 192/2010, de 1 de diciembre de 2010 (Pleno); ATC 193/2010, de 1 de diciembre de 2010 (Pleno); ATC 7/2012, de 13 de enero de 2012 (Pleno); ATC 9/2012, de 13 de enero de 2012 (Pleno); ATC 21/2013, de 28 de enero de 2013 (Sala Primera); ATC 151/2013, de 8 de julio de 2013 (Sala Segunda); ATC 172/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Primera); ATC 52/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); ATC 53/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); ATC 300/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda).

otros recursos de amparo son igualmente inadmitidos pero, aquí sí, el demandante obtendrá unas razones jurídicas.

Si bien es cierto que existen propuestas en sentido contrario como son que la inadmisión por causas procesales distintas a la especial trascendencia constitucional y, ante la existencia de ésta, se inadmita mediante auto pues ello le permitirá al Tribunal aportar y construir razones jurídicas derivadas de dicha especial trascendencia, en tal sentido lo expresa, REQUEJO PAGÉS indicando que ese puede ser un remedio frente a esa eventualidad como puede ser, por ejemplo, que la lesión denunciada no sea verosímil pero cuestión planteada posea una especial trascendencia constitucional⁷⁴⁵.

El Tribunal no solo ha inadmitido demandas de amparo mediante providencia y autos sino también mediante sentencias.

Encontramos tachas de inadmisibilidad interpuestas por parte de la Abogacía del Estado⁷⁴⁶ o por el Ministerio Fiscal⁷⁴⁷. Por ello, y ya en la fundamentación jurídica de la sentencia, la Sala tras recordar su consolidada doctrina sobre la especial trascendencia constitucional, el modo de hacerla efectiva y su consideración respecto a su efectiva existencia⁷⁴⁸, aplica la misma al caso concreto para acreditar que, efectivamente, no se ha dado cumplimiento a la carga procesal impuesta⁷⁴⁹, algo que lleva necesariamente al inadmisión del recurso⁷⁵⁰.

Óbices o tachas de inadmisibilidad que también serán alegados por el Ministerio Fiscal y, como ocurrió en el anterior supuesto, el Tribunal en la fundamentación jurídica procedió a repasar su doctrina sobre el cumplimiento

⁷⁴⁵ REQUEJO PAGÉS, J.L.: "Jurisdicción Constitucional. Derecho Procesal Constitucional". REDC. Núm. 103, enero-abril 2015. Págs. 259-264.

⁷⁴⁶ STC 69/2011, de 16 de mayo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 8º). En tal sentido, véase también la STC 140/2013, de 8 de julio de 2013 (Sala Segunda).

⁷⁴⁷ STC 176/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Primera). (Antecedente 9º). En tal sentido, véase también la STC 178/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Segunda).

⁷⁴⁸ STC 69/2011, de 16 de mayo de 2011 (Sala Primera). (FF.JJ. 2º y 3º)

⁷⁴⁹ STC 69/2011, de 16 de mayo de 2011 (Sala Primera). (F.J. 4º).

⁷⁵⁰ STC 69/2011, de 16 de mayo de 2011 (Sala Primera). (F.J. 4º y Fallo). En tal sentido, véase también la STC 140/2013, de 8 de julio de 2013 (Sala Segunda).

del requisito de la especial trascendencia constitucional⁷⁵¹, a aplicar tal jurisprudencia al caso concreto⁷⁵² y a declarar la inadmisibilidad del recurso debido al incumplimiento de dicha carga procesal⁷⁵³.

No obstante, desde finales del año 2013 hasta la fecha presente, no se ha inadmitido mediante sentencia ningún recurso por incurrir el demandante en la falta de acreditación de la especial trascendencia constitucional. Creemos que ello es debido a las anteriores consideraciones que han llevado al Tribunal, en cierta medida, a reconstruir los requisitos para entender cumplimentada la especial trascendencia constitucional en la demanda. Como es la consideración de que es el trámite de admisión el momento procesal idóneo para apreciar la trascendencia constitucional del recurso, el criterio de la suficiencia argumental o el criterio de la conexión material respecto a los supuestos establecidos en la STC 155/2009.

Por un lado, si bien esto supone no limitar unas expectativas creadas al demandante de amparo que ve admitido a trámite su demanda y que, posteriormente, pueda ser inadmitida mediante sentencia pero, por otro lado, no es menos cierto que supone una modificación sustancial de la anterior doctrina sobre el cumplimiento de los requisitos para la admisión en base a la especial trascendencia del recurso.

También, esa nueva consideración en torno al cumplimiento, puede crear un cierto desconcierto jurídico, o agravio comparativo, respecto a las demandas inadmitidas mediante providencia por falta de especial trascendencia constitucional. Pues difícilmente podrá entenderse por un demandante de amparo que ha visto como su demanda ha sido inadmitida a trámite mientras que otras, por esas mismas razones, están siendo admitidas, incluso serán conocidas por el Tribunal mediante sentencia.

⁷⁵¹ STC 176/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Primera). (F.J. 3º).

⁷⁵² STC 176/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Primera). (F.J. 4º).

⁷⁵³ STC 176/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Primera). (F.J. 4º y Fallo). En tal sentido, véase también la STC 178/2012, de 15 de octubre de 2012 (Sala Segunda).

Debería reconsiderarse tal postura que, en cierta manera, conduce a la subsanación de un requisito por la mera admisión. Si no se cumple con los requisitos legalmente exigidos no queda reconstruido o enmendado por el mero hecho de haber pasado por un determinado filtro procesal. Esto, en definitiva, lo que indica es una cierta falta de deferencia hacia la obligación y consideración impuesta en relación a la especial trascendencia constitucional porque, a nadie se nos ocurriría pensar y al propio Tribunal proseguir sobre el fondo del asunto cuando, por ejemplo, una vez admitida a trámite se pone de manifiesto la falta de legitimación activa del demandante⁷⁵⁴; la extemporaneidad del recurso de amparo⁷⁵⁵ o por no haber agotado la vía judicial previa⁷⁵⁶. Como bien sabemos, el Tribunal no subsana dichas causas de inadmisión por el hecho de haber pasado la fase de admisión. La cuestión es lógica, ¿por qué existe un tratamiento distinto cuando se tratan todos de requisitos procesales necesarios para la admisión del recurso?

Pues una cosa es que exista cierta flexibilización a la hora de dar cumplimiento, como ocurría y ocurre con la flexibilización respecto a la correcta argumentación en relación a las lesiones y a los preceptos que se consideran vulnerados y, otra bien distinta, la admisión a pesar de su inexistente argumentación.

4º) Las causas de inadmisión

De lo anterior y con independencia de la apreciación sobre la existencia de la especial trascendencia constitucional del recurso, podemos extraer dos análisis: el, primero, que el número de recursos de súplica estimados supone poco menos de un tercio de los desestimados⁷⁵⁷ y, además, el que sean

⁷⁵⁴ STC 168/2012, de 1 de octubre de 2012 (Sala Primera) y STC 28/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); entre otras.

⁷⁵⁵ STC 186/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda); entre otras.

⁷⁵⁶ STC 178/2013, de 21 de octubre de 2013 (Sala Primera); STC 41/2014, de 24 de marzo de 2014 (Sala Segunda) y STC 57/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Primera); entre otras.

⁷⁵⁷ Independientemente de cuál era la causa de la inadmisión del amparo, desde el año 2010 hasta la fecha presente, se dictaron veintidós autos que estimaron el recurso de súplica del Ministerio Fiscal, frente a los setenta y dos que desestimaron el recurso. Además, hay que tener presente que de esos veintidós asuntos, no todos fueron finalmente admitidos a trámite y resueltos mediante sentencia. Con lo cual, el porcentaje de asuntos que prosperan y son finalmente conocidos mediante sentencia es muy inferior a los desestimados.

inicialmente estimados no significa que posteriormente se admitan a trámite, pues en muchos de ellos deberá dictarse nueva providencia que lo determine. En segundo lugar, que de dichos autos podemos extraer cuáles son las causas de inadmisión de las demandas. Como sabemos, el concreto contenido de las providencias no se hace público. Por tanto, gracias a la labor realizada por el Ministerio Fiscal a través de los recursos de súplica, podemos conocer cuáles son las razones procesales para la inadmisión. Así, podemos ver que no lo será sólo por incumplimiento del requisito consistente en la especial trascendencia constitucional, si no que la inadmisión lo será por distintas causas:

a) Extemporaneidad en la interposición del recurso de amparo.

Dentro de esta causa de inadmisión tienen cabida varias posibilidades que dan lugar a la misma. Tales como que se haya interpuesto la demanda en un plazo superior al legalmente establecido⁷⁵⁸; que no se haya agotado la vía judicial previa, es decir, que en dicha sede aún quedaran mecanismos para procurar la tutela por parte de la jurisdicción ordinaria⁷⁵⁹ o, todo lo contrario, que se hayan utilizado mecanismos procesales manifiestamente improcedentes⁷⁶⁰. También puede producirse tal inadmisión como consecuencia de la falta de denuncia previa ante la jurisdicción ordinaria⁷⁶¹.

b) Inexistencia o falta de apariencia de lesión o vulneración del derecho fundamental.

La inadmisión por esta causa se determina como consecuencia de la manifiesta inexistencia de lesión, es decir, que de la redacción fáctica dada

⁷⁵⁸ Entre otros, véase : ATC 23/2011, de 28 de febrero de 2011 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º); ATC 143/2013, de 4 de junio de 2013 (Sección Primera). (Antecedente 2º); ATC 31/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sección Segunda). (Antecedente 2º).

⁷⁵⁹ ATC 155/2011, de 8 de noviembre de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 5º); ATC 272/2013, de 25 de noviembre de 2013 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º).

⁷⁶⁰ ATC 22/2013, de 28 de enero de 2013 (Sección Cuarta). (Antecedente 1º); y, entre otros, véase también: ATC 145/2013, de 5 de junio de 2013 (Sección Cuarta). (Antecedente 4º); ATC 268/2013, de 19 de noviembre de 2013 (Sección Tercera). (Antecedente 4º); ATC 273/2013, de 29 de noviembre de 2013 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º); ATC 181/2014, de 4 de julio de 2014 (Sección Tercera). (Antecedente 2º); ATC 49/2015, de 27 de febrero de 2015 (Sección Cuarta). (Antecedente 3º).

⁷⁶¹ ATC 299/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sección Tercera). (Antecedente 4º).

queda patente que no ha existido tal vulneración o lesión del derecho fundamental⁷⁶².

c) Falta de legitimación activa.

En cuanto a la presente causa de inadmisión, a diferencia de las anteriores en los que se determinará como causa de inadmisión mediante providencia, en este caso nos encontramos que dicha tacha de inadmisibilidad se pondrá de manifiesto mediante auto⁷⁶³.

d) Insuficiente justificación o carencia de justificación de la especial trascendencia constitucional.

La especial trascendencia constitucional como causa de inadmisión puede ser estimada por distintas razones, tales como que la demanda no contenga ningún apartado destinado a justificar la especial trascendencia del recurso⁷⁶⁴; que la misma se confunda con las alegaciones sobre la lesión o vulneración del derecho fundamental⁷⁶⁵ o, en último lugar, que se produzca una insuficiente argumentación respecto a la especial trascendencia constitucional y, por tanto, el Tribunal no aprecia en el mismo tal especial trascendencia constitucional⁷⁶⁶.

⁷⁶² Entre otros, véase: ATC 116/2012, de 4 de junio de 2012 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º); ATC 2/2013, de 9 de enero de 2013 (Sección Segunda). (Antecedente 4º); ATC 164/2013, de 9 de septiembre de 2013 (Sala Segunda). (Antecedente 3º); ATC 172/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Primera). (Antecedente 2º); ATC 239/2014, de 10 de octubre de 2014 (Sección Cuarta). (Antecedente 3º); ATC 18/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 3º); ATC 26/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sección Segunda). (Antecedente 3º); ATC 43/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 4º); ATC 45/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 4º); ATC 299/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sección Tercera). (Antecedente 4º).

⁷⁶³ No hemos encontrado ninguna inadmisión por carencia de legitimación activa mediante providencia. Sólo mediante auto, además de las inadmisiones que por esta causa se han producido mediante auto: ATC 192/2010, de 1 de diciembre de 2010 (Pleno); ATC 193/2010, de 1 de diciembre de 2010 (Pleno).

⁷⁶⁴ ATC 49/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 3º): “En la demanda de amparo no se encuentra párrafo alguno destinado a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC)”. (Antecedente 3º)

⁷⁶⁵ ATC 48/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 2º). En tal sentido también: ATC 11/2012, de 26 de enero de 2012 (Sección Cuarta). (Antecedente 2º); ATC 42/2012, de 7 de marzo de 2012 (Sección Primera). (Antecedente 2º); ATC 108/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Segunda). (Antecedente 3º).

⁷⁶⁶ ATC 173/2010, de 17 de noviembre (Sección Primera): “La Sección Primera de este Tribunal, mediante providencia de 28 de julio de 2010, acordó no admitir el recurso de amparo, por no

Quizás este último supuesto sea el de mayor o difícil comprensión, ya que esta causa supone que, efectivamente, el demandante ha dedicado un apartado específico a argumentar la especial trascendencia constitucional (requisito formal) y además en el mismo se contiene una argumentación destinada a dar las razones por las que entiende que su recurso trasciende al caso concreto (requisito material) pero, no obstante, el Tribunal entiende que es insuficiente. Y sin embargo, tal y como hemos visto, el Tribunal ha admitido a trámite y resuelto mediante sentencia recursos en los que ni tan siquiera se había cumplido con el requisito *formal* de justificar la especial trascendencia constitucional. Y aquí también volvemos a la anterior cuestión suscitada, tal actuación también crea un cierto desconcierto jurídico, o agravio comparativo, de difícil justificación.

III.- LA CORRESPONDENCIA MATERIAL ENTRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL RELATIVAS A LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO.

Una vez analizado lo anterior, debemos adentrarnos a analizar si, efectivamente, las causas de corte objetivo por el que se admite a trámite la demanda y se entra al fondo del asunto se corresponden con la fundamentación jurídica que realizará el Tribunal.

Para empezar, hemos de recordar que en más de un sesenta por ciento de los asuntos desconocemos cuál o cuáles han sido las concretas argumentaciones dadas por el recurrente, así como la apreciación que sobre ella ha realizado el Tribunal. Por tanto, respecto a ese alto porcentaje no podremos hacer un análisis entre lo argumentado o asumido y lo efectivamente analizado. Es decir, no podremos hacer una valoración real entre la especial trascendencia

apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para la admisión del recurso, requiere el art. 50.1 b) LOTC". (Antecedente 4º). Véase también: ATC 165/2011, de 12 de diciembre de 2011 (Sala Segunda). (Antecedente 2º). ATC 123/2012, de 18 de junio (Sala Segunda). (Antecedente 4º). ATC 29/2011, de 28 de marzo de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 4º); ATC 185/2011, de 21 de diciembre de 2011 (Sección Tercera). (Antecedente 4º); ATC 137/2012, de 2 de julio (Sección Segunda). (Antecedente 4º); ATC 44/2015, de 25 de febrero de 2015 (Sección Primera). (Antecedente 4º).

constitucional alegada por el demandante, la consideración que sobre la misma ha efectuado el Tribunal y el efectivo alcance que dicha especial trascendencia constitucional ha tenido sobre el fondo del asunto.

Lo anterior no quiere decir que no existan casos en los que podamos vislumbrar una elaboración doctrinal o una trascendencia al caso concreto, lo que conllevaría que efectivamente el recurso posee una proyección objetiva, pero la misma se deriva de la tutela o argumentaciones dadas de índole o corte puramente subjetivo. En estas sentencias puede existir una elaboración doctrinal pero la misma se corresponde con los cánones propios de elaboración previos a la reforma efectuada sobre el recurso de amparo. Por tanto, esa vertiente objetiva del recurso, si existe, será tal y como existía antes de la entrada en vigor de la L.O 6/2007, de 24 de mayo, donde la vertiente objetiva era una consecuencia derivada de la tutela subjetiva. No obstante, como hemos visto, lo que realiza el Tribunal es una aplicación de la doctrina ya elaborada y jurisprudencia reiterada al caso concreto por lo que, y desde nuestro punto de vista, no estamos sino ante dilucidación de los denominados *casos fáciles*. Quizás, las razones que han llevado al Tribunal a conocer del fondo del asunto hayan sido otras pero, como se omite la especial trascendencia constitucional del recurso, no podemos sino extraer dichas conclusiones.

Por tanto, y para tal fin, tendremos que adentrarnos en ese casi treinta y cuatro (34%) de sentencias donde sí hay una argumentación sobre la *especial trascendencia constitucional* con el fin analizar la correspondencia existente entre la *especial trascendencia constitucional* y el fondo del asunto del que conoce el Tribunal.

Las sentencias que vamos a analizar a continuación pueden ser encuadradas en los distintos supuestos establecidos por la STC 155/2009, de 24 de mayo (F.J. 2º), bien por referencia expresa del demandante en amparo, bien por apreciación del propio Tribunal. El análisis que pretendemos abordar nos llevará a centrarnos en tales consideraciones de corte material o relativas al fondo del asunto y si de manera efectiva esto se va a corresponder con la argumentación de fondo o juicio material que realizará el Tribunal, con el fin

último de comprobar si existe una efectiva correspondencia entre la *especial trascendencia constitucional* material apreciada en el momento de admisión de la demanda de amparo y la consiguiente existencia real de dicha *especial trascendencia* de la que conocerá mediante sentencia.

1º) “a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional”.

Tal supuesto, efectivamente, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>> puesto que, como vimos, su función primordial será la de establecer a través de la labor interpretativa, que le corresponde como intérprete *supremo* de la Constitución, el objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales. También, como tuvimos ocasión de ver, esa labor interpretativa se hace necesaria cuando nos encontramos ante los denominados *casos difíciles*, es decir, cuando la dificultad del caso deriva de una doble vertiente: en relación a la norma (problemas normativos) y/o en relación a los hechos (problemas fácticos).

Dentro de este supuesto, aunque no se diga expresamente, se ha de encontrar también la introducción a través del concreto recurso de amparo de la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE, cuando se produzca una labor doctrinal por parte de tales órganos de garantía, todo ello en aplicación del *Principio de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados internacionales ratificados por España* y, en concreto, de la jurisprudencia del TEDH, mediante la asunción del principio de «cosa interpretada» respecto a la jurisprudencia que verse sobre los derechos reconocidos en el CEDH que sean coincidentes con los derechos y libertades establecidos en la CE.

Inserto en este concreto supuesto a) y dentro también de las apreciaciones que sobre el mismo hemos hecho, esto es, que el conocimiento de fondo elaborado por la sentencia, la interpretación y argumentación dadas por

el Tribunal se corresponden de manera efectiva con la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>. Todo ello con independencia de la opinión sobre el acierto o no de la misma, algo en lo que no entraremos. Nos encontraríamos las siguientes sentencias:

Los requisitos que han de cumplirse para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual. STC 77/2014, de 22 de mayo (Sala Primera). Partiendo de su jurisprudencia inicial el derecho a la tutela judicial efectiva exige la presencia del acusado en el juicio oral⁷⁶⁷. Además, continúa el Tribunal, el órgano judicial tiene el deber de velar por la indefensión del justiciable, añade, en base a la STEDH de 30 de enero de 2001, caso Vaudelle c. Francia, las obligaciones derivadas de tal derecho cuando existan indicios de que el acusado pueda sufrir trastornos mentales⁷⁶⁸. Efectivamente, no existe jurisprudencia previa del Tribunal al respecto, para tal fin recordará el mandato dirigido a los poderes públicos establecido en el art. 9.2 CE, que obliga a remover todos aquellos obstáculos que impidan la igualdad efectiva de los individuos. También recuerda el deber de los poderes públicos de amparar a las personas con discapacidad psíquica para el disfrute pleno de los derechos establecidos en la Constitución (art. 49 CE), entre los que se encuentran el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE)⁷⁶⁹. Asimismo, desde la perspectiva del art. 10.2 CE, establece la importancia de la Convención de Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, suscrito por España. En concreto, las obligaciones que impone dicha Convención que, entre otras, establece la obligación de asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, incluso procediendo a realizar los ajustes necesarios y adecuados que garanticen la participación efectiva de estas personas en todos los procedimientos y sus fases (art. 13.1 de la Convención)⁷⁷⁰.

Está vetado por la Constitución prohibir una manifestación por el mero hecho de su reiteración. STC 24/2015, de 16 de febrero (Sala Segunda). Para

⁷⁶⁷ STC 77/2014, de 22 de mayo. F.J. 2º

⁷⁶⁸ STC 77/2014, de 22 de mayo. F.J. 2º

⁷⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁷⁰ STC 77/2014, de 22 de mayo. F.J. 2º

ello argumenta que a los poderes públicos les está vedado controlar el contenido del mensaje a difundir, salvo que éste sea ilegal, asimismo tampoco se puede sostener que una vez lanzado el mensaje, el derecho de manifestarse para reivindicarlo pueda quedar consumido o agotado. Es decir, al no estar limitada la libertad de expresión en tal sentido, tampoco puede estarlo el vehículo utilizado para amplificar los pensamientos e ideas que se quieren expresar y difundir⁷⁷¹, por tanto no puede estar limitado el derecho en base a su reiteración.

La vulneración del derecho a la igualdad por la exclusión de medios de comunicación con gran repercusión social de contratos de publicidad institucional. STC 130/2014, de 21 de julio (Sala Primera) y STC 160/2014, de 6 de octubre (Sala Primera). En estas sentencias se produce una concreción doctrinal relativa a la publicidad institucional y al deber de las Administraciones públicas de actuar con objetividad y con sometimiento a la legalidad, sin arbitrariedad. También, se establecen los indicios necesarios para que pueda entenderse que ha existido una vulneración de la prohibición de discriminación por razones ideológicas (art. 14 CE)⁷⁷², en definitiva, se produce la lesión del anterior derecho, en relación con la libertad de información (art. 20.1 d) CE⁷⁷³ “al verificarse que se había excluido de la inserción de publicidad institucional a un medio de comunicación particularmente relevante en función de su implantación y audiencia, sin justificación administrativa que objetivara dicha decisión de conformidad con la pluralidad de elementos concurrentes y los criterios establecidos legalmente”⁷⁷⁴.

Las condiciones que han de darse para considerar que un matrimonio islámico se ha celebrado válidamente, a efectos de percibir la prestación por viudedad. STC 194/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda). El Tribunal en esta sentencia recuerda que el derecho al matrimonio es un derecho constitucional (art. 32 CE), pero que son las normas estatales las que regulan los requisitos y forma de los matrimonios válidos⁷⁷⁵. Pues bien, establece que para que el matrimonio islámico posea efectos civiles en nuestro país ha de

⁷⁷¹ STC 24/2015, de 16 de febrero. F.J. 4º.

⁷⁷² STC 130/2014. F.J. 3º. STC 160/2014. F.J. 3º.

⁷⁷³ STC 130/2014. FF.JJ. 4º y 5º. STC 160/2014. FF.JJ. 4º y 5º.

⁷⁷⁴ STC 130/2014. F.J. 3º. STC 160/2014. F.J. 3º.

⁷⁷⁵ STC 194/2014. F.J. 4º.

cumplir con una serie de requisitos: en primer lugar, que se celebre en una comunidad islámica perteneciente a la Comisión Islámica de España; en segundo lugar, que se celebre a través de dos vías posibles: una, previa instrucción de expediente que acredite la capacidad matrimonial de los contrayentes según determina el Código civil o una segunda vía, sin instrucción de expediente previo pero que, una vez celebrado, es necesaria la inscripción en el registro con el fin de que el Juez encargado compruebe que los contrayentes cumplen con dichos requisitos⁷⁷⁶.

La concurrencia de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad del recurrente (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), STC 115/2013, de 9 de mayo (Pleno) y STC 170/2013, de 7 de octubre (Sala Primera). En la primera de ellas debido al hecho de que la policía procediese a manipular o consultara la agenda de un teléfono móvil y de las llamadas entrantes y salientes del mismo, que fue encontrado en el lugar de comisión de unos hechos delictivos, sin que existiera una previa autorización judicial para tal actuación; el Pleno determinó que tal consulta, en relación al derecho al secreto de las comunicaciones, no tuvo por objeto una eventual comunicación telefónica del demandante con terceras personas; ni los datos recogidos en la agenda de contactos telefónicos forman parte de una comunicación actual o consumada, ni proporcionan información sobre actos concretos de comunicación pretéritos o futuros⁷⁷⁷. En todo caso, la sentencia determinó que podría verse afectado el derecho al derecho a la intimidad, pero que esa afección estaba justificada en el caso concreto al perseguir un fin legítimo como era la averiguación de un delito, por tanto, la actuación policial en ese caso contaba con habilitación legal y era proporcionada al fin perseguido⁷⁷⁸. La segunda de las sentencias versa sobre la constitucionalidad de la fiscalización del correo corporativo de un trabajador de la misma por parte de la empresa STC 170/2013, de 7 de octubre (Sala Primera). En primer lugar, en relación al secreto de las comunicaciones, el correo electrónico estaba destinado exclusivamente a uso profesional, pues estaba expresamente limitado en el convenio colectivo, por tanto, cualquier uso extraprofesional podía ser fiscalizado por la empresa. En segundo lugar,

⁷⁷⁶ STC 194/2014. F.J. 5º.

⁷⁷⁷ STC 115/2013 (FF.JJ. 3º a 6º)

⁷⁷⁸ STC 115/2013 (Antecedente 3º)

respecto al derecho a la intimidad, ya que la utilización de las herramientas informáticas para fines particulares estaba expresamente establecido como falta laboral en el convenio colectivo, tal circunstancia advertía al trabajador sobre esa posibilidad de control para el correcto cumplimiento de la prestación laboral⁷⁷⁹.

Sobre la obtención de datos de carácter personal, STC 96/2012, de 7 de mayo de 2012 (Sala Primera). El Tribunal entiende que la interpretación y aplicación del art. 521.1.6º LEC realizada por el juzgador de instancia para la obtención de datos personales, es contraria a la protección otorgada por el art. 18.4 CE⁷⁸⁰, lo que obliga que el juez fundamente tal medida de manera reforzada, ya que se trata de una medida limitativa del derecho fundamental. Añadiendo, además, que tales datos no pueden ser obtenidos y puesto a disposición de las asociaciones de consumidores y usuarios sin un consentimiento previo por parte de sus titulares⁷⁸¹.

Sobre los derechos a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la información (art. 20.1 CE). STC 7/2014, de 27 de enero. (Sala Primera). El Tribunal Constitucional en base a la STEDH Von Hannover c. Alemania, Gran Sala 7 de febrero de 2012, de 30 de enero; modificó su doctrina a través de las SSTC 12/2012, de 30 de enero (Sala Primera); sobre la proyección o condición de personaje público⁷⁸²; el carácter público de los lugares⁷⁸³; el interés público de la publicación⁷⁸⁴ y en relación a que la persona haya dado a conocer con anterioridad aspectos de su vida privada⁷⁸⁵ y, esta última jurisprudencia, se produjo poco tiempo antes de que el Tribunal Supremo cuando dictara la sentencia que trae causa, con lo cual perfectamente podía no ser conocida por el TS cuando dictó su resolución. En tal sentido también, 176/2013, de 21 de octubre (Sala Segunda).

Sobre los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y a la igualdad (art. 14 CE), en relación a la denegación de admisión de iniciativa

⁷⁷⁹ STC 170/2013 (FF.JJ. 4º y 5º)

⁷⁸⁰ STC 96/2012. (F.J. 6º)

⁷⁸¹ STC 96/2012. (F.J. 9º).

⁷⁸² STC 7/2014. F.J. 4º.

⁷⁸³ Ídem

⁷⁸⁴ STC 7/2014. F.J. 4º.

⁷⁸⁵ Ibídem.

legislativa popular, STC 19/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). El Tribunal entra a conocer si tal inadmisión se adecua a lo preceptuado en la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña⁷⁸⁶. Para afirmar que la Mesa de la Cámara actuó respecto a la inadmisión sin cobertura legal⁷⁸⁷.

En relación al Procedimiento de orden de detención y entrega a país miembro de la UE, sin que se haya tenido en cuenta la situación de arraigo en nuestro país. STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera), al no dar una respuesta el juzgador de instancia una respuesta fundada en relación a la interpretación del art. 12.2 f) de la Ley 3/2003, en base a la Decisión Marco 2002/584/JAI y la STJUE, Lopes Da Silva. Pues ambas –Decisión Marco y STJUE- que posibilitarían la denegación de la ejecución de la orden europea de detención y entrega, cuando queda acreditado el arraigo laboral, familiar, etc⁷⁸⁸.

Sin embargo, en otras sentencias se hace más difícil apreciar o percibir esa conexión entre la admisión en base a dicho supuesto a) de la STC 155/2009, de 24 de mayo y el fondo del asunto del que conoce el Tribunal Constitucional, es decir, la *especial trascendencia constitucional* en base a su dimensión objetiva. En tal sentido encontramos las siguientes sentencias:

Sobre el abono de determinados períodos de prisión provisional para el cumplimiento de penas acumuladas, STC 168/2013, de 7 de octubre (Sala Segunda). Si bien la Sala afirma que sobre la mayor parte de las cuestiones planteadas existe jurisprudencia del Tribunal, añade que es necesaria la delimitación y análisis de dicha jurisprudencia al supuesto de “cumplimiento sucesivo, por orden de gravedad, de múltiples penas (art. 75 CP), que fueron impuestas en distintos procesos que han sido acumulados (...) (art. 988 de la Ley de enjuiciamiento criminal), a las que se ha fijado judicialmente un límite temporal máximo de cumplimiento efectivo (art. 76 CP)”⁷⁸⁹. La Sala deniega el amparo solicitado al entender que no es irrazonable computar, como tiempo

⁷⁸⁶ STC 19/2015. F.J 4º.

⁷⁸⁷ STC 19/2015. F.J 5º.

⁷⁸⁸ STC 50/2014. Antecedente 3º.

⁷⁸⁹ STC 168/2013, de 7 de octubre. (F.J. 5º)

efectivamente cumplido con repercusión sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo establecido, un solo tiempo material de privación cautelar de libertad⁷⁹⁰.

Sobre reglas de abono de la prisión preventiva, señalando en particular que no resultan de aplicación a los supuestos en los que, de conformidad con lo previsto en el art. 76.1 del Código penal, STC 35/2014, de 27 de febrero de 2014 (Pleno). El Tribunal procede a analizar y recordar su jurisprudencia al respecto sobre tales artículos iniciada con la STC 57/2008 pero, esta concreta cuestión, ha sido analizada por jurisprudencia más reciente a través de las SSTC 148/2013 y 168/2013. En síntesis, dicha doctrina viene a determinar que el abono de la prisión provisional debe abonarse en la misma causa y que, por tanto, no es inconstitucional la interpretación realizada para denegar el que se descuente del límite máximo de cumplimiento efectivo⁷⁹¹. Por tanto, niega que se haya producido una lesión de los derechos fundamentales alegados y procede a la desestimación del recurso⁷⁹². No obstante, a dicha resolución se agrega un voto particular discrepante firmado por cuatro Magistrados en el que se pone en duda dicha doctrina constitucional, haciendo referencia a la STEDH (Gran Sala) de 21 de octubre de 2013, caso del Río Prada contra España⁷⁹³.

Sobre denegación de petición de renovación del permiso de trabajo y residencia, STC 46/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera). El Tribunal reconoce que se está ante un supuesto distinto a otros conocidos con anterioridad, pues éste versa sobre renovación del permiso de residencia y mientras que aquéllos lo eran de solicitud. Por tanto, el Tribunal establece que la interpretación efectuada, tanto por los órganos administrativos como por los órganos judiciales, sobre la normativa en materia de extranjería que impedía la renovación porque dicha denegación operaba *ope legis* al existir antecedentes penales⁷⁹⁴, es una interpretación excesivamente rigurosa o formalista de la Legislación de extranjería cuando dicha norma permitía una valoración (arts. 37.3 y 54.9 Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería), así como una

⁷⁹⁰ STC 168/2013, de 7 de octubre. (F.J. 6º)

⁷⁹¹ STC 35/2014. FF.JJ. 3º a 5º.

⁷⁹² STC 35/2014. F.J.5º.

⁷⁹³ STC 35/2014. Voto particular suscrito por la Magistrada Adela Asua Batarrita y los Magistrados don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol Ríos.

⁷⁹⁴ STC 46/2014. F.J. 5º.

ponderación en relación al tipo delictivo⁷⁹⁵, y que tampoco las resoluciones ponderaron el resto de circunstancias personales y familiares. Por tanto, dicha falta de ponderación de las concretas circunstancias por parte de los órganos judiciales, es consecuencia de una interpretación de la norma que no respeta el canon de constitucionalidad de motivación del derecho a la tutela judicial efectiva y, con ello, se está produciendo una lesión del derecho⁷⁹⁶.

En otros casos, y según nuestra valoración, nos resulta imposible estimar dónde se encuentra la apreciación de la *especial trascendencia constitucional* respecto al fondo del asunto. Además, no es que se trate de una reiteración de su doctrina a un caso concreto, lo que hemos denominado como *casos fáciles*, sino que nos volvemos a encontrar que el Tribunal sigue manteniendo, a pesar la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, una actividad jurisdiccional que choca o entra en conflicto con la labor llevada a cabo por los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. En concreto, y como vimos, en relación al control de la aplicación de la legalidad ordinaria por parte del Tribunal Constitucional, sobre el fondo del asunto y en relación al control por los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria. En tal sentido:

Sobre aplicación de consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en materia de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, STC 89/2011, de 6 de junio. (Sala Segunda). Denegación de amparo por no encontrar que las resoluciones sean irrazonables, desproporcionadas o rigoristas, STC 44/2013, de 25 de febrero (Sala Segunda). En relación al régimen de visitas en centros penitenciarios, STC 28/2013, de 11 de febrero (Sala Primera). En relación a la inadmisión de un recurso de apelación interpuesto en lugar distinto al que determina la legislación procesal, STC 47/2014, de 7 de abril (Sala Primera). Sobre el emplazamiento personal, STC 122/2013, de 20 de mayo (Sala Primera) y en relación al emplazamiento por edictos, (STC 126/2014, de 21 de julio (Sala Primera) y STC 30/2014, 24 de febrero de 2014 (Sala Segunda).

⁷⁹⁵ *Ibídem*.

⁷⁹⁶ STC 46/2014. F.J. 6º.

2º) “b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, (...), o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE”

Este supuesto, al igual que el anterior, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, aquí el punto de partida no es la inexistencia de doctrina previa, es decir, en este caso el Tribunal sí ha realizado una labor previa de interpretación y concreción de las *normas iusfundamentales* pero, tal concretización normativa, decae –podemos decirlo así- en causa de *invalidéz* debido a circunstancias *externas o sobrevenidas* como es el *surgimiento de nuevas realidades sociales o cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental* que conlleven la necesidad de un replanteamiento o reconsideración de la doctrina anterior o, esa reconsideración, venga impuesta a través del establecimiento de doctrina novedosa por parte de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere y, en concreto, en relación a la jurisprudencia del TEDH. También puede deberse a *circunstancias internas*, por una reconsideración de la misma que le lleve al Tribunal a modificar la *norma iusfundamental* o un determinado aspecto de la misma.

Siguiendo la línea de lo anterior, encontramos sentencias en las que su contenido material o de fondo se corresponde con tal supuesto en el que se ha insertado:

En relación a la no discriminación por razón de sexo (Art. 14 CE), STC 26/2011, de 14 de marzo (Sala Primera), alegada por un padre que solicitó la adscripción al turno de noche en la residencia de educación en la que trabajaba como ayudante técnico educativo, para hacer compatible su vida profesional con la familiar, al tener dos hijos menores a los que cuidaba junto con su esposa,

también trabajadora. Tras la apreciación en relación a la falta de ponderación respecto a los derechos fundamentales en juego⁷⁹⁷. El Tribunal estima la vulneración del derecho a la no discriminación (art. 14 CE) por razón de sus circunstancias personales o familiares, relacionadas con su responsabilidad de índole paternal, respecto a la asistencia de todo orden respecto a sus hijos menores de edad (art. 39.3 CE), haciendo retrotraer las actuaciones⁷⁹⁸.

Sobre vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), como consecuencia de la sustanciación de la condena mediante la declaración de un testigo anónimo u oculto⁷⁹⁹. STC 75/2013, de 8 de abril (Sala Primera), se trata, por tanto, de un supuesto distinto al del testigo protegido, estamos ante un supuesto de testigo “oculto”. Es decir, sin ser visto ni oído –voz distorsionada- que declara contra el acusado y cuya identidad no será conocida por él, tan sólo por el órgano juzgador y la defensa. Pues bien, la poca jurisprudencia existente sobre el testigo protegido –STC 654/1994, de 28 de febrero- lleva a la Sala a la necesidad de ahondar en los requisitos necesarios para compatibilizar la protección de los testigos con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)⁸⁰⁰. Para ello la Sala realiza un análisis de la abundante jurisprudencia que sobre la materia ha elaborado el TEDH⁸⁰¹.

Sobre vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo. En esta ocasión se trataba de una trabajadora embarazada que no había superado el período de prueba en la empresa para la que prestaba sus servicios. STC 173/2013, de 10 de octubre (Pleno), el Pleno entra al fondo de la cuestión planteada, analizando para la ello la concreta doctrina establecida, en concreto, las SSTC 94/2008 y 124/2009. Para el Pleno el presente asunto es distinto a los allí enjuiciados pues el tratado aquí es un supuesto de extinción del contrato y no un supuesto de despido de la trabajadora, por lo que el art. 55.5 b) LET no le

⁷⁹⁷ STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (F.J. 6º)

⁷⁹⁸ STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera). (FF. JJ. 4º y 5º. F.J.7º y Fallo)

⁷⁹⁹ STC 75/2013, de 8 de abril. (Sala Primera). (Antecedentes 2º y 3º)

⁸⁰⁰ STC 75/2013. (F.J. 3º)

⁸⁰¹ STC 75/2013. (FF.JJ. 4º y 5º)

sería aplicable⁸⁰², denegando por tanto el amparo solicitado⁸⁰³. No obstante, a la sentencia se le suman sendos votos particulares⁸⁰⁴.

Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), STC 188/2013, de 4 de noviembre (Sala Segunda), al haberse demolido la vivienda al tratarse de una construcción ilegal sin que mediase orden de demolición por parte del Ayuntamiento, ya que la vivienda se reconstruyó tras una previa actuación administrativa de demolición⁸⁰⁵. Tras exponer la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho invocado, así como la relativa a los requisitos que han de contemplarse en relación a la autorización de entrada en el domicilio⁸⁰⁶, pero que permite delimitar algunas cuestiones en relación a la demolición de la vivienda ya acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal⁸⁰⁷. No obstante, contra el parecer mayoritario de la Sala, se formula un voto particular discrepante⁸⁰⁸.

Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), STC 54/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Segunda). El Tribunal entra a conocer sobre la prestación de consentimiento válido cuando se trata de domicilio de persona física, así como los requisitos que ha de cumplir para que sea eficaz⁸⁰⁹. Además y por conexión, también se habría vulnerado el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), ya que los datos se obtuvieron en dicha entrada domiciliaria⁸¹⁰.

Pero, y con ocurrió con el anterior apartado, la conexión entre la admisión en base a dicho supuesto b) de la STC 155/2009, de 24 de mayo y el fondo del asunto del que conoce el Tribunal Constitucional, es decir, la *especial trascendencia constitucional* en base a su dimensión objetiva se hace menos

⁸⁰² STC 173/2013. (F.J. 4º)

⁸⁰³ STC 173/2013. (Fallo)

⁸⁰⁴ El primero de ellos emitido por el Magistrado don Andrés Ollero Tassara y el segundo formulado por el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, al que se adhieren los Magistrados doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Juan Antonio Xiol Ríos.

⁸⁰⁵ STC 188/2013, de 4 de noviembre (Sala Segunda). (Antecedente 2º)

⁸⁰⁶ STC 188/2013. (FF.JJ. 2º y 3º)

⁸⁰⁷ STC 188/2013. (F.J. 5º)

⁸⁰⁸ Voto particular emitido por los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y doña Adela Asua Batarrita.

⁸⁰⁹ STC 54/2015. F.J 5º.

⁸¹⁰ STC 54/2015. F.J 6º.

evidente o más difícil de percibir. En tal sentido encontramos las siguientes sentencias:

Sobre interpretación de la redacción dada al incidente de nulidad de actuaciones art.241.1 LOPJ⁸¹¹, STC 126/2013, de 3 de junio (Sala Segunda).

Sobre libertad de expresión (art. 20.1 a) CE) y de información (art. 20.1 d) CE), por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un funcionario público⁸¹², STC 216/2013, de 19 de diciembre (Pleno). El Tribunal Constitucional básicamente lo que hace es replantear la doctrina elaborada por el ATC 200/2010, de 21 de diciembre (Sala Segunda); la cual determinaba que ante la lesión achacable a la resolución del Tribunal Supremo siempre era necesario interponer el incidente de nulidad de actuaciones para entender agotada la vía judicial previa. Mediante la presente sentencia se niega tal afirmación, estableciéndose que para la interposición del incidente habrá de estarse a las circunstancias de cada caso⁸¹³.

Se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), como consecuencia de la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, ya que la interpretación que realiza el órgano judicial es restrictiva respecto a la nueva configuración que otorga la reforma efectuada por la L.O. 6/2007. STC 9/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda). El recurso en este caso le ha servido al Tribunal para aplicar y reafirmar su doctrina sobre el incidente de nulidad de actuaciones, así como para perfilarla en cuanto a supuestos concretos como es el caso de inadmisión del mismo por “incongruencias omisivas”⁸¹⁴.

Sobre el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación a la interpretación y aplicación del art. 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), STC 151/2013, de 9 de septiembre (Sala Primera). La Sala tras recordar el amplio margen que posee el legislador para modelar el proceso penal

⁸¹¹ STC 126/2013. (F.J. 5º).

⁸¹² STC 216/2013, de 19 de diciembre (Pleno). (Antecedentes 2º y 3º).

⁸¹³ STC 216/2013 (F.J. 2º)

⁸¹⁴ STC 9/2014. F.J. 6º y Fallo.

y que el derecho a la prueba (art. 24.2 CE) es un derecho de configuración legal⁸¹⁵, determina que la interpretación y aplicación del artículo 46.5 LOTJ realizada por el juzgador de instancia es conforme a los derechos fundamentales alegados y a la propia doctrina del Tribunal⁸¹⁶.

Sobre el deber de audiencia del acusado, STC 157/2013, de 23 de septiembre (Sala Segunda). Tras exponer su doctrina existente sobre la materia, así como la doctrina consolidada del TEDH⁸¹⁷, sobre la falta de necesidad de audiencia cuando las discrepancias versen exclusivamente en cuestiones jurídicas. Como podemos comprobar, la Sala aplica al supuesto concreto la doctrina ya elaborada, otorgando el amparo y haciendo retrotraer las actuaciones⁸¹⁸, ya que el enjuiciamiento alcanzó a cuestiones de hecho y no a cuestiones meramente jurídicas.

Aquí también, y según nuestra valoración, nos encontramos sentencias en las que nos resulta imposible estimar dónde se encuentra la apreciación de la *especial trascendencia constitucional* respecto al fondo del asunto. Como dijimos, no ya porque se trate de una reiteración de su doctrina a un caso concreto, lo que hemos denominado como *casos fáciles*, sino que nos volvemos a encontrar que en el Tribunal sigue manteniendo, a pesar la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, una actividad jurisdiccional que choca o entra en conflicto con la labor llevada a cabo por los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. En tal sentido:

En relación a la falta de identificación verán del conductor de un vehículo derivada de la interpretación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), y el derecho a la legalidad sancionadora, STC 29/2014, de 24 de febrero (Sala Primera) y STC 21/2015, de 16 de febrero (Sala Segunda). Sobre la apreciación y aplicación de la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas establecida en el código penal, STC 78/2013, de 8 de abril (Sala Segunda). Sobre inadmisión

⁸¹⁵ STC 151/2013 (FF. JJ. 5º y 6º)

⁸¹⁶ STC 151/2013 (Fallo)

⁸¹⁷ STC 157/2013 (F.J. 6º)

⁸¹⁸ STC 157/2013 (F.J. 7º)

de recurso por falta de aportación documental de la representación procesal que ostentaba, STC 167/2014, de 22 de octubre (Sala Segunda). Sobre dilaciones indebidas en el proceso contencioso-administrativo en materia de extranjería. STC 58/2014, de 5 de mayo (Sala Segunda), STC 89/2014, de 9 de junio (Sala Segunda) y STC 99/2014, de 23 de junio (Sala Segunda). En relación al derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en Derecho, STC 9/2015, de 2 de febrero (Sala Primera).

3º) “c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general”

Tal supuesto, efectivamente, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>> puesto que, como vimos, la misma no sólo se circunscribe a la determinación y concreción normativa de las disposiciones de derecho fundamental sino que, también, tal dimensión permite determinar el alcance de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales en sentido estricto, es decir, el alcance de las obligaciones derivadas de los derechos en relación a los poderes públicos que, como vimos, conceptuaba a derechos fundamentales también como concretos mandatos de protección y de optimización, que inciden en las distintas funciones del Estado; en este caso en relación al Poder Legislativo.

Recursos de amparo en los que se alega la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), como consecuencia de la denegación de pensión de viudedad a parejas de hecho que no han tenido, o no han podido tener hijos, SSTC 55/2013, de 11 de marzo (Sala Segunda), STC 77/2013, de 8 de abril (Sala Segunda) y, en tal sentido también, STC 188/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda). Dicha denegación fue debida a la aplicación de la disposición adicional tercera c) de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social⁸¹⁹, que condiciona el otorgamiento de la pensión de viudedad al hecho de que *el causante y el beneficiario hubieran*

⁸¹⁹ SSTC 55/2013, de 11 de marzo y 77/2013, de 8 de abril. Ambas dictadas por la Sala Segunda del Tribunal.

tenido hijos comunes. Demandas se fundamentan en la discriminación en el caso de parejas homosexuales masculinas⁸²⁰ o transexuales masculinos⁸²¹, los cuales biológicamente no pueden tener hijos. En los supuestos se declara vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, en aplicación de la STC 41/2013, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional y nula la letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, como consecuencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Debido a que en dicha resolución era desconocida por el juzgador de instancia cuando dictó la sentencia de la que trae causa el amparo.

Sin embargo, y a diferencia de lo anterior, no todas las alegaciones pueden circunscribirse en supuestos tan palmarios como es la aplicación de un precepto inconstitucional. Así nos encontramos otros en los que no sólo es que no cotejen la norma legal en relación al derecho fundamental vulnerado, lo cual podría dar lugar a una resolución de inconstitucionalidad de la ley o el precepto de la misma que se cuestiona, sino que en lo cuestionado es la interpretación y aplicación de la ley realizada por el juzgador de instancia. En tal sentido:

Sobre vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), al entender que se ha interpretado de manera errónea el art. 3 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) y no tenerse en cuenta las circunstancias concretas de dicha unidad familiar, STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera). Las Salas entran al fondo del asunto y, en primer lugar, en relación a la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la interpretación realizada del art. 3 LAJG, comienzan recordando su consolidada doctrina en torno a la gratuidad de la asistencia para aquellos que carecen de recursos económicos para litigar (art. 119 CE), junto con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)⁸²². Por tanto, el Tribunal procede a aplicar al caso concreto su propia doctrina que ya consideró dicha ley conforme a la Constitución. Por ello, y de entrada, la norma no es objeto del cuestionamiento de fondo, pero lo que sí se produce es un análisis de si el caso concreto se circunscribe o no dentro de lo preceptuado en la norma legal y, por tanto, si las

⁸²⁰ STC 55/2013, de 11 de marzo. (Antecedente 3º)

⁸²¹ STC 77/2013, de 8 de abril. (Antecedente 3º)

⁸²² STC 118/2014, F.J. 3º. STC 128/2014, F.J. 3º

circunstancias personales y económicas de los demandantes de amparo daban lugar a prestación de la asistencia jurídica gratuita.

4º) “d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución”.

En relación al supuesto, no podemos sino mostrar ciertas objeciones pues, según nuestro parecer, el uso que pueda dársele a este concreto supuesto conllevaría seguir manteniendo una de las causas de fricción que vimos entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Como hemos de recordar, una de las principales objeciones en relación a la anterior configuración del recurso de amparo era la invasión competencial del Tribunal Constitucional en el ámbito de la interpretación de la legalidad ordinaria atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Si bien, desde nuestro punto de vista, este precepto puede cumplir su función en el ámbito de la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, pues puede permitir un control sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley y un control de la interpretación de la misma. Ahora bien, como expusimos más arriba, el Tribunal no debe realizar dicha labor cuando sólo existe una conexión remota con tales derechos fundamentales y apelábamos a que sólo podrá entrar cuando se produzcan supuestos muy extremos de irrazonabilidad. Pues en este caso, como ocurre con el anterior, el Tribunal Constitucional debe actuar cuando hay un riesgo grave y evidente de puesta en peligro del propio sistema de garantías de los derechos fundamentales.

Pues bien, a pesar de nuestras advertencias y recelos, el único caso en el que se alega de manera expresa este supuesto d) del FJ.2º de la STC 155/2009, de 25 de junio; es la STC 167/2013, de 7 de octubre 2013 (Sala Segunda), sobre procedimiento de filiación no matrimonial, donde la madre del menor interesó la inscripción de los apellidos en el Registro Civil siendo primero el de la madre y el segundo el del padre⁸²³. Algo que le fue denegado, al no existir acuerdo mutuo en el orden, se determinó que la aplicación era la regla

⁸²³ STC 167/2013, de 7 de octubre (Sala Segunda)

general, es decir, primero el apellido del padre y segundo el de la madre. Se alegan por tanto como vulnerados el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14. CE) y el derecho a la propia imagen del menor (art.18.1 CE)⁸²⁴. La Sala entra a analizar principalmente la doctrina elaborada por el TEDH y el TJUE mediante la que se determina el derecho al nombre como derecho inserto en el ámbito del derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE)⁸²⁵. Por ello, el Tribunal entiende que la regulación legal –art. 109 CC y 194 del Reglamento del Registro Civil- que tiende a asegurar el derecho al nombre y la determinación de la filiación; en primer lugar, de mutuo acuerdo por parte de los progenitores, en segundo lugar, la determinación del apellido paterno seguido del materno y en tercer y último lugar, la posibilidad de inversión por propia voluntad del menor cuando alcance la mayoría de edad⁸²⁶, es contraria a la interpretación de jurisprudencia emanada por los tribunales supranacionales, declara por tanto vulnerado el derecho a la propia imagen del menor⁸²⁷.

Cuestión distinta es si en base a la tal jurisprudencia es posible seguir manteniendo la regulación legal en sus propios términos por tratar de salvar a toda costa la constitucionalidad de la ley por vía interpretativa. No obstante, y lo que en estos momentos interesa, es que efectivamente se puede apreciar la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>> en aplicación del *principio de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados internacionales ratificados por España*, que tuvimos ocasión de ver en los supuestos anteriores.

No obstante hemos de decir que, aunque este sea el único caso en el que expresamente se admite el amparo por la vía del supuesto d) del F.J. 2º de la STC 155/2009; las reticencias que respecto a esta posibilidad de control se han visto confirmadas en otros casos que ya hemos visto y que tendremos ocasión de ver más adelante pero, por ahora, sirva este caso que hemos visto como

⁸²⁴ STC 167/2013, (Antecedente 3º)

⁸²⁵ STC 167/2013. (F.J. 5º)

⁸²⁶ STC 167/2013. (F.J. 6º)

⁸²⁷ STC 167/2013 (Fallo)

ejemplo de interpretación de la ley conforme a la Constitución como paradigma de la admisión a través de este concreto supuesto.

5º) “e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;”

Si el anterior supuesto nos planteaba dudas e incertidumbres, que la doctrina este siendo *incumplida de modo general y reiterado*, este concreto supuesto -llegado el caso- puede mostrarse contrario a la admisión del recurso de amparo desde su dimensión objetiva. Como vimos, respecto al primer inciso, este sería el claro ejemplo de los denominados *casos fáciles*, en los que se produce una subsunción del hecho concreto en la norma previamente determinada por el propio Tribunal, pero debe tenerse en cuenta que, como vimos en su momento, una interpretación laxa del mismo puede derivar en un control y fiscalización sobre el fondo del asunto realizado por los tribunales ordinarios o en un control por parte respecto a los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria. Mientras que el segundo supuesto, que *existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental*, sí puede derivarse del mismo una dimensión objetiva del recurso susceptible de admisión puesto que sí podría encuadrarse en los denominados *casos difíciles*, es decir, cuando la dificultad del caso deriva de una doble vertiente: en relación a la norma (problemas normativos) y/o en relación a los hechos (problemas fácticos) pero, al igual que el anterior, una interpretación amplia, o en un sentido no estrictamente objetivo respecto de la admisión, puede tener las mismas consecuencias que el anterior.

Respecto a la admisión de recursos de amparo basados en este concreto supuesto encontramos los siguientes:

Sobre el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) en el ámbito penitenciario, para establecer si efectivamente –en relación al art. 25 CE– cabe la posibilidad de intervención de las comunicaciones por parte de los funcionarios del centro penitenciario, STC 107/2012, 21 de mayo (Sala Segunda). Tras la exposición de su doctrina⁸²⁸, el Tribunal determina que las limitaciones al derecho sólo pueden venir determinadas por ley –algo que no establece la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP)– pero es que, además, el reglamento penitenciario (art. 49.2) prohíbe expresamente la *restricción, suspensión o intervención* de las comunicaciones entre los reclusos y las autoridades judiciales⁸²⁹. Por tanto, la intervención sufrida por el recurrente atenta contra su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones⁸³⁰. Además, como tal hecho fue la base para la apertura del expediente sancionador se vulneró asimismo el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que la prueba obtenida lo fue mediante la vulneración de un derecho fundamental⁸³¹.

En la STC 88/2013, de 11 de abril (Pleno), lo alegado por el demandante es la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.1 CE)⁸³². Ahora bien, según nuestro parecer, la relevancia o importancia que posee esta demanda de amparo reside en que le permite al Tribunal en Pleno replantear la doctrina elaborada por las Salas. En concreto, sobre la interpretación del plazo de presentación de las demandas de amparo establecido en el art. 85.2 LOTC, doctrina inicialmente elaborada por las Salas⁸³³. La interpretación realizada establece que escritos pueden presentarse del plazo para su interposición, ante el registro general del propio Tribunal Constitucional o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad española.

Pero otras, según nuestra apreciación, incurrirían en las críticas anteriormente mencionadas, así:

⁸²⁸ STC 107/2012 (F.J. 4º).

⁸²⁹ STC 107/2012 (F.J. 5º)

⁸³⁰ STC 107/2012 (F.J. 5º)

⁸³¹ STC 107/2012 (F.J. 6º y Fallo)

⁸³² STC 88/2013. (Fallo)

⁸³³ STC 88/2013. (FF.JJ. 2º a 5º)

En relación a su reiterada doctrina en relación al art. 24.2 CE, STC 145/2011, de 26 de septiembre de 2011 (Sala Segunda), el Tribunal declara vulnerado el derecho de defensa del recurrente en amparo durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador que decretaba su expulsión del territorio español⁸³⁴. Sobre la tutela del derecho de manifestación (art. 21 CE), STC 193/2011, de 12 de diciembre de 2011 (Sala Segunda); tras la exposición y compilación de su doctrina sobre el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE), el Tribunal finalmente desestima el recurso de amparo interpuesto, sin que en ningún momento se corrija o matice la aplicación de su propia doctrina efectuada por los tribunales de instancia⁸³⁵. Sobre vulneración los derechos a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE)⁸³⁶, en relación a la prueba admitida y no practicada, y a la defensa. STC 212/2013, de 16 de diciembre (Sala Segunda).

6º) “f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ)”.

Este supuesto puede cumplir una función dentro de la dimensión objetiva del amparo pues, a través de él, se permite al Tribunal Constitucional actuar cuando hay un riesgo grave y evidente de puesta en peligro del propio sistema de garantías de los derechos fundamentales. Esto es, un riesgo cierto de puesta en peligro del propio sistema normativo instaurado. Pero, ahora bien, no todo apartamiento o desconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional debe dar lugar al conocimiento del recurso de amparo pues ello podría dar lugar a que, en última instancia, todo recurso de amparo puede ser objeto de control por parte del Tribunal ya que cualquier desviación en la interpretación y aplicación pueda dar lugar a dicho conocimiento. Además, debe existir una manifestación concreta y expresa por parte de órgano judicial de no acatar o aplicar la jurisprudencia constitucional.

⁸³⁴ STC 145/2011 (F.J. 3º a 5º y Fallo).

⁸³⁵ STC 193/2011. (FF.JJ. 3º a 8º)

⁸³⁶ STC 212/2013. (Fallo).

Es el caso de la tramitación de procedimientos de *habeas corpus*. Frente evidente desconocimiento de los órganos judiciales, en estas sentencias la Salas del Tribunal procederán a reproducir la doctrina ya elaborada, asentada y consolidada, para aplicarla al caso concreto. Para concluir que, aplicando la anterior doctrina a los concretos hechos⁸³⁷, el órgano judicial debía haber admitido a trámite, sustanciado y resuelto el procedimiento de *habeas corpus* de conformidad a lo dispuesto en la L.O. 6/1984; al no hacerlo así se ha vulnerado el derecho a la libertad personal de la persona detenida en las dependencias policiales (art. 17.1 y 17.4 CE)⁸³⁸. Por tanto, el Tribunal otorga el amparo solicitado y declara la nulidad, sin retroacción de las actuaciones, de los Autos dictados por el órgano judicial⁸³⁹.

Pero como decimos, no se trata de un recurso o una sentencia aislada, sino que el Tribunal tendrá que admitir a trámite y volver a reiterar su doctrina más que consolidada sobre dicho procedimiento. En tal sentido, véase también la STC 21/2014, de 10 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 32/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 195/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda) y STC 42/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda). Incluso ha llevado al Tribunal a tener que dar “un toque de atención” a los órganos jurisdiccionales sobre la obligación legal de cumplir con la doctrina citada.

“El frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que este Tribunal puede observar es grave, carece de justificación y dota de especial trascendencia constitucional a este recurso. De ese modo, se hace necesario reiterar que este Tribunal ha declarado que el procedimiento de *habeas corpus* no puede verse mermado en su calidad o intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su amparo debe ser plenamente efectivo, y no solo formal, para evitar que quede menoscabado el derecho a la libertad, ya que la esencia histórica y constitucional de este procedimiento radica en que el Juez compruebe personalmente la situación de quien pide el control judicial, siempre que la persona se encuentre efectivamente detenida, ofreciéndole una oportunidad de hacerse oír (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4).

⁸³⁷ STC 12/2014. F.J. 4º.

⁸³⁸ *Ibidem*.

⁸³⁹ STC 12/2014. Fallo.

Por otra parte, también es preciso recordar que es a los órganos judiciales a los que corresponde la esencial función de garantizar el derecho a la libertad mediante el procedimiento de habeas corpus controlando las privaciones de libertad no acordadas judicialmente; que en esa función están vinculados por la Constitución; y que tienen la obligación de aplicar e interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (art. 5.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)⁸⁴⁰.

También, hemos de decir que alguna de estas sentencias ha servido para conocer sobre aspectos puntuales de los derechos fundamentales no conocidos con anterioridad. Por ejemplo, no se cumple con lo preceptuado, con la puesta a disposición judicial, cuando se produce la comparecencia del detenido ante el Secretario Judicial⁸⁴¹. También, cuestiones concretas como el alcance de la renuncia al procedimiento y la doble condición del órgano judicial (instructor del procedimiento y Juzgado que tramita el procedimiento de habeas corpus)⁸⁴².

Sobre vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)⁸⁴³, STC 59/2011, de 3 de mayo de 2011 (Sala Primera). En primer lugar, por dejar sin respuesta las alegaciones vertidas por el demandante durante toda la tramitación del expediente y también durante el posterior recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciaria⁸⁴⁴, a través del uso de las denominadas *resoluciones estereotipadas*. El Tribunal hace una llamada de atención a los jueces de Vigilancia Penitenciaria para que acaten la jurisprudencia al respecto y se ponga fin a las llamadas *respuestas estereotipadas*. Todo ello, en base al deber de acatamiento impuesto por el art. 5 de la LOPJ⁸⁴⁵

⁸⁴⁰ STC 21/2014. F.J. 2º.

⁸⁴¹ STC 32/2014. F.J. 4º.

⁸⁴² STC 195/2014. F.J. 4º.

⁸⁴³ STC 59/2011. (F.J. 4º Y Fallo).

⁸⁴⁴ STC 59/2011. (F.J. 4º)

⁸⁴⁵ STC 59/2011 (F.J. 8º).

Sobre la controvertida doctrina relativa al instituto de la prescripción de los delitos, STC 1/2013, de 14 de enero, STC 2/2013, de 14 de enero y STC 32/2013 de 2013, de 11 de febrero (todas dictadas por la Sala Primera). Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que como sabemos puede tildarse de contradictoria o, más bien, se trata de interpretaciones dispares sobre el inicio del cómputo de la prescripción, que conlleva consecuencias jurídicas distintas⁸⁴⁶. Todo ello a declarar vulnerado de los demandantes de amparo, por incurrir las sentencias impugnadas en una manifiesta inobservancia del deber de acatamiento de la doctrina constitucional, declarándose por tanto la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y la nulidad de las resoluciones recurridas.

Como vemos, se siguen admitiendo a trámite demandas en las que se alega este concreto supuesto material. Estamos ante recursos en los que la *especial transcendencia* versa sobre la aplicación de la doctrina sobre el inicio del cómputo de la prescripción de los delitos elaborada por el Tribunal Supremo. Doctrina que dista de la elaborada por el Tribunal Constitucional que, *grosso modo*, consiste en que los plazos de prescripción no se paralizan hasta que no exista una determinada actuación judicial. Mientras que, la doctrina emanada del Tribunal Supremo, indica que el plazo de prescripción de los delitos se paraliza por la actuación de cualquier persona o interesado, mediante la interposición de denuncia o querella. No obstante, el Legislador orgánico ha actuado en consecuencia y ha procedido a reformar el Código Penal⁸⁴⁷ para intentar zanjar esta cuestión, aunando ambos criterios doctrinales sobre el instituto de la prescripción penal⁸⁴⁸. Pero, obviamente, podrán seguir llegando demandas de

⁸⁴⁶ STC 1/2013, de 14 de enero; STC 2/2013, de 14 de enero y STC 32/2013, de 11 de febrero. Todas dictadas por la Sala Primera del Tribunal.

⁸⁴⁷ La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal a dado una nueva redacción a los artículos 131 y 132 del Código Penal.

⁸⁴⁸ Como decimos, y puede comprobarse, el Legislador ha intentado unificar ambos criterios doctrinales, actuando como mediador en ese “conflicto” suscitado entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Según nuestro parecer, ello se desprende de la nueva redacción dada al art. 132.2 C.P.:

“La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

amparo al Tribunal para la aplicación de su doctrina, por tanto, el cambio legislativo sólo podrá interpretarse en el sentido marcado por el Tribunal.

En los casos siguientes, difícilmente se puede apreciar tal voluntariedad expresa y manifiesta de acatamiento:

Sobre la inaplicación del descuento del tiempo que el demandante permaneció en prisión provisional sobre el total de la pena impuesta, en este caso al tratarse de dos causas no había sido descontado en su totalidad sino el tiempo que duró la prisión provisional de la primera de las causas⁸⁴⁹, STC 92/2012, de 7 de mayo (Sala Primera). En relación a la falta de identificación verán del conductor de un vehículo derivada de la interpretación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), y el derecho a la legalidad sancionadora, STC 45/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda). Sobre la revocación parcial de una sentencia en segunda instancia, STC 11/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Primera).

Tanto es así que desde dentro del Tribunal, -Magistrada Roca Trías, Ortega Álvarez y Ollero Tassara-, se hace un llamamiento para que proceda a matizar qué alcance ha de dársele al supuesto f) del F.J. 2º de la STC 155/2009. Pues “la contradicción de un pronunciamiento judicial con cualquiera de las resoluciones dictadas por este Tribunal Constitucional no puede calificarse, sin más, como una negativa manifiesta del deber de acatamiento de nuestra

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo”.

⁸⁴⁹ STC 92/2012. (F.J. 3º).

doctrina”, por tanto debe existir un “elemento intencional o volitivo”, pues “la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, fuera objetivable y verificable, al “ser algo radicalmente distinto a la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación”; en otras palabras, “a una decisión consciente de soslayarla”, puesto que hasta este momento se habían admitido cuando ha existido ese rechazo expreso y consciente de inaplicar la doctrina del Tribunal. Por tanto, se cuestiona si cabe que esa “voluntad” tenga que ser necesariamente “expresada o explícita” o si cabe también una voluntad “implícita”. Como en este caso se ha admitido por ser una voluntad implícita, a su juicio, la Sala debió “hacer explícitos los motivos que le llevaron a apreciar la especial trascendencia constitucional del presente recurso”. Por tanto, hace un llamamiento e insta al Pleno del Tribunal para que “clarifique el significado de esta causa de especial trascendencia constitucional, para concretar si incluye o no los supuestos de negativa implícita a aplicar la doctrina de este Tribunal, según lo establecido en el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”⁸⁵⁰.

7º) “g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.

Como dijimos, la STC 155/2009 no establecía un *numerus clausus* de supuestos, sino que determinaba seis supuestos más concretos y una “cláusula residual” en la que podrían subsumirse aquellas demandas que, no pudiendo encuadrarse en los anteriores supuestos, poseyeran un alcance objetivo y general.

Pues bien, para el análisis debemos encuadrar estos supuestos de alcance general en tres supuestos más concretos: en primer lugar, aquellas sentencias que entran a conocer de determinados *amparos electorales*; en segundo lugar, las que conocen de los denominados *amparos parlamentarios* y,

⁸⁵⁰ Se inserta mediante Voto particular a la STC 11/2014, de 27 de enero de 2014.

en tercer y último lugar, aquellas que en la argumentación, o en su consideración por el Tribunal, se aprecia que el supuesto *trasciende al caso concreto*. En tal sentido, puede entenderse, que pueden existir causas de índole objetivo o que la *especial trascendencia constitucional* del recurso no pueda encuadrarse específicamente en alguno de los supuestos anteriores.

Ahora bien, con independencia de cuál sea esa apreciación, la *especial trascendencia constitucional* como *dimensión objetiva del recurso de amparo* no puede no darse. Si bien es cierto que, respecto a los *amparos parlamentarios* no se establece una vía judicial previa sino que el órgano jurisdiccional que conocerá de los mismos con exclusividad será el Tribunal Constitucional. Pues bien, como veremos, mayores problemas plantean los *amparos electorales* puesto que en algunos casos el Tribunal Constitucional no entrará para realizar una interpretación *secundum constitutionem* de la legislación electoral, sino que supondrá una revisión de la previa actuación judicial.

a) Amparo Electoral

Nos encontramos ante recursos de amparo contra la sentencia dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, también llamada “*Sala del 61*”, por tratarse de partidos, coaliciones o agrupaciones sucesoras de otros previamente ilegalizados; STC 60/2011, de 5 de mayo (Sala Segunda), STC 61/2011, de 5 de mayo (Sala Segunda), STC 62/2011, de 5 de mayo (Pleno). En estos casos, la *trascendencia constitucional* es difícilmente cuestionables, ya que su conocimiento deriva de la importancia del sistema de partidos en el propio régimen democrático.

Varios son los recursos de amparo que conocerá dentro de este supuesto todos ellos sustentados en base a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al tratarse el art. 23 CE de un derecho de configuración legal, que son admitidos ya que le permite entrar a conocer la nueva regulación dada a la LOREG mediante la L.O. 2/2011, de 28 de enero. También que se trate de cuestiones no conocidas con anterioridad.

Sobre vulneración del derecho de participación consagrado en el art. 23.1 CE, al interpretarse de manera rigurosa la regulación contenida en el art. 96.2 LOREG, ya que la señal o aspa en la papeleta no altera, daña o estropea el sentido del voto, con lo que no debería procederse a su invalidación, STC 124/2011, de 14 de julio (Sala Primera).

En relación a la presentación de avales de candidaturas a Elecciones Generales (art. 169.3 LOREG), se interpusieron multitud de recursos de amparo contra la inadmisión de candidaturas por falta de cumplimiento de la nueva regulación, SSTC 162 a 172/2011, de 3 de noviembre (Sala Primera). El Tribunal reconocerá en estas sentencias el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE). Declarará la nulidad de los acuerdos de la Junta Electorales Provinciales y hará retrotraer las actuaciones para que por tales Juntas se admita la subsanación mediante la aportación de avales y previo el examen de los mismos, decida lo que corresponda sobre la proclamación de las candidaturas⁸⁵¹.

Sobre la interpretación dada a la nueva regulación del art. 75 de la LOREG; STC 105/2012, de 11 de mayo de 2012. (Sala Primera). La cuestión debatida se centra en la declaración de nulidad de 332 votos de electores inscritos en el censo de electores residentes ausentes que remitieron su voto directamente a la junta electoral provincial y no a través de la correspondiente oficina consular, tal y como establece la nueva redacción dada al art. 75.4 LOREG⁸⁵².

Sobre vulneración de los derechos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE), así como la vulneración de los derechos de participación (art. 23.1 CE), al no haberse realizado una correcta interpretación de los requisitos establecidos en la regulación electoral (arts. 196 y 198 LOREG); STC 125/2013, de 23 de mayo (Sala Primera). Ello lleva a la Sala a determinar que no es posible introducir un candidato que no formó parte de las listas electorales y cuya elección no había sido sometida a sufragio por parte de

⁸⁵¹ SSTC 162 a 172/2011, de 3 de noviembre (Sala Primera). (Fallo).

⁸⁵² STC 105/2012, de 11 de mayo. (Sala Primera). (Antecedente 4º)

los electores⁸⁵³. No obstante, el Tribunal Constitucional tiene que volver sobre este asunto, pues se interpone nuevo recurso de amparo contra los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento en orden a ejecutar la anterior sentencia; STC 147/2013, de 6 de agosto (Sala Primera), para declarar la nulidad de los mismos⁸⁵⁴.

La demanda tiene su origen en la adjudicación de un concejal mediante un procedimiento de azar (lanzamiento de moneda al aire); STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera), al producirse un empate en el número de votos entre las dos únicas candidaturas presentadas y siendo siete los concejales a repartir⁸⁵⁵. Ahora bien, a pesar de que el Tribunal deniega el amparo⁸⁵⁶ porque el demandante no había agotado correctamente la vía judicial previa⁸⁵⁷, entra al fondo del asunto para establecer que la solución adoptada es conforme al art. 23.2 CE⁸⁵⁸.

El recurso de amparo tiene su origen en la sentencia dictada por el TSJ de Navarra; STC 114/2014, de 7 de julio (Sala Primera). En la sentencia recurrida se realizó una interpretación de la Ley 12/1991, de 16 de marzo, reguladora del proceso electoral de los concejos de Navarra. La Sala procede a analizar por primera vez la Ley Foral, realizando una interpretación de la misma conforme al contenido proclamado en el art. 23 CE, así como a su propia doctrina respecto a dicho precepto constitucional⁸⁵⁹. Interpretación distinta a la que realizó el órgano judicial. Es por ello que la Sala procede a declarar vulnerado el derecho y a declarar la nulidad de las resoluciones recurridas⁸⁶⁰.

En otros casos, en concreto la STC 123/2011, de 14 de julio (Sala Primera); la admisión conllevará la revisión de la actuación efectuada por los órganos de la jurisdicción pues, en estos casos que veremos a continuación, no se trata de supuestos que permitan una interpretación novedosa de la legislación

⁸⁵³ STC 125/2013. (F. J. 8º y Fallo)

⁸⁵⁴ STC 147/2013 (Fallo)

⁸⁵⁵ STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera). (Antecedente 2º)

⁸⁵⁶ STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (Fallo)

⁸⁵⁷ STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (F. J. 2º)

⁸⁵⁸ STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (F. J. 3º).

⁸⁵⁹ STC 114/2014, F.J. 5º.

⁸⁶⁰ STC 114/2014, Fallo.

electoral (LOREG). Al versar sobre una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes. También la Sala nos traslada las argumentaciones dadas para justificar la especial trascendencia del recurso.

b) Amparo Parlamentario.

En relación a varias demandas de interpuestas por varios diputados de las Cortes Valencianas contra una serie de resoluciones dictadas por la Mesa de dicho Parlamento, que inadmitían varias preguntas dirigidas al Gobierno de dicha Comunidad Autónoma y por no admitirse por la Mesa las solicitudes de comparecencia en la Cámara de determinadas personas. STC 44/2010, de 26 de julio (Sala Primera) y STC 191/2013, de 18 de noviembre (Sala Primera). Se alega que es el Tribunal el único órgano jurisdiccional que puede entrar a conocer de las concretas vulneraciones de los derechos fundamentales producidas en sede parlamentaria; siendo esta la argumentación dada para justificar la *especial trascendencia constitucional del recurso*⁸⁶¹. La Sentencia analiza la consolidada doctrina del Tribunal relativa a la motivación que ha de contener las resoluciones dictadas por las Mesas de los Parlamentos Autonómicos. Tras ello, el Tribunal examinará si las resoluciones han respetado o no el derecho de participación en los concreto casos. Tras lo anterior, el Tribunal estima el recurso de amparo presentado y declara vulnerados el derecho fundamental.

En relación a las sentencias, STC 200/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Primera); STC 201/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda); STC 202/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda); STC 1/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda) y STC 23/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). Todos los recursos de amparo proceden del mismo grupo parlamentario (UPyD) de la Asamblea de Madrid y, en todas las demandas de amparo, se solicita lo mismo, esto es, la tutela del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), en

⁸⁶¹ STC 44/2010. (Antecedente 3º) y STC 191/2013. (Antecedente 3º).

relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE); al haberse inadmitido de manera sistemática multitud de iniciativas parlamentarias como son preguntas, interpelaciones, proposiciones no de ley, etc.

Sobre la vulneración de los derechos de participación (Art. 23 CE), derecho a la legalidad sancionadora (Art. 25 CE) y derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE), por haber padecido indefensión durante la tramitación del procedimiento sancionador y por falta de motivación en la resolución⁸⁶²; STC 192/2011, de 12 de diciembre (Sala Segunda). La demanda de amparo tiene su origen en la expulsión del Pleno y prohibición de asistencia al resto de la sesión de una diputada del Parlamento de La Rioja, establecido por el Presidente de dicho Parlamento, sanción que fue confirmada por la Mesa. No obstante, el Tribunal procede a desestimar las vulneraciones alegadas.

c) Trasciende al caso concreto

Los siguientes supuestos trascienden al caso concreto pero no se insertan dentro de los denominados amparos parlamentarios o electorales.

Sobre vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, en relación al artículo 13.3 CE), al derecho a la libertad (art. 17 CE) y al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE, en relación a los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad y seguridad jurídica determinados en el art. 9.3 CE)⁸⁶³; STC 31/2013, de 11 de febrero. (Sala Segunda). La demanda versa sobre la extradición acordada por la Audiencia Nacional del demandante a la Región de Hong Kong. La Sala declarará vulnerados los derechos, puesto que la Audiencia Nacional acuerda la extradición sin que exista norma legal o convencional para efectuarla. Para llevarlo a cabo sería necesario una autorización de China o la existencia de un tratado internacional suscrito por Hong Kong, con el previo consentimiento de China⁸⁶⁴. Por tanto, la entrega sin

⁸⁶² STC 192/2011, de 12 de diciembre. (Sala Segunda). (Antecedente 3º)

⁸⁶³ STC 31/2013 (Antecedente 3º)

⁸⁶⁴ STC 31/2013 (FF.JJ. 4º a 6º)

dicha cobertura legal o convencional conlleva la lesión de los citados derechos⁸⁶⁵.

Sobre vulneración del derecho a la tutela judicial (art. 24 CE); STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera). La demanda de amparo se interpone por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, en relación a la regulación de determinadas titulaciones académicas conducentes a títulos de grado universitario. Según el demandante de amparo, por haber confundido, mediante una motivación irrazonable del Tribunal Supremo en la sentencia, el Acuerdo adoptado en Consejo de Ministros mediante el que se establecían las condiciones para la obtención del título de arquitecto técnico⁸⁶⁶. La Sala entra al fondo del asunto y desestima el recurso al entender que no existe tal vulneración del derecho fundamental alegado⁸⁶⁷, aunque la Sentencia cuenta con un voto particular discrepante⁸⁶⁸.

Sobre relaciones paterno-filiares, al considerar que los tribunales españoles poseen competencia internacional en materia de guarda, custodia y régimen de visitas respecto a los hijos menores de edad⁸⁶⁹. STC 127/2013, de 3 de junio de 2013 (Sala Segunda). La Sala tras exponer su doctrina sobre la licitud del traslado de la menor del país de residencia habitual a otro⁸⁷⁰ y que el país de origen no cuestiona la validez del procedimiento originado en España⁸⁷¹, deniega el amparo solicitado, ya que las resoluciones judiciales son ajustadas a Derecho y no pueden tacharse de irrazonables o arbitrarias⁸⁷².

Sobre vulneración de sus derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación a un proceso con todas las garantías y el derecho a la prueba (art. 24.2 CE); STC 12/2013, de 28 de enero. (Sala Segunda). La demanda de amparo se interpone contra el archivo, y posterior desestimación del recurso de apelación, de las denuncias

⁸⁶⁵ STC 31/2013 (F.J. 7º y Fallo)

⁸⁶⁶ STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera). (Antecedentes 2º y 3º)

⁸⁶⁷ STC 183/2011. (FF.JJ. 3º a 9º)

⁸⁶⁸ STC 183/2011 (Fallo)

⁸⁶⁹ STC 127/2013. (Antecedente 2º)

⁸⁷⁰ STC 127/2013. (F. J. 4º)

⁸⁷¹ STC 127/2013. (F. J. 5º)

⁸⁷² STC 127/2013. (FF. JJ. 6º y 7º. Fallo)

interpuestas por torturas, malos tratos y amenazas supuestamente padecidas durante una detención en sede policial. La Sala deniega el amparo solicitado, determinando que de las actuaciones no se deduce indicio alguno del que puedan derivarse dichas lesiones⁸⁷³.

En relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y a obtener una decisión fundada en Derecho; STC 56/2013, de 11 de marzo (Sala Segunda). El presente recurso de amparo tiene su origen en procedimientos judiciales de reclamación de cantidad, de importantes sumas, que se entablaron contra unas conocidas empresas cuyo objeto son las grandes superficies comerciales⁸⁷⁴. Es interesante la presente demanda porque, por primera vez, se alega como causa objetiva de admisión la *especial trascendencia económica* del recurso⁸⁷⁵, así se alega por la entidad recurrente y así es admitido por la Sala⁸⁷⁶. Pues bien, tras exponer su más que consolidada doctrina sobre el alcance de la tutela judicial efectiva (art.24. CE) y su aplicación al caso concreto, deniega el amparo solicitado⁸⁷⁷.

Sobre el emplazamiento amparo a una sociedad mercantil a un procedimiento de ejecución hipotecaria; STC 79/2013, de 8 de abril. (Sala Primera).

8º) Otros supuestos.

A continuación haremos referencia a determinadas sentencias cuya argumentación sobre la *especial trascendencia constitucional* no sería encuadrable en los anteriores supuestos pero, no obstante, se ha procedido a argumentar o a contemplar por el Tribunal la existencia de la misma.

A pesar de que el Tribunal Constitucional estima que el recurso posee tal especial trascendencia constitucional necesaria para su admisión, una vez que

⁸⁷³ STC 12/2013 (FF.JJ. 2º a 4º y Fallo)

⁸⁷⁴ STC 56/2013, de 11 de marzo. (Sala Segunda). (Antecedente 2º)

⁸⁷⁵ STC 56/2013. (Antecedente 3º).

⁸⁷⁶ STC 56/2013. (F.J. 1º).

⁸⁷⁷ STC 56/2013. (FF.JJ. 2º a 4º y Fallo)

conoce sobre el fondo nos volvemos a encontrar asuntos en los que se produce un control de la aplicación de la legalidad ordinaria por parte del Tribunal Constitucional, sobre el fondo del asunto y en relación a los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria.

Sobre vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE); STC 76/2012, de 16 de abril. (Sala Primera). La Sala entra al fondo del asunto y, en base a su doctrina consolidada sobre el alcance del precepto 135 LEC⁸⁷⁸, procede a subsumir la actuación llevada a cabo en la jurisprudencia existente, declarando vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva⁸⁷⁹.

Sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial en relación con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 24.1 CE, en relación con el art. 9.3 CE); así como el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.1 CE, en conexión con el art. 24.2 CE); STC 76/2013, de 8 de abril. (Sala Primera). Todo ello como consecuencia de la falta de emplazamiento en el proceso por parte del órgano judicial instancia, a pesar de tener la condición de interesado directo.

Sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al desconocer el juzgador de instancia una resolución dictada por el órgano judicial superior jerárquico, sobre tasación de costas; STC 121/2013, de 20 de mayo (Sala Segunda).

Para descartar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia (art. 24.1 CE)⁸⁸⁰; STC 209/2013, de 16 de diciembre (Sala Primera). Todo ello como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo de un recurso de alzada ante el Tribunal Económico-administrativo Regional, resolución que fue confirmada por el Tribunal Económico-administrativo Central, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. El demandante entiende que se ha realizado una interpretación

⁸⁷⁸ STC 76/2012 (F.J. 3º).

⁸⁷⁹ STC 76/2012 (Fallo).

⁸⁸⁰ STC 209/2013, de 16 de diciembre (Sala Primera)

rigorista de la legalidad vigente, que ha dado lugar a la citada vulneración⁸⁸¹. La Sala entiende que la verificación de los supuestos y requisitos procesales es una cuestión de estricta legalidad ordinaria pero, tras exponer la consolidada doctrina emanada en relación al *principio pro actione*, le corresponderá el control al Tribunal cuando la interpretación que se haga sea fruto de un error patente, sea arbitraria o manifiestamente irrazonable⁸⁸². Aplicada dicha doctrina al presente supuesto, hace que la Sala a la conclusión de que no se ha producido la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, denegando por tanto el amparo solicitado⁸⁸³.

En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en su vertiente del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes; STC 211/2013, de 16 de diciembre (Sala Segunda). Tras exponer la consolidada doctrina sobre los derechos alegados y, en concreto, sobre el control del Tribunal sobre aquellas resoluciones judiciales que puedan estimarse incongruentes, arbitrarias, irrazonables o incursas en error patente⁸⁸⁴ y su aplicación al caso concreto⁸⁸⁵. La Sala determina que las resoluciones recurridas han vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en cuanto a su derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos⁸⁸⁶.

Sobre vulneración de distintos derechos fundamentales que van desde varias vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); el derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE); a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y al derecho a la integridad física (art. 15 CE)⁸⁸⁷; STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera). La Sala procede a rechazar una por una las distintas vulneraciones de los derechos fundamentales y ello en base a la

⁸⁸¹ STC 209/2013 (Antecedente 3º)

⁸⁸² STC 209/2013 (F.J. 3º)

⁸⁸³ STC 209/2013 (F.J. 4º y Fallo)

⁸⁸⁴ STC 211/2013 (F.J. 3º)

⁸⁸⁵ STC 211/2013 (F.J. 4º)

⁸⁸⁶ STC 211/2013 (FF.JJ. 5º y 6º. Fallo)

⁸⁸⁷ STC 178/2014. Antecedente 3º.

aplicación de la consolidada doctrina del Tribunal⁸⁸⁸. Por tanto, se procede a la desestimación del recurso⁸⁸⁹.

Por tanto, y desde un punto de vista *material*, el hecho de que se haya circunscrito la *especial trascendencia constitucional* en alguno de los supuestos establecidos en el F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio; conlleva o significa que, efectivamente, que el objeto sobre que conocerá el Tribunal se corresponderá con esa inicial apreciación.

⁸⁸⁸ STC 178/2014. FF.JJ. 2º a 7º.

⁸⁸⁹ STC 178/2014. Fallo.

CAPÍTULO V: EL RECURSO DE AMPARO EN LA ACTUALIDAD.

I.- EL RECURSO DE AMPARO EN CIFRAS: INTERPOSICIÓN, PORCENTAJE DE ADMISIÓN Y CAUSAS DE INADMISIÓN.

Como sabemos, la Ley entró en vigor en 2007 pero, como hemos visto, la plena efectividad de la misma no se produce hasta el año 2010. Ello debido a que en los primeros años son pocos los recursos sobre los que entra a conocer el Tribunal a los que les es aplicable la nueva normativa y, además, respecto a los que sí le es de aplicación, son pocas las resoluciones emitidas, siendo estas puntuales, en las que destacan aquellas resoluciones iniciales en las que el Tribunal procede a elaborar su doctrina sobre el nuevo trámite de admisión. Hablamos básicamente de los Autos de 2008 (AATC 188/2008; 289/2008 y 290/2008) y de la STC 155/2009. Pues bien, como decimos, es a partir del año 2010 cuando la reforma del recurso de amparo empieza a desplegar en plenitud todos sus efectos. Y es a partir de dicha fecha cuando encontramos ilustrativos los datos y no con anterioridad, debido a la pervivencia mayoritaria de recursos de amparo a los que le era de aplicación la anterior regulación. No obstante, hemos de recordar que, la situación de saturación del Tribunal alcanzó su pico máximo en los años 2005 (9.476); 2006 (11.471) y 2007 (9.840), aunque, si bien, dicho descenso no se prolongó durante los años 2008 y 2009, más bien todo lo contrario, los recursos de amparo en esos dos primeros años de vigencia aumentaron de manera más que considerable (10.275 y 10.792, recursos de amparo interpuestos, respectivamente)⁸⁹⁰.

Pues bien, como hemos argumentado, los datos comparados que nos parecen más esclarecedores y relevantes son los comprendidos entre los años 2010 a 2014⁸⁹¹.

⁸⁹⁰ Los datos han sido extraído de la Memoria del Tribunal Constitucional del año 2009; la cual puede consultarse en el siguiente enlace:

<http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/estadisticas/Paginas/Estadisticas2009.aspx#A16>

⁸⁹¹ http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Memoria_2014.aspx

Año: **2010 2011 2012 2013 2014**

Nº Total

asuntos

ingresados: 9.041 7.192 7.294 7.573 7.878

Recursos de

amparo: 8.948 7.098 7.205 7.376 7.663

Resolución

Recursos de amparo:

- Sentencia 91 145 124 87 109

-Auto 26 37 2 5 3

-Providencia

de inadmisión 8.964 5.868 7.298 5.342 6.678

- Por otras causas

(Autos o providencias) 1.027 532 43 574 90

- Acumulados 2 2 5 3 2

TOTAL: 10.110 6.584 7.472 6.012 6.882

Porcentaje

Admisión⁸⁹²: 1,46 1,34 1,72 2,27 1,08

⁸⁹² Los datos han sido extraídos de las correspondientes Memorias anuales del Tribunal Constitucional, cuyos datos pueden cotejarse en los siguientes enlaces:

DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS

AÑO	ART. 24 CE	ART.14 CE	RESTO DE DERECHOS
2010	7.788 (87,04%)	1.410 (15,75 %)	1.795 (20,06%)
2011	5.381 (75,81%)	1.031 (14,52%)	1.778 (25,04%)
2012	5.964 (82,77%)	1.068 (14,82%)	1.737 (24,10%)
2013	5.914 (80,18%)	1.013 (13,77%)	1.680 (22,77%)
2014	5.570 (72,68%)	1.090 (14,22%)	1.677 (21,87%)

Como podemos comprobar, efectivamente, ha habido un descenso significativo respecto a la interposición de demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional. Desde que se alcanzó su pico máximo en 2006 con 11.471 recursos, se ha pasado en la actualidad a los 7.663 del año 2014. A pesar de que hemos visto un enorme descenso en estos últimos ocho años, no es menos cierto que, en estos últimos cuatro años, ha ido aumentando paulatinamente la interposición, desde los 7.098 recursos del año 2011 se ha pasado a 7.663 del

Año 2010:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria_2010_6.aspx#mc13

Año 2011:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria_2011_6.aspx#mc13

Año 2012:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria_2012_5.aspx#mc13

Año 2013:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Memoria_2013_5.aspx#toc-anchor-10

Año 2014:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Memoria_2014_5.aspx#toc-anchor-7

año 2014. Creemos que dicho aumento puede deberse a un mayor control de los requisitos formales y materiales necesarios para la interposición del recurso de amparo y, sobre todo, respecto al cumplimiento y acreditación de la especial trascendencia constitucional en la demanda de amparo. No obstante, y a pesar de la disminución del número de amparos interpuestos, siguen suponiendo un porcentaje muy elevado en relación al número total de asuntos ingresados, pues se corresponde con un noventa y ocho con veintiún por ciento de media (98,21%), en esos cinco años. Es decir, nos seguimos encontrando con porcentajes similares al de los años anteriores.

Asimismo, sólo se ha alcanzado un máximo de dos con veintisiete por ciento (2,27%) de admisiones de recursos en uno sólo de los años (2013), descendiendo de manera significativa hasta un uno con cero ocho por ciento (1,08 %) en el siguiente año (2014). No obstante, la media de estos últimos cinco años ha estado en un uno con cincuenta y siete por ciento (1,57%). A diferencia de la media de los años 2005 y 2006⁸⁹³, que estaba en casi el cuatro por ciento de admisión (3,97%). Tal descenso comienza a apreciarse desde el mismo momento de la entrada en vigor de la Ley, en esos primeros años 2007, 2008 y 2009⁸⁹⁴, se produce una significativa caída del porcentaje de admisión alcanzando el uno con cuarenta y tres por ciento (1,43%), de media que achacamos no sólo al nuevo requisito de admisión sino, principalmente, a la inadmisión mediante providencia.

También podemos comprobar cómo, en relación a los derechos fundamentales invocados, los porcentajes siguen encontrándose en cifras similares, sobresaliendo con creces la invocación de los derechos contenidos en el artículo 24 CE, seguido de la invocación del artículo 14 CE y, lejos de ellos,

⁸⁹³ Año 2005: 3,87%

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Mem2005_5_AplV.aspx#_m1a

Año 2006: 4,07 %

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2006_5.aspx#_m1a

⁸⁹⁴ Año 2007: 2,32 %

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2007_5.aspx#mc2

Año 2008: 1,60 %

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2008_5.aspx#mc2

Año 2009: 0,37 %

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/memoria2009_5.aspx#mc5

siguen encontrándose el resto de derechos susceptibles de ser invocados en amparo.

Ha sido a partir del año 2014 cuando el Tribunal ha venido a reflejar las causas que originan la inadmisión de los recursos de amparo, donde se pone de manifiesto, como adelantamos, que no sólo se producirá la inadmisión por carencia o falta de la especial trascendencia constitucional. Así se determina por el propio Tribunal⁸⁹⁵:

1º) Los datos muestran un predominio de la causa de inadmisión relativa a la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado (2.094 recursos de amparo fueron inadmitidos por este motivo, lo que representa un 31,37 por 100 del total de inadmisiones).

2º) Seguida a gran distancia de las atinentes a la falta o insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda (1.331 casos, un 19,97 por 100; y 1.082, el 16,27 por 100, respectivamente).

3º) Falta de agotamiento de todos los recursos en la vía judicial previa (931 casos, el 13,99 por 100).

4º) Otras causas: Falta de subsanación de defectos procesales oportunamente advertidos al recurrente (572 providencias de inadmisión, un 8,62 por 100). Extemporaneidad del recurso de amparo (375, un 5,61 por 100). Falta de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho fundamental invocado (37, un 0,55 por 100) o falta de especial trascendencia constitucional (17, un 0,25 por 100). A estas causas de inadmisión se añaden 125 providencias en las que se mencionan diversos motivos (un 1,9 por 100) y otras 98 en las que se indican otros motivos (1,47 por 100).

Por tanto, y como ya tuvimos ocasión de manifestar, la especial trascendencia constitucional para el Tribunal no va cumplir la función legal que

895

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Memoria_2014_5.aspx#toc-anchor-4

se le atribuyó, es decir, como causa que, una vez acreditada, originaría la admisión del recurso de amparo; sino que se va a convertir en una causa más a las ya establecidas en la anterior regulación. Esto nos lleva a plantearnos hasta qué punto ha asumido el Tribunal la reforma llevada a cabo por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo; pues como ya dijimos el hecho de que un recurso de amparo sirva al Tribunal para la determinación del contenido normativo de los derechos fundamentales o de su alcance objetivo, es independiente de la consideración que sobre el mismo se contenga en el Fallo. La primacía de la especial trascendencia constitucional no se puede hacer depender de otras consideraciones que, de ser apreciadas por el Tribunal, conllevarán la denegación del amparo o incluso su inadmisión mediante sentencia, pero son circunstancias que no obstan al Tribunal de conocer sobre el fondo del asunto en base a la especial trascendencia constitucional que el asunto plantea.

II.- EL FONDO DEL ASUNTO: LA REALIDAD JURISPRUDENCIAL MÁS ALLÁ DE LA STC 155/2009, DE 25 DE JUNIO Y LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL.

En relación a la anterior jurisprudencia analizada, hemos querido diferenciar dos momentos: el primero, donde se produce la jurisprudencia inicial del Tribunal Constitucional sobre el nuevo trámite de admisión y, un segundo momento, sobre el desarrollo jurisprudencial posterior.

Pues bien, y en síntesis, si la jurisprudencia y doctrina producida entre los años 2008 y 2009 era clara respecto a la *especial trascendencia constitucional* como requisito inexcusable *formal* y *material*, como requisito inexcusable en la demanda y como requisito necesario *sustantivo* o de *fondo* para que el Tribunal pudiera admitir la misma. A partir del año 2010, lo anterior ha de desplegar plenos efectos y poseen ya pleno carácter prescriptivo, vemos como la práctica del Tribunal llega a negar lo que en un principio se afirmó.

En primer lugar, en más de un 60 % de las sentencias dictadas no se traslada la *especial trascendencia constitucional*, ni desde un punto de vista *formal*, ni desde un punto de vista *material*. No ya la propia apreciación del

Tribunal sino, ni tan siquiera, la del demandante en amparo en orden a cumplimentar el requisito impuesto en el art. 49.1. *in fine* LOTC. Ni tampoco, como decimos, la propia apreciación que al respecto ha llevado al Tribunal Constitucional a su admisión pero, lo que nos parece aún más sangrante, es que en la mayoría de esas sentencias –según nuestra apreciación– no se percibe dónde se encuentra la *especial trascendencia constitucional* de la misma pues, como vimos, la voluntad del Legislador fue dotar al Tribunal de los mecanismos necesarios para que conociera sólo de aquellos recursos que poseyeran un alcance *objetivo*, mientras que en la mayoría de dichas sentencias el fondo del asunto no va a corresponderse con la dimensión objetiva que necesariamente a partir 2007 requiere para su conocimiento sobre el fondo.

Pero es que, respecto a las que sí se nos ha trasladado la argumentación dada por el demandante, en algunos casos, podemos ver que efectivamente el Tribunal va a conocer sobre supuestos sobre los que existe una *especial trascendencia* para su admisión, esto es, que realmente el supuesto plantea cuestiones relativas a la *dimensión objetiva* del recurso de amparo, en otros, la *dimensión objetiva* será menos evidente y sólo con una resolución sobre el fondo se podrá determinar si se está ante un denominado caso *fácil* o *difícil* y en otros, en su inmensa mayoría, desde un primer momento se aprecia como el Tribunal Constitucional va a conocer de un *caso fácil* o, incluso, de supuestos que han sido verdaderamente criticados por la doctrina como son la labor de interpretación de la mera legalidad ordinaria o supuestos en los que se está ante un control o fiscalización de la labor de enjuiciamiento practicada y llevada a cabo por la jurisdicción ordinaria.

Bien es cierto que, en una primera fiscalización por parte del Tribunal sobre la *especial trascendencia constitucional* pueda entender que dicha especial trascendencia constitucional existe y que, sin embargo, cuando realmente entre de lleno en el fondo del asunto se aprecie que tal supuesto, finalmente, no se trataba de un *caso difícil* o que, a pesar de las apariencias o apreciaciones iniciales, si existe jurisprudencia o doctrina previa reconducible y aplicable al caso. Pero, sin perjuicio de lo anterior, por ello y como veremos más adelante no sólo deberá argumentar y justificar por qué ha admitido a trámite,

sino también cuál es su resolución de fondo respecto a la especial trascendencia constitucional. Pero lo que sí podemos afirmar es que la reforma tenía un alcance claro y una voluntad clara sobre la actuación que a partir de la entrada en vigor de la L.O. 6/2007, de 24 de marzo; debía de llevar a cabo el Tribunal Constitucional.

Por tanto, y en la actualidad, existe una jurisprudencia vacilante no sólo respecto a las obligaciones impuestas al demandante en amparo a la hora de desplegar las obligaciones que le son impuestas por el art. 49.1 LOTC; sino respecto a las obligaciones que su propia Ley Orgánica le impone a la hora de admitir a trámite una demanda basada en la *especial trascendencia constitucional* y su necesaria apreciación no como cumplimiento de un mero requisito *formal*, sino como un verdadero requisito *sustantivo* o de *fondo*.

En definitiva, a continuación, procederemos a realizar un desglose de la actividad llevada a cabo por el Tribunal Constitucional a través del conocimiento de los recursos de amparo mediante sentencia. De la jurisprudencia anterior podemos extraer una serie de apreciaciones en torno al contenido material sobre el que conoce el Tribunal respecto al fondo del asunto⁸⁹⁶. Todo ello con independencia del supuesto en el que lo hayan hecho recaer dentro de la STC 155/2099, de 25 de junio, F.J. 2º) o la argumentación dada para cumplimentar la *especial trascendencia constitucional* del recurso.

1º) Inexistencia de doctrina del Tribunal Constitucional.

A pesar de que muchos de los recursos de amparo que hemos visto el Tribunal los admite a trámite por no existir doctrina, la jurisprudencia elaborada en cuanto al fondo no siempre va a corresponderse con tal supuesto.

a) No hay doctrina previa del Tribunal, por tanto, se produce una elaboración de la misma.

⁸⁹⁶ Si bien es cierto que una misma sentencia puede recaer en varios de los supuestos que veremos a continuación.

Efectivamente, en estos casos el Tribunal no ha conocido con anterioridad un supuesto similar, con lo cual tiene que proceder a la elaboración de la doctrina sobre los concretos derechos fundamentales⁸⁹⁷.

b) Supuestos en los que se produce una introducción de jurisprudencia emanada por Tribunales supranacionales.

Se trata de supuestos que permiten al Tribunal introducir en su propia doctrina la jurisprudencia emanada por los Tribunales supranacionales, sobre todo la elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)⁸⁹⁸.

⁸⁹⁷ Supuesto novedoso no conocido con anterioridad y elaboración de doctrina sobre el particular:
1º) Los requisitos que han de cumplirse para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, en la que además se trae a colación la jurisprudencia previa del TEDH. STC 77/2014, de 22 de mayo de 2014 (Sala Primera).

2º) La vulneración del derecho a la igualdad por la exclusión de medios de comunicación con gran repercusión social de contratos de publicidad institucional. STC 130/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera) y STC 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (Sala Primera).

3º) Las condiciones que han de darse para considerar que un matrimonio islámico se ha celebrado válidamente, a efectos de percibir la prestación por viudedad. STC 194/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda).

4º) Está vetado por la Constitución prohibir una manifestación por el mero hecho de su reiteración. STC 24/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda).

5º) En relación a la no discriminación por razón de sexo (Art. 14 CE), alegada por un padre para hacer compatible su vida profesional con la familiar, al tener dos hijos menores a los que cuidaba junto con su esposa, también trabajadora. STC 26/2011, de 14 de marzo de 2011 (Sala Primera).

6º) Elaboración de doctrina sobre sustanciación de la condena en base a la declaración un testigo anónimo u oculto. STC 75/2013, de 8 de abril (Sala Primera).

7º) Sobre la extinción de un contrato de trabajo durante el período de pruebas de una mujer que se encontraba embarazada. STC 173/2013, de 10 de octubre (Pleno).

8º) Sobre vulneración del derecho del menor al nombre (art. 18.1 CE), al determinarse que en sede judicial no se ha ponderado debidamente los intereses el menor; ya que el menor había venido utilizando como primer apellido el de la madre, por tanto, no se había tenido en consideración estos hechos en orden a determinar los apellidos que debían constar en el Registro Civil. STC 167/2013, de 7 de octubre 2013 (Sala Segunda).

9º) A pesar de que en la mayoría de los supuestos en los que conoce sobre la inadmisión del procedimiento de habeas corpus se produce una aplicación de la doctrina ya elaborada. Hemos de decir que ha conocido casos que permiten a Tribunal añadir cuestiones que amplían esa doctrina previa ya elaborada. Por ejemplo, no se cumple con lo preceptuado, con la puesta a disposición judicial, cuando se produce la comparecencia del detenido ante el Secretario Judicial. También, se añade a la doctrina ya existente cuestiones concretas como el alcance de la renuncia al procedimiento y la doble condición del órgano judicial (instructor del procedimiento y Juzgado que tramita el procedimiento de habeas corpus). STC 32/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 195/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda)

⁸⁹⁸ Elaboración doctrinal de conformidad a la jurisprudencia elaborada por los tribunales supranacionales:

1º) Los requisitos que han de cumplirse para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, en la que además se trae a colación la jurisprudencia previa del TEDH. STC 77/2014, de 22 de mayo de 2014 (Sala Primera).

2º) Procedimiento de orden de detención y entrega a país miembro de la UE, sin que se haya tenido en cuenta la situación de arraigo en nuestro país. STC 50/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera).

c) No ha conocido ese supuesto fáctico con anterioridad pero hay doctrina del Tribunal reconducible y aplicable al caso concreto.

Estamos ante supuestos en los que, a pesar de que se anuncia una elaboración doctrinal, en el fondo, sí existe doctrina previa, reconducible y aplicable al caso concreto. Son supuestos puntuales en los que no existe una idéntica similitud entre los casos pero, efectivamente, es fácil subsumir o reconducir la jurisprudencia existente a los nuevos casos planteados⁸⁹⁹.

2º) Incumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Muchos de los recursos de amparo que hemos visto, su admisión a trámite por el Tribunal, se corresponden con un incumplimiento manifiesto de la doctrina

3º) Doctrina del TEDH y el TJUE mediante la que se determina el derecho al nombre como derecho inserto en el ámbito del derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE). STC 167/2013, de 7 de octubre 2013 (Sala Segunda).

4º) Denegación de renovación del permiso de residencia, sin ponderar adecuadamente la situación de arraigo familiar, incluso uno de sus hijos tenía la nacionalidad española. STC 46/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera)

⁸⁹⁹ Supuesto concreto no conocido con anterioridad pero sí existe doctrina aplicable al caso:

1º) No es una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, ni al secreto de las comunicaciones, el hecho de la manipulación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de un dispositivo móvil encontrado en el lugar de comisión de hechos delictivos, sin previa autorización judicial. STC 115/2013, de 9 de mayo de 2013 (Pleno).

2º) La constitucionalidad del cómputo del tiempo efectivamente cumplido sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo establecido. STC 168/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Segunda).

3º) Sobre la constitucionalidad de la fiscalización por parte de la empresa sobre el correo electrónico corporativo. STC 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (Sala Primera).

4º) Sobre la presentación de recursos en plazo cuando el demandante siguió unas pautas establecidas en un acto gubernativo dictado por una autoridad judicial. STC 47/2014, de 7 de abril de 2014 (Sala Primera).

5º) Sobre la posibilidad de atenuante de la pena a consecuencia de dilaciones indebidas en el proceso penal. Aplicación de la doctrina que determina que no forma parte del derecho a no padecer dilaciones indebidas tal eximente o atenuante de la pena. STC 78/2013, de 8 de abril (Sala Segunda).

6º) Aplicación de la doctrina previa del Tribunal a la modificación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), que determina el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera).

7º) Sobre demolición de la vivienda acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal, sin previa autorización judicial. STC 188/2013, de 4 de noviembre (Sala Segunda).

8º) Sobre la consolidación doctrinal sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y sobre las particularidades cuando se trata de domicilio de persona física, así como los requisitos del consentimiento para que este sea eficaz; unido a la vulneración del secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), al obtenerse los datos en la entrada domiciliaria. STC 54/2015, de 16 de marzo de 2015 (Sala Segunda).

del Tribunal Constitucional, pero la jurisprudencia elaborada respecto al fondo no siempre va a corresponderse con tal específico supuesto.

a) Supuestos en los que hay un manifiesto incumplimiento de la doctrina del Tribunal constitucional.

Estamos ante supuestos puntuales y minoritarios pero que suponen incumplimientos patentes y graves de la doctrina del Tribunal. Como era el caso del uso de “formularios estereotipados” por los Juzgados de Vigilancia penitenciaria o las inadmisiones de los procedimientos de Habeas Corpus⁹⁰⁰.

b) Supuestos en los que existe una discrepancia entre la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Hemos visto supuestos en los que ha existido una fuerte pugna sobre la aplicación de una determinada interpretación de la ley, como es el caso de doctrina sobre la prescripción penal pero, también, en materia de derechos fundamentales, como ha ocurrido en relación a la ponderación entre los derechos de la personalidad (art. 18 CE) y el derecho a la libertad de información (art. 20 CE)⁹⁰¹.

⁹⁰⁰ Supuestos en los que hay un manifiesto incumplimiento de la doctrina del Tribunal constitucional:

1º) Sobre el uso reiterado y estereotipado en las resoluciones dictadas por jueces de Vigilancia Penitenciaria que resuelven recursos presentados por los privados de libertad. STC 59/2011 de 3 de mayo de 2011 (Sala Primera).

2º) Son varias las demandas de amparo interpuestas por vulneración del derecho a la libertad personal de la persona detenida, en relación a la inadmisión del procedimiento de habeas corpus. El Tribunal tendrá que reproducir la doctrina ya elaborada para aplicarla al caso concreto (art. 17.1 y 17.4). STC 12/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda); STC 21/2014, de 10 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 32/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera); STC 195/2014, de 1 de diciembre de 2014 (Sala Segunda) y STC 42/2015, de 2 de marzo de 2015 (Sala Segunda).

⁹⁰¹ Discrepancia doctrinal entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo:

1º) Sobre la doctrina relativa al instituto de la prescripción de los delitos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que como sabemos puede tildarse de contradictoria o, más bien, se trata de interpretaciones dispares sobre el inicio del cómputo de la prescripción, que conlleva consecuencias jurídicas distintas. STC 1/2013, de 14 de enero de 2013; STC 2/2013, de 14 de enero de 2013 y STC 32/2013 de 2013, de 11 de febrero. (Sala Primera).

2º) Sobre jurisprudencia relativa a la ponderación entre los denominados derechos de la personalidad (art. 18 CE) y la libertad de información (art. 20.1 d) CE); elaborada por el Tribunal entre los años 2012 y 2013, que a su vez es subsunción de la jurisprudencia elaborada por el TEDH, y que es desconocida e inaplicable por el Tribunal Supremo. STC 176/2013, de 21 de octubre (Sala Segunda) y STC 7/2014, de 27 de enero. (Sala Primera).

Es necesaria una cierta concordancia al respecto, pues se le está trasladando una cierta inseguridad a los órganos judiciales jerárquicamente inferiores respecto a la doctrina que resulta aplicable.

c) Supuestos en los que existe una discrepancia entre la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales.

Estamos ante supuestos en los que el Tribunal procede a interpretar la ley en un sentido distinto a la interpretación realizada por los juzgadores de instancia. También supuestos en los que el Tribunal elaboró una determinada doctrina pero que, temporalmente, cuando se dictó la sentencia de instancia ésta aún no se había publicado y, por tanto, el juzgador desconocía la misma⁹⁰².

d) Supuestos en los que el Tribunal procede a aplicar al caso concreto su doctrina y jurisprudencia ya asentada y consolidada.

Estamos ante la mayoría de los supuestos. A pesar de que se manifiesta por el Tribunal que puede existir un incumplimiento general o reiterado, una negativa manifiesta del deber de acatamiento o, incluso, que no ha conocido dicho supuesto con anterioridad o que le permite modificar o cambiar su doctrina,

⁹⁰² Doctrina ya elaborada pero desconocida por el órgano judicial sobre el que trae causa, bien porque sea inaplicable o porque era desconocida por el juzgador de instancia cuando emitió su resolución

1º) No se produce una correcta notificación en personal en los domicilios que constaba en autos y acudirse a la vía edictal para su notificación. Ello en aplicación de lo establecido en los arts. 667 LEC, en relación a los arts. 155, 156 y 161 de la LEC. Debiéndose interpretar la Ley de conformidad a la doctrina sentada en la STC 112/2013. STC 126/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera)

2º) Sobre el abono de la prisión provisional debe abonarse en la misma causa y que, no es inconstitucional la interpretación realizada para denegar el que se descuente del límite máximo de cumplimiento efectivo, como se determina en las SSTC 57/2008; 148/2013 y 168/2013. STC 35/2014, de 27 de febrero de 2014 (Pleno).

3º) Sobre aplicación de la STC 41/2013, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional y nula la letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, como consecuencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad desconocida por los órganos judiciales al dictar la sentencia origen del amparo. SSTC 55/2013, de 11 de marzo de 2013 y 77/2013, de 8 de abril de 2013. (Sala Segunda) y STC 188/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda).

4º) Por inaplicación del descuento del tiempo que el demandante permaneció en prisión provisional sobre el total de la pena impuesta, en este caso al tratarse de dos causas no había sido descontado en su totalidad sino el tiempo que duró la prisión provisional de la primera de las causas. STC 92/2012, de 7 de mayo de 2012. (Sala Primera).

en el fondo lo que se produce es una aplicación al caso concreto de doctrina ya elaborada e incluso consolidada⁹⁰³. Aquí no sólo tendremos que introducir estas

⁹⁰³ El Tribunal aplica su doctrina al caso concreto:

1º) Aplicación de doctrina consolidada sobre el principio de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes. STC 89/2011, de 6 de junio. (Sala Segunda)

2º) Aplicación de doctrina resoluciones irrazonables, desproporcionadas o rigoristas. En este caso deniega el amparo en base a dicha doctrina. STC 44/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda).

3º) Aplicación de doctrina sobre la necesidad de celebrar vista pública, así como sobre la posibilidad de revocar un pronunciamiento absolutorio sin que se celebre la misma. STC 157/2013, de 23 de septiembre (Sala Segunda).

4º) Aplicación de doctrina sobre el derecho a no padecer dilaciones indebidas. STC 58/2014, de 5 de mayo de 2014 (Sala Segunda); STC 89/2014, de 9 de junio de 2014 (Sala Segunda) y STC 99/2014, de 23 de junio de 2014 (Sala Segunda).

5º) Aplicación de doctrina sobre doctrina sobre el acceso a la jurisdicción y el error patente. STC 167/2014, de 22 de octubre de 2014 (Sala Segunda).

6º) Aplicación de doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta a obtener una resolución judicial motivada y fundada en Derecho. STC 9/2015, de 2 de febrero de 2015 (Sala Primera).

7º) Aplicación de doctrina sobre el derecho a la legalidad sancionadora, en relación a la imposición al titular del vehículo de la obligación de identificar al conductor del mismo. STC 21/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Segunda).

8º) Aplicación de doctrina sobre la libertad de expresión (art. 20.1 a) CE) y de información conculcada a una revista (art. 20.1 d) CE) y el derecho al honor (art. 18.1 CE). STC 216/2013, de 19 de diciembre (Pleno).

9º) Aplicar y reafirmar su doctrina sobre el incidente de nulidad de actuaciones, así como perfilarla en cuanto a supuestos concretos como es el caso de inadmisión del mismo por “incongruencias omisivas”. STC 9/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Segunda).

10º) Aplicación de doctrina relativa al art. 24.2 CE, sobre vulneración del derecho de defensa durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador de expulsión del territorio español. STC 145/2011, de 26 de septiembre de 2011 (Sala Segunda).

11º) Aplicación de doctrina sobre el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE). STC 193/2011, de 12 de diciembre de 2011 (Sala Segunda).

12º) Aplicación de doctrina sobre los derechos a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE). STC 212/2013, de 16 de diciembre (Sala Segunda).

13º) Aplicación de doctrina sobre la sanción impuesta al titular del vehículo por no aportar a la administración actuante los datos requeridos relativos al conductor responsable. STC 45/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda).

14º) Aplicación de doctrina en relación la revocación parcial de una sentencia en segunda instancia, en la que el órgano judicial no recogió las argumentaciones del demandado porque no se había interpuesto recurso de apelación o formulado adhesión al mismo. STC 11/2014, de 27 de enero de 2014 (Sala Primera).

15º) Aplicación de doctrina sobre intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes. STC 123/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera).

16º) Aplicación de doctrina sobre derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación a un proceso con todas las garantías y el derecho a la prueba (art. 24.2 CE). STC 12/2013, de 28 de enero. (Sala Segunda).

17º) Aplicación de la consolidada doctrina sobre el alcance de la tutela judicial efectiva (art.24. CE). STC 56/2013, de 11 de marzo. (Sala Segunda)

18º) Aplicación de doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y la interpretación conforme a tal derecho de determinados preceptos de la LEC. STC 79/2013, de 8 de abril. (Sala Primera).

19º) Aplicación de la doctrina consolidada sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); el derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE); a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y al derecho a la integridad física (art. 15 CE). STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera).

20º) Aplicación de doctrina consolidada sobre el alcance del precepto 135 LEC. STC 76/2012, de 16 de abril. (Sala Primera).

sentencias que hemos visto, sino que también se encontrarán dentro de este supuesto la gran mayoría de las sentencias que vimos anteriormente en las que no se hacía referencia alguna a la *especial trascendencia constitucional* y que, como dijimos, se correspondía con más del sesenta por ciento (60%) de los recursos de amparos admitidos a trámite y resueltos mediante sentencia.

Por todo ello, en el grueso de las sentencias de amparo no va a existir una consideración y apreciación de la *especial trascendencia constitucional* y, por tanto, no va a conocer de los mismos en base a su dimensión objetiva. Procediéndose sólo a reiterar y aplicar su doctrina consolidada, con lo cual, el Tribunal a través de su actuación sigue funcionando como una *super-casación*, destinada a revisar la labor efectuada por la jurisdicción ordinaria; desconociendo con ello la función que le ha atribuido el Legislador a través de la reforma operada por el L.O. 6/2007, de 24 de mayo.

3º) Interpretación de la ley conforme a los derechos fundamentales.

a) El origen de la vulneración radica en la ley o norma con rango de ley.

En este caso, a pesar de reconducirse a este determinado supuesto, lo que hemos conocido es la aplicación de una sentencia dictada en un procedimiento de cuestión de inconstitucionalidad. Por tanto, dicha inconstitucionalidad de la ley era desconocida por el juzgador cuando dictó

21º) La Sala Primera asume la jurisprudencia elaborada por la Sala Segunda para aplicarla al presente supuesto. STC 76/2013, de 8 de abril. (Sala Primera).

22º) Aplicación de la doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al desconocer el juzgador de instancia una resolución dictada por el órgano judicial superior jerárquico, sobre tasación de costas. STC 121/2013, de 20 de mayo (Sala Segunda).

23º) Exposición y aplicación la consolidada doctrina emanada en relación al principio por *actione*, y el control por el Tribunal cuando la interpretación que se haga sea fruto de un error patente, sea una arbitraria o manifiestamente irrazonable. STC 209/2013, de 16 de diciembre (Sala Primera)

24º) Aplicación de la consolidada doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos. STC 211/2013, de 16 de diciembre (Sala Segunda). STC 178/2014, de 3 de noviembre de 2014 (Sala Primera).

sentencia, lo que hace el Tribunal es aplicar la sentencia al caso concreto a las demandas de amparo interpuestas⁹⁰⁴.

b) No hay una interpretación previa de la ley por parte del Tribunal Constitucional.

Se trata de supuestos en los que, efectivamente, el Tribunal entra a conocer sobre determinadas leyes o normas con rango legal para realizar una interpretación conforme a los derechos fundamentales⁹⁰⁵.

⁹⁰⁴ Como vimos anteriormente, se trata de la aplicación de la STC 41/2013, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional y nula la letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, como consecuencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad desconocida por los órganos judiciales al dictar la sentencia origen del amparo. STC 55/2013, de 11 de marzo de 2013; STC 77/2013, de 8 de abril de 2013. (Sala Segunda) y STC 188/2014, de 17 de noviembre de 2014 (Sala Segunda).

⁹⁰⁵ Interpretación de la ley *secundum constitutionem*:

1º) Sobre la obtención de datos de carácter personal, interpretación del art. 521.1.6º LEC. STC 96/2012, de 7 de mayo de 2012 (Sala Primera).

2º) Sobre notificación judicial por edictos, art. 686.3 LEC. STC 122/2013, de 20 de mayo (Sala Primera).

3º) Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), que determina el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera)

4º) Interpretación del art. 46.5 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), por autoinculparse de los hechos cometidos en fase de instrucción pero que, sin embargo, negó en fase de juicio oral ante Tribunal de Jurado. STC 151/2013, de 9 de septiembre (Sala Primera).

5º) Interpretación del art. 241.1 LOPJ, en relación a la nueva redacción al incidente de nulidad de actuaciones. STC 126/2013, de 3 de junio (Sala Segunda).

6º) Interpretación por el Pleno del Tribunal sobre la relación entre la interposición del nuevo incidente de nulidad de actuaciones (art. 241.1 LOPJ) y la interposición del recurso de amparo. STC 216/2013, de 19 de diciembre (Pleno).

7º) Sobre los requisitos contemplados en el art. 3 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (LSJG), al rebasar la unidad familiar el límite legalmente establecido para originar el derecho a dicha asistencia. STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera).

8º) Sobre interpretación de la regulación legal –art. 109 Cc y 194 del Reglamento del Registro Civil- para la determinación del orden del nombre y la filiación. STC 167/2013, de 7 de octubre 2013 (Sala Segunda).

9º) Interpretación de la Ley orgánica general penitenciaria (LOGP) y el Reglamento penitenciario (art. 49.2), que prohíbe expresamente la restricción, suspensión o intervención de las comunicaciones entre los reclusos y las autoridades judiciales. En relación a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) en el ámbito penitenciario. STC 107/2012, 21 de mayo de 2012. (Sala Segunda).

10º) Interpretación del plazo de presentación de las demandas de amparo establecido en el art. 85.2 LOTC, doctrina inicialmente elaborada por la Sala Segunda mediante STC 28/2011 y reiterada mediante la STC 168/2012, dictada por la Sala Primera. STC 88/2013, de 11 de abril de 2013 (Pleno).

11º) Varios son los recursos de amparo que conocerá dentro de los denominados amparos electorales, todos ellos sustentados en base a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al tratarse el art. 23 CE de un derecho de configuración legal. Por tanto, permitirán al Tribunal realizar una interpretación de la ley electoral *secundum constitutionem* o para aplicar la interpretación de dicha normativa electoral. STC 60/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda);

c) Se produce una reiteración y aplicación de su jurisprudencia en materia de ley.

Se trata de supuestos en los que el Tribunal procede a aplicar una interpretación de la ley ya realizada con anterioridad⁹⁰⁶.

4º) Supuestos que trascienden al caso concreto

Se admite a trámite y se conoce sobre el fondo casos concretos que pueden incidir en los derechos de otras personas y no solo al demandante de amparo⁹⁰⁷.

STC 61/2011, de 5 de mayo de 2011 (Sala Segunda); STC 62/2011, de 5 de mayo de 2011 (Pleno); STC 124/2011, de 14 de julio. (Sala Primera); STC 125/2011, de 14 de julio de 2011 (Sala Primera); SSTC 162 a 172/2011, de 3 de noviembre (Sala Primera); STC 105/2012, de 11 de mayo de 2012. (Sala Primera); STC 125/2013, de 23 de mayo de 2013 (Sala Primera); STC 147/2013, de 6 de agosto (Sala Primera) y STC 114/2014, de 7 de julio de 2014 (Sala Primera). 12º) En relación a los denominados amparos parlamentarios el Tribunal realizará un análisis de los distintos Reglamentos de las Cámaras, de la actuación de las Mesas Parlamentarias y la conformidad de la misma al contenido de los derechos de participación política (art. 23 CE). STC 44/2010, de 26 de julio (Sala Primera); STC 191/2013, de 18 de noviembre (Sala Primera); STC 192/2011, de 12 de diciembre. (Sala Segunda); STC 200/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Primera); STC 201/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda); STC 202/2014, de 15 de diciembre de 2014 (Sala Segunda); STC 1/2015, de 19 de enero de 2015 (Sala Segunda) y STC 23/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera). También, sobre la inadmisión de una iniciativa legislativa popular por la Mesa de la Cámara, para lo que tendrá que realizar un análisis sobre la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña. STC 19/2015, de 16 de febrero de 2015 (Sala Primera).

⁹⁰⁶ Aplicación de interpretación ya realizada con anterioridad:

1º) Sobre notificación judicial por edictos, art. 686.3 LEC. STC 122/2013, de 20 de mayo (Sala Primera).

2º) Aplicación de la doctrina previa del Tribunal a la modificación de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), que determina el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala Primera).

3º) Aplicación de doctrina sobre la sanción impuesta al titular del vehículo por no aportar a la administración actuante los datos requeridos relativos al conductor responsable. STC 45/2013, de 25 de febrero de 2013 (Sala Segunda).

4º) No se produce una correcta notificación en personal en los domicilios que constaba en autos y acudirse a la vía edictal para su notificación. Ello en aplicación de lo establecido en los arts. 667 LEC, en relación a los arts. 155, 156 y 161 de la LEC. Debiéndose interpretar la Ley de conformidad a la doctrina sentada en la STC 112/2013. STC 126/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera)

5º) Sobre los requisitos contemplados en el art. 3 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (LSJG), al rebasar la unidad familiar el límite legalmente establecido para originar el derecho a dicha asistencia. STC 118/2014, de 8 de julio de 2014 (Sala Segunda) y STC 128/2014, de 21 de julio de 2014 (Sala Primera).

6º) Aplicación de doctrina consolidada sobre el alcance del precepto 135 LEC. STC 76/2012, de 16 de abril. (Sala Primera).

⁹⁰⁷ Trasciende al caso:

1º) Sobre regulación de determinadas titulaciones académicas conducentes a títulos de grado universitario. STC 183/2011, de 21 de noviembre (Sala Primera).

2º) El recurso trasciende al caso concreto, ya que tiene su origen en el acuerdo de extradición a Hong Kong, que no es un Estado sino una Región Administrativa Especial perteneciente a la

5º) Los amparos parlamentarios y electorales.

Como hemos visto, para el Tribunal Constitucional, los denominados amparos electorales o parlamentarios van a tener especial trascendencia constitucional *per se*, dada la repercusión general que tienen en el ejercicio de la función representativa⁹⁰⁸. Por tanto, con independencia de las argumentaciones formales y materiales dadas por los demandantes de amparo, difícilmente el Tribunal va a inadmitir tales recursos, ya que se considera que la *especial trascendencia constitucional* es consustancial a tales subtipos de recursos de amparo.

República Popular China, por lo que no existe base legal o convencional que lo permita. STC 31/2013, de 11 de febrero. (Sala Segunda).

3º) Aplicación de doctrina sobre la licitud del traslado de la menor del país de residencia habitual a otro y sobre la falta de cuestionamiento de los órganos judiciales del país de origen sobre la validez del procedimiento originado en España sobre relaciones paterno filiales. STC 127/2013, de 3 de junio de 2013(Sala Segunda).

⁹⁰⁸ STC 200/2014. F.J. 2º. STC 201/2014. F.J. 2º. STC 202/2014. F.J. 2º. STC 1/2015. F.J. 2º. STC 23/2015. F.J. 2º. “[...]En segundo lugar, y en relación con la especial trascendencia constitucional del recurso, de las alegaciones de los Letrados de la Asamblea de Madrid se desprende, por un lado, que consideran que la demanda adolece de una insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (ex art. 49.1 LOTC) y, por otro, que estamos ante un recurso que carece de especial trascendencia constitucional [ex art. 50.1 b) LOTC]. Con respecto a cumplimiento de la carga del demandante de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, debemos señalar que, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta Sentencia, el demandante hace un esfuerzo argumental tendente a disociar los argumentos dirigidos a evidenciar la existencia de la lesión del derecho fundamental y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2), cumpliendo así con el requisito derivado del art. 49.1 LOTC. Por lo que se refiere a la exigencia material de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, debemos recordar que se trata de un requisito que sólo corresponde valorar a este Tribunal, ex art. 50.1 b) LOTC, atendiendo para ello a los tres criterios que en el precepto se enuncian (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2).

En este sentido, los amparos parlamentarios, ex art. 42 LOTC, tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, cual es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados y que se retrotrae, en origen, a la doctrina de los *interna corporis acta*, según la cual los actos parlamentarios de calificación y admisión de iniciativas parlamentarias permanecen infiscalizables para los tribunales ordinarios, circunstancia que ha de conjugarse con el ejercicio del *ius in officium* por parte de los representantes políticos sin perturbaciones ilegítimas y, en última instancia, con el derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes (art. 23.1 CE), lo que sitúa a los amparos parlamentarios, al igual que a los amparos electorales, en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva al valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este Tribunal (STC155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra. Por otra parte, el presente recurso se inserta en una serie de demandas de amparo presentadas por el mismo recurrente, en las que se denuncia un proceder continuado del órgano rector de la Asamblea de Madrid lesivo del derecho fundamental cuya tutela se reclama y que justificaría la intervención de este Tribunal”

Aunque hemos de señalar que, el Legislador no hizo distinción alguna entre unos u otros *subtipos* de recurso respecto al cumplimiento y apreciación de la *especial trascendencia constitucional*, determinadas en los artículos 49 y 50 LOTC, ni tampoco respecto a los derechos susceptibles de amparo constitucional.

II.- RECAPITULACIÓN: ANÁLISIS Y PROPUESTAS.

Una vez analizada la jurisprudencia constitucional emanada desde la entrada en vigor de la reforma efectuada en la LOTC (Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional), estamos en situación de analizar las dudas y cuestiones doctrinales que en su día se plantearon en relación al nuevo trámite de admisión del recurso de amparo.

1º) La constitucionalidad de la reforma y su adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de las tachas de inconstitucionalidad que algunos autores vislumbraron respecto a la reforma del recurso de amparo, ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos al respecto y manifestar que la misma se encuadra dentro del amplio margen del que dispone el Legislador. No obstante, no podemos perder la oportunidad de entrar a analizar la interpretación que sobre la misma ha realizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La reforma del recurso de amparo llevada a cabo por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo y, en concreto, la admisión del mismo a la luz de su *especial trascendencia constitucional*, ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolviéndose mediante la *STEDH Asunto Arribas Antón c. España*, de 20 de enero de 2015.

Se trata, en concreto, de una demanda interpuesta ante dicho Tribunal, cuyo origen está en la inadmisión de un recurso de amparo, por falta o carencia de dicho requisito procesal. El demandante alegó, entre otras cuestiones, que la causa de inadmisión de su recurso y, por ende, la regulación sobre la admisibilidad de la demanda, era contraria a los derechos contemplados en los artículos 6.1 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). En concreto, se plantea la compatibilidad de la regulación establecida en los artículos 49 y 50 LOTC con el artículo 6.1 CEDH.

Pues bien, el TEDH tras recordar que el derecho de acceso a la justicia no es un derecho absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones⁹⁰⁹, así como que los Estados no están obligados a crear jurisdicción de apelación o casación, y menos aún tribunales de amparo, y que su acceso puede estar sujeto a formalidades⁹¹⁰. Afirma que “el fin pretendido por el cambio legislativo de 2007 es legítimo: en efecto, (...), este cambio persigue mejorar el funcionamiento del

⁹⁰⁹ STEDH Asunto Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (32). “El TEDH recuerda, de entrada, que el “derecho a un Tribunal”, del cual el derecho de acceso constituye un aspecto, no es absoluto y que se presta a unas limitaciones implícitamente admitidas, especialmente en lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de un recurso, ya que requiere, por su misma naturaleza, una normativa por parte del Estado, quien goza, a este respecto, de un cierto margen de apreciación (*García Manibardo c. España*, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, y *Mortier c. Francia*, no 42195/98, § 33, 31 de julio de 2001). Sin embargo, las limitaciones impuestas no deben restringir el acceso abierto al individuo hasta un punto tal que este derecho se vulnerara en su sustancia misma. Además, se compaginan con artículo 6 § 1 del Convenio sólo si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido (*Guérin c. Francia*, 29 de julio de 1998, § 37, Compendio de sentencias y decisiones 1998-V, y *Běleš y otros c. República checa*, no 47273/99, § 61, CEDH 2002-IX)”.

⁹¹⁰ STEDH Asunto Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (33). “El TEDH recuerda asimismo que el artículo 6 del Convenio no obliga a los Estados contratantes a crear jurisdicciones de apelación o de casación y, aún menos, jurisdicciones competentes en materia de amparo. Sin embargo, un Estado que se dota de jurisdicciones de esta naturaleza, tiene la obligación de velar por que los justiciables gocen, ante ellas, de las garantías fundamentales del artículo 6 (ver, *mutatis mutandis*, *Khalfaoui c. Francia*, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX). Además, la compatibilidad de las limitaciones previstas en el derecho interno con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por esta disposición, depende de las particularidades del procedimiento en cuestión. El TEDH ha concluido en varias ocasiones que la aplicación, por parte de las jurisdicciones internas, de formalidades que deben respetarse para interponer un recurso, es susceptible de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es así cuando la interpretación, en demasía formalista de la legalidad ordinaria hecha por una jurisdicción impide, de hecho, el examen sobre el fondo del recurso ejercitado por el interesado (*Běleš y otros*, anteriormente citada, § 69, *Zvolský y Zvolská c. República checa*, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX, y *Ferré Gisbert c. España*, no 39590/05, § 28, 13 de octubre de 2009). Conviene tomar en cuenta el conjunto del proceso llevado a cabo en el orden jurídico interno y el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional, pudiendo ser, sin embargo, los requisitos de admisibilidad para un recurso de amparo más rigurosos que para un recurso ordinario (ver, *mutatis mutandis*, *Brualla Gómez de la Torre c. España*, § 37, 19 de diciembre de 1997, Compendio 1997-VIII, y *Běleš y otros*, anteriormente citada, § 62)”.

Tribunal Constitucional y reforzar la protección de los derechos fundamentales, y esto para evitar una saturación excesiva de la función del Tribunal Constitucional para asuntos de menor importancia. Aun así, la inadmisibilidad de un recurso de amparo no debe vulnerar la sustancia misma del derecho del demandante a un “tribunal”, en el sentido del artículo 6 § 1 del Convenio”⁹¹¹. Prosigue diciendo: “el TEDH estima que el hecho de subordinar la admisibilidad de un recurso de amparo a la existencia de circunstancias objetivas y a su justificación por parte del recurrente, siendo éstos criterios previstos por la Ley e interpretados por la jurisprudencia constitucional – tales como la trascendencia de la causa para la interpretación, la aplicación o la eficacia general de la Constitución o para determinar el contenido y el alcance de los derechos (párrafo 29 anterior) – no es, cómo tal, desproporcionado o contrario al derecho de acceso al Tribunal Constitucional”⁹¹².

No obstante, hemos de decir, que si bien es cierto que los Estados parte pueden establecer límites o requisitos procesales para el acceso a la jurisdicción –Constitucional, en este caso- no es menos cierto que la jurisprudencia del TEDH también requiere que los requisitos sean conocidos y previsibles⁹¹³, así como también proscribire la arbitrariedad, entendida como falta de justificación o argumentación jurídica⁹¹⁴. En definitiva, y a donde queremos llegar, es que si bien el establecimiento de requisitos procesales no es contrario al Convenio, si lo es el hecho de que no se tenga una mínima seguridad jurídica sobre su aplicación por parte del tribunal que está obligado a ello. Con esto perseguimos decir que, tal y como hemos visto en el análisis de la jurisprudencia elaborada por el Tribunal en torno al requisito de la especial trascendencia constitucional, no existe una doctrina clara y uniforme respecto al cumplimiento formal de la especial trascendencia constitucional, así como tampoco respecto al mismo como requisito de fondo o sustantivo. Por tanto, no es contraria al Convenio la reforma efectuada por el recurso de amparo, pero sí podría serlo la actividad que sobre la misma está llevando a cabo el Tribunal Constitucional.

⁹¹¹ STEDH Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (40).

⁹¹² STEDH Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (41).

⁹¹³ SSTEDH Sáez Maeso c. España, 9 de noviembre de 2004; Pérez de Rada Cavanillas c. España, de 28 octubre 1998; Tricard c. Francia, de 10 julio 2001; entre otras.

⁹¹⁴ STEH Asunto García Ruiz c. España, de 21 de enero de 1999; entre otras.

Por todo ello, además, el TEDH hace un llamamiento al TC que creemos absolutamente necesario como es expresar y motivar las razones que dieron lugar a la admisión del recurso y, por tanto, que acrediten la especial trascendencia constitucional del mismo. “Este principio exige, por una parte, que el Tribunal Constitucional defina el contenido y el alcance del criterio de especial trascendencia constitucional, lo que se empeña en hacer desde la modificación de su Ley Orgánica en 2007 (párrafos 20 y siguientes anteriores) y, por otra parte, que explicita su aplicación en los asuntos declarados admisibles con el fin de garantizar una buena administración de la justicia. Los interesados deben poder contar con que las decisiones tomadas a este respecto por el Tribunal Constitucional sean aplicadas (Miragall Escolano y otros c.España, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 y 41509/98, § 33, CEDH 2000-I)”⁹¹⁵.

El hecho de que la nueva regulación no sea contraria al Convenio, no significa que el TEDH no pueda controlar su aplicación en relación a lo establecido en el CEDH y así advierte: “El TEDH recuerda, por otra parte, que no tiene en absoluto como función el sustituir a las Autoridades nacionales competentes para definir la política más oportuna en materia de normativa de acceso a los recursos, sino de valorar, desde la perspectiva del Convenio, las decisiones que han dictado en el ejercicio de su facultad de apreciación. Su función no consiste por tanto en controlar de manera alguna in abstracto la Ley y la práctica pertinente, sino de averiguar, si la manera en que han sido aplicadas al demandante, ha infringido el Convenio. Por tanto, hace hincapié en subrayar que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inadmisibile un recurso de amparo aduciendo que no revestía la especial trascendencia constitucional requerida o, en su caso, que el recurrente no había acreditado la existencia de tal trascendencia, no impide que el TEDH se pronuncie sobre la admisibilidad y el fondo de una demanda que se le plantea sobre este asunto (ver, entre otras, Del Río Prada c. España [GC], no 42750/09, CEDH 2013, Varela Geis c. España, no 61005/09, 5 de marzo de 2013, Manzananas Martín c. España, no 17966/10, 3 de abril de 2012, y R.M.S. c. España, no 28775/12, 18 de junio de 2013, sentencias dictadas por el TEDH a raíz de decisiones de

⁹¹⁵ STEDH Asunto Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (37).

inadmisibilidad de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional español)”⁹¹⁶.

2º) El nuevo trámite de admisión.

a) Del sistema de admisión al de inadmisión.

Como hemos podido ver, se producen inadmisiones de los recursos de amparo por incumplimiento del nuevo requisito procesal, por la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional o, incluso, por su insuficiente justificación.

Ahora bien, junto a ello, se siguen inadmitiendo recursos por otras cuestiones procesales, como es la extemporaneidad en la interposición del recurso de amparo o la inexistencia o falta de apariencia de lesión o vulneración del derecho fundamental. Por tanto, a las anteriores causas se le ha añadido la causa consistente en la especial trascendencia constitucional. Con lo cual, a la labor que ya venía realizando el Tribunal en orden a constatar la inexistencia de causas de inadmisión, se le ha añadido esta nueva causa.

b) Sobre la *especial trascendencia constitucional* y la objetivación del recurso de amparo.

Como hemos visto, tal vertiente objetiva no se corresponde con el grueso de las sentencias, ni tan siquiera con una parte mayoritaria. Pues, en la mayoría de las mismas, se produce una reiteración de la doctrina ya existente y una aplicación al caso concreto. Con lo que nada nuevo se añade a la doctrina ya elaborada con anterioridad por el propio Tribunal.

En los casos que hemos visto y analizado, el alcance objetivo de las demandas no dista de la apreciación objetiva que ya existía sobre el recurso de amparo. Es decir, aunque se ponga de manifiesto en las sentencias la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, la misma no es sino

⁹¹⁶ STEDH Asunto Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015 (42).

concretas manifestaciones que ya existían de manera previa en el recurso de amparo.

No queremos decir que no haya existido un esfuerzo doctrinal por parte del Tribunal para determinar qué ha de entenderse materialmente por *especial trascendencia constitucional*, sino que cuando se produce no dista de la labor que en tal sentido venía realizando el Tribunal. Obviándose con ello, y en gran medida, el significado que ha de dársele al concepto de *dimensión objetiva* del recurso de amparo.

Esta falta de determinación en relación a poner de manera efectiva la reforma llevada a cabo por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo; se pone de manifiesto en el propio seno del Tribunal. Así, por un lado, hay Magistrados⁹¹⁷ que niegan el alcance de la reforma operada apelando a la regulación dada por la Constitución mientras que por otro⁹¹⁸, sin desconocer claro está la configuración del recurso de amparo, manifiestan la cierta falta de cumplimiento de lo dispuesto

⁹¹⁷ Voto particular que formula el Magistrado VALDÉS DAL-RE en el ATC 28/2013, de 11 de febrero (Sala Primera): “En otras palabras, los intentos de dotar de una estricta objetivación al proceso de amparo, elaborados con el designio de arrumbar la tutela subjetiva, carecen, a mi juicio, de acomodo en el art. 53.2 CE; y tampoco encuentran una razonable explicación sistemática en el propio texto constitucional. Desde luego, no pretendo objetar una reforma —y tampoco una interpretación de la llevada a cabo en 2007— destinada a estructurar con mayor rigor el proceso constitucional de amparo, a fortalecer el papel de la jurisdicción ordinaria en la tutela de los derechos fundamentales, a articular el amparo constitucional como una vía verdaderamente extraordinaria y última o, en fin, a formular unas exigentes condiciones de acceso y agotamiento de los otros cauces reparadores previos; una reforma que, incluso, añada requisitos de objetivación del recurso mismo. Todo ello, resulta razonable; incluso imprescindible, seguramente, para la posición institucional del propio Tribunal Constitucional y para el cumplimiento ordenado de sus complejas funciones. Pero me distancio de manera abierta de una interpretación de la reforma legal de 2007 (o de otras posteriores) que termine convirtiendo al amparo, de facto, en un proceso en el que la tutela subjetiva sea residual. Una comprensión semejante desnaturaliza el proceso de amparo, tal y como el mismo ha quedado constitucionalmente diseñado.

⁹¹⁸ Sobre la falta de justificación argumentación relativa a la especial trascendencia constitucional en la demanda de amparo, voto particular discrepante del Magistrado PÉREZ TREMPs, en la STC 31/2013, de 11 de febrero (Sala Segunda): “En el presente caso, la lectura de la demanda pone de manifiesto que el recurrente se ha limitado a argumentar la eventual vulneración de los derechos fundamentales invocados, y que no aparece ninguna mención expresa ni implícita a la especial trascendencia constitucional del recurso, no siendo citados siquiera el art. 50.1 b) LOTC, como precepto en que se establecen los supuestos de dicha especial trascendencia constitucional, o la STC 155/2009, de 25 de junio, como resolución en que se concretaron y desarrollaron los criterios básicos para entender justificada la especial trascendencia constitucional. Esta mera constatación, puesta en relación con la doctrina constitucional antes expuesta, debería haber llevado a estimar la concurrencia del óbice procesal aducido por el Ministerio Fiscal, toda vez que la demanda desconoce pura y simplemente que, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, pesa sobre el recurrente la carga de argumentar explícitamente que el amparo solicitado tiene la proyección objetiva exigida por el citado art. 50.1 b) LOTC”.

por el Legislador. Esa dicotomía entre dimensión objetiva-subjetiva que hemos visto en la doctrina, se reproduce en sede del propio Tribunal pero, no debemos olvidar, que junto con la Constitución, el Tribunal Constitucional está sometido a su propia Ley Orgánica y, como hemos visto, la LOTC dice lo que dice y la voluntad del Legislador fue clara al respecto.

Debido a esto, no son pocas las voces en la doctrina que están empezando a reclamar una mayor transparencia en la labor del Tribunal, sobre todo orientada a una mayor previsibilidad y, por ende, una mayor seguridad jurídica; pues incluso su labor llega a ser tachada de arbitraria⁹¹⁹. Para tal fin se insta, por ejemplo, a que las providencias sean motivadas y públicas⁹²⁰. También se buscan soluciones a los recursos en que exista una *especial trascendencia constitucional* pero no exista una apariencia de lesión o vulneración del derecho fundamental; para estos supuestos se propone que su resolución lo sea mediante auto⁹²¹.

Como hemos argumentado más arriba, entendemos que la solución es la resolución mediante sentencia, puesto que la argumentación y la consideración sobre la especial trascendencia constitucional atañe a la fundamentación jurídica, mientras que la falta o inexistencia de lesión incide sobre el fallo, en el que el Tribunal Constitucional puede decidir sobre la desestimación del amparo o, incluso, sobre su admisión pero, no obstante, habrá quedado interpretado y fijado mediante sentencia, el objeto, contenido o límites del derecho fundamental de que se trate.

c) El recurso de amparo como tutela subjetiva de los derechos fundamentales.

A pesar del evidente carácter objetivo que el Legislador quiso dotar al nuevo recurso de amparo, el Tribunal ha admitido, conocido y resuelto mediante

⁹¹⁹ Urías Martínez, J. Op.cit. Págs. 76 y 94.

⁹²⁰ Urías Martínez. Op.cit. Pág. 92

⁹²¹ Requejo Pagés, J.L. y otros: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el Tercer Cuatrimestre de 2014". *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 103, enero-abril (2015), págs. 259-260.

sentencia, con carácter mayoritario, recursos de amparo en los que se produce una mera tutela subjetiva de los derechos fundamentales que se alega como lesionados. Tal tutela, se produce a través de la aplicación al caso concreto de la doctrina ya elaborada y reiterada por el Tribunal.

Por todo, no se ha producido hasta ahora una eliminación de la vertiente subjetiva del recurso de amparo. Como hemos tenido ocasión de ver, en muchos de esos supuestos no se produce un desconocimiento general o reiterado de la doctrina, sino un incumplimiento puntual y *ad casum* de la jurisprudencia emanada por el Tribunal; o incluso como una simple discordancia en la interpretación de los derechos fundamentales entre el juzgador de instancia y el Tribunal Constitucional. Por tanto, al no poder considerarse como una evidente, palmaria o reiterada desviación o desconocimiento de la misma por parte de los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, que llevaría a la conclusión que tales recursos poseen una especial trascendencia atendiendo a la *aplicación o general eficacia de la Constitución* (art. 50.1.b) LOTC); el Tribunal actuará aquí como un órgano revisor de la labor llevada a cabo por el Tribunal *ad quo*.

Por ello, el grueso de las sentencias dictadas por el Tribunal no evidencia un cambio sustancial respecto a la tutela dispensada por él mismo antes de la reforma de la Ley Orgánica, a pesar, como decimos, de dicha reforma. Indica TENORIO SÁNCHEZ, “es que el propio Tribunal no parece haber considerado suficiente la compensación que se ofrecía a los justiciables y, como veremos, ha intentado recuperar la subjetivación del amparo, paradójicamente, resaltando su propia discrecionalidad frente a lo que parece la voluntad de la ley. Por eso decíamos que de alguna manera la reforma no se ha aplicado plenamente”⁹²².

Parece ser que, para lo que ha realmente ha servido el nuevo trámite de admisión, en concreto, la inadmisión mediante providencia ha sido para descargar al Tribunal de los miles de recursos pendientes de admisión. Como bien sentencia HERNÁNDEZ RAMOS “[u]no de los principales objetivos que

⁹²² TENORIO SÁNCHEZ, P.J.: “Derechos en serio, recurso de amparo....”. Pág. 157

pretendió la reforma de la L. O. 6/2007 fue reducir la pendencia de asuntos ante el Tribunal Constitucional. Este objetivo puede considerarse cumplido”⁹²³.

3º) El conocimiento del recurso de amparo por las Secciones del Tribunal.

A pesar de que esa posibilidad venía expresamente determinada por la propia Ley Orgánica, el Tribunal, *de facto*, ha eliminado tal posibilidad al excluir el conocimiento por parte de las Secciones. A pesar de que, como hemos visto, en un gran número de las sentencias dictadas se producirá una aplicación de la doctrina ya existente pero las mismas serán conocidas por las Salas y no por las Secciones.

Las Secciones, inicialmente, sí procedieron a dictar sentencias de amparo pero poco tardó en producirse el cambio hacia la regla general de conocimiento por parte de las Salas, para disminuir el riesgo de que se pudieran producir decisiones contradictorias en el seno del Tribunal⁹²⁴. Por tanto, por decisión interna del Tribunal se aplicará esta regla general, el conocimiento por las Salas y no por las Secciones⁹²⁵.

4º) El Incidente de nulidad de actuaciones.

Inicialmente ha existido una jurisprudencia vacilante en torno a la conexión entre el nuevo incidente de nulidad de actuaciones y el nuevo trámite de admisión del recurso de amparo. Jurisprudencia, como decimos, vacilante e

⁹²³ HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “El amparo constitucional. Doctrina y problemas actuales...”. Pág. 160-161.

⁹²⁴ Así lo pone de manifiesto el Profesor Aragón Reyes. “Para disminuir ese riesgo (pero no para eliminarlo, como es claro y no podría ser de otra manera) el Tribunal tiene decidido que las admisiones se acuerdan por las Salas y no por las Secciones, aparte de que ello contribuye a la conveniente unificación de los criterios de admisión” en “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. La función del Ministerio Fiscal”. Teoría y realidad constitucional. Madrid. Nº. 28 (2º semestre). 2011. Pág. 372.

⁹²⁵ Principalmente, esa admisión por las Salas y no por las Secciones se aprecia a partir del año 2011. Así, se pone de manifiesto en el ATC 16/2011, de 25 de febrero, “Esta más compleja y decisiva entidad que la nueva regulación impone al trámite de admisión del recurso de amparo obliga a un examen más detenido de las demandas, hasta el punto de que este Tribunal ha determinado que las admisiones de los recursos de amparo interpuestos después de la entrada en vigor de la aludida reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, sean decididas por las Salas y no por las Secciones”. (F.J. 3º).

incluso contradictoria que dio lugar a que el Pleno tuviera que pronunciarse al respecto.

Pues bien, el incidente de nulidad de actuaciones no supone sino otro requisito más para entender agotado los mecanismos jurisdiccionales posibles para la tutela, que permiten entender agotada la vía judicial previa para la interposición del recurso de amparo, siempre y cuando dicho incidente sea un mecanismo manifiestamente procedente para intentar reparar la lesión ante el órgano judicial.

5º) El número de demandas interpuestas anualmente.

La reforma del recurso de amparo efectuada por la Ley Orgánica 6/1988, no dio los frutos esperados como consecuencia de la interpretación que el propio Tribunal hizo del art. 50 LOTC, en concreto, de la <<carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre el fondo>>. Dicha interpretación no palió la situación de colapso del Tribunal provocado por la avalancha de demandas de amparo. La interposición de las mismas no dejó de aumentar en los años posteriores⁹²⁶.

Creemos que, al igual que ocurrió con aquella reforma del recurso de amparo del año 1988, la interpretación que el Tribunal Constitucional está dando al actual artículo 49 LOTC pero sobre todo al artículo 50 LOTC, tampoco va a suponer una disminución en la interposición de demandas de amparo. Si bien es cierto que, inicialmente, se ha producido una considerable disminución de la interposición, no es menos cierto que la interpretación laxa del requisito de la *especial trascendencia constitucional* supondrá que en los próximos años aumente la interposición de las demandas. Pues, como hemos visto, el Tribunal Constitucional en la mayoría de los recursos de los que conoce sigue funcionando como una tercera instancia o una instancia de revisión de la función jurisdiccional llevada a cabo por la jurisdicción ordinaria. Y ello debido a que, para la admisión, el cumplimiento del requisito de la *especial trascendencia constitucional* por parte del demandante de amparo que, en la mayoría de las

⁹²⁶ HERNÁNDEZ RAMOS. “El nuevo trámite de admisión...” Op. cit. Págs. 196-224.

ocasiones, es considerado por el Tribunal como un trámite o como una “cláusula de estilo” que, por el mero hecho de constar en un apartado específico de la demanda, da lugar a su admisión sin que dicha argumentación tenga repercusión alguna en el fondo del asunto. Con lo cual, y a pesar de que se ha reducido el número de demandas, también se está produciendo un paulatino aumento en los últimos cuatro años. Por ello creemos que de seguir con dicha apreciación sobre el contenido y alcance de dicho requisito, se diluirá la reforma del recurso de amparo. Por tanto, si finalmente se produce, la responsabilidad en tal sentido ha de recaer en el órgano constitucional, pues no habrá sabido atajar la avalancha de recursos a través de los medios de los que le ha dotado el Legislador.

Llegados a este punto, la gran pregunta o la pregunta que todos nos hacemos sobre esta cuestión es, ¿qué está haciendo el Tribunal Constitucional con la reforma del recurso de amparo? Nuestra respuesta no puede ser otra que: sustancialmente, lo mismo que hacía antes de la reforma del recurso de amparo pero, con una gran salvedad o diferencia, que ahora no sólo no sabemos por qué inadmite a trámite una demanda de amparo sino que, en la gran mayoría de los casos, tampoco sabemos por qué admite a trámite.

6º) La necesidad de manifestar expresamente la especial trascendencia constitucional del recurso por parte del Tribunal: una interpretación de la L.O. 6/2007, de 24 de mayo.

Hemos visto cuál ha sido la interpretación realizada por el Tribunal de los artículos 49 y 50 LOTC. La interpretación que podemos extraer de la anterior regulación y, en concreto, sobre el concepto jurídico indeterminado *especial trascendencia constitucional* y su apreciación en base a <<su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales>>, es que ambos requisitos se entremezclan, tanto el impuesto al demandante como el impuesto al Tribunal. Hay que diferenciar por tanto la carga que corresponde por un lado al demandante de amparo y por otro al Tribunal, pues ambos son los destinatarios de los Artículos 49 y 50 LOTC.

Así el artículo 49 LOTC establece la carga que pesa sobre el recurrente de amparo. El citado artículo en su apartado primero determina el destinatario de las obligaciones y requisitos que dicho artículo impone y que no es otro que aquel que inicia el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Se le impone la carga de acreditar los hechos, las infracciones constitucionales que ello ha conllevado y la justificación de la especial trascendencia en su demanda, a la cual deberán acompañarse la documentación que exigen los apartados segundo y tercero del artículo. Estas son las exigencias que el Legislador impone al demandante de amparo.

Pues bien, al demandante de amparo, según la interpretación dada al artículo 49.1 *in fine* LOTC, le corresponderá argumentar –*formal y materialmente*⁹²⁷- la *especial trascendencia constitucional* de su recurso, como requisito que es impuesto por la LOTC. Con lo cual, como requisito procesal y sustantivo impuesto al demandante, el mismo debe ser cumplimentado en la demanda, so pena de ser inadmitida a trámite. Ello se extrae de la doctrina inicial elaborada por el Tribunal y de las miles de providencias dictadas en tal sentido. Ahora bien, si este sigue entendiendo –como hemos visto- que también es posible admitir demandas que contradigan tal jurisprudencia, es decir, que no es necesario justificar expresamente, ni dedicar un apartado específico, ni realizar una verdadera labor argumentativa al respecto para que la demanda sea admitida y conocida mediante sentencia, el Tribunal en este caso deberá dejar claro las razones jurídicas y de fondo que le llevan a establecer tales excepciones a su propia jurisprudencia. Pues, lo que no es de recibo, es que exista una jurisprudencia contradictoria sin que sepamos las razones y argumentos jurídicos en los que se basa. Ahora bien, cuestión distinta es que el Tribunal pueda apreciar la existencia de una especial trascendencia constitucional más allá de las concretas argumentaciones que para ello haya

⁹²⁷ Así ha de ser entendido por el Tribunal Constitucional sin que exista jurisprudencia vacilante al respecto, como lo puso de manifiesto el Magistrado PÉREZ TREMPs, en la en la STC 31/2013, de 11 de febrero (Sala Segunda): “Esta mera constatación, puesta en relación con la doctrina constitucional antes expuesta, debería haber llevado a estimar la concurrencia del óbice procesal aducido por el Ministerio Fiscal, toda vez que la demanda desconoce pura y simplemente que, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, pesa sobre el recurrente la carga de argumentar explícitamente que el amparo solicitado tiene la proyección objetiva exigida por el citado art. 50.1 b) LOTC”.

dado expresamente el demandante. Pero, ello no es óbice, para que el demandante esté obligado a realizar dicho esfuerzo argumental.

Respecto a la carga que pesa sobre el Tribunal en orden a la admisión, art. 50 LOTC. Entendemos que el requisito de la *especial trascendencia constitucional* no puede ser considerado como un requisito más para la admisión, sino que debe ser la causa para la admisión. Y la admisión basada en la especial trascendencia no puede deberse a cualesquiera razones, sino que ha de corresponderse realmente con la *dimensión objetiva del recurso de amparo*, tal y como ha dispuesto el Legislador. Es decir, la admisión ha de servir para una real interpretación del objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales. Pues tal es la exigencia impuesta al Tribunal Constitucional en el artículo 50 LOTC. La demanda de amparo debe “*ser objeto de una decisión de admisión a trámite*”, algo que sólo puede llevar a cabo el propio Tribunal cuando concurren todos los requisitos establecidos en el apartado primero del artículo. En concreto, y en cuanto al párrafo a), que el Tribunal determine el cumplimiento de los requisitos formales y materiales por el demandante en su escrito de demanda, entre ellos la especial trascendencia del recurso. En cuanto al párrafo b), le corresponde al Tribunal Constitucional si este último requisito ha sido cumplido y aquí se despliegan tres elementos en relación a la especial trascendencia⁹²⁸:

- Por un lado, que la apreciación de dicho requisito ha de desprenderse del “*contenido*” de la demanda de amparo.

- Por otro, que esté *justificado* que el Tribunal entre a conocer sobre el fondo del mismo.

- Para finalizar, deberá el Tribunal apreciar que está *justificado* que entre a conocer del “*contenido*” del recurso porque posee <<*importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*>>.

⁹²⁸ En tal sentido se pronunció el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo en su voto discrepante con el parecer de la mayoría de la Sala, donde determina que el juicio sobre la concurrencia de los supuestos determinados en el art. 50.1. b) LOTC le corresponde al Tribunal. “No en vano la Ley incluye la mención de estos criterios en un artículo cuyos destinatarios son los Magistrados que componen el Tribunal, o mejor dicho las Secciones, pero en ningún caso el recurrente”. (ATC 289/2008, de 22 de septiembre. Voto particular)

Por tanto, la imposición se establece no sólo para el recurrente, el cual deberá en su recurso *justificar* la especial trascendencia constitucional sino que dicha obligación de *justificación* también se predica del propio Tribunal, debiendo inadmitir todo aquel recurso de amparo que, además de incumplir con lo preceptuado en el artículo 50.1 a) LOTC, también incumpla con la obligación de que en el *contenido* de su demanda no se justifique la especial trascendencia constitucional, artículo 50.1 b) LOTC.

Por todo lo anterior, y donde queremos llegar, es que difícilmente casa todo con la interpretación que ha venido realizando el Tribunal Constitucional. Ello debido a que, tras la nueva regulación, la inadmisión de las demandas de amparo se producirá mediante providencia, las cuales *per se* son inmotivadas y sólo deberán especificar el requisito incumplido. Solución necesaria y positiva para descargar del ingente volumen de trabajo al Tribunal. Pero difícilmente se podrá inmotivar una resolución que necesariamente ha de conllevar la “*justificación de la justificación*”, esto es, que para el Tribunal esté justificado – por la <<*importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales*>>- que el *contenido* de la demanda justifica una decisión sobre el fondo del asunto por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, que no conozcamos las razones que han llevado al Tribunal apreciar la misma y a conocer del fondo del asunto en base a dicha apreciación, hace que nos movamos en terreno pantanoso, escurridizo e incluso oscuro. Pues, como hemos dicho, no sólo desconocemos por qué el Tribunal inadmite un recurso, sino también por qué lo admite.

Por ello y debido al concreto contenido de lo preceptuado en el artículo 50 LOTC, en relación a la estimación de las demandas de amparo y la carga que pesa sobre el Tribunal de acreditar que queda justificada la admisión, dicha *motivación* en relación a la admisión, no debe quedar en el *fuero interno* del Tribunal sino que ha de quedar plasmada para el general conocimiento, no sólo para el demandante de amparo, sino para el resto de la ciudadanía y para los operadores jurídicos.

Cualquiera puede plantear ¿Por qué ha de manifestar las razones que les ha llevado a entender cumplido el requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso? ¿Realmente la reforma de la Ley le obliga?

La razón es bien sencilla, porque no encontramos justificación jurídica que legitime la multitud de recursos de amparo resueltos mediante sentencia en los que sólo se produce una tutela del derecho fundamental, sin que el asunto trascienda más allá del caso concreto. A su vez, además, pueda inadmitirse un recurso por “insuficiente argumentación de la especial trascendencia”. Esto último supone el cumplimiento de dos requisitos que, a priori, impone la LOTC al recurrente: que hay un párrafo destinado expresamente a justificar la especial trascendencia constitucional y una argumentación material destinada a tal fin que, aunque al Tribunal le haya parecido insuficiente, no es menos cierto que dicha argumentación existe. Y, sin embargo, nos encontramos multitud de sentencias donde nada se nos traslada respecto a las concretas argumentaciones dadas por el demandante, nada se dice sobre la consideración en fase de admisión, ni nada nuevo se añade a la jurisprudencia existente y sólo se produce una concreta tutela subjetiva del derecho fundamental e, incluso, se producen admisiones a trámite sin que sin que se haya destinado ni siquiera un párrafo a argumentar la *especial trascendencia constitucional* del recurso. Es natural que nos planteemos ¿por qué en un concreto supuesto el Tribunal sí ha admitido a trámite mientras en otro no? Y, frente a tal pregunta, no obtenemos una respuesta jurídica que lo justifique, eso no puede sino definirse como arbitrariedad.

No ponemos en cuestión que no exista dicha reflexión en torno a la especial trascendencia pero si existe ¿no es más fácil ponerlo de manifiesto que acabar teniendo que tachar al máximo intérprete de la Constitución de incurrir en arbitrariedad?

Creemos que la solución es sencilla pero que requiere ese esfuerzo por parte del Tribunal, esfuerzo que en realidad no lo es tanto pues como afirma el Tribunal ese proceso de reflexión interna se produce en fase de admisión, con lo

cual, sólo habrá que ponerlo de manifiesto en la sentencia. Pero, desde nuestro punto de vista, tal reflexión ha de existir, siendo además la causa que debe dar origen a la admisión.

En definitiva, y según nuestro parecer, con el fin de evitar las tachas de discrecionalidad o, incluso, de arbitrariedad atribuidas a la función y labor llevada a cabo por el Tribunal, la única forma de fiscalización de dicha labor es hacer presentes en las sentencias las razones de forma y fondo que han llevado al Tribunal a conocer del recurso mediante sentencia. Por ello, el Tribunal o sus Salas deberían:

a) Hacer patentes las concretas manifestaciones realizadas por las partes en orden a cumplimentar la carga de la especial trascendencia o, en su caso, para manifestar la inexistencia de la misma, en el corpus de los Antecedentes.

b) Hacer patente la apropiada apreciación del Tribunal en orden a la admisión respecto a la especial trascendencia y esto con independencia de que sea objeto de cuestionamiento por un tercero en el proceso. También en la parte destinada a los Antecedentes en la sentencia.

c) Una vez establecidas las concretas argumentaciones, así como su apreciación inicial que puede verse modificada a lo largo de la tramitación del procedimiento, proceder al análisis de la dimensión objetiva del recurso con independencia de la fundamentación y argumentación dada respecto a la concreta vulneración del derecho fundamental. Tal análisis se produciría en la Fundamentación Jurídica de la sentencia.

El que se exponga en las sentencias las razones dadas por el demandante, las partes y, sobre todo, la del propio Tribunal Constitucional, haría efectiva la *voluntas legislatoris* pero, además, daría respuesta a dos importantes cuestiones:

a) Permitiría cotejar el efectivo cumplimiento de dicho requisito dado por el demandante y, lo que es más importante, saber cuál es la apreciación que

sobre el mismo posee el Tribunal Constitucional. Ello permitiría alejar las dudas que planean dentro de la doctrina sobre el ejercicio arbitrario que en su función sobre la admisión está realizando el Tribunal.

b) Y quizás lo que es más importante, ello cumpliría con una importante función como es una mayor sistematización de la doctrina del Tribunal. Algo que sería muy beneficioso, no sólo para los operadores jurídicos en general, sino sobre todo para los órganos judiciales en particular. Pues mejoraría el cumplimiento de la obligación impuesta de acatar y aplicar la doctrina constitucional en materia de derechos fundamentales, obligación impuesta principalmente por el art. 5 LOPJ. Que a su vez redundaría en una mejor aplicación de la doctrina constitucional por los órganos de la jurisdicción ordinaria algo que, en definitiva, es lo que pretende la reforma efectuada por la L.O. 6/2007.

Desde un punto de vista sustantivo o de fondo, respecto a la efectividad de la *especial trascendencia constitucional* como elemento sustentador de la dimensión objetiva del recurso de amparo. Es decir, para que el recurso de amparo sea efectivamente un mecanismo real de interpretación del objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales, pueden resultar válidos algunos de los supuestos que el Tribunal determinó en el F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio. De ellos, sobre todo, resultan ciertamente relevantes los supuestos a) y b). Esto es, que el recurso “plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional” o que “dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, (...), o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE”. También “cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general” (supuesto c), pues el Tribunal actuará aquí en su función originaria como *Legislador negativo*.

Ahora bien, por contra, rechazamos el uso desmesurado de los supuestos d), e) y f) del F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio. Es decir, que “la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución”; “cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros” o “en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ)”. Pues, como hemos visto, el Tribunal cobijándose en los mismos, lo que realmente viene a realizar es una revisión de la labor efectuada por la jurisdicción ordinaria; convirtiendo, nuevamente, al recurso de amparo en una *supercasación*, destinado a reparar las meras lesiones de los derechos fundamentales, a través de la aplicación de su propia doctrina o, simplemente, entrando a conocer por la mera discrepancia en la interpretación del derecho fundamental que ha realizado el juzgador *ad quo*. No obstante, en algunos supuestos en los que realmente exista un flagrante y reiterado desconocimiento de su doctrina –tal como vimos, por ejemplo, con el *habeas corpus*-, podría hacer un uso puntual del supuesto f), cuando se evidencie ese efectivo incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 5 de la LOPJ o, como vimos, en relación al concreto supuesto d).

Tal y como hemos referenciado, la *especial trascendencia constitucional* ha de ser la causa que origine la admisión del recurso de amparo. Nada impide que el Tribunal pueda, finalmente, desestimar, denegar o incluso inadmitir el recurso mediante sentencia, que se basará en cualesquiera otras razones. Tales apreciaciones afectarán al Fallo de la misma, mientras que la labor destinada a la *dimensión objetiva* del recurso se localizará y quedará reflejada en la Fundamentación Jurídica.

7º) La doctrina del Tribunal Constitucional y la vinculación a la misma del resto de órganos y Poderes del Estado.

a) En relación al Poder Legislativo.

Debido a todo lo anterior, creemos que llegado el caso y siempre que el Tribunal no empiece a fijar criterios claros y definidos respecto a los artículos 49 y 50 LOTC, entendemos que sería necesaria una nueva reforma de la LOTC que establezca al recurso de amparo en sus estrictos términos, dotándolo de una regulación más acorde a los treinta y cinco años de doctrina del Tribunal Constitucional y más de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución; con lo cual, una vez superados los escollos que hacían del recurso de amparo un mecanismo necesario frente a la desconfianza hacía un Poder Judicial heredero del régimen dictatorial, difícilmente se puede seguir manteniendo una regulación del recurso de amparo a día de hoy. En este sentido nos hacemos eco de las propuestas de regulación de los distintos tipos de recursos de amparo que en su día propusiera la profesora Carmona Cuenca y que ya tuvimos ocasión de ver en el capítulo segundo.

No obstante, lo anterior no es óbice para que el Legislador realice un mejor análisis de los mecanismos de tutela ante la jurisdicción ordinaria donde realice un mejor desarrollo y regulación legal allí donde fuera necesario. En primer lugar y principalmente, un análisis de la práctica y puesta en funcionamiento del *incidente de nulidad de actuaciones* que derive en una mejor regulación del mismo, tal y como ha venido indicando la doctrina, que podría pasar por que se trate de un recurso devolutivo o también que se establezca como preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal.

b) En relación al Poder Ejecutivo.

En cuanto, al Poder Ejecutivo es necesario que asuma la responsabilidad respecto a la situación de saturación de muchos de nuestros juzgados, haciendo que la falta de medios personales y materiales de los que adolecen, derive en un insuficiente ejercicio de la función jurisdiccional y, con ello, de las posibles

consecuencias que ello puede tener en la tutela de los derechos fundamentales como primeros y principales garantes.

c) En relación al Poder Judicial.

Como hemos dicho, al Tribunal Constitucional le corresponde en última instancia, como supremo garante e intérprete de los derechos fundamentales, establecer, a través de la función interpretativa de la Constitución, el contenido, objeto y límites de los mismos o, si se quiere, determinar las disposiciones y normas adscritas al derecho fundamental y, al mismo tiempo, establecer el alcance objetivo de tales derechos. Por tanto, y como vimos con anterioridad, una vez determinadas las *normas iusfundamentales*, les corresponderá al resto de los poderes públicos velar por su protección. Y, en concreto, queremos hacer hincapié en la función atribuida al Poder Judicial como primeros y principales garantes de los derechos fundamentales que, además, con la nueva reforma del recurso de amparo, se traslada hacia ellos la tutela subjetiva de tales derechos. Es por ello que, vislumbramos de vital importancia el papel que deben jugar a partir de ahora los órganos de la jurisdicción ordinaria. Y, principalmente, hemos de poner la mirada en la función que puede y debe cumplir el Consejo General del Poder Judicial en dicha labor como “*órgano de gobierno*” de los Jueces y Magistrados, (art. 122.2 CE). Pues él ha de cumplir con una serie de funciones y atribuciones, entre las que cabe destacar:

Formación judicial.

a) “De la formación inicial de los futuros jueces. Dura dos años, una vez aprobada la oposición. El primer año es académico y se imparte por docentes en la Escuela Judicial. El segundo año consiste en prácticas en un juzgado, bajo la directa y personal supervisión de Magistrados tutores”⁹²⁹.

⁹²⁹ En tal sentido es recogido por la propia página web del Poder Judicial. <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Que-es-el-CGPJ/Funciones--/Formacion-judicial/Formacion-judicial>

b) “Dirigir la formación continua de los jueces y magistrados. Desarrolla los programas y actividades destinados a garantizar el adecuado perfeccionamiento profesional de los integrantes de la Carrera Judicial. Cada miembro de la Carrera Judicial contará con un plan especializado de formación continua”⁹³⁰.

Por tanto, sería necesario un mayor esfuerzo en tal sentido por parte del Consejo General del Poder Judicial, en relación a una mayor formación teórica y práctica en materia de derechos fundamentales, así como en la formación y puesta al día de las novedades doctrinales que en materia de derechos fundamentales se vayan produciendo. Pues se ha puesto de manifiesto por la doctrina que ese déficit en materia de formación es una de las posibles causas de vulneración de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción ordinaria⁹³¹.

Mejora de la calidad de la Justicia.

“Al Consejo General del Poder Judicial le corresponder velar por el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. En suma, velar para que los Jueces y Magistrados dispongan de todos los medios necesarios para el adecuado ejercicio de su función jurisdiccional.

Para lograr este objetivo, se requiere la actuación del Consejo en el siguiente campo:

Tiene la capacidad para proponer cuantas actuaciones estime necesarias para mejorar la administración de justicia. Bien mediante la presentación de la memoria anual ante las Cortes Generales o bien dirigiéndose directamente al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia sobre

⁹³⁰ *Ibidem*.

⁹³¹ Los déficits de formación de la Judicatura en materia de derechos fundamentales, ha sido puesta de manifiesto, entre otros, por Borrajo Iniesta, en “Mitos y realidades de la jurisdicción constitucional de amparo: hechos, derecho, pronunciamientos, admisión, costes”. *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*. Págs. 159-203

justicia, el Consejo propone la adopción de aquellas medidas e iniciativas que contribuyan al mejor funcionamiento de los órganos judiciales españoles”⁹³².

Esta concreta atribución responde a dos cuestiones diferenciadas, la memoria anual supone un cauce de conexión entre el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes Generales, contribuyendo a la colaboración entre ambos Poderes del Estado en el marco del Estado democrático de Derecho y, por otro, como mecanismo del Consejo en la política judicial⁹³³.

Régimen disciplinario judicial.

Principalmente, en su función de sometimiento a la ley a la que están obligados todos los Jueces y Magistrados.

“El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a Jueces y Magistrados. Mediante la incoación de un expediente disciplinario que tiene por objeto establecer el alcance de la conducta realizada por el juez o magistrado, el Consejo resuelve sobre la existencia de infracción y la imposición de la sanción pertinente”⁹³⁴.

Si bien es cierto que dicha potestad disciplinaria no está exenta de dificultades, celos e inconvenientes⁹³⁵, no es menos cierto que, ante situaciones como la que hemos visto anteriormente, por ejemplo, respecto al procedimiento de *habeas corpus* o la falta de motivación de las resoluciones judiciales en el ámbito penitenciario, donde incluso el Tribunal Constitucional ha tenido que realizar una llamada a los deberes impuestos a los órganos judiciales como consecuencia de una conducta reiterada y evidentemente contraria a los derechos fundamentales y a la legalidad, principalmente, respecto a las

⁹³²<http://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Que-es-el-CGPJ/Funciones--/Mejora-de-la-calidad-de-la-Justicia/Mejora-de-la-calidad-de-la-Justicia>

⁹³³ Ballester Cardell, M.: *El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal*. CGPJ. Madrid, 2007. Págs. 237-239.

⁹³⁴<http://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Que-es-el-CGPJ/Funciones--/Regimen-disciplinario-judicial-/Regimen-disciplinario-judicial>

⁹³⁵ Ballester Cardell, M. *Op.cit.* Págs. 225-228.

obligaciones que derivan de los arts. 5 y 7 de la LOPJ. Por tanto, y como decimos, tales conductas abiertamente contrarias a los derechos fundamentales y la legalidad, no pueden quedar sin respuesta al respecto por parte del máximo Órgano de Gobierno de los Jueces y Magistrados.

En cuanto a las discrepancias entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, que hemos visto antes, como puede ser, respecto a la prescripción de delitos o la doctrina sobre la ponderación de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen (art. 18.1 CE) y libertad de información (art. 20.1 CE); hemos de decir que ambos Tribunales han dado un paso importante, y esperemos que fructífero, para coordinar y cooperar respecto al conocimiento de la labor efectuada por uno y otro Tribunal. Dicho paso se ha producido con la firma del Primer Convenio de Colaboración Tribunal Constitucional-Consejo General del Poder Judicial, suscrito el 21 de noviembre de 2014⁹³⁶.

Cuyo contenido dispone que “[l]a firma del acuerdo tiene por objeto *“establecer un marco de colaboración documental y jurisprudencial” entre el Constitucional y el Supremo mediante “la puesta a disposición de sus fondos bibliográficos e intercambio de resoluciones”; y pretende “facilitar la labor jurisdiccional” de los magistrados*”.

Con la finalidad de llevar a cabo lo anterior, *“las partes se comprometen a permitir el acceso a sus bibliotecas de los magistrados del otro Tribunal; a facilitar, para uso interno, la remisión de las resoluciones que ambas instituciones difunden en sus páginas web; así como a prestarse colaboración mutua en materia de asesoramiento tecnológico sobre tratamiento documental de la jurisprudencia”*.

Por tanto, y respecto al tema que nos atañe que no es otro que la función atribuida al Tribunal Constitucional como *órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales* (art. 123.1 CE), creemos que es un buen

⁹³⁶ Puede consultarse el texto íntegro en la Nota Informativa Nº 93/2014. http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2014_093/NOTAINFORMATIVANUMERO932014.pdf

comienzo para el conocimiento mutuo de la interpretación que de los derechos fundamentales realicen ambos Tribunales, sin olvidar, claro está, la función atribuida al Tribunal Constitucional de supremacía interpretativa respecto a dicha materia. Pero, sí creemos, que el máximo conocimiento y aplicación de dicha doctrina por parte del Tribunal Supremo repercutirá positivamente en el conocimiento y aplicación de la misma por parte de los tribunales inferiores jerárquicos y que, por tanto, podrá redundar en su función de primeros y principales garantes de los derechos y libertades fundamentales.

Esperemos que la apreciación de SERRA CRISTOBAL, “[c]ada vez son más abundantes los casos en los que el TC no solo lo manifiesta, sino que decide replegarse a su papel de mero intérprete de la constitucionalidad. Al igual que son numerosas las sentencias del TS que se hacen eco de la doctrina constitucional. Aún así, siguen dándose supuestos en los que el TS rehúsa aplicar ciertos planteamientos doctrinales del TC. Desde luego, no pude hablarse de diálogo cuando el TS decide ignorar por principio aquellos pronunciamientos de la jurisdicción constitucional que considera que invaden sus competencias, o cuando el TC hace oídos sordos a la jurisprudencia consolidada que pueda existir sobre una cuestión procesal. Pero son casos que representan un porcentaje muy bajo en la totalidad de cuestiones que se deciden ante estos tribunales”⁹³⁷; se haga una realidad y, sobre todo, que se ceje en ese *ignorar* a uno y hacer *oídos sordos* el otro.

⁹³⁷ SERRA CRISTÓBAL, R.: Nuevos tiempos en las relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España ¿de las desavenencias a una relación dialogada? *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*. Núm. 18, 2014. Pág. 396.

CONCLUSIONES

El fin de la presente tesis doctoral ha sido intentar adentrarnos en la nueva regulación dada al recurso de amparo por la L.O. 6/2007, de 24 de junio y, principalmente, al alcance, límites y función dada al nuevo trámite de admisión a través de la exigencia de la *especial trascendencia constitucional*.

I. La dimensión objetiva del recurso de amparo como elemento consustancial al mismo. El recurso de amparo ha supuesto y supone un mecanismo de fundamentación y concreción del contenido normativo de los derechos fundamentales. El Tribunal ha venido a través de dicho recurso determinando el *objeto, contenido y límites* de los derechos fundamentales o, si se quiere, el contenido material de las *disposiciones y normas de derecho fundamental*. Es decir, desde la puesta en marcha de la nueva Constitución de 1978, la labor del Tribunal Constitucional a través del amparo no ha sido la de un “simple” órgano de tutela de los derechos fundamentales o la de un órgano revisor de la actuación llevada a cabo por los órganos de la jurisdicción ordinaria.

Pues bien, la *dimensión objetiva del recurso de amparo* no sólo se circunscribe a la determinación y concreción normativa de las disposiciones de derecho fundamental sino que, también, tal dimensión permite determinar el alcance de la dimensión *objetiva* de los derechos fundamentales en sentido estricto. Es decir, el alcance de las obligaciones derivadas de los derechos en relación a los poderes públicos que, como vimos, conceptuaba a los derechos fundamentales no sólo como prerrogativas o potestades del individuo frente al Estado, despojándose por tanto de la consideración de meros mecanismos de defensa sino también, y principalmente, como concretos mandatos de protección y de optimización que permiten el máximo desarrollo del haz de facultades comprendido en el derecho fundamental, desde un punto de vista jurídico y fáctico, los derechos fundamentales irradian todos los ámbitos del ordenamiento jurídico e inciden en las funciones del Estado. Pues así se deriva de nuestro propio sistema constitucional y de garantías de los derechos y libertades fundamentales, (arts. 1.1, 9.2, 10.1 y 53.1 CE).

II. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo trámite de admisión y la especial trascendencia constitucional.

En la mayoría de las sentencias dictadas en amparo (66%, aproximadamente) en las que le es de aplicación el nuevo trámite de admisión, no se va a producir una disociación entre la lesión o vulneración del derecho fundamental y la necesaria apreciación respecto a la trascendencia del caso concreto. Dicha carencia lo va a ser tanto *formal* como *material* y los pocos casos en los que finalmente se pueda apreciar ese alcance objetivo del recurso, se va a manifestar como consecuencia derivada de la mera tutela subjetiva del mismo. En definitiva, en la gran mayoría de sentencias del Tribunal Constitucional no existe una manifestación de los concretos argumentos dados por el recurrente en orden a cumplimentar la nueva carga, ni existe una apreciación de índole formal, ni material, por parte del Tribunal que acrediten porqué estos supuestos concretos merecen ser admitidos a trámite, en detrimento de otros que han sido inadmitidos.

Según nuestra apreciación, la *especial trascendencia constitucional* en los recursos que dan lugar a estas sentencias funcionaría como un mero o simple trámite *formal* que se cumplimenta en la demanda y que se observa como existente en el momento de admisión. Es decir, la *especial trascendencia constitucional* funcionaría como una barrera más que hay que cumplimentar para que el Tribunal conozca sobre la tutela del derecho fundamental que se alega como vulnerado. Sin que tenga su reflejo formal y, mucho menos material, en el conocimiento sobre el fondo realizado por el Tribunal Constitucional.

Tanto es así que, en la mayoría de estos supuestos, lo que se produce es una reiteración de la jurisprudencia constitucional y una aplicación al caso concreto, esto es, se trata de una mera actividad de enjuiciamiento de casos *fáciles* o, incluso, se tratan de supuestos que la doctrina mayoritaria ha contemplado como un uso excesivo del recurso de amparo respecto a la labor que corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Como decimos, en la gran mayoría de las mismas (66%, aproximadamente), no existe una traslación de la argumentación y, cuando existe, no se realiza con parámetros claros y determinados que aporten uniformidad al criterio de admisión. Todo ello, a diferencia de lo que sí ocurre respecto a las alegaciones en torno a la vulneración del derecho o libertad fundamental donde siempre existe una correlación clara entre las alegaciones del demandante, la consideración que sobre las mismas tengan las partes procesales y la consiguiente apreciación por parte del Tribunal Constitucional.

Incluso, como hemos visto, en la práctica, la argumentación ofrecida por el Tribunal se produce cuando alguna de las partes en el proceso, el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado ponen en duda la existencia misma de dicha especial trascendencia constitucional y, por tanto, se pone en duda la propia valoración o consideración que sobre la misma ha llevado a cabo el Tribunal para admitir el recurso. Es decir, de manera implícita se está cuestionando la labor del Tribunal en orden a dicha admisión. Por lo que el Tribunal se verá en la obligación de tener que justificar su propia labor, razonando por qué ha admitido el recurso en consideración a su especial trascendencia.

Por tanto, y desde un punto de vista estrictamente *formal*, si efectivamente tal carga argumental y procesal es necesaria para la admisión del recurso, no puede entenderse por qué sólo consta siempre y de manera fehaciente las concretas argumentaciones en relación a la vulneración o lesión de los derechos fundamentales. Y no se transmite ni siempre, ni de igual manera, la carga consistente en la especial trascendencia constitucional y, cuando sí se produce, no se realiza de manera homogénea pues, incluso, en la mayoría de los casos se produce porque se cuestiona que efectivamente exista dicha especial trascendencia constitucional, lo que conlleva, de manera indirecta, el cuestionamiento de la labor del Tribunal en relación a la admisión de los recursos de amparo sobre esta cuestión.

Desde un punto de vista material:

Hemos visto que las argumentaciones y consideraciones respecto a la *especial trascendencia constitucional* girarán -mayoritariamente- en torno a los supuestos establecidos en el F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio. Hemos procedido a analizar la correspondencia entre la admisión y el fondo del asunto basados en tales supuestos.

“a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional”.

Tal supuesto, efectivamente, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>> puesto que, como vimos, su función primordial será la de establecer a través de la labor interpretativa que le corresponde como intérprete *supremo* de la Constitución: el objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales. También, como tuvimos ocasión de ver, esa labor interpretativa se hace necesaria cuando nos encontramos ante los denominados *casos difíciles*, es decir, cuando la dificultad del caso deriva de una doble vertiente: en relación a la norma (problemas normativos) y/o en relación a los hechos (problemas fácticos).

Dentro de este supuesto, aunque no se diga expresamente, se ha de encontrar la introducción de la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE, todo ello en aplicación del *Principio de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados internacionales ratificados por España* y, en concreto, de la jurisprudencia del TEDH, mediante la asunción del principio de «cosa interpretada» respecto a la jurisprudencia que verse sobre los derechos reconocidos en el CEDH que sean coincidentes con los derechos y libertades establecidos en la CE.

Sin embargo, en otras sentencias se hace más difícil apreciar o percibir esa conexión entre la admisión en base a dicho supuesto a) de la STC 155/2009, de 25 de junio y el fondo del asunto del que conoce el Tribunal Constitucional, es decir, la *especial trascendencia constitucional* en base a su dimensión

objetiva. En otros casos, y según nuestra valoración, nos resulta imposible estimar dónde se encuentra la apreciación de la *especial trascendencia constitucional* respecto al fondo del asunto. Además, no es que se trate de una reiteración de su doctrina a un caso concreto, lo que hemos denominado como *casos fáciles*, sino que nos volvemos a encontrar que el Tribunal sigue manteniendo, a pesar de la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, una actividad jurisdiccional que choca o entra en conflicto con la labor llevada a cabo por los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

“b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, (...), o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE”

Este supuesto, al igual que el anterior, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, aquí el punto de partida no es la inexistencia de doctrina previa, es decir, en este caso el Tribunal sí ha realizado una labor previa de interpretación y concreción de las *normas iusfundamentales* pero, tal concretización normativa, decae –podemos decirlo así- en causa de *invalidéz* debido a circunstancias *externas o sobrevenidas* como es el *surgimiento de nuevas realidades sociales o cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental* que conlleven la necesidad de un replanteamiento o reconsideración de la doctrina anterior o, esa reconsideración, venga impuesta a través del establecimiento de doctrina novedosa por parte de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere y, en concreto, en relación a la jurisprudencia del TEDH. También puede deberse a *circunstancias internas*, por una reconsideración de la misma que le lleve al Tribunal a modificar la *norma iusfundamental* o un determinado aspecto de la misma.

Pero, en otros, la conexión entre la admisión en base a dicho supuesto b) de la STC 155/2009, de 25 de junio y el fondo del asunto del que conoce el Tribunal Constitucional, es decir, la *especial trascendencia constitucional* en base a su dimensión objetiva se hace menos evidente o más difícil de percibir. Aquí también, y según nuestra valoración, nos encontramos sentencias en las que nos resulta imposible estimar dónde se encuentra la apreciación de la *especial trascendencia constitucional* respecto al fondo del asunto. Como dijimos, no ya porque se trate de una reiteración de su doctrina a un caso concreto, lo que hemos denominado como *casos fáciles*, sino que nos volvemos a encontrar que el Tribunal sigue manteniendo, a pesar de la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, una actividad jurisdiccional que choca o entra en conflicto con la labor llevada a cabo por los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

“c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general”

Tal supuesto, efectivamente, puede encuadrarse o considerarse como una de las vertientes de la llamada <<dimensión objetiva del recurso de amparo>> puesto que, como vimos, la misma no sólo se circunscribe a la determinación y concreción normativa de las disposiciones de derecho fundamental sino que, también, tal dimensión permite determinar el alcance de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales en sentido estricto, esto es, el alcance de las obligaciones derivadas de los derechos en relación a los poderes públicos que, como vimos, conceptuaba a los derechos fundamentales también como concretos mandatos de protección y de optimización, que inciden en las distintas funciones del Estado; en este caso en relación al Poder Legislativo.

Sin embargo, y a diferencia de lo anterior, no todas las alegaciones pueden circunscribirse en supuestos tan palmarios como es la aplicación de un precepto inconstitucional. Así nos encontramos otros en los que no sólo es que no cotejen la norma legal en relación al derecho fundamental vulnerado, lo cual podría dar lugar a una resolución de inconstitucionalidad de la ley o el precepto

de la misma que se cuestiona, sino que en lo cuestionado es la interpretación y aplicación de la ley realizada por el juzgador de instancia.

“d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución”.

En relación al supuesto, no podemos sino mostrar ciertas objeciones pues, según nuestro parecer, el uso que pueda dársele a este concreto supuesto conllevaría seguir manteniendo una de las causas de fricción que vimos entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Como hemos de recordar, una de las principales objeciones en relación a la anterior configuración del recurso de amparo era la invasión competencial del Tribunal Constitucional en el ámbito de la interpretación de la legalidad ordinaria atribuida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Si bien, desde nuestro punto de vista, este precepto puede cumplir su función en el ámbito de la <<dimensión objetiva del recurso de amparo>>, pues puede permitir un control sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley y un control de la interpretación de la misma. Ahora bien, como expusimos más arriba, el Tribunal no debe realizar dicha labor cuando sólo existe una conexión remota con tales derechos fundamentales y apelábamos a que sólo podrá entrar cuando se produzcan supuestos muy extremos de irrazonabilidad. Pues en este caso, como ocurre con el anterior, el Tribunal Constitucional debe actuar cuando hay un riesgo grave y evidente de puesta en peligro del propio sistema de garantías de los derechos fundamentales.

“e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;”

Si el anterior supuesto nos planteaba dudas e incertidumbres, que la doctrina este siendo *incumplida de modo general y reiterado*, este concreto supuesto -llegado el caso- puede mostrarse contrario a la admisión del recurso de amparo desde su dimensión objetiva. Como vimos, respecto al primer inciso, este sería el claro ejemplo de los denominados *casos fáciles*, en los que se produce una subsunción del hecho concreto en la norma previamente determinada por el propio Tribunal, pero debe tenerse en cuenta que, como vimos en su momento, una interpretación laxa del mismo puede derivar en un control y fiscalización sobre el fondo del asunto realizado por los tribunales ordinarios o en un control respecto a los hechos fijados por la jurisdicción ordinaria. Mientras que del segundo supuesto, que *existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental*, sí puede derivarse dimensión objetiva del recurso susceptible de admisión puesto que sí podría encuadrarse en los denominados *casos difíciles*, es decir, cuando la dificultad del caso deriva de una doble vertiente: en relación a la norma (problemas normativos) y/o en relación a los hechos (problemas fácticos) pero, al igual que el anterior, una interpretación amplia, o en un sentido no estrictamente objetivo respecto de la admisión, puede tener las mismas consecuencias negativas que el anterior.

“f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ)”.

Este supuesto puede cumplir una función dentro de la dimensión objetiva del amparo pues, a través de él, se permite al Tribunal Constitucional actuar cuando hay un riesgo grave y evidente de puesta en peligro del propio sistema de garantías de los derechos fundamentales. Esto es, un riesgo cierto de puesta en peligro del propio sistema normativo instaurado. Pero, ahora bien, no todo apartamiento o desconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional debe dar lugar al conocimiento del recurso de amparo pues ello podría dar lugar a que, en última instancia, todo recurso de amparo puede ser objeto de control por parte del Tribunal ya que cualquier desviación en la interpretación y aplicación pueda dar lugar a dicho conocimiento. Además, debe existir una

manifestación concreta y expresa por parte de órgano judicial de no acatar o aplicar la jurisprudencia constitucional.

“g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.

Pues bien, para el análisis debemos encuadrar estos supuestos de alcance general en tres supuestos más concretos: en primer lugar, aquellas sentencias que entran a conocer de determinados *amparos electorales*; en segundo lugar, las que conocen de los denominados *amparos parlamentarios* y, en tercer y último lugar, aquellas que en la argumentación, o en su consideración por el Tribunal, se aprecia que el supuesto *trasciende al caso concreto*. En tal sentido, puede entenderse, que pueden existir causas de índole objetivo o que la *especial transcendencia constitucional* del recurso no pueda encuadrarse específicamente en alguno de los supuestos anteriores.

Ahora bien, con independencia de cuál sea esa apreciación, la *especial transcendencia constitucional* como *dimensión objetiva del recurso de amparo* no puede no darse. Si bien es cierto que, respecto a los *amparos parlamentarios*, no se establece una vía judicial previa sino que el órgano jurisdiccional que conocerá de los mismos con exclusividad será el Tribunal Constitucional. Pues bien, como hemos visto, los mayores problemas plantean los *amparos electorales* puesto que en algunos casos el Tribunal Constitucional no entrará para realizar una interpretación *secundum constitutionem* de la legislación electoral, sino que supondrá una revisión de la previa actuación judicial.

III.- La efectividad de los artículos 49 y 50 de la LOTC.

Pues bien, al demandante de amparo, según la interpretación dada al artículo 49.1 *in fine* LOTC, le corresponderá argumentar –*formal* y

materialmente- la *especial trascendencia constitucional* de su recurso, como requisito que es impuesto por la LOTC. Con lo cual, como requisito procesal y sustantivo impuesto al demandante, el mismo debe ser cumplimentado en la demanda, so pena de ser inadmitida a trámite.

Respecto a la carga que pesa sobre el Tribunal en orden a la admisión, art. 50 LOTC. Entendemos que el requisito de la *especial trascendencia constitucional* no puede ser considerado como un requisito más para la admisión, sino que debe ser la causa para la admisión. Y la admisión basada en la especial trascendencia no puede deberse a cualesquiera razones, sino que ha de corresponderse realmente con la *dimensión objetiva del recurso de amparo*, tal y como ha dispuesto el Legislador.

Es decir, para que el recurso de amparo sea efectivamente un mecanismo real de interpretación del objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales, pueden resultar válidos algunos de los supuestos que el Tribunal determinó en el F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio. De ellos, sobre todo, resultan ciertamente relevantes los supuestos a) y b), también, supuesto c), pues el Tribunal actuará aquí en su función originaria como *Legislador negativo*.

Ahora bien, por contra, rechazamos el uso desmesurado de los supuestos d), e) y f) del F.J. 2º de la STC 155/2009, de 25 de junio. Pues, como hemos visto, el Tribunal cobijándose en los mismos, lo que realmente viene a realizar es una revisión de la labor efectuada por la jurisdicción ordinaria; convirtiendo, nuevamente, al recurso de amparo en una *super-casación*, destinado a reparar las meras lesiones de los derechos fundamentales, a través de la aplicación de su propia doctrina o, simplemente, entrando a conocer por la mera discrepancia en la interpretación del derecho fundamental que ha realizado el juzgador *ad quo*. No obstante, en algunos supuestos en los que realmente exista un flagrante y reiterado desconocimiento de su doctrina, el Tribunal puede y debe entrar a conocer cuando se evidencie que la actividad o inactividad de los poderes públicos ponen en serio riesgo el sistema político, jurídico y social instaurado en nuestra norma fundamental.

Anexo nº1:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Recurso de amparo contra una resolución dictada en proceso contencioso-administrativo (art. 44 LOTC). FOR\2012\836

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D Procurador de los Tribunales y de D., según acreditado mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE, derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de de fecha dictada en recurso (y, en su caso, contra el auto del mismo Juzgado o Sala de fecha desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida resolución), basando esta demanda en lo siguientes

HECHOS

PRIMERO .-

Mi representado interpuso el día recurso contencioso-administrativo abreviado contra la resolución de la Administración de que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos el día por importe de Euros, el cual siguió el siguiente iter procedimental:

1) Tras los trámites pertinentes, por resolución de fecha se señaló la celebración de vista, a la cual compareció el Procurador de mi representado D y el Letrado D en sustitución del Letrado nombrado ab initio D siendo denegada su intervención profesional por no figurar su nombre en el poder notarial presentado con la demanda, ni haber aportado documento que acreditase la sustitución.

Tras ello, el Letrado actuante realizó una comparecencia ante la Secretaría Judicial a fin de consignar su disconformidad con la decisión judicial.

2) El mismo día recayó Auto declarando terminado el procedimiento por desistimiento de la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 78.5 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), con arreglo al cual si las partes no comparecieren o lo hiciera sólo el demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso y se le condenará en costas.

3) Contra el citado Auto interpuso mi representado recurso de reposición, que fue desestimado por Auto de el cual es firme al no ser susceptible de recurso.

A los efectos del art. 49.2 de la LOTC acompaño como documentos a testimonio del acta de la vista, de la comparecencia realizada por el Letrado D ante el Secretario del Juzgado, de las resoluciones impugnadas, recurso presentado y diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO .-

Tal como se desprende del relato de hechos, la actuación practicada por el Juzgado infringe el derecho fundamental de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), aplicando de forma totalmente incompatible con el contenido del derecho fundamental los arts. 542.1 y 543.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los que se deriva que la función exclusiva de los Procuradores, salvo que la ley disponga otra cosa, es la de representar a las partes en todo tipo de procesos; mientras que la función exclusiva de los Letrados es la dirección y defensa de las partes en el proceso, el asesoramiento y el consejo técnico, sin perjuicio de que en determinados casos la ley permita que el Abogado pueda representar a la parte.

En el presente caso, pese a que el art. 23.1 LJCA permitía que la representación fuese ostentada por un Letrado, mis representados confirieron su representación al Procurador D mediante poder general para pleitos, quien se personó efectivamente en el acto de la vista y asintió para que el Abogado que compareció D actuara en sustitución del Letrado inicialmente designado.

El Juzgado fundamentó la denegación en que era exigible un documento que autorizara la sustitución aplicando el art. 23.1 LJCA, pero lo cierto es que este precepto no establece la obligación de aportar documento alguno acreditativo de la sustitución; por el contrario, el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, dispone que "El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad".

En consecuencia, la aplicación del art. 78.5, párrafo segundo, LJCA -que permite tener al actor por desistido del recurso si no compareciere a la vista- no era procedente en este caso, teniendo como efecto la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva puesto que el proceso contencioso quedó archivado por desistimiento sin posibilidad de interponer ya recurso contra el acto administrativo originario en otro proceso.

TERCERO .-

Para reparar la vulneración que se ha producido, por violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el reconocimiento de dicho derecho fundamental y el restablecimiento en la integridad del mismo mediante la retroacción de las actuaciones estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las actuaciones de la decisión del Magistrado de no tener por personada a esta parte, adoptada en la vista, así como de los autos de fecha y que acuerdan la terminación del proceso por desistimiento, retro trayendo las actuaciones al momento anterior a la celebración de la vista.

CUARTO .-

http://0-aranzadi.aranzadidigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_id=1437313561518

1/3

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, (en cada caso se haría constar el supuesto de trascendencia constitucional) se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose pronunciado concretamente sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en el caso de impedir la personación por abogado sustituto en el ATC 276/2001, de 29 de octubre, así como en la STC 17/2011, de 28 de febrero, en cuyo Fundamento 4 se expresa para un supuesto idéntico lo siguiente: "por tratarse de actuaciones seguidas ante un órgano unipersonal, el art. 23.1 LJCA permitía a la parte optar por conferir su representación a un Procurador o al propio Abogado. Los demandantes optaron por disociar el encargo profesional de su representación y defensa en el proceso, encomendando a un Procurador la representación causídica y a un Abogado la dirección técnica, por lo que sólo al Procurador le era exigible que acreditara documentalmente el mandato recibido. Siendo por tanto irrelevante que la Letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado -puesto que no ejercía facultades de representación- resta por examinar si era posible la sustitución de la Abogada designada ab initio en la demanda y bajo qué condiciones. A tal fin hemos de partir de que la presencia en la vista del Procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la Letrada que le acompañaba en el referido acto procesal. Y a esta fundamental circunstancia se añade que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que "el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio" y que "para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad". Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del recurso de amparo, dado que las resoluciones judiciales examinadas suponen una interpretación de la legalidad ordinaria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, que ha cerrado indebidamente el examen del fundamento de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por los recurrentes de amparo".

La resolución recurrida contraviene la doctrina del TC antes expresada, remitiéndonos al desarrollo in extenso que se hará de la trascendencia constitucional del recurso en los fundamentos de derecho de esta demanda.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

QUINTO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEXTO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

SEPTIMO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

OCTAVO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte denunciada en el proceso seguido previamente.

NOVENO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, (en su caso, incluido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones), conforme al art. 44 de la LOTC.

DECIMO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC.

DECIMOPRIMERO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados tanto en la comparecencia realizada ante el Secretario Judicial, como en el recurso de reposición de fecha tal como se razonará ampliamente en el fundamento material primero.

DECIMOSEGUNDO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita es el artículo 24 de la CE que se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

JURÍDICO MATERIALES

DECIMOTERCERO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, (en cada caso se haría constar el supuesto de trascendencia constitucional) se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina del TC que resulta contravenida por las resoluciones recurridas, entre otras, ATC 276/2001, de 29 de octubre, y STC 17/2011, de 28 de febrero, ésta última en relación a un supuesto similar.

La doctrina del Tribunal Constitucional se manifiesta a favor del control de constitucionalidad sobre resoluciones judiciales obstativas de un pronunciamiento de fondo como la presente, puesto que el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, FJ 1; 321/1993, de 8 de noviembre, FJ 3; y 185/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas). El Alto Tribunal al que me dirijo ha reiterado que la

apreciación de cuándo concurre una causa obstativa del pronunciamiento de fondo es cuestión de legalidad ordinaria que compete efectuar a los órganos judiciales ex art. 117.3 CE, no obstante éstos quedan compelidos a interpretar las normas procesales no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio *pro actione*, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 118/1987, de 8 de julio, FJ 3; 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 3/2004, de 14 de enero, FJ 3; y 187/2009, de 7 de septiembre, FJ 2).

La referida STC 17/2011 pone de manifiesto la improcedencia de impedir la sustitución entre letrados en el caso de representación por procurador, estimando que existe una vulneración del artículo 24 CE, a diferencia de los casos en que el abogado ejercía la representación, analizados en las SSTC 205/2001, de 15 de octubre; y 19/2003, de 30 de enero. En el presente caso lo que se suscita es la sustitución entre Abogados que no tienen conferida la representación procesal de la parte sino, exclusivamente, la dirección técnica o asistencia letrada, donde la STC 17/2011 se pronunció contundentemente que es totalmente "irrelevante que la Letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado -puesto que no ejercía facultades de representación", que "el Procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la Letrada que le acompañaba en el referido acto procesal" y, finalmente, "que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que "el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio" y que "para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad" (FJ 4º).

Por tanto, existe una contravención de la doctrina pacífica y reiterada del Tribunal Constitucional en materia de los requisitos para la decisión de cierre del proceso basada en motivos formales, sobre la interpretación de las normas en virtud del principio *"pro actione"*, ignorando asimismo la resolución que se impugna la doctrina sentada en la STC 17/2011, de 28 de febrero, todo lo que justifica la trascendencia constitucional de este recurso.

DECIMOCUARTO .- VULNERACIÓN DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto que realiza una interpretación de los preceptos aplicables, singularmente artículo 23 de la LJCA, de forma totalmente irrazonable, en sentido restrictivo y contrario al principio *"pro actione"*, creando un óbice procesal al pronunciamiento de fondo derivada de una interpretación contraria al artículo 24.1 de la CE, generadora de indefensión para esta parte, tal como resulta razonado extensamente en el anterior fundamento.

DECIMOQUINTO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las actuaciones, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, acordando la retroacción al momento anterior al de la celebración de la vista.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional SUPlico: Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra el auto de fecha del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de, acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida resolución por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en el artículo 24.1 de la CE.

B) Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la celebración de la vista.

Es justicia que pide en a de de 20

Recurso de amparo contra una resolución dictada en proceso contencioso-administrativo (incongruencia de la sentencia). FOR\2012\839

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE, por haber incurrido las resoluciones judiciales impugnadas en incongruencia omisiva (y, en su caso, en motivación errónea o en falta de motivación), contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de de fecha dictada en recurso y contra el auto de la misma Sala de fecha desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida sentencia, basando esta demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO .- ANTECEDENTES DEL PROCESO JURISDICCIONAL

En fecha mi representado presentó recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de que desestimaba la reclamación económico-administrativa número deducida contra la resolución dictada por la Administración de en fecha acordando la derivación de responsabilidad contra mi representado por las siguientes liquidaciones tributarias

Dicho recurso se siguió con el número ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la cual, por Sentencia núm. de su Sección de fecha lo desestimó al considerar de forma genérica que el responsable subsidiario no podía impugnar la deuda principal y que se habían cumplido los plazos exigibles (fundamento de Derecho segundo).

Al entender que dicha resolución vulneraba el derecho fundamental de mi representado a la tutela judicial efectiva al no dar respuesta a los motivos de impugnación planteados por esta parte, por mi representado se promovió incidente de nulidad de actuaciones, al considerar que la anterior Sentencia incurría en los vicios de falta de motivación, incongruencia omisiva y errores patentes, el cual fue desestimado por Auto de la citada Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de de fecha mediante un fundamento estereotipado, al considerar que el requisito de la congruencia no exige dar una respuesta explícita y pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones aportadas, siendo factible una respuesta implícita que conlleve la apreciación de la no relevancia de la alegación esgrimida para la obtención de un pronunciamiento.

A los efectos del art. 49.2 de la LOTC acompaño como documentos a testimonio de la sentencia, auto desestimatorio del incidente de nulidad y diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO .- INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

La sentencia impugnada y el auto de desestimación del incidente de nulidad de actuaciones, incurrir en vicio de incongruencia omisiva por omitir todo pronunciamiento acerca de la ineficacia, a efectos interruptivos, de la prescripción de actuaciones nulas de pleno Derecho y de actuaciones con terceros distintos a los obligados al pago, con fundamento que mi representado no puede cuestionar la deuda principal y que se han cumplido los plazos legalmente establecidos, sin mayor especificación.

En la demanda rectora del recurso contencioso-administrativo se alegaba concretamente que las actuaciones administrativas llevadas a cabo con la sociedad como las que dicha sociedad haya podido realizar, carecían de virtualidad interruptiva de la prescripción, no sólo por tratarse de actuaciones viciadas de nulidad de pleno Derecho (actuaciones derivadas de disposiciones declaradas nulas de pleno Derecho y expulsadas del Ordenamiento jurídico por la sentencia de fecha de la misma Sala), sino también por ser actuaciones efectuadas con quien no era obligado al pago. Tal motivo de impugnación resultaba extensamente desarrollado en los fundamentos de derecho número de la demanda presentada por esta representación, los cuales eran los motivos de impugnación esenciales contra la actividad administrativa recurrida, tal como se aprecia del contenido de la demanda que se acompaña por testimonio como documento

Sin embargo, la Sentencia impugnada omite de plano pronunciarse sobre estos dos motivos en los que se sustentaba la demanda, incurriendo en vicio de incongruencia omisiva al dejarlos sin respuesta fundada en Derecho. Además, la sentencia y auto desestimatorio adolecen de una falta de motivación con alcance constitucional, puesto que de la lectura de los fundamentos jurídicos de la Sentencia impugnada se constata que no se efectúan consideraciones específicas o explícitas sobre los motivos de impugnación esgrimidos por esta parte en su escrito de demanda, que resultan sustanciales y sobre los cuales no cabe observar ni tan siquiera la existencia de una respuesta global o genérica que de alguna manera aborde el cuestionamiento formulado. De hecho, y aunque es cierto que la Sentencia impugnada hace mención a la interrupción de la prescripción, sin embargo lo hace después de indicar que mi representado no puede cuestionar la validez de la deuda principal y sin dar respuesta a los motivos aducidos por esta parte, con la genérica afirmación de que se han cumplido los plazos exigibles.

Por tanto, estamos ante una resolución judicial que no entra a conocer de alegaciones sustanciales oportunamente planteadas, obstaculizando asimismo la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, con lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, incurriendo en incongruencia omisiva.

TERCERO .- MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DERECHO

Para reparar la vulneración que se ha producido, por violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, el reconocimiento de dicho derecho fundamental y el restablecimiento en la integridad del mismo estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, retrotrayendo las actuaciones retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia recurrida en amparo a fin de que se

pronuncie una nueva resolución respetuosa del derecho fundamental.

CUARTO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, (en cada caso se haría constar el supuesto de trascendencia constitucional...) se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose pronunciado concretamente el Alto Tribunal al que me dirijo en relación a la congruencia como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), afirmando en el FJ 2 de la STC 83/2009, de 25 de marzo, que el derecho reconocido en el art. 24.1 CE comprende, junto a otros contenidos, el derecho a obtener una resolución congruente y razonable. Por lo que respecta a la congruencia, la doctrina del TC recogida acerca de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión como consecuencia del dictado de una resolución judicial incongruente ha sido sistematizada por la STC 40/2006, de 13 de febrero, en la cual expresa lo siguiente: 'Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y de otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones'.

En algunas ocasiones, tiene declarado el Tribunal Constitucional, ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquella en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia. En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquella sin respuesta, pudiendo citarse, por todas, las SSTC 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 182/2000, de 10 de julio, FJ 3; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 8/2004, de 9 de febrero, FJ 4.

En el presente caso, la sentencia incurre en dicha clase de incongruencia con relevancia constitucional, puesto que yerra al omitir el pronunciamiento sobre las cuestiones debidamente planteadas por esta parte en tiempo y forma, no entrando a conocer sobre los motivos de fondo oportunamente esgrimidos por esta parte, tal como se expresa en las STC 85/2006, de 27 de marzo y en la STC 39/2010, de 19 de julio, a la vez que deja huérfanos de respuesta a los motivos de nulidad planteados oportunamente por esta representación, incurriendo en incongruencia omisiva o ex silentio, tal como se desarrolla más ampliamente en el fundamento material primero de esta demanda.

Por tanto, la sentencia y auto recurridos contravienen la doctrina consolidada del TC antes expresada, remitiéndonos al desarrollo in extenso que se hará de la trascendencia constitucional del recurso en los fundamentos de derecho de esta demanda.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

QUINTO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEXTO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

SEPTIMO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

OCTAVO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte demandante en el proceso seguido previamente.

NOVENO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, conforme al art. 44 de la LOTC, siendo que la sentencia no era susceptible de recurso, por lo que se acudió a la vía del incidente excepcional de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la LOPJ, sin que se haya reparado la vulneración producida.

DECIMO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC, habiéndose sido notificado el auto recurrido en fecha e interponiéndose el presente recurso dentro de los treinta días siguientes.

DECIMOPRIMERO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados en el incidente excepcional de nulidad promovido contra la sentencia recurrida, al no haber tenido la oportunidad de realizarlo anteriormente, tal como se razonará ampliamente en el fundamento material primero.

DECIMOSEGUNDO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita es el artículo 24 de la CE que se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

MATERIALES

DECIMOTERCERO .-

Tal como se ha expresado en el hecho cuarto de esta demanda, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina del TC que resulta contravenida por las resoluciones recurridas, entre otras, en las SSTC 40/2006, de 13 de febrero, y 83/2009, de 25 de marzo, en relación al derecho reconocido en el art. 24.1 CE en su vertiente derecho a obtener una resolución congruente y razonable.

Esta misma doctrina del TC en relación a la incongruencia omisiva se aplica a los supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquella sin respuesta, tal como indican las SSTC 211/2003, de 1 de diciembre, y 8/2004, de 9 de febrero, siendo que en este caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo omitió pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por esta parte en su escrito de demanda sobre la irrelevancia de las actuaciones interruptivas de la prescripción, cuestión que resulta totalmente silenciada en la sentencia recurrida y desde luego en el auto desestimatorio del incidente de nulidad, donde sólo se refiere de modo estereotipado que no se ha producido incongruencia, sin fundamentación alguna referida al caso concreto.

Además, la sentencia impugnada parte de un erróneo punto de partida como es el de que el presunto responsable subsidiario no puede cuestionar la deuda principal, lo cual es un óbice totalmente improcedente para justificar la ausencia de pronunciamiento de fondo, tal como han expresado las SSTC 85/2006, de 27 de marzo y 39/2010, de 19 de julio, contraviniendo de esta forma la doctrina del Tribunal Constitucional.

Finalmente, y por estos motivos, la sentencia y autos recurridos incurrir en el vicio de motivación errónea de las resoluciones, contraviniendo de este modo la doctrina reiterada del TC sobre el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho como integrante del artículo 24.1 de la CE, expresada en las SSTC 26/2009, de 26 de enero; 61/2009, de 9 de marzo, y 82/2009, de 23 de marzo, que exige a los Tribunales motivar la resolución, es decir, contener los elementos o razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho. Este último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, pero sí conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia.

En este caso, la sentencia recurrida y el auto desestimatorio del incidente de nulidad incurrir en dichos vicios de relevancia constitucional, contraviniendo la doctrina del TC sobre el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en su vertiente de derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho, dejando sin contestar los motivos de impugnación esgrimidos por la demandante, que resultaban sustanciales para la resolución del recurso, y sobre los cuales no hubo respuesta que aborde de alguna manera el cuestionamiento formulado por el demandante, basándose el fallo en meras afirmaciones genéricas, sin relación con el caso concreto, y partiendo de una motivación errónea, dejando de pronunciarse sobre las cuestiones oportunamente planteadas, con contravención de la doctrina constitucional expresada, todo lo cual justifica la especial trascendencia constitucional del recurso planteado y la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de mi representado.

DECIMOCUARTO .- VULNERACIÓN DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC expuesta en esta demanda en cuanto que omite de plano pronunciarse sobre cuestiones planteadas en tiempo y forma, contraviniendo el derecho de acceso a la jurisdicción del artículo 24.1 de la CE, tal como resulta razonado extensamente en el anterior fundamento.

DECIMOQUINTO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, acordando la retroacción al momento anterior al dictarse la sentencia.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional SUPlico: Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la sentencia de fecha y el auto de fecha dictados por la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de las resoluciones impugnadas por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en el artículo 24.1 de la CE.

B) Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia recurrida en amparo a fin de que se pronuncie una nueva resolución respetuosa del derecho fundamental.

Es justicia que pide en a de de

Recurso de amparo contra una resolución dictada en un proceso civil. FOR\2011\35**A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA**

D. Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE, derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia de de fecha, dictada en recurso, basando esta demanda en lo siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número de se siguió procedimiento monitorio número y seguidamente procedimiento de ejecución con el mismo número a instancias de la Comunidad de Propietarios contra mi representado, en reclamación de euros a quien en ningún momento fue comunicado el procedimiento. Tan solo al convocarse la subasta, y advertido telefónicamente de esta circunstancia por el Administrador de la Comunidad, mi representado tuvo conocimiento del proceso, instando el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones que fue desestimado por auto de fecha que ahora se recurre en amparo.

La sucesión de hechos en el referido procedimiento fue la siguiente:

1) El día, la Comunidad de Propietarios de interpuso demanda de juicio monitorio contra mi representado por una presunta deuda derivada de gastos comunes de propiedad horizontal.

En el hecho primero del escrito de demanda se mencionaba como domicilio del demandado "que consta al administrador de la finca", el mismo del inmueble, cuando era notoriamente conocido por la Comunidad que mi representado nunca ha residido en dicho inmueble.

2) El Juzgado de Primera Instancia núm. de en el que recayó el conocimiento de la causa, abrió el procedimiento monitorio núm. y dictó resolución de fecha requiriendo de pago al demandado, intentándose infructuosamente su notificación en el domicilio señalado por la demandante, según consta en diligencias negativas del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de de fecha

A la vista del resultado negativo de la notificación y previa audiencia a la parte actora -quien señaló desconocer otro posible domicilio del demandado-, el Juzgado dictó resolución de fecha instando a la demandante a aportar el número del DNI del demandado. La actora manifestó que no le había sido posible obtener este dato y que se hiciera su notificación por edictos, dictando el Juzgado resolución acordando de conformidad, sin ninguna otra gestión adicional.

3) No habiéndose producido la personación del demandado, el Juzgado dictó resolución de fecha dando por terminado el proceso monitorio con condena a mi representado, dejando expedita la vía para que poder instar su ejecución, abriéndose el procedimiento de ejecución de título judicial núm., tras interponer demanda la Comunidad actora de, interesando directamente la citación por edictos y solicitando el embargo del inmueble propiedad de mi representado.

4) Por Auto de fecha, el Juzgado despachó ejecución por un total de euros de principal más euros de intereses, acordando el embargo del inmueble propiedad de mi representado y que se notificara de ello a mi representado por medio de edictos "dado que se desconoce el domicilio y ya hubo de hacerse en esta forma en el proceso monitorio del que dimana esta ejecución".

5) El día, el Juzgado dictó diligencia de ordenación convocando a subasta del bien inmueble indicado, aludiendo a que la "certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado" y acordando que se citara a mi representado por medio de edictos.

6) El día anterior al señalado para la subasta, en fecha, mi representado recibió llamada telefónica del Administrador de la Comunidad advirtiéndole que el inmueble iba a ser subastado al día siguiente, ante lo cual por escrito de ese mismo día, se dirige al Juzgado ejecutor solicitando la suspensión de la celebración de la subasta, procediendo a la consignación en la cuenta del Juzgado del importe de la deuda por la que se ha despachado ejecución en este procedimiento, y en ese mismo escrito se solicita además la nulidad de las actuaciones, invocando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 de la CE.

7) Por Auto de fecha, notificado a mi representado el día, el Juzgado desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, resolución que ahora se recurre en amparo.

A los efectos del art. 49.2 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dichas resoluciones y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- Tal como se desprende del relato de hechos, la actuación practicada por el Juzgado infringe el derecho fundamental de mi representado, puesto que en ningún momento el Juzgado desplegó la diligencia oportuna para conocer el domicilio del demandado, no haciendo uso de ninguno de los medios previstos en la los artículos 155 y 156 de la LEC, y provocando a mi representado una situación de manifiesta indefensión.

En relación a ello, la interpretación sostenida por el Juzgado infringe la doctrina reiterada del TC sobre la práctica de los actos de comunicación en el proceso, y con ello vulneran los derechos fundamentales de mi representado reconocidos en los artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución Española.

En primer lugar, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que es una garantía contenida en el art. 24.1 CE, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses, destacándose que dicha garantía

se ve reforzada en los procedimientos penales por la naturaleza de los derechos fundamentales que en ellos se ventilan, y en especial en el juicio de faltas, al depender de ello la presencia en un acto en el que, concentradamente, se articula la acusación, se proponen y practican pruebas y se realizan los alegatos en defensa de los intereses de las partes.

En este caso, se ha prescindido de tal esencial deber de diligencia por parte de los órganos judiciales actuantes, vulnerándose con ello los derechos fundamentales de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que ante la mera manifestación de la actora, el Juzgado, sin realizar gestión alguna, acordó el emplazamiento edictal, el cual es un mero emplazamiento ficticio.

En consecuencia, mi representado no tuvo ninguna oportunidad de intervenir en el procedimiento, sin posibilidad de atender el requerimiento de pago en el proceso monitorio o de oponerse al mismo. En efecto, como se ha expuesto en el hecho primero de esta demanda, mi representado sólo tuvo conocimiento cuando le llama por teléfono el administrador de la Comunidad, lo cual pone de manifiesto, además, que la Comunidad disponía de otros medios para localizar a mi representado, que ocultó al Juzgado en una conducta contraria a la buena fe.

Por su parte, no se actuó con la diligencia necesaria para localizar a mi representado, en especial si se tiene en cuenta que era fácilmente localizable, puesto que constan todos sus datos en la inscripción registral de la finca, por lo que fue únicamente la inactividad del Juzgado y la conducta procesal torticera de la Comunidad actora la que determinó que se siguiera todo el proceso a espaldas de mi representado.

En consecuencia, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de mi representado reconocido en el artículo 24 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las actuaciones, retrotrayéndolas al momento del requerimiento de pago del procedimiento monitorio.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009, entre otras muchas, remitiéndonos al desarrollo in extenso que se hará de la trascendencia constitucional del recurso en los fundamentos de derecho de esta demanda.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte denunciada en el proceso seguido previamente.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, (en su caso, incluido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones), conforme al art. 44 de la LOTC.

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados en el incidente de nulidad promovido contra la resolución recurrida, tal como se razonará ampliamente en el fundamento primero.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

NOVENO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina del TC que resulta contravenida por las resoluciones recurridas, entre otras, SSTC 268/2000, de 13 de noviembre, 186/2007, de 10 de septiembre, 78/2008, de 7 de julio y 176/2009, de 16 de julio.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre quejas de indefensión producidas por la defectuosa realización de actos de comunicación procesal, consolidando una detallada doctrina al respecto, iniciada con la STC 9/

1981, de 31 de marzo, que expresa la trascendental importancia que posee la correcta constitución de la relación jurídico procesal para entablar y proseguir los procesos judiciales con la plena observancia del derecho de defensa que asiste a las partes. Un instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico procesal es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. Por ello, recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso (STC 186/2007, de 10 de septiembre, FJ 2 y las allí citadas). A esos efectos, el Tribunal Constitucional ha destacado que pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal de los demandados, siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (por todas, SSTC 306/2006, de 23 de octubre, FJ 2; 163/2007, de 2 de julio, FJ 2; 78/2008, de 7 de julio, FJ 2).

En todas estas Sentencias, el Tribunal Constitucional destaca que para el cumplimiento de ese deber, el Tribunal debe agotar las posibilidades, por los medios que racionalmente se le ofrezcan, y, en todo caso "habrá de dirigirse a aquellos organismos oficiales y registros públicos que por su naturaleza sea previsible que dispongan de datos efectivos para la localización de la parte. Exigencia esta última que el Tribunal Constitucional hizo ya efectiva a propósito de procesos civiles sustanciados con la LEC de 1881, en la que no se preveía nada en tal sentido (entre otras, SSTC 100/1997, de 20 de mayo, FJ 3; 158/2001, de 2 de julio, FJ 3; 304/2006, de 23 de octubre, FJ 3) y ha seguido proclamándolo también en relación con los arts. 155 y 156 LEC 2000, donde se especifican algunas de esas fuentes de búsqueda para alcanzar el emplazamiento personal de la parte (SSTC 138/2003, de 14 de julio, FJ 3; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 3; y 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 3)".

En el caso examinado, el Juzgado de Primera Instancia número de, contrariamente a la doctrina constitucional pacífica y reiterada, optó por acudir al emplazamiento edictal sin realizar la más mínima gestión para venir en conocimiento del domicilio de mi representado, de tal manera que se coloca a esta parte en una situación de indefensión que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Por tanto, existe una contravención de la doctrina pacífica y reiterada del Tribunal Constitucional en materia de actos de comunicación, que justifica la trascendencia constitucional de este recurso.

DECIMO.- VULNERACIÓN DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto que no entra a resolver una cuestión planteada oportunamente en tiempo y forma, contraviniendo la doctrina del TC antes mencionada, pues tanto el proceso monitorio como el subsiguiente de ejecución se siguieron en contra de mi representado inaudita parte, al haber acudido el Juzgado al emplazamiento por edictos sin agotar antes los mecanismos de los que dispone ex art. 156 LEC 1/2000 para intentar su localización personal, siendo uno de los organismos públicos con información útil a estos efectos el Registro de la Propiedad donde estaba inscrita la finca origen de los gastos reclamados, en la que figuraba el domicilio de mi representado y su DNI.

DECIMOPRIMERO.- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las actuaciones, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, acordando la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de requerimiento de pago en el proceso monitorio.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPlico**: Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra el auto de fecha del Juzgado de Primera Instancia número de, acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida resolución por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en el artículo 24.1 de la CE.

B) Retrotraer las actuaciones al momento anterior al del requerimiento de pago en el procedimiento monitorio número

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

Anexo nº 4:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Recurso de amparo contra una sentencia dictada en un proceso penal (Derecho a la intimidad). FOR\2011\38

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D. Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.1 de la CE (derecho a la tutela judicial efectiva) y artículo 24.2 de la CE (derecho a un proceso con todas las garantías) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de de fecha dictada en recurso y el auto de la misma Sala de fecha desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida sentencia, basando esta demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Mi representado fue denunciado por un altercado producido en un establecimiento hostelero de el día dando lugar al juicio de faltas núm. tramitado por el Juzgado de Instrucción núm. de

El Juzgado intentó el día emplazar personalmente a mi representado en el domicilio facilitado por los denunciantes por medio de un agente judicial para citarle a juicio de faltas para el día a las horas, resultando infructuoso porque no había nadie en el domicilio y una vecina manifestó desconocer al denunciado.

Por providencia de fecha el Juzgado acordó librar oficio a la policía a fin de que practicara las oportunas gestiones para identificar el domicilio del denunciado, ordenando que en caso de ser localizados fueran citados para que comparecieran al juicio de faltas. Simultáneamente el Juzgado intentó nueva notificación personal en el mismo domicilio que constaba en la denuncia, lo que tuvo como resultado que mi representado fuera citado a través de uno de sus hermanos, quien firmó la cédula de citación el día

Por su parte, la Jefatura Superior de Policía de por oficio de fecha comunicó al Juzgado que el domicilio de mi representado era otro distinto, en la localidad de y que mi representado había sido citado telefónicamente para comparecer al juicio de faltas a través de su madre.

El juicio de faltas se celebró el día compareciendo los denunciantes, pero no éste.

Por Sentencia de fecha se condenó en ausencia al recurrente como autor de una falta de lesiones.

La Sentencia fue notificada por medio de agente judicial a mi representado en fecha en el Centro Penitenciario de donde se encontraba interno desde el día

Mi representado interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. por la Sección de la Audiencia Provincial de alegando, entre otros aspectos, que no había tenido conocimiento de la celebración del juicio de faltas al estar en prisión en esa fecha, acreditándolo mediante la entrega de un certificado de permanencia emitido por el Subdirector de Régimen del Centro Penitenciario de en el que se hace constar que permanece ingresado en prisión «desde el día a fecha de hoy» (designamos a efectos probatorios el folio del Rollo de Apelación seguido con el número).

El recurso fue desestimado por Sentencia de fecha argumentándose que la citación se había practicado en legal forma y que mi representado había tenido conocimiento de la misma, instándose el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que fue desestimado por auto de fecha

A los efectos del art. 46 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dichas resoluciones y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- La interpretación sostenida en las resoluciones recurridas infringen la doctrina reiterada del TC sobre la práctica de los actos de comunicación en el proceso penal, y con ello vulneran los derechos fundamentales de mi representado reconocidos en los artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución Española.

En primer lugar, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que es una garantía contenida en el art. 24.1 CE, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses, destacándose que dicha garantía se ve reforzada en los procedimientos penales por la naturaleza de los derechos fundamentales que en ellos se ventilan, y en especial en el juicio de faltas, al depender de ello la presencia en un acto en el que, concentradamente, se articula la acusación, se proponen y practican pruebas y se realizan los alegatos en defensa de los intereses de las partes. Esta exigencia se ve reforzada por la posibilidad legal de que se celebre el juicio de faltas en ausencia del denunciado cuando conste habersele citado con las formalidades prescritas en la Ley, entre otras muchas, puede citarse la STC 255/2006, de 11 de septiembre (RTC 2006, 255).

En este caso, se ha prescindido de tal esencial deber de diligencia por parte de los órganos judiciales actuantes, vulnerándose con ello los derechos fundamentales de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en ausencia en un juicio de faltas de cuya celebración no tuvo conocimiento al haber sido defectuosamente citado en un domicilio en el que no residía y por teléfono en el domicilio de su madre, mientras él permanecía en prisión.

En consecuencia, mi representado no tuvo ninguna oportunidad de acudir al juicio, siendo condenado en ausencia en un juicio de faltas al que no fue emplazado personalmente y sin que tuviera un efectivo conocimiento de la citación para acudir a juicio. En efecto, como se ha expuesto en el hecho primero de esta demanda, mi representado no fue emplazado personalmente para acudir a la celebración del juicio de faltas, estando acreditado por medio de una certificación expedida por el centro penitenciario que mi representado se encontraba en prisión desde meses antes de que se produjera el emplazamiento y se celebrara el juicio de faltas.

http://0-aranzadi.aranzadigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_id=1437313708539

1/3

Por su parte, no se actuó con la diligencia necesaria para localizar a mi representado, en especial si se tiene en cuenta que desde meses antes de que se ordenara a la policía la averiguación del paradero del recurrente y de que se intentara su emplazamiento y de que se celebrara el juicio estaba interno en un centro penitenciario. Sin embargo, cuando se dicta la sentencia condenatoria, sin que aparezca ninguna especial actuación por parte del Juzgado tendente a la localización del recurrente, se le notifica directamente en el centro penitenciario donde la recibió sin mayor problema.

Por último, mi representado en ningún momento tuvo un efectivo conocimiento de que iba a celebrarse el juicio, pues ni su hermano ni su madre le comunicó nada en este extremo, confiados en que, al encontrarse mi representado en prisión, el Juzgado le comunicaría la celebración del juicio y dispondría lo necesario para su traslado.

En consecuencia, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de mi representado reconocido en el artículo 24 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, puesto que los hechos acreditados son reveladores de una vulneración del art. 24 CE, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio de faltas a fin de que mi representado sea citado legalmente al mismo.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009, entre otras muchas.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte denunciada en el proceso seguido previamente.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, incluido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, conforme al art. 44 de la LOTC.

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados, tanto en el seguido en la instancia, como en el recurso de apelación y en el posterior incidente de nulidad contra la sentencia.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

NOVENO .-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009 que expresa es una garantía contenida en el art. 24.1 CE, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses, destacándose que dicha garantía se ve reforzada en los procedimientos penales por la naturaleza de los derechos fundamentales que en ellos se ventilan, y en especial en el juicio de faltas, al depender de ello la presencia en un acto en el que, concentradamente, se articula la acusación, se proponen y practican pruebas y se realizan los alegatos en defensa de los intereses de las partes, siendo que en este caso se ha prescindido de tal esencial deber de diligencia por parte de los órganos judiciales actuantes, vulnerándose con ello los derechos fundamentales de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en ausencia en un juicio de faltas de cuya celebración no tuvo conocimiento al haber sido defectuosamente citado en un domicilio en el que no residía y por teléfono en el domicilio de su madre, mientras él permanecía en prisión.

DECIMO .- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24.1 Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto al deber de diligencia en la práctica de los actos de comunicación en el proceso penal, especialmente exigible cuando se trata de la citación a juicio de faltas, según resulta de la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009, entre otras muchas.

DECIMOPRIMERO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, acordando la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de celebración del juicio de faltas.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPLICO** : Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la Sentencia dictada por la Sección de la Audiencia Provincial de de fecha que desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia del Juzgado de Instrucción número de , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida Sentencia por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en los artículos 24.1 y 2 de la CE.

B) Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la celebración del juicio de faltas.

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

Recurso de amparo contra una sentencia dictada en un proceso penal (infracción procesal). FOR\2011\39

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D. Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.1 de la CE (derecho a la tutela judicial efectiva) y artículo 24.2 de la CE (derecho a un proceso con todas las garantías) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de de fecha dictada en recurso y el auto de la misma Sala de fecha desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida sentencia, basando esta demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Mi representado fue denunciado por un altercado producido en un establecimiento hostelero de el día dando lugar al juicio de faltas núm. tramitado por el Juzgado de Instrucción núm. de

El Juzgado intentó el día emplazar personalmente a mi representado en el domicilio facilitado por los denunciantes por medio de un agente judicial para citarle a juicio de faltas para el día a las horas, resultando infructuoso porque no había nadie en el domicilio y una vecina manifestó desconocer al denunciado.

Por providencia de fecha el Juzgado acordó librar oficio a la policía a fin de que practicara las oportunas gestiones para identificar el domicilio del denunciado, ordenando que en caso de ser localizados fueran citados para que comparecieran al juicio de faltas. Simultáneamente el Juzgado intentó nueva notificación personal en el mismo domicilio que constaba en la denuncia, lo que tuvo como resultado que mi representado fuera citado a través de uno de sus hermanos, quien firmó la cédula de citación el día

Por su parte, la Jefatura Superior de Policía de por oficio de fecha comunicó al Juzgado que el domicilio de mi representado era otro distinto, en la localidad de y que mi representado había sido citado telefónicamente para comparecer al juicio de faltas a través de su madre.

El juicio de faltas se celebró el día compareciendo los denunciantes, pero no éste.

Por Sentencia de fecha se condenó en ausencia al recurrente como autor de una falta de lesiones.

La Sentencia fue notificada por medio de agente judicial a mi representado en fecha en el Centro Penitenciario de donde se encontraba interno desde el día

Mi representado interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. por la Sección de la Audiencia Provincial de alegando, entre otros aspectos, que no había tenido conocimiento de la celebración del juicio de faltas al estar en prisión en esa fecha, acreditándolo mediante la entrega de un certificado de permanencia emitido por el Subdirector de Régimen del Centro Penitenciario de en el que se hace constar que permanece ingresado en prisión «desde el día a fecha de hoy» (designamos a efectos probatorios el folio del Rollo de Apelación seguido con el número).

El recurso fue desestimado por Sentencia de fecha argumentándose que la citación se había practicado en legal forma y que mi representado había tenido conocimiento de la misma, instándose el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que fue desestimado por auto de fecha

A los efectos del art. 46 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dichas resoluciones y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- La interpretación sostenida en las resoluciones recurridas infringen la doctrina reiterada del TC sobre la práctica de los actos de comunicación en el proceso penal, y con ello vulneran los derechos fundamentales de mi representado reconocidos en los artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución Española.

En primer lugar, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que es una garantía contenida en el art. 24.1 CE, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses, destacándose que dicha garantía se ve reforzada en los procedimientos penales por la naturaleza de los derechos fundamentales que en ellos se ventilan, y en especial en el juicio de faltas, al depender de ello la presencia en un acto en el que, concentradamente, se articula la acusación, se proponen y practican pruebas y se realizan los alegatos en defensa de los intereses de las partes. Esta exigencia se ve reforzada por la posibilidad legal de que se celebre el juicio de faltas en ausencia del denunciado cuando conste habersele citado con las formalidades prescritas en la Ley, entre otras muchas, puede citarse la STC 255/2006, de 11 de septiembre (RTC 2006, 255).

En este caso, se ha prescindido de tal esencial deber de diligencia por parte de los órganos judiciales actuantes, vulnerándose con ello los derechos fundamentales de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en ausencia en un juicio de faltas de cuya celebración no tuvo conocimiento al haber sido defectuosamente citado en un domicilio en el que no residía y por teléfono en el domicilio de su madre, mientras él permanecía en prisión.

En consecuencia, mi representado no tuvo ninguna oportunidad de acudir al juicio, siendo condenado en ausencia en un juicio de faltas al que no fue emplazado personalmente y sin que tuviera un efectivo conocimiento de la citación para acudir a juicio. En efecto, como se ha expuesto en el hecho primero de esta demanda, mi representado no fue emplazado personalmente para acudir a la celebración del juicio de faltas, estando acreditado por medio de una certificación expedida por el centro penitenciario que mi representado se encontraba en prisión desde meses antes de que se produjera el emplazamiento y se celebrara el juicio de faltas.

Por su parte, no se actuó con la diligencia necesaria para localizar a mi representado, en especial si se tiene en cuenta que desde meses antes de que se ordenara a la policía la averiguación del paradero del recurrente y de que se intentara su emplazamiento y de que se celebrara el juicio estaba interno en un centro penitenciario. Sin embargo, cuando se dicta la sentencia condenatoria, sin que aparezca ninguna especial actuación por parte del Juzgado tendente a la localización del recurrente, se le notifica directamente en el centro penitenciario donde la recibió sin mayor problema.

Por último, mi representado en ningún momento tuvo un efectivo conocimiento de que iba a celebrarse el juicio, pues ni su hermano ni su madre le comunicó nada en este extremo, confiados en que, al encontrarse mi representado en prisión, el Juzgado le comunicaría la celebración del juicio y dispondría lo necesario para su traslado.

En consecuencia, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de mi representado reconocido en el artículo 24 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, puesto que los hechos acreditados son reveladores de una vulneración del art. 24 CE, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio de faltas a fin de que mi representado sea citado legalmente al mismo.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009, entre otras muchas.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .-

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte denunciada en el proceso seguido previamente.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, incluido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, conforme al art. 44 de la LOTC.

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados, tanto en el seguido en la instancia, como en el recurso de apelación y en el posterior incidente de nulidad contra la sentencia.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

NOVENO .-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009 que expresa es una garantía contenida en el art. 24.1 CE, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de sus intereses, destacándose que dicha garantía se ve reforzada en los procedimientos penales por la naturaleza de los derechos fundamentales que en ellos se ventilan, y en especial en el juicio de faltas, al depender de ello la presencia en un acto en el que, concentradamente, se articula la acusación, se proponen y practican pruebas y se realizan los alegatos en defensa de los intereses de las partes, siendo que en este caso se ha prescindido de tal esencial deber de diligencia por parte de los órganos judiciales actuantes, vulnerándose con ello los derechos fundamentales de mi representado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber sido condenado en ausencia en un juicio de faltas de cuya celebración no tuvo conocimiento al haber sido defectuosamente citado en un domicilio en el que no residía y por teléfono en el domicilio de su madre, mientras él permanecía en prisión.

DECIMO .- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24.1 Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto al deber de diligencia en la práctica de los actos de comunicación en el proceso penal, especialmente exigible cuando se trata de la citación a juicio de faltas, según resulta de la reiterada doctrina recogida en las SSTC 94/2005, 161/2006, 255/2006 y 179/2009, entre otras muchas.

DECIMOPRIMERO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, acordando la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de celebración del juicio de faltas.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPLICO** : Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la Sentencia dictada por la Sección de la Audiencia Provincial de de fecha que desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia del Juzgado de Instrucción número de , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida Sentencia por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en los artículos 24.1 y 2 de la CE.

B) Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la celebración del juicio de faltas.

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

Anexo nº 6:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Recurso de amparo en proceso laboral (acoso laboral). FOR\2011\37

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D., Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 15 de la CE contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de fecha, dictada en recurso, y el auto de la misma Sala de fecha, desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida sentencia, basando esta demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Mi representado presentó el día ante los Juzgados de lo Social de Madrid demanda de tutela de derechos fundamentales contra la empresa y contra D., Jefe de Personal de la empresa y superior directo mi representado, con intervención del Ministerio Fiscal. En la demanda alegaba la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 10, 14, 15, 17 y 18 CE, que le había producido daños psíquicos de estrés laboral por los que solicitaba una indemnización.

La tramitación de la demanda correspondió al Juzgado de lo Social núm. de que admitió a trámite la demanda, señaló fecha para el juicio.

Mediante Sentencia de fecha el Juzgado de lo Social desestimó la demanda, fundado en síntesis en no haber quedado acreditados los hechos y que en todo caso sería una conducta imputable al comportamiento del empleado y no de la empresa.

Recurrida la Sentencia en suplicación por mi representado, con fecha dictó sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de En la Sentencia la Sala desestimó el recurso, reiterando que no existía constancia de que el empleador conociera los hechos, instándose el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que fue desestimado por auto de fecha

A los efectos del art. 46 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dichas resoluciones y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- La interpretación sostenida en las resoluciones recurridas infringen la doctrina reiterada del TC sobre el acoso moral o mobbing, y con ello vulneran los derechos fundamentales de mi representado reconocidos en los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución Española.

En primer lugar, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que las lesiones de derechos fundamentales de los trabajadores pueden producirse como consecuencia de actuaciones no sólo del empresario o de quienes ejercen los poderes del empresario en la empresa, en particular de los superiores y mandos jerárquicos, sino también de los restantes trabajadores (STC 126/1990, de 5 de julio, FJ 4 en la STC 224/1999, de 13 de diciembre, FJ 3, STC 74/2007, de 27 de abril).

En la sentencias se reconoce que el codemandado, superior jerárquico de mi representado, tenía un comportamiento de hostigamiento, pues así se expresa en los hechos probados de las sentencias que describen diferentes episodios de gritos, golpes y malos modales, actitud ésta que sólo observaba con mi representado, y sin que su comportamiento estuviera vinculado a órdenes necesarias y útiles para el trabajo. Asimismo, en las sentencias se establecen, como hechos acreditados, que mi representado padece un cuadro ansioso depresivo por estrés laboral, causado por el comportamiento que de forma habitual y desde hace años le ha venido dispensando en la práctica laboral diaria su jefe inmediato.

Partiendo de esa realidad fáctica, inexplicablemente, la sentencia recurrida interpreta que tales hechos quedan fuera del ámbito de responsabilidad empresarial, por no ser conocidos por la empresa, en abierta contradicción con la doctrina uniforme del Alto Tribunal al que nos dirigimos, expresada, entre otras, en SSTC 126/1990, de 5 de julio, en la STC 224/1999, de 13 de diciembre, y en la STC 74/2007, de 27 de abril.

Por su parte, se dan todos los requisitos del acoso laboral, expresados en la interpretación de los tribunales ordinarios y en la doctrina constitucional, pudiendo darse a través de muy variados mecanismos de hostigamiento, con ataques a la víctima por medio de la implantación de medidas organizativas que implican la falta de asignación de tareas, encomienda de tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, asignar tareas imposibles de cumplir, medidas de aislamiento social, de ataque a la persona de la víctima, de violencia física o amenazas, etc. Resumiendo las tendencias doctrinales y de los pronunciamientos judiciales, la sentencia señala como elementos fundamentales de este fenómeno los siguientes: 1) El bien protegido es el derecho del trabajador a la dignidad personal, con fundamento en el art. 15 CE; 2) La forma de manifestarse implica por parte del sujeto activo una conducta caracterizada por: a) acoso u hostigamiento a un trabajador mediante cualquier conducta vejatoria o intimidatoria de carácter injusto; b) reiteración en el tiempo de dicha conducta, con unidad de propósito, y c) la finalidad perseguida consiste en minar psicológicamente al acosado, logrando así de modo efectivo algún objetivo que de otra manera no hubiera conseguido el acosador; 3) La intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos, ya sea de los compañeros de trabajo, y 4) La producción de un daño en la esfera de los derechos más esenciales del trabajador.

En consecuencia, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de mi representado reconocido en el artículo 15 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la sentencia, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, puesto que los hechos acreditados son reveladores de una vulneración del art. 15 CE, pues es un derecho inherente a la persona el ser tratado como un ser humano libre y digno, lo que conlleva la exigencia de respeto por parte de todos, debiendo declararse asimismo la responsabilidad de la empresa demandada.

Dicha reparación se debe realizar reconociendo, como situación jurídica individualizada, el derecho de mi representado a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de esta situación de acoso, con vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, cifrados en euros.

http://0-aranzadi.aranzadigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_id=1437313840780

1/3

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, a la vez que se trata de una cuestión de amplia repercusión social, por la propia naturaleza de los hechos, habiendo sido de numerosas noticias en los medios de comunicación, según acreditado mediante documentos a que acompaño a este escrito, de donde se puede apreciar el interés social de este supuesto.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte demandante en el proceso seguido previamente.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, incluido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, conforme al art. 44 de la LOTC.

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la LOTC.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados, tanto en el seguido en la instancia, como en el recurso de suplicación y en el posterior incidente de nulidad contra la sentencia.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

NOVENO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009, se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, especialmente porque contradice manifestamente que la interpretación reiterada en SSTC 126/1990, de 5 de julio, en la STC 224/1999, de 13 de diciembre, y en la STC 74/2007, de 27 de abril, en el sentido que el desconocimiento de los hechos no exime de responsabilidad al empresario, resolviéndose en la sentencia que se recurre en abierta contradicción con la doctrina uniforme del Alto Tribunal al que nos dirigimos, a lo que debe añadirse que se trata de una cuestión de amplia repercusión social, por la propia naturaleza de los hechos, habiendo sido de numerosas noticias en los medios de comunicación, según acreditado mediante documentos a que acompaño a este escrito, de donde se puede apreciar el interés social de este supuesto.

DECIMO .- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto a que las lesiones de derechos fundamentales de los trabajadores pueden producirse como consecuencia de actuaciones no sólo del empresario o de quienes ejercen los poderes del empresario en la empresa, en particular de los superiores y mandos jerárquicos, sino también de los restantes trabajadores (STC 126/1990, de 5 de julio, FJ 4 en la STC 224/1999, de 13 de diciembre, FJ 3).

DECIMOPRIMERO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la sentencia, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado, reconociendo, como situación jurídica individualizada, el derecho de mi representado a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de esta situación de acoso, con vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, solicitados en nuestra demanda inicial del proceso previo y que resultan acreditados en los hechos probados de la sentencia.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPLICO**: Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de de fecha que desestimó el recurso de suplicación y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social número de , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida Sentencia por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante reconocidos en los artículos

14, 15 y 18 de la CE.

B) Restablecer al recurrente en la integridad de , reconociendo, como situación jurídica individualizada, su derecho a percibir la indemnización por importe de euros en concepto de daños y perjuicios, incluido el daño moral, que deberá ser satisfecha solidariamente por los demandados.

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

19 de julio de 2015

© Thomson Reuters

1

Anexo nº 7:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Recurso de amparo. Proceso contencioso-administrativo. Vía del artículo 43 de la LOTC. FOR\2011\36

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D. Procurador de los Tribunales y de D., según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.2 de la CE, derecho fundamental a ser informado de la acusación y a la defensa, al no haber sido emplazada personalmente sino mediante edictos, en el procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Ayuntamiento de con el número y contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de de fecha dictada en recurso y el auto del mismo Juzgado de fecha desestimando el incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por mi representado contra la referida sentencia, basando esta demanda en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo determinan la vulneración del derecho fundamental de mi representada a un proceso con todas las garantías como consecuencia de la actuación del Ayuntamiento de en el expediente sancionador número imponiendo una sanción de plano a mi representada, infracción no reparada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de por lo que acudimos al amparo por la vía del art. 43 de la LOTC.

Los hechos son los siguientes:

1) Como consecuencia de una infracción de tráfico cometida en fecha... por un vehículo de propiedad de mi representada, el Ayuntamiento de efectuó requerimiento para que se identificara al conductor del vehículo, mediante correo certificado con acuse de recibo, que se intentó entregar infructuosamente en el domicilio al ser desconocida mi representada en dicho domicilio. Ante ello, la notificación se publicó por medio de edictos en el «Boletín Oficial de en fecha

2) La empresa que represento había trasladado el domicilio social en virtud de acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha es decir, varios meses antes de la actuación del Ayuntamiento desde la calle domicilio en el que se practicó dicha citación, a la calle

El citado acuerdo fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en fecha y comunicado a los diferentes organismos públicos, entre ellos la Jefatura Provincial de Tráfico de tal como consta en los folios el expediente administrativo, que designamos desde este momento a efectos probatorios.

3) El Ayuntamiento incoó expediente sancionador, con fecha por falta de identificación del conductor, intentándose la notificación de dicha incoación por correo, en el primero de los domicilios, sin resultado, haciéndose constar en el primer intento «ausente» y en el segundo «desconocido». La notificación se efectuó por medio de edicto publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de

Sin embargo, anteriormente, mi representada había presentado en el Ayuntamiento de escrito en el que señalaba que, a raíz de conocer que se habían producido algunas infracciones de tráfico, cometidas por personas que conducían vehículos de propiedad de la recurrente, y que las denuncias se habían intentado notificar infructuosamente en el anterior domicilio social de la empresa, se designaba como nuevo domicilio el situado en

4) Prescindiendo de cualquier otra actuación, el Ayuntamiento impuso a mi representada en fecha una sanción de 301 euros, por la infracción consistente en el incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable. La sanción fue notificada a la mi representada, en fecha en su domicilio social.

5) Frente a dicha resolución, mi representada interpuso recurso contencioso-Administrativo, alegando, entre otros motivos, la vulneración de los derechos a conocer de la acusación formulada y a defenderse en el procedimiento administrativo sancionador (art. 24.2 CE) como consecuencia de no haber sido emplazada personalmente en dicho procedimiento, y por haberle impedido llevar a cabo la identificación del conductor por la falta de remisión del requerimiento por parte de la Administración, a pesar de que fue comunicado al Ayuntamiento el cambio de domicilio, lo que le causó indefensión.

El recurso fue desestimado por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de de fecha dictada en procedimiento abreviado argumentándose que el requerimiento se había practicado en legal forma por la Administración

A los efectos del art. 46 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dichas resoluciones y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- La interpretación sostenida en las resoluciones recurridas infringe la doctrina reiterada del TC, dictada en supuestos prácticamente idénticos en las SSTC 54/2003, de 24 de marzo (RTC 2003, 54) ; 145/2004, de 13 de septiembre (RTC 2004, 145) , y 157/2007, de 2 de julio (RTC 2007, 157), declarando la aplicabilidad a las sanciones administrativas no sólo de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE, sino también de las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE; aplicación que ha de hacerse no de forma literal, sino con ciertas modulaciones, en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y condicionada a que se trate de garantías que resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador. Pero, en todo caso, según el Alto Tribunal al que me dirijo, entre las garantías del art. 24 CE que han de atenderse en el procedimiento administrativo sancionador, se incluye el derecho de defensa y a ser informado de la acusación, cuyo ejercicio presupone «que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga (STC 54/2003). En este sentido, el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 291/2000 ha declarado, con base en la

http://0-aranzadi.aranzadigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_id=1437313891084

1/3

referida doctrina constitucional sobre la extensión de las garantías del art. 24 CE al procedimiento administrativo sancionador, que los posibles defectos en la notificación o emplazamiento administrativo, cuando se trate, como en este supuesto acontece, de un acto administrativo sancionador, revisten relevancia constitucional desde la perspectiva del art. 24 CE.

En este caso, la falta de emplazamiento personal de mi representada tiene relevancia constitucional. Así, la Administración, al no emplazar personalmente a mi representada en el procedimiento administrativo sancionador pese a tener conocimiento o, al menos, evidente posibilidad de adquirirlo, del verdadero domicilio de mi representada, no ha actuado con la diligencia que le era exigible y le produjo una situación de indefensión constitucionalmente relevante, al impedirle ejercer su derecho de defensa.

Por otra parte, no cabe apreciar en mi representada una falta de diligencia determinante de la situación de indefensión padecida, pues incluso puso en conocimiento de la Administración su nuevo domicilio social para que pudieran serle comunicadas en él las denuncias cuya notificación hubiera resultado infructuosa en el anterior domicilio. Pero es más, mi representada había acordado el cambio de domicilio social casi un año antes del primer intento de notificación del requerimiento para identificar al conductor infractor del vehículo de su propiedad, y que dicho cambio de domicilio había sido inscrito en el Registro Mercantil y comunicado a los diferentes organismos y registros públicos, entre ellos la Jefatura Provincial de Tráfico de

Pues bien, a pesar de la constancia registral y en los registros de tráfico del nuevo domicilio social, el Ayuntamiento de dirigió la notificación del requerimiento para identificar al conductor del vehículo al anterior domicilio social de mi representada, procediendo a continuación a su notificación mediante edictos publicados en el «Boletín Oficial de» y expuestos en el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento, siendo así que la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de domicilio le hubiera permitido, sin un esfuerzo excesivo, localizar el domicilio real de la actora.

Esta conclusión resulta aún más evidente en las actuaciones posteriores, puesto que mi representada presentó un escrito en el mismo Ayuntamiento designando el nuevo domicilio social, al haber tenido noticia de que se estaban intentando notificar infructuosamente denuncias por infracciones cometidas por personas que conducían vehículos de su propiedad. Esto es, además de que tenía medios para conocerlo desde antes, el Ayuntamiento tenía perfecta constancia del nuevo domicilio social de la recurrente, y en lugar de notificar en él la incoación del procedimiento sancionador, continuó intentando la notificación en el anterior domicilio social y, finalmente, acudió a la notificación edictal.

En suma, la sanción se impuso de plano a mi representada, sin respetar procedimiento contradictorio alguno y, por tanto, privándole de toda posibilidad de defensa durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

En consecuencia, la sentencia, al no reparar la vulneración padecida por mi representado en vía administrativa, infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de mi representado reconocido en el artículo 24 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la resolución sancionadora, y por extensión de las resoluciones judiciales impugnadas, al haberse impuesto a mi representada una sanción sin procedimiento contradictorio alguno, con lo que la Administración ha vulnerado el art. 24 CE, por no respetar su derecho fundamental a no ser sancionada si no es a través del correspondiente procedimiento en el que, con las modulaciones que procedan, se respeten las garantías que se deducen del mencionado precepto constitucional. Como quiera que dicha lesión no ha sido reparada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya sentencia y auto resolutorio del incidente excepcional de nulidad de actuaciones se ha desestimado nuestra pretensión de nulidad, el restablecimiento en los derechos fundamentales de mi representada ha de conducir a extender también la declaración de nulidad a las referidas resoluciones.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial resuelve contrariamente a la doctrina del Tribunal Constitucional en supuestos prácticamente idénticos, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar las SSTC 54/2003 (RTC 2003, 54) en las SSTC 145/2004 (RTC 2004, 145) y 157/2007 (RTC 2007, 157), que otorgan el amparo en supuestos análogos.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 41 y ss. de la LOTC.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 48 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido por Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta al ser parte denunciada en el proceso seguido previamente.

QUINTO .- REQUISITOS

La vía previa se entiende agotada al haberse utilizado todos los medios procesales de impugnación, habiéndose producido la infracción por una resolución firme, siendo impugnada según dispone el art. 43.3 de la LOTC.

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo se presenta dentro del plazo establecido en el artículo 43.2 de la LOTC.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo invocamos la vulneración de los derechos fundamentales lesionados, tanto en vía administrativa, en vía contencioso-administrativa y en el posterior incidente de nulidad contra la sentencia.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

NOVENO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

Tal como se ha anticipado en la parte fáctica, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que la actuación administrativa vulnera la reiterada doctrina del TC en la materia y el órgano judicial resuelve contradictoriamente con las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en supuestos prácticamente iguales, infringiendo lo que dispone el art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta o que demanda, puesto que la sentencia impugnada resuelve contrariamente a la doctrina del Tribunal Constitucional en supuestos prácticamente idénticos, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar las SSTC 54/2003 (RTC 2003, 54) en las SSTC 145/2004 (RTC 2004, 145) y 157/2007 (RTC 2007, 157), que otorgan el amparo en los mismos supuestos.

DECIMO .- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales invocados, contraviniendo la doctrina del TC en cuanto a las garantías de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, recogida en las SSTC 54/2003 (RTC 2003, 54) en las SSTC 145/2004 (RTC 2004, 145) y 157/2007 (RTC 2007, 157), que otorgan el amparo en supuestos prácticamente iguales.

DECIMOPRIMERO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la resolución sancionadora del Ayuntamiento de , y por extensión de las resoluciones judiciales impugnadas, amparando a mi representado en el derecho fundamental vulnerado.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPLICO** : Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número de de fecha que desestimó el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de de fecha , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) Declarar vulnerados los derechos de mi representada reconocidos en el art. 24.2 de la CE (derechos a la defensa y a ser informada de la acusación).

B) Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Ayuntamiento de con fecha , así como la de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de Madrid, de

DECIMOPRIMERO .-

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

Anexo nº 8:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Demanda de amparo electoral (Acuerdo de proclamación de candidaturas). FOR/2011\32

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D. Procurador de los Tribunales y del Partido, según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) contra la sentencia del de lo Contencioso-Administrativo número de de fecha, dictada en recurso, basando esta demanda en lo siguientes

HECHOS

PRIMERO.- 1) Con fecha la representación del partido político demandante presentó ante la Junta electoral de zona de la candidatura de dicha formación política para participar en las elecciones locales convocadas por Real Decreto en la circunscripción de, por el partido político que represento. En el escrito de recurso se interesaba la anulación de dicha candidatura por incumplir lo dispuesto en el art. 44 bis de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), introducido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda vez que el número de mujeres de dicha candidatura no alcanza el mínimo porcentual del cuarenta por ciento que dicho precepto establece.

2) Efectuados los referidos trámites, el representante de las candidaturas presentadas por el Partido en la provincia de interpuso recurso contencioso-electoral contra la proclamación de la candidatura presentada en la circunscripción de por el partido político que represento. En el escrito de recurso se interesaba la anulación de dicha candidatura por incumplir lo dispuesto en el art. 44 bis de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), introducido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda vez que el número de mujeres de dicha candidatura no alcanza el mínimo porcentual del cuarenta por ciento que dicho precepto establece.

3) El conocimiento de la impugnación correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de , quedando registrada con el núm. y dictándose Sentencia el día , mediante la que, estimando el recurso interpuesto por el Partido se anuló el Acuerdo de la Junta electoral de zona de que había acordado la proclamación de la candidatura presentada por el partido político demandante. La decisión judicial se sustenta en que la candidatura presentada incumple el régimen de paridad fijado por el art. 44 bis LOREG, introducido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En particular aprecia la Sentencia que la candidatura cuestionada incumple la exigencia de composición equilibrada entre hombres y mujeres contenida en el art. 44 bis LOREG, pues, valorada en su conjunto, resulta que presenta cinco mujeres sobre un total de trece candidatos, por lo que no alcanza el mínimo del 40 por 100 legalmente establecido, que exigiría un mínimo de seis mujeres en la lista.

El referido recurso fue estimado por Sentencia de fecha que ahora se impugna.

A los efectos del art. 49.2 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dicha resolución y de las diligencias de notificación practicadas.

SEGUNDO.- El presente recurso se interpone por cuanto la citada sentencia judicial infringe el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, establecido en el art. 23.2 de la CE, en atención a lo dispuesto en el art. 47.2 LOREG y a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de subsanación de irregularidades en la presentación de candidaturas, que se recoge de forma uniforme, entre otras, en las SSTC 24/1989, 95/1991, 113/1991 y 84/2003, puesto que el partido recurrente ha sido efectivamente privado del trámite de subsanación, de modo que se ha visto privado de concurrir a las elecciones con vulneración del citado derecho fundamental.

En este sentido, como expondremos, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de reconocido en el artículo 23.2 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

TERCERO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional anule la sentencia impugnada, retrotrayendo el procedimiento electoral al momento de la proclamación de las candidaturas, debiendo concederse un plazo de subsanación al Partido que represento y seguir el procedimiento por sus demás trámites legalmente prevenidos.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 67/1987, de 21 de mayo; 73/1995, de 12 de mayo; y 80/2002, de 8 de abril, entre otras muchas, remitiéndonos al desarrollo in extenso que se hará de la trascendencia constitucional del recurso en los fundamentos de derecho de esta demanda.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 49.3 y 4 y 114 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 11 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

http://0-aranzadi.aranzadigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_id=1437314101254

1/3

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido de Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta en su condición de Partido concurrente a las elecciones, con evidente interés en que se proclame a su candidato y habiendo sido parte recurrente en el proceso contencioso-electoral previo.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada con el previo recurso contencioso electoral (art. 49 LOREG).

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo electoral se presenta dentro del plazo establecido en el art. 49 LOREG y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 20 de enero de 2000.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo se invocó la vulneración del Derecho fundamental lesionado desde el mismo momento en que esta parte se personó en el proceso jurisdiccional, alegando que una estimación sin dar la posibilidad de subsanación supone la lesión del citado art. 23.2 de la CE, tal como finalmente se produjo.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita es el art. 23.2 de la CE que establece el derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, el cual se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

NOVENO .- OBJETO DEL PROCESO

El objeto del proceso se refiere a la proclamación de candidaturas a cuyo efecto el recurso contencioso-administrativo previo agota la vía jurisdiccional a los efectos del art. 44 de la LOTC (art. 49 LOREG).

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES

DECIMO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina del TC que resulta contravenida por la sentencia recurrida en amparo, entre otras, SSTC 73/1986, de 3 de junio; 59/1987, de 19 de mayo; 86/1987, de 1 de junio; 95/1991, de 7 de mayo; 113/1991, de 20 de mayo; 175/1991, de 16 de septiembre; y 84/2003, de 8 de mayo.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la subsanación de irregularidades sufridas en la presentación de candidaturas ante la Administración electoral, pudiendo resumirse dicha doctrina del Alto Tribunal en la afirmación de que, por principio, los errores e irregularidades cometidos en la presentación de aquéllas son subsanables y que, en consecuencia, las Juntas Electorales han de ofrecer la oportunidad de que las candidaturas en las que se han detectado lo hagan. Busca con ello la Ley Orgánica del régimen electoral general, como es patente, el que por la Administración electoral se colabore con las candidaturas y con los candidatos mismos -garantizando así la efectividad del derecho de sufragio pasivo- mediante un examen de oficio que permita, con independencia de las denuncias que pudieran formular los representantes de otras candidaturas, identificar y advertir para su posible reparación los defectos que fuesen apreciables en los escritos de presentación de los candidatos. Así se expresa legalmente, en definitiva, el interés público no sólo en el correcto desenvolvimiento, desde sus inicios, del procedimiento electoral, sino en la misma efectividad del derecho fundamental de los ciudadanos (art. 23.2 CE) que, a través de las vías dispuestas por la Ley, quieran presentarse ante el cuerpo electoral recabando los sufragios necesarios para acceder a las instituciones representativas. Deriva de lo expuesto el que si por la Administración electoral se incumple este deber legal en orden al examen de los escritos de presentación de candidaturas, no dándose así ocasión a los interesados para la reparación de unos defectos que después llevan al rechazo de aquéllas, se habrá ignorado, con ello, una garantía dispuesta por la Ley Orgánica del régimen electoral general para la efectividad, como queda dicho, del derecho de sufragio pasivo, que resultará así afectado negativamente en la medida en que se desconozca por una Junta electoral, o se atienda sólo imperfectamente la exigencia legal de la que aquí se trata. En modo alguno empaña esta conclusión, ni la consideración general que se acaba de hacer sobre la afectación del derecho reconocido en el art. 23.2 CE, el hecho de que, en estos casos, el resultado finalmente gravoso para candidaturas y candidatos -la denegación de su proclamación como tales- se llegue a producir por no haberse reparado un defecto fruto de la ignorancia o de la negligencia de quienes presentaron la candidatura sin cumplir, en todos sus extremos, las prevenciones legales, sin perjuicio, como es obvio, del deber de diligencia y de colaboración con la Administración electoral que pesa sobre los candidatos y las formaciones políticas que les avalan (SSTC 67/1987, de 21 de mayo, FJ 3; 73/1995, de 12 de mayo, FJ 3; y 80/2002, de 8 de abril, FJ 7).

En consecuencia, si el órgano judicial apreció, como lo hizo, una irregularidad en la actuación de la Junta electoral al proclamar la candidatura sin reparos, la apreciación de dicha irregularidad administrativa no debió llevar a la anulación de la proclamación misma de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pues esta decisión entraña un desconocimiento de las garantías subjetivas previstas por el legislador en el citado art. 47.2 LOREG, en cuya virtud las irregularidades que puedan mostrar las candidaturas presentadas, apreciadas por la Administración electoral, habrán de dar siempre lugar a su posible subsanación.

Por tanto, existe una contravención de la doctrina pacífica y reiterada del Tribunal Constitucional en aplicación del principio de subsanación de las irregularidades de que puedan adolecer las listas electorales, que justifica la trascendencia constitucional de este recurso.

DECIMOPRIMERO .- VULNERACIÓN DEL ART. 23.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera el derecho fundamental invocado contraviniendo la doctrina del TC en cuanto a la subsanación de las irregularidades de que puedan adolecer las listas electorales, lo cual provoca una lesión real y efectiva en mi representado por cuanto que se le niega la proclamación de su candidatura sin posibilidad de subsanar los defectos de que adolece, lo cual quebranta el contenido del derecho fundamental contemplado en el art. 23.2 de la CE.

DECIMOSEGUNDO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la sentencia recurrida, retrotrayendo el procedimiento electoral al momento anterior al de proclamación de candidaturas, debiendo concederse a mi representado un plazo de subsanación en relación a las irregularidades apreciadas, y siguiendo el procedimiento electoral por su demás trámites legales.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPLICO** : Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la sentencia de fecha dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de , acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida resolución por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2 de la CE.

B) Reestablecer el derecho del demandante retrotrayendo el procedimiento electoral al momento anterior al de la proclamación de candidaturas y concediendo a mi representado el correspondiente plazo para subsanar las irregularidades apreciadas.

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

19 de julio de 2015

© Thomson Reuters

1

Anexo nº 9:

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Demanda de amparo electoral (Acuerdo de proclamación de electos). FOR\2011\33

A LA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA

D. Procurador de los Tribunales y del Partido, según acredito mediante escritura de poder que se acompaña y cuya devolución solicito previo testimonio en autos, ante el Tribunal comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por el presente escrito y en nombre de mi representado interpongo RECURSO DE AMPARO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulneración de los derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos (art. 23.1 CE) y del derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de de fecha, dictada en recurso, basando esta demanda en lo siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha la Junta Electoral de dictó acuerdo que consta en el acta de la sesión de escrutinio que se acompaña como documento número en virtud del cual ratificaba la validez del voto emitido en la Mesa a favor del Partido, el cual había sido impugnado por los apoderados del demandante.

La representación del Partido demandante interpuso reclamación ante la Junta Electoral de Zona, interesando la nulidad de la papeleta en cuestión, por cuanto le permitiría obtener un Concejal electo en detrimento de los obtenidos por el Partido, dictándose resolución de fecha de la Junta Electoral de por la que se desestima la reclamación (acompañó como documento número, copia de la reclamación y de la resolución desestimatoria).

Frente a esta resolución, el Partido demandante interpuso recurso de alzada ante la Junta Electoral Central que fue desestimado por resolución de fecha que acompaño como documento número

SEGUNDO.- Contra el referido acuerdo se interpuso recurso contencioso electoral ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de, en el que se solicitaba que se procediera a anular la proclamación efectuada, revocando la decisión adoptada por la Junta Electoral de y confirmada por la Junta Electoral Central, modificando la proclamación de electos, anulando la proclamación del candidato y proclamando en su lugar al candidato del Partido demandante D.

El referido recurso fue desestimado por Sentencia de fecha

A los efectos del art. 49.2 de la LOTC acompaño como documentos a copia de dicha resolución y de las diligencias de notificación practicadas.

TERCERO.- El presente recurso se interpone por cuanto las citadas resoluciones infringen el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, establecido en el art. 23.2 de la CE, puesto que se da validez a una papeleta alterada con el efecto de alterar el reparto de escaños en las elecciones municipales.

Al efecto, tal como se alegó reiteradamente por esta representación, la papeleta en cuestión estaba tachada en la leyenda "doy mi voto a la candidatura presentada por Partido", lo que pone de manifiesto una alteración voluntaria y deliberada por parte del elector que ha querido convertir en nulo su voto, siendo contrario al derecho fundamental invocado el conceder validez a una papeleta con tal alteración.

En este sentido, como expondremos, la sentencia infringe claramente la doctrina del TC, vulnerando el derecho fundamental de reconocido en el artículo 23.2 de la CE, lo cual nos obliga a instar el presente proceso de amparo ante el TC.

CUARTO.- Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la papeleta de voto discutida, anulando los acuerdos impugnados y proclamando como electo al candidato del Partido que represento D., habida cuenta que a él le corresponde el puesto de anularse la papeleta alterada.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos anteriores, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina recogida en las SSTC 165/1991, 115/1995, 153/2003, 170/2007, entre otras muchas, remitiéndonos al desarrollo in extenso que se hará de la trascendencia constitucional del recurso en los fundamentos de derecho de esta demanda.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO PROCEESALES

PRIMERO .- JURISDICCIÓN

El conocimiento del recurso de amparo corresponde al Tribunal Constitucional con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución y 49.3 y 4 y 114 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

SEGUNDO .- COMPETENCIA

Las Salas del Tribunal Constitucional conocen de los recursos de amparo (artículos 10 y 11 de la LOTC).

TERCERO .- POSTULACIÓN PROCESAL

Esta parte comparece representado por Procurador y asistido de Letrado, con arreglo a lo establecido en el artículo 81 de la LOTC.

http://0-aranzadi.aranzadigital.es.fama.us.es/maf/app/delivery/offload/get?_=1437314409646

1/3

CUARTO .- LEGITIMACIÓN

Esta parte está legitimada en cuanto tiene interés legítimo en el asunto según el artículo 162.1.b) de la Constitución, por cuanto el acto recurrido le afecta en su condición de Partido concurrente a las elecciones, con evidente interés en que se proclame a su candidato y habiendo sido parte recurrente en el proceso contencioso-electoral previo.

QUINTO .- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

La vía previa se entiende agotada con el previo recurso contencioso electoral (art. 49.3 y 114 LOREG).

SEXTO .- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Este recurso de amparo electoral se presenta dentro del plazo establecido en el art. 114.2 LOREG y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 20 de enero de 2000.

SEPTIMO .- INVOCACIÓN FORMAL EN EL PROCESO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO

En el proceso previo se invocó la vulneración del Derecho fundamental lesionado desde el mismo momento en que la Mesa dio validez a la papeleta controvertida, reproduciendo la impugnación tanto en las actuaciones ante la Administración electoral como en vía jurisdiccional.

OCTAVO .- DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO

El derecho cuya protección se solicita es el art. 23.2 de la CE que establece el derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, el cual se encuentra protegido por el recurso de amparo según lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la LOTC.

NOVENO .- OBJETO DEL PROCESO

El objeto del proceso se refiere a la proclamación de electos, así como elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales (art. 109 LOREG).

FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO MATERIALES**DECIMO .- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1 de la LOTC y los criterios interpretativos del Alto Tribunal al que me dirijo, recogidos, entre otras, en STC 155/2009 se está en el caso de especial trascendencia de este recurso por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente de la doctrina del Tribunal Constitucional, a lo que viene obligado conforme al art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como resulta razonado en los hechos de esta demanda, y en este sentido debemos citar la reiterada doctrina del TC que resulta contravenida por las resoluciones recurridas, entre otras, SSTC 71/1989, de 20 de abril; 165/1991, de 19 de julio; 115/1995, de 10 de julio; 153/2003, de 17 de julio; y 170/2007, de 18 de julio.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la nulidad de las papeletas en interpretación del art. 96.2 de la LOREG, expresando que este precepto recoge el llamado principio de inalterabilidad de la lista electoral, y lo hace de tal forma que robustece la exigencia de rigor que dicho principio implica en relación a la redacción del precedente art. 64.2.b) del RDL 20/1977, de 18 de marzo. Por este motivo, el Tribunal Constitucional indica que el art. 96.2 de la LOREG enfatiza la prohibición de señales o manipulaciones de cualquier tipo en las papeletas de voto, precisamente por su carácter de papeletas que incorporan listas bloqueadas y cerradas en las que no es menester indicación alguna del elector al emitir su sufragio (STC 165/1991, de 19 de julio; STC 153/2003, de 17 de julio), por lo que sea afirma que la existencia constatada de marcas o tachaduras en las papeletas a elecciones locales permite la aplicación razonada de la decisión de nulidad (STC 165/1991), añadiendo que no es posible eludir la existencia de adiciones, modificaciones, señales o marcas en las papeletas negándoles todo valor (STC 153/2003).

En este caso, tanto la Administración electoral como la Sala de lo Contencioso-Administrativo de contravienen de forma manifiesta tal interpretación del Alto Tribunal al que nos dirigimos, por cuanto la papeleta de voto en cuestión presentaba una tachadura sobre la mención del Partido que presentaba la candidatura, tal como se recoge expresamente en los hechos probados de la sentencia recurrida, lo cual patentiza la clara infracción del principio de inalterabilidad de las listas electorales establecido en el art. 96.2 de la LOREG, de acuerdo con la doctrina pacífica del Tribunal Constitucional, por lo cual, al no decretarse la nulidad de la papeleta, se está resolviendo en contra de la doctrina interpretativa del Alto Tribunal.

Por tanto, existe una contravención de la doctrina pacífica y reiterada del Tribunal Constitucional en aplicación del principio de inalterabilidad de las listas electorales, que justifica la trascendencia constitucional de este recurso.

DECIMOPRIMERO .- VULNERACIÓN DEL ART. 23.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La sentencia recurrida vulnera el derecho fundamental invocado contraviniendo la doctrina del TC en cuanto a la inalterabilidad de las listas electorales, lo cual provoca una lesión real y efectiva en mi representado por cuanto que el voto en liza es determinante para que le corresponda el puesto de concejal al integrante de la candidatura de mi representado D., en detrimento del Partido, a quien correspondería un concejal menos.

DECIMOSEGUNDO .- AMPARO QUE SE SOLICITA

Para reparar la vulneración que se ha producido, estimamos imprescindible que el Tribunal Constitucional declare la nulidad de la papeleta en cuestión y al tiempo anule el acuerdo de proclamación de electos de la Junta Electoral de... en cuanto a la atribución del último puesto a D., debiendo procederse a proclamar como elegido al integrante de la candidatura de mi representado D.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional **SUPlico** : Se digne admitir el presente escrito, con sus copias y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE AMPARO contra la sentencia de fecha dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de, acuerde admitirla a trámite y tras las actuaciones legalmente establecidas dicte Sentencia en la que otorgue el amparo solicitado con los siguientes pronunciamientos:

A) La nulidad de la referida resolución por cuanto ha vulnerado los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2 de la CE.

B) Restablecer el derecho del demandante declarando la nulidad de la papeleta de voto discutida emitida en la Mesa y

19/7/2015

Recurso de amparo | Aranzadi

anulando el Acuerdo de la Junta Electoral de en cuanto a la proclamación del último puesto de concejal electo, debiendo procederse a la proclamación de D.

Es justicia que pido en

Firma del abogado y procurador:

19 de julio de 2015

© Thomson Reuters

1

ÍNDICE DE SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANALIZADOS

AÑO 2008

AUTOS:

ATC 188/2008, de 21 de julio.

ATC 289/2008, de 22 de septiembre.

ATC 290/2008, de 22 de septiembre.

AÑO 2009

SENTENCIAS:

STC 155/2009, de 25 de junio.

AUTOS:

ATC 6/2009, de 12 de enero.

ATC 61/2009, de 23 de febrero.

ATC 62/ 2009, de 23 de febrero.

ATC 80/2009, de 9 de marzo.

ATC 92/2009, de 18 de marzo.

ATC 149/2009, de 14 de mayo.

ATC 150/2009, de 14 de mayo.

ATC 151/2009, de 14 de mayo.

ATC164/2009, de 22 de mayo.

ATC 165/2009, de 25 de mayo.

ATC 166/2009, de 27 de mayo.

ATC 179/2009, de 10 de junio.

ATC 182/2009, de 15 de junio.

ATC 183/2009, de 15 de junio.

ATC 187/2009, de 22 de junio.

ATC 218/2009, de 13 de julio.

ATC 236/2009, de 7 de septiembre

ATC 240/2009, de 21 de septiembre.

ATC 252/2009, de 19 de octubre.

ATC 262/2009, de 11 de noviembre.

ATC 264/2009, de 16 de noviembre.

ATC 272/2009, de 26 de noviembre.

ATC 274/2009, de 30 de noviembre.

ATC 283/2009, de 17 de diciembre.

ATC 284/2009, de 17 de diciembre.

AÑO 2010

SENTENCIAS:

STC 43/2010, de 26 de julio.
STC 44/2010, de 26 de julio.
STC 58/2010, de 4 de octubre.
STC 95/2010, de 15 de noviembre.
STC 96/2010, de 15 de noviembre.
STC 97/2010, de 15 de noviembre.
STC 141/2010, de 21 de diciembre.
STC 142/2010, de 21 de diciembre.
STC 143/2010, de 21 de diciembre.

AUTOS:

ATC 4/2010 de 14 de enero.	ATC 185/2010, de 29 de noviembre.
ATC 5/2010, de 14 de enero.	ATC 186/2010, 29 de noviembre.
ATC 61/2010, de 31 de mayo.	ATC 187/2010, de 29 de noviembre.
ATC 154/2010, de 15 de noviembre.	ATC 192/2010, de 1 de diciembre.
ATC 173/2010, de 17 de noviembre.	ATC 193/2010, de 1 de diciembre.
ATC 184/2010, de 29 de noviembre.	ATC 194/2010, de 2 de diciembre.

AÑO 2011

SENTENCIAS:

STC 15/2011, de 28 de febrero.	STC 60/2011, de 5 de mayo.
STC 17/2011, de 28 de febrero.	STC 61/2011, de 5 de mayo.
STC 26/2011, de 14 de marzo.	STC 62/2011, de 5 de mayo.
STC 27/2011, de 14 de marzo.	STC 68/2011, de 16 de mayo.
STC 28/2011, de 14 de marzo.	STC 69/2011, de 16 de mayo.
STC 29/2011, de 14 de marzo.	STC 88/2011, de 6 de junio.
STC 36/2011, de 28 de marzo.	STC 89/2011, de 6 de junio.
STC 44/2011, de 11 de abril.	STC 107/2011, de 20 de junio.
STC 46/2011, de 11 de abril.	STC 108/2011, de 20 de junio.
STC 59/2011 de 3 de mayo.	STC 123/2011, de 14 de julio.
	STC 124/2011, de 14 de julio.
	STC 125/2011, de 14 de julio.
	STC 133/2011, de 18 de julio.

STC 135/2011, de 12 de septiembre.
STC 143/2011, de 26 de septiembre.
STC 145/2011, de 26 de septiembre.
STC 154/2011, de 17 de octubre.
STC 162/2011, de 3 de noviembre.
STC 163/2011, de 3 de noviembre.
STC 164/2011, de 3 de noviembre.
STC 165/2011, de 3 de noviembre.
STC 166/2011, de 3 de noviembre.
STC 167/2011, de 3 de noviembre.
STC 168/2011, de 3 de noviembre.

STC 169/2011, de 3 de noviembre.
STC 170/2011, de 3 de noviembre.
STC 171/2011, de 3 de noviembre.
STC 172/2011, de 3 de noviembre.
STC 182/2011, de 21 de noviembre.
STC 183/2011, de 21 de noviembre.
STC 191/2011, de 12 de diciembre.
STC 192/2011, de 12 de diciembre.
STC 193/2011, de 12 de diciembre.
STC 206/2011, de 19 de diciembre.

AUTOS:

ATC 23/2011, de 28 de febrero.
ATC 29/2011, de 17 de marzo.
ATC 46/2011, de 28 de abril.
ATC 48/2011, de 5 de mayo.
ATC 49/2011, de 5 de mayo.
ATC 50/2011, de 5 de mayo.
ATC 57/2011, de 6 de junio.
ATC 58/2011, de 6 de junio.
ATC 60/2011, de 6 de junio.

ATC 61/2011, de 6 de junio.
ATC 62/2011, de 6 de junio.
ATC 63/2011, de 6 de junio.
ATC 64/2011, de 6 de junio.
ATC 65/2011, de 6 de junio.
ATC 66/2011, de 6 de junio.
ATC 67/2011, de 6 de junio.
ATC 86/2011, de 9 de junio.

AÑO 2012

SENTENCIAS:

STC 12/2012, de 30 de enero.
STC 13/2012, de 30 de enero.
STC 17/2012, de 13 de febrero.
STC 23/2012, de 27 de febrero.
STC 24/2012, de 27 de febrero.
STC 25/2012, de 27 de febrero.
STC 31/2012, de 12 de marzo.
STC 58/2012, de 29 de marzo.

STC 60/2012, de 29 de marzo.
STC 61/2012, de 29 de marzo.
STC 62/2012, de 29 de marzo.
STC 63/2012, de 29 de marzo.
STC 64/2012, de 29 de marzo.
STC 65/2012, de 29 de marzo.
STC 66/2012, de 29 de marzo.
STC 67/2012, de 29 de marzo.

STC 69/2012, de 29 de marzo.
STC 74/2012, de 16 de abril.
STC 76/2012, de 16 de abril.
STC 90/2012, de 7 de mayo.
STC 92/2012, de 7 de mayo.
STC 95/2012, de 7 de mayo.
STC 96/2012, de 7 de mayo.
STC 97/2012, de 7 de mayo.
STC 105/2012, de 11 de mayo.
STC 106/2012, de 21 de mayo.
STC 107/2012, de 21 de mayo.
STC 126/2012, de 18 de junio.
STC 127/2012, de 18 de junio.
STC 128/2012, de 18 de junio.
STC 129/2012, de 18 de junio.
STC 130/2012, de 18 de junio.
STC 131/2012, de 18 de junio.
STC 138/2012, de 20 de junio.
STC 139/2012, de 2 de julio.
STC 142/2012, de 2 de julio.
STC 144/2012, de 2 de julio.
STC 152/2012, de 16 de julio.
STC 153/2012, de 16 de julio.
STC 154/2012, de 16 de julio.
STC 155/2012, de 16 de julio.
STC 157/2012, de 17 de septiembre.
STC 158/2012, de 17 de septiembre.
STC 165/2012, de 1 de octubre.

STC 168/2012, de 1 de octubre.
STC 174/2012, de 15 de octubre.
STC 176/2012, de 15 de octubre.
STC 178/2012, de 15 de octubre.
STC 180/2012, de 15 de octubre.
STC 182/2012, de 17 de octubre.
STC 186/2012, de 29 de octubre.
STC 187/2012, de 29 de octubre.
STC 189/2012, de 29 de octubre.
STC 190/2012, de 29 de octubre.
STC 192/2012, de 29 de octubre.
STC 199/2012, de 12 de noviembre.
STC 200/2012, de 12 de noviembre.
STC 201/2012, de 12 de noviembre.
STC 203/2012, de 12 de noviembre.
STC 204/2012, de 12 de noviembre.
STC 205/2012, de 12 de noviembre.
STC 206/2012, de 12 de noviembre.
STC 217/2012, de 26 de noviembre.
STC 218/2012, de 26 de noviembre.
STC 221/2012, de 26 de noviembre.
STC 229/2012, de 10 de diciembre.
STC 230/2012, de 10 de diciembre.
STC 231/2012, de 10 de diciembre.
STC 232/2012, de 10 de diciembre.
STC 241/2012, de 17 de diciembre.
STC 242/2012, de 17 de diciembre.

AUTOS:

ATC 7/2012, de 13 de enero.
ATC 9/2012, de 13 de enero.
ATC 11/2012, de 26 de enero.

ATC 24/2012, de 31 de enero.
ATC 26/2012, de 31 de enero.
ATC 42/2012, de 7 de marzo.

ATC 106/2012, de 22 de mayo.
ATC 116/2012, de 4 de junio.
ATC 120/2012, de 6 de junio.

ATC 123/2012, de 18 de junio.
ATC 137/2012, de 2 de julio.
ATC 141/2012, de 9 de julio.

AÑO 2013

SENTENCIAS:

STC 1/2013, de 14 de enero.
STC 2/2013, de 14 de enero.
STC 10/2013, de 28 de enero.
STC 11/2013, de 28 de enero.
STC 12/2013, de 28 de enero.
STC 27/2013, de 11 de febrero.
STC 28/2013, de 11 de febrero.
STC 29/2013, de 11 de febrero.
STC 30/2013, de 11 de febrero.
STC 31/2013, de 11 de febrero.
STC 32/2013, de 11 de febrero.
STC 43/2013, de 25 de febrero.
STC 44/2013, de 25 de febrero.
STC 45/2013, de 25 de febrero.
STC 53/2013, de 28 de febrero.
STC 54/2013, de 11 de marzo.
STC 55/2013, de 11 de marzo.
STC 56/2013, de 11 de marzo.
STC 57/2013, de 11 de marzo.
STC 73/2013, de 8 de abril.
STC 74/2013, de 8 de abril.
STC 75/2013, de 8 de abril.
STC 76/2013, de 8 de abril.
STC 77/2013, de 8 de abril.
STC 78/2013, de 8 de abril.
STC 79/2013, de 8 de abril.
STC 88/2013, de 11 de abril.

STC 90/2013, de 22 de abril.
STC 105/2013, de 6 de mayo.
STC 106/2013, de 6 de mayo.
STC 107/2013, de 6 de mayo.
STC 108/2013, de 6 de mayo.
STC 109/2013, de 6 de mayo.
STC 110/2013, de 6 de mayo.
STC 115/2013, de 9 de mayo.
STC 118/2013, de 20 de mayo.
STC 119/2013, de 20 de mayo.
STC 120/2013, de 20 de mayo.
STC 121/2013, de 20 de mayo.
STC 122/2013, de 20 de mayo.
STC 125/2013, de 23 de mayo.
STC 126/2013, de 3 de junio.
STC 127/2013, de 3 de junio.
STC 128/2013, de 3 de junio.
STC 140/2013, de 8 de julio.
STC 147/2013, de 6 de agosto.
STC 148/2013, de 9 de septiembre.
STC 149/2013, de 9 de septiembre.
STC 151/2013, de 9 de septiembre.
STC 152/2013, de 9 de septiembre.
STC 153/2013, de 9 de septiembre.
STC 157/2013, de 23 de septiembre.
STC 167/2013, de 7 de octubre.
STC 168/2013, de 7 de octubre.

STC 169/2013, de 7 de octubre.
STC 170/2013, de 7 de octubre.
STC 171/2013, de 7 de octubre.
STC 173/2013, de 10 de octubre.
STC 176/2013, de 21 de octubre.
STC 177/2013, de 21 de octubre.
STC 178/2013, de 21 de octubre.
STC 184/2013, de 4 de noviembre.
STC 185/2013, de 4 de noviembre.
STC 187/2013, de 4 de noviembre.
STC 188/2013, de 4 de noviembre.
STC 190/2013, de 18 de noviembre.
STC 191/2013, de 18 de noviembre.

STC 192/2013, de 18 de noviembre.
STC 194/2013, de 2 de diciembre.
STC 195/2013, de 2 de diciembre.
STC 196/2013, de 2 de diciembre.
STC 197/2013, de 2 de diciembre.
STC 208/2013, de 16 de diciembre.
STC 209/2013, de 16 de diciembre.
STC 210/2013, de 16 de diciembre.
STC 211/2013, de 16 de diciembre.
STC 212/2013, de 16 de diciembre.
STC 216/2013, de 19 de diciembre.

AUTOS:

ATC 2/2013, de 9 de enero.
ATC 21/2013, de 28 de enero.
ATC 22/2013, de 28 de enero.
ATC 25/2013, de 6 de febrero.
ATC 28/2013, de 11 de febrero.
ATC 89/2013, de 6 de mayo.
ATC 145/2013, de 5 de junio.

ATC 151/2013, de 8 de julio.
ATC 163/2013, de 9 de septiembre.
ATC 164/2013, de 9 de septiembre.
ATC 172/2013, de 9 de septiembre.
ATC 268/2013, de 19 de noviembre.
ATC 272/2013, de 25 de noviembre.
ATC 273/2013, de 29 de noviembre.

AÑO 2014

SENTENCIAS:

STC 1/2014, de 13 de enero.
STC 7/2014, de 27 de enero.
STC 8/2014, de 27 de enero.
STC 9/2014, de 27 de enero.
STC 10/2014, de 27 de enero.
STC 11/2014, de 27 de enero.
STC 12/2014, de 27 de enero.
STC 19/2014, de 10 de febrero.

STC 21/2014, de 10 de febrero.
STC 26/2014, de 13 de febrero.
STC 28/2014, de 24 de febrero.
STC 29/2014, de 24 de febrero.
STC 30/2014, de 24 de febrero.
STC 31/2014, de 24 de febrero.
STC 32/2014, de 24 de febrero.
STC 35/2014, de 27 de febrero.

STC 41/2014, de 24 de marzo.
STC 46/2014, de 7 de abril.
STC 47/2014, de 7 de abril.
STC 48/2014, de 7 de abril.
STC 49/2014, de 7 de abril.
STC 50/2014, de 7 de abril.
STC 54/2014, de 10 de abril.
STC 55/2014, de 10 de abril.
STC 57/2014, de 5 de mayo.
STC 58/2014, de 5 de mayo.
STC 59/2014, de 5 de mayo.
STC 61/2014, de 5 de mayo.
STC 62/2014, de 5 de mayo.
STC 63/2014, de 5 de mayo.
STC 64/2014, de 5 de mayo.
STC 65/2014, de 5 de mayo.
STC 66/2014, de 5 de mayo.
STC 67/2014, de 5 de mayo.
STC 68/2014, de 5 de mayo.
STC 69/2014, de 5 de mayo.
STC 70/2014, de 5 de mayo.
STC 77/2014, de 22 de mayo.
STC 80/2014, de 28 de mayo.
STC 81/2014, de 28 de mayo.
STC 89/2014, de 9 de junio.
STC 90/2014, de 9 de junio.
STC 91/2014, de 9 de junio.
STC 99/2014, de 23 de junio.
STC 100/2014, de 23 de junio.
STC 101/2014, de 23 de junio.
STC 102/2014, de 23 de junio.
STC 103/2014, de 23 de junio.
STC 104/2014, de 23 de junio.
STC 105/2014, de 23 de junio.

STC 113/2014, de 7 de julio.
STC 114/2014, de 7 de julio.
STC 115/2014, de 8 de julio.
STC 116/2014, de 8 de julio.
STC 117/2014, de 8 de julio.
STC 118/2014, de 8 de julio.
STC 124/2014, de 21 de julio.
STC 126/2014, de 21 de julio.
STC 128/2014, de 21 de julio.
STC 129/2014, de 21 de julio.
STC 130/2014, de 21 de julio.
STC 131/2014, de 21 de julio.
STC 133/2014, de 22 de julio.
STC 135/2014, de 8 de septiembre.
STC 136/2014, de 8 de septiembre.
STC 137/2014, de 8 de septiembre.
STC 138/2014, de 8 de septiembre.
STC 139/2014, de 8 de septiembre.
STC 145/2014, de 22 de septiembre.
STC 146/2014, de 22 de septiembre.
STC 147/2014, de 22 de septiembre.
STC 148/2014, de 22 de septiembre.
STC 157/2014, de 6 de octubre.
STC 158/2014, de 6 de octubre.
STC 159/2014, de 6 de octubre.
STC 160/2014, de 6 de octubre.
STC 165/2014, de 8 de octubre.
STC 167/2014, de 22 de octubre.
STC 168/2014, de 22 de octubre.
STC 169/2014, de 22 de octubre.
STC 177/2014, de 3 de noviembre.
STC 178/2014, de 3 de noviembre.
STC 179/2014, de 3 de noviembre.
STC 180/2014, de 3 de noviembre.

STC 186/2014, de 17 de noviembre.
STC 187/2014, de 17 de noviembre.
STC 188/2014, de 17 de noviembre.
STC 190/2014, de 17 de noviembre.
STC 191/2014, de 17 de noviembre.
STC 194/2014, de 1 de diciembre.
STC 195/2014, de 1 de diciembre.

STC 199/2014, de 15 de diciembre.
STC 200/2014, de 15 de diciembre.
STC 201/2014, de 15 de diciembre.
STC 202/2014, de 15 de diciembre.
STC 204/2014, de 15 de diciembre.
STC 212/2014, de 18 de diciembre.
STC 213/2014, de 18 de diciembre.

AUTOS:

ATC 52/2014, de 24 de febrero.
ATC 53/2014, de 24 de febrero.
ATC 54/2014, de 25 de febrero.
ATC 108/2014, de 7 de abril.
ATC 172/2014, de 23 de junio.
ATC 181/2014, de 4 de julio.
ATC 239/2014, de 10 de octubre.
ATC 299/2014, de 15 de diciembre.
ATC 300/2014, de 15 de diciembre.

AÑO 2015

SENTENCIAS:

STC 1/2015, de 19 de enero.
STC 2/2015, de 19 de enero.
STC 7/2015, 22 de enero.
STC 9/2015, de 2 de febrero.
STC 16/2015, de 16 de febrero.
STC 17/2015, de 16 de febrero.
STC 18/2015, de 16 de febrero.
STC 19/2015, de 16 de febrero.
STC 20/2015, de 16 de febrero.
STC 21/2015, de 16 de febrero.
STC 23/2015, de 16 de febrero.
STC 24/2015, de 16 de febrero.

STC 33/2015, de 2 de marzo.
STC 34/2015, de 2 de marzo.
STC 36/2015, de 2 de marzo.
STC 37/2015, de 2 de marzo.
STC 38/2015, de 2 de marzo.
STC 39/2015, de 2 de marzo.
STC 40/2015, de 2 de marzo.
STC 42/2015, de 2 de marzo.
STC 51/2015, de 16 de marzo.
STC 52/2015, de 16 de marzo.
STC 53/2015, de 16 de marzo.
STC 54/2015, de 16 de marzo.

STC 55/2015, de 16 de marzo.

AUTOS:

ATC 18/2015, de 2 de febrero.

ATC 31/2015, de 16 de febrero.

ATC 43/2015, de 25 de febrero.

ATC 44/2015, de 25 de febrero.

ATC 45/2015, de 25 de febrero.

ATC 49/2015, de 27 de febrero.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

AARNIO, A.: *Lo racional como razonable*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991.

ALÁEZ CORRAL, B.: “La eficacia de los derechos fundamentales”. *Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución española de 1978*. Ed. Tecnos, Madrid. (2004).

ALBERTÍ ROVIRA, E.: “El recurso de amparo constitucional: una revisión pendiente”. VVAA. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

ALEXY, R.: *Teoría de los derechos fundamentales*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002.

ALEXY, R.: *Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales*. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Centro de Estudios. Madrid, 2004.

APARICIO PÉREZ, M.: “Problemas actuales del recurso de amparo”, VV.AA., *Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario*, núm. 2, 1990.

ARAGÓN REYES, M.: “El incidente de nulidad de actuaciones como remedio previo al recurso de amparo. La función del Ministerio Fiscal”. *Teoría y realidad constitucional*. Madrid. Nº. 28 (2º semestre). 2011.

ARAGÓN REYES, M.: “El recurso de amparo”. *Anales de estudios económicos y empresariales*, Nº 2, 1987.

ARAGÓN REYES, M.: “Relaciones Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo”. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitución*, Nº. 8, 2007. Pág. 35.

ARAGÓN REYES, M.: “Problemas del recurso de amparo”. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

ARAGÓN REYES, PICAZO Y PONCE DE LEÓN, GABALDÓN LÓPEZ, GARCÍA ROCA, GIMENO SENDRA, LÓPEZ GUERRA, PARADA VÁZQUEZ, RODRÍGUEZ BEREIJO: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Teoría y realidad constitucional*. Año 1999, Número 4. Págs.

ARIZAMENA SIERRA, J.: “Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional: balance de quince años”. VVAA. *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. CEPC. Madrid, 1995.

ASENSI SABATER, J.: “El Recurso de Amparo (aspectos políticos y jurídico-procesales)”. *Anales de la Universidad de Alicante*. Facultad de Derecho. Nº 2, 1983. Págs.

ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: “Constitución y argumentación”. *Anuario de filosofía del derecho*. Nº 24, 2007.

ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: “Los límites de la interpretación constitucional: de nuevo sobre los casos trágicos”. *Isonomía*. Nº 6, 1997.

ATIENZA RODRÍGUEZ, M.: *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991.

BALLESTER CARDELL, M.: *El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal*. CGPJ. Madrid, 2007.

BERNAL PULIDO, C.: *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.

BILBAO UBILLOS, J.M.: "Ponencia española: crónica de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en los últimos años". *Los derechos en Latinoamérica: tendencias judiciales recientes*. VVAA. FIIAP. Ed. Complutense. Madrid, 2011.

BÖCKENFÖRDE, E-W.: *Escritos sobre derechos fundamentales*. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden. 1993.

BORRAJO INIESTA, I., DIEZ- PICAZO GIMENEZ, L.M. Y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: *El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo*. Civitas. Madrid, 1995. Pág. 119-123.

BORRAJO INIESTA, I.: "Mitos y realidades de la jurisdicción constitucional de amparo: hechos, derecho, pronunciamientos, admisión, costes". *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*. Nº3, 2008.

BORRAJO INIESTA, I.: "Reflexiones acerca de las reformas que necesita el amparo judicial. Sencillez y celeridad como criterios determinantes". *REDC*, núm. 43, enero-abril. Pág. 45.

BUSTOS GISBERT. ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución española? *Teoría y realidad constitucional*. Nº 4, 1999.

CABAÑAS GARCÍA, J. C.: "El recurso de amparo que queremos. (Reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)". *REDC*. Nº 88, 2010. Madrid.

CANO MATA, A.: *El recurso de amparo: (doctrina del Tribunal Constitucional)*. EDERSA. Madrid, 1983.

CARMONA CUENCA, E.: "El desarrollo legislativo de la tutela judicial de los derechos fundamentales. Evolución histórica y perspectivas de futuro"; en *La*

tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2008.

CARMONA CUENCA, E.: “El recurso de amparo constitucional y la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Apuntes para una reforma”. VVAA. *La reforma del recurso de amparo.* Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

CARRASCO DURÁN, M. *Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales.* CEPC. Madrid. 2002.

CARRASCO DURÁN, M. *Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales.* CEPC. Madrid. 2002.

CARRASCO DURÁN, M.: “Amparo Judicial: presente y futuro”. *Revista de Derecho Político*, núm. 68, 2007.

CARRASCO DURÁN, M.: “El concepto constitucional de recurso de amparo: examen de posibilidades para una reforma de la regulación y la práctica del recurso de amparo”. *REDC*. Año 21, núm. 63, septiembre-diciembre 2001.

CARRASCO DURÁN, M.: “La tutela de los derechos fundamentales a través del incidente de nulidad de actuaciones.” *REDC*. Año nº 32, Nº 95, 2012.

CARRILLO, M. “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis”. *Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC)*. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.

CARRILLO, M.: “La objetivación del recurso de amparo: una nueva vía de garantía jurisdiccional de los derechos”, en CARRILLO, M. Y ROMBOLI, R.: *La reforma del recurso de amparo.* Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid, 2012.

CARRILLO, DÍEZ PICAZO, GARCÍA ROCA, GARRORENA MORALES, GONZÁLEZ PÉREZ Y MURILLO DE LA CUEVA. “Encuesta sobre la reforma de

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. *Teoría y Realidad Constitucional*. Nº 18, 2006.

CASCAJO CASTRO, J.L. Y GIMENO SENDRA, V.: *El recurso de amparo*. Tecnos. Madrid, 1984.

CASTILLO CÓRDOVA, L.: “Principales consecuencias de la aplicación del principio de la doble dimensión de los derechos fundamentales”. *Anuario de la Facultad de Derecho da Universidade da Coruña*, nº 7, 2003.

CASTILLO RIGABERT, F.: *La admisión del recurso de amparo*. Universidad de Murcia. Murcia, 1991.

CRUZ VILLALÓN, P.: “El recurso de amparo constitucional: el juez y el legislador”, VV.AA. *Los procesos constitucionales (Segundo Simposio de Derecho Constitucional, Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992.

CRUZ VILLALÓN, P.: “Sobre el amparo”. *REDC*, año 14, núm. 41, mayo-agosto, 1994.

CRUZ VILLALÓN, P.: *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1987.

CRUZ VILLALÓN. P; PARDO FALCÓN, J.: “Los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978”. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Nº. 97, 2000.

CUENCA GÓMEZ, P.: “Aspectos, problemas y límites de la interpretación jurídica y judicial”. *Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*. Año nº 9, Nº 13, 2004.

DE ALFONSO BOZZO, A.: “Las funciones del recurso de amparo constitucional”. *Revista jurídica de Catalunya*. Vol. 82, Nº 3, 1983.

DE LA OLIVA SANTOS, A.: “Tribunal Constitucional y Jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión”. Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales. McGraw-Hill. Madrid, 1996.

DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T.: *El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares*. Ed. Civitas. Madrid, 1981.

DIEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I.: “El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo”. En DE LA OLIVA SANTOS, A. y DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.: Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales. McGraw-Hill. Madrid, 1996.

DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L.M.: *Sistema de derechos fundamentales*. 3ª Edición. Editorial Aranzadi, SA. Cizur Menor (Navarra), 2008.

DWORKIN, R.: *El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica*. Gedisa. Barcelona, 2012.

DWORKIN, R.: *Los derechos en serio*. Ariel. Barcelona, 2002.

EMBRID IRUJO: “El efecto estimatorio de un Recurso de amparo desestimado. Reflexiones sobre el régimen transitorio de las libertades públicas”. *REDC*. Año 3. Núm. 8. Mayo-agosto 1983.

ESPINOSA DÍAZ, A.: “El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la reforma”. *Revista Indret* 2/2010.

EZQUIAGA GANUZAS, F.J.: “Aciertos y fallos judiciales”. *El error judicial. La formación de jueces. Fundación Coloquio Jurídico Europeo*. Jornada 28, 2009.

FABEIRO FIDALGO, P.: "El nuevo recurso de amparo constitucional". *Revista Vasca de Administración Pública*. Núm. 102. Mayo-Agosto 2015.

FAIRÉN GUILLÉN, V.: "El procedimiento <<preferente y sumario>> y el recurso de amparo en el artículo 53.2 de la Constitución". *Revista de Administración Pública*. Núm. 89, 1979.

FERNÁNDEZ FARRERES, G. "La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)". *Revista española de Derecho Constitucional*. Nº 81, septiembre-diciembre (2007). CEPC. Madrid.

FERNÁNDEZ FARRERES, G.: "El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma". Fundación Alternativas. Documento de trabajo 58/2004.

FERNÁNDEZ FARRERES, G.: *El recurso de amparo según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Marcial Pons. Madrid, 1994.

FERNÁNDEZ FARRERES, G.J.: *El recurso de amparo según la jurisprudencia constitucional: comentarios al título III de la LOTC*. Marcial Pons. Madrid, 1994.

FERNÁNDEZ SEGADO, F.: *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo (Reflexiones en torno a la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)*. Dykinson. Madrid. 2007.

FERRAJOLI, L.: *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. (4ª. Ed.). Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2009.

FIGUERUELO BURRIEZA, A.: "El recurso de amparo en cuanto tutela reforzada de los derechos fundamentales". *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, Nº 6, 1994.

FIGUERUELO BURRIEZA, Á.: "Garantías para la protección del derecho a la objeción de conciencia: la derogación del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional". *Revista de Estudios Políticos*. Nº 45, 1985. Págs. 213-234.

FIGUERUELO BURRIEZA, Á.: "Veintitrés años de recurso de amparo". *Revista de Derecho Político*, núms. 58-59, 2003-2004.

FOSSAS ESPADALER, E.: "'Cosa interpretada" en derechos fundamentales: jurisprudencia del TEDH y jurisprudencia constitucional". *Revista Vasca de Administración Pública*. Nº 82, 2, 2008.

FRIGAL FERNÁNDEZ-VILLAYERDE, L.: "Aproximación a una tesis articuladora de los recursos de amparo y contencioso-administrativo". *El Tribunal Constitucional*. Volumen II. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981.

GARCÍA COUSO, S.: "El nuevo modelo de protección de los derechos fundamentales tras la aprobación de la LO 6/2007: La objetivación del amparo y la tutela subjetiva de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". *Revista Europea de Derechos Fundamentales*. Núm. 15/1er Semestre 2010.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: "La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: Posibilidades y perspectivas". *REDC*. Núm. 1, enero-abril 1981.

GARCÍA MANZANO, P.: "Las vías judiciales previas al recurso de amparo constitucional". *El Tribunal Constitucional*. Volumen II. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981.

GARCÍA MARTÍNEZ, M^a. A.: "¿Quis custodiet custodes? El Tribunal Constitucional y la garantía del orden constitucional". *InDret*. Nº 4, 2008.

GARCÍA RUIZ, J.L.: *El recurso de amparo en el derecho español*. Editora Nacional. Madrid, 1980.

GARRORENA MORALES, A. “La ley orgánica 6/2007 y la reforma del tribunal constitucional. Notas para una crítica”. *Hacia una nueva Jurisdicción Constitucional (estudios sobre la Ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC)*. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008.

GAVARA DE CARA, J.C.: Carácter objetivo de los derechos fundamentales. *Diccionario de Derechos Humanos*. Universidad de Alcalá. Fecha de publicación: 2011-05-09.

GAVARA DE CARA, J.C.: *La proyección interna de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales: el art. 10.1 CE*. Ed. Bosch. Barcelona, 2011.

GIMENO SENDRA, J.V.: “Naturaleza jurídica y objeto procesal del recurso de amparo”. *REDC*. Año nº 2, Nº 6, 1982.

GIMENO SENDRA, V. y GARBERÍ LLOBREGAT, J.: *Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e internacional)*. Colex. Madrid, 1994.

GONZÁLEZ ALONSO, A: “La protección de los derechos fundamentales del artículo 24.1 de la Constitución tras la «objetivación» del recurso de amparo”. *CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, Nº. 139-140, 2012.

GUASTINI, R: *Estudios sobre la interpretación jurídica*. Universidad Nacional Autónoma. Porrúa, 2002.

HÄBERLE, P.: “Métodos y principios de interpretación constitucional. Un catálogo de problemas”. *Revista de derecho constitucional europeo*. Nº. 13, 2010.

HABERMAS, J.: *Facticidad y Validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Ed. Trotta. Madrid, 1998.

HERMOSILLA MARTÍN, R. “La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales; en especial, el Tribunal Constitucional. Particular problemática de la acreditación de la especial trascendencia del recurso de amparo como presupuesto para su admisión”. *Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España*. Tomo I. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Coord. Alfredo Montoya Melgar. Ed. Dykinson. Madrid. 2010.

HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “El amparo constitucional. Doctrina y problemas actuales.

La admisibilidad del recurso”. *LEX*. N° 15, 2015.

HERNÁNDEZ RAMOS, M.: “La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo y su aplicación en la jurisprudencia del tribunal constitucional: luces y sombras de cuatro años de actividad”. *Teoría y realidad Constitucional*. N° 3. Junio de 2011.

HERNÁNDEZ RAMOS, M.: *El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional*. Ed. Reus. Madrid, 2009.

JIMÉNEZ CONDE, F. “Problemas actuales del recurso de amparo”. *Anuario de derecho constitucional y parlamentario*. N°2, 1990.

JIMÉNEZ CONDE, F.: “Problemas actuales del recurso de amparo”. *Anuario de derecho constitucional y parlamentario*. Núm. 2, 1990. Pág. 192.

LINDE PANIAGUA, E.: “Amparo ordinario, amparo constitucional y Convención europea para la protección de los Derechos humanos y de las libertades Fundamentales”. *El Tribunal Constitucional. Volumen II*. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981.

LÓPEZ GUERRA, L.: "Jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional". *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997.

MAESTRO BUELGA, G.: "Los derechos públicos subjetivos en la historia del constitucionalismo español del siglo XIX". *Revista de derecho político*, Nº 41, 1996.

MANZANARES SAMANIEGO "La delimitación de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional". *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997. Pág. 76-77.

MARÍN GÁMEZ, J.A.: *Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional*. Ariel. Barcelona, 1998.

MARTÍN REBOLLO, L.: "La vía judicial previa al recurso de amparo constitucional (el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)". *El Tribunal Constitucional*. Volumen II. VVAA. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1981. Pág.1676-1677.

MATIA PORTILLA, F. J. "La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo". *REDC*. Nº 86, 2009. Madrid.

MEDINA GUERRERO, M.: "Artículo 53.2 de la Constitución". VVAA. *Comentarios a la Constitución española. XXX Aniversario*. Fundación Wolters Kluwer. Madrid, 2008.

MEDINA GUERRERO, M.: *La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales*. McGraw-Hill. Madrid, 1996.

MONTAÑÉS PARDO, M. A.: "La especial trascendencia constitucional como presupuesto del recurso de amparo". *Otrosí*, nº1. ICAM. Enero 2010.

MUÑOZ CAMPOS, J.: “Recurso de amparo frente a resoluciones judiciales: ¿ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo?” *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. Nº 1, 1983.

MURILLO DE LA CUEVA, P.L.: “El amparo judicial de los derechos fundamentales”. *La aplicación jurisdiccional de la Constitución*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1997.

NARANJO DE LA CRUZ, R.: “El sistema de derechos constitucionales y sus garantías”. *Manual de Derecho Constitucional*. VVAA. Quinta edición. Tecnos. Madrid, 2014.

NOGUEIRA GUASTAVINO, “La trascendencia constitucional de la demanda de amparo tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la LO 6/2007”. *Revista de Derecho Social*, Nº 51. 2010.

OLIVER ARAUJO, J.: *El recurso de amparo*. Palma de Mallorca: Facultad de Derecho. Mallorca, 1986.

OLIVER ARAUJO. J.: “El recurso de amparo frente a actos y omisiones judiciales”. *Revista de Estudios Políticos*. Nº 120, 2003.

PÉREZ ROYO, J.: *Curso de Derecho Constitucional*. Marcial Pons, Madrid. 2014.

PÉREZ SÁNCHEZ, G.: “Tribunal Constitucional y legalidad ordinaria”. *Anales de la Facultad de Derecho*. Núm. 26, diciembre de 2009.

PÉREZ TREMPES, P.: “El recurso de amparo constitucional. Aspectos procesales II”. VV.AA. *Los procesos constitucionales (Segundo Simposio de Derecho Constitucional, Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991)*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992.

PÉREZ TREMPs, P.: *Sistema de Justicia Constitucional*. Thompson Reuters. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2010.

PÉREZ TREMPs, P.: “Apendice: El recurso de amparo en la Constitución de 1978”. García Ruiz, J. L.: *El recurso de amparo en el derecho español*. Editora Nacional. Madrid, 1980.

PÉREZ TREMPs, P.: “La naturaleza del recurso de amparo y su configuración procesal”. *Constitución y derecho público: estudios en homenaje a Santiago Varela*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1995.

PÉREZ TREMPs, P.: “La naturaleza del recurso de amparo y su configuración procesal”. *Revista Vasca de Administración Pública*, núm.39, 1994.

PÉREZ TREMPs, P.: “Tribunal Constitucional, Juez ordinario y una deuda pendiente del Legislador”. En *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

PÉREZ TREMPs, P.: *El recurso de amparo*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004.

PÉREZ TREMPs, P.: *El recurso de amparo*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2015.

PÉREZ TREMPs, P.: *La reforma del recurso de amparo*. VVAA. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2004.

PÉREZ TREMPs, P.: *Tribunal Constitucional y Poder Judicial*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985.

PRESNO LINERA, M.A.: “La estructura de las normas de derechos fundamentales”, VVAA, *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Madrid. Tecnos, 2004.

PRIETO SANCHÍS, L.: “Notas sobre la interpretación constitucional”. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. Núm. 9, mayo-agosto 1991.

REQUEJO PAGÉS, J.L. y otros: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el Tercer Cuatrimestre de 2014". *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 103, enero-abril (2015).

REQUEJO PAGÉS, J.L.: "Hacia la objetivación del amparo constitucional (Comentario al Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 1994)". *REDC*. Año 14, Núm. 42, septiembre-diciembre. 1994.

REVENGA SÁNCHEZ, M.: "Las paradojas del recurso de amparo tras la primera década de jurisprudencia constitucional (1981-1991)". *REDC*. Año 14, núm. 41, mayo-agosto 1994.

ROCA TRÍAS, E. y AHUMADA RUIZ, M.A.: "Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional española". *Reunión de Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España*. Roma, octubre 2013.

RODRÍGUEZ BEREIJO, A.: "La reforma del recurso de amparo". *Revista Española de Derecho Financiero*. 151/Julio-Septiembre-2011.

RODRÍGUEZ –PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: "Jurisdicción y justicia constitucionales" *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. VVAA. CEPC. Madrid, 1995.

RUBIO LLORENTE, F.: "El recurso de amparo constitucional". *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994. Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994*. CEPC. Madrid, 1995.

SALA SÁNCHEZ, P.: *La delimitación de funciones en las jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales*. Discurso leído por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del

Poder Judicial en el solemne acto inaugural del año judicial el día 12 septiembre de 1994. Tribunal Supremo. Madrid, 1994.

SALAS, J.: “Protección judicial ordinaria y recurso de amparo frente a violaciones de libertades públicas”. *Revista española de derecho administrativo*. Nº 27, 1980.

SANTAMARÍA PASTOR.: *Tribunal Constitucional. Trabajos parlamentarios*. Cortes Generales. Madrid, 1980.

SANTAOLLA LÓPEZ, F.: “El recurso de amparo y el desamparo del Tribunal Constitucional”. *Revista de Derecho Político*. Núm. 24. 1987.

SARAZÁ JIMENA, R.: *La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales entre particulares*. Titant Lo Blanch, Valencia. 2011.

SASTRE ARIZA, S.: “Sobre la dificultad de los llamados casos fáciles, difíciles y trágicos”. *Derecho y opinión*. Nº 1, 1993.

SCHNEIDER, H.P.: «Jurisdicción constitucional y separación de poderes», *Revista Española de Derecho Constitucional* 5, p. 56 y ss.

SERRA CRISTÓBAL, R.: Nuevos tiempos en las relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España ¿de las desavenencias a una relación dialogada? *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*. Núm. 18, 2014.

SIEIRA MÍNGUEZ, J.M.: “Posición constitucional del Tribunal Supremo”. VVAA. *El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucional: jornadas en conmemoración del XXV Aniversario de la Constitución de 1978*. CGPJ. Madrid, 2004.

SMEND, R.: *Constitución y Derecho Constitucional*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985.

SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.J.: “Los derechos fundamentales en la Constitución española”. *Revista de Estudios Políticos*. Núm. 105, julio-septiembre 1999.

TENORIO SÁNCHEZ, P.J.: “Derechos en serio, recurso de amparo, reordenación de la garantía judicial y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. *UNED. Revista de Derecho Político*. Nº 88, septiembre-diciembre 2013.

UREÑA CARAZO, B.: “Argumentación jurídica sobre los derechos fundamentales y artículo 24 de la Constitución Española”. *CEFD*. Nº.23, 2011.

URÍAS MARTÍNEZ, J.: “Seleccionar lo (menos) importante. Nota sobre la construcción por el Tribunal Constitucional de un régimen de admisibilidad del recurso de amparo, y sus paradojas”. *Recurso de Amparo, derechos fundamentales y trascendencia constitucional*. VVAA. Editorial Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

VILLACORTA MANCEBO, L.: “Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales. Aspectos a destacar en el contexto de la discusión española”. *Revista Ius et Praxis*, año 17, nº1, 2011.

VILLAVERDE MENÉNDEZ, I.: “Concepto, contenido, objeto y límites de los derechos fundamentales”. *La democracia constitucional: estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente*, Vol. 1. Congreso de los Diputados, Madrid. (2002).

VILLAVERDE MENÉNDEZ, I.: “Decidir qué no decidir o qué hacer con los amparos: el trámite de admisión de los recursos de amparo” *Teoría y realidad constitucional*. Nº 10-11, 2002-2003.

VIVER I PI-SUNYER.: “Diagnóstico para una reforma”. *La reforma del recurso de amparo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

VIVER PI-SUNYER, C. y LÓPEZ BOFILL, H.: "Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión". En *Jurisdicción Constitucional y Judicial en el Recurso de Amparo*. Tirant lo Blanch. VVAA. Valencia, 2006.

VIVES ANTÓN, T.: "Tribunales de Justicia y Jurisprudencia Constitucional". *Revista del Poder Judicial*. Nº 2, 1986.

WRÓBLEWSKI, J.: *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*. Civitas. Madrid, 1985.